RELACIONES INTERNACIONALES DE AMERICA LATINA

Breve historia

Demetrio Boersner

Nueva Sociedad

RELACIONES INTERNACIONALES DE AMÉRICA LATINA

Breve historia

Demetrio Boersner

Quinta edición: 1996
(revisada y actualizada)

a Norma

© Editorial NUEVA SOCIEDAD
Apartado 61.712 Caracas, 1060-A, Venezuela
Telfs.: (058-2) 2659975, 2650593, 2655321, 2673189
Fax: (058-2) 2673397
Correo-e: nuso@ccs.internet.ve

Edición al cuidado de Helena González con la
asistencia de Sergio Rodríguez G.

Diseño de portada: Javier Ferrini
Ilustración de la portada: Mapa del Nuevo Mundo de Sebastian
Munster, 1540, col. part., Madrid.

Composición electrónica: GRAFICOR

Impreso en Venezuela
ISBN 980-317-092-9

Indice

Prólogo 11
Heinz R. Sonntag

Introducción a la Segunda edición 15

Relaciones internacionales latinoamericanas antes de la independencia 21
La época precolombina 21
El impacto europeo 26
Relaciones hispano-portuguesas en América 32
Potencias ibéricas contra potencias nuevas 34
Resumen 39
Tabla cronológica I 40

Un nuevo actor externo: formación, independencia y consolidación de Estados Unidos 43
Franceses, holandeses e ingleses en Norteamérica 43
La guerra de independencia norteamericana y la diplomacia de Franklin 46
Política exterior de Washington, Adams, Jefferson y Madison 48
Comienzo de la expansión hacia el Sur 51
Tabla cronológica II 54
Resumen 55

La transición independentista (1790-1828) 57
La independencia de Haití 57
Levantamiento e independencia de las colonias españolas 59
Brasil 63
Relaciones entre los nuevos países 65
Latinoamérica frente al mundo exterior 67
La Doctrina Monroe 74
El Congreso de Panamá 79
Resumen 82
Tabla cronológica III 83

Consolidación de naciones y hegemonía comercial inglesa (1828-1852) 87
La hegemonía comercial inglesa 87
México y Estados Unidos, 1821-1848 90
Centroamérica y el Caribe 96

Desintegración de la Gran Colombia. Ecuador y España.
Congresos de Lima y Santiago ____ 100
Confederación Peruano-Boliviana y Primera Guerra del Pacífico ____ 102
Argentina, Brasil y Uruguay en la época de De Rosas ____ 103
Brasil: el problema de la trata de esclavos ____ 108
Resumen ____ 109
Tabla cronológica IV ____ 110

Conflictos americanos y penetración del capital extranjero (1853-1883) ____ 115
Características de la época. Penetración del capital extranjero ____ 115
La Guerra de Secesión de Estados Unidos ____ 117
La intervención francesa en México ____ 121
Centroamérica y el Caribe: intervenciones norteamericanas ____ 123
Intervenciones españolas en Santo Domingo y en Sudamérica ____ 125
La Guerra de la Triple Alianza ____ 127
La Segunda Guerra del Pacífico ____ 129
Resumen ____ 132
Tabla cronológica V ____ 133

Auge del imperialismo norteamericano y resistencias en América Latina (1883-1933) ____ 137
Naturaleza del imperialismo ____ 137
La Primera Conferencia Internacional Americana ____ 139
Norteamérica desplaza a Inglaterra. Guerra entre Estados Unidos y España ____ 141
La toma del Canal de Panamá ____ 145
La política del garrote y la diplomacia del dólar ____ 148
Resistencias sudamericanas al imperialismo (1900-1920) ____ 152
La Revolución Mexicana y sus efectos internacionales ____ 154
Latinoamérica y Estados Unidos de 1920 a 1932 ____ 157
Tabla cronológica VI ____ 162
Resumen ____ 166

La época de la "política del buen vecino" (1933-1945) ____ 167
La crisis económica y la política de Franklin D. Roosevelt ____ 167
Roosevelt, el Caribe y México ____ 168
La Guerra del Chaco y sus consecuencias. Sudamérica de 1932 a 1941 ____ 170
Reuniones interamericanas. La diplomacia antinazi de Roosevelt hasta 1940 ____ 172
Las Américas durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945) ____ 176
Resumen ____ 179
Tabla cronológica VII ____ 180

Guerra fría y defensa del *statu quo* (1946-1957) ____ 183
El mundo de posguerra ____ 183

Movimientos nacionalistas y democráticos en Latinoamérica ____ 184
Guerra fría y auge dictatorial (1948-1957) ____ 185
Una excepción: la revolución boliviana ____ 189
Guatemala y la Décima Conferencia Interamericana ____ 190
Las caídas de Vargas y de Perón ____ 194
Resumen ____ 197
Tabla cronológica VIII ____ 198

La polarización Cuba-OEA (1958-1967) ____ 201
Factores de rebelión en América Latina ____ 201
Caída de dictadores y viaje de Nixon ____ 203
Ascenso de Fidel Castro y bloque
democrático latinoamericano (1958-1960) ____ 205
La ruptura entre Cuba y el "Sistema Interamericano" ____ 207
Los enfrentamientos en la escala hemisférica ____ 215
Resumen ____ 224
Tabla cronológica IX ____ 225

De los años sesenta a los ochenta (1968-1980) ____ 227
1968-1973: crisis del poder estadounidense y
ascenso latinoamericano ____ 227
1973-1976: retroceso represivo parcial ____ 236
1977-1979: retorno al reformismo interamericano ____ 241
1980: tensión mundial y viraje a la derecha. Perspectivas ____ 245
Tabla cronológica X ____ 252

El fin del siglo, Latinoamérica en un mundo en transformación ____ 255
El cambio global a partir de 1980 ____ 255
El cambio latinoamericano desde 1980 ____ 262
De 1990 en adelante: liberación económica; integración,
nuevos problemas Norte-Sur; retos sociales y de identidad ____ 272
América Latina en el mundo futuro ____ 277

Bibliografía ____ 283

Prólogo

Haber sido invitado por mi entrañable amigo, el destacado internacionalista, profesor y diplomático Demetrio Boersner, a escribir unas breves notas para presentar una nueva edición de este libro, es un alto honor que agradezco. No digo —con esa falsa modestia que a veces invade el quehacer intelectual— que es inmerecido: nos unen viejos lazos de amistad y compañerismo universitario, que datan casi de la época en la que llegué a Venezuela como docente contratado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad Central. Mas nos juntan también convicciones comunes, las más importantes de las cuales están referidas a la tierra latinoamericana y venezolana que ambos escogimos —en diferentes momentos de nuestras vidas— como nuestra verdera patria, esto es: el espacio sociocultural y político en el cual nos realizamos y vivimos. Creemos ambos firmemente en los pueblos que nos han acogido y hecho suyos, y en su capacidad de luchar por la superación del subdesarrollo, por la liberación individual y colectiva, por una modernidad propia y no imitativa, y por un destino de dignidad que está a la altura de su gran historia y de su fuerza innovativa en el presente.

El libro que estoy prologando es ya algo así como un "clásico" de la literatura científico-social sobre las relaciones internacionales dentro de América Latina y de sus pueblos con otras partes del mundo. En efecto, fue publicado originalmente en 1982 por la misma Editorial Nueva Sociedad y ha sido objeto de varias reediciones "oficiales". Nadie podrá contar ni saber, además, la cantidad de ejemplares editados en forma "pirata" (en fotocopia), circulando a lo largo y ancho del continente y que son material de primera importancia —diría que de obligatoria referencia— para los estudiantes de las relaciones internacionales; un modo de ganarse el acceso a los libros relevantes que no es muy legal que digamos, ni materialmente provechoso para autores y editoriales, pero tal vez uno de los pocos de que disponen los estudiantes (y hasta a veces los profesores) para llegar al conocimiento, ya no sólo en esta parte del mundo.

El libro de Boersner tiene numerosos méritos. No podré dedicarme, por razones de espacio, a destacarlos todos. Mencionaré algunos que me llaman poderosamente la atención, en virtud de mis intereses y preocupaciones científicas y político-intelectuales.

En primer lugar, es un libro histórico, actual para el presente, y muy bien escrito. Es mucho más que un "libro de texto", de esos que —con todos los síntomas del aburrimiento— cierran los estudiantes después de una obligatoria lectura. Es un libro que si el lector, sobre todo el joven, se acerca a él con la disposición de dejarse atrapar, puede contrarrestar esa terrible tendencia que observa Eric Hobsbawm, entre otros, y que describe así: "Al final del siglo, la mayoría de los hombres y mujeres jóvenes se cría en una suerte de presente permanente, faltándoles cada relación orgánica con el pasado público de los tiempos en los que viven". Boersner logra transmitir la sensación de que los hechos del pasado público —¿y cuáles lo son

más que las relaciones internacionales de nuestros pueblos?— están vivos en nuestro presente.

Segundo, se trata de un trabajo muy informado sin que su autor intente vanagloriarse de su erudición, incluso mostrando su afán pedagógico en los resúmenes y tablas cronológicas. Los diferentes capítulos transmiten la certeza de que Boersner conoce ampliamente los hechos sobre los cuales escribe, ya sea por haberlos estudiado en la literatura existente, ya sea por su conocimiento detallado —casi de historiador—, o por su condición de embajador y alto funcionario de la diplomacia venezolana. En este sentido, las dos primeras partes, sobre las relaciones internacionales latinoamericanas antes de la independencia una, la otra sobre la consolidación de los Estados Unidos de Norteamérica, revelan no sólo que el autor conoce bien la literatura al respecto sino también que es capaz de sintetizar los hallazgos existentes en ella sin caer en terribles simplificaciones. Desde la primera lectura, hace años, a mí me resultó fascinante la parte sobre la transición independentista porque demuestra un conocimiento detallado de las fuentes historiográficas de la época y la fuerza de interpretarlas, especialmente el acápite sobre el Congreso de Panamá. Los tres últimos capítulos y las conclusiones (escritas especialmente para esta nueva edición "oficial"), aparte de poseer los méritos mencionados de los anteriores, contienen elementos de testimonio, esto es: la claridad de visión y —¿por qué no?— el coraje de asumir y transmitir las incertidumbres hacia el porvenir.

En tercer término, este libro permite arrojar un poco más de luz sobre algunos de los temas que se vienen discutiendo actualmente en la sociología histórica. Como se sabe, Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, Perry Anderson y otros han sostenido en sus publicaciones, a lo largo de los últimos 20 años, que el sistema histórico-social actualmente vigente (y desde hace 500 años cada vez más) tiene una doble cara. Por un lado, es un sistema mundial, en el sentido de que los procesos económicos que lo dinamizan (la acumulación incesante de capital) necesitan del espacio global, crecientemente además sobre la marcha de su evolución, y hacen que se formen "cadenas de mercancías" y —diría también— cadenas de acumulación a escala mundial. Por el otro, es un sistema que necesita la existencia de espacios sociopolíticos separados: los Estados-nación, en cuyas delimitaciones territoriales se hace realidad cada uno de los eslabones de esa cadena de acumulación. En breve, desde sus inicios, el actual es un sistema con una economía (tendencialmente) mundial y una estructura sociopolítica llamada "sistema inter-Estados". En los capítulos en los cuales el autor analiza la consolidación de las naciones de América Latina y la hegemonía comercial inglesa, los conflictos americanos y la penetración del capital extranjero, así como el auge del imperialismo norteamericano y las resistencias latinoamericanas, se encuentran numerosos elementos que permiten demostrar, en el nivel de las relaciones internacionales, las formas de mediación que vinculan y separan esas dos caras del sistema actual: su economía globalizada y el complejo inter-Estados.

Dicho sea de paso, y en este contexto, me interesó particularmente la descripción acertada que hace Boersner de la finura con la que el imperio británico teje los mecanismos para asegurar el predominio de sus intereses comerciales en el juego de la política internacional, en las épocas de la gesta y de la consolidación de nuestra independencia política.

Finalmente, el autor de este libro es un internacionalista-historiador *sui generis*. Está consciente, y no tan sólo a nivel de las "profesiones de fe" que conocemos de tantos trabajos sobre las relaciones internacionales, que en general y en la política internacional de cada país subyace un compejo, intrincado y complicado juego de fuerzas políticas internas y que, al mismo tiempo, implica mecanismos que son autorreferenciales, esto es: son engendrados por la dinámica propia de dicha política. En efecto, la forma en que Boersner describe los vaivenes de la política exterior de Estados Unidos y las influencias que sobre ellos ejercen las distintas fracciones de lo que hoy en día se llama púdicamente "el sector privado", es muy reveladora, al igual que su descripción de los cambios de la política francesa ante la independencia en atención a los intereses que en la política de ese Estado sucesivamente se combatían e imponían. Otras partes del libro, referidas a las políticas internacionales de nuestros Estados-nación, contienen análisis similarmente válidos.

Yo acompaño en gran parte a Demetrio Boersner en sus nuevas conclusiones. Pero soy al mismo tiempo más optimista y más escéptico. Esto último porque pienso que vivimos en una época de transiciones, esto es, en presencia de una multiplicidad de procesos ninguno de los cuales permite todavía indicar su direccionalidad. Ello hace que la característica más sobresaliente de nuestra América sea la más absoluta incertidumbre. Y más optimista soy porque veo en algunas fuerzas sociales, sobre todo en las bases de nuestras sociedades, las potencialidades de una mayor integración. Esta, pienso y sueño yo, ya no dependería de "la decisión de las élites políticas y culturales de los años venideros", sino de la capacidad de amplios sectores populares de decir "sí" o "no" a la vez (como en aquel chiste mexicano): "sí" a su propia capacidad, históricamente engendrada, de moldear sus sociedades en la búsqueda de un nuevo norte para su porvenir; "no" a las formas, directas y sobre todo indirectas, de su opresión.

En una cosa estamos de acuerdo Demetrio y yo: para que ello ocurra es necesario que los intelectuales nos integremos a estos procesos con mucha más independencia e identificación.

Pero sobre esto, estoy seguro, hablaremos pública y privadamente en futuros encuentros. En torno a este importante libro y en torno a nuestras convicciones compartidas.

Heinz R. Sonntag
Caracas, 8 de julio de 1996.

Introducción a la segunda edición

El propósito de este libro es presentar tanto al especialista como al público general una síntesis precisa de las relaciones internacionales de América Latina desde la época preibérica hasta nuestros días.

Hasta el momento no parece existir ninguna otra obra del mismo género. Diversos historiadores se han ocupado de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, así como de las de nuestros países con algunos de Europa. Se han publicado excelentes historias diplomáticas de uno u otro país latinoamericano, así como monografías sobre determinados episodios de las relaciones internacionales del continente. Pero todavía falta un trabajo que resuma el conjunto de las relaciones de Latinoamérica con el mundo exterior, así como también uno sobre las relaciones intralatinoamericanas en su desarrollo histórico, explicando la interacción de los Estados de la región con actores externos, y entre ellos mismos.

Al elaborar esta síntesis histórica hemos pensado en los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y en el público latinoamericano en general. Los estudiantes de Historia Diplomática Americana necesitan un texto que, sin ser exhaustivo, les sirva de guía en la exploración de la materia. En cuanto al público lector, en esta hora de ascenso de la conciencia continental latinoamericana y de creciente interés por acontecimientos internacionales, podría hacer buen uso de un libro que contribuya a aclarar un aspecto importante de la evolución histórica de nuestra región y, de ese modo, eche luz sobre ciertos problemas contemporáneos.

Partimos del convencimiento de que el método histórico contribuye a explicar la situación social del presente y abre perspectivas hacia el futuro. Para que la historia sirva de guía en los tiempos actuales es necesario, evidentemente, que sea una historia "sociológica", que explore no sólo las iniciativas políticas o diplomáticas de los individuos dirigentes, sino que analice así mismo lo que Renouvin denomina las "fuerzas profundas", colectivas e impersonales, de índole económica y social, que determinan el cauce general de los acontecimientos.

Creemos que en el futuro la ciencia histórica será rigurosa y exacta, y que acabará por imponerse nuevamente como instrumento inmejorable para el conocimiento de los procesos globales que afectan la época actual. Después del optimismo positivista, anterior a las guerras mundiales, muchos historiadores atravesaron por una etapa de pesimismo científico. Reflejo de ello son las concepciones de Dilthey, Croce y Collingwood, para quienes la historia es inevitablemente subjetivizada y deformada por la mente del historiador. Pero existe un conjunto de enfoques que constituye una "tercera posición" con la cual nos identificamos: posición que no niega la importancia del factor subjetivo en la investigación histórica —el problema de la "participación" del historiador en la historia—, y que admite la interacción entre el estudioso y los hechos estudiados, pero cree que de esa interacción tiende a surgir cada vez más una ciencia exacta. Para que esto se produzca, es necesario que

el historiador seleccione como "importantes" aquellos hechos que conforman procesos que afectan la vida de grandes masas humanas. Es preciso, además, que establezca distinciones entre los niveles de la acción individual y los de las "fuerzas profundas", y que aprecie la interacción recíproca entre dichos niveles. Se requiere, igualmente, que el historiador reconozca la enorme importancia de factores materiales o económicos dentro de los procesos sociales y políticos, sin caer en determinismos que niegan la libertad humana y que no tienen fundamento en la investigación empírica. La incesante y siempre variable y renovada interacción de factores que, en su conjunto, constituyen engranajes o procesos sociales, debe ser objeto de la observación y de la reflexión del historiador que estudia el pasado para contribuir al mejor conocimiento del presente y a su transformación progresista y liberadora.

Siguiendo el ejemplo de la escuela de Renouvin y, por otra parte, el de todas las escuelas de historiografía "sociológica", rechazamos la idea de limitarnos a una mera "historia diplomática" que narrara las actividades de estadistas y negociadores sin referencia al trasfondo social. Creemos en la necesidad de que la historia diplomática sea sustituida por la historia de las relaciones internacionales, que estudia tanto el nivel diplomático como el de las fuerzas profundas subyacentes.

Uno de los problemas más difíciles de la ciencia histórica es el de la periodificación de los hechos y los procesos. Sin compartir la pedantería de quienes pretenden frenar toda investigación sustantiva de la historia latinoamericana, hasta tanto ellos no nos hayan suministrado un "perfecto" y "obligatorio" esquema de periodización (derivado de los excelentes y bien conocidos trabajos de Barraclough y otros historiadores ingleses), hemos querido ser cuidadosos y rigurosos en ese aspecto. Hemos establecido una periodificación que toma en cuenta tanto los acontecimientos internos de Latinoamérica como los procesos mundiales.

Una historia de las relaciones internacionales de América Latina debe comenzar por un estudio por lo menos somero de las relaciones entre los pueblos de la época precolombina. Los amerindios, inmigrados al continente americano desde Siberia hace unos 50.000 años, en algunas partes del hemisferio crearon civilizaciones notables con políticas exteriores dinámicas y complejas. Nuestro capítulo dedicado a las relaciones internacionales latinoamericanas antes del proceso de independencia deberá comprender, pues, una sección que abarque las relaciones interpueblos desde el año 300 antes de Cristo (fecha aproximada de la formación de las primeras civilizaciones americanas) hasta 1492 (año del descubrimiento europeo).

Después de sintetizar las características de Europa en la época del descubrimiento, y de vincular debidamente la historia colonial de América Latina a la del Viejo Mundo, examinaremos las relaciones entre las dos potencias colonizadoras ibéricas, España y Portugal, y luego las pugnas y rivalidades entre estas potencias "viejas" y los países "nuevos", como Francia, Holanda e Inglaterra, naciones que les disputarían el control sobre el Nuevo Mundo y sus recursos.

En esta etapa aparece en el escenario de la historia de las relaciones americanas un nuevo actor: Estados Unidos de Norteamérica. Destinamos un capítulo del libro para explicar la formación histórica y el proceso de independencia de Norteamérica, así como la primera etapa de su expansión hacia el Oeste y el Sur, abarcando un período comprendido entre 1604 (año de la primera colonización de Virginia) hasta

1819 (año en que se celebra el tratado transcontinental con España, luego de la anexión de las Floridas).

Retornando a la América Latina como actor histórico directo, examinaremos a continuación sus relaciones internacionales durante su propio proceso de independencia, que se inicia en 1790 con la primera revuelta haitiana y culmina en los años 1828-1830 con la independencia de Uruguay, la división de la Gran Colombia y la muerte de Bolívar. Después de mencionar las causas de la guerra de independencia y de sintetizar el proceso general, así como la acción de los principales países en vías de liberación, estudiaremos, primero, las relaciones entre estos mismos países y, luego, el tema importante del impacto de los actores de Europa y Norteamérica, señalando el papel fundamental desempeñado por Gran Bretaña. Una sección dedicada al análisis del surgimiento de la Doctrina Monroe, así como del Congreso de Panamá, con la subsiguiente confrontación entre el Proyecto Monroe y el Proyecto Bolívar para la futura estructuración del hemisferio, constituirá la parte final de ese capítulo.

La periodificación seguida hasta allí presenta la ventaja de corresponder a importantes hitos de la historia del Viejo Mundo al igual que del Nuevo. Desde hace mucho se acepta el año 1492 como fecha no sólo del descubrimiento de América, sino de demarcación entre la Edad Media y la época Moderna. 1790 es el año en que cobra plena fuerza el proceso revolucionario francés, cuya repercusión se nota en seguida en Haití. 1828-1830 marca el fin no sólo de la etapa independentista latinoamericana, sino también de la restauración posnapoleónica en Europa.

A partir de 1830 y hasta 1888 el mundo vive el pujante crecimiento del capitalismo industrial; liberal hasta 1870 y cada vez más monopolista a partir de esa fecha. Hacia fines de la década de los ochenta el monopolismo unido al poder de los Estados lleva al mundo definitivamente a la época del imperialismo desarrollado y a las pugnas entre los imperialismos, ya liberados de la influencia moderadora y arbitral de Bismarck.

Para América Latina el lapso 1830-1888 significó un largo proceso de consolidación de las nacionalidades forjadas al calor de la lucha de independencia. Significó igualmente una nueva dependencia semicolonial ante Gran Bretaña, potencia que sustituyó a España y a Portugal como factor hegemónico externo. Por otra parte, Estados Unidos evolucionó y se expandió durante ese mismo lapso, en competencia constante con Inglaterra, llegando a desplazarla paulatinamente de su posición dominante en la parte septentrional de América Latina. Otras potencias europeas, sobre todo Francia, también desempeñaron a ratos un papel importante como actores externos. La influencia, primero del preimperialismo liberal y luego del naciente imperialismo monopolista, se nota claramente en los conflictos latinoamericanos surgidos sobre todo a partir de 1865.

Tanto por razones sustantivas como de método de presentación, hemos optado por subdividir ese largo período en dos subperíodos, tratados cada uno en un capítulo específico. El primero se extiende de 1830 hasta 1852, época que coincide con los procesos europeos de la industrialización, el expansionismo liberal, los movimientos revolucionarios de la década de los cuarenta y la contrarrevolución de 1849-1851. En América Latina ese subperíodo finaliza con la anexión de la mitad de México por parte de Estados Unidos, el descubrimiento del oro de California, el acuerdo angloestadounidense sobre el Istmo, y la caída de Rosas en Argentina. A

partir de esa fecha se inician las inversiones y aumentan los préstamos europeos a los países de América Latina. Se comienza a desarrollar en Europa y Norteamérica la segunda revolución industrial, y veinte años después —a partir de 1870— surgirán con fuerza los fenómenos del monopolismo y la evolución hacia el imperialismo financiero, que llegará a su plenitud en 1890.

De 1889 hasta 1932, América Latina será objeto de la creciente dominación del imperialismo estadounidense. Este logró sustituir al imperialismo británico como fuerza hegemónica fundamental, por lo menos en la parte septentrional del ámbito latinoamericano. Mediante una política de intervencionismo rudo y directo, Estados Unidos pondrá bajo su control el área del Caribe, la América Central y la parte norte de Sudamérica. Al mismo tiempo se incrementará la inversión de capitales y la explotación de los recursos naturales del continente. Todo ello, junto con la Primera Guerra Mundial y la revolución rusa, estimulará el despertar nacionalista y antiimperialista de los pueblos latinoamericanos. Pero ese despertar ya había comenzado antes de la Primera Guerra Mundial en los países del Cono Sur y sobre todo en México.

Los años 1933 y 1945 encuadran el período de la "política del buen vecino", coincidente con el proceso del auge del nazi-fascismo, la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Hitler y de Japón. Durante ese lapso la hegemonía estadounidense sobre América Latina fue moderada y civilizada: la gran recesión había debilitado a los consorcios capitalistas y fortalecido el dirigismo estatal apoyado por fuerzas populares y ejercido por el demócrata Franklin Roosevelt.

De 1946 a 1957 el mundo y América Latina atravesaron el período de la guerra fría. A los dos años de deterioro de la Gran Alianza antifascista (1946-1947) les siguieron cinco años de guerra fría ascendente (1948-1952) y otros cinco años de guerra fría "institucionalizada". En América Latina ese proceso se expresó a través de un tránsito, desde la etapa de auge democrático y nacionalista (1946-1947) hacia una fase de retroceso dictatorial y de reafirmación de una dominación norteamericana profundamente conservadora, basada en el "anticomunismo".

Entre 1958 y 1967, América Latina experimentó ascensos populares y revolucionarios seguidos de una polarización entre la revolución cubana y el llamado "sistema interamericano". Mientras en el mundo, en general, la guerra fría prácticamente cesó y abrió el paso a la etapa de la distensión a partir de la crisis de los cohetes en 1962, en el ámbito americano la bipolaridad continuó unos cinco años más. Sin embargo, también en Latinoamérica se fueron abriendo camino, subterráneamente, las nuevas corrientes "tercermundistas" que dominaban el acontecer histórico en Asia y Africa.

El año 1968 marca el comienzo de una etapa de pleno auge de fuerzas nacionalistas y de cambio social en América Latina. Las relaciones internacionales americanas se diversifican, se renuevan y se tornan más complejas. Aparte de la revolución cubana, otros movimientos antihegemónicos se alzan contra el imperio. Ello ocurre porque ese imperio ha llegado a una crisis de reajuste y de autocrítica. El sistema capitalista mundial entra en una situación de crecientes dificultades y desajustes con fenómenos simultáneos de inflación y de recesión. La pérdida de la guerra de Vietnam se agrega al deterioro del valor del dólar y hace que Estados Unidos renuncie a su posición imperial excluyente y que, bajo la dirección de Nixon y la inspiración de Kissinger, adopte una visión más realista y admita el surgimiento

de un sistema pluripolar. Pero en 1973 las fuerzas de liberación comienzan a ser frenadas por una contraofensiva de los factores interamericanos tradicionales, que tratan de conservar su control —por lo menos sobre este hemisferio— y recurren nuevamente al dictatorialismo militar y a la doctrina de la "seguridad nacional". Hasta 1977 se vivirá una etapa de retroceso hacia el autoritarismo y el conservadurismo social, con base en una alianza entre los sectores dirigentes de Estados Unidos y grupos militares autoritarios de América Latina.

Sin embargo, una vez más la tendencia cambiaría a partir de 1978. Una nueva corriente democrática, reformista y dirigida hacia el logro de una mayor autonomía frente a la potencia del norte, se manifiesta en América Latina. Dicha corriente es más moderada y vacilante que la de los años 1968-1973; no obstante, parece dudoso el éxito a corto o mediano plazo de esa corriente liberadora. La agravación de las tensiones mundiales desde 1979-1980, lo que parece ser el retorno a una situación de guerra fría entre URSS y Estados Unidos y una virtual alianza Occidente-China —todo ello, en buena medida, producto de una crisis económica que afecta al capitalismo y también al socialismo centralista de los países del este—, nos hace pensar en la probabilidad de una nueva etapa de acrecentadas presiones hegemonistas externas sobre la América Latina.

A lo largo de todas las etapas que acabamos de señalar, la historia de las relaciones internacionales latinoamericanas nos muestra ciertos factores constantes o análogos, recurrentes en cada período.

Por una parte, América Latina estuvo sometida continuamente a alguna forma de dominación externa: colonial, en la época anterior a las guerras de independencia; semicolonial, durante el siglo XIX y hasta fines de la Segunda Guerra Mundial; neocolonial, desde 1945 en adelante. Cada uno de estos sistemas de dominación exterior se apoyó parcialmente en factores opresivos internos de la propia América Latina. En cada caso la potencia dominante encontró sectores de las propias naciones latinoamericanas que la auxiliaban en su empeño de controlar los destinos del subcontinente.

Por otra parte, cada uno de esos sistemas de dominación provocó rebeliones nacionalistas y antihegemónicas en su contra. Esas rebeliones generalmente cuentan con el apoyo de las capas populares más oprimidas o explotadas, así como de intelectuales que guían, interpretan y a veces dirigen. Cada una de esas rebeliones, en su respectiva época, contribuye con algo a la paulatina definición y creación de una Latinoamérica enteramente independiente.

Durante los momentos de búsqueda de la independencia, los rebeldes regularmente tienden a buscar el apoyo del adversario de su opresor para emanciparse de éste. En diversos momentos buscan ayuda inglesa contra España, respaldo norteamericano contra Inglaterra, apoyo alemán contra la hegemonía anglonorteamericana y asistencia soviética contra el neocolonialismo de Estados Unidos.

En nuestra época se plantea seriamente, por primera vez, la posibilidad de realizar la empresa liberadora, no con el apoyo de otra gran potencia sino a través de la unidad y solidaridad de los pueblos oprimidos, de éste y otros continentes. La alianza, la integración y la cooperación Sur-Sur frente a la dominación del Norte, y el desarrollo autosostenido para escapar a toda dependencia, son las consignas progresistas más recientes. Sólo la experiencia futura, basada en una clara visión histórica y en la reflexión sobre las lecciones del pasado, nos podrá decir si será

posible romper con el esquema de alianza táctica con el adversario del dominador. Nos dirá, así mismo, en qué medida un proceso de liberación latinoamericano podrá contar eventualmente con el apoyo de fuerzas críticas e inconformes en el propio seno del centro dominante.

Relaciones internacionales latinoamericanas antes de la independencia

La época precolombina

El estado actual de las investigaciones antropológicas refuerza la vieja y plausible tesis de que el tronco principal de los indígenas de América proviene de Asia oriental. Dicha tesis sostiene que grupos humanos de origen paleo-mongólico se movieron en olas sucesivas de Siberia hacia Alaska por el actual Estrecho de Bering, que probablemente estaba cerrado en la época de los comienzos de aquella migración: hace aproximadamente unos 30.000 ó 50.000 años. Paulatinamente, los grupos migratorios se extendieron desde Alaska hacia el Sur en busca de alimentos y de climas benignos. En el primer período de su expansión por el continente americano, aquellos clanes nómadas tenían como principal base de sustento la caza del mastodonte y de otras especies animales. Probablemente hace unos 10.000 años los primeros grupos humanos llegaron a la Tierra del Fuego, en el extremo sur del hemisferio. Poco a poco otras oleadas mongólicas siguieron a las primeras. Los últimos en llegar a tierra americana desde Siberia —posiblemente hace unos 2.000 años solamente— fueron los esquimales.

Además del tronco principal, de origen y características mongólicas, arribaron a América inmigrantes prehistóricos de descendencia australiana, melanesia y quizas polinesia. En algunas zonas de América Central y del Sur se notan rasgos físicos y culturales que indican tales influencias, manteniéndose siempre el predominio del gran movimiento poblacional desde Siberia y Alaska.

En el transcurso de los milenios la población amerindia aumentó y, en gran medida, evolucionó de culturas basadas en la caza y la recolección a otras más complejas, fundamentadas en la agricultura seminómada —combinada con la caza y la pesca— o incluso en la agricultura sedentaria. Varían grandemente las estimaciones que se han hecho del número de habitantes de América para la época del descubrimiento, entre 8 millones y 75 millones. Un cálculo promedio entre 30-50 millones parece razonable.

Los pobladores precolombinos de América evolucionaron en vía paralela a la seguida por los pueblos del Viejo Mundo. Desde modos de vida "paleolíticos" basados en la caza y la recolección pasaron a niveles superiores, "neolíticos", donde la agricultura seminómada desplaza la caza y la recolección como medios principales de sustento. Inicialmente, en esas etapas de desarrollo social no se produjo ningún excedente económico en absoluto, y más adelante sólo excedentes muy modestos y de escasa duración. Esto imposibilitó la formación de minorías privilegiadas; la vida de la mayoría de los pueblos amerindios no transculturizados se caracteriza hasta hoy por el comunitarismo primitivo en sus diversas variantes y por una organización igualitaria y esencialmente democrática en lo que se refiere a la toma de decisiones: el poder de los "caciques" o "capitanes" siempre es limitado

y sujeto al consenso de la comunidad. Los núcleos sociales originales fueron siempre la familia y el clan; a partir del desarrollo de la agricultura los clanes se integraron en tribus con instituciones políticas formales y, algunas veces, incluso en confederaciones de tribus similares a las que en Europa dieron origen a las futuras nacionalidades.

Además de luchas por la tierra y sus recursos, la historia de los pueblos amerindios, como la de los del Viejo Mundo, se caracterizó por conflictos surgidos del rapto de mujeres y otras cuestiones de honor. Frecuentemente, los conflictos no involucraban a tribus enteras, sino sólo a clanes o sectores de tribus. Se dieron casos de alianza de dos o más clanes o tribus, y surgieron a veces situaciones de *balanza de poderi*. Los conflictos se acababan por el envío de misiones negociadoras, y los acuerdos de paz conllevaban intercambios de obsequios y algunas veces de rehenes, ceremonias religiosas, danzas y banquetes.

En dos zonas de América—la subregión mesoamericana (México y América Central) y la peruano/boliviana— la fertilidad natural de la tierra, los recursos hídricos y las posibilidades de intercambio comercial y cultural entre pueblos sirvieron de base para el desarrollo de civilizaciones urbanas avanzadas. En ambas zonas esas civilizaciones se basaron en una agricultura sedentaria e intensiva con riego artificial. Esa agricultura sedentaria y sistemática sirvió de base, en ambos casos, para formar estructuras sociales complejas que en el Imperio Incaico llegaron a englobar a millones de personas. La masa de los productores la formaban campesinos todavía agrupados en sus clanes tradicionales. La clase dominante estuvo integrada por castas sacerdotales y guerreras. En una posición social intermedia se encontraban los mercaderes y los artesanos. Las grandes ciudades gobernaban comarcas rurales y servían de centros rectores del sistema estatal impuesto a la sociedad tradicional, creado por las castas dominantes. Al mismo tiempo, estas ciudades fueron las sedes de las actividades religiosas, intelectuales, artísticas, comerciales y artesanales. De las dos zonas de civilización precolombina, la peruano/boliviana fue la más adelantada en lo material y lo tecnológico, por lo cual el Imperio Incaico gozó de una estabilidad y un grado de eficiencia superiores a los Estados mesoamericanos. En cambio, las civilizaciones de México y Guatemala superaron a las andinas en lo concerniente a las matemáticas, la especulación filosófica y religiosa, y las manifestaciones artísticas.

En ambas zonas, el paso de la cultura preurbana a la civilización —fundación de ciudades grandes y comienzo de una "escritura" (jeroglíficos o *quipus)*— se dio en un lapso histórico comprendido entre los años 600 y 300 antes de Cristo. En esa época, en el ámbito mesoamericano, las culturas previas de los olmecas y otros fueron superadas por las civilizaciones mexicana de Teotihuacán, maya de Tikal, y Kaminaljuyu de Guatemala. Al mismo tiempo, en la región andina se plasmó el proceso civilizador en la expansión urbana de Tiahuanaco en las orillas del lago Titicaca. En los tres casos —Teotihuacán, Tikal y Tiahuanaco— las sociedades estuvieron regidas en esa época por castas sacerdotales y la civilización tuvo un carácter marcadamente teocrático.

Entre los siglos I y VII de nuestra era Teotihuacán alcanzó enorme brillo e influencia en toda la subregión mesoamericana. Especializándose en la producción de artículos manufacturados y en la exportación de tecnología (sistemas de riego), logró una posición de hegemonía económica en México, y junto con ello también

parece haber sido dominante en lo político y lo cultural. Durante el mismo lapso, en Guatemala se multiplicaron y fortalecieron las ciudades-Estado de los mayas. A diferencia del sistema semi-imperial de Teotihuacán, el área maya se caracterizó por la existencia de un número de ciudades-Estado, algunas más fuertes que otras pero sin claras hegemonías imperiales. Entre los Estados mayas parece haber prevalecido un sistema de balanza de poder. Hubo intercambio e influencia mutua importante entre Teotihuacán y el área maya.

Durante el mismo período (aproximadamente del siglo I al VIII) Tiahuanaco fue *primus inter pares* en el área peruano/boliviana, y mantuvo relaciones de intercambio económico y cultural con otros centros de civilización o cuasi-civilización teocrática, como el de los mochicas en el norte de Perú. Desde sus altas mesetas andinas, los centros civilizados extendieron su influencia y su dominación sobre las tribus culturalmente más atrasadas que habitaban al pie de la cordillera, en las zonas calientes.

Como ya lo hemos señalado, la civilización andina progresó más que las mesoamericanas en cuanto a tecnología y dominio de la naturaleza. Las sociedades mesoamericanas siempre vivieron precariamente, en dura lucha contra las fuerzas naturales destructivas, tales como la sequía y la erosión, valiéndose de técnicas agrícolas medianamente desarrolladas pero insuficientes para asegurarles un dominio estable y permanente sobre su medio ambiente. En tal situación, de crecientes dificultades para su abastecimiento material, el hombre mesoamericano desarrolló un sentido trágico de la vida y un alto grado de violencia (culto a la muerte, sacrificios humanos en masa, explotación creciente de un pueblo por otro y de unas clases por otras). En cambio, el hombre andino nos muestra un rostro sereno o sonriente: con fértiles altiplanicies y excelentes sistemas de riego, las civilizaciones del occidente suramericano conocieron la abundancia y, por ello, un sentido optimista y tolerante de la existencia, manteniéndose en los Andes un sistema de solidaridad y de justicia social, derivado históricamente del comunitarismo primitivo y, posteriormente, institucionalizado y desarrollado en una forma que ha sido calificada de "socialista".

A partir de los siglos VII y VIII, tanto las civilizaciones mesoamericanas como las andinas atravesaron grandes crisis. Las ciudades-Estado de los mayas en Guatemala fueron abandonadas por sus pobladores, que emigraron hacia el Norte y se establecieron en la península de Yucatán. Se cree que la súbita y tremenda emigración, única en la historia de las civilizaciones, se debió a una combinación de factores: probablemente una serie de temporadas de sequía y de malas cosechas, acompañadas o seguidas de violentas luchas civiles entre la oligarquía teocrática y las masas hambrientas. En el caso de Teotihuacán, parece claro que ocurrieron levantamientos revolucionarios de las masas campesinas y urbanas explotadas contra la oligarquía teocrática, posiblemente en alianza con pueblos vasallos en rebeldía contra el centro imperial. La polarización antagónica entre teocracia y pueblo tendió a fortalecer las castas militares, única fuerza capaz de arbitrar entre los extremos y de restablecer la paz. Al mismo tiempo, México fue invadido por tribus bárbaras procedentes del Norte. Las más avanzadas y fuertes de esas tribus —los toltecas— paulatinamente conquistaron Teotihuacán y todo el resto de la tierra mexicana. Al efectuar esta conquista fueron asimilando la cultura de los pueblos sometidos. Continuaron y renovaron la civilización teotihuacana y las

mayas de Yucatán, inyectándoles nuevas ideas y un fuerte impulso militarista que hizo culminar la transferencia del poder de los sacerdotes a los guerreros. Para el año 1000 estaba sólidamente implantada la dominación tolteca sobre Mesoamérica, a través de un considerable número de ciudades-Estado soberanas distribuidas en el área, y que mantuvieron entre sí complejas relaciones de balanza de poder, alianzas, confederaciones y acuerdos de vasallaje y protección.

En el siglo XIII de nuestra era aparecen tanto en México como en Perú los pueblos destinados a completar el proceso de militarización y crear sistemas imperiales. En México, son los aztecas, y en Perú, los incas.

Hasta hoy se ignora si los aztecas fueron inicialmente una tribu autónoma o un clan tolteca que se mezcló con elementos bárbaros "chichimecas" venidos del Norte. Se sabe con certeza que entre los años 1200 y 1300 actuaron como guerreros mercenarios al servicio de ciudades-Estado toltecas, sobre todo la de Culhuacán. Expulsados de allí, lograron en el siglo XIV fundar su propia ciudad-Estado: Tenochtitlán, hoy la ciudad capital de México. En alianza con las ciudades tolteco-chichimecas de Texcoco y Tlacopan, Tenochtitlán logró derrotar en 1427 a la confederación tolteca dirigida por el poderoso Estado de Atzcapotzalco. Hasta 1472 la Liga de Tres Ciudades (Texcoco-Tlacopan-Tenochtitlán), que ocupó toda la parte central de México previamente dominada por Atzcapotzalco, estuvo dirigida por el genial gobernante de Texcoco: el estadista, filósofo, legislador y poeta Netzahualcóyotl. Después de la muerte de este gran príncipe, los aztecas de Tenochtitlán asumieron la jefatura de la Liga de Tres Ciudades, a las cuales se había unido una cuarta: la ciudad mercantil de Tlatelolco, que fue anexada a Tenochtitlán en 1473. Luego las conquistas territoriales prosiguieron a un ritmo cada vez más intenso y ya para el año de 1500 las Tres Ciudades imperaban sobre la mayor parte de Mesoamérica, excluyendo tan sólo a la valiente ciudad de Tlaxcala, a los tarascos, a los zapotecos de Oaxaca y a los mayas de Guatemala.

En Perú, el clan quechua de los incas arribó a la zona de Cuzco al mismo tiempo que los aztecas a México: alrededor del año 1250. En 1438 los incas iniciaron su expansión, desde su ciudad-Estado de Cuzco, a un ritmo vertiginoso. En 1470 casi todos los territorios actuales de Perú, Bolivia y Ecuador fueron suyos, y el Gran Chimú rindió pleitesía al Gran Inca. Posteriormente, las anexiones territoriales se extendieron aún más hacia el Norte y hacia el Sur, a la vez que la influencia económica y cultural incaica desbordó los límites orientales del imperio y penetró en la Amazonia.

En el año 1500 el imperio azteca englobó de 5 a 15 millones de habitantes entre el Atlántico y el Pacífico. Estaba formado por 38 provincias, de extensión e importancia desiguales. No se trató de un imperio uniforme como el incaico: de manera general, las ciudades y regiones conquistadas mantenían su gobierno autónomo y pagaban tributo, bajo supervisión militar azteca. A cambio del tributo —cada vez más pesado, a medida que aumentaba la población de la capital imperial y escaseaban sus provisiones—, el poder dominante les daba protección y les abría el acceso al mercado imperial y a la tecnología de los sistemas de riego. Pero no cabe duda de que las ciudades y aldeas sometidas fueron explotadas fundamentalmente: su tributo era mucho más cuantioso que los beneficios recibidos. Por ello, cuando llegó Hernán Cortés, en 1519, muchos de los sujetos y vasallos de Moctezuma II lo recibieron con los brazos abiertos y le pidieron ayuda para sacudirse del yugo

imperial. Al mismo tiempo, el régimen social interno del imperio azteca se volvió más opresivo y explotador: la propiedad comunitaria de los *calpulli* (clanes) fue golpeada y disminuida cada vez más por la propiedad estatal en manos de la clase dominante y la propiedad individual privilegiada de importantes jefes militares que recibían feudos del Orador Supremo (emperador) en reconocimiento por servicios prestados. Aumentaba el número de siervos y tributarios, y disminuía el de campesinos libres miembros de comunidades tradicionales. El proceso de transición desde la civilización americana original —sociedad que, pese a la desigualdad clasista y la existencia de un pesado aparato burocrático y militar, mantenía una base de propiedad comunitaria— hacia una sociedad feudal estaba en marcha para el momento de la llegada de los españoles.

En cambio el imperio incaico presentó un cuadro más armonioso, solidario y humanista. Fue un imperio magníficamente racionalizado y homogéneo. A diferencia de lo que ocurría en el caso mexicano, todas las regiones eran gobernadas directamente por funcionarios del Inca supremo. El imperio se expandió como fuerza liberadora más que opresora: la casta inca, que mantuvo el comunitarismo tradicional para sus propios integrantes, se ocupó de consolidar y proteger en todas las provincias anexadas las instituciones comunitarias y acentuar la igualdad económica y la seguridad social. Por ello el Estado incaico no necesitó de grandes ejércitos permanentes: los propios pueblos anexados suministraban las fuerzas militares necesarias para seguir expandiendo el imperio. Si bien es cierto que las provincias pagaban tributo al poder dominante, las obras públicas, sobre todo de riego, beneficiaban en igual forma a todas las regiones, a la vez que los derechos de los diversos sectores sociales eran uniformes para todo el imperio, independientemente de si eran o no de origen inca. Además de esa justicia en sentido horizontal, también la estructura vertical de la sociedad incaica era más igualitaria y menos opresora que la azteca: los estamentos dominantes recibían una participación privilegiada en el disfrute del patrimonio global, pero básicamente todos —altos, medianos y bajos— estaban comprendidos dentro de un mismo sistema de producción colectiva, con poco enriquecimiento individual. Las leyes aseguraban a cada ciudadano la seguridad social desde la cuna hasta la tumba. Sólo en el siglo XVI, en los últimos años antes de la llegada de Pizarro y sus huestes conquistadoras, adquirió cierta fuerza en el imperio incaico el proceso de formación de la propiedad individual privilegiada, de tipo feudal o mercantil. Sin duda, la armonía y el humanitarismo del sistema incaico tienen mucho que ver con el hecho de que las condiciones ecológicas y la excelencia de las obras públicas de regadío permitieron a los gobernantes utilizar un criterio de abundancia y no de escasez: la abundancia engendra la generosidad y el mantenimiento de esquemas de reparto justo, mientras que la escasez alienta la rapacidad y la explotación.

Quizás el punto débil del imperio incaico fue la falta de una flexibilidad que habría permitido mayor grado de inventiva personal y de iniciativa de grupos pequeños y medianos. El colectivismo existente posiblemente tendió a disminuir demasiado el papel del individuo. Por ello, luego de la destrucción del aparato imperial por Pizarro, la resistencia del pueblo fue relativamente débil y poco efectiva. Pero no cabe duda de que la justicia social incaica quedó grabada en la memoria de los pueblos andinos hasta el día de hoy, y constituye para los ideólogos de la liberación latinoamericana una fuente de inspiración histórica.

El impacto europeo

A partir de la época de las Cruzadas (1095-1291) y de la reapertura de las relaciones comerciales con el Oriente, Europa comenzó a vivir profundas transformaciones. Los nuevos productos y las innovaciones técnicas orientales crearon una mejor base para la producción y para el bienestar de las poblaciones de Occidente. El comercio se amplió y se intensificó continuamente, y recibió estímulo la producción artesanal o manufacturera en los burgos o ciudades que durante el siglo XIII adquirieron importancia. La economía monetaria comenzó a desplazar lentamente a la economía natural: el comercio, ya no provincial sino interprovincial e interregional, necesitó de la moneda como indispensable medio de intercambio, y las aventuras mercantiles requirieron financiamiento, lo que a su vez estimuló la creación de bancos y la acumulación de capital.

A partir del siglo XV la acumulación de capital y el desarrollo del comercio interprovincial crearon las bases materiales para la formación de naciones modernas. Las monarquías nacionales comenzaron a dominar a los señores feudales de las provincias: con los dineros aportados por los nuevos sectores capitalistas, los reyes pudieron constituir sus propios ejércitos, independientes de contingentes feudales, y pudieron desarrollar el Estado moderno, con sus juristas y su burocracia. Ante la resistencia anticentralista de la nobleza tradicional, los monarcas tendieron a aliarse con la burguesía comercial y bancaria, interesada en eliminar las trabas feudales que dificultaban las transacciones mercantiles y monetarias.

Los idiomas vernáculos, utilizados y enriquecidos por mercaderes, funcionarios reales, universitarios y poetas, intérpretes de los tiempos nuevos, adquirieron categoría respetable y oficial junto al latín, que paulatinamente quedó relegado a los seminarios y los templos. A mediados del siglo XIV, la imprenta de Gutenberg aportó el factor indispensable para la difusión masiva de las nuevas literaturas nacionales, así como de las legislaciones monárquicas.

Desde los siglos XII y XIII (época en que las Cruzadas estimularon el comercio y la urbanización), las principales ciudades europeas se habían convertido en centros de cultura universitaria. A partir del siglo XIV, en las ciudades italianas —donde por su ubicación en las rutas comerciales del Mediterráneo estaban más adelantados que en el resto de Europa los cambios materiales y sociales arriba esbozados— comenzó la transición de la escolástica y del arte religioso medieval hacia las manifestaciones culturales denominadas del "Renacimiento", que florecieron plenamente en el siglo XV: humanismo, redescubrimiento de las artes de la antigüedad, impulso a la ciencia natural; desarrollo magnífico de la filosofía, la literatura y las artes plásticas en el sentido de la glorificación del Hombre como señor y transformador de la Tierra; sentido del progreso; entusiasmo y optimismo sin límites. Este nuevo espíritu penetró desde Italia en los demás países de Europa. Generado por cambios materiales, el impulso espiritual renacentista se convirtió a su vez en agente de transformaciones económicas, sociales y políticas.

La ascendente clase burguesa —artífice del desarrollo comercial, de la urbanización, del Renacimiento y del Estado moderno (nacional, como en Francia, o regional, como en las ciudades y provincias italianas)— impulsó la expansión de Europa mediante viajes de exploración y de conquista colonial. Al "ímpetu misionero" existente desde las Cruzadas se agregó el afán comercial de la nueva

clase mercantil urbana. Igualmente intervino en favor de los viajes de descubrimiento la ambición política de los monarcas nacionales, deseosos de fortalecerse mediante el incremento del número de sus súbditos y del monto de su riqueza material. Por último, existieron intereses sociales que alentaron la expansión europea: los "hijosdalgo" (vástagos empobrecidos de la nobleza feudal en crisis), así como campesinos sin tierra y elementos proletarizados de las ciudades, miraron la aventura marítima y colonial como único medio para escapar de su precaria situación (y en algunos casos para huir del carcelero o del verdugo). La leyenda de El Dorado, en sus diversas variantes, llamó a la aventura a los inquietos y a los desheredados del Viejo Mundo.

En su conjunto, el gran proceso de cambio estructural que Europa vivió desde las Cruzadas, y sobre todo a partir de 1450, puede sintetizarse de la manera siguiente:

1. Conquista de los océanos; descubrimientos y conquistas en escala mundial;
2. Desarrollo sin precedente del comercio, en volumen, variedad y extensión geográfica;
3. Auge de las ciudades y de las manufacturas para producir los artículos deseados por los comerciantes y sus clientes;
4. Debilitamiento y descenso de la clase terrateniente; fortalecimiento y auge de la clase mercantil y manufacturera;
5. Gradual desaparición de la servidumbre y ascenso del trabajo asalariado libre;
6. Unificación de las naciones y ascenso del Estado moderno;
7. Renovación cultural e intelectual: Renacimiento, humanismo, Reforma y Contrarreforma, espíritu científico, idea del Progreso.

Evidentemente, no todos estos procesos que aparecieron en Europa se manifestaron en su conjunto en cada uno de sus países. Debido a diversas circunstancias económicas, geográficas, históricas y sociales, en ciertas naciones europeas sólo se realizaron algunos de los cambios arriba indicados. Así, por ejemplo, en Italia se realizó de lleno la revolución comercial, financiera y manufacturera; el ascenso de la clase mercantil; la formación del Estado moderno y el Renacimiento en toda su gloria; pero en cambio no tuvo lugar la unificación nacional. La península experimentó de lleno las transformaciones sociales y culturales internas, características de la nueva edad histórica, pero no así el proceso nacional que vivieron otros países en la misma época. Ello se debió sobre todo al poderío de dos factores hegemónicos tradicionales: el papado y el imperio romano-germánico, que eran rivales pero coincidían en impedir el surgimiento y el triunfo de las fuerzas de unificación nacional procedentes de la base social del país.

En cambio, España vivió el proceso de la unificación nacional y de la formación del Estado moderno, sin atravesar por la transformación social y cultural basada en el ascenso de una burguesía comercial. La liberación española de la dominación árabe y la creación de un Estado nacional unificado fueron llevadas a cabo bajo la dirección de la nobleza militar y del clero: los factores sociales de tipo tradicional y medieval. La incipiente burguesía mercantil y bancaria española era extraña a la nueva nacionalidad: estaba integrada por judíos y árabes que fueron expulsados definitivamente en 1492 por decreto de los Reyes Católicos. Por la estructura tradicionalista de la sociedad española, las corrientes del Renacimiento no pudieron penetrar de lleno en ella: en lo esencial se conservó la visión medieval del hombre

y del universo, con su dogmatismo católico, reforzado por el hecho de que el catolicismo era expresión de la identidad nacional frente a los antiguos amos musulmanes.

España fue impulsada a realizar viajes de descubrimiento y conquistas coloniales, no por aspiraciones comerciales de burguesías propias, sino por las ambiciones políticas de sus monarcas deseosos de engrandecer y enriquecer a su Estado y gobierno. Al mismo tiempo, la corona hispana fue alentada en ese sentido por intereses comerciales de burguesías externas: la holandesa, la italiana y otras, escudadas detrás del poderío militar y naval español. El mercantilismo —política económica de control del Estado sobre las actividades comerciales y capitalistas— sirvió de instrumento a lo largo de la época moderna preindustrial para la promoción de los intereses conjuntos de gobiernos y sectores burgueses. En el caso de España, la alianza no fue la del Estado con una burguesía nacional (que sí se dio en Francia), sino del poder monárquico con una nobleza nacional militar y clerical, con intereses capitalistas externos localizados en las partes más desarrolladas de Europa. Mientras España conquistaba y colonizaba el mundo ultramarino, los burgueses de Amsterdam y, posteriormente, de Londres se aprestaron a "colonizar", a su vez, en lo económico, las potencias ibéricas.

La nación portuguesa presentó un cuadro social algo más moderno. Liberada de los árabes un siglo antes que España, Portugal tuvo tiempo y oportunidades para la formación de una clase de comerciantes y la acumulación de capital monetario. Motivaciones mercantiles, relacionadas con el comercio y el transporte de las especias de Oriente, influyeron en Enrique el Navegante y sus sucesores para emprender, a partir de 1415, los viajes de exploración a lo largo de las costas de Africa. La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 dio otro impulso decisivo a los portugueses para intensificar esas expediciones: con el Mediterráneo en manos del adversario musulmán, Europa necesitaba una nueva ruta comercial hacia Asia por el camino del Atlántico.

Al tener España un carácter más nobiliario y absolutista, y Portugal estructuras algo más burguesas, las dos potencias ibéricas establecieron en sus colonias americanas sistemas ligeramente distintos. En el ámbito colonial español se implantaron los rigurosos mecanismos del mercantilismo más pronunciado. No había burguesía que ejerciese las actividades económicas, sino que éstas quedaron bajo la regulación de funcionarios públicos. De allí el extraordinario verticalismo administrativo característico del imperio español. Nada se podía hacer en las colonias sin autorización de la metrópoli; todos los vínculos esenciales entre España y cada una de sus provincias coloniales eran de tipo vertical, prohibiéndose —antes de las reformas borbónicas del siglo XVIII— todo intercambio horizontal entre una colonia y otra. Con ello se echaron las bases para el futuro fraccionamiento político de Hispanoamérica: España, al dar a toda su esfera colonial americana un idioma, una fe y una conciencia subjetiva comunes, creó estructuras y patrones de conducta económica favorables a la división entre las provincias, que se convirtieron en países soberanos separados.

En cambio, Portugal aplicó en Brasil métodos de colonización más flexibles, tendientes a otorgar mayor poder de decisión a los propios habitantes de la colonia, así como a alentar el establecimiento de vínculos horizontales entre una provincia y otra, y sin la constante referencia obligada a la metrópoli ultramarina. Los

capitanes a quienes se encomendó la conquista y la colonización del interior de Brasil, partiendo desde la costa del Atlántico, tenían un carácter más empresarial que los virreyes y capitanes de España, que eran funcionarios al servicio del Estado absolutista y centralizador. Además, en Brasil existía un constante intercambio entre una capitanía y otra, mientras cada virreinato o capitanía general de Hispanoamérica orientaba sus relaciones casi exclusivamente hacia la metrópoli. Si tomamos en cuenta estos hechos fundamentales, podemos llegar a la conclusión de que la unidad brasileña, en contraste con la división de Hispanoamérica en casi 20 unidades, no es ningún hecho debido principalmente al "carácter conciliador de los portugueses", o al "papel moderador de Pedro I y Pedro II", ni a la geografía (país sin cordilleras que separan) —aunque estos factores también pueden haber contribuido—, sino a la existencia, desde la colonia, de una integración económico-social, históricamente formada, que hizo falta en la parte española del continente.

Sin embargo, no sólo España; también Portugal fue más verticalista y rígido en sus métodos de colonización que Francia, y ésta, a su vez, lo fue más que Holanda e Inglaterra. Esta última, en particular, sólo inició la conquista y colonización de Norteamérica en 1607, un siglo después del comienzo de la colonización ibérica más al Sur. Mientras España introdujo en sus dominios americanos estructuras e instituciones que aún llevaban el sello de la Edad Media —y echó así las bases para un futuro estancamiento sociopolítico—, Inglaterra comenzó su acción en América en un momento histórico en que sus propias estructuras ya eran burguesas, capitalistas y pluralistas, con instituciones representativas. En sus trece colonias norteamericanas estableció cuerpos deliberantes electivos y permitió un alto grado de libertad de comercio y de manufactura. Mientras la colonización española —y en menor medida la portuguesa— tuvo un carácter absolutista y nobiliario, con formas económicas esclavistas semifeudales, la inglesa presentó rasgos burgueses, representativos y capitalistas. Así, desde la época colonial, en el norte del hemisferio existió una base para el progreso económico y social, mientras en la parte sur hubo estructuras e instituciones verticales, jerárquicas y dogmáticas, que obstaculizaron eventuales procesos de cambio y de progreso.

Seguramente, estos factores históricos ligados a la época colonial no son los únicos que explican la diferencia de los niveles de desarrollo entre América del Norte y América Latina. Entre los autores que se ocupan de los problemas de la sociedad latinoamericana existen dos tendencias extremas al respecto. Por un lado, algunos afirman que el subdesarrollo latinoamericano se debe casi exclusivamente a elementos heredados de la colonización española y portuguesa, y a dificultades internas, tales como el mestizaje y otros. Otros, en cambio, asignan la culpa del estancamiento o subdesarrollo latinoamericano únicamente a la acción del imperialismo angloamericano, sin tomar en consideración las estructuras jerárquicas e inmovilistas introducidas por el colonialismo ibérico. Una visión amplia y dialéctica de la historia latinoamericana debería considerar tanto lo uno como lo otro. Existen constantes acciones y reacciones entre lo viejo y lo nuevo, el pasado y el presente, factores internos y externos, la acción negativa de oligarquías y de imperialismos. Ignorar la importancia del hecho de que España y Portugal implantaron en Latinoamérica estructuras semifeudales, autoritarias, dogmáticas e inmovilistas, mientras que Inglaterra permitió en Norteamérica el florecimiento de una burguesía emprendedora y liberal, sería negar la importancia del factor histórico en la vida de

los pueblos. Pero, por otra parte, sería negar también la dinámica histórica si se supusiera que las diferencias iniciales son inmutables y eternas, o si se deja de tener en cuenta el factor de la explotación de los países periféricos por parte de grandes centros capitalistas industrializados.

Desde la época de la conquista y la colonia ha existido una profunda diferencia de "etapa histórica" y potencialidad de desarrollo entre América Latina y Angloamérica. Esa desigualdad fue profundizada posteriormente por la acción hegemonista del norte capitalista moderno sobre el sur estancado en el tradicionalismo económico-social.

El reconocimiento del atraso histórico de Latinoamérica con respecto a la Norteamérica inglesa en la época colonial no significa ignorar ni menospreciar aspectos en los cuales el colonialismo hispánico fue superior a la dominación inglesa en lo ético y lo humanitario. España en el siglo XVI, pese al absolutismo y la Inquisición, fue un país vibrante de inquietudes intelectuales, políticas y morales. Pensadores como Francisco de Vitoria pusieron en duda los fundamentos mismos del "pacto colonial". Valientes luchadores por la dignidad del hombre, como el Padre de las Casas, atacaron y denunciaron las crueldades y los abusos del sistema, y lograron reformas parciales. El pensamiento paternalista de la monarquía española y de la Iglesia se tradujo en múltiples leyes humanitarias de protección al indio, al siervo y hasta al esclavo, contrastando esos instrumentos (a veces ignorados pero otras veces aplicados, por lo menos en parte) con la brutal dureza de la legislación burguesa británica u holandesa, que daba un carácter casi sagrado a la propiedad privada y otorgaba plena libertad para exterminar al indio y maltratar al negro. Así mismo, la colonia ibérica se caracterizó por sus extraordinarias obras culturales y caritativas —¡universidades a partir de 1538!— y por su esclarecida planificación urbana, en contraste con la rudeza de las instituciones coloniales angloamericanas. Pero al igual que en otros momentos de la historia universal, en este caso lo subjetivamente más "esclarecido" no lo era en su aspecto objetivo. El sistema inicialmente más crudo y brutal llevaba en su seno la simiente del progreso dinámico mientras que el humanismo paternalista del otro fue fruto de una estructura esencialmente estática, incapaz de ser positiva y de flexible evolución.

Antes de dejar el examen de la naturaleza del colonialismo ibérico en América, es preciso decir algo sobre la base económica del sistema. En el seno de la corriente dialéctica del pensamiento social se discute acerca del modo de producción de Latinoamérica en la época colonial. André Gunder Frank defiende la tesis de que nuestra región jamás atravesó por una etapa feudal o precapitalista, ya que su economía nunca tuvo un carácter cerrado, sino que siempre existió la vinculación con el mercado capitalista exterior. Contra esa tesis, Ernesto Puiggrós defiende la noción dialéctica tradicional de que Latinoamérica atravesó diversas etapas de desarrollo socioeconómico sucesivamente y que esas etapas todavía coexisten en sus estructuras actuales. Ernesto Laclau comparte la crítica de André Gunder Frank respecto a la idea de las etapas estancadas, pero está de acuerdo con Puiggrós en señalar que una formación social o un modo de producción no se definen por sus vínculos externos, sino por sus "relaciones de producción internas". En la Latinoamérica colonial claramente las relaciones sociales predominantes no fueron capitalistas. Apenas existieron el trabajo asalariado, la acumulación y reinversión de capital, la contradicción básica entre capitalistas y obreros, la producción

mercantil desarrollada, la movilidad mercantil de la propiedad agraria, la independencia de la manufactura con respecto al agro, y las instituciones e ideas características de una burguesía naciente. Lo que existió en forma predominante fueron rasgos económicos netamente feudales o esclavistas: "En regiones con densas poblaciones indígenas —México, Perú, Bolivia o Guatemala— los productores directos no fueron despojados de la propiedad de los medios de producción, mientras que la coerción extraeconómica para maximizar distintos sistemas de prestación de servicios en trabajo —en los cuales es imposible no ver el equivalente de la *corvée* europea— eran progresivamente intensificados. En las plantaciones de las Indias Occidentales, la economía se basó en un modo de producción constituido por el trabajo de esclavos, mientras que en las regiones mineras se desarrollaron formas disimuladas de esclavitud y otro tipo de trabajo forzado que no tenía la menor semejanza con la formación de un proletariado capitalista. Unicamente en las pampas argentinas y de Uruguay, y en otras pequenas áreas semejantes donde no habían existido previamente poblaciones indígenas —o donde, si habían habido algunas, eran escasas y eran exterminadas rápidamente— el asentamiento asumió sus formas capitalistas... pero estas regiones distaron mucho del patrón dominante en América Latina" (Laclau, 1976, pp. 129-130).

No obstante estar vinculada a un mercado europeo cada vez más dominado por el capital comercial y, eventualmente, por el capitalismo, América Latina mantuvo en lo interno, no sólo durante la época de la colonia sino en algunas de sus partes hasta nuestros días, modos de producción precapitalista. El esclavismo existió en las plantaciones que trabajaban para la exportación directa, y en otras partes se implantaron formas feudales o semifeudales, vinculadas más indirectamente al mercado exterior.

De estas interpretaciones del pasado se derivan evidentes conclusiones para la época contemporánea. Quienes crean que Latinoamérica todavía está en tránsito de una "etapa feudal" a una "etapa capitalista", tenderán a pensar que hoy en día los procesos de transformación progresista pueden ser dirigidos por sectores burgueses o empresariales. Quien comparta la tesis simplista de André Gunder Frank, de que nuestro subcontinente siempre fue "capitalista", llegará a la noción ultra-radical de que toda lucha por el progreso debe tener hoy un carácter "proletario" y antiburgués.

La interpretación intermedia, al estilo de Laclau, nos acerca a posiciones realistas: si bien somos una región fundamentalmente capitalista, arrastramos restos de sistemas anacrónicos, históricamente anteriores, y ello nos obliga a enfocar nuestros combates inmediatos contra todo lo que nacionalmente nos oprime y nos retarda, y a reunir para tal fin las voluntades de los más amplios y diversos sectores no comprometidos con el mantenimiento de la hegemonía de monopolios nacionales y transnacionales.

Toda acción liberadora contemporánea debe tener en cuenta el fenómeno que define Héctor Malavé Mata en los términos siguientes: "Instituciones y valores fundados en épocas pasadas no se extinguen en la sucesión histórica, sino que se instalan, con ciertas mezclas y depuraciones, entre las desgarraduras del tiempo presente. En la secuencia que registra la historia también se advierten lastres que, tras duración amplia y errátil, perduran todavía en lecho no movible. Así, en la realidad contemporánea (...) existen parcelas donde aún no han concluido los siglos XVIII y XIX" (Malavé Mata, 1975; pp. 3-4).

Relaciones hispano-portuguesas en América

A partir del primer viaje de Colón en 1492 se planteó entre España y Portugal el problema de la delimitación de los espacios marítimos y terrestres que comenzaban a ser descubiertos y conquistados. Y a lo largo de la historia colonial iberoamericana, encontramos a las dos monarquías en rivalidad territorial. Las disputas hispano-portuguesas por la delimitación de sus respectivas zonas coloniales en América del Sur constituyeron la base de posteriores controversias —continuadas hasta el tiempo actual— entre los Estados sucesores de los dos imperios.

Consultado por los gobiernos español y portugués acerca de la delimitación de sus respectivos espacios marinos y ultramarinos, el 3 de mayo de 1493 el Papa Alejandro VI Borgia emitió una bula que fijó una línea recta divisoria de los dos ámbitos imperiales. Según la bula, todos los océanos y continentes descubiertos o por descubrir al sur del paralelo, que atraviesa las islas Azores, quedarían encomendados a España y Portugal para su colonización y cristianización. A 100 leguas al oeste de las Azores se trazó un meridiano que constituiría el límite entre los dominios. Todos los territorios y mares situados al este del meridiano pertenecerían a la corona de Portugal, y todos los localizados al oeste, a la de España. Según esa demarcación, Portugal quedaba excluido de América.

Descontento, y sin duda convencido de que Alejandro Borgia (Borges) se había dejado influir por su propio origen español, el gobierno de Lisboa pidió una revisión de los términos establecidos en la bula. El Estado portugués tenía la intención de extender sus viajes de exploración más al oeste del meridiano fijado y, por ello, Juan II pidió a los Reyes Católicos que se negociara bilateralmente sobre una nueva línea divisoria más justa. España aceptó y el 7 de junio de 1494 las dos naciones ibéricas firmaron el Tratado de Tordesillas. Según ese instrumento, el meridiano demarcador se traza no a 100, sino a 350 leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde. De esa manera, la parte oriental de Brasil, de Pará a Santos, quedó incluida dentro de la esfera imperial lusa.

El Tratado de Tordesillas nunca constituyó un instrumento satisfactorio para la delimitación de los territorios españoles y portugueses en América. Pronto la experiencia demostró que los límites reales serían determinados por los accidentes geográficos y por la ocupación efectiva por parte de conquistadores y *bandeirantes*. Por otro lado, la toma de las Islas Filipinas por España en 1570 podía ser interpretada como una violación de dicho Tratado.

De 1580 a 1640 la rivalidad entre los dos países quedó interrumpida por el hecho de que se encontraban unidos bajo la corona española. Pero después de esta última fecha recomenzaron las pugnas territoriales, que se localizaron principalmente en la frontera entre Brasil y las provincias del Río de la Plata, pertenecientes al Virreinato del Perú hasta 1776, año en el que fueron constituidas en virreinato propio.

España en el siglo XVII invocaba el Tratado de Tordesillas para afirmar que las tierras situadas entre São Vicente y el estuario del Plata eran suyas, pero el gobierno portugués rechazaba ese alegato. En 1680 los *bandeirantes* del sur de Brasil avanzaron en compactas columnas, con sus familias y sus posesiones montadas en carretas, decididos a ocupar las fértiles tierras de la región fronteriza. Los colonos brasileños fundaron la Nueva Colonia Sacramento en el Río de la Plata frente a

Buenos Aires. El gobierno español bonaerense llamó sus tropas a las armas y expulsó a los brasileños de Sacramento, pero las autoridades de Madrid, deseosas de mantener la paz con Portugal e impedir que éste se pasara al bando francés en el conflicto con Luis XIV, ordenaron a Buenos Aires que restituyera la colonia de Sacramento a los invasores brasileños.

En las décadas subsiguientes continuó la lucha entre Brasil y el Río de la Plata por la Banda Oriental (Uruguay) y otras zonas intermedias, con múltiples peripecias militares y diplomáticas. En 1726 los rioplatenses avanzaron y fundaron Montevideo, hecho que provocó ataques armados de los *bandeirantes* que desconocían el derecho de los súbditos de España a colonizar esa región.

Por fin el Tratado de Madrid (de 1750) pareció ofrecer las bases para una solución realmente aceptable. Rechazando definitivamente los principios del Tratado de Tordesillas, de la delimitación por artificiales líneas rectas, el Tratado de Madrid establece el criterio del *uti possidetis;* es decir, de la ocupación efectiva como base parcial para la delimitación. La frontera entre la Banda Oriental y el territorio brasileño de Rio Grande do Sul se estableció conforme al criterio mencionado. Por el mismo Tratado, Portugal devolvería Sacramento a España y, a cambio de ello, España cedería a Portugal las Siete Misiones que formaban parte de las reducciones jesuitas de Paraguay.

Los jesuitas y los indios bajo su tutela habían establecido en las misiones de Paraguay un Estado socialista teocrático, basado en la propiedad común de los medios de producción y el reparto de la riqueza de acuerdo con el trabajo de cada quien. Bajo ese sistema justo y humanitario, la prosperidad de las reducciones y de sus 140.000 habitantes fue admirable. Los esclavistas y feudales de Brasil miraban con codicia y envidia hacia aquel "Reino de Dios sobre la Tierra", y buscaban un pretexto para invadir el Estado de los jesuitas, esclavizar a los indios de las misiones y despojarlos de su tierra comunal, para anexarla a los latifundios. El Tratado de Madrid les entregaba por lo menos siete de las más importantes misiones o reducciones jesuitas. Pero los sacerdotes y los indios no estuvieron dispuestos a aceptar la destrucción de su sociedad. Tomaron las armas y durante varios años resistieron por la fuerza a los ejércitos portugueses y españoles que, unidos, trataban de dominarlos. Esta rebelión socialista teocrática condujo eventualmente a la condena y la ilegalización de la Sociedad de Jesús por la corona española. En 1767 la Compañía fue prohibida y sus miembros expulsados de Paraguay como de todos los demás dominios de España.

La imposibilidad de dar cumplimiento a la entrega de las Siete Misiones hizo que los portugueses a su vez demoraran la entrega de la Colonia de Sacramento a España. De este modo, el Tratado de Madrid quedó sin ejecutarse. En el año 1761 dicho tratado fue anulado oficialmente y sustituido por otro (el de El Pardo) que, en lugar de fijar límites, proclamó la "inalterable unión entre los vasallos" de los reyes de España y de Portugal en América. En realidad, no hubo "unión" sino nueva guerra: al cabo de diez años de luchas fronterizas entre gauchos rioplatenses y *bandeirantes* brasileños, Sacramento fue conquistada por aquéllos y anexada, junto con la isla de Santa Catalina, al imperio español. En 1777 el Tratado de San Ildefonso devolvió la mencionada isla a Brasil, pero confirmó la soberanía española sobre Sacramento. Las Siete Misiones permanecieron en manos de España. Finalmente, en 1801, después del enfrentamiento bélico entre España (aliada de Napoleón)

y Portugal (ligada a la Gran Bretaña) los dos países suscribieron el tratado de paz de Badajoz. Ese instrumento reconoció la soberanía portuguesa sobre algunos nuevos trozos de territorio incorporados a Rio Grande do Sul.

El cuadro general nos muestra pues dos imperios coloniales rivales, en lucha por los territorios de Uruguay y del norte de Paraguay y Argentina. Un motivo fundamental lo constituyó la cuestión del control sobre el sistema fluvial Plata-Paraná-Paraguay, de gran importancia tanto en lo económico como en lo militar. El libre acceso al sistema fluvial mencionado significa la posibilidad de penetrar desde el Atlántico hasta el corazón de Sudamérica con sus enormes recursos.

Hoy, en la época de la soberanía política de Brasil y Argentina, esos dos Estados, sucesores de Portugal y de España, respectivamente, continúan la gran pugna geopolítica por Uruguay y Paraguay, que se inició en la etapa colonial. Hoy como ayer, poderes ajenos al ámbito latinoamericano participan por vías indirectas en esa rivalidad y tratan de aprovecharla para sus propósitos imperiales.

Potencias ibéricas contra potencias nuevas

La dominación hispano-portuguesa sobre las ricas tierras americanas provocó desde las primeras décadas del siglo XVI la envidia y la codicia de los demás países europeos de la costa del Atlántico. El capitalismo comercial se desarrolló durante ese siglo en Francia, Holanda e Inglaterra, y muy pronto esas nuevas potencias expansionistas se lanzaron a la lucha por arrebatar los mercados y los recursos de Iberoamérica a las potencias coloniales viejas: España y Portugal.

Durante el siglo XVI las colonias iberoamericanas desempeñaron principalmente el papel económico de proveedoras de metales preciosos. A partir de 1600 la producción de bienes agropecuarios adquirió creciente importancia. En el siglo XVIII, bajo los Borbones de España, las plantaciones se transformaron definitivamente en factor de primera importancia en la economía latinoamericana. Durante los tres siglos se restringió el desarrollo de manufacturas en las colonias, que dependían de la metrópoli para su abastecimiento con artículos industriales.

Pero, a su vez, las metrópolis española y portuguesa dependían económicamente de los centros más desarrollados del Viejo Mundo. Ellas mismas, por sus economías feudales y su mentalidad medieval, no supieron aprovechar los recursos y los mercados americanos para instrumentar su desarrollo propio. Hacían el papel de intermediarios entre sus colonias y los países europeos más desarrollados, derivando éstos el principal provecho de la compra de artículos básicos de América y la venta de bienes manufacturados a los americanos. En ambos casos, sus operaciones debían efectuarse a través de los intermediarios ibéricos, dueños de las tierras americanas. Ante ello, obviamente, los países más avanzados en lo económico, tales como Holanda, Francia e Inglaterra, se sintieron cada vez más descontentos y más deseosos de comerciar directamente con los latinoamericanos, sin pasar a través de los onerosos intermediarios de la Península Ibérica. Para alcanzar ese objetivo, existían varios medios: el contrabando, la piratería, y la guerra, con el fin de obligar a España y Portugal a renunciar a su control monopolista sobre la América Latina.

Francia fue la primera de las "potencias nuevas" del siglo XVI en disputarle a las "potencias viejas" su dominación sobre América (ver cuadro 1).

En el año 1500, barcos franceses anclaron en Terranova y marcaron el comienzo de la colonización gala del Canadá. Alrededor de 1520 la presencia francesa comenzó a manifestarse en el Mar Caribe bajo la forma de piratería de los bucaneros, desertores o prófugos de la justicia francesa que inicialmente se establecieron en el norte de La Española y vivieron de la caza, la pesca y el bandolerismo. Sus casuchas —*boucans*— les dieron su nombre. Después de apoderarse de lanchas y barcos, se hicieron a la mar y se convirtieron en azote de la navegación española. Muchos de ellos, así como también otros aventureros llegados al Caribe posteriormente, recibieron patentes de corso de Su Majestad Cristina para saquear y hundir los barcos de Su Majestad Católica. A lo largo de los siglos XVI y XVII, los piratas franceses parecen haber sido los más sanguinarios y crueles. La ciudad hispanoamericana que soportó peores atropellos y masacres a manos de ellos fue la de Maracaibo.

El establecimiento definitivo de los franceses en diversos puntos del Caribe se efectuó paso a paso, a pesar de una fuerte resistencia española. El factor económico que más atraía a Francia, tanto en el Caribe como en Sudamérica, fue el azúcar. En 1697, por el Tratado de Ryswick, Francia obtuvo la posesión de Haití. Martinica y Guadalupe ya eran francesas desde1635.

Barcos franceses aparecieron también en las costas de Brasil en 1530 y destruyeron la colonia portuguesa de Pernambuco. En 1555, por órdenes del almirante Coligny, una escuadra francesa al mando de Villegaignon atacó nuevamente Brasil: los marineros galos desembarcaron en la bahía de Río de Janeiro y fundaron una colonia en ese lugar. Fueron desalojados en 1560 por los portugueses, pero casi de inmediato volvieron y establecieron una nueva cabeza de puente en la misma bahía. Esta segunda colonia francesa fue liquidada por los brasileños en 1565.

Treinta años después, en 1594, los franceses volvieron a la carga, desembarcando en el nordeste brasileño y estableciendo una colonia en Maranhao. Esta colonia fue francesa hasta 1616, año en que la tomó una expedición portuguesa al mando de Jerónimo de Albuquerque. En esa oportunidad los lusitanos victoriosos fundaron la ciudad de Belem. Los franceses, expulsados de Maranhao, se dirigieron más hacia el Norte y comenzaron a colonizar la Guayana a partir de 1624. Las autoridades portuguesas no interfirieron con esta colonización, ya que se realizaba más allá de los límites fijados por el Tratado de Tordesillas.

Holanda fue enemiga permanente de España, desde su lucha de independencia en la segunda mitad del siglo XVI hasta el año 1648, cuando el gobierno de Madrid por fin la reconoció como nación soberana. La enemistad holandesa iba dirigida igualmente contra Portugal durante los sesenta años de la unión hispano-lusa (1580-1640). En la lucha entre Holanda y las potencias ibéricas estaba involucrada, además de la causa nacional neerlandesa, la contradicción entre dos sistemas sociales e ideológicos opuestos. España encarnaba el absolutismo semifeudal y católico, mientras que Holanda tipificaba —con mayor claridad aún que Inglaterra— el sistema capitalista y burgués, de confesión protestante.

En el plano de la teoría jurídica, la causa holandesa se pudo basar en el *Mare Liberum* de Hugo Grocio, publicado en 1608, que niega de frente la doctrina tradicional del mar sometido a la soberanía de las potencias. Las nuevas naciones expansionistas arremetieron contra las viejas en nombre del principio de la libertad

Cuadro 1

Relaciones Europa-América

Relaciones España-Portugal	Potencias ibéricas-Potencias nuevas	Europa
1530	Franceses en Pernambuco. Ingleses en Bahía	
1555	Franceses en Bahía de Río de Janeiro	Paz de Augsburgo
1560-1565	Segunda colonia francesa en Bahía de Río de Janeiro	
1565		Rebelión de los Países Bajos contra España
1580-1640 Unión de España y Portugal		
1588	Destrucción de la Armada Española	
1594-1616	Colonia francesa en Maranhao	
1608	Hugo Grocio publica el *Mare Liberum*	
1618		Comienza la Guerra de Treinta Años
1623	Inglaterra ocupa San Cristóbal	
1624	Francia inicia colonización de Guayana. Holandeses en Brasil.	
1625	Inglaterra ocupa Barbados	
1631	Holandeses toman Pernambuco	
1635	Francia toma Martinica y Guadalupe	
1636-1644	Mauricio de Nassau gobierna Pernambuco	
1648	Holanda es reconocida por España y obtiene las Antillas Neerlandesas y parte de Guayana (Tratado de Münster)	Tratados de Westfalia, fin de la Guerra de Treinta Años
1649		República Inglesa, bajo la dictadura revolucionaria de Cromwell
1654	Holandeses desalojados de Pernambuco	

Cuadro 1 (cont.)

Relaciones Europa-América

Relaciones España-Portugal	Potencias ibéricas-Potencias nuevas	Europa
1655	Ingleses ocupan Jamaica	
1667-1668		Guerra de Devolución
1670	Tratado de Madrid: Jamaica para Inglaterra	
1672-1679		Guerra de Holanda
1689-1697		Guerra de la Liga de Augsburgo
1697	Tratado de Ryswick: Haití para Francia	
1701-1713		Guerra de la Sucesión Española
1713	Tratado de Utrecht: Inglaterra recibe el "Asiento" y posesiones antillanas	
1740-1748		Guerra de la Sucesión Austríaca
1750 Tratado de Madrid		
1756-1763		Guerra de Siete Años
1761 Tratado de El Pardo		
1763	Tratado de París: Inglaterra recibe el Canadá y se fortalece en América	
1769		James Watt presenta la primera máquina de vapor
1789-1799		Revolución Francesa
1797	Inglaterra ocupa Trinidad	
1799		Napoleón implanta su dictadura
1801	Tratado de Badajoz	

de los mares y, posteriormente, en el de la libertad de comercio, para romper el control monopolista que las dos potencias ibéricas pretendían mantener sobre las rutas oceánicas y los continentes de ultramar. Resistiendo a la nueva corriente del derecho internacional, hasta 1670 España pretendió poseer la soberanía absoluta sobre el Atlántico occidental, y se consideró dueña del Pacífico hasta fines del siglo XVIII. Al mismo tiempo, Portugal persistió en proclamar su soberanía sobre el Atlántico al este del meridiano de Tordesillas, así como también sobre el Océano Indico y el Pacífico occidental.

Las incursiones holandesas en los espacios imperiales ibéricos comenzaron por meros actos de hostigamiento y de saqueo, para luego concretarse en la ocupación permanente de islas del Caribe y porciones de Guayana. Entre 1630 y 1648, Holanda se apoderó de las islas de Curazao, Aruba, Bonaire, San Eustacio, Saba y San Martin, así como del territorio de Suriname y la parte oriental de la actual Guyana. España se vio obligada a reconocer esas ocupaciones por el Tratado de Münster de 1648.

Igualmente, Brasil fue objeto de pretensiones territoriales holandesas. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, fundada en 1621, dirigió las operaciones con la intención de apoderarse de las ricas tierras azucareras brasileñas. Para 1625 los holandeses habían desembarcado y fundado colonias en varios puntos de la costa de Brasil. En 1624 capturaron la ciudad y la provincia de Bahia, y las ocuparon durante un año. En 1631 fuerzas neerlandesas tomaron la provincia de Pernambuco, con su costa de 1.200 millas de extensión. En 1636 Mauricio de Nassau fue nombrado gobernador general del Brasil holandés, con sede en Recife, y creó una administración compleja y eficaz. Su gobierno fue sagaz y liberal, con buenas leyes que protegían al pueblo y aseguraban un considerable bienestar colectivo. Tanto así que la oligarquía comercial holandesa, a cuya rapacidad Nassau trató de poner freno, conspiró contra él, lo denunció ante las autoridades metropolitanas y logró su destitución en 1644.

Para ese momento Portugal, separado de España en 1640, había hecho las paces con Holanda, reconociendo las posesiones neerlandesas en Brasil. Pero el pueblo y las élites criollas de Brasil no obedecieron al rey Juan IV. Por cuenta propia se lanzaron contra los holandeses y, al cabo de una guerra de casi diez años, los desalojaron de Pernambuco en 1654. Los factores que impulsaron a los brasileños a esa valiente gesta fueron, por una parte, el deseo de reconquistar la rica región azucarera del nordeste y, por la otra, el rechazo del pueblo católico al protestantismo de los ocupantes holandeses.

Inglaterra inició su expansión hacia tierras americanas con la expedición de Juan Caboto a Norteamérica en 1497. Durante el siglo XVI corsarios ingleses invadieron el Mar Caribe y desembarcaron en Brasil y en Guayana. Sir Walter Raleigh, Sir Francis Drake, Sir Humphrey Gilbert, Martin Frobisher, Thomas Cavendish, Amías Preston, William y John Hawkins, fueron los principales almirantes y capitanes británicos que atacaron América Latina durante el siglo XVI. Al principio, su acción se limitó a saquear, sin tratar de establecer colonias. Sólo William Hawkins desembarcó en Brasil en 1530 y construyó un fortín británico en la zona de Bahia. Los portugueses reconquistaron ese lugar al cabo de poco tiempo.

En el siglo XVII, Inglaterra comenzó a ocupar territorios en América y las Antillas, con intenciones de permanencia. Ya el oro no constituía su única o

principal motivación económica; también las plantaciones de azúcar desempeñaron un papel importante, así como la trata de negros. En 1623 Inglaterra ocupó la isla de San Cristóbal (St. Kitts), y en 1625, la de Barbados. La más grande de las Antillas Británicas, Jamaica, fue tomada en 1655 por la flota del régimen revolucionario de Oliverio Cromwell, en guerra contra España. En 1661 Carlos II Estuardo nombró gobernador de la isla al ex pirata, de sanguinaria reputación, Sir Henry Morgan. El Tratado de Madrid de 1670 cedió formalmente Jamaica a la corona británica. En 1713, por el Tratado de Utrecht, Inglaterra obtuvo el "asiento" (importación de esclavos y otros bienes a Hispanoamérica). Durante el siglo XVIII extendió su dominación sobre las islas inglesas de Barlovento y Sotavento, terminando con la conquista de Trinidad en 1797. Cada uno de los tratados de paz que siguieron a guerras contra España y Francia fue fuente de nuevas adquisiciones coloniales para Inglaterra.

En Guayana los ingleses efectuaron diversas expediciones durante los siglos XVI y XVII. Durante ciertos lapsos ocuparon Suriname y porciones de la Guyana actual. Sin embargo, estos territorios volvieron a manos holandesas hasta la guerra de la Revolución Francesa, cuando Inglaterra se apoderó de la parte oriental de la futura Guyana, formalizándose su posesión colonial de esa región por los tratados de 1814-1815.

Resumen

El continente americano fue poblado por grupos humanos provenientes de Siberia, con algunos injertos secundarios venidos a través del Océano Pacífico. La migración parece haberse iniciado hace no menos de 30.000 y no más de 50.000 años.

En dos zonas del hemisferio —Mesoamérica y la subregión andina—se desarrollaron civilizaciones urbanas avanzadas, con estructuras sociales y políticas complejas. En ambas áreas, el tránsito de la etapa preurbana a la civilización se efectuó durante los últimos seis siglos antes de Jesucristo. Durante un milenio, esas civilizaciones estuvieron regidas por capas dominantes teocráticas. Luego de crisis de transición, la hegemonía teocrática fue reemplazada en ambos casos por la de capas militares. Para el siglo XIII de nuestra era, el militarismo regía tanto en Mesoamérica como en la zona andina suramericana. En el ámbito mesoamericano existió durante largo tiempo un pluralismo de centros de poder político que rivalizaban entre ellos, y sólo en el último siglo antes de la conquista española surgió un verdadero imperio, basado en la hegemonía de la ciudad-Estado azteca de Tenochtitlán sobre todos los demás centros políticos. En cambio, en los Andes, el imperio incaico fue más orgánico y armonioso, y se extendió desde Chile hasta Colombia, desde el siglo XIII hasta comienzos del XVI. Mientras en Mesoamérica —zona de relativa escasez de recursos alimentarios— existió una dura explotación de ciertos grupos humanos por otros, el imperio incaico, fundamentado en la abundancia y en magníficos sistemas de riego, se caracterizó por la solidaridad y la justicia social.

La implantación de la presencia española y portuguesa en América formó parte de un vasto proceso histórico europeo, que fue esencialmente el de la transición del

Tabla 1

Tabla cronológica I

50.000 A.C. a 30.000 A.C.	Paleo-mongoles inician penetración en América
15.000 A.C.	Poblamiento de Mesoamérica
10.000 A.C.	Primeros hombres llegan a Tierra del Fuego
600-300 A.C.	Comienzos de civilizaciones americanas; teocracias
100-300 D.C.	Comienzos de etapas clásicas (teocráticas) en Mesoamérica y Andes
700-900 D.C.	Crisis y desintegración del orden teocrático clásico
1000 D.C.	Creación de Estados toltecas y tolteco-mayas
1250 D.C.	Penetración azteca en México; comienzos del imperio incaico
1400 D.C.	Conquista azteca de México; expansión incaica

feudalismo a la sociedad burguesa. Las dos naciones ibéricas no vivieron ese proceso revolucionario en todas sus dimensiones: particularmente España conservó estructuras más medievales que modernas. Por ello, impuso a sus colonias americanas un sistema social precapitalista y jerárquico, signado por el dogmatismo y un absolutismo asfixiante, en contraste con el sistema semiliberal y capaz de adaptación y progreso, establecido por Inglaterra en América del Norte.

Entre España y Portugal existieron rivalidades territoriales desde el comienzo de sus respectivas conquistas y colonizaciones de América. La Bula de Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas establecían líneas de demarcación demasiado vagas y generales para ser de utilidad práctica. Durante ochenta años —de 1560 a 1640— las dos naciones ibéricas estuvieron unidas bajo una corona común, pero antes y sobre todo después de ese lapso tuvieron constantes choques, a veces armados y sangrientos, especialmente en los límites entre Brasil y el Río de la Plata. Esas rivalidades fronterizas continuarían después de la independencia, y hasta el día de hoy, entre las potencias brasileña y argentina, en pugna por la subhegemonía sobre la parte meridional de Sudamérica.

Por otra parte, las dos potencias colonizadoras ibéricas tuvieron que defenderse de las persistentes incursiones y penetraciones de las nuevas potencias expansionistas, como Francia, Holanda e Inglaterra. Comercialmente, España y Portugal sirvieron de intermediarios entre sus colonias, regidas en forma monopolista y mercantilista,

y las zonas más desarrolladas y capitalistas de Europa. Estas zonas desarrolladas muy pronto concibieron la ambición de dominar directamente a América y desplazar a España y Portugal de sus posiciones imperiales privilegiadas. En una primera etapa, la acción de los nuevos expansionistas se limitó a incursiones de piratas o corsarios. Posteriormente comenzaron a ocupar diversas áreas de los imperios americanos de España y Portugal con intenciones de permanencia: Antillas, Guayanas, y puntos en la costa brasileña. En las primeras dos áreas mencionadas tuvieron éxito y redujeron en algo el poderío español; en cambio Portugal y sus colonos lograron expulsar a los intrusos del Brasil.

En general, los siglos XVI, XVII y XVIII se caracterizaron por el desarrollo de tres procesos significativos para América Latina, tanto en su condición interna como en sus relaciones con el mundo exterior. En primer término, se construyó una sociedad vertical, de marcada desigualdad y poco dinamismo creador y transformador, cuya permanencia hasta el presente significa que Latinoamérica no podrá acceder a la plena modernidad sin sufrir profundos y conflictivos cambios sociales. En segundo término, se fue formando a partir del siglo XVI un patrón de dominación colonial y de intervención foránea, que aún no ha sido superado. En tercer lugar, en la época de la conquista y la colonia quedaron sembradas las raíces de conflictos territoriales intralatinoamericanos, que todavía perturban y obstaculizan los modernos esfuerzos de integración regional y subregional.

Un nuevo actor externo: formación, independencia y consolidación de Estados Unidos

Franceses, holandeses e ingleses en Norteamérica

La colonización francesa de Canadá se inició en 1534 con la expedición de Jacques Cartier, quien penetró el territorio por el río San Lorenzo. Durante el siglo XVI los franceses realizaron expediciones ocasionales a Canadá, principalmente con el fin de obtener pieles que les vendían los indígenas. En1603 se inició la colonización del territorio, bajo la dirección de Samuel de Champlain, agente de compañías traficantes en pieles, quien organizó y coordinó las primeras factorías y poblaciones permanentes de Francia en el norte del Nuevo Mundo. Champlain fundó el pueblo de Quebec en 1608, y durante las décadas subsiguientes penetró y exploró el interior del país. Bajo el gobierno del cardenal Richelieu, Francia estimuló la colonización de Canadá y la institucionalizó bajo el mando de la Compañía de Nueva Francia. Esta fue sustituida en 1664 por la Compañía Francesa de las Indias Occidentales. Quedó así Canadá bajo la dirección de esta compañía en lo económico y lo político, mientras al mismo tiempo se establecía en el país un gobierno eclesiástico dirigido por misioneros. En 1672 la autoridad suprema sobre la colonia fue puesta en manos de un gobernador de la Nueva Francia, nombrado por la corona.

A diferencia de lo que ocurrió más al Sur en las colonias inglesas, el Canadá francés fue regido en forma centralista y autoritaria. Sus indígenas fueron mejor tratados que los de Angloamérica: los misioneros y los funcionarios reales los protegían de atropellos y abusos. Además, en comparación con el gran número de ingleses que emigraron hacia las zonas situadas más al Sur, pocos franceses se establecieron definitivamente en Canadá con sus familias y practicaron la agricultura. Los indios canadienses no fueron despojados de sus tierras y expulsados hacia el Oeste, como sucedió en Angloamérica, sino que en general vivieron en simbiosis económica con los colonizadores, quienes les compraban las pieles, producto de su caza, a cambio de herramientas y otros artículos manufacturados europeos.

Debido a su menor poblamiento europeo, la parte francesa de Norteamérica estuvo en desventaja política y militar frente a las colonias inglesas, cada vez más densamente ocupadas por migrantes decididos a no retornar al Viejo Mundo.

Holanda desempeñó un papel modesto en la colonización de Norteamérica. En 1611 una expedición neerlandesa arribó a la desembocadura del río Hudson y desembarcó en la isla de Manhattan, adquiriendo posteriormente la propiedad de la misma por compra a los indios algonquinos. Fundaron allí la población de Nueva Amsterdam, concebida como factoría comercial y base para futuras expediciones hacia el interior del continente. En 1623 la Nueva Holanda (provincia regida desde Nueva Amsterdam) fue institucionalizada como una de las provincias de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Bajo el gobierno de Peter

Stuyvesant la provincia creció y prosperó. Pero en 1664 Nueva Amsterdam fue invadida y ocupada por los ingleses, quienes cambiaron su nombre por el de Nueva York. La cesión de la zona a Inglaterra se hizo definitiva diez años después. De este modo, los holandeses quedaron excluidos del continente norteamericano.

Desde el comienzo de la colonización británica en América del Norte, Inglaterra y Francia se vieron envueltos en una serie de conflictos, tanto en ese continente como en el resto del mundo. Cada una de las grandes guerras europeas de los siglos XVII y XVIII —en las cuales las coronas británica y francesa estuvieron regularmente enfrentadas— tuvo su repercusión en Norteamérica. Los colonos franceses de Canadá y los súbditos británicos de la Nueva Inglaterra o Nueva York chocaron violentamente cada vez que sus respestivos soberanos se declaraban la guerra. Inicialmente, las batallas libradas entre los colonos de las dos naciones no eran más que extensiones de conflictos de raíz europea, pero muy pronto comenzaron a surgir enfrentamientos autóctonos en la tierra norteamericana.

Franceses e ingleses se disputaron la posesión de tierras fronterizas entre Canadá y las trece colonias inglesas. Agricultores angloamericanos penetraban en territorios que los franceses consideraban suyos, y cazadores de pieles francoamericanos invadían los predios británicos. Otro motivo de pugna lo constituían los actos belicosos de los indios en la región fronteriza. De manera general, los indígenas se sentían mejor tratados por los franceses que por los ingleses, y en las luchas entre los dos países tendían a aliarse con los primeros. El carácter paternalista de la colonización francesa, con sus normas para la protección del indio y la labor humanista de los misioneros católicos (sobre todo jesuitas), atrajo a la mayor parte de las tribus algonquinas e iroquesas al bando del rey de Francia. No sólo en tiempos de guerra anglo-francesa, sino a veces también en períodos de paz entre las dos naciones, bandas indias cruzaban la frontera canadiense hacia el Sur y mataban a colonos angloamericanos. Los ingleses, a su vez, no vacilaban en aliarse con ciertas tribus —durante algún tiempo con las "seis naciones" de la Confederación Iroquesa— y azuzarlas contra los franceses de Canadá. Les suministraban armas a los salvajes guerreros y les pagaban una prima por cada cuero cabelludo arrancado a un francés.

La primera guerra que involucró a los ingleses y a los franceses de Norteamérica fue la de la Liga de Augsburgo (1689-1697). La segunda fue la Guerra de la Sucesión Española (1701-1713). Los colonos angloamericanos denominaron esos conflictos por los nombres de sus monarcas reinantes en los lapsos respectivos: "Guerra del Rey Guillermo" y "Guerra de la Reina Ana". La paz de Ryswick, de 1697, dejó intactas las fronteras existentes entre Canadá y Angloamérica. En cambio, la Paz de Utrecht, de 1713, consagró una victoria inglesa. Por dicho tratado, la Bahía de Hudson, Terranova y Nueva Escocia, fueron separadas del Canadá francés y cedidas a los ingleses.

Anglo y francoamericanos se enfrentaron de nuevo en la "Guerra del Rey Jorge" (Guerra de la Sucesión Austríaca). Ese conflicto se inició entre Prusia y Austria en 1740, y lo continuaron con su intervenciòn Inglaterra y Francia en 1744. Durante cuatro años, hasta 1748, norteamericanos de origen inglés y francés, así como los indios algonquinos e iroqueses, pelearon ferozmente.

En 1754 estalló un nuevo conflicto entre los colonos ingleses y franceses. Se trataba de la "Guerra de los Franceses e Indios", que comenzó por razones locales pero luego se confundió con la Guerra de Siete Años (1756-1763). Por el Tratado

de París, de 1763, Francia perdió todo Canadá, de manera que los dominios británicos en Norteamérica se extendieron enormemente.

El proceso de independencia norteamericano: causas y características. Norteamérica y la América Latina

Tanto la independencia de Estados Unidos como la de los países latinoamericanos se debió a que las respectivas metrópolis dominantes vulneraban los derechos y las aspiraciones económicas de los colonos. En el caso de Angloamérica, la potencia colonial pretendió levantar impuestos inconsultos que chocaban contra los intereses de la burguesía comercial de Nueva Inglaterra y de los agricultores del Sur y del medio oeste. En América Latina, los efectos económicos del colonialismo eran aún mayores y más negativos: la política mercantilista y monopolista de las metrópolis impedía el desarrollo de manufacturas nacionales y obligaba a los productores de renglones agrícolas y mineros, así como a los comerciantes, a tratar con el mundo exterior a través de un intermediario único y dominante. En ambos casos, la dependencia política constituía un obstáculo al desarrollo autónomo que aspiraban encabezar.

En el plano político, en ambos casos las fuerzas sociales dinámicas de las colonias se sentían descontentas por falta de participación, relativa o absoluta, en las decisiones que afectaban su vida y la de sus países. El grado de opresión política a que estaban sometidos era muy distinto en las dos Américas, pero el hecho fundamental de la desigualdad entre autoridades metropolitanas y locales caracterizó ambos casos. En América del Norte existían gobiernos locales y regionales con autonomía y prerrogativas considerables. En Iberoamérica, el principio del gobierno representativo se manifestó en los cabildos o ayuntamientos municipales en forma imperfecta y subordinada. Pero en ambos casos los electores —encabezados en el Norte por la burguesía y en el Sur por la aristocracia terrateniente— se sintieron humillados porque su voluntad podía ser desconocida en todo momento por los órganos superiores impuestos por la metrópoli.

El desarrollo del sentimiento nacional es otro factor que influyó en ambos procesos de liberación. Los descendientes de españoles, portugueses e ingleses —separados de sus países de origen, nacidos y formados bajo otros cielos, sobre otras tierras, desarrollando peculiaridades de idioma y de cultura—, quedaron predispuestos a la rebelión independentista, a partir del momento en que los factores económicos y políticos arriba detallados comenzaron a actuar sobre ellos.

Por último, una ideología revolucionaria recorría el mundo, e incendió con su chispa el estallido independentista tanto en Norteamérica como en la América Latina. Fue la ideología del liberalismo, del racionalismo y de la democracia, propia de la burguesía en ascenso y en lucha contra la nobleza feudal y la monarquía absoluta. Adam Smith fue su padre en el ámbito de la ciencia económica; y Montesquieu, John Locke, Diderot, los Enciclopedistas, Voltaire y Jean Jacques Rousseau, sus progenitores en el campo de la filosofía política. Los ensayos y panfletos de aquellos subversivos de entonces cruzaron los océanos y, abierta o clandestinamente, llegaron a las manos de los militantes políticos de las clases inconformes de América.

En resumen, hubo motivos generales similares pero bajo condiciones distintas. En un caso, una sociedad burguesa y liberal en rebelión contra una opresión colonial relativamente suave. En el otro, el levantamiento de una sociedad mucho más sojuzgada, dirigido por aristócratas que acogieron la ideología universal de la burguesía revolucionaria y la usaron para expresar e interpretar su lucha por la liberación política nacional.

La guerra de independencia norteamericana y la diplomacia de Franklin

Después de su victoria sobre Francia en 1763, la Gran Bretaña se tornó arrogante en extremo. Dueña de océanos y continentes lejanos, se sintió con poder para tratar imperiosamente a los pueblos, comenzando por sus propios súbditos coloniales. El rey Jorge III, hombre bondadoso pero torpe y neurótico, se rodeó de ministros conservadores que representaban los intereses de la aristocracia y de la alta burguesía inglesa y despreciaban a las clases populares. Trataron de frenar el avance constitucional hacia un mayor poder para el parlamento y menores prerrogativas reales, haciendo énfasis en el poder de la corona y tomando iniciativas no consultadas con los cuerpos deliberantes.

A partir de 1770 la corona inglesa comenzó a imponer nuevos tipos de tributación a los norteamericanos tratando, al mismo tiempo, de disminuir el poder de las legislaturas de las trece colonias y de fortalecer a sus gobernadores. Los norteamericanos, encabezados por los comerciantes yanquis de Nueva Inglaterra, reaccionaron con ira contra la violación del viejo principio constitucional inglés: "*No taxation without representation*" (nada de tributación sin representación). La Ley de Estampillas, que gravaba las transacciones comerciales, fue rechazada en forma tumultosa y rebelde por los habitantes de las trece colonias. El gobierno del rey Jorge anuló esa Ley pero en seguida dictó otra serie de leyes: las "*Intolerable Acts*", que provocaron nuevas protestas vehementes. El impuesto sobre el té (*Tea Act*) impulsó a los ciudadanos de Boston a ocupar los barcos cargados de té y arrojar la mercancía al mar, en lugar de pagar el tributo correspondiente.

Hacia comienzos de 1775 la tensión era extremadamente fuerte, y el gobierno real envió una expedición militar a Norteamérica para someter a la población insumisa. Pero los sectores liberales y rebeldes de las colonias, dirigidos por intelectuales estudiosos de *El Contrato Social* y otras obras subversivas, estuvieron vigilantes, y cuando los barcos de guerra ingleses aparecieron frente a la costa de Massachusetts, cundió la alarma. En el pueblo de Lexington, en la mañana del 20 de abril de 1775, se dio el primer combate entre milicias populares yanquis y los soldados del rey Jorge. Pocas semanas después, las trece colonias estaban alzadas y empuñaban las armas. Inicialmente, se trató de una lucha civil entre ingleses. Los colonos rebeldes —que gozaban de la simpatía de la oposición liberal en la misma Inglaterra— no tuvieron, con excepción de una reducida minoría radical, la intención de declararse independientes de la Gran Bretaña. En las colonias mismas, el sector conservador de la población apoyó la causa del rey y ayudó al ejército a combatir a los insurrectos.

La utilización por parte del gobierno inglés de mercenarios alemanes contra los colonos parece haber sido el principal factor que impulsó a éstos a la declaración de

independencia. Se sintieron rechazados definitivamente por su rey, quien mandaba a tropas extranjeras contra ellos. El bando nacionalista dejó de ser una minoría reducida para convertirse en la tendencia mayoritaria entre los liberales. El 4 de julio de 1776 el Congreso Continental, representativo de los liberales de las trece colonias, declaró la independencia de Estados Unidos en un documento solemne y hermoso, redactado por Tomás Jefferson, demócrata radical de formación rousseauniana. Aun así, la mayoría de la población norteamericana se mantuvo al margen de la lucha, en posición más o menos pasiva, y el sector conservador (*tory*) colaboró activamente con los ingleses. Como otras guerras de liberación nacional, ésta fue obra de una minoría combatiente, respaldada parcialmente por una mayoría que poco a poco se fue inclinando hacia la causa de la independencia.

Al comprender que necesitaba apoyo militar, diplomático y financiero contra el poderoso imperio inglés, el Congreso Continental encomendó al viejo Benjamin Franklin la tarea de convencer a Francia para que ayudara a los rebeldes. Los patriotas norteamericanos se basaron en la idea de que "el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo". Francia era adversaria de Inglaterra, no había olvidado la dolorosa derrota de 1763 y buscaba la ocasión para vengarse. Sin embargo, el régimen de Francia era absolutista, enemigo de las corrientes democráticas y liberales que amenazaban su propia seguridad y existencia, porque ya las ideas subversivas se manifestaban fuertemente en el seno de la intelectualidad, la burguesía y hasta en algunos sectores de la aristocracia francesa. La misión de Franklin consistió en tratar de acentuar los sentimientos antibritánicos del gobierno francés y neutralizar aquellos sectores influyentes de París, en cuyo ánimo el conservatismo predominaba sobre el deseo de golpear al arrogante Albión.

Benjamin Franklin, septuagenario lúcido y vivaz, fue el hombre más indicado para esa misión. Destacado filósofo, científico y moralista, gozaba de un altísimo prestigio en el seno de los sectores cultos de la sociedad francesa. Sobre todo los racionalistas, liberales y discípulos de Rousseau, veían en el noble anciano norteamericano la encarnación del hombre libre, natural y virtuoso, cuyos rasgos ideales habia trazado el autor de *Emilio* y *El Contrato Social.* Con astucia, aprovechando todas las relaciones sociales que tenía en París desde tiempos pasados, Franklin logró fortalecer el sentimiento antiinglés y de simpatía hacia los rebeldes norteamericanos. Beaumarchais, autor de *El barbero de Sevilla,* formó una sociedad naviera cuyo propósito era abastecer de armas y provisiones a los patriotas yanquis. El marqués de Lafayette, joven aristócrata liberal e idealista, marchó a Norteamérica para ponerse al lado del general Washington en la conducción militar del ejército revolucionario. Por fin, en 1778, la diplomacia de Franklin triunfó cabalmente: el gobierno francés firmó un tratado de alianza con el gobierno de Estados Unidos y entró en guerra contra la Gran Bretaña.

Para el año siguiente, 1779, la diplomacia norteamericana en Europa, coordinada por Franklin desde París, logró que España a su vez tomara las armas contra los ingleses, en apoyo objetivo a los intereses norteamericanos. Profundamente conservador, el gobierno español se negó a pactar con los norteamericanos o a reconocerlos siquiera: consideró que se trataba de repudiables rebeldes contra una monarquía legítima. Pero Madrid se mostró de acuerdo en pactar con París, acompañando a Francia en su guerra antiinglesa, bajo la condición de que no se firmara la paz hasta tanto España reconquistara el Peñón de Gibraltar.

Por último, en 1780, también Holanda se unió a la lucha contra Inglaterra: su deseo de perjudicar a su rival marítimo la llevó a colaborar activamente con los norteamericanos y los franceses. Ante esa coalición hostil, Inglaterra se vio impulsada, en 1782, a buscar la paz y a firmar, poco después, el Tratado de París. Por ese instrumento de 1783 Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos. Los límites exactos entre Canadá y Estados Unidos serían fijados por comisiones mixtas. Norteamérica indemnizaría a los conservadores probritánicos que habían sufrido cárcel y maltrato y cuyas propiedades habían sido confiscadas. Inglaterra, a su vez, devolvería o restituiría las propiedades norteamericanas (incluso esclavos) que sus fuerzas habían confiscado a ciudadanos patriotas. Estas últimas dos cláusulas quedaron sin cumplirse. España quedó descontenta: no recuperó su dominio sobre Gibraltar, y su aliado francés la abandonó, obligándola a firmar precipitadamente la paz para no quedar sola frente al enemigo inglés. Ante las protestas españolas, el ministro del exterior de Francia, Vergennes, señaló qué los norteamericanos habían comenzado por romper la alianza. Efectivamente, Franklin había iniciado unilateralmente las negociaciones de paz con el gobierno de Londres; este hecho no disgustó realmente a Vergennes, ya que con ello quedaba liberado de sus incómodos compromisos con el aliado español.

Política exterior de Washington, Adams, Jefferson y Madison

En 1787, Estados Unidos adoptó su Constitución —todavía vigente— y pasó así de la categoría de una confederación a la de un Estado federal. La presidencia de Jorge Washington (1789-1797) estuvo dedicada a consolidar la unión de los estados y mantener el país en paz con potencias extranjeras. Para esa época, Norteamérica era un país agrario y poco desarrollado, exportador de algodón y trigo, e importador de bienes manufacturados y de renglones agrícolas no producidos en sus propios suelos. Su balanza de pagos era deficitaria y, por encima de todo, necesitaba la paz para fortalecer su economía. Sin embargo, no todos los políticos norteamericanos estaban de acuerdo con Washington en su idea de mantener a Estados Unidos fuera de los grandes conflictos de la época. En el seno del Partido Republicano-Demócrata, dirigido por Jefferson, había una tendencia favorable a una alianza con Francia revolucionaria en su lucha con Inglaterra y las monarquías europeas tradicionales. En cambio, los federalistas de Alejandro Hamilton abogaban por la reconciliación con Gran Bretaña y la implantación de una política de imparcialidad ante los conflictos europeos.

Washington compartió sustancialmente las ideas federalistas —conservadoras en lo interno— y fue partidario de una política exterior neutralista y aislacionista. En 1796, en su mensaje de despedida, proclamó la doctrina de los dos hemisferios y del aislacionismo: así como Estados Unidos esperaba que Europa los dejaría vivir en paz, ellos mismos se abstendrían de cualquier interferencia en los asuntos del Viejo Mundo. En general, Estados Unidos debería cuidarse de suscribir tratados de alianza o convenios de cualquier tipo que le ataran las manos y lo comprometiera en alguna forma por un lapso prolongado. Esa doctrina constituyó el fundamento de la política exterior norteamericana hasta el siglo XX.

John Adams, quien sucedió a Washington de 1797 a 1801, continuó la misma

política y, particularmente, intentó resolver algunos de los problemas —fronterizos y de deudas— que quedaban pendientes con Gran Bretaña desde el Tratado de París.

Tomás Jefferson fue electo presidente de Estados Unidos en 1800, como candidato del Partido Republicano-Demócrata. Ese partido representaba a los agricultores y se oponía al predominio de los capitalistas de Nueva York, Filadelfia y Nueva Inglaterra. Era radicalmente democrático, amigo de la Revolución Francesa y adversario de Inglaterra. Pero pese a que había sido electo con un programa de política exterior favorable a una alianza revolucionaria con los franceses, en la práctica Jefferson se mostró prudente y no se apartó de la práctica washingtoniana de evitar alianzas exteriores comprometedoras.

Como representante de la población agrícola que paulatinamente migraba y se extendía hacia el Oeste, Jefferson tuvo mayor empeño que sus predecesores en hacer posible una eventual expansión de su país más allá del río Mississippi. También volvió sus ojos hacia el Sur y pensó en la posibilidad de adquirir las Floridas y la isla de Cuba, por compra o conquista de sus dueños españoles. En su expansionismo hacia el Sur, Jefferson estaba influido por los intereses de la oligarquía latifundista sureña, así como también por los de agricultores medianos, ávidos de tierras adicionales. En ese estadista existía una contradicción, propia de todo su partido: en conformidad con los intereses de los pequeños agricultores del Norte, fue demócrata consecuente pero, al mismo tiempo, el sector demócrata sureño, latifundista y esclavista, lo impulsó hacia un expansionismo que parecía contradecir sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad humanas.

El territorio de Luisiana, situado entre el río Mississippi y las Montañas Rocosas, había sido tomado en posesión por Francia al mismo tiempo que Canadá. En 1763, después de la derrota sufrida a manos de Inglaterra, Francia cedió Luisiana a su aliado, España, en compensación por los sacrificios hechos durante el conflicto por los Borbones de Madrid. El territorio en su mayor parte estaba inexplorado, pero su importancia estribaba en que incluía al río Mississippi y la ciudad de Nueva Orleans, gran puerto sobre el Golfo de México. Los españoles ejercieron control sobre el Mississippi y cobraron derechos de peaje, onerosos para los agricultores angloamericanos del medio oeste y del Sur, cuyos productos bajaban por vía fluvial hasta Nueva Orleans, y de allí eran embarcados con destino a Europa y las Antillas.

En 1800 Napoleón, primer cónsul de la República Francesa, concibió la idea de implantar una vasta zona de influencia de Francia en el continente americano y las Antillas. La isla de Santo Domingo o La Española sería el centro principal, y la vasta Luisiana, en caso de pasar nuevamente a manos de Francia, constituiría una base futura para la producción de cereales y otros bienes de alimentación. Por ello, el primer cónsul pidió a España la devolución de Luisiana, ofreciendo a cambio de ello la provincia de Toscana, en Italia septentrional. España se mostró dispuesta a ceder Luisiana a su dueña anterior (por lo demás, no osaba resistir a las iniciativas de su poderoso y peligroso aliado), y el convenio correspondiente fue firmado en San Ildefonso el 1° de octubre de 1800. España exigió como condición para la ratificación del convenio que Francia prometiera no ceder Luisiana a una tercera potencia. Napoleón dio esa promesa, y en 1802 Carlos IV ordenó la entrega del territorio a Francia.

Jefferson se aterró ante la idea de que la poderosa y agresiva Francia de Napoleón pudiera instalarse en el río Mississippi y en Nueva Orleans, frenara las

actividades de los angloamericanos en esa zona, y amenazara la propia seguridad de Estados Unidos. Decidió que era imprescindible para los intereses vitales de su país que se convenciese a Francia de que vendiera a Estados Unidos por lo menos la ciudad de Nueva Orleans y las zonas circundantes. Por ello, dio instrucciones a Livingston, ministro plenipotenciario en París, y a James Monroe, enviado en misión especial, para que negociaran con el gobierno francés en los términos referidos. En caso de que Napoleón se negara tercamente a vender Luisiana, Monroe debía trasladarse a Londres y negociar un tratado de alianza con Inglaterra: si Francia implantaba su amenazante presencia en Nueva Orleans, un pacto con Inglaterra sería lo único que podría salvar y proteger a Estados Unidos. En tal caso, la Doctrina Washington dejaría de ser aplicable. Los enviados norteamericanos iniciaron sus gestiones en 1803.

Inicialmente, Monroe y Livingston encontraron a Napoleón y a Talleyrand reacios a toda idea de vender parte de Luisiana. Pero a mediados de 1803, llegó a París la noticia de la desastrosa derrota sufrida por el ejército francés a manos de los patriotas haitianos dirigidos por el general Dessalines. El propio comandante de las fuerzas francesas, general Leclerc, cuñado de Napoleón, había muerto a consecuencia de la fiebre amarilla. Apenado y airado, el gran corso abandonó súbitamente el proyecto del imperio americano de Francia, y ordenó a Talleyrand que vendiese toda la vasta Luisiana a los norteamericanos por un precio equivalente a 15 millones de dólares. Monroe y Livingston habían recibido instrucciones de comprar sólo Nueva Orleans y una parte del territorio, y ofrecer una suma máxima de 10 millones de dólares pero, ante la oferta de Talleyrand, hecha en forma perentoria, para aceptar o rechazar en bloque, resolvieron aceptar. De ese modo, Estados Unidos adquirió todos los territorios inexplorados situados más allá del Mississippi, y se les abrió la exaltante perspectiva de la conquista del Oeste.

Durante el segundo mandato de Jefferson, entre 1805 y 1809, surgieron nuevos motivos de conflicto con Gran Bretaña. Ese país, en guerra contra el continente europeo dominado por Napoleón, trataba de bloquear a su enemigo. Los barcos ingleses violaban la libertad de navegación y de comercio de potencias neutrales. En más de una ocasión, realizaron inspecciones a navíos mercantes norteamericanos, confiscaron determinadas mercancías, y llegaron incluso a secuestrar marineros norteamericanos, alegando que se trataba de desertores del servicio de Su Majestad. Estos hechos causaron una intensa irritación de la opinión pública norteamericana contra Gran Bretaña. En 1806 Jefferson dictó un embargo contra toda exportación de productos norteamericanos a los países beligerantes de Europa, pero esa medida dolió más a los propios estadounidenses que a Inglaterra y Francia, y tuvo que ser abandonada al cabo de unos seis meses. Continuaron los incidentes en alta mar, creció la furia antibritánica en Estados Unidos y poco a poco los dos países se encaminaron hacia un nuevo choque bélico.

La guerra estalló en 1812, siendo el gobierno norteamericano del presidente Madison el que la declaró. Pero Estados Unidos había sobreestimado su propia fuerza. Inglaterra estaba muy bien armada y preparada después de dos décadas de lucha contra la Revolución Francesa y contra Napoleón. Fuerzas inglesas entraron desde Canadá, barrieron las defensas yanquis, ocuparon el norte de Estados Unidos y entraron en la propia capital federal, la ciudad de Washington. Norteamérica tuvo que pedir la paz y los ingleses les ofrecieron condiciones duras: un arreglo territorial

sobre la base del *uti possidetis* militar, así como la creación de un Estado indio independiente, que sirviese de zona tapón entre Canadá y Estados Unidos.

La situación de Europa, posterior al primer Tratado de París (30 de mayo de 1814), vino a salvar a Estados Unidos de una dura derrota. El nuevo reparto que siguió al fin de la Francia napoleónica despertó una serie de intrigas que comenzaron a surgir entre los circunstanciales aliados de Gran Bretaña en Europa central.

La posibilidad de la guerra en Europa se hizo presente de nuevo, alternativa que se mantuvo durante buena parte del mes de diciembre de 1814. Gran Bretaña temió que se frustrara su plan de restablecimiento de la armonía en Europa y buscó una "paz blanda" con Estados Unidos. Esta se logró en la ciudad de Gante, el 24 de diciembre de 1814.

Así mismo, se decidió poner a trabajar a comisiones mixtas para fijar la frontera definitiva y completa, y arreglar otros problemas pendientes entre los dos países. En 1818 se firmó un tratado anglonorteamericano, por el cual se trazó una línea recta desde los grandes lagos hacia el Oeste para delimitar los territorios de Canadá y Estados Unidos. La región de Oregón, en el Lejano Oeste al norte de California, quedó sometida por el momento a un dominio angloamericano. Hubo acuerdos igualmente sobre las deudas de una parte y otra, y sobre la delimitación de las zonas pesqueras.

Comienzo de la expansión hacia el Sur

Con el inicio del siglo XIX, en Estados Unidos comenzó a desarrollarse una tendencia expansionista hacia el Sur; es decir, hacia los dominios de la corona española. Esa tendencia tenía como base económico-social el latifundio esclavista de los estados sureños de Norteamérica, así como los intereses comerciales y financieros de Nueva Orleans. La oligarquía sureña era terrófaga, deseosa de extender su dominación sobre las Floridas y la isla de Cuba. Los comerciantes y empresarios navieros de Nueva Orleans buscaban mercados, productos y puertos. Elementos populares sureños, deseosos de enriquecerse por el saqueo y la ocupación de tierras conquistadas, aportaron un poderoso apoyo a la causa expansionista. A estos intereses económico-sociales se agregaban consideraciones de índole estratégica. Los comandantes de la marina norteamericana miraban la isla de Cuba como punto de gran importancia naval. Por su ubicación geográfica, la isla domina la entrada y la salida del Atlántico al Golfo de México, y por ello afecta la seguridad de la parte sur de Estados Unidos. Como portavoz del Partido Republicano-Demócrata, que en parte reflejaba los intereses y puntos de vista de los terratenientes sureños, e igualmente como responsable de la estrategia naval de Estados Unidos, el presidente Jefferson expresó la idea, en 1805, de que tarde o temprano debía tratarse de obtener el control sobre la isla de Cuba. A partir de ese momento el afán anexionista o, por lo menos, hegemónico con respecto a Cuba, sería un factor constante en la política exterior de Estados Unidos.

Aparte del deseo de los esclavistas sureños de extender su dominación a los territorios septentrionales del imperio hispánico, existía en Estados Unidos el temor de que dichos territorios pudieran caer en manos de Inglaterra o Francia, y ser utilizados como base de agresión contra la república norteamericana. En 1808,

cuando España quedó bajo el reinado de José Bonaparte, se temió que ese monarca pudiera ceder los territorios hispanoamericanos a Francia. Por otra parte, los rebeldes contra Bonaparte, apoyados por Inglaterra, podrían ver la posibilidad de traspasar algunos de los territorios españoles de América a los británicos. Una y otra eventualidad entrañaría un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Por ello Jefferson, en 1808, expresó su "más fuerte repugnancia" ante la idea de una transferencia de las colonias españolas a otra potencia. Al seguir la misma línea de pensamiento, el Congreso de Estados Unidos adoptó en 1811 la Resolución de No Transferencia, por la cual declaró su enfática oposición a cualquier entrega de las Floridas, Cuba y México a otra potencia distinta de España. La débil dominación española no constituía para la república norteamericana ningún peligro; en cambio, la presencia de una potencia como Inglaterra en los límites meridionales de Norteamérica representaba una amenaza —o por lo menos un infranqueable obstáculo— a las aventuras expansionistas que la oligarquía de los estados del sur planeaba para el futuro.

A partir de 1810, las juntas patrióticas surgidas en los países latinoamericanos se dirigieron a Estados Unidos al mismo tiempo que a Inglaterra, con el empeño de lograr apoyo para sus aspiraciones autonomistas. Caracas, Bogotá, Buenos Aires y México fueron los primeros centros políticos hispanoamericanos en establecer contacto con Norteamérica mediante agentes especiales. La actitud de dichos agentes fue "suplicante", según Robertson. Estados Unidos no estaba en condiciones de prestar ayuda directa a los latinoamericanos en su empresa liberadora, pero sí tenían todo interés en figurar como amigos y simpatizantes de la causa latinoamericana para lograr influencia en los países insurgentes y evitar que Gran Bretaña fuese beneficiaria exclusiva de la situación. Desde 1810 la rivalidad entre Washington y Londres por la confianza de los patriotas latinoamericanos sería un factor constante.

El gobierno norteamericano envió "agentes comerciales" —cuyas verdaderas funciones eran de índole política-diplomática— a la América Latina. Robert K. Lowry, en Caracas; Joel R. Poinsett, en Buenos Aires; y otros agentes más, alentaron una orientación del movimiento independentista hacia la colaboración con Estados Unidos, y sembraron desconfianza hacia los deseos imperialistas de Gran Bretaña, encubiertos por ofrecimientos de ayuda.

A partir de 1815 Henry Clay, presidente de la Cámara de Representantes, encabezó una campaña parlamentaria y propagandística a favor del reconocimiento de los nacientes países latinoamericanos por parte del gobierno de Estados Unidos. La campaña pro reconocimiento de las colonias rebeldes gozaba de la simpatía del pueblo y fue apoyada por quienes esperaban implantar la presencia norteamericana en América Latina, así como debilitar la influencia inglesa en esa región.

Durante ese mismo período se llevó a cabo por etapas el proceso de la anexión de las Floridas a Norteamérica. La compra de Luisiana no satisfacía por sí sola los deseos de los agricultores y comerciantes al sur de Estados Unidos. Las ricas tierras de la Florida eran la continuación geográfica de Luisiana hacia el Este. Por lo demás, el que las Floridas estuviesen bajo el dominio de una potencia extranjera impedía que Estados Unidos controlara el Golfo de México en su totalidad; las Floridas en mano de una potencia hostil sería como "una pistola que apuntara sobre Nueva Orleans". Se temía que Inglaterra, aprovechando la debilidad española y su alianza

con la causa de Fernando VII, se apoderara de las Floridas y las utilizara como trampolín para atacar Estados Unidos.

Por ello Norteamérica presionó a España para que le cediera por lo menos la parte occidental de las Floridas (parte ésta que, según la tesis estadounidense, estaba incluida en Luisiana), y fue vendida por Francia a la república del Norte. España rechazó esta tesis y se negó a contemplar la cesión o venta de Florida occidental. Ante esa actitud negativa, el gobierno del presidente Madison alentó una rebelión de los colonos angloamericanos establecidos en el territorio mencionado. La rebelión ocurrió en el año de 1810. Los rebeldes victoriosos proclamaron la "República de Florida Occidental" y solicitaron su anexión a los Estados Unidos de Norteamérica, solicitud que fue acogida por el Congreso norteamericano en 1812. De inmediato prosiguieron el avance norteamericano y la infiltración de sus colonos por el resto del territorio de la Florida. En 1813 una porción adicional fue puesta bajo el control del gobierno de Washington. En 1818 John Q. Adams, secretario de Estado, propuso a España que vendiera a Estados Unidos la totalidad de la Florida. El gobierno español se declaró de acuerdo bajo la condición de que Estados Unidos: a) renunciara a toda posible reclamación sobre el territorio de Texas (había dudas en relación con Texas, pues no se sabía si formaría parte de Luisiana o de México); b) se comprometiera a no reconocer la independencia de los países hispanoamericanos.

El gobierno norteamericano se declaró dispuesto a aceptar la primera de esas exigencias, pero no la segunda. Los republicanos-demócratas y las mayorías populares insistían en el reconocimiento de la independencia latinoamericana. Adams sabía que no era posible ni conveniente ofrecer a los españoles la promesa que pedían. Y, de hecho, la cuestión de la Florida fue arreglada por la fuerza.

Desde 1817 los indios seminoles, habitantes de la Florida, habían llevado a cabo ataques contra colonos angloamericanos establecidos en el territorio, y también incursiones más allá de los límites del mismo. Se sospechaba que los indios estaban en complicidad con las autoridades españolas, apoyados y dotados de armas por agentes británicos. Por ello, en 1818 la Florida española fue invadida por una fuerza expedicionaria estadounidense, al mando de Andrew Jackson, militar, político y futuro presidente. Las instrucciones oficiales dadas a Jackson lo autorizaban para perseguir y castigar a los indígenas culpables de matanzas y saqueos, y para eliminar el peligro de nuevos ataques; después de cumplir esa misión, sus tropas debían desocupar el territorio español. Pero Jackson, apoyado por los intereses expansionistas sureños, y tal vez provisto de instrucciones secretas jamás reveladas en sus pormenores, no mantuvo su acción en los límites trazados por las órdenes oficiales. Ocupó la totalidad de la Florida y apresó al gobierno español del territorio; capturó a dos ingleses, los halló culpables de incitar a los indios y los ahorcó. La indignación inglesa y española fue grande; también el presidente James Monroe, quien parece haber ignorado las intenciones de Jackson, se mostró enojado. Se ordenó al impetuoso comandante que regresara de inmediato al territorio de Estados Unidos y rindiera cuenta de sus actos. Jackson viajó al Norte con aura de héroe, frenéticamente aclamado por grandes muchedumbres. Ante la presión popular y el apoyo de los sureños, el gobierno y los tribunales se abstuvieron de emprender cualquier acción punitiva contra él.

España entendió que no podía salvar del expansionismo norteamericano a

Tabla 2

Tabla cronológica II

1497	Juan Caboto llega a Norteamérica
1500	Primeros franceses tocan en Canadá
1583-1587	Expediciones inglesas a Norteamérica
1607	Fundación de la Colonia de Virginia
1611	Holandeses llegan a Manhattan
1620	Los "Peregrinos" desembarcan en Nueva Inglaterra
1664	Los ingleses se apoderan de Nueva Amsterdam
1689-1697	"Guerra del Rey Guillermo"
1701-1713	"Guerra de la Reina Ana"
1713	Inglaterra, por el Tratado de Utrecht, recibe la Bahía de Hudson, Terranova y Nueva Escocia
1744-1748	"Guerra del Rey Jorge"
1754-1763	"Guerra de los Franceses e Indios"
1763	Tratado de París; Inglaterra recibe Canadá
1763-1775	Soberanía inglesa. Tributación onerosa e inconsulta. Protestas norteamericanas. Influencia de la ideología liberal y democrática francesa e inglesa
1775	Comienzo de la lucha independentista
1776	Declaración de independencia
1777-1778	Acción diplomática de Franklin en París
1778	Francia entra en guerra contra Inglaterra, en apoyo a Estados Unidos
1779	España entra en guerra
1780	Holanda entra en guerra
1782	Inglaterra comienza a buscar la paz
1783	Paz de París
1787	Los Estados Unidos adoptan la Constitución Federal
1789-1796	Presidencia de Jorge Washington
1796	Mensaje de despedida de Jorge Washington
1796-1801	Presidencia de John Adams
1801-1809	Presidencia de Tomas Jefferson
1800	Napoleón obtiene la devolución de Luisiana por parte de España
1801-1802	Preocupación de Jefferson por la futura presencia francesa en Luisiana
1803	Misión de Livingston y Monroe, y compra de Luisiana
1805	Observación de Jefferson sobre necesidad de adquirir Cuba
1805-1809	Dificultades de Jefferson con Inglaterra y Francia
1806	El gran "embargo"
1808	Jefferson enuncia doctrina de no transferencia
1809-1817	Presidencia de Madison
1810	Primeros contactos entre Estados Unidos y los rebeldes hispanoamericanos
1811	Resolución de No Transferencia. Envío de "agentes comerciales" norteamericanos a la América Latina
1812-1814	Guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Paz de Gante
1815-1822	Campaña de Henry Clay pro reconocimiento de las repúblicas latinoamericanas
1810-1813-1818	Anexión de las Floridas
1817-1825	Presidencia de James Monroe
1818	Tratado entre Estados Unidos e Inglaterra
1819	Tratado Transcontinental entre Estados Unidos y España

Texas y la Florida juntas. Para garantizar por el momento la integridad de México, incluido Texas, había que ceder la Florida a Estados Unidos. Había que renunciar a la exigencia de una promesa norteamericana formal de no reconocimiento de las colonias rebeldes, y esperar a que Estados Unidos se sintiera, pese a todo, con la obligación moral de demorar ese reconocimiento. Fue sobre la base de tales razonamientos que España aceptó firmar, el 22 de febrero de 1819, el tratado Adams-Onis o Tratado Transcontinental, cuyas cláusulas fueron las siguientes:

1. Cesión de la Florida entera a Estados Unidos.
2. Demarcación de los límites occidentales de Luisiana con California, y del Norte de California a la Costa del Pacífico, con la renuncia de España a todo derecho sobre el territorio de Oregón, situado al norte de California.
3. Reconocimiento, por parte de Estados Unidos, de la soberanía española sobre Texas.
4. Cancelación, por parte del gobierno de Estados Unidos, de las deudas españolas, cuyo monto era de cinco millones de dólares.

Las cortes españolas demoraron la ratificación pidiendo una vez más el compromiso norteamericano de no reconocer la independencia de las colonias hispánicas. Adams reiteró su oposición a una promesa formal, aunque es posible que haya aceptado dar una declaración verbal en el sentido indicado (o, por lo menos, los españoles lo entendieron así). En 1821 el Tratado Transcontinental fue ratificado por ambas potencias signatarias.

Resumen

Norteamérica fue conquistada y colonizada por franceses, holandeses e ingleses. Después de la inicial expedición de Caboto que financió la corona británica, fueron los franceses quienes tomaron la iniciativa penetrando a Canadá, desde el siglo XV en adelante, y estableciendo en ese territorio su dominación basada en pautas mercantilistas y de control estatal. Los holandeses realizaron en el siglo XVII un intento de colonización en la zona hoy representada por el estado de Nueva York, pero tuvieron que entregar ese territorio a los ingleses en 1664. Gran Bretaña, por su parte, se hizo presente a través de grupos de colonos que en diversas épocas llegaron a todo lo largo de la costa oriental del actual territorio estadounidense.

Muy pronto se desarrolló una fuerte rivalidad entre los franceses de Canadá y los ingleses de las colonias situadas más al Sur. A diferencia de los franceses, los súbditos británicos se trasladaron a América en grandes números y se asentaron en el Nuevo Mundo con ánimo de permanecer allí para siempre. El relativo liberalismo de Inglaterra permitió a sus colonos un grado de iniciativa propia mucho mayor que el otorgado a los súbditos de España, Portugal o Francia, y ese hecho les ayudó a competir exitosamente con sus rivales.

Franceses e ingleses chocaron en Norteamérica produciéndose varios conflictos sangrientos. Inicialmente, éstos no fueron más que la proyección hacia América de las guerras europeas entre los reinos inglés y francés, pero en una fase posterior fueron factores autóctonos los que contribuyeron decisivamente a fomentar esos choques.

Estados Unidos nació de una revuelta anticolonial debida en gran medida a

causas similares a las que originarían algo más tarde la rebelión de las colonias españolas. La potencia británica, aunque nunca aplicara en todo su rigor las normas restrictivas y explotadoras del mercantilismo, sometió a sus dependencias americanas a un trato desigual, y sobre todo a partir de su victoria sobre Francia en 1763, se aprovechó de su inmenso poder para imponer a los colonos norteamericanos una serie de medidas tributarias inconsultas y opresivas. Ese factor de índole económica, aunado a la influencia de las grandes ideas emancipadoras universales de la segunda mitad del siglo XVIII, provocó una rebelión de las Trece Colonias a partir de 1775. Al cabo de un año, lo que había sido una rebelión de súbditos ingleses inconformes, se transformó en una guerra de independencia nacional.

La nueva nación solicitó y obtuvo el apoyo político y militar de Francia y España, y eventualmente de Holanda, en contra de la potencia británica, aprovechándose de las animosidades y rivalidades tradicionales existentes entre las mencionadas potencias. Con estos apoyos externos, los colonos insurrectos lograron conquistar su independencia en 1783. Organizado originalmente como confederación de entidades soberanas, Estados Unidos se transformó en 1787 en un Estado federal regido por una Constitución que posteriormente sirvió de modelo para muchos otros ensayos republicanos.

El presidente Washington y su sucesor John Adams, guiados por el pensamiento relativamente conservador del Partido Federalista, llevaron a cabo una política exterior prudente. Washington formuló en 1797 la doctrina de los "dos hemisferios" y del aislacionismo: la república norteamericana se mantendría al margen de alianzas y compromisos europeos de índole político-militar, a cambio de que también el viejo mundo respetara su derecho a una existencia normal y segura.

Jefferson, jefe del Partido Republicano-Demócrata, inició su gobierno en 1801. Fue representante de las mayorías rurales del interior del país. Inicialmente un demócrata revolucionario, partidario de una política exterior de agresiva solidaridad antiabsolutista, por sensatez de estadista adoptó en sus grandes líneas la doctrina de Washington. Su sucesor, Madison, continuó la misma política, pero no pudo evitar un segundo conflicto con Inglaterra, entre los años 1812 y 1814. Jefferson y Madison iniciaron la política expansionista que caracterizaría a Estados Unidos durante toda su vida nacional futura. Impulsados por intereses rurales, adquirieron el vasto territorio de Luisiana (oeste norteamericano entre el Mississippi y las Rocosas), y luego se apoderaron de las colonias españolas de las Floridas, a la vez que afirmaron su disposición a tratar de obtener la posesión de Cuba en una época posterior. La tendencia política mayoritaria, y en cierto sentido más popular y democrática, fue al mismo tiempo la primera vocera del expansionismo: ávido de tierras, el pueblo rural angloamericano estaba dispuesto a apoyar a los grandes y medianos terratenientes del Sur en la empresa de despojar a sus vecinos hispánicos.

La transición independentista (1790-1828)

La independencia de Haití

En Haití el movimiento revolucionario que culminó en la independencia se inició en 1790. La Revolución Francesa, aunque no proclamó de inmediato la libertad de los esclavos, otorgó la igualdad jurídica y política a los mulatos y los negros libertos, transformándolos en ciudadanos de la República Francesa en el mismo plano que los blancos. Pero esa resolución fue desoída por los latifundistas franceses de Haití, quienes, por decisión de su propia asamblea territorial, mantuvieron la discriminación contra los mulatos. Un conato de insurrección esclava en 1790, dirigida por Santiago Ogé, fue seguido en 1791 por un levantamiento de mulatos. Temerosos de una rebelión de los esclavos, y alentados por los comisionados de la metrópoli revolucionaria, los franceses de Haití concedieron la igualdad a los mulatos en 1792. Una comisión del gobierno, dirigida por mulatos de inspiración jacobina, quiso extender los derechos civiles a los negros libertos. Ello provocó un golpe reaccionario de los blancos. El mulato Jacobino Sonthonax prometió la libertad a los esclavos y se alzó con ellos contra la minoría blanca en 1793. En el mismo año se inició la gran guerra de las monarquías contra Francia revolucionaria. Tropas británicas desembarcaron en los puertos haitianos, mientras fuerzas españolas avanzaron desde Santo Domingo. Los principales cabecillas de la revuelta de los negros se retiraron a la parte oriental de la isla y se pusieron al servicio de España.

Entre los oficiales negros haitianos que condujeron tropas bajo mando español contra los franceses se destacó particularmente Toussaint Louverture, extraordinario militar y estadista, verdadero padre de la independencia haitiana. Toussaint tenía como metas firmes la emancipación de su pueblo y la eventual independencia de su patria. Sin embargo, su sentido político le dictaba una táctica gradualista: primero, aprovechar a los españoles contra los esclavistas franceses, luego, desechar a los españoles y conquistar la autonomía haitiana dentro del marco de la hegemonía francesa.

Al haber liberado la mayor parte de Haití con apoyo español, Toussaint firmó la paz con el bando francés liberal y democrático, y se pasó con sus tropas al ejército de Francia. Como consecuencia de ello, en la isla se debilitó la posición española. En 1795, por el Tratado de Basilea, España cedió Santo Domingo a Francia, pero se mantuvo la separación administrativa entre las dos partes de esa Antilla.

Toussaint, nombrado teniente gobernador y general en jefe de las fuerzas armadas de la independencia francesa de Santo Domingo, ejerció un poder cada vez más soberano sobre toda la isla. En 1798, Maitland, almirante inglés, trató de convencer al gobernante negro de que se desprendiera de Francia y se aliara con Gran Bretaña. A cambio de ello, se le reconocería como rey de Santo Domingo.

Toussaint Louverture rechazó el ofrecimiento. Francia, por su parte, desde 1798 trató de restablecer su control completo y efectivo sobre la isla, disminuyendo los poderes de Toussaint. Para tal efecto, azuzaron en su contra al mulato Rigaud, instalado en la parte sur de Haití. Louverture golpeó y derrotó militarmente a Rigaud en 1799 y fortaleció su propio poder, reduciendo la influencia francesa metropolitana a una mera ficción política.

Su gestión de gobernante, en materia interna, fue moderadamente liberal. Conservó las plantaciones para no destruir la economía del azúcar; quiso ordenar a los ex esclavos, convertidos en jornaleros, a continuar trabajando durante cinco años en las haciendas de sus antiguos amos. A cambio de ello los hacendados debían pagar salarios mínimos decentes. Pero ese intento de implantar una economía azucarera capitalista, basada en el trabajo libre, fracasó. Las tensiones sociales engendradas por el pasado eran demasiado fuertes y la experiencia esclavista demasiado traumatizante: como sucedió también en otras Antillas, los negros se negaron a acatar la orden de seguir trabajando bajo sus odiados opresores aunque fuera como obreros libres. Exigieron la expropiación de las plantaciones y su reparto entre los trabajadores rurales. Los hacendados, por su parte, intensificaron la tensión por su arrogancia y brutalidad. Como resultado de ello, la producción azucarera bajó catastróficamente.

Durante este período Toussaint había establecido vínculos cordiales con Estados Unidos: el gobierno del presidente John Adams, haciendo caso omiso de las objeciones de algunos esclavistas del Sur, envió barcos y víveres al gobernante haitiano, y lo alentó a liberarse cada vez más de la dominación francesa.

Napoleón miró el poder autónomo de Toussaint Louverture con creciente irritación. En 1800 el corso concibió el proyecto de establecer un imperio colonial francés en América, con la isla de Santo Domingo y el territorio de Luisiana, al oeste del Mississippi, como núcleos fundamentales. Para tal efecto negoció con España la devolución de Luisiana. En 1801 envió a Haití un ejército al mando de su cuñado, el general Leclerc. Abandonado por otros comandantes haitianos, Toussaint se vio obligado a capitular ante Leclerc en 1802. Después de prometer la libertad y una pensión de retiro al prócer haitiano, los franceses lo arrestaron traicioneramente y lo enviaron a Francia, donde murió prisionero en 1803.

Pero en Haití estallaron nuevamente todas las fuerzas de la revolución social, racial y nacional, en su forma más violenta. Con el caudillo Jean-Jacques Dessalines a la cabeza, el movimiento revolucionario negro —temeroso del restablecimiento de la esclavitud—desencadenó la guerra a muerte contra los blancos. Alrededor de 100.000 hombres combatieron bajo la bandera negra y roja de Dessalines. La fiebre amarilla ayudó a los haitianos y diezmó al ejército francés. El propio Leclerc murió víctima de la fiebre en 1802. La noticia de su muerte hizo que Napoleón, desalentado, abandonara sus planes colonialistas para América y consintiese en vender Luisiana (violando la promesa hecha a Carlos IV de España) a los enviados norteamericanos Livingston y Monroe.

El ejército francés continuó el combate bajo el mando del atroz Rochambeau pero, para fines del año 1803, acompañado de los sobrevivientes de la población civil blanca de Haití, se embarcó y abandonó la isla, totalmente derrotado por las fuerzas revolucionarias y la naturaleza hostil. El 1° de enero de 1804, Dessalines proclamó la independencia nacional de Haití.

En el transcurso de los combates, los soldados negros se apropiaron y repartieron las haciendas de los blancos. Con el reparto de las plantaciones, la exportación de azúcar decayó casi a cero, quedando el país sumido en grandes dificultades económicas. A ello se agregaron problemas políticos. Dessalines se hizo coronar emperador, pero fue derrotado y muerto en 1806. Durante su reinado había pasado por su mente la idea de invadir Estados Unidos, emancipar a los esclavos y convertir el sur de Norteamérica en un estado negro, federado con Haití. Así mismo, se interesó por el problema de la futura independencia de Hispanoamérica, y manifestó su apoyo a Francisco de Miranda.

Después de la muerte del general Dessalines, Haití quedó dividida entre un reino en el Norte y una república en el Sur. En el norte, el rey Henri Christophe implantó un régimen autoritario y estableció el trabajo obligatorio bajo disciplina colectiva. Reconstituyó las plantaciones bajo la forma de explotaciones colectivas dirigidas por el Estado, y fomentó la producción de azúcar. Lamentablemente malgastó colosales energías en la construcción de su suntuosa Ciudadela en Cabo Haitiano, y fue derrocado y muerto en 1820. En el Sur, en Puerto Príncipe, fue proclamada la república bajo la presidencia de Alejandro Petión, amigo y protector de Bolívar. Petión decretó el reparto definitivo de la tierra en parcelas individuales entre los campesinos, dando origen al grave problema del minifundismo, fenómeno que muy pronto deshizo el inicial efecto democrático de la medida y permitió la dominación del capital usurero sobre los campesinos arruinados y desesperados.

La parte hispánica de la isla fue devuelta a España por los tratados de 1814-1815, pero el gobierno de Fernando VII, ocupado en el combate contra las fuerzas de independencia en México y América del Sur, no estableció una autoridad eficaz en Santo Domingo. En 1821, por motivos vinculados a la rebelión de Riego en la madre patria, los dominicanos declararon su independencia. Ello sirvió de pretexto para que el sucesor de Petión, Jean-Pierre Boyer —quien acababa de unificar el norte y el sur de Haití bajo su autoridad única—, invadiera la parte oriental de la isla en 1821 y la anexara a la república negra. Francia reconoció la independencia de la isla de Santo Domingo, unificada bajo el mando de Boyer, en 1825.

Levantamiento e independencia de las colonias españolas

Durante la última década del siglo XVIII se intensificó el descontento de todas las clases de la sociedad criolla. El ojo acucioso del barón Alejandro de Humboldt, durante su viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, en los años de transición del siglo XVIII al XIX, notó y comprobó la vehemencia del sentimiento rebelde e inconforme en las diversas capas de la sociedad colonial.

Los terratenientes y comerciantes criollos se quejaban de la falta de libertad de empresa. Al mismo tiempo, protestaban contra las discriminaciones políticas y sociales que los colocaban en desventaja con respecto a los grupos peninsulares dominantes. Las capas medias, integradas por artesanos, pequeños comerciantes y profesionales humildes (en general, mestizos o "pardos"), abrigaban un sentimiento de rebeldía a la vez nacional y social. Los campesinos, sometidos a formas de servidumbre semifeudal, y los esclavos, constituían una gran reserva revolucionaria potencial: el ejemplo haitiano no tardó en llegar a sus oídos.

Por otra parte, Latinoamérica vibraba con ideas nuevas, llegadas desde más allá del océano. Los intelectuales, y sobre todo la juventud, rechazaban el dogmatismo, la censura y los resabios de la Inquisición. El liberalismo, el racionalismo y los ideales de la francmasonería penetraban en Hispanoamérica. La literatura subversiva o revolucionaria de Francia e Inglaterra entraba de contrabando a los países iberoamericanos y pasaba de mano en mano. El ejemplo de la Revolución en armas entusiasmaba y estimulaba.

La ocupación napoleónica de España y la rebelión del pueblo español contra el usurpador fueron detonantes directos de la rebelión en las colonias. En 1810 se constituyeron juntas patrióticas y se desconoció la autoridad de los gobiernos peninsulares en Caracas, México, Bogotá, Buenos Aires y otras capitales provinciales de América. Caracas y Buenos Aires serían luego los más importantes centros de irradiación revolucionaria patriótica. El gran movimiento de los pueblos en búsqueda de su libertad encontró a dirigentes y próceres de extraordinaria envergadura, descollando entre ellos la figura gigantesca de Bolívar.

En México, el sacerdote Miguel Hidalgo dirigió la primera ola revolucionaria, con un pronunciado contenido popular. Para 1812 Hidalgo fue derrotado y muerto, pero José María Morelos recogió la bandera de la insurrección patriótica y se colocó a la cabeza del pueblo. En 1813 convocó al primer congreso mexicano y proclamó la independencia formalmente. En 1815 Morelos perdió la vida, pero la lucha independentista continuó, siempre con la más activa participación de las clases humildes. Cuando en 1820 se supo la noticia de la revolución liberal ocurrida en España, bajo la jefatura de Riego, cambió la actitud de los sectores conservadores mexicanos ante el problema de la independencia nacional.

Mientras en España prevaleció el absolutismo tradicionalista de Fernando VII, las oligarquías latinoamericanas se sintieron respaldadas y amparadas por el poder de la corona. Pero cuando súbitamente España se convirtió en foco del detestado liberalismo, enemigo de los privilegios aristocráticos y feudales, la oligarquía criolla prefirió romper los vínculos con la madre patria y procurar que un régimen conservador y monárquico se estableciese en un México independiente. Influido por la oligarquía, el general realista Agustín Iturbide negoció un acuerdo con el comandande republicano Vicente Guerrero, para proclamar en 1821 el Plan de Iguala, que previó la independencia nacional de México bajo un signo conservador. En 1822, Iturbide fue designado emperador por un congreso dominado por la oligarquía tradicionalista.

Entre tanto, la Capitanía General de Guatemala se había mantenido bajo dominación española y al margen de la guerra independentista. Centroamérica estaba unida bajo la autoridad de Guatemala, que tendía a asfixiar las peculiaridades de las provincias más pequeñas.

En Guatemala se había implantado un sistema latifundista, basado en la abundante mano de obra agrícola que constituyen los laboriosos indios, descendientes de la civilización maya. Por ello, en la provincia dominante de la Capitanía General, la oligarquía terrateniente y el pensamiento conservador tenían su asidero más importante. Las cuatro provincias menores, menos oligárquicas y más vinculadas al mercado exterior, eran más permeables a la corriente ideológica liberal. Costa Rica representaba socialmente el extremo opuesto al de Guatemala, con una región de escasa población indígena, colonizada por descendientes de españoles

dedicados a la agricultura en explotaciones de tamaño mediano y pequeño, y con un sector latifundista relativamente débil. En el conjunto de Centroamérica, la presión conservadora, con base en Guatemala, logró ahogar los movimientos republicanos y liberales, y mantener la autoridad de la corona española. Pero en 1820 se presentó el mismo fenómeno que en México. La nueva España liberal provocó la antipatía y el temor de los terratenientes guatemaltecos; además era tentador —para los productores y comerciantes centroamericanos, al igual que para los mexicanos y los de toda Latinoamérica— el acceso al libre comercio mundial, con Gran Bretaña como socio principal. Como Iturbide, los dirigentes conservadores de Guatemala en 1821 resolvieron abrazar la causa de la independencia. Poco después, pidieron que Centroamérica fuese anexada al imperio mexicano de Agustín Iturbide; esa unión se efectuó en 1822.

Pero el imperio no duró más de 18 meses. El pueblo de México no toleró el régimen ultraconservador de Iturbide. Sus propias ambiciones y las presiones populares impulsaron a los generales de la independencia a alzarse contra el antiguo compañero de armas y a deponerlo. En 1823 fue proclamada la república.

Casi de inmediato Centroamérica resolvió cortar sus lazos con México. Los liberales, que desde el principio habían combatido la anexión al gran vecino, de pronto hallaron apoyo de los conservadores, que temían posibles iniciativas liberales de la República Mexicana. Una asamblea reunida en Guatemala proclamó la independencia de Centroamérica y, en 1824, adoptó una Constitución federal, modelada sobre la Carta Magna de los Estados Unidos de Norteamérica.

Cuba, durante la lucha por la independencia de los demás países de América, se mantuvo bajo dominación española. La gran prosperidad azucarera, estimulada por el conflicto napoleónico y luego por el debilitamiento de algunos competidores, tales como Haití, hizo que en Cuba se sintieran satisfechos con el *statu quo* colonial no sólo la oligarquía, sino igualmente los sectores medios, partícipes de la bonanza. Las corrientes políticas radicales e independentistas, inspiradas por los ideales de la Revolución Francesa y del liberalismo inglés, así como por el ejemplo de Bolívar, fueron dominadas y reprimidas por las autoridades realistas.

Cuando a partir de 1824 ya Sudamérica estaba libre, Bolívar y sus compañeros pensaron seriamente en armar una expedición para liberar a Cuba de la dominación española. En la isla, la Sociedad de Soles y Rayos de Bolívar, logia radical e independentista, promovía, mediante una propaganda ilegal pero eficaz, la emancipación de Cuba y su acercamiento a la Gran Colombia. Pero Estados Unidos, al conocer los preparativos que en 1825 se estaban haciendo en Venezuela y Nueva Granada para invadir a Cuba, se alarmaron y adoptaron una posición radicalmente opuesta a la idea. Para John Q. Adams, presidente de Estados Unidos, la liberación de Cuba por la Gran Colombia significaría la pérdida de un futuro campo de expansión norteamericana y la extensión de la influencia británica (a través de la Gran Colombia) sobre Cuba. Inglaterra, siempre inclinada a dividir para dominar, contribuyó, a su vez, a convencer a las repúblicas hispanoamericanas para que abandonaran sus planes con respecto a la liberación de Cuba.

Puerto Rico igualmente se mantuvo bajo dominación española. Cabe señalar, sin embargo, que el ambiente psicológico de la isla fue tan favorable a la causa de la emancipación hispanoamericana, que las autoridades locales, junto con los representantes de la población, se negaron rotundamente al reclutamiento de

puertorriqueños por parte de los ejércitos realistas, y manifestaron que no darían a Fernando VII ni siquiera "un solo miliciano para llevarlo a pelear contra sus hermanos los caraqueños".

En Venezuela, a raíz del desconocimiento del capitán general Vicente Emparan, el 19 de abril de 1810 una Junta Patriótica asumió el poder. Aunque dicha junta inició sus funciones en nombre de Fernando VII, desde el comienzo un grupo de radicales que aspiraban a la independencia nacional de Venezuela empezó a ejercer influencia. Como colonia económicamente muy vinculada al mercado exterior —con sus largas costas abiertas al Atlántico y al Caribe—, Venezuela estaba destinada a sentir con particular ímpetu las influencias del liberalismo y del espíritu revolucionario universales. Al cabo de un año —el 5 de julio de 1811—Venezuela declaró su independencia, impulsada por el grupo patriota radical.

En Nueva Granada el movimiento revolucionario también surgió en Bogotá y otras ciudades a partir de 1810. En la provincia una oligarquía realista se opuso inicialmente a la corriente patriota. A partir de 1813, las gestas emancipadoras de Nueva Granada y de Venezuela se entrelazaron y unieron. El esfuerzo independentista mancomunado derivó, en 1819, en la creación de la Gran Colombia, a la cual se unió Quito, donde existieron impulsos liberales e independentistas desde 1810 hasta que la liberaron las tropas del mariscal Sucre.

Perú experimentó rebeliones independentistas desde 1810 pero permaneció en manos realistas hasta 1820, cuando los ejércitos de San Martín penetran el país. Aun después de ello continuó la resistencia realista, y fue sólo en 1825 cuando, con la batalla de Ayacucho, se dio el toque final a la independencia peruana. Perú había constituido la colonia más aristocrática y más feudal del imperio español, un prestigioso y espléndido virreinato con una clase dominante satisfecha y tradicionalista, y un pueblo duramente reprimido. Algunos sectores del país aceptaron la independencia a regañadientes, como una imposición desde el exterior. El Alto Perú —Charcas, posteriormente Bolivia— proclamó su independencia separadamente del resto del antiguo virreinato, el 6 de agosto de 1825.

En Chile existió una junta patriótica que apoyaba la independencia desde 1812, y que en 1814 negoció un acuerdo con los realistas, bajo mediación inglesa. El acuerdo fue repudiado tanto por los patriotas chilenos como por el virrey de Perú, y la nación chilena batalló por su independencia en dura lucha, a partir de 1816, bajo la dirección de Bernardo O'Higgins, quien recibió el apoyo militar de San Martín.

Argentina constituyó un foco fundamental del movimiento de independencia latinoamericano. En 1806 una fuerza expedicionaria inglesa, comandada por el almirante Sir Home Popham y el general William Beresford, ocupó Buenos Aires, tratando de levantar al pueblo argentino contra el rey de España (en aquel momento aliado de Napoleón y adversario de Gran Bretaña). Pero los ingleses fueron repelidos por el pueblo bonaerense (en cuyo seno crecía el afán de libertad pero que no estaba dispuesto a aceptar una emancipación impuesta por armas extranjeras). Sólo en 1810 Buenos Aires y otras provincias rioplatenses se alzaron contra el poder español. Esta vez la rebelión fue fuerte y decidida. En Buenos Aires una cohorte de hombres patrióticos ascendió al poder y comenzó a marcar el destino de la nación argentina. En 1816 se declaró la independencia definitiva de Argentina por parte del Congreso de Tucumán. Ya los ejércitos de San Martín habían liberado el país y se encontraban en Chile, en avance hacia Perú.

Entre las provincias del Río de la Plata, Paraguay poseía una raíz propia desde la etapa colonial. La población india guaraní imprimió a la nación paraguaya características étnicas y culturales que la diferencian de sus vecinos. Durante el siglo XVIII el país tuvo experiencias importantes. A principios de ese siglo surgió en los centros urbanos y en zonas rurales vinculadas a las corrientes del comercio un importante movimiento de comuneros, precursores de la democracia y de la conciencia nacional independiente. Por otra parte, las zonas de fuerte población indígena fueron objeto del interesante ensayo socialista de los padres jesuitas: esbozo de una República de Platón o de un Reino de Dios sobre la tierra, con propiedad común del agro y otros medios de producción, y la aplicación del principio "a cada quien según su trabajo". La expulsión de los jesuitas de los dominios del rey de España en 1776 derivó en la brutal ocupación de las tierras indígenas y en la esclavización de los indios paraguayos por parte de los terratenientes pero, junto con el recuerdo de la rebelión de los comuneros, quedó grabada en la mente del pueblo el recuerdo de la justicia social y la autarquía económica implantadas por los jesuitas. Cuando en 1810-1811 Paraguay sintió los vientos de la rebelión hispanoamericana, su autoafirmación nacional tuvo un carácter específico, distinto del que ese proceso revistió en otras partes del continente. La declaración de independencia paraguaya —la primera de toda Hispanoamérica— se dio en mayo de 1811, bajo la jefatura del doctor Gaspar Rodríguez Francia, quien asumió el mando político del país con el apoyo de las capas medias y populares. Hasta su muerte, en 1840, Rodríguez Francia presidió un régimen nacionalista con aspiraciones de autarquía económica, manteniéndose al margen de las relaciones internacionales de los demás pueblos latinoamericanos.

En Uruguay, o Banda Oriental, un primer impulso hacia la independencia fue dado desde fuera por la intervención inglesa en 1807. Después de su fracaso en Buenos Aires, los británicos se atrincheraron en Montevideo y, desde allí, trataron de sublevar a la América Latina contra el rey de España. Al igual que los bonaerenses, el pueblo uruguayo rechazó a los invasores y se mantuvo leal a las autoridades españolas. Sin embargo, en 1810 la Banda Oriental se alzó, bajo la jefatura de José Artigas, patriota vinculado a la población rural. Ocupado por las fuerzas de la monarquía luso-brasileña en 1811 y, nuevamente, en 1817, anexado a Brasil desde esa fecha hasta 1824, Uruguay tardó en adquirir su independencia. Esta se logró en 1828, por voluntad y conforme a los intereses de la potencia británica mediadora entre Brasil y Argentina.

Brasil

La independencia de Brasil se realizó por una vía distinta a la que siguieron los países de habla española. En 1807 don Juan de Braganza, regente de Portugal, se trasladó de Europa a Brasil para escapar de Napoleón, quien había invadido y ocupado el reino portugués. Don Juan estableció un gobierno eficaz en la vasta posesión americana de su país. Brasil fue del gusto del príncipe, quien decidió permanecer allí, en vez de retornar a Portugal, aun después de la caída de Napoleón. Su labor en materia administrativa fue beneficiosa para la nación brasileña, ya que creó los mecanismos adecuados para mantener unido y coordinado el enorme país.

En materia de política exterior, don Juan se sintió obligado a defender el principio de la legitimidad monárquica y a intervenir represivamente contra ciertos movimientos independentistas y republicanos de territorios hispánicos. Al mismo tiempo, esa política intervencionista respondió a los intereses de las clases dominantes brasileñas, deseosas de extender sus posesiones territoriales.

La española Carlota Joaquina de Borbón, esposa de don Juan, actuó por iniciativa propia al anunciar su intención de asumir la regencia sobre Hispanoamérica, en nombre de la sucesión legítima, una vez que Napoleón había impuesto en España la monarquía usurpadora de José Bonaparte. Carlota acudió directamente a los ingleses y pidió el apoyo de la escuadra de Sir Sidney Smith para ocupar Uruguay en nombre de los Borbones de España. Pero la Gran Bretaña, junto con don Juan, se opuso al proyecto, y contribuyó a contrarrestar los proyectos y las intrigas de la ambiciosa mujer. El propio don Juan estaba dispuesto a intervenir contra los movimientos revolucionarios latinoamericanos, pero no a dejarse envolver por su esposa en un proyecto de virtual anexión de toda la porción hispánica del continente. En cuanto a los ingleses, su interés económico y político les dictaba la conveniencia de impedir la constitución de un poder unificado en la América Latina. El expansionismo comercial británico derivaría en mayor provecho de la existencia de varios núcleos políticos latinoamericanos, relativamente débiles, y no en la creación de un solo centro de decisión, con la eventual capacidad de oponerse eficazmente a los designios de la gran potencia mercantil.

En 1815 don Juan elevó Brasil a la categoría de reino y le otorgó la igualdad jurídica del propio Portugal. Con ello dio satisfacción a los anhelos de los terratenientes y comerciantes del país, a la vez que acalló los reclamos autonomistas de los liberales. En 1818, luego de la muerte de su madre, don Juan asumió la corona del Reino Unido de Portugal, Brasil y los Algarves. En esa época, el jefe de la diplomacia inglesa, Castlereagh, trató de convencer al nuevo rey de que regresara a Lisboa para mantener y estabilizar el orden en Portugal, pero don Juan rechazó la sugerencia y optó por permanecer en Brasil.

En 1816 las tropas brasileñas penetraron en Uruguay (Banda Oriental) para reprimir las fuerzas rebeldes de Artigas. Este había contado con el apoyo de las demás provincias del Río de la Plata, pero en 1816 el gobierno unitario argentino, presidido por Pueyrredón como director supremo, asumió una actitud hostil hacia el caudillo uruguayo, quien quedó abandonado, dejando libre a Brasil para intervenir contra él. Gran Bretaña, a su vez, se sintió complacida por el sometimiento de Artigas, cuyo nacionalismo constituía un obstáculo potencial para la libre penetración de las mercancías inglesas. Cuando en 1819 Pueyrredón fue derrocado y Argentina volvió a una estructura confederal, ya Uruguay estaba firmemente ocupado por los brasileños.

La independencia de Brasil se produjo en 1822, después de que Juan VI aceptara, finalmente, trasladarse a Lisboa para jurar fidelidad a los principios de la Constitución que los liberales portugueses, llegados al poder en 1820, habían elaborado. Inicialmente, Juan no quiso viajar sino que ofreció enviar a Lisboa a su hijo, don Pedro. Las Cortes portuguesas insistieron en que Juan arreglara el asunto personalmente; en Brasil mismo los liberales ejercieron presiones para que el rey compareciera ante los representantes del pueblo luso, y que él manifestara su aceptación de los principios constitucionales. Bajo esa presión, don Juan salió para

el Viejo Mundo, dejando al príncipe Pedro como regente de Brasil durante su ausencia. Pronto llegaron noticias preocupantes: las Cortes portuguesas, estimando que la libertad debía otorgarse a nivel individual a todos los ciudadanos del reino —eliminándose a cambio de ello los fueros regionales—, tenían la intención de despojar a Brasil de su condición autónoma para someterlo nuevamente al gobierno de la metrópoli. Esto provocó la oposición tanto de los liberales como de los conservadores. Los primeros vieron en el centralismo de las Cortes una violación de la libertad y del respeto a la personalidad de todas las partes del reino. Los segundos rechazaron el liberalismo de las Cortes portuguesas; temían que un mayor control por parte de los reformistas de Lisboa representara un peligro para los privilegios de los terratenientes de Brasil. Por presión conjunta de los sectores liberales y conservadores mencionados, el regente Pedro aceptó, el 7 de septiembre de 1822, dar el "grito de Ypiranga" y proclamar la independencia del país. Pedro reconoció la inevitabilidad de la independencia y, al abandonar la causa de su padre y aceptar el título de Emperador de Brasil que los patriotas le ofrecían, pensó salvar por lo menos el principio monárquico y la continuidad de los Braganza como familia reinante en Río de Janeiro y Lisboa.

Relaciones entre los nuevos países

Las luchas por la independencia latinoamericana provocaron inevitables problemas y diferencias entre los diversos países que estaban surgiendo a la vida soberana.

Ya hemos mencionado las relaciones entre México y América Central. Esta Capitanía General se había liberado de la dominación española sólo en 1821, bajo la jefatura fundamental de los conservadores de Guatemala. En vista de que en el vecino México se establecía en aquellos momentos la dictadura y luego la monarquía de Agustín Iturbide, los conservadores centroamericanos promovieron la anexión de su país al imperio mexicano. En 1823, al proclamarse la república en México, la oligarquía guatemalteca resolvió independizarse y se unió a los liberales contra la dominación mexicana. Para 1824 las Provincias Unidas de Centroamérica adoptaron su Constitución federal. Como herencia del breve período de anexión a México quedó en el ánimo de los centroamericanos cierta prevención contra su fuerte vecino del Norte. México a lo largo de su historia independiente ha representado para los centroamericanos un foco de atracción en muchos aspectos, pero al mismo tiempo también aparece como un "coloso" potencialmente absorbente.

En América del Sur, el proceso independentista provocó un enfrentamiento ideológico y diplomático entre los dos libertadores, Bolívar y San Martín. Estos dos grandes hombres encarnaban dos concepciones distintas del porvenir de la América Latina. Ambos se inspiraron en las ideas universales del liberalismo. Con todo, la formación intelectual de Bolívar, a través de Simón Rodríguez, fue más rousseauniana, más democrática que la de San Martín. El libertador argentino concebía la libertad de los pueblos según los patrones de la masonería británica; su espíritu revolucionario era menos radical que el del venezolano. Mientras Bolívar insistía en el republicanismo y en la ruptura integral con todo poder político del Viejo Mundo,

San Martín aceptaba la fórmula de la monarquía constitucional posiblemente con príncipes salidos de dinastías europeas. Tanto Bolívar como San Martín eran partidarios de la alianza con Gran Bretaña al aceptar a esa potencia como el futuro socio comercial más importante; pero el prócer argentino se inclinaba más que el venezolano a escuchar los consejos del Foreign Office con respecto a la estructura política futura de la América Latina. Por último, en el plano personal, las ambiciones de Bolívar chocaban con las de la dirección política y militar argentina.

Los ejércitos conducidos por los dos libertadores avanzaron simultáneamente, en direcciones opuestas, y se encontraron en la frontera norte de Perú en 1822. Las fuerzas bolivarianas habían liberado la provincia de Quito y las de San Martín se encontraban en tierras peruanas. Se planteaba entre los dos libertadores el problema del porvenir de Guayaquil —¿Perú o Colombia?—, además del interrogante sobre la futura fórmula constitucional de los países liberados: ¿monarquía constitucional (conforme al anhelo de los ingleses) o régimen republicano?

Bolívar invitó a San Martín a la entrevista de Guayaquil que se realizó el día 26 de julio de 1822. Son desconocidos muchos pormenores de la conversación que sostuvieron los dos grandes hombres. Sabemos que, como resultado de ella, el general San Martín se inclinó ante las tesis bolivarianas en casi todos los aspectos. Guayaquil quedó incluida en la Gran Colombia. Las fuerzas de San Martín se retiraron de Perú y lo dejaron en el ámbito de influencia de Bolívar. El principio republicano —en el cual insistía el héroe caraqueño— fue aplicado a todos los países hispanoamericanos liberados. El libertador argentino se retiró al poco tiempo de la vida pública y partió al extranjero. Lo asombroso es que una retirada tan importante de un prestigioso estadista y conductor de ejércitos ante otro se haya realizado sin conflicto aparente, sin amenazas de guerra civil y sin que se haya manifestado posteriormente en el pensamiento de San Martín ningún resentimiento hacia Simón Bolívar (sus presuntas quejas antibolivarianas son apócrifas). Tal conducta sólo es comprensible si se considera que la época era de grandeza en todos los órdenes, y que eso se reflejó en el ánimo de los libertadores.

Por último, el proceso independentista suscitó diferencias importantes entre Brasil y las provincias del Río de la Plata. La ocupación y anexión de la Banda Oriental (Uruguay), incorporada a Brasil como "provincia cisplatina", no fue aceptada por el pueblo argentino ni tampoco por sus dirigentes patrióticos. El conflicto brasileño-argentino estalló a raíz del desembarco de los treinta y tres patriotas uruguayos en 1825 y la declaración de la independencia de Uruguay en agosto de ese mismo año. Buenos Aires y otras provincias argentinas acudieron en ayuda de los patriotas uruguayos contra las fuerzas imperiales brasileñas. Las armas argentinas demostraron su superioridad sobre las brasileñas, pero la corte de Río de Janeiro empleó la diplomacia para impedir que la Banda Oriental fuese incorporada a las provincias del Plata. A tal fin, los brasileños movilizaron a los ingleses, interesados en controlar la salida del Río de la Plata y en impedir que Uruguay formase parte del conjunto geopolítico, vasto y difícil de dominar, que constituía la ascendente nación argentina. La mediación británica, aceptada por brasileños y argentinos, promovió la fórmula de la independencia de Uruguay, suscribiéndose el correspondiente convenio en 1828. El arreglo beneficiaba los intereses imperiales de Gran Bretaña, ya que un Uruguay independiente y débil constituía un punto fácilmente penetrable, y era además una amenaza de discordia permanente entre dos

grandes países que de este modo difícilmente llegarían a unificar sus políticas frente a la potencia inglesa. Lord Ponsonby, el mediador británico, lo expresó en términos más benévolos: "Hemos metido", dijo, "un pedazo de algodón entre dos cristales" (Delgado de Carvalho, 1959, p. 60).

Latinoamérica frente al mundo exterior

El proceso de independencia latinoamericana se enmarca en la historia general de la época de la Revolución Francesa, de Napoleón y de la Restauración. Al mismo tiempo, constituye un episodio dentro de la pugna de los imperios europeos por la posesión de factorías y mercados ultramarinos. El descontento de las aristocracias y los pueblos de Latinoamérica ante la dominación colonial española y portuguesa se vio influido y estimulado por la gran corriente de la revolución liberal burguesa. Por otra parte, las ambiciones comerciales de Gran Bretaña en pleno desarrollo industrial hicieron de esa potencia el principal actor externo en el desenvolvimiento de la lucha independentista hispanoamericana.

Los esfuerzos de Gran Bretaña —así como de Holanda y Francia— por penetrar comercialmente en los imperios español y portugués, ya han sido señalados en un capítulo anterior. Para fines del siglo XVIII Inglaterra había logrado una parte de sus aspiraciones: tenía un asidero en las Antillas y participaba en algunos aspectos del comercio con las colonias españolas, pero todavía quedaba por realizar el objetivo de la penetración económica directa en todo el vasto continente sudamericano. La revolución industrial, que se inició alrededor de 1770, dio impulso al expansionismo económico británico. El auge de la industria manufacturera británica durante la época del bloqueo napoleónico intensificó esa tendencia expansionista y la transformó en "imperialismo liberal".

Los sectores dirigentes de las colonias, por su parte, deseaban la abolición del monopolio hispano-portugués y la posibilidad de tener, a su vez, libre acceso al mercado mundial —sobre todo inglés— sin tener que pasar por los canales monopolistas ibéricos. En las regiones iberoamericanas más estrechamente vinculadas al mercado exterior esa aspiración era más fuerte, mientras el conservadurismo realista predominaba en aquellas zonas donde las condiciones eran las de una economía cerrada, feudal o semifeudal. En las regiones donde existía mayor relación económica con el mundo exterior también estaban dadas las condiciones para una mayor flexibilidad ideológica y para la acogida de ideas progresistas de vigencia universal. Las capas terratenientes vinculadas al capitalismo internacional, así como los sectores comerciales criollos, llegaron a aceptar los principios del liberalismo inglés y de la Revolución Francesa en la medida en que esas ideas pudieran servir como armas contra el realismo opresor y que no se planteara su aplicación plena en el futuro orden interno de las colonias emancipadas. Así como hoy algunos grupos nacionalistas burgueses del Tercer Mundo se dicen "socialistas", sin tener la intención de implantar un socialismo auténtico en sus países, los aristócratas y los grandes comerciantes de la época de la independencia latinoamericana se declaraban "liberales" sin serlo en sus relaciones con las clases populares de su propio medio. En ambos casos, la ideología progresista sirve como arma contra el opresor foráneo, pero no como guía para la reorganización social interna.

De todas maneras, por su impacto ideológico —además del económico y político práctico—, los modelos que tuvieron importancia para los patriotas de la América Latina fueron el inglés, el francés y el norteamericano. La monarquía constitucional y el parlamentarismo británicos, la doctrina de Rousseau, la Revolución Francesa y la práctica democrática de Washington y Jefferson, así como las enseñanzas de la masonería, constituyeron los principales elementos que, unidos al interés económico, inspiraron a los dirigentes de la independencia.

La Revolución Francesa iniciada en 1789 pronto provocó una guerra general en Europa. En 1792, Austria, Prusia e Inglaterra empuñaron las armas contra la causa libertadora del pueblo francés. A partir de 1796 España se vio obligada a acompañar a Francia: bajo presión del país revolucionario de Europa, la monarquía conservadora hispánica tuvo que aliarse con él. Así, Inglaterra tuvo como adversarios no sólo a Francia sino también a España, aprovechando la ocasión para apoderarse de Trinidad en 1797 y para incitar movimientos americanos de rebelión, principalmente el de Gual y España en Venezuela.

Los años comprendidos entre 1801 y 1804 fueron de tregua entre Francia y el resto de Europa. Napoleón Bonaparte, cuya estrella surgió vertiginosamente a partir de 1797, y quien tomó el poder como Primer Cónsul en 1799, organizó y consolidó al Estado moderno en Francia. En 1803, al meditar sobre el modelo del nuevo Estado que quería, el gran corso se decidió a favor del camino imperial. Como árbitro entre la gran burguesía moderada y el pueblo jacobino, Napoleón sería emperador de allí en adelante e identificaría el destino de Francia con el de su propia persona.

La guerra de Napoleón contra Inglaterra y la coalición antifrancesa recomenzó a principios de 1804. España, aliada de Napoleón, declaró ese mismo año la guerra a los ingleses; éstos de algún modo la habían provocado con sus intenciones de intervenir bajo cualquier pretexto en América Latina. Para ello Inglaterra tuvo un valioso aliado en la persona de Francisco de Miranda, establecido en Londres. El Precursor había cultivado la amistad de William Pitt el joven, primer ministro del rey, así como también la de empresarios y comerciantes como Turnbull, y directivos del almirantazgo como Sir Home Popham. En 1804, Miranda y Popham elaboraron planes para atacar el imperio español en Venezuela, Buenos Aires, Lima, Panamá y Valparaíso. Los dirigentes ingleses aseguraron a Miranda que no anexarían ni retendrían ninguna porción del territorio americano arrebatado a España, sino que se conformarían con la libertad para comerciar con el continente. Pitt y Miranda se pusieron de acuerdo: tan pronto como España volviese a estar oficialmente en guerra con Gran Bretaña se realizaría la empresa propuesta por el Precursor.

Pero el zar de Rusia, aliado de Inglaterra, instó a esa potencia a que tratase de reconciliarse con España para llevarla al campo antinapoleónico. Para complacer al zar, Pitt aplazó su plan de ayudar a Miranda, por lo cual éste se decepcionó y viajó a Estados Unidos en busca de un respaldo más efectivo. En ningún momento pensó Miranda en la posibilidad de volverse hacia Napoleón; la persecución sufrida en 1793 a manos de los jacobinos lo había confirmado en su inclinación hacia el liberalismo moderado de tipo británico: en su primera estadía en Estados Unidos, expresó ante Adams y Hamilton el temor de que en el mundo pudiese triunfar "el abominable sistema de Francia".

En 1805 el gran combate europeo trajo victorias de una y otra parte. En Trafalgar, Lord Nelson destruyó el poderío naval napoleónico, y deshizo todo

peligro de invasión a las islas británicas. Al mismo tiempo, ese triunfo inglés perjudicó las comunicaciones entre España y sus posesiones americanas, y abrió mayores posibilidades de acción británica en América. Pero el año se cerró con el arrollador triunfo de Napoleón en Austerlitz: la Tercera Coalición fue derrotada; sus integrantes continentales quedaron golpeados y dispuestos a buscar la paz con el corso. La cadena de victorias napoleónicas continuó, culminando con la batalla de Jena en octubre de 1806. El emperador dominaba el continente mientras Inglaterra quedaba sola.

Sin perder el ánimo, Gran Bretaña se esforzó durante 1806 y 1807 en provocar insurrecciones latinoamericanas contra España, a la vez que en Europa aplicaba un contrabloqueo al sistema continental creado por Napoleón. Sin embargo, la muerte de Pitt en enero de 1806 y la naturaleza más vacilante de su sucesor Grenville hizo que Miranda dejara de recibir el pleno apoyo que ya se le había prometido. El Precursor había zarpado de Estados Unidos, en el barco Leander, con ayuda norteamericana limitada, hacia Barbados, donde el almirante inglés Lord Thomas Alexander Cochrane estaba comprometido con darle ayuda militar y naval, activa y directa. Confiando en esa ayuda, Miranda desembarcó en Venezuela, en la costa de Coro. Pero de pronto falló la parte inglesa: Grenville estimó que una acción directa de Cochrane haría fracasar su política de "ablandamiento" de España y le ordenó que retirara su apoyo al prócer venezolano.

No obstante esta prudencia del gobierno inglés, los medios mercantiles del país siguieron presionando en favor de una política audaz de penetración en Hispanoamérica y lograron que el almirante Sir Home Popham y el coronel Beresford navegaran del Cabo de la Buena Esperanza (que habían tomado meses antes) hacia Sudamérica, con el fin de ocupar Buenos Aires, Montevideo y el estuario del Río de la Plata. Popham esperaba que los argentinos acogieran a los ingleses como amigos y aliados para una lucha liberadora contra España. En junio de 1806 la escuadra de Popham llegó a Buenos Aires y capturó la ciudad; el virrey Sobremonte huyó sin pelear. Durante dos meses, Popham y Beresford gobernaron Buenos Aires, decretaron la abolición de la Inquisición y la vigencia de la libertad de conciencia, y llamaron a los habitantes de Hispanoamérica a alzarse contra el rey de España. Pero descubrieron —como lo hizo Napoleón en la península ibérica— que desde fuera no se puede imponer el progreso a un pueblo en contra de su voluntad. Fue demasiado evidente, por otra parte, la codicia mercantil que inspiraba la política inglesa. En agosto de 1806 los porteños se alzaron contra los invasores ingleses, bajo la jefatura de Santiago Liniers, argentino de clase media, de origen francés. Popham tuvo que retirarse precipitadamente de Buenos Aires y Beresford cayó en manos de los insurgentes. Para salvar su prestigio el gobierno inglés decidió atacar de nuevo. En enero de 1807 una expedición naval británica capturó Montevideo, mientras el general Whitelocke sitió Buenos Aires. Ante la tenaz y exitosa defensa porteña, los ingleses aceptaron retirarse del Río de la Plata a cambio de la libertad de Beresford. De esta manera fracasó el intento inglés de intervención armada directa en Latinoamérica. Sin embargo, a mediano plazo, lo sucedido ayudó a la causa inglesa: la lucha exitosa de los porteños contra un invasor extranjero fortaleció el sentimiento nacional argentino que, de un modo inevitable, en lo sucesivo iría dirigido contra España y objetivamente en favor de los intereses comerciales y políticos británicos.

Miranda, no obstante la decepción sufrida en 1806, regresó a Londres en 1807. Sus amigos ingleses lo habían llamado, confiados en la posibilidad de una futura alianza general entre la potencia británica y las fuerzas rebeldes de América Latina. Efectivamente, en 1808 parecía acercarse una fase de acción conjunta entre ingleses y eventuales independentistas contra el poder español, ahora ejercido por el usurpador José Bonaparte. La imposición de "Pepe Botellas" provocó el levantamiento del pueblo de España contra el nuevo rey y contra los franceses. Los rebeldes españoles, partidarios de la sucesión de Fernando VII, se declararon aliados de Gran Bretaña. Igual consigna adoptarían pronto en Hispanoamérica los elementos opuestos al orden existente.

En 1809 Napoleón concibió la idea de contrarrestar la penetración inglesa en Latinoamérica. Ante la rebelión del pueblo español, en nombre de Fernando VII contra José Bonaparte, el emperador decidió movilizar a los hispanoamericanos en favor de José y de Francia mediante la promesa de la independencia. Sin consultar a su hermano José, quien se oponía al otorgamiento de la independencia a las colonias, Napoleón envió agentes a Hispanoamérica, con el encargo de fomentar la idea de una soberanía nacional bajo protección e influencia francesas. De ese modo, la causa bonapartista tendría de su parte a los americanos contra Fernando VII. Al mismo tiempo, Francia ganaría acceso a los mercados del Nuevo Mundo y cerraría el camino a su enemigo británico.

Esa iniciativa se saldó con un fracaso. Napoleón, conocido por su despotismo creciente y sus arbitrariedades, no convenció a los liberales de Hispanoamérica. Ante la actitud fría de patriotas y liberales latinoamericanos, Napoleón retiró a sus agentes y abandonó su segundo plan para establecer la presencia francesa en América Latina.

Fue Inglaterra la que logró en 1809 ganar la confianza tanto de los antibonapartistas españoles como de los patriotas y liberales de Hispanoamérica. Se firmó en ese año un tratado por el cual Inglaterra reconoció a la Junta de Sevilla como legítimo gobierno de España. Sir Arthur Wellesley trató de presionar a la Junta para que concediera a los ingleses la libertad de comercio en América Latina. A tal fin, utilizó a Miranda como medio de chantaje: si la Junta no cedía, Londres podría optar por apoyar al combativo y peligroso venezolano. Pese a este chantaje, la Junta de Sevilla no se comprometió en el sentido deseado por los ingleses.

En 1810, al estallar la rebelión hispanoamericana, cada uno de los focos insurreccionales se apresuró a buscar contactos con el mundo exterior para conseguir asistencia. Ya descartada la posibilidad del apoyo napoleónico, los rebeldes latinoamericanos pudieron elegir entre una orientación preferente hacia Inglaterra o hacia Estados Unidos. Ambas potencias compitieron por el favor de las juntas patrióticas hispanoamericanas, mediante el envío de agentes político-comerciales.

En 1811 el Congreso norteamericano adoptó la Resolución de No Transferencia, con miras a contrarrestar cualquier posible intento, por parte de España, de ceder sus colonias a Francia o a Inglaterra. Desde 1816 en adelante la corriente política encabezada por Henry Clay favorecía en Norteamérica el reconocimiento de los nacientes Estados independientes latinoamericanos. Esos gestos de apoyo político le granjeó algunas simpatías latinoamericanas a Estados Unidos. Para los teóricos radicales de América Latina, Estados Unidos ofrecía la atracción de un sistema de gobierno republicano, mientras que Gran Bretaña representaba la máxima potencia

económica y naval del mundo, cuyos intereses coincidían en gran medida con los de las clases terratenientes y comerciales latinoamericanas. Inglaterra, como gran potencia, podía prestar un apoyo más eficaz que Estados Unidos, país débil y poco desarrollado; por ello era evidente la conveniencia, para los patriotas de Latinoamérica, de orientar sus principales esfuerzos diplomáticos hacia Londres.

Sir Arthur Wellesley, secretario de Relaciones Exteriores desde fines de 1809, recibió la visita en 1810 de una misión de la Junta Patriótica de Caracas, integrada por Simón Bolívar y Luis López Méndez, acompañados y asistidos por Andrés Bello. Bolívar, jefe y portavoz de la misión, representaba dentro del conjunto de los patriotas venezolanos la corriente más radical, partidaria de la separación completa de la metrópoli española. Con franqueza, Bolívar planteó ante Wellesley la tesis de un apoyo y una protección sin reservas por parte de Gran Bretaña, para lograr la ruptura de los lazos de dependencia entre España e Hispanoamérica.

El secretario del Foreign Office desplegó toda su capacidad diplomática para lograr que Bolívar aceptase, por el momento, una fórmula más moderada. Londres apoyaría totalmente a los hispanoamericanos en sus exigencias económicas, coincidentes con los intereses comerciales de los ingleses. En cuanto al aspecto político, no era posible por el momento un apoyo a la independencia latinoamericana. Inglaterra era aliada de la Junta de Sevilla contra Napoleón y no podía colocarse abiertamente al lado de fuerzas radicalmente adversas a su aliado. La fórmula que Wellesley recomendó a los venezolanos fue la de la autonomía limitada, en lugar de la independencia completa. Inglaterra estaría dispuesta a servir de mediadora entre España y los latinoamericanos para tratar de lograr que aquélla concediera a éstos una autonomía política amplia, acompañada de la total libertad comercial. Bolívar y López Méndez tomaron nota con beneplácito de la disposición inglesa: brindar apoyo limitado al movimiento latinoamericano de emancipación; pero lamentaron que ese apoyo no fuese irrestricto.

En ese mismo año (1810), un factor de apoyo a las aspiraciones inglesas en Latinoamérica lo constituyó el tratado comercial suscrito entre Gran Bretaña y el reino portugués. Don Juan, por dicho instrumento, otorgó a Gran Bretaña una irrestricta libertad de comercio con Brasil y le concedió la cláusula de la nación más favorecida. A partir de este momento, Brasil quedó convertido en un virtual protectorado de Inglaterra en el terreno económico. Poco después, don Juan invadió Uruguay para reprimir el movimiento independentista y nacionalista de Artigas. Inglaterra no dio su consentimiento a esa invasión, aunque era conveniente para los intereses británicos: Artigas era nacionalista en lo económico y promovió el desarrollo de la provincia uruguaya con autonomía frente al mundo exterior. Sin embargo, la aparente aprobación inglesa al golpe brasileño contra Artigas provocaba el repudio de algunos patriotas latinoamericanos. Por ello, Londres se apresuró a proclamar su inocencia en el asunto y a ofrecer sus buenos oficios para una paz negociada entre Brasil y los patriotas de la Banda Oriental, asistidos por un cuerpo expedicionario bonaerense que había acudido en ayuda de los uruguayos. Por efecto de la mediación británica —apoyada por la capacidad de ejercer discretas presiones económicas sobre todos los interesados— se logró una tregua; las tropas brasileñas y argentinas fueron retiradas del país, y Artigas tuvo que abandonar el país y dejar en el gobierno a Elio, representante de la metrópoli española.

Entre 1811 y 1814 Inglaterra mantuvo su papel de aliada de España contra

Napoleón, a la vez que protectora de las tendencias autonomistas y liberales en Hispanoamérica. En 1812 Castlereagh sustituyó en el Foreign Office a Wellesley quien, bajo el nombre de duque de Wellington, entró en la historia como vencedor de Napoleón Bonaparte. Continuamente el nuevo secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña trató de convencer a España de que diera completa libertad a los intereses comerciales ingleses en Latinoamérica: a cambio de ello, Londres dejaría de alentar esperanzas independentistas en el Nuevo Mundo y haría lo posible para que los americanos aceptasen la fórmula de la autonomía restringida dentro del marco de la dominación política española. Insistentemente las Cortes españolas —liberales en lo referente a los derechos de los ciudadanos— se negaron a aceptar la fórmula liberal y autonomista, propuesta por los patriotas hispanoamericanos de tendencia moderada, así como por Gran Bretaña. Una proposición hecha por España en 1811, según la cual Inglaterra podría participar en el comercio latinoamericano a cambio de un importante préstamo al fisco peninsular, fue rechazada por el gobierno de Londres.

Para fines de1814 España había logrado restablecer el control sobre sus colonias americanas. Bolívar tuvo que refugiarse en Jamaica, después de la desastrosa derrota sufrida a manos de Boves y de Morillo. Los patriotas argentinos y mexicanos fueron igualmente derrotados. En aquel momento, quizás habría sido posible para un gobierno español esclarecido crear una mancomunidad hispánica estable, fundamentada en la libertad económica y el autogobiemo interno de las provincias americanas, bajo la presidencia política y cultural de la metrópoli ibérica. Pero la obstinación de Fernando VII, alentado por los elementos más reaccionarios y oscurantistas de la nobleza y el clero españoles, hizo imposible tal solución. El rey español quiso restablecer el absoluto monopolio colonial en las relaciones comerciales con Hispanoamérica, y negar a las dependencias americanas todo asomo de autodeterminación o autogobierno. Sin embargo, a fines de 1815, cuando comenzó en América la segunda fase de la lucha independentista, el gobierno español recapacitó en parte: se dirigió a Gran Bretaña y le ofreció el libre comercio con las colonias hispanoamericanas si, a cambio de ello, Inglaterra aceptaba socorrer a los ejércitos españoles en la represión del movimiento emancipador, condición ésta que los ingleses no podían ni querían aceptar.

Ante esas manifestaciones de intransigencia española, ocurridas mientras los patriotas hispanoamericanos seguían haciendo gestos de buena voluntad hacia Inglaterra y los ingleses, el gobierno de Londres inició una política de doble aspecto. En el nivel oficial siguió instando a la corona española para que aceptara una mediación imparcial entre ella y sus colonias. A cambio de la libertad de comercio otorgada como condición previa, Inglaterra se esforzaría por moderar los ímpetus independentistas y por convencer a los dirigentes de la revolución nacional americana para que aceptaran una autonomía limitada dentro del marco del imperio hispánico. Por otra parte, en el plano secreto, los dirigentes de la política inglesa alentaron y apoyaron a los luchadores por la independencia latinoamericana: el asilo de Bolívar en Jamaica, préstamos y créditos otorgados a los patriotas, la tolerancia y la complicidad oficiales ante el contrabando de armas inglesas para los rebeldes, y el estímulo discreto a los voluntarios de la Legión Británica y otras unidades al servicio de la causa independentista, constituyeron las principales formas de colaboración de Gran Bretaña con la lucha libertadora de Latinoamérica. Así

mismo, la diplomacia inglesa se opuso a las presiones de la Santa Alianza o del Concierto Europeo en favor de las pretensiones absolutistas y restauradoras de Fernando VII en América. En 1817 España, respaldada por Rusia, planteó ante una conferencia de embajadores del Concierto Europeo la conveniencia de intervenir conjuntamente contra la insurrección latinoamericana. Inglaterra movilizó a sus diplomáticos y logró que la conferencia se abstuviera de adoptar una decisión sobre la materia. En 1818 España se presentó nuevamente ante el Concierto para quejarse de la segunda intervención militar portuguesa-brasileña contra los rebeldes uruguayos. Aunque Fernando VII se contentaba de la derrota de Artigas, no podía aceptar sin protestas la ocupación, e inminente anexión, de una parte de Hispanoamérica por la corona portuguesa. Gran Bretaña apoyó a Portugal y Brasil, protegidos y vasallos suyos en el ámbito económico, y propuso fórmulas de transacción que permitieron a España aceptar dignamente la ocupación brasileña de la Banda Oriental. España rechazó las mencionadas fórmulas y en 1819 el Concierto Europeo aceptó la anexión de Uruguay a Brasil.

En este caso se hizo evidente que Gran Bretaña sólo apoyaba a aquellos rebeldes latinoamericanos que se mostraban dispuestos a hacerle concesiones comerciales. El Reino Unido de Portugal y Brasil daba plena libertad económica a los intereses británicos; por parte de Bolívar y San Martín existía la misma inclinación. En cambio, Artigas —en grado menor que Rodríguez Francia en Paraguay— encarnaba un nacionalismo económico latinoamericano, reñido con las ambiciones del imperialismo económico, y por ello fue mirado como adversario por los dirigentes ingleses.

En el Congreso de Aquisgrán, efectuado por el Concierto Europeo en 1818, España reiteró su petición de que las potencias del Viejo Mundo interviniesen conjuntamente para aplastar la rebelión del Mundo Nuevo. Una vez más, Gran Bretaña se opuso y logró evitar que se tomara una decisión sobre el tema. El Congreso manifestó su deseo de que la rebelión de los súbditos americanos del rey de España llegase a su fin, a través de la mediación ofrecida por la Gran Bretaña.

Entre tanto, la actitud de Francia, sometida desde 1815 al régimen de la Restauración, fue hostil hacia la causa de la independencia. En el Congreso del Concierto Europeo (Aquisgrán,1818), cuando Fernando VII pidió la intervención colectiva contra los rebeldes americanos, la Francia de Luis XVIII se mostró favorable a la idea. Ello se debió, en primer lugar, al pensamiento contrarrevolucionario y antiliberal de un régimen representativo de la nobleza y la alta burguesía financiera. En segundo término, Francia vio en una eventual intervención colectiva en Hispanoamérica la posibilidad de lucirse como potencia militar en un plano de igualdad con los vencedores de 1814.

Sin embargo, a partir de Aquisgrán, Francia comenzó a comprender que la independencia hispanoamericana era inevitable. Desde entonces, intentó desplazar la influencia inglesa y liberal de los nuevos Estados, en beneficio de su propia orientación, favorable a las corrientes monárquicas y conservadoras. Esa línea de acción se perfiló con mayor claridad a partir de 1820, cuando la revolución liberal sacudió a España. Ese mismo año la diplomacia gala trató de convencer a los argentinos de que aceptasen como rey al príncipe de Lucca, miembro de la familia Borbón. Pero los patriotas rioplatenses rechazaron tal fórmula: si aceptaban un régimen monárquico, éste debía ser constitucional y liberal.

En 1822, en el Congreso de Verona, Francia —junto con las demás potencias de la Santa Alianza— apoyó la decisión de intervenir militarmente en España para suprimir el régimen liberal y restablecer el poder absoluto de Fernando VII. Francia se mostró en principio dispuesta a participar en tal empresa, a fin de ganar prestigio militar y político, así como para obtener eventuales ventajas comerciales. Pero Gran Bretaña, por las iniciativas que se describen más abajo, en relación con la Doctrina Monroe, disuadió al gobierno de París de sus intenciones.

En 1824, Francia trató de intervenir por última vez en el proceso independentista de Hispanoamérica. Con el fin de sobreponerse a la pérdida de prestigio sufrida ante Gran Bretaña en 1823, el gobierno francés intentó convocar un Congreso del Concierto Europeo sobre Latinoamérica, para representar el papel de árbitro de los destinos del Nuevo Mundo. La diplomacia francesa convenció a Fernando VII para que éste emitiera las invitaciones. Lamentablemente para Francia, el testarudo e insensato monarca español acompañó las invitaciones con la exigencia de una acción intervencionista en América Latina y se negó a pedir la participación de Gran Bretaña en el congreso. Ante esa actitud irritante y divisionista del rey de España, las potencias se negaron a acudir a la cita.

Mientras las relaciones entre Francia y los pueblos latinoamericanos, durante la época de la lucha independentista, fueron pues muy poco fructíferas, y mientras Estados Unidos sufría las desventajas de su relativa debilidad e insuficiente desarrollo, Gran Bretaña desempeñó el papel más destacado como actor externo en el proceso de la lucha emancipadora: fue la gran aliada del movimiento de independencia de la América Latina. Sus intereses comerciales e imperialistas la impulsaban a tal política. Los próceres de la independencia se aprovecharon de la ayuda inglesa, sin hacerse ilusiones sobre los motivos que la inspiraron, y también trataron de sacar ventajas de las contradicciones de intereses entre las potencias.

Bolívar tendía a dar mayor preferencia a la ayuda inglesa que a la norteamericana. Veía con honda preocupación y desconfianza las tendencias expansionistas que se manifestaban en el país del Norte. Sin embargo, otros importantes dirigentes latinoamericanos, como Francisco de Paula Santander, veían a Estados Unidos con una inclinación más positiva.

La Doctrina Monroe

Estados Unidos y Gran Bretaña coincidieron en defender a Latinoamérica contra el proyecto de reconquista que las potencias de la Santa Alianza tramaban para el año de 1823. Las medidas que Gran Bretaña tomó para proteger y defender a los países latinoamericanos liberados fueron prácticas y efectivas. Las medidas adoptadas por Estados Unidos fueron de naturaleza doctrinaria y propagandística, y se plasmaron en la proclamación de la Doctrina Monroe.

En 1820 el golpe liberal dirigido por Riego acabó con el absolutismo de Fernando VII y abrió la vía para una evolución constitucionalista en España. Los revolucionarios trataron a Fernando VII con todo respeto, pero le amputaron sus poderes y le obligaron a acatar las disposiciones de una constitución fundamentada en avanzados principios de libertad y de soberanía popular. Para la Santa Alianza —es decir, las potencias absolutistas dentro del Concierto Europeo— la revolución

española constituyó una calamidad y una amenaza; temían el contagio subversivo y la expansión del movimiento antiabsolutista de España a otros países. El zar de Rusia amenazó con intervenir unilateralmente contra los revolucionarios españoles, arrogándose la representación del Concierto. Las demás potencias lo disuadieron: Inglaterra, con una energía considerable, ya que para sus intereses era conveniente el auge del liberalismo y de las clases medias mercantiles en España; Austria, con menos energía pero también con insistencia, en vista de que Rusia era su rival con respecto a la hegemonía sobre Europa centro-oriental; Francia, que no deseaba la interferencia de una potencia del Este en la esfera de los Borbones.

Para 1821 Inglaterra trataba de persuadir a las potencias del Concierto Europeo de que no sólo toleraran la existencia del constitucionalismo liberal en España, sino que igualmente dieran reconocimiento a los nuevos Estados latinoamericanos, bajo la condición de que éstos adoptaran regímenes monárquicos constitucionales. Desde 1820 Inglaterra había tratado de convencer a Bolívar y a Colombia para que abandonaran su terco republicanismo y aceptaran la fórmula monárquica que ya había sido aceptada por San Martín, pero que resultaba inaplicable si Bolívar no daba su consentimiento.

Además de la oposición bolivariana, también la actitud de Francia hizo imposible la aceptación de la proposición inglesa. El sector más absolutista y reaccionario de la nobleza francesa, encabezado por el conde de Artois, hermano del rey, logró que el gobierno francés manifestara su oposición no sólo al reconocimiento de eventuales monarquías constitucionales americanas sino igualmente a una aceptación del régimen liberal español. Coincidiendo con Rusia, la monarquía francesa se hizo partidaria de una intervención armada en España, con el fin de restaurar el poder absoluto de Fernando VII.

El reconocimiento de los nuevos países por Estados Unidos en 1822 sirvió para fortalecer las presiones de la burguesía industrial y comercial inglesa, en el sentido de que su gobierno procediera de la misma manera, reconociendo unilateralmente a los Estados latinoamericanos, pese a que la mayoría de ellos tenía regímenes republicanos El ministro Castlereagh se había opuesto a ello buscando una fórmula aceptable para el Concierto Europeo. Pero Castlereagh se suicidó en agosto de 1822, y su sucesor, Canning, era partidario de una política unilateral inglesa, de independencia frente al Concierto y de entendimiento con las fuerzas liberales del mundo.

En 1822, el Congreso del Concierto en Verona estuvo dominado por los representantes de la Santa Alianza. Canning estaba seguro desde el comienzo de que el Congreso terminaría con la adopción de resoluciones represivas, antiliberales e intervencionistas, incompatibles con los intereses de Gran Bretaña y de la causa del libre comercio mundial. El duque de Wellington fue enviado como representante británico al Congreso de Verona, en una vana tentativa de frenar los ímpetus represivos e intervencionistas de las potencias continentales, inclinadas a aplastar violentamente el liberalismo español. Ante la actitud intransigente de la Santa Alianza, Inglaterra no pudo por el momento hacer nada, y el duque se retiró del Congreso de Verona el día 30 de noviembre de 1822. En ausencia de los ingleses, el Concierto decidió intervenir en España y confió a Francia la tarea de liquidar el régimen constitucional de Madrid y restaurar el poder absoluto de Fernando VII.

El 6 de abril de 1823 los "Cien mil hijos de San Luis" cruzaron los Pirineos bajo el mando del duque de Angulema. El movimiento liberal español, debilitado por

divisiones y contradicciones internas, cayó, y Fernando VII reasumió el mando absoluto e inició una feroz represión contra los constitucionalistas. Por otra parte, insistió ante las potencias de la Santa Alianza para que le ayudaran a reprimir el liberalismo y la revolución no sólo en la metrópoli sino también en los territorios hispánicos de ultramar. Lo que pedía Fernando era nada menos que una expedición colectiva de la Santa Alianza para reconquistar los países hispanoamericanos y someterlos nuevamente a la autoridad del déspota peninsular. Rusia y Francia se mostraban de acuerdo en principio, mientras que el gobierno inglés temía que la expedición interventora en América Latina pudiera convertirse en realidad.

Igual preocupación existía en Estados Unidos. El gobierno del presidente Monroe no sólo se sentía alarmado por la amenaza de intervención de la Santa Alianza en América Latina, sino también por el expansionismo manifestado en el propio continente norteamericano por una de sus potencias miembros, Rusia. En 1821 un ucase del zar Alejandro I extendió los límites del mar territorial ruso hasta 100 millas italianas frente a la costa de Alaska, y más abajo hasta el paralelo 51°. Se prohibía a barcos de otras nacionalidades penetrar en ese espacio marítimo. La medida equivalía de hecho a un avance del imperialismo ruso de Alaska hasta Oregón. No sólo por el Sur sino también desde el noreste, Estados Unidos sentía la presión intervencionista de la Santa Alianza. Ante la pretensión territorial y marítima rusa, Adams reaccionó con firmeza, comunicando al gobierno del zar que Estados Unidos sostenía "el principio de que los continentes americanos ya no deben ser objeto de nuevas colonizaciones europeas".

Canning, vivamente preocupado ante la amenaza de intervención contra Latinoamérica, resolvió en agosto de 1823 proponer a Estados Unidos una gestión conjunta en contra de dicha amenaza. Propuso a Richard Rush, ministro plenipotenciario norteamericano en Londres, que los dos países coordinasen su acción y emitiesen una declaración conjunta, en la cual manifestarían su decisión de no tolerar la recolonización de Hispanoamérica por las potencias de la Santa Alianza. Rush se mostró receptivo pero insistió en que Inglaterra, como condición previa a una declaración conjunta, debía dar reconocimiento oficial a las repúblicas latinoamericanas. Canning rechazó esa condición, que resultaba inaceptable para la opinión de los círculos dominantes ingleses, y cuya aprobación habría significado un golpe contra las potencias del Concierto. Pese a la negativa británica, Rush informó a su gobierno de la proposición de Canning.

Monroe consultó sobre la propuesta inglesa a los ex presidentes Jefferson y Madison, así como a su secretario de Estado John Quincy Adams. Los dos antiguos mandatarios se mostraron a favor de una declaración conjunta con Gran Bretaña. Madison pensaba que tal documento debía tener el carácter de un manifiesto general elaborado por los dos países anglosajones liberales contra el absolutismo y la opresión: no sólo debía hablarse de defender la integridad de las Américas, sino que también se aprovecharía la oportunidad para hacer un pronunciamiento a favor de la liberación de Grecia, y así pasar a la ofensiva contra los opresores de los pueblos. Adams se opuso tajantemente a esas ideas. En primer lugar, le pareció peligrosa una declaración que hablara de Grecia u otros países del Viejo Mundo, ya que tal declaración violaría la doctrina de los "dos hemisferios", emitida por George Washington. Si Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir, solos o en compañía de Gran Bretaña, en problemas europeos, las potencias de Europa, a su

vez, podían con pleno derecho intervenir en América. Para Adams era imperativo mantener incólume el principio de que, a cambio de la no interferencia extranjera en las Américas, Estados Unidos se abstendría de participar en la política de Europa. Por otra parte, Adams se mostraba reacio a una declaración conjunta con los ingleses. Como realista político de ideas imperialistas, John Q. Adams preveía el porvenir de Estados Unidos en términos de hegemonía sobre las Américas. Por el momento, sin duda, esa hegemonía estaba en manos de Inglaterra, pero Estados Unidos estaba destinado, en el transcurso de su desarrollo hacia la condición de gran potencia, a chocar con los intereses británicos, y a neutralizarlos y desplazarlos paulatinamente. Había que vivir en paz con Inglaterra, ya que esa potencia era grande y peligrosa; había que cooperar con ella en algunos campos, pero no debía desestimarse ninguna oportunidad para afirmar la personalidad y los intereses soberanos de Estados Unidos, y competir con Gran Bretaña siempre que fuera posible. Latinoamérica, y sobre todo el área del Caribe, eran zonas de rivalidad entre Inglaterra y Estados Unidos. En ningún caso —pensaba Adams— debía darse a Gran Bretaña la ventaja moral y propagandística de figurar como iniciadora y promotora principal de una gestión conjunta. En las actuales circunstancias, se trataba de ganar la amistad y la confianza de los países latinoamericanos. Entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿cuál de los dos países lograría figurar como el defensor y protector más decidido y leal de las nuevas naciones emergentes y, por ende, se convertiría en su guía hegemónico? Si Estados Unidos aspiraba a ese papel, debía aprovechar la ocasión para emitir una declaración unilateral y no conjunta con Inglaterra.

Monroe tuvo objeciones iniciales al planteamiento de su secretario de Estado. ¿Acaso tenía Estados Unidos la fuerza suficiente para enfrentarse solo a la Santa Alianza, sin ayuda inglesa? ¿No era peligroso y temerario un gesto de desafío unilateral a tan poderoso conjunto de países? Adams tranquilizó a su presidente. Inglaterra —él lo sabía bien— estaba obligada por sus intereses vitales a actuar en contra de una intervención de la Santa Alianza. Con declaración conjunta o sin ella, la flota británica se interpondría entre Hispanomérica y las potencias absolutistas, protegiendo la nueva esfera comercial inglesa de las apetencias de los demás Estados europeos. Las Américas, comprendido Estados Unidos, no necesitaban temer nada, pues Gran Bretaña las defendería necesariamente por su propio interés. Sin correr ningún verdadero riesgo físico, la república norteamericana lograría por una declaración unilateral un importante triunfo propagandístico y político sobre su rival inglés.

Adams quiso que la declaración resultante fuese comunicada a las diversas potencias por nota diplomática. Monroe, por su parte, creyó preferible incorporarla al mensaje presidencial de fin de año; Adams aceptó esa tesis. El presidente preparó un proyecto en el que aparecieron menciones a Grecia y al despotismo en el Viejo Mundo, y el secretario de Estado lo convenció de que suprimiera tales alusiones. La versión definitiva de la declaración se debe esencialmente a la pluma de Adams. Su tenor, como parte del mensaje presidencial presentado al Congreso el 2 de diciembre de 1823, es el siguiente: "Los continentes americanos, por la condición libre y soberana en que se encuentran, desde ahora no han de ser considerados como objetos de futura colonización por parte de cualesquiera potencias europeas (...) El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente diferente (...) del sistema

de América (...) Por ello, en honor a la franqueza y a las relaciones amistosas existentes entre Estados Unidos y aquellas potencias, debemos declarar que consideraríamos todo intento de su parte de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como algo peligroso para nuestra paz y seguridad (...) Con las colonias existentes (...) de cualquier potencia europea, no hemos interferido ni tenemos la intención de interferir. Pero con respecto a los gobiernos que han declarado su independencia (...) no podríamos considerar ninguna intervención realizada con el propósito de oprimirlas (...), por parte de cualquier potencia europea, de otra manera que como la manifestación de una disposición inamistosa hacia Estados Unidos (...) Nuestra política en lo concerniente a Europa (...) sigue siendo la misma; es decir, la de no interferir en los asuntos internos de ninguna de sus potencias (...)".

Mientras Adams redactaba esos párrafos del mensaje de su Presidente, el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña había realizado las gestiones que realmente, de manera práctica y efectiva, salvaron a la América Latina de una intervención de la Santa Alianza. A sabiendas de que Francia era la potencia de cuya decisión dependía una eventual expedición contra los países liberados, Canning concentró sus esfuerzos en comunicar al gobierno de París que una decisión de invadir Hispanoamérica sería mirada como hecho muy grave por Inglaterra, quedando implícita la amenaza de utilizar la flota británica para impedir por la fuerza cualquier desembarco.

La advertencia de Canning fortaleció en París los argumentos de aquellas personas que desaconsejaban una expedición hacia Latinoamérica, ya fuera por motivos políticos o por consideraciones de índole financiera y administrativa. El 9 de octubre de 1823, el príncipe de Polignac, embajador de Francia ante la Corte de St. James, suscribió un memorando en el cual negaba que Francia abrigase intención alguna de intervenir en Hispanoamérica. Con el memorando Polignac en su gaveta, y la certeza de que ya no existía peligro de intervención de la Santa Alianza en América, Canning perdió todo interés en una gestión conjunta con Estados Unidos, y eludió todo contacto con el ministro plenipotenciario Richard Rush. Al recibir la noticia de la declaración, hecha unilateralmente por el presidente Monroe, Canning se disgustó: después de que Inglaterra había realizado todo el trabajo para disuadir a la Santa Alianza de intervenir en el Nuevo Mundo, Estados Unidos se arrogaba el mérito y se robaba los laureles correspondientes al Foreign Office.

Con el fin de aclarar las cosas y explicar al mundo que no era la declaración norteamericana la que había salvado a Latinoamérica de la intervención, sino que el hecho se debía a la energía y al poder de Gran Bretaña, el secretario Canning resolvió publicar el Memorando Polignac. La publicación se efectuó en el mes de marzo de 1824 y ofendió gravemente al gobierno francés. Sin embargo, esta indiscreción sirvió para demostrar a las naciones que la verdadera protectora de los nuevos países hispanoamericanos no era Norteamérica sino Inglaterra.

La declaración emitida en diciembre de 1823 por el presidente de Estados Unidos llegó a ser conocida como la Doctrina de Monroe. A través de ella, Norteamérica asume unilateralmente el papel de protectora de los demás países del hemisferio. Los espíritus críticos en Latinoamérica, y sobre todo Simón Bolívar, se dieron cuenta en seguida del contenido potencialmente imperialista y hegemónico de la Doctrina, que serviría más adelante de base para las intervenciones norteame-

ricanas en asuntos internos de los pueblos latinoamericanos; intervenciones dictadas por la rapacidad y la ambición de poder, pero justificadas en teoría por el empeño de "proteger" o "defender" a las víctimas, supuestamente en peligro de ser atacadas por potencias extracontinentales.

El Congreso de Panamá

En contra del concepto unilateral y hegemónico contenido en la Doctrina de Monroe, el Libertador Simón Bolívar planteó el principio de la solidaridad de todos los países latinoamericanos en un plano de igualdad, y la seguridad colectiva como fórmula de defensa común contra agresiones emanadas desde dentro o fuera de la región. El pensamiento bolivariano rechazaba las hegemonías; para él, los pueblos hispanoamericanos debían adoptar mecanismos multilaterales para que, unidos y en perfecta igualdad de condiciones, garantizaran su seguridad y su progreso.

A partir de 1821 el Libertador tuvo la idea de organizar un congreso de las repúblicas libres del continente, con el fin de crear las bases de una Hispanoamérica unida y solidaria. Por instrucciones de Bolívar, Pedro Gual, como canciller de Colombia, escribió a los gobiernos de los nuevos países proponiéndoles una confederación que sería una réplica contra la Santa Alianza, una alianza de pueblos libres, una "verdadera sociedad de naciones hermanas". El gobierno colombiano envió plenipotenciarios que, por lo pronto, suscribieron convenios de alianza con otros países del continente para la defensa conjunta de su independencia ante España o cualquier otra potencia.

Para 1823 la convocatoria de un congreso de los países americanos liberados adquirió mayor urgencia. Existía el peligro de una intervención armada de la Santa Alianza, tal como señalamos en páginas precedentes. El canciller de la Gran Colombia, Pedro Gual, dijo que había llegado el momento de convocar un congreso con sede en Panamá, para crear una confederación americana. Cada país americano soberano enviaría a dos representantes plenipotenciarios para debatir los puntos siguientes:

1) alianza y confederación perpetua de los Estados americanos;
2) delimitaciones territoriales sobre la base del *uti possidetis* de 1810;
3) respeto a la soberanía de cada parte contratante;
4) no intervención.

En 1824, desde Lima, Bolívar reiteró su idea de celebrar el Congreso y emitió invitaciones a los gobiernos. El Libertador deseaba que la participación quedase limitada a los Estados de Hispanoamérica, excluía Estados Unidos. Para Bolívar, Norteamérica constituía una amenaza potencial para los pueblos latinoamericanos, más que un amigo y aliado. Uno de los motivos del Libertador para pensar de ese modo residía en el comportamiento de Estados Unidos frente a Cuba.

En 1823 Adams temió seriamente que España pudiera ceder Cuba a Francia, a cambio de la participación francesa en la reconquista de los países rebeldes de Hispanoamérica. (Efectivamente, en España asomó este tipo de ofrecimiento.) Adams creía igualmente posible que España terminaría por entregar Cuba a los ingleses, como premio por una mediación británica favorable en el conflicto entre la potencia ibérica y sus dependencias insurgentes. Ante esos temores, el secretario

de Estado norteamericano optó por hacer todo lo posible para mantener el *statu quo* en Cuba. Mientras la isla permanecía en manos de España, Norteamérica no debía temer que fuese usada como base de ataques contra ella. Así mismo, en la Cuba española quedaba abierta la posibilidad de una paulatina penetración de la influencia estadounidense, hasta que en alguna etapa futura las condiciones estuviesen dadas para una anexión de la valiosa isla.

Los gobiernos de Colombia y México, víctimas de ataques españoles lanzados desde territorio cubano, decidieron en 1824 replicar por la fuerza. Barcos colombianos y mexicanos atacaron navíos españoles en alta mar, hasta las cercanías del Estrecho de Gibraltar. Para 1825 la Gran Colombia y México preparaban una invasión a Cuba, para expulsar a los colonialistas españoles de su última base importante. Estados Unidos reaccionó con alarma. Adams—ya presidente para ese entonces— se sintió angustiado ante la idea de que los latinoamericanos independientes pudiesen liberar la isla y arrebatarla de la influencia yanqui. El gobierno norteamericano propuso a Inglaterra una política conjunta para disuadir a Colombia y México de su empeño. Pero Londres y Washington siguieron distintas líneas de acción.

Canning se limitó a sugerir tímidamente que un ataque colombiano y mexicano a Cuba dificultaría el logro de una eventual paz entre España y sus ex colonias. En cambio, la línea norteamericana fue dura. En diciembre de 1825, el secretario Clay exigió a Colombia y a México que suspendiesen sus planes de invasión a Cuba, y en 1826 el presidente Adams ratificó su firme voluntad de garantizar que Cuba siguiera en manos de España.

Este no fue el único motivo por el cual Bolívar miraba a Estados Unidos con recelo. El Libertador no sólo repudiaba la tendencia expansionista del país del Norte, sino también su carácter esclavista. La intención original de Bolívar había sido la de inscribir en la agenda del Congreso de Panamá un punto referente a la abolición no sólo del comercio negrero internacional sino también de la esclavitud como institución interna de los países americanos. Tanto Estados Unidos como Brasil habrían quedado excluidos del Congreso por su apego a la institución esclavista; Brasil, además, por su régimen monárquico. Si Bolívar hubiera podido proceder por completo a su propio modo de ver, sin concesiones a las circunstancias y los intereses, el Congreso de Panamá habría sido exclusivamente latinoamericano, republicano y abolicionista. Sin embargo, por no poder ignorar la importancia del coloso lusoamericano, Bolívar admitió que se le invitara al Congreso. En cuanto a Estados Unidos, se les invitó en contra de la voluntad del Libertador, por iniciativa del vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, respaldado por los gobernantes de México y Centroamérica.

A pesar de haber sido invitado, Estados Unidos de Norteamérica por su propia iniciativa se abstuvo de participar en el Congreso. Los representantes de la oligarquía de los estados del sur se opusieron a la participación en el Congreso de Panamá. En primer término porque, según ellos, Norteamérica no debía atarse las manos en compromisos multilaterales, incompatibles con el carácter unilateral y hegemónico de la Doctrina de Monroe. En segundo término, la clase dominante sureña repudió el Congreso por temor a que en él fuera discutida la cuestión de la esclavitud y se colocara a Estados Unidos y Brasil en el banquillo de los acusados. Adams y Clay entendían esos argumentos, y en el fondo simpatizaban con ellos,

pero sabían que la no asistencia al Congreso dañaría la posición de Estados Unidos en Latinoamérica.

Los ingleses, a través de su observador en el Congreso, no perderían la oportunidad de aprovecharse de la ausencia norteamericana para mejorar su propia imagen y consolidar su influencia. El debate entre los proponentes y los adversarios de la participación norteamericana en el Congreso de Panamá se prolongó de tal manera que los dos plenipotenciarios finalmente designados salieron con retraso. Llevaban instrucciones de asumir una actitud pasiva en el Congreso. Uno de los dos enviados pereció en el viaje, a consecuencia de la fiebre amarilla; el otro llegó a Panamá apenas a tiempo para asistir a la sesión de clausura.

Edward J. Dawkins, observador inglés en el Congreso de Panamá, se aprovechó plenamente de la ausencia norteamericana para realizar una activa campaña propagandística a favor de Gran Bretaña y en contra de Estados Unidos. Conforme a las instrucciones recibidas del Foreign Office, Dawkins señaló a los delegados que Gran Bretaña había recibido con beneplácito el plan bolivariano de liberar a Cuba, mientras Estados Unidos acudía en apoyo del colonialismo español y volvía los cañones de su flota contra las escuadras del Libertador. Los latinoamericanos quedaron tan convencidos de la buena fe británica que Pedro Gual propuso pedir a Inglaterra que asumiera la misión mediadora entre Latinoamérica y España para el reconocimiento de la independencia y la paz. Esa proposición no fue votada ni aprobada, pero no cabía duda de que Inglaterra gozaba de la simpatía y la aprobación generales, en contraste con Estados Unidos.

El Congreso de Panamá se inició el 22 de junio de 1826. Estuvieron presentes los representantes de la Gran Colombia, Perú (incluida Bolivia), México y Centroamérica. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, Brasil y Chile, por diversos motivos no aceptaron asistir. Paraguay no fue invitado. Argentina no asistió debido al conflicto bélico que tuvo con Brasil por la Banda Oriental. Brasil no asistió en parte por ese mismo conflicto, y también por su temor de que pudiera plantearse el tema de la esclavitud o se cuestionara su sistema monárquico.

El 15 de julio de 1826 las cuatro potencias participantes suscribieron el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, por el cual acordaron ligarse y confederarse para la guerra y la paz. El objeto del tratado sería sostener y defender la soberanía e independencia de las partes, mantener la paz y auxiliarse mutuamente en caso de agresión. En caso de guerra común contra un agresor, cada signatario otorgaría libre tránsito por su territorio a las tropas de los países aliados, y el gobierno transitante pagaría los gastos ocasionados; lo mismo se aplicaría al paso de barcos por los puertos y las aguas territoriales de las partes contratantes. Ninguno de los confederados firmaría la paz por separado con un agresor; sólo lo haría de común acuerdo con los demás. Los países signatarios colaborarían, igualmente, para desarrollar conjuntamente su comercio y bienestar mutuos. Procurarían desarrollar bases comunes de política exterior, sin intervenir en las decisiones de cada nación aliada. Así mismo, en el tratado se previó hacerlo extensivo a los demás países soberanos de América, y celebrar congresos o asambleas cada dos años en tiempo de paz, y cada año en tiempo de guerra, para examinar los problemas comunes de América y coordinar la política a seguir por los signatarios.

De este modo, quedaron planteados para el hemisferio occidental dos posibles esquemas de convivencia y organización internacional. El primero, de Monroe, se

fundamentaba en el predominio de una nación sobre las demás, para protegerlas y defender su independencia. El segundo, de Bolívar, expresado en el Congreso de Panamá, tiene por base la igualdad entre los pueblos, la solidaridad y la seguridad colectiva. El esquema de Monroe es fundamentalmente hegemónico y refleja en parte las ambiciones expansionistas de los sectores dominantes del sur de Estados Unidos. En cambio, el esquema de Bolívar es internacionalista y democrático.

Para su época, el esquema bolivariano fue utópico. Las ideas del Libertador, geniales y hermosas, carecían de base de sustentación en la sociedad latinoamericana. Tanto la creación de gobiernos liberales y estables, basados en la soberanía del pueblo como la eventual unidad o confederación latinoamericana, habrían requerido la existencia de capas medias y populares conscientes. Las ideas bolivarianas sólo hubieran podido ser puestas en práctica por una sociedad burguesa, con infraestructuras capitalistas y con buenas vías de comunicación, y vínculos de comercio, entre un país y otro. Pero Latinoamérica era un continente precapitalista y preburgués. Los estragos causados por las luchas de independencia habían ahondado el atraso. Los sectores de la economía latinoamericana que estaban vinculados al comercio internacional —minería, ganadería y plantaciones— no por ello tenían relaciones de producción modernas, sino que en su estructura interna conservaban rasgos feudales o esclavistas. La gran burguesía comercial tenía características psicosociales parecidas a las de la aristocracia terrateniente. Las capas medias integradas por agricultores, artesanos y pequeños comerciantes carecían de los medios de hacer valer sus derechos y sus aspiraciones frente al poder dominante de las oligarquías terratenientes y mercantiles. Los generales de los ejércitos de la independencia constituían un factor decisivo de feudalización. Reacios a entregar el poder que sus armas les habían dado, los generales se convirtieron en árbitros de la política y en amos de la tierra. Cada caudillo regional, militar y latifundista, constituía un factor centrífugo, destructor de la unidad de las naciones latinoamericanas, y de la unidad del continente. Ante tal realidad, era inevitable que Bolívar fracasara en lo inmediato y que triunfara el esquema de Monroe, realista y practicable ya que se basaba en la hegemonía de un país burgués sobre otros de sociedad tradicional.

Resumen

La época de la independencia latinoamericana se abrió con la insurrección de Santiago Ogé en Haití en 1790. La protesta nacional y social del pueblo haitiano, esclavo en su mayoría, fue estimulada por los sucesos revolucionarios de Francia. Después de la etapa moderada dominada por Toussaint Louverture, la revolución haitiana adquirió su máxima dimensión bajo la jefatura de Dessalines a comienzos del siglo XIX, y desembocó en la independencia completa, convirtiéndose la república negra en foco de irradiación independentista y en centro de solidaridad internacional hasta 1820.

En las colonias españolas la rebelión se fue gestando desde comienzos del siglo XIX, por motivos de explotación económica colonial, discriminación política, opresión social e infiltración de ideas subversivas. La lucha armada en gran escala estalló en 1810-1811 en centros como México, Caracas, Bogotá, Buenos Aires,

Tabla cronológica III

Año	Haití	Hispanoamérica	Brasil	Relación entre países americanos	Relación con países no americanos
1790	Rebelión de Ogé				
1793	Rebelión de Sonthonax. Lucha de Toussaint				Invasión Angloespañola a Haití
1795	Tratado de Basilea				Tratado de Basilea. Alianza Francia-España
1799	Toussaint domina Santo Domingo				
1800					Planes de Napoleón para América
1801	Leclerc en Haití				
1802	Capitulación de Toussaint				
1803	Muerte de Toussaint. Dessalines. Muerte de Leclerc				Derrota francesa en Haití
1804	Declaración de independencia de Haití				Planes de Miranda y Popham
1806	Muerte de Dessalines				Desembarco inglés en Buenos Aires. Expedición de Miranda
1807			Don Juan en Brasil		Ingleses expulsados de Buenos Aires. Desembarco inglés en Montevideo. Expulsados de Montevideo

Tabla 3 (cont.)

Tabla cronológica III

Año	Haití	Hispanoamérica	Brasil	Relación entre países americanos	Relación con países no americanos
1808					Invasión francesa a España
1809					Acción de agentes franceses en Hispanoamérica
1810		Levantamientos en México, Venezuela, Argentina, etc.		Aspiraciones de Carlota Joaquina	Misión de Bolívar y López Mendez a Londres
1811		Declaración de independencia de Paraguay y Venezuela		Primera intervención de Brasil en Uruguay	
1812		Muerte de Hidalgo			
1813		Declaración de independencia de México			
1814					
1815		Morelos derrotado	Brasil, reino		Santo Domingo oriental devuelto a España
1816		Declaración de independencia de Chile. O'Higgins. Congreso de Tucumán, declaración de independencia de Argentina		Invasión brasileña a Uruguay	

Tabla 3 (cont.)

Tabla cronológica III

Año	Haití	Hispanoamérica	Brasil	Relación entre países americanos	Relación con países no americanos
1817					
1818			Don Juan, rey		España pide intervención de la Santa Alianza
1819				Creación de la Gran Colombia	
1820	Muerte de Petión				Revolución liberal española
1821	Anexión de Santo Domingo hispánico	Plan de Iguala. Independencia de Guatemala	El Rey Juan en Portugal	Uruguay anexado a Brasil	
1822		Iturbide emperador. Unión México-Centroamérica	Grito de Ypiranga. Pedro I, emperador	Centroamérica anexada a México. Conferencia de Guayaquil	Congreso de Verona
1823				Rebelión de Centroamérica contra México	Invasión de la Santa Alianza a España
				Doctrina Monroe	
1824		Independencia de Centroamérica			
1825		Batalla de Ayacucho		Rebelión de Uruguay contra del Brasil. Guerra entre Brasil y Argentina. Creación de Bolivia	Congreso de Panamá

Asunción y Montevideo. Chile se alzó algo más tarde. Perú y la América Central dieron el paso hacia la independencia en 1821, en gran medida bajo presión externa. Cuba y Puerto Rico permanecieron en manos de España, aunque en su seno no faltó la agitación revolucionaria de minorías decididas.

Brasil, que se había convertido en sede de la monarquía portuguesa por efecto de la invasión napoleónica a la península ibérica, se mantuvo tranquilo hasta 1822, cuando proclamó su independencia sin violencia y bajo dirección monárquica.

Las luchas por la independencia latinoamericana estuvieron acompañadas de problemas y divergencias entre algunos de los nuevos países. Aparte de la pugna entre Brasil y Argentina por Uruguay, y los problemas entre México y Centroamérica, debemos destacar las contradicciones entre Bolívar y San Martín, superadas en la reunión de Guayaquil.

El mundo extralatinoamericano observó con interés la lucha de las ex colonias ibéricas por su independencia y trató de sacar beneficios de ese proceso. Inglaterra fue la potencia externa que mejor supo aprovechar la gesta independentista latinoamericana, dando su apoyo a los nuevos países emergentes y obteniendo, a cambio de ello, ventajosos tratados comerciales, así como una discreta pero inconfundible influencia semicolonialista sobre las decisiones de algunos Estados de la región. Por su parte, Estados Unidos trató de asumir el rol de protector de las nuevas repúblicas ascendentes pero, a causa de su debilidad y de sus manifestaciones anexionistas con respecto a las Floridas y Cuba, quedó en un segundo plano por detrás de los ingleses. Francia, con una política contradictoria y generalmente reaccionaria frente a las nuevas fuerzas latinoamericanas, no alcanzó ninguna influencia significativa en la época que nos ocupa.

Los dos hechos más significativos de la época de la conquista de la independencia latinoamericana son:

a) El dinamismo y el vigor del movimiento nacional revolucionario latinoamericano, dirigido en gran medida por élites terratenientes y comerciales, inspiradas por las ideas burguesas liberales de Europa y apoyadas por pueblos en busca de identidad nacional y de avances en la senda de la libertad y la justicia. Durante ese lapso de su historia Latinoamérica deja de ser objeto más o menos pasivo de la política de centros de poder externos, y asume un papel activo.

b) El surgimiento de dos enfoques o visiones del futuro del hemisferio occidental: la visión bolivariana, latinoamericanista, de solidaridad multilateral de países iguales, y el enfoque monroista, de protección ejercida por el gran país del Norte sobre las naciones más débiles del Sur.

Consolidación de naciones y hegemonía comercial inglesa (1828-1852)

La hegemonía comercial inglesa

Durante la época que se inicia después del Congreso de Panamá y que termina en 1860, América Latina adquirió los contornos políticos actuales. Con pocas excepciones, quedaron definitivamente constituidos y demarcados los Estados nacionales que existen hoy. En ese mismo lapso se impuso la hegemonía comercial y parcialmente política de Gran Bretaña sobre América Latina, seguida de cerca por Francia y por Estados Unidos. En términos generales puede afirmarse que Inglaterra, con su dominación indirecta o semicolonial, sustituyó los colonialismos español y portugués que anteriormente habían regido los destinos de América Latina. Como ya señalamos antes, la dominación colonial ibérica desde hacía tiempo había sido, en lo económico, un factor intermedio entre los países más desarrollados de Europa—sobre todo Inglaterra—y los territorios americanos. Con la eliminación de ese costoso intermediario, Inglaterra asumió directamente, por los mecanismos del libre comercio internacional, la hegemonía económica sobre Latinoamérica.

La hegemonía semicolonial inglesa se distinguió por el carácter discreto y encubierto de los mecanismos de presión aplicados a los países de Latinoamérica. Con considerable tacto, los hombres del Foreign Office tendían a respetar las susceptibilidades personales de los latinoamericanos y a abstenerse de intervenciones o amenazas abiertas y brutales. En ese sentido se diferenciaron positivamente de los crudos métodos intervencionistas empleados por la potencia norteamericana en la etapa de su predominio imperial a partir de 1898. Cabe señalar, sin embargo, que la mayor intensidad del intervencionismo político en tiempos posteriores no resultó simplemente de un estilo subjetivo distinto, sino que fue el producto de una intervención económica cada vez más completa: el semicolonialismo posindependentista en la América Latina pasó de una etapa de exportación de mercancías a otra, fundamentalmente inversionista o de exportación de capitales, de control sobre los recursos naturales y un número creciente de medios de producción. Esto es comprensible pues quienes participan en la economía de un país subdesarrollado, a través de inversiones directas, tienden a intervenir más marcadamente en su vida política y social que aquellos cuyos intereses son meramente comerciales.

Ya hemos señalado que la colonización ibérica impidió la formación y el auge de una burguesía empresarial latinoamericana, al someter la población a un riguroso control político absolutista, al dar supremacía a la clase terrateniente y al frenar el desarrollo de manufacturas locales. La guerra de independencia, con la consecuente destrucción de los medios de producción existentes, acentuó la ruina de la burguesía incipiente en diversas partes de Latinoamérica, y favoreció el auge del feudalismo militar, incompatible con la integración nacional sobre bases burguesas.

Sin embargo, hubo excepciones a esa tendencia general. Si el régimen colonial español fue desfavorable a un desarrollo industrial autóctono en América, no lo prohibió totalmente. En todas las colonias españolas, así como en Brasil, existían a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX diversas manufacturas. En México la industria textil se encontraba desarrollada, con centenares de talleres y miles de obreros. Lo mismo sucedía en Perú, Chile, Río de la Plata y Brasil. Una industrialización incipiente en la misma rama se encontraba también en Centroamérica, las Antillas, Venezuela, Nueva Granada y Quito. En otras especialidades, tales como la elaboración de artículos de metal, de cuero y de madera, América Latina se encontraba en pleno progreso al llegar a las postrimerías del régimen colonial.

Desde 1810 Latinoamérica quedó abierta a las mercancías inglesas. En el caso de Brasil, esa apertura se produjo por intermedio de un tratado comercial que convirtió el país en una colonia económica de Inglaterra. No sólo a las mercancías inglesas se les abrió ampliamente el inmenso territorio nacional sino que, además, los comerciantes británicos obtuvieron la extraterritorialidad judicial. Las colonias hispánicas, insurgentes, se apresuraron —como ya lo señalamos— a enviar misiones diplomáticas a Londres, y a negociar con Inglaterra la asistencia política y militar a cambio del libre comercio para los productos británicos. Sólo unos pocos reductos de nacionalismo económico latinoamericano resistieron a la invasión de los productos extranjeros. Uno de esos reductos fue el Paraguay del doctor Gaspar Rodríguez Francia, y otro, aunque en menor grado, fue Uruguay durante los años en que José Artigas rigió su destino.

La invasión de productos de la industria inglesa arruinó las manufacturas americanas existentes en aquellas partes donde no se le opusieron barreras proteccionistas. En México, Nueva Granada, Perú y Brasil, la producción textil autóctona fue sustituida en su mayor parte por productos ingleses.

Junto con su empeño por conquistar los mercados latinoamericanos para sus productos —textiles y otros—, Gran Bretaña siguió una política encaminada a dominar las desembocaduras de los grandes ríos del continente, sobre todo el Río de la Plata. Con ese afán, Inglaterra promovió entre 1826 y 1828 la independencia de Uruguay, valiéndose de su condición de Estado débil a través del cual su influencia podría penetrar en el continente, derribando progresivamente los obstáculos nacionalistas erigidos por Paraguay y por la Argentina de Rosas. Por otra parte, la política de Londres procuraba mantener factores de pugna que requerían la continua presencia mediadora de la diplomacia inglesa.

No todos los países latinoamericanos aceptaron dócilmente la nueva dependencia ante la gran potencia inglesa y ante la nación que constituía la segunda fuerza externa después de Gran Bretaña: Francia. En el plano de la política económica, varios Estados intentaron, durante el lapso comprendido entre 1828 y 1860, crear una estructura industrial propia y seguir una vía nacionalista de desarrollo. Sectores manufactureros nacionales, productores agropecuarios no vinculados al mercado externo, e intelectuales o militares patrióticos, convergían en ciertos casos con las mayorías populares para imponer políticas proteccionistas y de fomento de una economía autónoma.

En México, el ministro Lucas Alamán, conservador esclarecido, implantó un régimen de medidas aduaneras proteccionistas y estimuló el desarrollo de manufacturas nacionales. Entre los años 1830-1845, esa política obtuvo algunos éxitos

notables, aunque fue interrumpida por la revuelta tejana de 1835, una invasión francesa (por las medidas económicas nacionalistas mencionadas y por deudas) en 1838, y finalmente por la agresión norteamericana de 1846.

En Paraguay, Gaspar Rodríguez Francia impuso, de 1814 a 1840, el más proteccionista y autárquico de todos los regímenes económicos latinoamericanos. Nacionalista y paternalista extremo, Rodríguez Francia quiso educar a su pueblo y hacerlo próspero en forma totalmente autónoma, aislándolo de las corrientes hegemónicas extranjeras en lo material y en lo político. Bajo su dictadura férrea, Paraguay alcanzó un alto nivel de desarrollo agropecuario y manufacturero. El nivel de vida de su pueblo se elevó por encima del de las naciones circundantes. La intensa labor educativa de Rodríguez Francia eliminó el analfabetismo. Los ingresos aduaneros y otros impuestos —pagados sobre todo por la clase terrateniente— fueron utilizados por el poder público para crear una economía diversificada y autosostenida. En vista de que ese capitalismo de Estado chocaba frontalmente con los intereses económicos europeos, Inglaterra y las demás potencias del Viejo Mundo, en alianza con los liberales pro británicos de la propia Latinoamérica, desencadenaron una campaña propagandística contra Rodríguez Francia. Se le pintó con las características de un déspota sanguinario, sádico y loco, y se afirmó que bajo su dictadura Paraguay era un antro de barbarie. La realidad fue distinta. No cabe duda de que los sectores medios y populares lo apoyaban mientras se le oponían los grupos ricos, deseosos de vincularse al comercio internacional dominado por los ingleses. A la muerte de Rodríguez Francia, en 1840, le sucedió en la presidencia el doctor Carlos Antonio López, quien continuó la política nacionalista en forma menos extrema pero igualmente efectiva. La hostilidad inglesa y liberal contra el régimen paraguayo continuó manifestándose. Más tarde, bajo la presidencia del hijo de López, Francisco Solano, la presión de los intereses comerciales internacionales contra el nacionalismo paraguayo habría de provocar la Guerra de la Triple Alianza.

En Argentina, entre 1835 y 1852, el dictador Juan Manuel de Rosas implantó igualmente un régimen proteccionista, de resistencia a la penetración y a la hegemonía de los intereses extranjeros. Inglaterra y Francia, limitados por su política proteccionista y por el cierre del Río Paraná a los barcos extranjeros, dieron todo su apoyo a los liberales (unitarios) enemigos de Rosas y, entre 1838 y 1845 intervinieron directamente contra él, bloqueando Buenos Aires.

En todo el continente los aliados de la penetración económica extranjera fueron principalmente los grupos y partidos liberales, con sus denominaciones variables de país en país: "Liberales", en México, Centroamérica, Nueva Granada, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil; "Unitarios" en Argentina; "Colorados" en Uruguay y Paraguay. En Venezuela, el partido más vinculado a los intereses comerciales internacionales fue el Conservador más que el Liberal. Estos partidos constituyeron la tendencia social y política latinoamericana que luchaba por los intereses de los terratenientes que producían para el mercado exterior y de la burguesía importadora y exportadora. Generalmente los liberales tenían su principal fuerza en las zonas costeras y en los puertos. En cambio, las provincias del interior de diversos países eran la base de las corrientes políticas opuestas a la penetración de los intereses comerciales extranjeros. Dichas corrientes eran "conservadoras" nacionalistas o populistas, y reflejaban algunos intereses de latifundistas tradicionales, desvinculados

del comercio internacional, pero también los de medianos y pequeños empresarios y agricultores que trabajaban para el consumo interno. Entre esas corrientes se encontraban los federalistas de Argentina, y los "blancos" de Uruguay y Paraguay. Tenían como empeño común desarrollar la provincia y liberarla de la dominación del litoral y de los intereses económico-sociales ligados al comercio internacional.

En su política de penetración comercial en América Latina, los británicos eran apoyados en muchos casos por los franceses, cuyos intereses comerciales coincidían con los suyos. Inglaterra y Francia tuvieron conflictos de intereses en el área del Mediterráneo entre 1830 y 1841; ese último año llegaron incluso a un grado de tensión extremo, pero el problema fue superado, y entre 1841 y 1860 los intereses políticos y económicos ingleses y franceses coincidieron en gran medida.

En cambio, existió una rivalidad constante entre Inglaterra y Estados Unidos. Expansionistas, los norteamericanos avanzaron paso a paso, quitándole la mitad de su territorio a México, ejerciendo influencia en Cuba, e interviniendo en América Central. En cada una de esas zonas chocaron con los intereses y la influencia ya establecidos de Gran Bretaña. En América Central, Inglaterra abandonó su moderación habitual y estableció su presencia colonial directa en la Costa de los Mosquitos (Nicaragua), a fin de erigir una barrera contra las incursiones norteamericanas. Inglaterra y Estados Unidos fueron competidores con miras a la futura construcción de un canal interoceánico a través de Centroamérica o Panamá. En 1850 lograron firmar un acuerdo que armonizó sus intereses al respecto. Ese convenio —el de Clayton-Bulwer— marcó el primer reconocimiento, por parte de Gran Bretaña, de una esfera de influencia norteamericana en América Latina y el Caribe.

En resumen, la época de los años 1830 a 1852 significó para América Latina una dependencia semicolonial, en lugar de la dominación colonial abierta y completa que habían ejercido las coronas ibéricas. La principal potencia que ejerció esa hegemonía semicolonial fue Gran Bretaña. Su instrumento fundamental fue el comercio. Pudo contar con el apoyo de los terratenientes y los mercaderes vinculados al comercio internacional. El "imperialismo liberal" inglés estuvo generalmente apoyado por el de Francia, que también estableció su esfera de interés en América Latina. En cambio, existió siempre una clara y fuerte rivalidad entre los intereses ingleses y los de Estados Unidos.

México y Estados Unidos (1821-1848)

Como señalamos en un capítulo anterior, Estados Unidos prometió, al firmar el Tratado Adams-Onis de 1819, que respetaría la soberanía de España sobre Texas y los demás territorios mexicanos del Norte. Al acceder México a la independencia y ser reconocido por Estados Unidos en 1822, el gobierno de Washington ratificó su respeto formal a los límites territoriales vigentes.

Ese compromiso aceptado por el gobierno de Estados Unidos no coincidía con sus aspiraciones expansionistas, sobre todo de los grupos dominantes del sur del país. Los grandes hacendados esclavistas deseaban extender su dominación e influencia sobre el norte de México. Texas —provincia vasta y fértil, buena para la ganadería en gran escala—, y California —hermosa tierra de múltiples cultivos y

de abundancia agrícola— eran los dos territorios mexicanos que más atraían a los angloamericanos y despertaban su codicia. Paulatinamente, además del simple deseo de anexión territorial, característico de los latifundistas sureños, surgió una consideración vinculada a la política interna: se venía desarrollando e incrementando poco a poco la rivalidad entre el norte capitalista y el sur agrícola y ganadero, entre la burguesía y el pueblo norteños y la oligarquía terrateniente meridional, y los sureños anhelaban la anexión de nuevos territorios para así aumentar su representación en el Congreso de la Unión.

La colonización angloamericana de Texas se inició en 1821; la de California en forma menos sistemática y en fecha posterior. Moses Austin, jefe de un grupo de agricultores y ganaderos sureños, negoció un acuerdo con las autoridades mexicanas en 1821, para el establecimiento de 30 familias angloamericanas en el territorio de Texas, habitado en ese entonces sólo por tribus de indios. En su convenio con el gobierno de Agustín Iturbide, Moses Austin se comprometió a que los colonos respetarían las leyes de México en todos los aspectos. El hijo de Moses, Stephen Austin, encabezó el grupo que inició la colonización angloamericana de Texas en 1822. En 1823 la República de México ratificó el acuerdo firmado entre el gobierno imperial y Austin: a cambio de la concesión de tierras en Texas, los colonos angloamericanos se comprometerían a respetar las leyes mexicanas, incluso la prohibición de practicar el esclavismo en territorio texano. Sin embargo, casi desde el comienzo la gente de Austin violó sus compromisos: el número de familias que entró a Texas desde Estados Unidos fue superior al estipulado; la tendencia de los colonos era la de desconocer totalmente la soberanía mexicana y autogobernarse en forma irrestricta. No hubo acatamiento a las leyes de México; la esclavitud fue introducida ilegalmente al territorio y, junto con agricultores y ganaderos honestos, entraron múltiples bandoleros que convirtieron Texas en una de las zonas más violentas de América.

La penetración norteamericana en Texas fue mirada con beneplácito por John Quincy Adams en Washington, secretario de Estado del presidente Monroe hasta 1824 y luego, a su vez, presidente de Estados Unidos. Como ya se vio en relación con la Doctrina Monroe, Adams fue uno de los más conscientes precursores del imperialismo estadounidense. Su visión política general era expansionista; creía firmemente en la necesidad de que Estados Unidos se transformara en potencia imperial y extendiera su hegemonía sobre la América Latina, comenzando por el Caribe: de otra manera sería Inglaterra la que dominaría esas regiones y acabaría por cercar y asfixiar la república norteamericana. En ello Adams coincidía con los oligarcas sureños y con los comandantes de la marina de guerra. El Mar Caribe y el Golfo de México, con las tierras que los rodean, le parecían ser la zona de expansión más importante y más urgente. Por ello impidió mediante amenazas el desembarco de grancolombianos y mexicanos en Cuba: la isla debía quedar en manos de la débil España hasta que Estados Unidos estuviese listo para anexarla. Con respecto a Texas, y eventualmente California y los demás territorios del norte de México, Adams abrigaba las mismas intenciones anexionistas. La promesa hecha a España en 1819 de respetar la integridad territorial de México, y de Texas en particular, no era para Adams más que un expediente temporal.

En 1825, poco después de asumir la presidencia, Adams ordenó al secretario de Estado Henry Clay que abriese negociaciones con México para la compra de Texas.

Clay conversó con los representantes del gobierno mexicano y argumentó que a todo país le convenía que su capital estuviera colocada en pleno centro geográfico. ¡Si México se libraba de la porción septentrional de su territorio nacional, la localización de la capital se aproximaría a esa exigencia geopolítica! México no se dejó convencer por tan curiosos razonamientos, y rechazó la oferta. En 1827, Adams renovó la gestión y, para tratar de conseguir su consentimiento, recurrió a tácticas consideradas ofensivas por los mexicanos. En1829 encomendó al ministro plenipotenciario A. Butler que procurara obtener la aceptación mexicana por cualquier método. Butler realizó torpes intentos de soborno a personalidades dirigentes, y fue declarado persona indeseable en 1830.

Ese mismo año inició su presidencia en México Vicente Guerrero, cuyo más influyente ministro fue Lucas Alamán, conservador nacionalista y dinámico. Los sectores avanzados del conservadurismo aspiraban a defender la agricultura y la industria mexicanas de la competencia extranjera y a fomentar el progreso del país mediante créditos públicos y otras formas de participación estatal en la vida económica. A tal efecto, Alamán creó un instituto de fomento industrial e implantó un régimen proteccionista; esto originó que Inglaterra, Estados Unidos y otras potencias foráneas miraran con disgusto las medidas adoptadas.

En su afán por asegurar el control efectivo del gobierno mexicano sobre todo el territorio del país, el ministro Alamán restringió la inmigración de angloamericanos a Texas, mandó comisiones a ese territorio para imponer la autoridad del gobierno federal y decretó la unión de Texas con Coahuila para constituir una sola entidad político-administrativa. Así como las potencias extranjeras consideraron intolerable la política económica nacionalista de Alamán, los anglotexanos miraron las medidas de centralización interna como una virtual declaración de guerra. En 1831 se dirigieron al gobierno de México, pidiendo la exención de los impuestos con que los gravaba el ministro Alamán. El gobierno rechazó esa solicitud y, con ello, impulsó a los anglotexanos hacia la rebelión. Bajo la dirección de Sam Houston y otros dirigentes, comenzó a gestarse el movimiento secesionista texano por su separación de México y su unión con Estados Unidos.

En 1835 el gobierno de México intentó imponer su autoridad efectiva sobre los texanos y decretó la eliminación del esclavismo, introducido ilegalmente por los colonos anglosajones. Ante ello, la comunidad anglotexana y los estados sureños de Norteamérica formaron un solo bloque de protesta contra México. La proclamación a principios de 1836 de una nueva Constitución mexicana, de tipo centralista, fue el hecho final que desencadenó la insurrección. Bajo la jefatura de Houston, los texanos se alzaron y, el 2 de mayo de 1836, proclamaron la independencia del estado.

Bajo el mando del general Santa Anna, las fuerzas federales mexicanas penetraron en Texas para reprimir la rebelión. A México le asistía todo el derecho de un pueblo invadido por un poderoso vecino, con instituciones esclavistas reñidas con sus avanzadas leyes. Pero Santa Anna, caudillo reaccionario y oportunista, no tuvo la capacidad ni la voluntad de movilizar a las fuerzas progresistas de México para la defensa de la integridad nacional. En lugar de ello, actuó como interventor despótico, dejando que la opinión mundial mirara a los anglotexanos con simpatía, como rebeldes contra una injusta tiranía.

En marzo de 1836 las tropas mexicanas tomaron la fortaleza de El Alamo, en

San Antonio, y dieron muerte a todos sus defensores. En abril del mismo año, los rebeldes texanos fracasaron en otra batalla, en Goliad, en la que perdieron la vida cuatrocientos angloamericanos. Atemorizados por las fuerzas de Santa Anna, quien no daba cuartel, la población anglotexana inició el éxodo hacia Estados Unidos pero antes de que esa emigración se pudiera generalizar, cundió la noticia de una victoria texana: en San Jacinto, el 21 de abril, las tropas de Samuel Houston lograron tomar por sorpresa al ejército del gobierno mexicano e infligirle una aplastante derrota. Santa Anna cayó en manos de sus enemigos quienes, en un primer momento, quisieron ejecutarlo sumariamente para vengar a las víctimas de El Alamo y Goliad. Pero Houston rescató al general y dictador de las manos de sus subalternos y lo obligó, a punta de pistola, a firmar dos convenios. Por uno de ellos, Santa Anna se comprometió a cesar el combate y a retirar las tropas mexicanas de Texas, reconociendo la independencia de ese territorio. Por el otro, admitió que los límites entre Texas independiente y México quedarían marcados por el Río Grande (Bravo). Sin embargo, una vez puesto en libertad, Santa Anna se negó a reconocer la validez de los convenios suscritos, en vista de que su firma había sido obtenida bajo amenaza de muerte.

Liberado de la dominación mexicana, el Texas anglosajón de Samuel Houston pidió ser anexado a Estados Unidos. Pero ese país no aceptó en seguida al nuevo territorio aspirante. Ello se debía a la oposición de los liberales (*whigs*) del Norte: eran los representantes de la burguesía industrial y capitalista opuesta a las pretensiones de la oligarquía agrícola del Sur. Ya Estados Unidos entraba en la etapa del conflicto entre el Norte y el Sur, entre el capitalismo industrial ascendente y el esclavismo agrícola, entre el nacionalismo económico auspiciado por los intereses industriales y la política de libre comercio y de dependencia ante la industria británica, favorecida por la "plantocracia" sureña. Por presiones del Norte, el Congreso y el poder ejecutivo de Estados Unidos reconocieron la independencia en 1837, pero no la anexión de Texas.

En octubre de 1838 los texanos, ofendidos por la negativa norteamericana de acceder a su solicitud de admisión a la Unión, retiraron dicha petición y se dispusieron a existir como nación soberana. Establecieron relaciones comerciales con Inglaterra y Francia. A Gran Bretaña le gustó la idea de tener acceso al mercado texano y al algodón de ese territorio. Desde el punto de vista geoestratégico, una influencia económica sobre Texas permitiría a Inglaterra y a su aliada, Francia, interponerse en la ruta de la expansión estadounidense hacia el Sur.

La idea de la presencia inglesa en Texas hizo que en Estados Unidos algunos adversarios de la anexión de ese territorio comenzaran a cambiar de actitud. Los partidarios de la anexión, por su parte, intensificaron las presiones, utilizando la amenaza inglesa como poderoso argumento. Para los norteamericanos del sur era importante que Texas ingresara a la Unión, aumentando el territorio, la población y la representación política del bloque esclavista. Con el fin de justificar la anexión —y, más allá de ella, una continua política de expansión hacia el Sur— los terratenientes y los comerciantes de la zona meridional de Estados Unidos promovieron la doctrina del "Destino Manifiesto", según la cual los angloamericanos están predestinados a extender su hegemonía sobre todo el hemisferio occidental, anexando territorios vecinos para dar cabida a su pujante población.

En 1844 Houston planteó la cuestión de la anexión en términos de ultimátum:

si Estados Unidos no aceptaba la solicitud de ingreso a la Unión presentada por los texanos, éstos se acercarían definitivamente a Gran Bretaña. Ante esta presión extrema, el presidente Tyler accedió a la anexión, pero el Congreso no ratificó el acto. Sin embargo, en febrero de 1845, Tyler —presidente saliente, ya que su sucesor Polk había sido electo en noviembre de 1844— proclamó la anexión de Texas, basándose en una resolución adoptada por el Congreso por mayoría simple.

Gran Bretaña había tratado de evitar tal desenlace, ofreciendo a Texas mediación con México para lograr que esa república reconociera la soberanía de su antigua provincia del noreste. Después de la resolución norteamericana de anexión de Texas, el propio gobierno de México se dirigió a Houston y a sus compañeros, ofreciéndoles un arreglo: a cambio de que Texas se comprometiera a permanecer independiente, sin unirse a Estados Unidos, México reconocería su soberanía y le ofrecería su amistad y colaboración.

Samuel Houston personalmente se inclinaba hacia la aceptación de esa solución, tal vez porque prefería ser presidente de una república soberana antes que ser mero gobernador de una entidad federal. Pero la convención popular texana reunida a mediados de 1845 votó por gran mayoría en favor del ingreso a Estados Unidos.

México rompió sus relaciones con Estados Unidos como protesta por la resolución anexionista. Entre los angloamericanos del Sur y los texanos se pedía la inmediata guerra contra México, para obligarlo a ceder Texas y entregar igualmente California y otros territorios. La agitación belicista y expansionista se propagó por el país, con los latifundistas y los comerciantes sureños como base y fuente principal. Muchos políticos, grandes y pequeños, del Partido Demócrata aprovecharon la coyuntura para incrementar su popularidad mediante una demagogia belicista contra México.

El nuevo presidente Polk vacilaba. Aunque los demócratas lo empujaban hacia la guerra, los liberales (*whigs*) del Norte se oponían a la misma, calificando de "infame" la agitación expansionista contra un país vecino que en nada había perjudicado a Estados Unidos. Polk resolvió intentar por medios pacíficos antes de recurrir a las armas. Envió a México en misión especial a John Slidell, político sureño anexionista, con el encargo de intentar la compra de Texas. El gobierno mexicano se negó a recibirlo y, en respuesta a ello, Polk declaró la guerra en 1846. Ya los texanos estaban en armas. Igualmente, en California estalló la rebelión de los colonos angloamericanos contra México, bajo la dirección del político, explorador y militar John Charles Frémont.

Santa Anna, quien desde el exilio había negociado secretamente con Estados Unidos y había prometido la entrega de Texas y California, llegó a México con la discreta complicidad de los norteamericanos. Reasumió la presidencia del país y se colocó a la cabeza de los ejércitos que defendían el territorio mexicano contra los invasores. Pero aunque se presentó ante la opinión pública como salvador de la patria, su conducción de la guerra estuvo marcada por la debilidad y las vacilaciones.

Bajo el mando de los generales Zacarías Taylor y Winfield Scott, Estados Unidos triunfó al cabo de algo más de un año de lucha. Las tropas de Scott ocuparon la ciudad de México en septiembre de 1847. El presidente Polk envió al frente de batalla, desde comienzos de 1847, al agente diplomático Nicolás Trist, con la misión de negociar un tratado preliminar de paz tan pronto como los mexicanos se

mostrasen dispuestos a ello. Después de la caída de la capital, Santa Anna dimitió y huyó. En febrero de 1848, Trist y los representantes del gobierno provisional mexicano, que se constituyó después del desastre, suscribieron el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Por los términos de ese Tratado, México tuvo que reconocer la pérdida de Texas y la anexión de ese territorio a Estados Unidos, estableciéndose los límites entre Texas y México a lo largo del Río Bravo. (México trató de lograr que los límites fuesen fijados en el río Nueces, algo más al noreste, pero ello fue considerado inaceptable por los norteamericanos). México también tuvo que entregar el grande y rico territorio de California, junto con la porción nororiental que hoy constituye el estado de Nevada. En tercer término, fue obligado a renunciar a Nuevo México (toda la porción de territorio situada entre Texas y California, y que comprende los actuales estados de Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah). La totalidad de la superficie cedida a Estados Unidos significó la pérdida de la mitad del territorio nacional de México. A cambio de tan enorme adquisición, el gobierno norteamericano se comprometió a pagar la suma de 15 millones de dólares, más 3 millones por cancelación de deudas mexicanas.

Los más ardientes expansionistas del sur de Estados Unidos denunciaron el Tratado como una "entrega". A medida que la guerra avanzaba, se había agudizado el apetito de los terrófagos sureños, y sus representantes y agentes de prensa desencadenaron una campaña en pro de la conquista y anexión de "todo" México, y posiblemente también la América Central. Esa posición extrema fue descartada por la mayoría de los senadores y diputados norteamericanos.

Sin embargo, el empuje expansionista no estaba agotado. Surgieron presiones para ensanchar Nuevo México más hacia el Sur, a fin de permitir la construcción de vías férreas entre el Este y el Oeste. En 1853, tras presiones y amenazas, por acuerdo con el empresario ferroviario William Gadsden, designado ministro plenipotenciario norteamericano en México, el gobierno mexicano aceptó vender a Estados Unidos otro trozo de territorio, al sur de Nuevo México y Arizona, por la suma de 10 millones de dólares.

Poco después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el hallazgo de los colosales yacimientos de oro en California dio al triunfo norteamericano una nueva dimensión, hasta entonces insospechada. En lugar de conquistar tan sólo tierras de cultivo y de pastoreo, Estados Unidos se había hecho dueño de las más ricas reservas de mineral precioso de la época. El oro californiano estimuló extraordinariamente el desarrollo del capitalismo norteamericano y mundial. La fiebre del oro de 1849 tuvo por efecto la expansión de las finanzas mundiales. Aunque la anexión del México septentrional había sido iniciativa de los latifundistas del sur de Estados Unidos, la conquista benefició en definitiva a los capitalistas del Norte, fortalecidos por el oro de California.

Otro efecto de la victoria sobre México fue el de transformar a Estados Unidos en potencia del Océano Pacífico. Casi al mismo tiempo que California, también el territorio de Oregón, situado más al Norte, entre la tierra californiana y Canadá, había sido ocupado por los norteamericanos, luego de una disputa de varios años con Gran Bretaña. Así, Estados Unidos llegó a ser una potencia de dimensión continental, ribereña de dos océanos. San Francisco rápidamente devino en emporio comercial y financiero importante, y desde ese puerto zarpó en 1853 el comodoro

Perry para abrir Japón a la influencia comercial y política de la potencia norteamericana.

Centroamérica y El Caribe

Durante el cuarto de siglo que siguió a su independencia, Centroamérica se debatió entre la unidad y la división. Inicialmente unida, la región se dividió luego, en parte debido a factores centrífugos internos y en parte por influencias disgregadoras externas. Desde fuera, América Central estaba influida por México, Estados Unidos y Gran Bretaña.

Como ya se señaló anteriormente, la América Central adoptó en 1810 una actitud reformista más que revolucionaria. Sólo ocurrieron levantamientos independentistas parciales, que fueron suprimidos por las fuerzas conservadoras de la provincia capital.

En 1821 Centroamérica se declaró independiente porque los conservadores guatemaltecos deseaban separarse de una España que se había vuelto liberal. En 1822 un congreso reunido en Guatemala resolvió la unión con el imperio mexicano de Agustín Iturbide. En 1823, al caer Iturbide, América Central se separó de México y en 1824 se proclamó República Federal, integrada por cinco provincias, con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Guatemala fue la capital y la sede del poder, de manera que la oligarquía conservadora del noreste se sintió ratificada en su hegemonía sobre las provincias más liberales del sureste. Ese poder conservador guatemalteco constituyó la principal causa de la división que tenía que venir: así como los liberales no soportarían el dominio político de Guatemala, los conservadores no tolerarían una unidad política basada en el liberalismo del sureste.

José Arce, salvadoreño liberal, fue el primer presidente de la Federación. En el gobierno, se acercó a los conservadores y pidió el apoyo de sus antiguos compañeros de línea ideológica. En 1826 se produjeron levantamientos contra el gobierno federal y en 1828 Arce entregó el poder. Bajo la dinámica y brillante jefatura del hondureño Francisco Morazán, las fuerzas liberales tomaron Guatemala. En 1830, después de derrotar completamente a las fuerzas oligárquicas, Morazán asumió la presidencia de las Provincias Unidas.

El gobierno de Morazán se caracterizó por reformas políticas y sociales de tipo liberal y anticlerical. En su política exterior manifestó tendencias nacionalistas frente a los ingleses, quienes adoptaron una actitud cada vez más opuesta al régimen federal centroamericano. En la rivalidad anglonorteamericana por la América Central, Gran Bretaña apoyaba a los elementos conservadores enemigos del gobierno de Morazán, mientras Estados Unidos se inclinaba en favor de dicho gobierno.

A partir de 1836, Morazán tuvo que hacer frente a las rebeliones secesionistas de los conservadores en la provincia de Guatemala y de los liberales separatistas en las demás provincias. El caudillo hondureño era atacado por una parte, por su liberalismo, y por otra, debido a su tendencia hacia la centralización del poder. Las intrigas británicas influyeron en las rebeliones de ambos tipos. El capitalismo inglés esperaba penetrar y dominar la América Central por partes, a través de la división, ganándoles la partida a los norteamericanos que jugaban la carta de la unidad.

Morazán mudó la capital centroamericana de Guatemala a San Salvador y desde allí dirigió la resistencia contra los conservadores guatemaltecos al mando de Rafael Carrera, caudillo de extracción popular asociado con los latifundistas y el alto clero.

Para 1839 Morazán quedó en posesión únicamente de El Salvador. Las provincias centroamericanas restantes estaban en su mayor parte controladas por conservadores, aliados de Carrera e inspirados por él. De hecho, la Federación se había desintegrado. En 1840 Morazán tuvo que huir al exterior. Regresó con una expedición en 1842, desembarcando en Costa Rica, pero después de éxitos transitorios cayó en manos de sus enemigos y murió fusilado. Para 1848 los cinco países centroamericanos se declararon independientes de manera oficial voceando, sin embargo, la esperanza formal de que algún día pudiese establecerse la federación.

La influencia británica, divisionista y partidaria de Rafael Carrera, se impuso cada vez más en Centroamérica durante la década de los años cuarenta. Estados Unidos, molesto y preocupado, intrigó a su manera para tratar de desplazar a los británicos. A partir de 1840 en Estados Unidos se desarrollaba la doctrina del "Destino Manifiesto": bajo el impulso de la expansión territorial hacia el Oeste y las apetencias anexionistas de los esclavistas del Sur, el país se sentía invencible y llamado por la Providencia a un engrandecimiento territorial cada vez mayor. Para contrarrestar la influencia británica que se expresaba a través de Carrera y los conservadores, los norteamericanos tendieron a apoyar a las fuerzas liberales centroamericanas, procurando ponerlas al servicio de sus intereses.

En 1847 Inglaterra ocupó la región de "Mosquitia" (costa centroamericana de Nicaragua) que, junto con Belice, constituyó un importante baluarte. Estados Unidos jamás reconoció ningún derecho de Gran Bretaña a la costa de los Moscos y esa ocupación no se formalizó. El empeño de Inglaterra, en su ocupación extraoficial de partes de América Central, era el de impedir que Estados Unidos dominara el istmo y construyera un canal interoceánico por cuenta propia. Si se construía un canal, Inglaterra aspiraba a ser la potencia que realizara esa labor y se beneficiara de ella.

Estados Unidos, con su doctrina del Destino Manifiesto apoyada por los intereses sureños, tomó la iniciativa de negociar con la Nueva Granada en 1848 sobre la construcción de un canal a través de Panamá. Ante ese hecho Gran Bretaña, a su vez, ocupó San Juan (Nicaragua) y la isla del Tigre en el Golfo de Fonseca. Las dos potencias se acercaban a un choque violento, provocado por el problema inmediato de quién tomaría el dominio y la construcción de una vía interoceánica a través del istmo. El mediato era el problema de la hegemonía económica y política sobre la región.

A última hora, la moderación prevaleció en las relaciones diplomáticas anglo-norteamericanas y, en 1850, el secretario de Estado Clayton y el ministro plenipotenciario inglés Henry Lytton-Bulwer firmaron el Tratado Clayton-Bulwer, por el cual se acordó reconocer el equilibrio de las respectivas fuerzas en el istmo y establecer una especie de condominio sobre el área. Ninguna de las dos potencias tomaría la iniciativa de construir el canal por decisión unilateral. La obra sería ejecutada de común acuerdo, y el país que la tuviese a su cargo se abstendría de ejercer control político exclusivo sobre el canal, así como de fortificarlo militarmente.

El Tratado Clayton-Bulwer constituyó un paso importante hacia la distensión entre Inglaterra y Estados Unidos. En 1856 los británicos comenzaron la desocupación militar de Mosquitia —que fue definitivamente reincorporada a Nicaragua en 1894— y sólo mantuvieron su presencia en Belice, vieja posesión colonial, anterior a la independencia de los países centroamericanos.

De este modo, para la década de los años cincuenta, la América Central se encontraba dividida en cinco Estados, sometida a la dominación conservadora del guatemalteco Rafael Carrera, mientras desde el exterior se ejercía sobre ella una suerte de condominio anglo-norteamericano, fundamentado en el Tratado Clayton-Bulwer.

Cuba fue también durante esa época objeto de ambiciones semicoloniales por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Como ya lo señalamos, la isla permanecía bajo dominación española mientras otros países de Hispanoamérica se emancipaban políticamente. Por una parte, durante la época de la independencia, Cuba había disfrutado de una extraordinaria bonanza económica: el descenso de la producción azucarera en Haití permitió a la gran Antilla española ampliar su propio mercado. Las guerras napoleónicas con sus bloqueos derivaron en un fuerte aumento de precio del azúcar y, de esa manera, Cuba se enriqueció: no sólo hicieron fortuna los propietarios de ingenios azucareros y grandes exportadores sino que la bonanza se filtró hasta las capas medias y los sectores populares, beneficiando a todos salvo a la masa esclava. Debido a ello, no surgió en Cuba un sentimiento revolucionario mayoritario y la isla optó por permanecer dentro de las estructuras del imperio hispánico. La bonanza azucarera se prolongó después de la independencia y alcanzó un auge particular durante los años cuarenta del siglo pasado. Para esa época, la población cubana consistía en 130.000 blancos y mulatos, 65.000 negros libres y 200.000 esclavos.

Durante los años 1828-1850 Cuba continuó próspera y relativamente satisfecha con su condición dependiente ante España. El hecho de ser colonia del gobierno de Madrid no le impedía vender su azúcar al mundo entero. Aparte de la prosperidad económica, otra razón que impulsaba a Cuba a aceptar su situación colonial era el temor de las clases altas y medias ante una eventual insurrección de los negros esclavos. Durante esos años la política de Estados Unidos era la de apoyar la permanencia del poder español en la isla, a fin de impedir que en la misma se instalase la influencia inglesa, rival fundamental de la norteamericana. En 1840 Estados Unidos prometió dar ayuda militar a España en caso de que "otra potencia" (Inglaterra) tratara de ocupar la isla de Cuba.

La política norteamericana hacia Cuba entró en una fase nueva a partir de 1848. La victoriosa guerra contra México infló hasta un grado extremo el chauvinismo estadounidense. De la afirmación del "Destino Manifiesto" se llegó hasta el planteamiento del objetivo de una "República Yanqui Universal". El capitalismo norteamericano había experimentado un gran fortalecimiento desde 1830 en adelante: durante el lapso 1830-1850 las exportaciones de Estados Unidos pasaron de casi 72 millones de dólares (US $ 71.671.000) a casi 145 millones (US $ 144.376.000), y las importaciones variaron de cerca de 63 millones (US $ 62.721.000) a casi 174 millones (US $ 173.510.000).

A causa de ese engrandecimiento político y económico, la potencia norteamericana comenzó a promover en forma más directa la anexión de Cuba, abandonando

su anterior táctica de respeto de la dominación española sobre la isla. En 1848 el gobierno del presidente Polk le ofreció a España la compra de Cuba por la suma de 100.000 dólares, cosa que el gobierno madrileño rechazó. A consecuencia de ello, en los sectores anexionistas norteamericanos se impuso el convencimiento de que había que apoyar los actos de fuerza.

El venezolano Narciso López, con larga residencia en Cuba y miembro de la corriente antiespañola pero pro estadounidense en la isla, intentó invadir Cuba desde el sur de Estados Unidos. Lo acompañaba una fuerza de exiliados cubanos y estaba provisto de armas, equipo y financiamiento procedente de intereses latifundistas y esclavistas sureños. El gobierno federal, presionado por los sectores liberales antiexpansionistas, impidió la primera expedición proyectada por López en 1849. Su segundo intento, empero, se llevó a cabo sin impedimento en 1850. Las fuerzas de Narciso López, apoyadas desde Cuba por elementos de la oligarquía terrateniente que simpatizaba con los estados sureños de Norteamérica (pero sin arrastre entre los auténticos patriotas que aspiraran a la libertad frente a España y Estados Unidos) fracasaron en esta aventura y tuvieron que retirarse derrotados hacia Nueva Orleans. Sin perder el ánimo, Narciso López armó una tercera expedición y se esforzó, esta vez, por lograr un apoyo norteamericano total y abierto. Ofreció el mando de su fuerza invasora, sucesivamente, a dos notables dirigentes estadounidenses sureños: el general Robert E. Lee y el político Jefferson Davis. Ambos se negaron, ante lo cual López tomó personalmente el mando de su fuerza invasora, integrada por 500 hombres, la mayoría de ellos norteamericanos. Esta vez el desembarco fue seguido de una derrota aún más contundente que en la ocasión anterior, y Narciso López, capturado por los españoles, fue condenado a muerte y fusilado.

Durante el período que se extiende entre 1843 y1860, la isla de La Española constituyó un foco de tensión política internacional en el área del Caribe.

La lucha independentista haitiana, conducida por Dessalines a partir de 1803, derivó en una rápida victoria sobre las fuerzas francesas del general Leclerc, y la independencia haitiana fue declarada en 1804, con triunfo ya asegurado. Dessalines asumió el mando absoluto del nuevo Estado soberano y se proclamó emperador. El negro Christophe y el mulato Alejandro Petión unieron sus fuerzas militares para derrocar al tirano en 1806. Incapaces de ponerse de acuerdo, Christophe y Petión establecieron dos gobiernos civiles, el primero en el norte de Haití, y el segundo en el sur, con Puerto Príncipe como capital. Christophe se coronó rey y estableció un régimen absolutista, basado en el control del Estado sobre la agricultura y la organización colectiva del trabajo. En cambio, Alejandro Petión gobernó como presidente de una república con orientación liberal, fundamentada en una reforma agraria individualista que, en décadas posteriores, desembocó en el minifundismo que fue fuente de miseria y atraso.

En 1818 el presidente Jean-Pierre Boyer, capaz y vigoroso, sucedió a Petión. Estableció un gobierno eficiente, empeñado en promover el desarrollo económico nacional. Después de la muerte del rey Henri Christophe en 1820, Boyer ocupó el norte de Haití y extendió su autoridad sobre esa zona.

Entre tanto, la parte oriental de la isla, tomada por Francia en 1795, fue devuelta a España en 1814 después de la caída de Napoleón. Los gobiernos haitianos de Henri Christophe y de Petión se negaron a reconocer la soberanía española sobre Santo

Domingo y reclamaron ese territorio como parte de Haití. El gobierno español fue débil e inestable, pero los criollos dominicanos lo toleraron, en parte por el temor de caer bajo la dominación del gobierno de Haití. Sin embargo, en 1821, después de la revolución española y la emancipación de Venezuela y Nueva Granada, se produjo el levantamiento patriótico dominicano de José Núñez de Cáceres, quien estableció un gobierno provisional y pidió ayuda a la Gran Colombia. Pero Jean-Pierre Boyer estimó que el momento era propicio para poner en práctica el plan haitiano de anexión de la parte oriental de la isla. En 1822, antes de que Bolívar (de viaje en el Sur) tuviese noticias de la petición de ayuda de Núñez de Cáceres desde Caracas, el ejército haitiano ocupó Santo Domingo. Bajo el mando de Boyer la isla permaneció unida hasta 1843. Ese año Boyer falleció, sin dejar ningún sucesor de capacidad comparable.

Apenas falleció Boyer, los dominicanos se alzaron contra la dominación haitiana y declararon su independencia bajo la jefatura de Juan Pablo Duarte. La declaración de independencia, hecha en febrero de 1844, provocó que el nuevo gobierno haitiano del dictador Pierrot amenazara con una invasión armada. Sin embargo, ésta no se produjo hasta 1849, cuando Faustino Soulongue era mandatario de Haití. En la lucha de defensa contra Soulongue, la República Dominicana recibió apoyo indirecto de Francia, interesada en recuperar algo de su influencia sobre La Española. Después de duros combates, los dominicanos comandados por el general Pedro Santana derrotaron a los invasores haitianos.

De esta manera, Centroamérica y el Caribe entre comienzos y mediados del siglo XIX atravesaron por diversos procesos de unidad y de separación, siendo más fuertes los factores divisionistas que los de cohesión. Las debilidades estructurales de los países centroamericanos y antillanos, así como sus divisiones, permitieron la creciente penetración de la influencia de grandes centros foráneos dominantes como Inglaterra, Estados Unidos y Francia. En América Central se desarrolló una intensa lucha de influencias entre Norteamérica y Gran Bretaña, que culminó en una especie de condominio provisional. Sin embargo, la tendencia general fue la de un paulatino fortalecimiento de Estados Unidos como primera potencia hegemónica en el istmo.

En el ámbito antillano, Cuba y La Española constituyeron, a su vez, escenarios de rivalidad entre potencias externas. Estados Unidos realizó actos de diversa índole para tratar de apoderarse de Cuba, sin lograr su objetivo. En parte España pudo mantener su control sobre la isla por el apoyo económico y político de los ingleses. La Española fue objeto de penetración comercial por intereses franceses, ingleses y norteamericanos.

Desintegración de la Gran Colombia. Ecuador y España. Congresos de Lima y Santiago

La Gran Colombia, obra de Bolívar, se desintegró definitivamente en 1830. Venezuela y Quito rechazaron el predominio de Nueva Granada, la región más grande y populosa de las tres que integraban la república colombiana. Para realizarse el sueño bolivariano de una Gran Colombia estable y justa dentro de una Latinoamérica confederada, se necesitaba el concurso de diversas circunstancias

que no existían en aquel entonces ni existen hoy. Una república liberal sana debería fundamentarse en un mercado común y en una burguesía empresarial, así como en una eficaz red de comunicaciones. Latinoamérica no poseía nada de ese género; tenía las limitaciones de un sistema feudal o semifeudal. La tendencia de cada latifundista militar —considerarse como amo absoluto de su comarca— se reflejó en la política del continente por medio de corrientes centrífugas y regionalistas de todo tipo. Para unificar naciones era necesario reunir una fuerza capaz de vencer a los caudillos regionales.

Esa fuerza podía basarse en un equilibrio entre ambiciones regionales o clasistas distintas, en el factor capitalista nacional, o en el capitalismo externo o imperialismo.

Paralelamente, los tres Estados nacidos de la desintegración grancolombiana vivieron etapas de relativa estabilidad durante los primeros quince años de su existencia soberana. Exportaron productos agrícolas a cambio de importaciones de artículos manufacturados ingleses, franceses, holandeses, o de la Alemania hanseática. En las tres repúblicas existía cierto equilibrio entre los elementos internos de tipo semifeudal y las influencias capitalistas derivadas de la vinculación al mercado exterior.

En Ecuador, el general Juan José Flores ejerció el poder durante los primeros quince años de la vida republicana. A partir de 1845 se produjeron graves pugnas civiles, y en 1847, España, renuente a renunciar definitivamente a sus posiciones en el Pacífico sudamericano, intentó intervenir en los asuntos ecuatorianos, en apoyo a la causa del general Flores. La amenaza española contra la soberanía ecuatoriana fue resentida por los países vecinos que estimaron que su propia integridad estaba igualmente en peligro.

El gobierno peruano promovió, a fines de ese año, un Congreso Americano en Lima, basado en los principios de confederación hispanoamericana que habían inspirado y reformado al Congreso de Panamá. Entre el 11 de diciembre de 1847 y el 1° de marzo de 1848, representantes de Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Nueva Granada —cinco países con litoral en el Océano Pacífico— estuvieron reunidos en Lima. Se había invitado también a Venezuela, a la Confederación Argentina y a Brasil, pero estos países, por una razón u otra, no asistieron. Los participantes en el encuentro de Lima firmaron un tratado de confederación y navegación, una convención consular y una convención postal. Sólo esta última fue ratificada, de modo que el empeño básico de Perú —crear una sólida alianza defensiva de los países del Pacífico con respaldo del resto de Sudamérica— no tuvo éxito.

Como en otras ocasiones, un proyecto de unidad política hispanoamericana quedó sin efecto a causa de la acción disolvente de dos fuerzas: los caudillismos y regionalismos semifeudales en el interior de cada república, y la acción del imperialismo comercial y político de las grandes potencias capitalistas —sobre todo Gran Bretaña— desde afuera. El patrón de las relaciones comerciales semicoloniales hacía que los grupos dirigentes de los países de Latinoamérica miraran hacia los centros hegemónicos ultramarinos y desdeñaran el acercamiento y la unión con sus vecinos. Además, existía una creciente rivalidad, derivada de los vínculos de dependencia ante el comercio inglés, entre los diversos puertos del Pacífico, constituyendo esto un factor de división en las relaciones entre los países de la costa occidental de Sudamérica.

Confederación Peruano-Boliviana y primera guerra del Pacífico

Un importante intento de unificación en el ámbito sudamericano, durante el lapso histórico que nos ocupa, fue el constituido por la Confederación Peruano-Boliviana, realizada y dirigida por el general boliviano Andrés Santa Cruz. Este valiente general de la independencia, presidente de Bolivia después de la dimisión de Sucre en 1828, intentó crear una gran entidad política en la parte occidental de Sudamérica, mediante la unificación del Alto y el Bajo Perú. El éxito inicial de su empresa provocó la hostilidad de Chile y Argentina, temerosas de una modificación del equilibrio de fuerzas en Sudamérica que pudiera amenazar sus intereses y su seguridad.

Perú sufrió trastornos internos a partir de 1835 cuando los generales Gamarra y Obregoso se alzaron contra el presidente Salaverry. Al observar los acontecimientos desde Bolivia, Andrés Santa Cruz decidió intervenir en la pugna interna peruana, pactando con Gamarra para derrocar a Salaverry y, posteriormente, confederar a Perú y a Bolivia en un solo Estado. Posteriormente, Santa Cruz pactó en el mismo sentido con el general Obregoso, quien coincidía con Gamarra en la oposición a Salaverry, pero al mismo tiempo rivalizaba con él. Ante el Pacto Santa Cruz-Obregoso, Gamarra se pasó al campo de Salaverry. Esto no cambió el rumbo de los acontecimientos: en enero de 1836, Obregoso, apoyado por los bolivianos de Santa Cruz, tomó Lima, capturó a Salaverry y lo pasó por las armas. En seguida se constituyó la Confederación Peruana-Boliviana con Santa Cruz como su presidente.

El gobierno chileno estimó que la Confederación constituía una amenaza. En el litoral del Pacífico, Perú y Bolivia unidas podrían constituir el núcleo más fuerte de poder económico y político en el ámbito de la navegación, del comercio y de la explotación de guano y minerales. La presencia en Chile de exiliados peruanos, tales como Gamarra, Vivanco, La Fuente y otros, fue el factor que permitió traducir los intereses en sentimientos: estos hombres realizaron actividades propagandísticas y contribuyeron a crear el ambiente propicio para la intervención contra la Confederación Peruano-Boliviana.

Luego de incidentes fronterizos y acusaciones de injerencia, Chile invadió el territorio de la Confederación en 1837 con ayuda de los exiliados peruanos. El ejército chileno ocupó Arequipa pero no supo retener su conquista. Santa Cruz derrotó a las fuerzas chilenas y las obligó a retroceder. De esta manera, la fase inicial de la primera guerra del Pacífico se saldó en una victoria para la Confederación Peruano-Boliviana.

En Buenos Aires, el dictador Juan Manuel Rosas veía en la Confederación una amenaza para las provincias argentinas. La creación de un fuerte bloque político territorial al Norte disminuiría la seguridad y la influencia rioplatense. Rosas decidió acercarse a Chile y tratar de llegar a un pacto contra Santa Cruz. El pretexto para una acción armada argentina contra la Confederación Peruano-Boliviana sería la reclamación por Buenos Aires de la provincia de Tarija. Las bases para un acuerdo argentino-chileno, propuestas por Rosas, fueron la disolución de la Confederación, la cesión de Tarija a los argentinos y la limitación de las fuerzas armadas bolivianas. Pero aunque Argentina y Chile coincidían en su hostilidad hacia Santa Cruz, la

desconfianza mutua impidió que concertaran un tratado de alianza. Por ello, a principios de 1838, las fuerzas argentinas invadieron el territorio boliviano sin coordinación con los chilenos.

Esta segunda fase de la guerra también derivó en un triunfo de Santa Cruz. Los argentinos fueron vencidos en el campo de batalla y tuvieron que replegarse apresuradamente. Pero mientras Santa Cruz los perseguía, el ejército chileno, bajo el mando de Bulnes, invadió Bolivia y Perú por segunda vez. En su fase final, la contienda favoreció a los chilenos. Bulnes avanzó de victoria en victoria y, en enero de 1839, derrotó decisivamente al general Santa Cruz. Este huyó y la Confederación Peruano-Boliviana fue disuelta.

Con esta victoria sobre sus rivales del Norte, en la primera guerra del Pacífico, Chile quedó como primera potencia de la costa occidental de América del Sur.

Argentina, Brasil y Uruguay en la época de De Rosas

Mientras se luchaba de esa manera por la hegemonía sobre la región del Pacífico sudamericano —o mejor dicho, por la subhegemonía, porque la potencia hegemónica principal era Gran Bretaña—, otra gran rivalidad se desarrollaba en la mitad atlántica u oriental del subcontinente. Dos gigantescos países, Brasil y Argentina, bajo la dirección de sus respectivas clases terratenientes y comerciales, y en el caso de Argentina con participación de sectores populares, lucharon por la subhegemonía sobre los territorios ubicados entre sus respectivas esferas de soberanía. Fundamentalmente, su rivalidad se concentró en Uruguay, Banda Oriental o "Provincia Cisplatina", permanente manzana de discordia entre las dos potencias. En su lucha, el imperio brasileño contó con el respaldo de los intereses extranjeros semicolonialistas y de los Estados británico y francés, mientras que Buenos Aires, y con ella las demás provincias argentinas confederadas, defendió sus posiciones bajo la bandera de un nacionalismo opuesto a las hegemonías de procedencia europea.

Ya hemos visto que para 1828 Lord Ponsonby, mediador británico, se aprovechó hábilmente de las divisiones argentinas y de la actitud pro europea de los unitarios enfrentados a los federalistas para impulsar el gobierno de Buenos Aires a renunciar a la exigencia de que la Banda Oriental formara parte de Argentina. Al mismo tiempo, hizo ver a los brasileños que tratar de retener a un Uruguay rebelde bajo su dominación sería contrario a las tendencias de la historia y constituiría la fuente de graves dificultades posteriores. Utilizando su fuerza económica, Gran Bretaña ofreció beneficios a ambas potencias si aceptaban sus propuestas, y desventajas si se le oponían. La propuesta inglesa, que fue finalmente aceptada por las partes, era la de erigir la Banda Oriental en república independiente. Brasil y Buenos Aires aceptaron la idea, y firmaron el tratado preliminar de 1828 sobre la base del respeto a la soberanía y la independencia uruguayas. Lord Ponsonby triunfaba. En sus informes al gobierno británico, señalaba que un Uruguay independiente constituiría el motivo de rivalidad entre Brasil y Argentina, e impediría que esas potencias, solas o conjuntamente, controlaran en forma excluyente el estuario del Río de la Plata. Un Uruguay independiente, Estado tapón entre dos gigantes, sería controlable por la potencia británica que, de este modo, mantendría abierto su acceso al Río de la Plata y, por él, a los grandes ríos de Sudamérica.

Sin embargo, en los años posteriores a la firma del tratado preliminar, Argentina realizó nuevos intentos por implantar su influencia en Uruguay, en contra de las influencias brasileña e inglesa. Por ello, continuó la pugna política y diplomática —y finalmente militar— entre Buenos Aires y Brasil (asistido por las potencias industriales y financieras de Europa).

Juan Manuel de Rosas, electo gobernador de Buenos Aires en 1829, fue la figura nacional argentina que dirigió la larga lucha contra Brasil y la penetración británica, y que se manifestó en favor de la gradual integración de Uruguay a la confederación rioplatense. Hasta hoy día, el carácter y la significación histórica de Rosas son objeto de apasionadas polémicas entre los argentinos. Los liberales y la izquierda tradicional lo consideraban como tirano reaccionario y negativo. En efecto, sus métodos de gobierno fueron duros y a veces crueles, y su base de sustentación social, aunque incluía a los gauchos y a otros sectores del pueblo común, tenía como factor importante a terratenientes provincianos de mentalidad elitista y antidemocrática. Sus tendencias reaccionarias se mostraron sobre todo en el aplastamiento de la rebelión de los demócratas de la "Joven Argentina" o Asociación de Mayo. Pero, por el otro lado, los nacionalistas —no sólo de viejo cuño conservador sino también los del nuevo tipo antiimperialista— señalan que Rosas se enfrentó con coraje a los grandes intereses económicos extranjeros que pretendían dominar y satelizar Argentina. También defendió tenazmente las posibilidades de desarrollo de una industria autónoma nacional contra la penetración del imperialismo comercial. Si bien es cierto que favoreció a los grandes estancieros de la pampa, también protegió y amparó los intereses de los pequeños productores y, con ellos, los de las clases populares del interior. Frente a la hegemonía económica del extranjero y de la oligarquía comercial de Buenos Aires, Rosas defendió la autonomía del desarrollo nacional y los derechos económicos y sociales de las mayorías no vinculadas al comercio de importación y exportación.

Como gobernador de la más importante de las provincias argentinas, respaldado por el Partido Federalista, Rosas promovió la firma de un pacto de confederación que sustituyera la inoperante Constitución unitaria, cuyo efecto había sido, por reacción, la separación total de las provincias. El Pacto del Litoral, del 4 de febrero de 1831, unió en Confederación a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El gobierno de Buenos Aires asumió la representación de los confederados en el exterior y se encargó de las relaciones internacionales del conjunto.

Después de su reelección en 1835, Rosas asumió poderes dictatoriales y extendió su autoridad sobre toda la nación argentina. Como parte de un programa nacionalista, el mandatario bonaerense elevó los aranceles que gravaban la importación de mercancías extranjeras. Esa medida, adoptada en 1835, constituía una réplica a la acción que tomaron los ingleses en 1833, al reocupar las islas Malvinas que habían dejado sin ocupación efectiva en 1774.

Aparte de su programa proteccionista, que golpeaba los intereses europeos, Rosas se proponía obtener el control del acceso al río Paraná, a fin de cerrar esta importante y estratégica vía a los navíos de las grandes potencias. Al actuar de ese modo, Rosas se hizo portavoz de la causa del control nacionalista sobre las grandes vías de comunicación latinoamericanas y propugnador del desarrollo nacional independiente.

Brasil, por el contrario, mantuvo su línea de alianza con los intereses británicos.

Esa línea no sufrió cambios por la abdicación del emperador Pedro I, ocurrida en 1831. La abdicación del monarca obedeció a presiones de los liberales, descontentos por el centralismo y la tendencia autoritaria que caracterizó su reinado. Junto con la oligarquía agrícola, que constituía la principal clase dominante, ascendieron en el ámbito de la toma de decisiones los grupos mercantiles y profesionales de las ciudades. Las diversas provincias del vasto país obtuvieron un mayor grado de autonomía frente a la capital imperial. Sin embargo, nada cambió con respecto a la actitud abierta y complaciente ante el comercio inglés y francés. Los grandes productores y exportadores de azúcar y café coincidían con las capas medias liberales —las primeras por interés y las segundas por principios ideológicos— en el mantenimiento del libre intercambio con el exterior. Por ello, en la larga pugna contra Rosas, los brasileños pudieron seguir contando con el apoyo de las potencias europeas. De recabar y cultivar ese apoyo se ocuparon los gobernantes de la Regencia (1831-1840), y luego el nuevo emperador, Pedro II, quien asumió el mando imperial en 1840, a la edad de quince años.

El interés brasileño coincidía con el de las potencias europeas en tratar de evitar que Rosas extendiera su influencia —aunque fuese indirectamente— sobre Uruguay, llevando ese país al área del nacionalismo económico argentino. Para el gobierno brasileño, la necesidad de impedir que Uruguay fuese a parar en el campo argentino se vio acrecentada por las secesiones que el imperio sufrió durante los años de la regencia. De 1834 hasta 1845 existió un régimen secesionista en Río Grande do Sul. Brasil temía que una derrota sufrida en Uruguay pudiera alentar a los secesionistas, no sólo riograndeses sino también de otras provincias, derivando en el desmembramiento del país.

Objetivamente, en vista de la gran superficie y la población numerosa de Brasil y Argentina, puede caracterizarse la pugna entre los dos países en la época de Rosas como una lucha por la subhegemonía sobre la mitad Atlántica de Sudamérica. Subhegemonía porque la potencia dominante, en última instancia, por su poderío comercial y naval, fue Gran Bretaña. Brasil trataba de asegurar su posición dominante actuando en alianza con el dueño principal, mientras que Argentina afirmaba sus aspiraciones subhegemónicas mediante la rebelión nacionalista contra el gran actor externo.

Uruguay se convirtió en foco de conflicto a partir del año 1836. En 1830 esa república había adoptado su Constitución y elegido a la presidencia al general Fructuoso Rivera, cuyo rival político era el general Lavalleja. Mientras Rivera era liberal y partidario del libre comercio internacional, Lavalleja era nacionalista, proteccionista y amigo de Rosas. La posición política de Rivera se plasmó en el Partido Colorado, y la de Lavalleja en el Partido Blanco. En 1834 fue elegido presidente de la República el general Manuel Oribe, partidario de Lavalleja y de los blancos. Rivera no toleró por mucho tiempo la política pro Rosas del gobierno blanco y se alzó en su contra en 1836. Así comenzó una larga guerra civil uruguaya, entre los colorados de Rivera, apoyados por Brasil y los intereses capitalistas europeos, y los blancos de Oribe, respaldados por la Argentina de Juan Manuel de Rosas. La existencia, en Rio Grande do Sul, del gobierno secesionista de Bento Gonçalves complicó el asunto, tejiéndose múltiples intrigas entre riograndeses, brasileños y colorados uruguayos.

La participación argentina en la guerra civil uruguaya se hizo cada vez más

directa, debido a que Rivera y los colorados disfrutaban del apoyo activo de unitarios argentinos, antirrosistas. Entre ellos se destacó principalmente el general Lavalle. Por la presencia de sus enemigos en Uruguay, Rosas se sintió impulsado, a su vez, a buscar la más estrecha coordinación entre sus fuerzas y las de Oribe. Pronto se llegó al establecimiento de dos gobiernos rivales y enemigos en Uruguay: Rivera, apoyado por los sectores vinculados al comercio con el extranjero, tomó Montevideo y se proclamó Presidente; Oribe, apoyado por gauchos y estancieros no vinculados al comercio ultramarino, formó otro gobierno en Cerrito.

En 1838 Rosas tuvo un conflicto con Francia, con el resultado de que esa potencia comenzó a actuar de forma más directa en contra de Rosas y de Oribe, y en favor de Rivera y los antirrosistas. Desde 1835 Francia había mostrado su disgusto ante la elevación de los aranceles argentinos. Además, el gobierno de Buenos Aires comenzó a reclutar ciudadanos extranjeros para servir en las fuerzas armadas argentinas. Ello provocó vehementes protestas francesas. En 1838, ante el reclutamiento de algunos franceses y la prisión de otros, el almirante francés Le Blanc presentó un ultimátum que Rosas rechazó. Por ello, desde marzo de 1838 hasta octubre de 1840, la flota francesa bloqueó la costa argentina, pero sin que se llegase a una declaración de guerra. Rosas, con el indudable respaldo de una nación argentina que se sentía amenazada en su dignidad y su soberanía nacional, resistió el bloqueo sin vacilaciones y con éxito. El bloqueo contribuyó a fomentar el desarrollo agropecuario y manufacturero de las provincias argentinas del interior, diversificándose la economía del país y logrando una mayor autonomía ante las fuerzas capitalistas externas.

La flota francesa, además de bloquear Buenos Aires, protegía Montevideo y daba ayuda militar y económica a Rivera quien, sintiéndose fuerte y soberano, declaró la guerra a Rosas en 1839. El gobernador de la provincia argentina de Corrientes, Domingo Cullen, se rebeló contra Rosas e hizo causa común con Rivera y Lavalle. Sin embargo, Rosas y Oribe, en campañas enérgicas y audaces, derrotaron la alianza unitaria colorada con su respaldo brasileño y francés. Cullen fue capturado y fusilado.

En 1840 el bloqueo francés fue suspendido, con lo cual quedaron debilitados Rivera y Lavalle, y Rosas se fortaleció. El motivo de la suspensión lo constituyó la grave crisis en las relaciones franco-inglesas, causada por la rivalidad de las dos potencias en el Cercano Oriente. Ante el peligro de un conflicto bélico con Gran Bretaña, los franceses estaban ansiosos por concentrar sus fuerzas navales. Antes de retirarse de Argentina, suscribieron un acuerdo con Rosas, más positivo para éste que para ellos. A cambio del compromiso de Buenos Aires de respetar la independencia de Uruguay y otorgar a Francia la cláusula de la nación más favorecida en las relaciones comerciales, los franceses retiraron su apoyo a Rivera y a los unitarios argentinos, y pusieron fin al bloqueo de la costa bonaerense.

Abandonado por sus aliados franceses, Rivera se replegó y se atrincheró en Montevideo. A partir de 1841, una escuadra argentina al mando del almirante Brown bloqueó la capital uruguaya. En 1843 el general Oribe, con respaldo rosista, se apoderó de todo el territorio uruguayo, excepto Montevideo, quedando esta última sitiada por tierra y por mar. Rivera trató de convencer a los brasileños de que intervinieran masivamente en Uruguay para salvar a ese país de ser anexado por la Argentina en violación del Tratado de 1828.

Para impedir una intervención brasileña, Rosas propuso al gobierno de Río de Janeiro las bases siguientes: Brasil dejaría de ayudar a los colorados y aceptaría que Rivera fuese expulsado del territorio uruguayo; Oribe quedaría como Presidente; a cambio de ello, Buenos Aires se comprometería a respetar la independencia de Uruguay y a desistir de cualquier intento de incorporarlo a la Confederación del Río de la Plata. Brasil no estuvo dispuesto a llegar hasta el reconocimiento a Oribe; por ello, no hubo acuerdo.

Inglaterra y Francia, reconciliadas, no estaban dispuestas a tolerar la interrupción definitiva de su comercio con Uruguay, así como tampoco a permitir que Montevideo —defendida por colorados uruguayos, unitarios argentinos y la brigada italiana de Garibaldi— cayese en manos de Oribe y, así, indirectamente, de Rosas. Exigieron que el almirante Brown levantara el bloqueo a Montevideo, pero Rosas se negó a admitir esa exigencia.

Ante la intransigencia del mandatario de Buenos Aires, Inglaterra y Francia conjuntamente enviaron escuadras a bloquear la costa de Buenos Aires, a fin de forzar a Rosas a retirarse de Uruguay y, al mismo tiempo, poner fin a su política económica nacionalista.

Este bloqueo salvó a Montevideo y a los colorados uruguayos, y golpeó a Argentina. Sin embargo, Rosas resistió con tanto éxito que, en 1849, Inglaterra levantó el bloqueo y reconoció el derecho del gobierno de Buenos Aires a controlar los accesos a los ríos interiores. Un año después, en 1850, Francia suscribió un acuerdo similar y, a su vez, puso fin al bloqueo.

Pero Brasil no dejó de buscar la ocasión para golpear decisivamente al mandatario nacionalista argentino. Las potencias europeas, pese a su retiro de la acción directa, apoyaban las iniciativas antirrosistas del gobierno de Río de Janeiro. En vista de que Oribe había efectuado incursiones en territorio brasileño, tropas de ese país ocuparon Quarai. En 1850 Rosas rompió las relaciones diplomáticas con Brasil.

En 1851 se alzó contra Rosas el gobernador de Corrientes, Justo José de Urquiza, y firmó un tratado de alianza con los gobiernos colorado de Uruguay y de Brasil. El 18 de agosto de 1851 Rosas declaró la guerra a los aliados. En diciembre del mismo año, éstos iniciaron su ofensiva bajo el mando de Urquiza. Rosas pudo contar hasta lo último con el apoyo de los gauchos para defender el régimen confederal, pero los elementos más decisivos del interior argentino le volvieron la espalda: las contradicciones de su política, semipopular y semioligárquica, proteccionista pero sin llegar a una verdadera estrategia de desarrollo nacional, patriótica pero dictatorial y represiva, le restaron fuerzas.

El 3 de febrero de 1852, en la batalla de Caseros, Rosas sufrió la derrota definitiva y se refugió en un barco inglés, buscando el amparo de sus antiguos adversarios.

Poco después, Urquiza asumió la presidencia provisional, que se transformó en constitucional luego de proclamada la Constitución Nacional de la República Argentina. Los unitarios dieron el toque final a una obra de unificación nacional que, en el fondo, había sido llevada a cabo bajo la dirección de Rosas y en nombre del federalismo.

Con la caída de Rosas, quedó consolidada la integridad e independencia de Uruguay, así como el equilibrio de fuerzas entre Argentina y Brasil.

Brasil: el problema de la trata de esclavos

Aunque Brasil generalmente llevó a cabo una política de alianza y colaboración con Gran Bretaña, no existió una armonía total entre los dos países. Desde la independencia brasileña hasta 1865, hubo periódicas disputas entre el gobierno de Río de Janeiro y el de Londres con motivo de la cuestión de la trata de esclavos negros.

Después de haber sido durante el siglo XVII la principal potencia traficante de negros —las grandes fortunas mercantiles inglesas, que fueron la base para el desarrollo posterior del capitalismo manufacturero tuvieron su origen en la importación de esclavos africanos al Nuevo Mundo—, Inglaterra suprimió ese comercio en sus colonias en 1807. La ley que abolió la trata de negros se debe a los esfuerzos humanitarios de reformistas liberales y cristianos encabezados por Wilberforce, autor del proyecto legislativo correspondiente. Gran Bretaña, que en el Tratado de Utrecht de 1713 había obtenido el Derecho de Asiento para las colonias españolas y las había abastecido de mercancía humana, en menos de un siglo se convirtió en la abanderada de la supresión del comercio de negros. Ello tenía su origen en hechos económicos: el auge del capitalismo inglés demostró las ventajas del trabajo asalariado sobre el trabajo esclavo; además, las colonias inglesas del Caribe, productoras de azúcar, estaban saturadas de mano de obra africana y no necesitaban de importaciones adicionales. Ante esa situación, el sistema social británico podía permitir que aflorara y triunfara el humanitarismo. Wilberforce y sus compañeros de lucha actuaron con una sinceridad absoluta, pero su campaña tuvo éxito porque las condiciones económicas lo permitían. Además, no necesitando importar más esclavos de Africa, Inglaterra tenía interés en impedir que otros países aumentaran sus reservas de mano de obra para la producción azucarera y de otros renglones agrícolas. Si los ingleses presionaban continuamente a Brasil para que dejara de importar esclavos, ello no sólo se debía a razones humanitarias sino, igualmente, al deseo de impedir que el noreste brasileño compitiera exitosamente con las Antillas británicas en la producción de caña de azúcar.

En 1815, bajo presión inglesa, el Congreso de Viena resolvió fomentar la abolición, en rápidas etapas, de la trata internacional de negros. Al mismo tiempo, Inglaterra convenció a Portugal para que suscribiera un convenio para la supresión de la trata en Africa al norte del Ecuador. En 1817 fue firmado otro tratado más completo entre Portugal y Gran Bretaña: los dos países establecieron comisiones mixtas para velar por la eliminación del comercio de esclavos al norte de Ecuador; los barcos de ambas potencias ejercerían funciones de policía marítima. Cuando en 1825 Gran Bretaña reconoció la independencia de Brasil, insistió en que el gobierno imperial ratificara su adhesión al instrumento de 1817. Por fin en 1826 los británicos lograron que Brasil suscribiera otro tratado adicional. Este instrumento previó la supresión definitiva del tráfico de esclavos tres años después de la ratificación, y la liberación de todos los negros importados ilegalmente después de esa fecha. Así mismo, se mantendrían las comisiones mixtas y existiría el derecho de visita en alta mar hasta 1843, para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto.

El convenio de 1826 jamás tuvo el consentimiento o el apoyo de los grandes hacendados brasileños que, para poder ampliar su producción de azúcar y café, aspiraban a importar mano de obra del exterior. Les parecía que la única forma de

conseguir dicha mano de obra era importando esclavos; la otra, consistente en ofrecer jornales decentes para atraer a trabajadores libres, iba en contra de sus costumbres y de su arraigado egoísmo. Por ello, los hacendados presionaron para que Brasil incumpliera el Tratado de 1826, demorando su ratificación y dejando que continuara la importación de esclavos africanos.

En teoría, la abolición de la importación de esclavos a Brasil debía entrar en vigencia en 1833, pero precisamente en esa fecha se incrementó dicha importación. En los años siguientes, esclavos africanos adicionales fueron traídos ilegalmente a Brasil, en número de por lo menos 50.000 cada año. Los contrabandistas de negros eran en su mayoría portugueses; se trataba de bribones de la peor calaña, capaces de cualquier atrocidad. Las autoridades de Angola, así como el cónsul de Portugal en Río, eran cómplices del negocio, y el gobierno brasileño no hizo nada para suprimirlo. Esa situación trajo múltiples incidentes, motivados por las acciones de barcos británicos contra otros que navegaban bajo pabellón brasileño.

En 1845 el gobierno brasileño denunció el convenio de 1826. Como réplica a ello, Inglaterra promulgó la Ley Aberdeen, según la cual la flota de Su Majestad ejercería unilateralmente las funciones de policía en los mares y suprimiría el tráfico de negros, asimilándolo a la piratería. La primera reacción brasileña fue de desafío. En represalia por la Ley Aberdeen, Brasil restringió la libre navegación de los ingleses en el Amazonas y el Alto Paraná. La importación de esclavos continuó: más de 250.000 entre 1845 y 1850.

Pero en 1850 Brasil cedió. En primer lugar, sus productores agrícolas se encontraban saturados de esclavos; en segundo término, el gobierno temía que la continuación de la querella con los ingleses pudiera inducir a éstos a reconsiderar su política sudamericana de conjunto, y a favorecer a los argentinos más que a los brasileños. Por ambos motivos, en 1850 fue dictada la Ley Eusebio de Queirós, a través de la cual se daba cumplimiento a lo convenido con los ingleses. Se decretó la abolición y la supresión del tráfico de esclavos (aunque no de la esclavitud como institución interna del país); se ordenó la libertad de los africanos que en lo sucesivo fuesen traídos ilegalmente; se crearon tribunales especiales de marina para juzgar con máxima severidad a los traficantes de esclavos que fuesen capturados; y se dispuso expulsar de Brasil a los extranjeros implicados en la trata de negros. Con ello, quedó abierto el camino para la anulación de la Ley Aberdeen y el restablecimiento de relaciones armoniosas entre Brasil y Gran Bretaña.

Resumen

La hegemonía comercial inglesa sobre la América Latina emancipada del control político de España y Portugal, produjo una nueva dependencia de tipo semicolonial: tuvo un efecto negativo sobre la industrialización latinoamericana. Algunos países, como Brasil, se mostraron inclinados a abrir sus mercados cabalmente a la penetración de las mercancías europeas, en tanto que otros, como el Paraguay de Rodríguez Francia, adoptaron conductas nacionalistas y provocaron antagonismos entre las potencias hegemónicas.

México fue víctima, durante el lapso estudiado en este capítulo, del expansionismo de Estados Unidos. Mientras la sociedad mexicana permaneció

Tabla 4

Tabla cronológica IV

Año	Estados Unidos y México	Centroamérica y el Caribe	Zona Grancolombiana	Chile, Perú y Bolivia	Río de la Plata y Brasil
1828		Arce entrega el poder		Santa Cruz, sucesor de Sucre	Independencia de Uruguay
1829	Adams trata de comprar Texas				Rosas, gobernador de Buenos Aires
1830	Lucas Alamán, ministro	Morazán, presidente	Desintegración de la Gran Colombia		
1831	Anglo-texanos piden exención				Pacto del Litoral. Abdicación de Pedro I
1832					
1833					Inglaterra reocupa las Malvinas. Problema de la trata de esclavos
1834					Rebelión de Río Grande del Sur. Oribe, presidente de Uruguay.
1835	Texas pierde su autonomía			Lucha civil en Perú	Rosas es reelecto.
1836	Texanos se alzan. El Alamo. San Jacinto. Texas independiente	Rebeliones contra Morazán		Creación de la Confederación Peruano-Boliviana	Comienza la guerra civil uruguaya

Tabla 4 (cont.)

Tabla cronológica IV

Año	Estados Unidos y México	Centroamérica y el Caribe	Zona Grancolombiana	Chile, Perú y Bolivia	Río de la Plata y Brasil
1837	EEUU reconoce la independencia texana			Chile ataca a Perú-Bolivia	
1838	Texas establece relaciones con Inglaterra y Francia. Conflicto entre México y Francia			Argentina, y Chile por segunda vez, atacan a Perú-Bolivia.	Francia bloquea Buenos Aires
1839		Desintegración de Centroamérica		Desintegración de la Confederación Peruano-Boliviana	
1840		Morazán huye. Apoyo de EEUU a España en Cuba			Fin del bloqueo francés
1841					Argentina bloquea Montevideo
1842		Retorno y muerte de Morazán			
1843		Muerte de Boyer			Oribe avanza. Negociaciones Argentina-Brasil
1844	Houston exige la anexión	Santo Domingo, independiente			
1845	EEUU proclama la anexión de Texas		Lucha civil en Ecuador		Demostraciones navales anglo-francesas. Bloqueo intermitente a Buenos Aires

Tabla 4 (cont.)

Tabla cronológica IV

Año	Estados Unidos y México	Centroamérica y el Caribe	Zona Grancolombiana	Chile, Perú y Bolivia	Río de la Plata y Brasil
1846	EEUU declara la guerra a México				
1847		Ocupación de Mosquitia	Amenaza española contra Ecuador. Primer Congreso de Lima		
1848	Tratado de Guadalupe Hidalgo	Independencia definitiva de países centroamericanos. Ofrecimiento de compra de Cuba.			
1849	Fiebre del Oro en California	Soulouque invade Santo Domingo.			Inglaterra levanta el bloqueo
1850		Tratado Clayton-Bulwer. Expedición de Narciso López.			Francia levanta el bloqueo. Ruptura Argentina-Brasil. Ley de Eusebio de Queiros.
1851		Muerte de Narciso López.			Alzamiento de Urquiza. Alianza contra Rosas. Guerra.
1852					Caída de Rosas
1853	Compra de Gadsden. Perry zarpa de San Francisco				

estancada y dominada por una oligarquía terrateniente semifeudal, la nación norteamericana vivió un dinámico crecimiento territorial, demográfico, agrícola y manufacturero. Aunque en la región del Sur se consolidó el sistema esclavista, en su conjunto, Estados Unidos desarrolló estructuras burguesas y capitalistas. El crecimiento capitalista, combinado con las apetencias territoriales de los grandes terratenientes del Sur, alentó un espíritu expansionista que se expresó por la doctrina del Destino Manifiesto, y se dirigió concretamente hacia el Caribe y hacia México. La rebelión contra las autoridades mexicanas de los núcleos angloamericanos establecidos en Texas y en California llevó a una guerra de conquista estadounidense contra su vecino del Sur, que llevó a que la potencia norteña, en 1848, se anexara la mitad del territorio de México.

Durante ese período, la América Central fue objeto de una pronunciada rivalidad económica y política entre Inglaterra y Estados Unidos. Dentro del cuadro de esa rivalidad, Centroamérica se esforzó por establecer y mantener su unidad nacional, basada en la Capitanía General de Guatemala, que había abarcado en la época colonial todo el istmo, excepto Panamá. La labor unificadora de Francisco Morazán fracasó ante las fuerzas centrífugas. Oligarcas feudales y liberales anticentralistas coincidieron en oponerse a la fórmula defendida por el héroe hondureño. Los "imperialismos liberales" inglés y norteamericano se aprovecharon de la división centroamericana para penetrar y captar zonas de influencia. El motivo más importante de su pugna lo constituyó la posibilidad de que tanto uno como otro pudiese construir en el futuro un canal interocéanico y controlar el tránsito mundial entre el Atlántico y el Pacífico. El Tratado anglonorteamericano Clayton-Bulwer de 1850 produjo cierto alivio en la tensión entre los dos países, y derivó en un provisional "condominio" o, por lo menos, un equilibrio entre ambos en la América Central.

Mientras tanto, Cuba fue a su vez objeto de la codicia expansionista norteamericana e inglesa, conservando Estados Unidos una clara ventaja al respecto. Varias veces se efectuaron intentos norteamericanos (movilizados sobre todo por la oligarquía sureña) para apoderarse de la isla. Al mismo tiempo, Santo Domingo se liberó de la dominación haitiana bajo la cual había estado hasta 1844 y, una vez independizada, vaciló entre una política exterior pro norteamericana y otra orientada a buscar nuevamente la tradicional protección de España.

Bajo el efecto de las fuerzas centrífugas inherentes a una sociedad semifeudal, la Gran Colombia se dividió y sus tres países integrantes sufrieron una creciente dependencia económica y diplomática respecto de Gran Bretaña. España amenazó en ciertos momentos la soberanía de Ecuador y por ello se reunieron dos congresos latinoamericanos en defensa común contra el antiguo colonialismo.

Perú y Bolivia se unieron temporalmente en una confederación, pero esta modificación del equilibrio sudamericano provocó la intervención militar de Chile y Argentina contra los países confederados. El "imperialismo liberal" británico apoyó a Chile contra el ensayo confederal.

En el lapso analizado en este capítulo, Argentina y Brasil vivieron en aguda rivalidad. El autoritarismo nacionalista de Juan Manuel de Rosas estuvo enfrentado al poder imperial brasileño, que era favorable a los intereses y la influencia de Inglaterra y Francia. Uruguay, dividido entre colorados y blancos, constituyó el principal escenario de esa gran pugna geopolítica. Finalmente, el nacionalismo

argentino fue derrotado y la influencia británica, junto con la de Brasil, se fortaleció en el Cono Sur.

No obstante su fundamental amistad con los ingleses, Brasil tuvo roces con ellos, con motivo del problema de la trata de esclavos negros. Dichos desacuerdos y querellas se prolongaron hasta 1850.

En general, se trata de una época durante la cual Latinoamérica se divide definitivamente en Estados separados, a la vez que Inglaterra, y en menor grado Francia, implantan una hegemonía semicolonial sobre el subcontinente. En el área del Caribe y de Centroamérica, la dominación semicolonial británica comienza a ser desafiada por Estados Unidos, la nueva potencia que inicia su expansión hacia el Sur a expensas de México.

América Latina, que durante los años de su combate por la independencia política había sido un actor dinámico en el escenario internacional, vuelve a hundirse en la pasividad frente al mundo exterior y vive más como objeto que como sujeto de la historia.

Conflictos americanos y penetración del capital extranjero (1853-1883)

Características de la época. Penetración del capital extranjero

La época de 1860 a 1883 se caracteriza por el surgimiento de grandes conflictos entre países americanos. El primero y más importante es una guerra civil: la de Estados Unidos, de hondas repercusiones indirectas sobre el resto del hemisferio. Tres intervenciones europeas, en México, en Santo Domingo y en Perú, demuestran que la independencia política de Latinoamérica todavía puede ser cuestionada. Dos conflictos grandes y sangrientos entre Estados latinoamericanos —el de la Triple Alianza y la segunda guerra del Pacífico— llevan claros rasgos de participación imperialista. El capital extranjero, sobre todo británico, apoya a ciertos beligerantes contra otros, a fin de derribar baluartes nacionalistas y extender su propia esfera de influencia y de explotación.

Las causas tradicionales de los conflictos latinoamericanos son básicamente territoriales. En sus convenios bilaterales y en el Congreso de Panamá, los nuevos países independientes habían fijado el *uti possidetis* de 1810 como criterio para la delimitación de sus respectivos territorios. Pero en la mayoría de los casos los documentos que sirven de base a tal delimitación son inexactos y cuestionables, sujetos a interpretaciones divergentes. Las cédulas reales y otros recaudos de la época colonial hacen descripciones vagas y a veces incorrectas de los rasgos geográficos de las regiones fronterizas. Ello daría lugar, después de la independencia, a un sinfín de disputas y reclamaciones entre países latinoamericanos, cuyos límites en muchos casos deben ser fijados en zonas selváticas o agrestes, apenas exploradas.

En los casos de disputa territorial debida a la inexactitud de los documentos coloniales, generalmente son las clases terratenientes las que muestran mayor empeño en "no ceder ni una pulgada" y en anexar, si fuere posible, el territorio ocupado por el vecino. La oligarquía latifundista mide el poder y la gloria en kilómetros cuadrados de soberanía y de propiedad, e influye en los militares y los políticos-diplomáticos para que ellos, a su vez, asignen absoluta prioridad a la cuestión territorial.

En algunos casos, como el de los países del Pacífico, se trata más de recursos naturales que de tierras, y los grupos interesados en la pugna son más comerciantes que terratenientes.

En todos estos conflictos tradicionales, de origen autóctono, intervienen los imperialismos financieros y buscan su propio provecho en medio de los choques fratricidas que dividen a la gran comunidad latinoamericana.

La presencia de las inversiones extranjeras en Latinoamérica, sobre todo británicas, se hace evidente a partir de 1850. Antes de esa fecha los capitalismos inglés y francés —los únicos desarrollados en una Europa todavía semifeudal—

eran exportadores de mercancías y no de capitales. Su gran interés en América Latina, como en Asia y Africa, había sido la conquista de mercados para sus productos manufacturados. Pero para mediados del siglo la oferta de capital aumentó bruscamente en los centros desarrollados. El hallazgo del oro de California contribuyó a la saturación de los mercados financieros tradicionales. Para encontrar altas tasas de interés o de ganancia el capital tenía que alejarse de sus centros de origen y buscar campos de inversión en las zonas aún subdesarrolladas en Europa, así como en continentes lejanos.

Las inversiones extranjeras —inglesas, sobre todo, francesas y de otras regiones de Europa occidental, así como norteamericanas en proporción menor— se hicieron presentes en Latinoamérica en la extracción y la exportación de materias primas y productos básicos. En segundo lugar, se abocaron al desarrollo de vías de comunicación —ferrocarriles, carreteras y accesos portuarios— necesarias para asegurar el transporte y el mercadeo de esos productos. Luego se trasladaron al desarrollo de todo tipo de servicios. Al mismo tiempo, se multiplicaron los préstamos de bancos europeos a los gobiernos de América Latina para gastos de todo tipo, ya fuesen militares o de índole pacífica.

A consecuencia de esta penetración financiera europea, y sobre todo inglesa, en América Latina aumentó la dependencia. A diferencia de Estados Unidos, donde existía una burguesía empresarial capaz de utilizar el capital extranjero para el fomento de una economía nacional autosostenida, en Latinoamérica se creaban situaciones de servidumbre por deudas. La incapacidad de gobiernos y particulares para cancelar obligaciones financieras ante el extranjero constituyó el motivo de diversas intervenciones.

Por otra parte, el capitalista extranjero que participa directamente en la vida económica de un país pretende que esta vida se desenvuelva de conformidad con sus propios intereses y le ofrezca un grado máximo de seguridad. Por ello usará toda su influencia, a través de presiones y sobornos, para que la política del país se ajuste a las exigencias del interés de particulares poderosos. Los capitalistas extranjeros y la oligarquía terrateniente y comercial autóctonos coincidirán en promover una política nacional conservadora que defienda los privilegios financieros y latifundistas. Así, moverán sus peones políticos y militares para derrocar a gobiernos nacionalistas o abocados a transformaciones sociales antioligárquicas. Y, en ciertos casos, empujarán al país dependiente hacia conflictos internacionales convenientes para sus intereses. Cada vez que un país se rebele contra su dominación, llamarán a los gobiernos de las potencias hegemónicas para que intervengan contra la nación díscola mediante el envío de tropas expedicionarias; todo se hará en nombre de la defensa de la "civilización" (capitalista) contra la "barbarie" (todo lo que cuestione el papel dirigente de los oligarcas terratenientes, financieros y comerciales).

Evidentemente, las inversiones extranjeras, a la vez que acentuaban la dependencia semicolonial de América Latina, tendían a despertar nuevas fuerzas en el seno de ese continente. La creciente explotación de minas y plantaciones implicaba la formación de núcleos proletarios, de obreros asalariados. La relación salarial comenzó lentamente a desplazar relaciones de trabajo más tradicionales, tales como la esclavista y la servil. Al servicio de las empresas extranjeras comenzaba a formarse una capa media nueva de administradores y empleados nativos. La construcción de vías de comunicación para uso del capitalista foráneo favoreció la

vinculación de las diversas regiones de los países penetrados. De ese modo, el imperialismo echó las primeras bases para la transformación burguesa de las sociedades latinoamericanas y para la creación de aquellas fuerzas sociales y políticas que, medio siglo más tarde, comenzarían a levantarse contra la nueva dependencia y contra los factores de atraso y de injusticia internos.

La Guerra de Secesión de Estados Unidos

A comienzos de la etapa que nos ocupa, Estados Unidos jugó un papel secundario en la penetración capitalista en América Latina.

La gran república norteamericana sólo había llegado a un desarrollo capitalista incipiente y, en todo caso, su propio interior —sobre todo las vastas regiones vírgenes del Oeste— constituía un campo de inversión suficiente. Por lo demás, Estados Unidos estaba dividido en dos campos, correspondientes a dos sistemas sociales y económicos contrapuestos. El Norte, burgués, capitalista y manufacturero, se enfrentaba al Sur, aristocrático, esclavista y agrícola. Para que Estados Unidos pudiera liberarse definitivamente de toda dependencia económica ante Gran Bretaña y desarrollar su potencial capitalista propio, era necesario que la burguesía norteña derrotara a la aristocracia latifundista del Sur, que se oponía a una política proteccionista y de estímulo a las manufacturas, a la vez que defendía el principio del trabajo esclavo contra el del trabajo libre asalariado.

Se trataba de un choque inevitable, de contenido revolucionario, entre un orden social viejo y otro nuevo. Como casi todos los choques de ese tipo, no podía dejar de ser violento.

Desde 1840 en adelante, los norteños y los sureños debatían, con una intensidad creciente, los siguientes problemas:

1. Proteccionismo contra libre comercio.
2. La expansión hacia el Sur y el Oeste.
3. Trabajo libre contra esclavismo.
4. Burguesía contra aristocracia.

En lo referente al comercio exterior, los sureños eran librecambistas, ya que su algodón era adquirido tradicionalmente por los ingleses, como materia prima para las manufacturas de Manchester. A cambio de su algodón, los sureños importaban productos manufacturados británicos y recibían inversiones procedentes de Inglaterra. Las plantaciones del sur de Estados Unidos eran, de hecho, una dependencia del capitalismo inglés y no del naciente capitalismo de los estados del Norte. Los intereses de los latifundistas de Georgia, Virginia o las Carolinas coincidían perfectamente con los del capitalismo británico. En cambio, estaban en total desacuerdo con el afán de la burguesía financiera y manufacturera de Nueva York y de Nueva Inglaterra: implantar una política proteccionista para favorecer un desarrollo capitalista nacional y autónomo. El proteccionismo significaría separar al Sur de su polo de atracción, el capitalismo inglés, y obligarlo al emergente capitalismo nacional. El Sur rechazaba ese capitalismo nacional ascendente porque implicaba la destrucción de la sociedad latifundista y esclavista. En ese sentido, la pugna política entre estados del Norte y del Sur era el reflejo de una pugna en favor y en contra de la liberación económica del país frente a la metrópoli inglesa.

Con respecto al problema de la expansión hacia el Sur y hacia el Oeste, existían discrepancias igualmente agudas entre los estados septentrionales y meridionales de Norteamérica. Los latifundistas sureños eran expansionistas territoriales; su afán era anexar nuevas tierras que se prestaran a la explotación agrícola con base en la esclavitud. En su expansionismo, por lo menos en lo que al Oeste se refiere, pudieron contar con el apoyo de gran parte de la masa agricultora del país. Los trabajadores que partían hacia la conquista del Oeste, en busca de tierra propia, coincidían en su respaldo a una política que fomentara la marcha hacia el Occidente y la ayuda del gobierno federal a las regiones del interior. Si los latifundistas eran antiburgueses para defender sus privilegios aristocráticos, los agricultores pequeños lo eran porque temían y rechazaban la penetración en el campo de un capitalismo hipotecario opresor y expropiador. De esta manera, el Partido Demócrata pudo dominar durante décadas la escena política norteamericana. Como partido de agricultores tenía una amplia base popular pero estaba dirigido en gran medida por los latifundistas propietarios de esclavos.

Cada vez que los pioneros del sudoeste penetraban en un nuevo territorio, y que los indios cedían otras de sus posesiones ancestrales, se planteaba la cuestión de saber si ese nuevo territorio federal sería "esclavista" o "libre". En el fondo, se trataba de saber si en el Oeste prevalecería el latifundio con esclavos o la pequeña propiedad campesina bajo influencia capitalista. Así mismo, era una pugna por obtener la mayoría en el Congreso Federal. Si un nuevo territorio del Oeste caía bajo el control de los sureños, ello significaba que la causa del Sur contaría con varios diputados adicionales, así como dos senadores, cuando el territorio se convirtiese en estado. Si, en cambio, en la región dominaba la influencia norteña, se incrementaba la fuerza numérica de los liberales (posteriormente "republicanos" en el parlamento de Washington).

Si el conflicto estructural entre dos sistemas sociales constituía la causa fundamental de la Guerra de Secesión, junto con el problema del proteccionismo y el de los nuevos territorios del Oeste, la cuestión del esclavismo representó su motivo más inmediato y subjetivo. Latifundistas, burgueses y políticos actuaban en función de intereses económicos y sociales, pero para las masas populares el conflicto tenía connotaciones emocionales e idealistas. Los blancos humildes del Sur no pensaban en la defensa de la esclavitud; lo que los molestaba y los excitaba contra los "yanquis" del Norte era el afán centralizador de éstos; la amenaza que representaba el poder federal en manos yanquis para la autonomía regional y local de la gente del Sur. Los trabajadores del Norte, a su vez, no pensaban en términos de revolución burguesa: su creciente indignación contra el Sur se fundamentaba en el rechazo a la barbarie esclavista. Los abolicionistas —minoría de activistas enemigos del esclavismo— pintaban con los colores más oscuros el cuadro de las atrocidades de las que eran víctimas los negros. La célebre novela de Harriet Beecher Stowe, *La cabaña del tío Tom*, constituyó el esfuerzo propagandístico abolicionista de mayor efecto y de nivel literario y humanitario más elevado. El libro de la señora Stowe fue vendido en millones de ejemplares y el presidente Lincoln se refirió a la autora como "la pequeña dama que desencadenó una guerra tan grande".

Por último, el conflicto entre el Norte y el Sur era el de dos clases dominantes y dos estilos de vida contradictorios. El Norte era burgués, plebeyo, popular,

igualitario. En cambio, el Sur era aristocrático y ensalzaba los valores del elitismo social y cultural. En el Norte, el hombre del pueblo trabajaba y luchaba por ascender a las filas de una burguesía capitalista que todavía no se diferenciaba mucho de la masa en cuanto a gustos y costumbres. En el Sur, la aristocracia terrateniente cultivaba las cualidades del "caballero" que se eleva sobre la masa y la domina.

La elección de Abraham Lincoln para la presidencia de Estados Unidos en 1860 motivó que el conflicto entre el Norte y el Sur se agudizara. Dentro del Partido Republicano —agrupación radical y popular, fundada pocos años antes— Lincoln representaba al grupo más progresista. Los oligarcas sureños veían en su elección una virtual declaración de guerra. Ya los ánimos estaban excitados por múltiples incidentes violentos: la incursión armada de John Brown, su captura y ejecución; los sangrientos choques entre abolicionistas y esclavistas en Kansas; la ayuda de los abolicionistas a los esclavos en fuga. Con todo ello, Lincoln en la Casa Blanca trató de conciliar, y salvar la paz y la unión. En el Sur, muchos hombres moderados y sensatos trataron de convencer a sus conciudadanos de que aceptaran los cambios inevitables, renunciando voluntariamente al esclavismo y tratando de convivir con un Norte en proceso de industrialización. Pero de nada sirvieron los esfuerzos de paz. La tensión creció y el día 12 de abril de 1861 la guardia nacional de Virginia abrió fuego contra el Fuerte Sumter, en el puerto de Charleston. La Guerra de Secesión había comenzado.

En el primer año de la guerra, Lincoln se abstuvo de proclamar la emancipación de los esclavos, pues aún esperaba restablecer la paz mediante negociaciones con los rebeldes. Estos, por su parte, constituyeron su Confederación de Estados, con Jefferson Davis en la presidencia. Los rebeldes trataron de captar la simpatía del mundo exterior, presentando su causa como una lucha justa en defensa de la autonomía regional, contra un poder central supuestamente tiránico y desconocedor de los "derechos de los estados". En vista de que esa propaganda no era contrarrestada por una vigorosa proclamación de los principios abolicionistas y por ataques contra el esclavismo, en el primer año de la guerra muchos observadores internacionales tendieron a favorecer al Sur más que al Norte.

Por lo demás, el capitalismo británico —potencia principal del mundo— tenía todo interés en apoyar al Sur y fomentar a su vez los sentimientos favorables a la causa rebelde. Para la industria y las finanzas inglesas, la confederación sureña representaba una colonia económica importante, proveedora de algodón para las fábricas de Manchester y mercado seguro para los productos de la industria británica. El 80% del algodón consumido en Inglaterra procedía del sur de Estados Unidos. Palmerston reflejaba el sentimiento de la clase capitalista inglesa: "No nos gusta la esclavitud, pero necesitamos algodón, y detestamos la ley arancelaria Morrill". Además de la burguesía británica, también la aristocracia conservadora de ese país simpatizaba con los dirigentes sureños, caballeros terratenientes, defensores de la vieja sociedad vertical contra la "plebe" del Norte.

Cuando el gobierno de Lincoln bloqueó los puertos del Sur, Inglaterra acogió dicho bloqueo como una declaración de neutralidad que implicaba el reconocimiento de los rebeldes como beligerantes legítimos. Aparte de ello, contrabandistas ingleses llevaron armas y abastecimiento a los sureños, deslizándose a través del bloqueo unionista. Después de la victoria sureña de Bull Run, en julio de 1861, Inglaterra estaba casi convencida de que el Sur ganaría la guerra y se separaría en

forma definitiva del Norte. Los confederados se aprovecharon de ese sentimiento, decidiendo el envío a Londres de una misión diplomática extraoficial, integrada por los señores Slidell y Mason. Los norteños tuvieron noticias de ese plan y, en noviembre de 1861, el navío unionista San Jacinto detuvo en alta mar al barco inglés Trent y capturó a Slidell y Mason que iban a bordo del mismo. Este incidente provocó una gran tensión entre Inglaterra y el gobierno de Lincoln, temiéndose el estallido de un conflicto armado.

En 1862 la situación nacional e internacional comenzó a cambiar para la causa norteña. Después de las victorias iniciales de los confederados, los unionistas se fortalecieron paulatinamente. Aunque sus tropas eran inferiores en calidad a las de los sureños, superaban a éstas en cantidad y equipos. A consecuencia de ello, Inglaterra dejó de confiar en el triunfo de la causa de los rebeldes. Además, la industria textil de Manchester comenzó a buscar nuevas fuentes de algodón, incrementándose las importaciones de algodón egipcio y de la India, en sustitución parcial de los estados confederados. Por otra parte, si bien era cierto que el argumento "algodonero" tendía a inclinar la simpatía de Inglaterra hacia el Sur, el Norte esgrimía otro medio de presión, que era el del trigo. Buena parte de las importaciones inglesas de trigo provenía de la parte norte de Estados Unidos. Si Gran Bretaña, bajo la presión de sus intereses textiles, apoyaba al Sur, el Norte podía ejercer represalias, reteniendo o interrumpiendo la exportación de granos a Inglaterra. El "Rey Trigo" estaba en guerra con el "Rey Algodón" y, a medida que pasaba el tiempo y la India y Egipto fueron sustituyendo a la Confederación como suministradores de algodón, el "Rey Trigo" fue imponiéndose.

Por último, un factor muy importante que tendió a debilitar el respaldo británico al Sur y a mejorar las relaciones de Londres con el gobierno de Lincoln lo constituyó la clase obrera inglesa. En aquellos años, que eran los del desarrollo del sindicalismo y de la conciencia clasista del proletariado europeo —la Primera Internacional fue fundada en Londres en 1864—, los trabajadores ingleses reconocieron claramente el contenido progresista de la lucha norteña contra el esclavismo. A pesar de que el bloqueo norteño al Sur y la consecuente disminución del abastecimiento algodonero golpeaba duramente a los obreros textiles ingleses, causando una desocupación masiva, estos trabajadores mostraron una admirable solidaridad con los norteamericanos que luchaban por la libertad del pueblo y la abolición de la esclavitud. Organizaron grandes manifestaciones de apoyo a la causa norteña y de protesta contra la política pro sureña de su gobierno. Los trabajadores norteamericanos, a su vez, les enviaron mensajes de agradecimiento y dinero para ser utilizado en beneficio de quienes quedaban cesantes por efecto del bloqueo a las zonas algodoneras.

En 1863 y 1864 esa solidaridad entre los trabajadores del norte estadounidense y de Gran Bretaña se intensificó. En 1864 Carlos Marx, quien fungía en ese entonces como secretario de la Asociación Internacional de Trabajadores, dirigió un telegrama a Lincoln en el cual le expresaba el fervoroso respaldo de los trabajadores del mundo en la lucha por la emancipación de los esclavos. Lincoln había clarificado por su parte el aspecto social e ideológico de la guerra, al emitir la primera Proclamación de Emancipación el 23 de noviembre de 1862, y la segunda y definitiva el 1° de enero de 1863. La primera proclamación emancipaba a todos los esclavos en las áreas rebeldes; la segunda declaraba abolida la esclavitud igualmen-

te en zonas leales al gobierno federal. Los esclavistas leales serían indemnizados, a diferencia de los rebeldes. Con estas medidas, la opinión pública del mundo exterior se volcaba mayoritariamente en favor del Norte. En Gran Bretaña no sólo los obreros sino también la clase media se movilizaban en favor de Lincoln y en contra de que continuara la ayuda que, discretamente, bajo presión de los capitalistas y los aristócratas, se venía prestando al Sur. Dicha ayuda había llegado hasta el punto de suministrar barcos de guerra, disfrazados de mercantes, a la armada de los estados confederados. Uno de esos barcos, el Alabama, enviado a América en 1862, fue objeto de protestas del gobierno federal y, eventualmente, de un célebre arbitraje internacional.

Durante los últimos dos años de la Guerra de Secesión, se hizo cada vez más evidente que la victoria final sería del Norte. La sociedad burguesa industrial arrollaría a la sociedad aristocrática y agrícola. Con su acostumbrado pragmatismo, los dirigentes económicos y políticos de Inglaterra se acomodaron a la realidad, que era la del nacimiento de una nueva potencia capitalista moderna, liberada del lastre que habían significado las anacrónicas estructuras elitistas y esclavistas del Sur.

La intervención francesa en México

Durante la Guerra de Secesión, Estados Unidos se encontraba en la incapacidad de aplicar la Doctrina Monroe. Este hecho alentó a las potencias europeas a emprender aventuras colonialistas o recolonizadoras en América Latina. Durante el lapso que coincide con la guerra civil norteamericana, Francia ocupó México, y España intentó la reimplantación de su poder en Santo Domingo y en la región del Pacífico sudamericano. Con su relativa debilidad militar y económica, Estados Unidos y su Doctrina Monroe gozaban de suficiente prestigio en el ámbito mundial como para constituir un obstáculo a las intervenciones más directas. Además de ello, nada podía hacerse en contra de la voluntad de Gran Bretaña. Las intervenciones de Francia y España durante los años 1862-1865 gozaban de la tolerancia inglesa, y este hecho tenía una importancia por lo menos igual a la que revestía la no aplicabilidad de la Doctrina Monroe.

En México, desde 1854, los bandos conservador y liberal estuvieron enfrascados en ardua lucha que, a partir del año 1858, tuvo las características de un conflicto armado en gran escala: la Guerra de la Reforma. En el bando conservador se alineaban la oligarquía latifundista y el alto clero, baluarte del tradicionalismo y de las formas semifeudales. Los liberales, por su parte, como representantes de capas medias y populares, elaboraron el programa de la Reforma que preveía la implantación de la democracia, la separación entre Estado e Iglesia, el fomento a la escuela pública y laica, y la reforma agraria con base en la expropiación de los latifundios clericales. La lucha entre la oligarquía y las capas medias liberales fue feroz: de una y otra parte se odiaban y aniquilaban; los unos y los otros movilizaban contingentes campesinos. Si bien la mayoría del campesinado mexicano reconocía que la Reforma defendía sus intereses, o por lo menos representaba un paso desde una servidumbre insoportable hacia una condición más libre y más digna, muchos humildes habitantes del agro luchaban contra la causa de su propia emancipación social y política, por motivos de temor y fanatismo religiosos: el clero reaccionario

identificaba la causa latifundista con Cristo y la Virgen de Guadalupe, prometiendo el cielo a quienes defendieran los privilegios, y el infierno a quienes pelearan por la democracia. La Reforma, llegada al poder bajo la jefatura de Benito Juárez, proclamó la Constitución liberal de 1857. En 1858 los conservadores conducidos por Miramón desencadenaron la guerra contra los liberales. Pero las fuerzas populares se impusieron paulatinamente, y en 1861 Juárez volvió a ocupar la capital del país, y estableció su gobierno.

Uno de los primeros actos del gobierno de Juárez —expresión de la aspiración democrática y patriótica de las clases medias y populares— fue el de revisar las medidas fiscales de sus predecesores oligárquicos y suspender el pago de la deuda externa mientras se efectuaban las averiguaciones necesarias sobre los orígenes y las negociaciones de dicha deuda. La suspensión de los pagos al exterior fue tomada como pretexto por la oposición conservadora mexicana para alentar a las potencias acreedoras a intervenir en el país contra un gobierno popular que "no respetaba la propiedad privada". La oligarquía latifundista y los capitalistas extranjeros se unieron en un sólido frente para tratar de derrocar a Juárez y someter a México nuevamente a la dominación conjunta del capital europeo y del feudalismo nativo.

En octubre de 1861, Gran Bretaña, Francia y España resolvieron emprender una intervención armada conjunta para obligar a Juárez a pagar la deuda externa y para "proteger sus respectivos intereses" en México. La guerra civil norteamericana y la imposibilidad práctica de aplicar la Doctrina Monroe los alentaron en su empresa. En diciembre de 1861 tropas expedicionarias españolas desembarcaron en México; las francesas y las británicas les siguieron en enero de 1862. Francia se mostraba más agresiva que las otras dos potencias: Napoleón III, deseoso de imitar a su gran tío, soñaba con un imperio francés en América. Inglaterra y España se mostraron satisfechas con las seguridades que Juárez les dio (los pagos al exterior serían reanudados en breve), y optaron por retirar sus fuerzas de México. Los franceses, empero, rechazaron todo arreglo pacífico con el gobierno de la Reforma, y prosiguieron la guerra en unión con las tropas contrarrevolucionarias del general Miramón. Los liberales tuvieron que replegarse ante la superioridad del armamento francés y conservador, y en junio de 1863 las tropas extranjeras y sus aliados de la oligarquía nativa ocuparon la capital mexicana. Las fuerzas populares, comandadas por Juárez, continuaron su resistencia al invasor en las zonas rurales del país.

Bajo la protección de los franceses, la oligarquía mexicana se reunió en asamblea nacional y decidió establecer un régimen monárquico. Se buscaría en Europa, por intermedio de Napoleón III, un príncipe que estuviera dispuesto a asumir la corona imperial de México. Mientras tanto, el país estaría gobernado por una junta de regencia.

Napoleón III logró convencer a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador austríaco Francisco José, de que aceptara el trono mexicano. Maximiliano, hombre de carácter apacible y de mente ingenua, se dejó convencer (por el monarca francés, así como por su propia esposa, la ambiciosa Carlota, hija de Leopoldo I de Bélgica) de que Dios y el pueblo mexicano lo habían escogido como su instrumento y su señor, respectivamente. Aceptó el trono y Napoleón III quedó satisfecho: junto con algunos de los puntales del mundo financiero de París, esbozó planes para el establecimiento de un gran protectorado francés en el Nuevo Mundo, que abarcaría no sólo México sino que se extendería luego hacia las Antillas y Centroamérica.

En 1864 Maximiliano y Carlota llegaron a México y fueron coronados emperador y emperatriz. Napoleón III les prometió que las tropas francesas permanecerían en el país para pacificarlo cabalmente y garantizar la estabilidad del trono. Pero esta promesa no se cumplió. En primer término, el pueblo mexicano dirigido por Juárez continuó su lucha contra el usurpador extranjero y paulatinamente socavó el régimen imperial. La represión se hizo cada vez más difícil y costosa, causando serios problemas al fisco francés. Por otra parte, Estados Unidos, que ya había superado la Guerra de Secesión, comenzó desde 1865 a presionar fuertemente para que Francia retirase sus fuerzas de México. El gobierno norteamericano hizo saber a Francia que consideraba la ocupación de México como un acto francamente inamistoso. Por último, Napoleón III tuvo motivos, derivados de la dinámica política europea, para desear el abandono de la aventura mexicana. A partir del estallido de la Guerra de los Ducados en 1864, Prusia y Austria se encontraban enfrentados, y Francia podría verse envuelta en un eventual conflicto militar, debiendo por ello concentrar sus fuerzas en Europa y repatriar a los contingentes destacados en países lejanos.

En 1866 Napoleón III dijo claramente a Maximiliano que se veía obligado a retirar sus tropas de México y a abandonarlo a su suerte. Aconsejó al infortunado usurpador que saliera del país para salvar su vida. Maximiliano estuvo a punto de abdicar y seguir el consejo de Napoleón, pero Carlota lo disuadió; con gran elocuencia y dramatismo convenció a su marido de que él no debía renunciar a la misión que Dios le había confiado. Con la intención de buscar ayuda para salvar el trono de Maximiliano, Carlota viajó a Europa, pero se encontró con el frío rechazo de Napoleón III y la negativa igualmente firme, aunque más gentil en su forma, del emperador de Austria. Después de haberse entrevistado con el Papa, quien a su vez le aconsejó persuadir a Maximiliano para que huyera de México, Carlota perdió la razón y tuvo que ser recluida en un asilo. Entre tanto Maximiliano, solo y casi cercado por sus enemigos, optó por el sacrificio: rechazó las últimas oportunidades de ponerse a salvo y, en el mes de junio de 1867, fue capturado por las victoriosas fuerzas de Benito Juárez. Este, consciente de su deber de disuadir a cualquier futuro usurpador extranjero, hizo fusilar a Maximiliano junto con los traidores Miramón y Mejía, en Querétaro, el día 19 de junio de 1867. Maximiliano murió con admirable entereza. Un hombre con grandes virtudes personales pero carente de todo sentido de la realidad histórica y política. La principal responsabilidad de su destrucción la tuvo sin duda Napoleón III.

Así terminó la intervención francesa en México, una de las tres aventuras europeas en el Nuevo Mundo durante la Guerra de Secesión norteamericana.

Centroamérica y el Caribe: intervenciones norteamericanas

A pesar del Tratado Clayton-Bulwer, suscrito en 1850 entre Inglaterra y Estados Unidos, no cesaron las intervenciones de ciudadanos de esta última potencia en los asuntos internos de América Central. Los expansionistas sureños no aceptaron el arreglo con Gran Bretaña y continuaron impulsando una política de "Destino Manifiesto" y de expansionismo sin límites.

En Nicaragua los liberales, derrotados en 1845 al cabo de un conflicto civil, prepararon su retorno al poder organizando una expedición desde el territorio norteamericano, con el apoyo activo de elementos de ese país. El aventurero William Walker, jefe de una pandilla de mercenarios conocidos como "los filibusteros", fue contratado por hombres de negocios del sur de Estados Unidos, que aspiraban a continuar su expansión meridional, y apoyaban al bando rebelde nicaragüense. Walker y los "filibusteros" invadieron y dominaron Nicaragua en 1855. En lugar de entregar el poder a los rebeldes nicaragüenses, Walker estableció su propia dictadura personal sobre el país y preparó, desde Managua, la conquista de toda la América Central. Ante las protestas centroamericanas e inglesas, el gobierno de Estados Unidos declaró no tener responsabilidad alguna en el asunto, expresando que Walker actuaba por su propia cuenta, al margen de la ley. Sin embargo, era público y notorio el respaldo que los sectores económicos influyentes del sur de Estados Unidos daban a los filibusteros y la simpatía con que miraban dicho respaldo importantes hombres públicos norteamericanos, así como órganos de prensa de ese país.

Toda Centroamérica se unió contra Walker en la llamada "Guerra de los filibusteros" y logró expulsarlo del istmo en 1857. Sin embargo, el jefe filibustero no se dio por vencido y realizó una segunda invasión a Centroamérica en ese mismo año. Nuevamente fue obligado a retirarse. Volvió a la carga por tercera vez en 1860, pero esta vez se encontró con unidades navales británicas movilizadas en defensa de la integridad centroamericana. Walker fue capturado por los ingleses, quienes lo entregaron a los centroamericanos para ser condenado a muerte y fusilado.

Durante el mismo período, Estados Unidos intensificó sus maniobras para apoderarse de la isla de Cuba. Como ya se señaló, desde Jefferson existió en Norteamérica un designio geoestratégico para la eventual anexión de Cuba. John Quincy Adams había realizado gestiones para asegurarse de que Cuba quedara bajo la débil dominación española, y para que algún día pasara a manos de Estados Unidos "como una fruta madura". El teórico de la geopolítica norteamericana, el almirante Mahan, enfatizó a su vez la importancia de que su país dominase las islas y los mares ubicados en proximidad estratégica. Como ya se mencionó, el presidente Polk ofreció comprar Cuba por 100.000 dólares en 1848. De 1849 a 1850 Narciso López, respaldado por los sureños norteamericanos, realizó sus intentos por liberar a Cuba de los españoles para unirla o asociarla con Estados Unidos.

En 1853, luego de la presidencia liberal de Fillmore, los demócratas volvieron al poder en Estados Unidos con Franklin Pierce como presidente. Al asumir el mando, Pierce prometió "no dejarse desviar del expansionismo" y, como prueba de ello, su administración emprendió nuevos intentos de adquirir la isla de Cuba. En 1854 ofreció a España la suma de 130 millones de dólares, a la vez que la amenazó con motivo de un incidente marítimo que había tenido lugar. Sin embargo, España se mostró firme y no aceptó vender su posición colonial más valiosa. En el sur de Estados Unidos era fuerte la presión política en favor de una invasión armada a la isla. Los hacendados y comerciantes de "Dixie" difundieron el rumor de que Gran Bretaña abrigaba un plan para adquirir Cuba, emancipar a los esclavos en la isla y establecer una "república africanizada" que serviría de base para la subversión antiesclavista en Estados Unidos. Como parte de esa presión, tres ministros plenipotenciarios norteamericanos acreditados en capitales europeas se reunieron

en la ciudad belga de Ostende y enviaron un memorando al presidente Pierce, recomendando la conquista de Cuba por la fuerza. En la propia isla, el Club de La Habana —expresión política de la oligarquía azucarera— era partidario de echar a los españoles y unirse a Estados Unidos, en estrecha armonía con los esclavistas sureños. Pero los proestadounidenses tenían en su contra las capas medias cubanas, cuyos elementos políticamente pensantes y activos se dividían en autonomistas (reformistas que exigían mayor autonomía política para la isla, sin independizarla completamente de la metrópoli española) y patriotas partidarios de una "Cuba cubana", libre de cualquier dominación extranjera.

Para 1868 el movimiento patriota había adquirido suficiente fuerza y respaldo como para alzarse en armas contra España. El ambiente internacional —caída de Maximiliano en México, ascenso nacional de Italia y Alemania contra las potencias viejas, derrota de las aspiraciones hegemónicas españolas en Santo Domingo y Perú— ciertamente favoreció el alzamiento. Los rebeldes proclamaron la Primera República que se mantuvo durante diez años en constante lucha armada contra la potencia española. Sin embargo, para 1878 la fuerza colonialista se impuso y el gobierno de Tomás Estrada Palma se vio obligado a capitular. Pero el pueblo no estaba vencido: la lucha independentista continuó en forma de incesantes acciones guerrilleras.

Intervenciones españolas en Santo Domingo y en Sudamérica

República Dominicana, que se había liberado de Haití en 1844 y se había defendido exitosamente de un intento haitiano de reconquista efectuado en 1849 por el general Faustino Soulouque, fue invadida nuevamente en 1855. Siguiendo el ejemplo de Luis Napoleón Bonaparte, Soulouque se había hecho coronar emperador y sus ambiciones territoriales no tenían límites. Después de repeler en dura lucha esta nueva agresión haitiana, los dominicanos se encontraron divididos en tres tendencias en lo que respecta a las relaciones exteriores de su país. El general Pedro Santana y los sectores conservadores propusieron la unión con España. Un sector de la clase terrateniente se inclinaba hacia una unión o asociación con Estados Unidos. Los unos y los otros buscaban la protección extranjera frente al peligro de un eventual levantamiento de esclavos, posiblemente respaldados por la república negra de Haití. En cambio, los liberales, inspirados por el prócer Juan Pablo Duarte, eran partidarios de la libertad nacional irrestricta.

En 1859 el gobierno conservador de Santo Domingo se dirigió oficialmente a España proponiendo un posible acuerdo de protectorado. El reino peninsular asumiría su defensa y su representación diplomática, respetando la autonomía interna de los dominicanos.

En un primer momento, el gobierno español respondió negativamente, por temor de provocar a Estados Unidos. Sin embargo, en 1860, ante la insistencia dominicana, España envió una misión de estudio y de negociación a Santo Domingo.

En 1861, el presidente Pedro Santana —unilateralmente— proclamó la unión de Santo Domingo con España. El gobierno de Madrid esta vez aceptó el llamado

de Santana, envió tropas y ocupó la tierra dominicana. Estados Unidos, ya en plena crisis secesionista no se encontraba en posición cómoda para invocar la Doctrina Monroe.

Los sectores populares y las élites liberales de Santo Domingo no aceptaron la recolonización y se levantaron en armas contra Santana y los españoles. Paso a paso se impuso la causa nacional. Para 1865 los patriotas llevaban la ventaja militar. Además, Estados Unidos, recién salido de la Guerra de Secesión, aplicaba presiones. Por ambos motivos España aceptó la anulación del tratado de anexión en ese mismo año. Nuevamente el colonialismo europeo, adelantado por la momentánea debilidad de Estados Unidos, sufrió un fracaso.

La otra intervención española en la segunda mitad del siglo XIX se efectuó en Perú, provocada por el conflicto armado de España con ese país y con Chile. Perú vivía en permanente controversia con España por deudas pendientes y había tirantez en las relaciones entre los dos países.

En 1862 una expedición científica española, bajo el mando del almirante Luis Hernández Pinzón, se transformó en expedición bélica contra Perú. A su paso por las costas peruanas, el almirante recibió la queja de unos súbditos españoles que alegaban haber sido maltratados y despojados de sus bienes por el gobierno de Lima. El almirante Pinzón reaccionó por la ocupación de las islas Chinchas, de soberanía peruana.

El almirante Pareja, enviado para sustituir a Pinzón, negoció con el gobierno peruano y le exigió humillantes condiciones de reparación a los españoles agraviados, a cambio de la evacuación de las islas. El 27 de enero de 1865 se firmó un tratado que daba satisfacción a las exigencias españolas. Pero la oposición peruana lo rechazó y se alzó contra el gobierno que lo firmó. Con respaldo chileno Perú entró en guerra contra España. Chile, por su parte, declaró la guerra a España pocos meses después, y Bolivia y Ecuador, a su vez, se movilizaron contra el invasor español. España, impresionada por la reacción que había provocado, abandonó la lucha y aceptó una paz negociada en términos satisfactorios para la causa de la soberanía latinoamericana.

A consecuencia de la agresión española, entre noviembre de 1864 y mayo de 1865 se celebró en Lima un "Congreso Americano" que reunió a Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador y Guatemala. Era el segundo congreso que, en la capital peruana, trataba de resucitar la idea bolivariana de la confederación defensiva hispanoamericana. (El primero se había efectuado en 1847, como réplica a la amenaza española contra Ecuador en el mencionado año). El congreso produjo las bases para un tratado de confederación hispanoamericana que, una vez pasado el peligro de la intervención europea, quedó relegado al olvido.

Otra respuesta a las intervenciones europeas de los años 1861-1867 la constituyó, en el plano legal, la proclamación de la Doctrina de Carlos Calvo en 1868. El eminente tratadista argentino afirmó el principio de la no intervención: en ningún caso podía considerarse lícito el recurso de usar la fuerza para cobrar deudas financieras.

Latinoamérica cobraba conciencia de su condición de continente semicolonizado e intervenido. Pero esa conciencia no era sino esporádica. Aún faltaban los grandes movimientos de masas, ideológicamente despiertos, que pudiesen hacerse efectivos portavoces de la causa antiintervencionista.

La Guerra de la Triple Alianza

En la región del Río de la Plata, la caída de Rosas y la consolidación unitaria de la República Argentina tuvieron por efecto una momentánea pacificación. Los gobiernos de Argentina y de Brasil se acercaron y decidieron buscar la manera de regir conjuntamente los destinos de la zona. Ambos mantuvieron excelentes relaciones con las principales potencias europeas y siguieron una política económica que ofreciera las máximas libertades a las mercancías y los capitales ingleses y franceses.

Uruguay, objeto de tan feroces disputas durante la época de Rosas, fue pacificándose bajo la influencia de sus dos grandes vecinos, y de Inglaterra y Francia. Venancio Flores, caudillo colorado sucesor de Rivera, llegó a un acuerdo en 1855 con el general Oribe y los blancos, en el sentido de que el gobierno lo tomaran, alternativamente, cualquiera de los dos partidos, y que la selección de mandatarios fuese aceptable para ambos. Conforme a esos principios, se escogió primero a Gabriel Pereira, blanco moderado, y luego a Bernardo Berro, amigo de los colorados. Ambos fueron aceptables y aceptados. Pero en 1864 fue elegido presidente de la República el representante del partido blanco, Anastasio Aguirre. Venancio Flores no pudo entenderse con Aguirre, lo desconoció, y se alzó en armas con los colorados en el mismo año.

Más hacia el Oeste, Paraguay se encontraba bajo el mando de Francisco Solano López, hijo del presidente anterior, Carlos Antonio López. La historia de la nación paraguaya desde la época colonial había sido violenta y peculiar, dando a ese país rasgos especiales que lo diferencian de sus vecinos. Los indios guaraníes, de apreciable adelanto cultural autóctono, han dejado hasta hoy profunda huella en el carácter nacional paraguayo. Como ya señalamos anteriormente, en el siglo XVIII, Paraguay fue escenario de importantes movimientos comuneros, de reivindicaciones democráticas expresivas del sentir de las capas medias y las masas populares. También allí en ese mismo siglo se desarrolló el extraordinario ensayo social de las misiones jesuitas destruido por los latifundistas paraguayos y brasileños coaligados en una siniestra alianza de intereses explotadores. Pero quedó en el ánimo de las masas populares paraguayas, como lección recibida de guaraníes, jesuitas y comuneros, un profundo sentimiento de solidaridad, y un fuerte espíritu de lucha y de sacrificio por la patria y la justicia.

Paraguay se había independizado de la dominación española en 1814, bajo la jefatura fundamental de Gaspar Rodríguez de Francia, quien posteriormente se convirtió en dictador absoluto del país, permaneciendo en el poder hasta1840. El régimen del doctor Rodríguez de Francia tuvo un carácter nacionalista en extremo, hasta el punto de la autarquía casi completa. Si los historiadores liberales destacan sobre todo los rasgos despóticos de su gobierno —su persecución a veces feroz contra los oponentes, hechos absurdos y bárbaros, tales como la prisión de Bonpland, y una desconfianza casi paranoica ante los representantes del medio exterior—, los estudiosos de tendencia antiimperialista, en cambio, hacen énfasis en sus actos de tipo nacionalista constructivo. Señalando que Rodríguez de Francia aisló a su país del mundo exterior y del mercado internacional no por ciega xenofobia sino para estimular un desarrollo agrícola y manufacturero independiente. Los resultados fueron apreciables: bajo su férreo despotismo (que tuvo conside-

rable respaldo popular, a la vez que fue execrado por los grandes terratenientes, deseosos de vincularse al mercado exterior), Paraguay floreció en la agricultura, la cría y las manufacturas para consumo interno. Al mismo tiempo, se realizó un gran y exitoso programa de educación y capacitación del pueblo.

Carlos Antonio López, quien sucedió a Rodríguez de Francia en el mando, abrió el país al comercio internacional en cierta medida, pero mantuvo, con todo ello, una política proteccionista y de control estricto sobre las vías de navegación fluvial que comunican Paraguay con el mundo exterior. Esa política molestó a los ingleses, quienes habían esperado que la muerte del doctor Rodríguez de Francia significara la apertura plena del país. También Brasil sentía disgusto por el control nacionalista paraguayo sobre la navegación fluvial.

Francisco Solano López, presidente desde 1862 e hijo de quien le precedió en el mando, fue el heredero de la política nacionalista iniciada por Rodríguez de Francia y continuada en forma más matizada por el primer López. A diferencia de su padre, quien había sido un brillante jurista y talentoso diplomático, Francisco Solano López era rudo e inclinado a confiar sobre todo en la fuerza militar. Su sincero patriotismo iba acompañado de cierto grado de arrogancia y de inflexibilidad. Se especula acerca de la influencia que puede haber tenido su mujer, la irlandesa Elisa Lynch, en el sentido de estimularlo en su política de desafío frente a la potencia británica y los aliados de ésta.

Al observar la situación uruguaya y el alzamiento de Venancio Flores —apoyado por los intereses comerciales británicos— contra el gobierno de Anastasio Aguirre, el presidente Francisco Solano López sintió inquietud. Claramente, las potencias estaban maniobrando en el sentido de implantar en Sudamérica gobiernos dóciles, partidarios de la apertura irrestricta a las importaciones. Ante los sucesos uruguayos, López fortaleció su control sobre los ríos y tomó medidas de defensa.

La principal amenaza para los intereses nacionales paraguayos la constituía la política brasileña, orientada hacia la más estrecha colaboración con los ingleses. Así como estos últimos buscaban la manera de penetrar económicamente en Paraguay y conseguir la libre navegación en sus aguas fluviales, Brasil perseguía el objetivo de engrandecer su territorio a expensas de los paraguayos.

En 1864, Brasil —cuyos nacionales habían sufrido daños a manos de las fuerzas de Aguirre— resolvió dar su total apoyo a los colorados uruguayos y a su jefe Venancio Flores. Antes de terminar el año, Brasil reconoció a Flores como legítimo gobernante de Uruguay y abrió operaciones de guerra contra Aguirre y los blancos.

Esta intervención militar brasileña en Uruguay llevó a Francisco Solano López a preparar una contraintervención, en apoyo al gobierno amigo de Aguirre. Estimando que la intervención brasileña constituía un *casus belli,* declaró la guerra a su enorme vecino norteño. Para poder cumplir con su compromiso de ayudar al gobierno de Aguirre, López pidió permiso al presidente argentino, Bartolomé Mitre, para poder atravesar con sus tropas la provincia argentina de Corrientes. Mitre contestó negativamente y movilizó sus fuerzas contra López, quien replicó con una declaración de guerra. De esa manera, el pequeño Paraguay nacionalista quedó enfrentado a la poderosa alianza de Brasil con Argentina, a la que se unió Uruguay, gobernado desde febrero de 1865 por Venancio Flores. Inglaterra y Francia brindaron su apoyo financiero y político a la Triple Alianza y movilizaron la opinión mundial en contra del "tirano" y "bárbaro" Francisco Solano López.

La guerra comenzó por una ofensiva de los paraguayos en 1865, seguida de una contraofensiva de los aliados. En 1866 López abrió contactos con Mitre, con el fin de buscar las bases para una tregua y una paz eventual. El mandatario paraguayo se encontró ante una actitud intransigente de la Triple Alianza, cuyos integrantes insistieron en la apertura de los ríos y en la cesión de territorio paraguayo a Brasil y a Argentina. Rechazadas las exigencias aliadas, la lucha recomenzó con inaudita ferocidad. Frente a los numerosos y bien armados ejércitos de la Triple Alianza, Paraguay movilizó a su pueblo y realizó una de las epopeyas defensivas más extraordinarias y heroicas de la historia de la humanidad. Después de quedar diezmada la población masculina adulta, se movilizaron las mujeres y los niños, y continuó la lucha. En las últimas batallas, el mariscal López comandaba unidades de muchachos entre los 10 y los 14 años de edad. Hasta el fin, el pueblo paraguayo respaldó a su caudillo en la más tenaz y sacrificada de todas las resistencias.

Antes de la guerra, la población de Paraguay había sido de un millón de personas aproximadamente. La mitad —unos 500.000— pereció en la Guerra de la Triple Alianza; ¡la población masculina adulta fue reducida a 30.000! La economía del país quedó totalmente en ruinas.

La resistencia paraguaya cesó en 1870, después de que el propio Solano López había caído en la batalla de Cerro Corá. Ya en 1869 un gobierno paraguayo espurio, opuesto a Solano López, había firmado un convenio de paz. La intención original de los vencedores parece haber sido la de desmembrar totalmente Paraguay, pero las divergencias que pronto surgieron entre argentinos y brasileños impidieron que se consumara tal designio. Los gobiernos de Buenos Aires y de Río de Janeiro llegaron hasta el borde del conflicto armado por sus diferencias sobre el arreglo territorial definitivo. Por los términos de la paz definitiva firmada en convenios sucesivos en 1870, 1871, 1872 y años posteriores, Paraguay perdió territorio en beneficio tanto de Brasil como de Argentina, pero conservó su integridad fundamental. Perdió su salida al Atlántico por el río Uruguay, dependiendo a partir de entonces de la vía fluvial Paraná-Plata, controlada por Argentina. Económicamente, y hasta ahora, Paraguay no se ha recuperado de la destrucción causada por la guerra; por otra parte, el capitalismo europeo se benefició con su derrota, tomando en sus manos el control de su mercado y de su sistema financiero. Así como Brasil y Argentina lograron ventajas territoriales de la guerra contra Paraguay, y los uruguayos se aprovecharon de ella para consolidar su unidad y su poder nacional, Inglaterra y Francia triunfaron a través de la conquista económica indirecta del espacio paraguayo y la liquidación de un nacionalismo que obstaculizaba la libre penetración de las mercancías europeas al corazón del continente sudamericano.

La Segunda Guerra del Pacífico

La Segunda Guerra del Pacífico tuvo por actores a Chile de un lado, y a Perú y Bolivia del otro. Intereses capitalistas europeos, fundamentalmente ingleses, desempeñaron un importante papel en el conflicto, alineándose con el bando chileno vencedor.

Desde mediados del siglo la economía de la costa del Pacífico sudamericano experimentó cambios significativos. La explotación de guano, que había constitui-

do la principal actividad en las primeras décadas después de la independencia, pasó a un segundo plano, ocupando el primer lugar la producción de nitratos o salitre. Desde 1860 la penetración capitalista extranjera cambió de la simple importación de mercancías a la de capitales. Inversiones inglesas y de otras procedencias contribuyeron a desarrollar la industria de nitratos tanto en Chile como en Bolivia y en Perú.

En un segundo lugar, después de la rivalidad en materia de nitratos, existía la competencia entre los puertos marítimos. Chile, Bolivia y Perú rivalizaban por constituir el primer emporio comercial y portuario en la costa del Pacífico. Valparaíso, Antofagasta y El Callao se esforzaban, cada uno, por atraer el mayor volumen de tráfico marítimo.

Por último, la rivalidad entre los tres países se expresaba en el terreno militar y político. Los gobiernos velaban ansiosamente por el mantenimiento de un equilibrio de fuerzas que no menoscabara la seguridad ni el peso político de ninguno.

La zona de explotación de nitratos se encontraba entre los paralelos 19 y 25 Sur, en los territorios de Perú, Bolivia y Chile. Intereses salitreros chilenos, unidos a inversionistas británicos, pidieron permiso para extender sus actividades en el territorio de Bolivia hasta el paralelo 23. En 1866 el dictador boliviano Mariano Melgarejo, siempre complaciente ante las potencias extranjeras que halagaban su vanidad personal, cedió territorio a Chile, fijándose la frontera entre los dos países en el paralelo 24. Así mismo, se acordó que toda la zona comprendida entre los paralelos 23 y 25 sería accesible para empresas de ambos países, los cuales, por otra parte, se repartirían por partes iguales los ingresos fiscales derivados de la actividad salitrera en la zona. Chile trató de que Melgarejo aceptara al mismo tiempo un acuerdo secreto, según el cual el país sureño ayudaría a Bolivia a conquistar por la fuerza las provincias peruanas de Tarapacá, Tacna y Arica, si Bolivia, después de haberlas anexado, renunciaba a su litoral situado más al Sur, en beneficio de Chile. El dictador boliviano rechazó ese ofrecimiento, y posteriormente los peruanos se enteraron del mismo, concibiendo una intensa desconfianza hacia el gobierno chileno y llegando a considerarlo como su enemigo natural.

Melgarejo fue derrocado en1871, y dos años después Bolivia y Perú suscribieron un acuerdo para impedir el retorno del dictador. Por otra parte, preocupados ante el creciente poderío de Chile y las tendencias expansionistas de ese país, firmaron un acuerdo secreto de asistencia militar mutua en caso de que uno de ellos fuese atacado por los chilenos.

Sin embargo, Bolivia estuvo dispuesta a buscar un arreglo pacífico con su fuerte vecino del Sur. En 1874, un convenio boliviano-chileno ratificó los límites trazados con Melgarejo en 1866 a lo largo del paralelo 24; así mismo, Bolivia se comprometió a no aumentar, durante un lapso de 25 años, los impuestos pagaderos por personas o empresas de nacionalidad chilena que trabajaran en la explotación de nitratos en territorio boliviano. A cambio de ello, Chile renunció a participar en los ingresos fiscales percibidos en la zona situada más al norte de la frontera.

En esa época se desarrollaba en Perú una tendencia nacionalista, tendiente a imponer un mayor control del Estado sobre las actividades económicas. Los sectores dominantes peruanos habían tenido divergencias con el capital extranjero, beneficiario de mayores ventajas en Chile. En 1875, después de haber aumentado

sus impuestos sobre la exportación de nitratos, Perú influyó sobre Bolivia para que ese país, a su vez, hiciera lo mismo. Chile ejerció presiones y convenció a los bolivianos para que nuevamente redujesen los impuestos mencionados. Pero en 1878 Bolivia volvió a la carga, imponiendo una elevada tributación a las exportaciones, lo que afectó particularmente a la Compañía de Nitratos de Antofagasta, establecida en territorio boliviano por capitalistas chilenos e ingleses. La compañía se negó a pagar los impuestos en cuestión, desafiando abiertamente al gobierno boliviano, por lo cual éste resolvió intervenir y ocupar la empresa. Ese acto de soberanía nacional afectó directamente a la burguesía chilena así como a poderosos intereses capitalistas británicos. Chile protestó, presentó un ultimátum y envió tropas contra Antofagasta. Como respuesta a ese ataque, Bolivia declaró la guerra, y Perú, obligado por el Tratado de1873, hizo lo mismo. Las operaciones bélicas se iniciaron en el mes de febrero de 1879.

La guerra duró cuatro años y ocasionó severas pérdidas a los ejércitos combatientes. Chile iba triunfando desde el comienzo. Más adelantada que sus enemigos en el plano de la organización militar y civil, y en mejor posición económica, respaldada además por las principales fuerzas financieras extranjeras, la potencia chilena se apoderó progresivamente de toda la costa de Bolivia y de algunas partes del litoral peruano, llegando incluso a ocupar la ciudad de Lima.

Estados Unidos, que para esa época pretendía actuar como árbitro en los asuntos políticos de toda América, ofreció su mediación en el conflicto pero los chilenos, seguros de su triunfo, rechazaron los buenos oficios de la nación del Norte. Ante el avance de las tropas chilenas hasta Lima, Perú pidió la paz y acudió a una conferencia de paz en la ciudad de Ancón.

El Tratado de Ancón, firmado en 1883 y ratificado un año después, otorga a Chile el derecho de seguir ocupando las provincias peruanas de Tacna y de Arica por un lapso de diez años. En cambio, Chile devolvió a Perú la provincia de Tarapacá que sus fuerzas habían ocupado igualmente. Al cabo de diez años de ocupación chilena, las poblaciones de Tacna y Arica se pronunciarían a través de un plebiscito en favor de pertenecer a Chile o a Perú. El país perdedor en la consulta popular recibiría del ganador una indemnización de 10 millones de pesos de plata.

El plebiscito prometido no se llevó a efecto. Los intereses económicos chilenos e internacionales tomaron posesión de los recursos de Tacna y de Arica y se opusieron a una eventual devolución de esas provincias a Perú. Este país reclamó en muchas ocasiones su derecho a un plebiscito, pero el problema quedó sin solución hasta la tercera década del siglo XX. En 1926 el gobierno peruano ejerció coacciones tan fuertes, acompañadas de amenazas de guerra, que Estados Unidos presionó sobre Chile para que aceptara una solución salomónica. Por un acuerdo del año 1929, Arica quedó definitivamente anexada a Chile, mientras que Tacna fue devuelta a Perú.

Bolivia siguió resistiendo la ofensiva chilena durante varios meses después de que Perú se retiró de la lucha. Pero en diciembre de 1883 las fuerzas bolivianas a su vez tuvieron que pedir tregua y, más tarde, un tratado de paz derivó en la entrega de todo el litoral boliviano a Chile. A cambio de esa importante anexión, Chile prometió libre paso a las personas y mercancías bolivianas a través de su territorio hacia la costa. Así mismo, en 1895 se suscribiría un tratado de amistad chileno-boliviano, por el cual Chile transferiría a Bolivia parte de Tacna y Arica si estas

provincias se pronunciasen en favor de la nación chilena. En la práctica nada de esto se hizo, y Bolivia sigue reclamando, hasta el día de hoy, su salida al mar.

El efecto global de la Segunda Guerra del Pacífico fue el de fortalecer extraordinariamente a Chile en lo económico y en lo político, engrandeciendo territorialmente al país y convirtiéndolo en la primera potencia del Pacífico sudamericano. Benefició así mismo al capitalismo inglés, que había apostado sobre la victoria chilena y tenía en ese país sus principales inversiones de la región del Pacífico. Por su parte, Perú quedó seriamente golpeado y traumatizado por la derrota. Sus enormes gastos militares y la pérdida de Tacna y Arica lo perjudicaron económicamente, y su vida política quedó marcada por la acción de militares frustrados a causa de la guerra perdida. Bolivia fue el país que más sufrió, tanto en lo territorial como en lo económico y lo político, quedando aislado en el interior del continente, separado de su litoral tradicional. A partir de entonces, la economía boliviana comenzó a girar en torno a la producción de estaño, ya que los nitratos estaban perdidos. El altiplano pasó a predominar en la vida del país, empobrecido y resentido.

Resumen

La época comprendida entre 1853 y 1883 corresponde en escala mundial al período de la segunda revolución industrial y a la formación del capitalismo financiero, precursor del imperialismo plenamente desarrollado. En América Latina, la época se caracteriza por la penetración del capital europeo y por grandes conflictos provocados en parte por la presencia de las inversiones extranjeras y por las rivalidades entre potencias externas.

En Estados Unidos, las dos sociedades que coexistían dentro de un solo país chocaron violentamente; tras cuatro años de dura y sangrienta lucha, la sociedad burguesa e industrial del Norte derrotó a la sociedad aristocrática y agraria del Sur. Finalizados los combates, Norteamérica entró en una etapa de rápido desarrollo capitalista y vino a ocupar su puesto entre las potencias industrializadas imperialistas.

La incapacidad en que ya se encontraba Estados Unidos durante la Guerra de Secesión para aplicar la Doctrina Monroe, alentó a algunos países europeos a emprender, con ánimo recolonizador, intervenciones en el Nuevo Mundo. La Francia de Luis Napoleón Bonaparte intervino en México e impuso a ese país al emperador Maximiliano de Austria. Ante el llamado del bando conservador, España recolonizó Santo Domingo e intervino en Perú. Sin embargo, la resistencia popular contra esas intervenciones, junto con protestas norteamericanas emitidas a partir del fin de su contienda civil, pronto obligó a franceses y españoles a retirarse nuevamente de América.

Estados Unidos, por su parte, manifestó su tendencia expansionista frente a Cuba y Centroamérica. La oligarquía latifundista y comercial de los estados del sur constituyó el principal baluarte de esas tendencias hacia la conquista de territorios latinoamericanos.

Durante el mismo lapso, Sudamérica fue teatro de conflictos en los cuales participó indirectamente el preimperialismo financiero europeo. En la Guerra de la

Tabla 5

Tabla cronoiógica V

Año	Estados Unidos	México	Centroamérica y Antillas	Pacífico sudamericano	Río de la Plata y Brasil
1853	Presidencia de Pierce				
1854		Pugna política de la Reforma.	Intento norteamericano de ocupar Cuba. Declaración de Ostende.		
1855			Invasión de Walker a Nicaragua. Invasión haitiana a Santo Domingo.		
1856			Segunda invasión de Walker.		
1857		Constitución liberal.			
1858		Guerra contra la Reforma.			
1859					
1860	Elección de Lincoln.		Muerte de Walker.		
1861	Comienzo de la Guerra de Secesión. Problemas con Inglaterra.	Juárez toma el poder. Conflicto con potencias europeas.	Unión Santo Domingo-España.		
1862	Problemas con Inglaterra. Primera proclamación de emancipación.	Invasión francesa.	Lucha independentista dominicana.	Expedición española a Perú.	Francisco Solano López, presidente de Paraguay.
1863	Segunda proclamación de emancipación.	Ocupación francesa. Selección de Maximiliano.		Negociaciones España-Perú. Ocupación de las islas Chinchas.	

Tabla 5 (cont.)

Tabla cronológica V

Año	Estados Unidos	México	Centroamérica y Antillas	Pacífico sudamericano	Río de la Plata y Brasil
1864	Triunfos militares del Norte. Solidaridad obrera internacional.	Llegada de Maximiliano, Juárez continúa la lucha.		Congreso de Lima.	Flores contra Aguirre en Uruguay. Intervención brasileña en Uruguay.
1865	Victoria del Norte. Asesinato de Lincoln.	Napoleón III pierde su interés por México.	España se retira de Santo Domingo.	Guerra de España contra Perú y Chile.	Paraguay contra Brasil y Argentina. Triple Alianza.
1866		Nàpoleón III abandona a Maximiliano. Viaje de Carlota.		Tratado Chile-Bolivia sobre frontera y nitratos.	Guerra de la Triple Alianza.
1867		Triunfo de Juárez. Ejecución de Maximiliano.			
1868					Doctrina Calvo.
1869			Rebelión cubana, primera república en armas.		Gobierno paraguayo provisional. Solano López continúa resistiendo.
1870					Muerte de Solano López. Fin de la guerra.
1871				Caída de Melgarejo.	Sucesivos instrumentos de paz. Brasil y Argentina anexan partes de Paraguay.
1873					

Tabla 5 (cont.)

Tabla cronológica V

Año	Estados Unidos	México	Centroamérica y Antillas	Pacífico sudamericano	Río de la Plata y Brasil
1874				Convenio Chile-Bolivia sobre impuestos y nitratos.	
1875				Nacionalismo económico en Perú.	
1876					
1877					
1878			Caída de la Primera República Cubana.	Bolivia eleva los impuestos. Ocupación de Cía. de Antofagasta..	
1879				Comienza la Segunda Guerra del Pacífico.	
1880				Guerra. Estados Unidos ofrece sus buenos oficios.	
1881					
1882					
1883				Paz de Ancón. Victoria chilena.	

Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, coaligados, arremetieron contra el Paraguay nacionalista y, después de someterlo a una tremenda masacre, lo obligaron a abrir sus puertas a los intereses comerciales y financieros foráneos.

Del mismo modo, en la Segunda Guerra del Pacífico, la República de Chile apoyada por los intereses ingleses derrotó a Bolivia y Perú, países cuyas burguesías nacionales habían adoptado posiciones de rechazo a la irrestricta penetración del capital europeo.

Auge del imperialismo norteamericano y resistencias en América Latina (1883-1933)

Naturaleza del imperialismo

La dominación de las potencias extranjeras sobre los pueblos de América Latina atravesó por diversas etapas, que podríamos resumir de la manera siguiente:

• Desde los descubrimientos de fines del siglo XV y comienzos del XVI hasta la época de las guerras de independencia, la dominación europea sobre Latinoamérica tenía un carácter colonialista completo y clásico, basado en relaciones económicas mercantilistas. España, todavía feudal o precapitalista en la época de la conquista y la colonización, implantó en sus colonias relaciones de producción feudales o semifeudales, pero al mismo tiempo sirvió de vehículo para una explotación global de tipo capitalista, ya que los productos básicos de América en última instancia sirvieron para enriquecer a la burguesía comercial y bancaria de los centros más desarrollados de Europa. El mercantilismo representa un proceso de transición entre el feudalismo y el capitalismo; las colonias latinoamericanas recibieron el impacto de ambos modos de producción.

• Para América Latina, luego de alcanzada su independencia política formal, se inició una segunda etapa de dependencia: la etapa del semicolonialismo o preimperialismo liberal. Gran Bretaña y Francia asumieron el papel de sucesoras de España y Portugal en la hegemonía sobre los países latinoamericanos. Sus mercancías inundaron los mercados del Nuevo Mundo, asfixiando o frenando la producción autóctona, a la vez que su influencia política afectaba la toma de decisiones.

• Una tercera etapa se inicia alrededor de 1850. Es la del preimperialismo financiero. En grado creciente, Inglaterra y Francia exportan hacia América Latina no sólo mercancías sino también capitales. Estados Unidos comenzó a imitarlos en menor cuantía después de finalizada la Guerra de Secesión. Con la creciente exportación de capitales hacia América Latina, bajo forma de inversiones y créditos o préstamos, la injerencia semicolonial se hizo más dura y marcada: el temor de perder dinero invertido es mayor que el de perder un mercado de productos manufacturados.

• Por último, aproximadamente a partir de 1880, se abrió la etapa del imperialismo plenamente desarrollado, basado en el monopolismo, la hegemonía del sector financiero sobre los demás sectores y la rivalidad acentuada por la captación de mercados de capital y fuentes de materias primas. En esta etapa nuevos centros de poder, tales como Alemania, Estados Unidos, Japón e Italia, se colocaron al lado de los imperios capitalistas tradicionales —Inglaterra y Francia— y compitieron con ellos por el control sobre los mercados y los recursos de América Latina. Sobre todo la influencia económica y política de Estados Unidos comenzó a desplazar y sustituir la de Inglaterra y Francia a partir de 1880. Citaremos algunas cifras para indicar las fases del proceso.

Durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX el crecimiento general de la producción y el comercio exterior de Estados Unidos puede deducirse de las cifras que muestra el cuadro 2. Por su parte, las inversiones de diversos países industrialmente avanzados en el continente latinoamericano, entre fines del siglo XIX y el año 1930, variaron como lo muestra el cuadro 3.

El imperialismo norteamericano fue producto del proceso de desarrollo capitalista acelerado que se inició en Estados Unidos después de la Guerra de Secesión. Ese conflicto estimuló extraordinariamente el proceso de industrialización del norte del país. La destrucción del Sur y su posterior reconstrucción significaron la apertura de nuevos mercados para los productos del Norte. Entre 1865 y 1870 el volumen del capital bancario creció espectacularmente en el país. La conquista del Oeste se intensificó en la misma época, por primera vez con un carácter capitalista. Detrás de los pioneros empeñados en ocupar tierras y establecer una economía agrícola y artesanal, vinieron los comerciantes y los empresarios ferroviarios. Las

Cuadro 2

Comercio exterior de Estados Unidos, 1800-1920

(En miles de dólares)

Año	Exportaciones	Importaciones
1800	70.972	91.153
1820	69.692	74.450
1840	123.669	98.259
1860	333.576	353.616
1880	835.639	667.955
1900	1.394.483	829.150
1920	8.108.989	5.278.481

Tomado de Thomas A. Bailey, *A Diplomatic History of the American People*, 1959, p. 459.

Cuadro 3

Inversiones privadas

(En millones de dólares)

País	1897	1930
Gran Bretaña	2.060	4.500
Francia	628	454
Alemania	—	700
Estados Unidos	308	5.429

Tomado de Norman Bailey, *Latin America in World Politics*, 1967, p. 50.

guerras contra los indios y la destrucción de los bisontes durante el decenio 1865-1875 abrieron el camino a los ferrocarriles, los bancos, los hatos ganaderos de tipo capitalista y los especuladores en terrenos. En muchos casos, los agricultores y pastores pequeños resistieron con las armas a la invasión del capitalismo y al proceso de expropiación de sus tierras por bancos y compañías financieras. Sus revueltas fueron reprimidas de manera sangrienta.

Simultáneamente con la expansión de los ferrocarriles, que pronto unieron la costa del Atlántico con la del Pacífico, se desarrolló la explotación de minas de la más diversa índole. Desde 1880 en adelante aparecen colosales "imperios" bancarios, ferroviarios, mineros y siderúrgicos. Bastaría otra década más para que el imperio petrolero del viejo John D. Rockefeller se extendiera por todo el país.

El vertiginoso crecimiento del capitalismo norteamericano —rudo, de lucha a muerte entre empresarios— produjo la exaltación de impulsos agresivos. Los hombres de presa que dirigían el desarrollo económico se sintieron dirigentes de un pueblo elegido, portadores y ejecutores del "Destino Manifiesto" que impulsaba a Estados Unidos hacia la jefatura de las naciones. La embriaguez del éxito material, conquistado en implacable lucha contra los competidores capitalistas, se tradujo en embriaguez imperialista. La conquista del Oeste no terminó en el litoral del Pacífico, California y Oregón. Continuó más allá, a través del océano, hacia Japón y China. Del sudoeste la marcha siguió hacia México, Centroamérica y toda la América Latina. Los monopolistas triunfantes miraron más allá de las fronteras de su propio país, y sus ideas expansionistas influyeron en la política de Washington y en el pensamiento de las masas, educadas en el espíritu del Destino Manifiesto y de la Doctrina de Monroe, interpretada ésta como un llamado para que Estados Unidos asumiera la protección y el control de las naciones más débiles.

Desde 1880 el capital financiero norteamericano buscó campos de inversión en el exterior, en regiones subdesarrolladas y carentes de recursos financieros propios, donde la inversión arrojara ganancias superiores a las que se lograban en los centros desarrollados. Al mismo tiempo, la corriente general del espíritu nacional estadounidense se inclinaba hacia una política imperialista.

La Primera Conferencia Internacional Americana

Uno de los síntomas del espíritu imperialista, producto de una nueva etapa del capitalismo norteamericano, lo constituyó el deseo de participar activamente en los asuntos políticos de Latinoamérica y de asumir en forma decidida el papel de árbitro en las relaciones internacionales americanas. El concepto de una organización multilateral de Estados americanos fue acogido por los dirigentes políticos y empresariales yanquis como posible instrumento de su hegemonía sobre el hemisferio; en lugar del esquema bolivariano (una Confederación Latinoamericana que como participante secundario invitaría a su mesa a Estados Unidos), para 1880, este país desarrolló el concepto de un sistema panamericano dirigido por el gobierno de Washington, con los países latinoamericanos en calidad de protegidos del poderoso Tío Sam. Mediante la creación de una unión panamericana se aspiraba alcanzar dos propósitos fundamentales, de índole económica uno, y política el otro. En lo económico, se buscaría la creación de una unión aduanera americana, por la cual

Gran Bretaña y los demás países europeos serían excluidos de sus posiciones comerciales y financieras en el hemisferio occidental, mientras que Estados Unidos asumiría el papel de gran abastecedor y financiador de la América morena. En el plano político, se trataría de implantar un sistema de arbitraje obligatorio, a través del cual Estados Unidos asumiría el puesto de gran juez y árbitro de las Américas, anteriormente ocupado por los ingleses. La unión aduanera y el arbitraje obligatorio significarían conjuntamente la implantación de la "Pax Americana" sobre el Nuevo Mundo.

En lo concerniente al problema del papel mediador de Estados Unidos en América Latina, los dirigentes de Washington actuaron impulsados por los acontecimientos del Pacífico sudamericano. El gran conflicto entre Chile, Perú y Bolivia, beneficioso para el capital británico, incitó a Washington —como ya lo señalamos en el capítulo anterior— a ofrecer sus buenos oficios y una eventual mediación. Chile, triunfador, rechazó el ofrecimiento, pero el Congreso y el gobierno norteamericanos quedaron dispuestos a no dejarse excluir —en futuras ocasiones— de una participación en el arreglo pacífico de problemas latinoamericanos.

En mayo de 1880 el Congreso de Estados Unidos autorizó al Presidente para que tratase de organizar una conferencia interamericana "con el objeto de discutir y recomendar a los respectivos gobiernos la adopción de un plan de arbitraje para el arreglo de desacuerdos y problemas que pudieran en el futuro surgir entre ellos". Claramente, era el espectáculo de la Segunda Guerra del Pacífico el que provocó esa iniciativa del Congreso de Washington. Por otra parte, éste agregó que igualmente deberían estudiarse, en la eventual conferencia panamericana, "medidas encaminadas a la formación de una unión aduanera americana" y tendientes a "fomentar aquellas relaciones comerciales recíprocas que sean provechosas para todos, y asegurar mercados más amplios para los productores de cada uno de los referidos países".

En 1881, bajo la presidencia de James Garfield, el secretario de Estado James Blaine, en conformidad con lo recomendado por el Congreso, emitió invitaciones para que los países de América acudieran a una conferencia destinada sobre todo a estudiar la creación de un sistema de arbitraje. Pero casi en seguida, después de esta iniciativa el presidente Garfield fue asesinado, y su sucesor, el vicepresidente Chester Arthur, destituyó a Blaine y anuló la convocatoria a la conferencia panamericana.

En 1885 asumió la presidencia de Estados Unidos Grover Cleveland, demócrata, quien acogió la idea de la conferencia panamericana. De común acuerdo con el Congreso, ordenó al secretario de Estado Bayard que formulara nuevas invitaciones para 1888. A fines de ese año, los republicanos triunfaron en las elecciones presidenciales, llevando a Benjamín Harrison a la primera magistratura a comienzos de 1889. James Blaine fue designado secretario de Estado nuevamente; de modo que fue el mismo hombre que había dado el primer impulso práctico a la conferencia ocho años antes, el que representó a Estados Unidos cuando finalmente la reunión se efectuó.

Antes de iniciarse las deliberaciones de la conferencia en septiembre de 1889, los delegados latinoamericanos fueron llevados de gira para visitar los centros industriales de Estados Unidos, con la idea de que una impresión favorable del adelanto técnico y manufacturero del país los alentara a considerar de manera

positiva el proyecto de una unión aduanera dentro de la cual Estados Unidos jugaría el papel de gran abastecedor industrial.

La Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos inició sus sesiones en Washington el día 2 de octubre de 1889. Los países asistentes fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. James Blaine fue electo presidente de la Conferencia, y los representantes de Perú y de México desempeñaron las vicepresidencias.

Ninguna de las dos ideas maestras de la diplomacia norteamericana —el arbitraje obligatorio y la unión aduanera— fueron aprobadas en la reunión. Los delegados latinoamericanos estaban conscientes de que la primera de esas iniciativas afectaría la soberanía política de sus países y los colocaría bajo la tutela arbitral de la nación más fuerte del hemisferio. En cuanto a la segunda idea, veían claramente que ella traería beneficios económicos casi exclusivamente para la potencia industrial del Norte, y que para los países débiles y subdesarrollados del Nuevo Mundo sin duda era preferible conservar su libertad de comercio y tratar de mantener un equilibrio en el intercambio con Estados Unidos y con Europa.

El principal resultado concreto de la conferencia —que finalizó el 19 de abril de 1890— fue la creación de una Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, con su secretaría permanente establecida en la capital norteamericana. La función principal de la secretaría sería la de recibir y divulgar información económica y técnica sobre los países miembros de la unión. Se adoptaron resoluciones en favor del incremento del intercambio comercial, técnico y cultural entre los países miembros, así como de la cooperación en materia sanitaria. Se recomendó la adopción del sistema métrico decimal para facilitar el intercambio. Igualmente, hubo pronunciamientos favorables a la unificación de normas jurídicas de los diversos Estados, y su adhesión a tratados de derecho internacional aprobados en el congreso celebrado en Montevideo en 1888. En el ámbito político, se recomendó la utilización de medios pacíficos para solucionar las diferencias entre países de América, y se expresó la esperanza de que en el futuro pudiera crearse un sistema eficaz de arbitraje.

De esta manera Estados Unidos, llegado a la etapa imperialista y hegemónica, se apropió la idea de la organización internacional americana, anteriormente manejada sólo por los latinoamericanos, y dio un primer paso para establecer su liderazgo sobre una unión de repúblicas.

Norteamérica desplaza a Inglaterra. Guerra entre Estados Unidos y España

Durante la década de 1890-1900, Estados Unidos tomó diversas iniciativas en política exterior, encaminadas a establecer su hegemonía sobre las Américas y a desplazar a Gran Bretaña de la posición de potencia dominante sobre la parte latina del hemisferio.

La discusión fronteriza entre Venezuela y Gran Bretaña constituyó un acontecimiento importante en esa lucha por la hegemonía estadounidense. Desde 1850 en adelante, los ingleses habían extendido los límites entre Venezuela y la Guayana

Británica hacia el Oeste, penetrando cada vez más en territorio históricamente venezolano, sin hacer caso a las quejas de los gobiernos de Caracas. A partir de 1890, el conflicto se tornó más grave, con ribetes de violencia contenida. Venezuela, demasiado débil para defenderse con las armas contra el Imperio Británico, pidió ayuda, y Estados Unidos, bajo la segunda presidencia de Grover Cleveland (1892-1896), acudió en defensa de la república sudamericana agredida. En 1897, mediante presiones y actitudes amenazantes, Washington logró que Londres aceptara que la disputa fronteriza fuese sometida a un arbitraje internacional. En el juicio arbitral, realizado en París en 1899, agentes norteamericanos asumieron la representación de Venezuela. El laudo dictado por los jueces —que eran de nacionalidad inglesa, norteamericana y rusa— fijó los actuales límites entre Venezuela y Guayana. Venezuela estima que tanto el procedimiento como el laudo adolecieron de graves vicios de forma y de fondo, y actualmente está reclamando ante Guyana y Gran Bretaña la devolución de una importante porción territorial.

En 1897 Estados Unidos obtuvo una clara victoria sobre Inglaterra cuando ésta transigió en su reclamación más extrema, que le habría dado el control sobre el Delta del Orinoco, y aceptó el arbitraje. La opinión pública internacional estimó que a partir de ese momento el león británico cedía el primer puesto en América al águila yanqui.

Ello contribuyó para que, a fines del siglo, Estados Unidos se sintiera animado a establecer oficialmente, por las armas, su supremacía sobre el Caribe y la parte norte de América del Sur. Cuba, siempre codiciada por su posición estratégica en la entrada del Golfo de México, así como por su riqueza azucarera, constituyó la causa del desencadenamiento de una guerra entre Estados Unidos y España.

La lucha independentista cubana, incesante desde 1868, se intensificó a partir de 1890. La excelsa personalidad de José Martí desempeñó un papel de primer plano desde esa fecha. Como teórico y como dirigente práctico del movimiento independentista y democrático de su país, Martí figura entre los grandes próceres de América. Es el último de los libertadores del siglo XIX y el primero de los del siglo XX. Sus ideas comienzan a superar el liberalismo decimonónico y se proyectan hacia la revolución social del siglo actual. Martí pertenece al Tercer Mundo, por su verticalidad frente a todos los colonialismos —viejos y nuevos— y por su avanzado sentido de solidaridad internacional. Originalmente desprevenido ante Estados Unidos, en sus últimos años Martí comprendió el carácter imperialista de ese país, y vaticinó el temor de que una dominación neocolonial norteamericana pudiese reemplazar a la vieja opresión colonialista española.

En 1894, Martí, Maceo y Máximo Gómez invadieron Cuba, dando comienzo al levantamiento definitivo del pueblo de la isla. Para desgracia de América, Martí cayó el día 19 de mayo de 1895 en la batalla de Dos Ríos. Maceo y Gómez continuaron en la dirección de la lucha de independencia, y en 1895 se constituyó en las zonas guerrilleras la "República en Armas", presidida por Salvador Cisneros. Ese mismo año España intensificó las medidas militares y policiales encaminadas a derrotar la insurrección. El gobernador militar Martínez Campos, moderado, fue sustituido por el general Valeriano Weyler, quien recurrió a la "reconcentración" (traslado forzoso de poblaciones y detención de sospechosos en campos de concentración) como medio para debilitar a los rebeldes. Para combinar la represión con la reforma, en 1897 el gobierno español emitió un proyecto de autonomía

administrativa y política para Cuba y Puerto Rico dentro del mantenimiento de los vínculos con la madre patria. Ya era muy tarde. Unos años antes, la autonomía habría constituido una concesión importante; ahora, los patriotas exigían la independencia completa.

En Estados Unidos, la opinión pública seguía las peripecias cubanas con el más vivo interés. Como ya lo señalamos anteriormente, Estados Unidos —desde la época de Jefferson— se mostró deseoso de anexar la isla de Cuba. John Quincy Adams declaró en 1823 que algún día Cuba caería en manos de los yanquis como una manzana madura, y en 1825-1826 impidió que la Gran Colombia libertara a la antilla. De 1845 a 1861 hubo diversos ofrecimientos de compra, hechos por Estados Unidos a España. Desde 1880, el auge del imperialismo financiero norteamericano fortaleció los sentimientos anexionistas hacia Cuba. El anexionismo buscó una excusa moral, y la encontró en la condena al colonialismo español y en la aparente simpatía hacia el bravo pueblo cubano en su lucha por emanciparse de España. El imperialismo, para apoderarse de Cuba, necesitaba el apoyo del pueblo norteamericano, fundamentalmente generoso y democrático, que respondería a los llamados de solidaridad contra el factor colonialista clásico, es decir, el gobierno de Madrid y sus agentes de represión.

William Randolph Hearst, rey de la prensa norteamericana, fundador y dueño de la primera gigantesca cadena de periódicos, fue el hombre que objetivamente sirvió como agente de enlace entre los intereses imperialistas y el pueblo norteamericano. Sistemáticamente, por una propaganda periodística en contra del poder español y a favor de la liberación de Cuba, Hearst fue formando la opinión pública necesaria para provocar y sostener una guerra norteamericana contra España. Lo hizo para probar su fuerza y aumentar el tiraje de sus publicaciones, así como por simpatía hacia los sectores capitalistas expansionistas y los grupos militares y navales que pensaban en Cuba en términos de seguridad estratégica. Al ocurrir el desenlace bélico, Hearst se jactó de que la guerra hispano-norteamericana era exclusiva obra suya. Día tras día, sus diarios habían denunciado la represión colonial española, detallando las severas medidas de Weyler, presentando a éste como un monstruo, y exagerando los horrores de la reconcentración.

Para comienzos de 1898, la opinión pública norteamericana, estimulada por Hearst y por los factores imperialistas, se encontraba en un verdadero frenesí procubano y antiespañol. En ese momento, como detonante final, ocurrió el incidente del acorazado Maine, barco de guerra norteamericano, anclado en la bahía de La Habana, en visita a Cuba, que sufrió una poderosa explosión en la que murió la mayor parte de su tripulación, en el mes de febrero de 1898.

De inmediato, Hearst y la opinión norteamericana belicista achacaron a los españoles la culpa del estallido. En realidad, España, amenazada por Estados Unidos, era la menos interesada en provocar un incidente. Tampoco es probable la tesis de algunos defensores del punto de vista español, de que los propios imperialistas norteamericanos hayan hecho estallar el barco, a fin de provocar la guerra. Un frío "maquiavelismo", capaz de matar a nacionales de Estados Unidos, no parece propio de los métodos empleados por ese país en aquella época. Existen dos explicaciones plausibles del hecho. La primera es que se trató de un accidente: el estallido de una caldera del barco ocurrido por mera casualidad en un momento de gran tensión política internacional. La otra posible explicación sería la de que el

hecho fue provocado por patriotas cubanos, desesperados por desencadenar el conflicto entre Estados Unidos y España.

Si tal fue el caso, lograron un éxito cabal. En Estados Unidos, la ira contra España era ya arrolladora e incontenible. El presidente Mc Kinley, sucesor de Cleveland desde 1897, trató de serenar los ánimos de sus compatriotas y de preservar la paz. De acuerdo con España, comisiones mixtas de expertos realizaron inspecciones del casco del buque reventado. No hubo ningún dictamen concordante. Según los expertos norteamericanos, la voladura se produjo de fuera hacia dentro y, según los españoles, de dentro hacia fuera.

Ningún consejo de moderación logró detener los impulsos bélicos que emanaban de los sectores económicos y militares imperialistas, de congresistas vinculados a esos intereses, y de una opinión pública exaltada. El gobierno de Estados Unidos, presionado por el Congreso y la opinión pública, presentó un ultimátum a España: destituir a Weyler, poner fin a la reconcentración, otorgar libertades y autonomía a los cubanos. España estuvo dispuesta a la conciliación y efectivamente destituyó a Weyler: pocas veces una potencia mostró tanto empeño en evitar un conflicto. Pero Estados Unidos siguió presionando, y declaró la guerra antes de obtener respuestas definitivas de los españoles.

Los combates duraron de marzo a junio de 1898 y se desarrollaron en diversos frentes. En el mar, la flota de Estados Unidos derrotó a la de España. Fuerzas norteamericanas desembarcaron en Cuba, en Puerto Rico, y en las islas Filipinas y de Guam, en el Océano Pacífico: Estados Unidos estaba interesado por igual en dominar el Caribe y las rutas del Pacífico entre California y China. Ambas regiones representaban para Norteamérica esferas imperiales de suma importancia en lo económico y lo naval.

En Cuba las tropas norteamericanas actuaron en forma paralela a las fuerzas armadas rebeldes del país. Al cabo de pocos meses, los españoles quedaron acorralados. Puerto Rico fue ocupada sin dificultad, en vista de que en esa isla no se encontraban fuerzas españolas importantes. También en el Pacífico la ocupación de la isla de Guam fue fácil para la armada de Estados Unidos. En Filipinas, las fuerzas norteamericanas se unieron al movimiento de liberación dirigido por el general Emilio Aguinaldo. Se les prometió a los patriotas filipinos que, luego de la victoria sobre España, su país obtendría la independencia. Al ser derrotada, España se vio obligada a firmar el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898. Por los términos de ese instrumento, España reconoció la independencia de Cuba, y cedió Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas a Estados Unidos.

Con respecto a Filipinas, Estados Unidos vaciló entre cumplir la promesa de independencia hecha a Aguinaldo, o conservar las islas como dependencia colonial. Al comienzo, el presidente Mc Kinley se inclinó a conceder la libertad al archipiélago. En cambio, el alto mando naval insistía con pasión en que era necesario anexar Filipinas al imperio yanqui: las islas están localizadas en un sitio estratégicamente importante, en la ruta marítima entre Norteamérica y China. Mc Kinley terminó por aceptar los razonamientos de los almirantes, y se dejó convencer de que Estados Unidos tenía una "misión civilizadora" que cumplir en Filipinas y por ello no debía retirarse de ese país. España recibió la suma de 20 millones de dólares por la cesión de Filipinas. En cambio, Puerto Rico y Guam fueron considerados como botín de guerra. Emilio Aguinaldo, indignado por la violación de la promesa de independen-

cia que los norteamericanos le habían formulado, empuñó las armas contra sus antiguos aliados, y durante varios años prosiguió su lucha contra el nuevo colonialismo.

Cuba, pese a las presiones de imperialistas extremos, recibió la independencia formal. Pero se trataría de una independencia incompleta, mediatizada. Estados Unidos ocupó la isla hasta 1903, y retiró sus tropas a cambio de un tratado que le concedía el derecho de intervenir en los asuntos internos de la república antillana cada vez que unilateralmente lo estimase necesario para preservar "el orden" y "la independencia" de la isla. El principio del derecho a la intervención estuvo contenido en la Enmienda Platt, presentada por el senador norteamericano Orville Platt ante el congreso de su país. Posteriormente, dicho principio quedó incorporado al tratado cubano-estadounidense y a la propia Constitución Nacional de Cuba. Además del derecho a la intervención, el tratado de 1903 dio a Estados Unidos la base militar de Guantánamo y una base naval en Bahía Honda.

Aceptada así la legalización de la intervención extranjera, y reducida Cuba a la situación de protectorado de Estados Unidos, las tropas norteamericanas fueron retiradas, y Tomás Estrada Palma asumió la presidencia del país.

La toma del Canal de Panamá

La idea de construir un canal interoceánico en Panamá o América Central fue voceada por primera vez en el siglo XVI bajo el reinado de Carlos V. La proposición fue recogida y pormenorizada por Alejandro de Humboldt a raíz de su viaje por las regiones equinocciales del Nuevo Mundo en el lapso 1799-1804. Poco después, el conde de Saint-Simon, ideólogo del socialismo utópico y del progreso científico y tecnológico, hizo suya la idea de conectar los mares y los océanos mediante canales en Suez y Panamá. El ingeniero Ferdinand de Lesseps, constructor del Canal de Suez e iniciador de los trabajos del Canal de Panamá, fue discípulo de Saint-Simon y ejecutor de las ideas del maestro en su aspecto tecnológico, aunque no en el social.

Inglaterra y Estados Unidos eran las dos principales potencias con opción efectiva para construir un canal a través del istmo. Como lo hemos visto, los dos países acordaron —por el Tratado Clayton-Bulwer, firmado en 1850— que ninguno de ellos tomaría la iniciativa de la construcción del canal sin el consentimiento del otro.

En 1878, un norteamericano llamado Bonaparte Wyse obtuvo una concesión del gobierno colombiano, del cual dependía Panamá, para la eventual construcción de un canal interoceánico. Un año después, Ferdinand de Lesseps y una compañía francesa compraron la concesión Wyse y abrieron suscripciones de capital, no sólo en Francia sino en todos los países adelantados del mundo, incluido Estados Unidos. Pero contrariamente a lo que sucedió en el caso de Suez, la compañía de De Lesseps se encontró con las más graves dificultades financieras y, al cabo de una década, en 1889 tuvo que declararse en quiebra.

Estados Unidos, volcado hacia el imperialismo desde 1880, observó con interés la iniciativa de De Lesseps, y sus dirigentes llegaron a la conclusión de que necesariamente debían controlar y dirigir la construcción de la vía interoceánica.

Claramente, el acuerdo Clayton-Bulwer constituía un obstáculo para la realización del destino imperial estadounidense. La potencia norteamericana de 1880-1890 ya consideraba al Caribe y Centroamérica como su esfera de influencia exclusiva. De conformidad con ese sentimiento, el presidente Rutherford Hayes enunció en 1889 un corolario a la Doctrina de Monroe: para evitar la injerencia de imperialismos extracontinentales en América, Estados Unidos debía ejercer el control exclusivo sobre cualquier canal interoceánico que se construyese.

Por lo pronto surgieron nuevas iniciativas privadas. En 1887 una compañía particular firmó un convenio con el gobierno de Nicaragua para la eventual construcción de un canal. En 1888 otra empresa suscribió un acuerdo similar con Costa Rica. En 1894 los sucesores de De Lesseps crearon una nueva compañía en Panamá.

El gobierno norteamericano vacilaba en cuanto a otorgar su respaldo a una u otra de esas iniciativas. El gran interrogante que se presentaba era fundamentalmente éste: ¿Nicaragua o Panamá? Tanto los terratenientes nicaragüenses como los panameños tenían interés en que su región fuese la escogida. Tal obra valorizaría enormemente sus terrenos y les traería prosperidad comercial y financiera. Por ello, en Washington se instalaron dos *lobbies*, uno nicaragüense y otro panameño, para hacer propaganda y aplicar presiones ante el Congreso y la opinión pública en favor de sus respectivos intereses. El "lobbista" panameño, Bunau-Varilla, era el más hábil y triunfó sobre su rival nicaragüense.

Antes de decidirse definitivamente entre Panamá y Nicaragua, el gobierno norteamericano resolvió conseguir la anulación del Tratado Clayton-Bulwer. Para 1901 Inglaterra estaba dispuesta a renunciar a sus derechos sobre un eventual canal en el istmo: la guerra de los Bóers había dejado al gobierno de Londres sin amigos en el mundo y le había enseñado la necesidad de buscar la amistad norteamericana. Ese mismo año, Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron el Tratado Hay-Pauncefote, cuyos términos eran los siguientes: Inglaterra admitía que Estados Unidos construyera exclusivamente el canal por su propia iniciativa, con tal de no fortificarlo militarmente. El senado norteamericano se negó a ratificar esta última cláusula y el Tratado fue renegociado. En su versión definitiva deja las manos libres a Estados Unidos, comprometiéndolo únicamente a garantizar la completa libertad de navegación a todas las naciones y muy particularmente a los ingleses.

El presidente Mc Kinley fue asesinado en el mes de septiembre de 1901; en la primera magistratura del país le sucedió el entonces vicepresidente, Teodoro Roosevelt. Este vigoroso estadista, de gran envergadura, combinaba cierto reformismo en política interna con la más clara y compleja definición imperialista en el ámbito de la política exterior. Dominar el Caribe, el Pacífico y las tierras ribereñas de esos mares era, para Roosevelt, un requisito esencial para el ascendente imperio norteamericano. En lo personal, cifraba su honor en entrar a la historia como el forjador fundamental de ese imperio. A partir de 1902, bajo el impulso de Teodoro Roosevelt, se intensificaron las iniciativas encaminadas a obtener una franja territorial en el istmo y comenzar la construcción del canal.

En enero de 1902, el Congreso autorizó la negociación con Nicaragua o con Colombia para obtener concesiones en cualquiera de esos países. Bunau-Varilla redobló sus esfuerzos para convencer al máximo cuerpo deliberante norteamericano de que se pronunciara en favor de Colombia, es decir, Panamá. Así lo hizo el

Congreso para el mes de junio. La segunda compañía francesa vendió sus propiedades al gobierno norteamericano en ese mismo año.

El secretario de Estado de Estados Unidos y el encargado de negocios de Colombia en Washington firmaron en enero de 1903 el Tratado Hay-Herrán. Por parte del colombiano era un acto precipitado: la oposición política y la opinión públicas colombianas rechazaron la idea de enajenar partes del territorio nacional a manos de un Estado extranjero. En efecto, el Tratado preveía la concesión a perpetuidad de una zona del Canal para uso de Estados Unidos, a cambio de un pago inicial de 10 millones de dólares y una suma anual de 250.000. En agosto de 1903 el Congreso Nacional colombiano rechazó el Tratado, por considerarlo violatorio de la Constitución y la soberanía del país.

Teodoro Roosevelt no estaba dispuesto a aceptar una negativa, tampoco a admitir que las negociaciones pudieran prolongarse. En 1904 se realizarían las elecciones presidenciales en Estados Unidos y Roosevelt estaba empeñado en obtener la zona del Canal antes de ese proceso para capitalizarla políticamente. Por ello, el presidente norteamericano reaccionó violentamente ante el rechazo al Tratado Hay-Herrán, y tomó la firme decisión de proceder por la fuerza.

En estrecha colaboración con Bunau-Varilla, el gobierno de Estados Unidos trabajó en la preparación de la secesión panameña. Existían condiciones objetivas favorables a la separación de Panamá de la República de Colombia. Panamá se diferenciaba de todas las demás provincias colombianas por su localización geográfica, su carácter étnico y cultural, y sus relaciones económicas. Separada del resto del país por el inhóspito istmo de Darién, desarrolló su vida aparte. Durante el siglo XIX más de 50 levantamientos secesionistas habían ocurrido en tierra panameña. Ahora, a los descontentos anteriores se añadía la decepción de la oligarquía terrateniente de Panamá por el rechazo colombiano al proyecto de venta de la zona del Canal.

Con la complicidad de las autoridades norteamericanas, Bunau-Varilla, desde la suite número 1.162 del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, preparó la rebelión secesionista, reuniendo a conspiradores y contratando a unos quinientos mercenarios. Roosevelt prometió secretamente a Bunau-Varilla que Estados Unidos no permitiría que la rebelión fracasara. El barco de guerra norteamericano Nashville llegaría al puerto de Colón el día 2 de noviembre de 1903 en visita de "cortesía".

La insurrección separatista estalló el 3 de noviembre. El Nashville y sus infantes de marina impidieron el desembarco de tropas gubernamentales colombianas. El 4 de noviembre la República de Panamá proclamó su independencia. Dos días después, el gobierno de Washington reconoció el nuevo Estado. El día 13 de noviembre Bunau-Varilla presentó sus credenciales como enviado extraordinario y plenipotenciario de Panamá. El 18 de noviembre fue firmado el Tratado Hay-Bunau-Varilla: Panamá cedió a Estados Unidos, a perpetuidad, el uso de una franja de territorio de diez millas de ancho, de la costa del Pacífico hasta la del Caribe, por la suma de 10 millones de dólares y un pago anual de 250.000. En febrero de 1904 el Tratado quedó ratificado por ambos Estados.

Roosevelt, como imperialista franco, jamás negó que la separación de Panamá de Colombia y la cesión del Canal fueran producto de una política de fuerza. Justificó la intervención indirecta de Estados Unidos en los asuntos colombiano-panameños, con el alegato de que era necesaria para asegurar "el progreso y la

civilización". En 1911 explicó con toda claridad: "*I took Panama and let Congress debate*" ("Tomé Panamá y dejé que el Congreso discutiera").

La construcción de la vía interoceánica comenzó en seguida, con todo el vigor y la rapidez que Teodoro Roosevelt sabía imprimir a sus iniciativas. El Canal comenzó a funcionar en 1914.

Colombia se sintió grandemente ofendida por la intervención norteamericana en Panamá y la abierta ayuda de Teodoro Roosevelt a la secesión de ese país. En 1914, el presidente Wilson tomó la iniciativa de negociar un convenio con Colombia, por el cual Estados Unidos expresaba su pesar por lo ocurrido y ofrecía una indemnización de 25 millones de dólares. Ese convenio fue rechazado por el Congreso, encabezando Teodoro Roosevelt la batalla política contra la ratificación del instrumento. Roosevelt alegaba que Estados Unidos no debía "pedir perdón" ni lamentar los hechos de 1903.

Fue sólo en 1921 cuando Estados Unidos negoció con Colombia un tratado que entró en vigencia y otorgó al país sudamericano la indemnización de 25 millones. Para este momento los norteamericanos estaban interesados en obtener concesiones petroleras en tierra colombiana.

La política del garrote y la diplomacia del dólar

Las presidencias de los mandatarios norteamericanos Teodoro Roosevelt (1901-1909) y William Howard Taft (1909-1913) se definen en su actuación hacia los países de Latinoamérica del siguiente modo: la primera, por la llamada "política del garrote", y la segunda, por la "diplomacia del dólar". Ambas políticas representan el mismo proceso de creciente intervención y dominación del imperialismo estadounidense en la zona del Caribe.

Teodoro Roosevelt, influido por el darwinismo social, a la vez que por la ideología imperialista anglosajona de figuras como Rudyard Kipling y Joseph Chamberlain, creía que la competencia es la ley del mundo y que los más fuertes están destinados a ejercer su dominación —preferentemente benévola y civilizadora— sobre los más débiles. En el plano de la política interna de Estados Unidos esa fe en una ruda pero creadora competencia se expresó por la lucha contra los monopolios y la promoción de la ley anti *trust* de 1903; en el ámbito de la política exterior se tradujo en una estrategia imperialista.

Al mismo tiempo, Roosevelt creía en el realismo político. Sin piadosas ilusiones, sabía que la estructura internacional en última instancia está determinada por relaciones de fuerza y no por normas de derecho. Una de sus máximas era la de no emprender iniciativas diplomáticas que no pudiesen ser respaldadas por la fuerza si fuese necesario. En uno de sus safaris en Africa oriental había recogido un proverbio indígena que decía: "Cuando vayas a visitar a tu adversario, habla en voz baja pero lleva un garrote en la mano". Una política exterior basada en demostraciones de fuerza discretas pero inconfundibles era la de Teodoro Roosevelt ante las demás grandes potencias. Frente a la América Latina el garrote era más visible y menos discreto.

El ejército norteamericano, que había salido de Cuba en 1902 después de que ese país acogió la Enmienda Platt, intervino nuevamente en la isla a raíz de su crisis

política en 1906. Las fuerzas estadounidenses ocuparon la nación cubana durante tres años, retirándose en 1909.

Teodoro Roosevelt tuvo una actitud enérgica en la crisis venezolana de 1902-1903. En un arrebato nacionalista, el presidente Cipriano Castro se negó a cancelar las deudas pendientes con varias potencias europeas bajo las condiciones que éstas exigían. Como resultado de la negativa de Castro, aparecieron en la costa venezolana barcos de guerra alemanes, ingleses e italianos. Después de bloquear los puertos venezolanos, procedieron a hundir y capturar la mayor parte de la flota del país, y finalmente los alemanes cañonearon la costa, causando destrucción y muerte. El presidente norteamericano invocó la Doctrina de Monroe y exigió que los intervencionistas europeos se retirasen; a cambio de ello, Estados Unidos se encargaría de obligar a la Venezuela rebelde a pagar sus deudas.

Apenas solucionado el caso venezolano, se presentó una situación similar en Santo Domingo. Las finanzas públicas de República Dominicana se hallaban en un estado de virtual bancarrota, de tal manera que el país no estaba en capacidad de hacer frente a agobiantes obligaciones ante acreedores europeos. Bajo el impacto de esta situación, además de la venezolana del año anterior, Roosevelt proclamó su Corolario a la Doctrina de Monroe: "La delincuencia crónica (de algunos países latinoamericanos) puede (...) hacer necesaria la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental la Doctrina de Monroe puede obligar a Estados Unidos (...) a ejercer un poder de policía internacional". En otras palabras, Teodoro Roosevelt transformó la Doctrina Monroe en un instrumento preventivo e intervencionista. Allí, donde a juicio unilateral de Estados Unidos existían condiciones de desorden financiero o político que posiblemente pudiesen provocar una intervención extracontinental, la potencia norteamericana debía anticiparse, ocupando a su vez el indócil país "incivilizado", para corregirlo de acuerdo con los dictados del sistema internacional dominante.

En aplicación al Corolario Roosevelt, los infantes de marina desembarcaron en República Dominicana en 1905. Estados Unidos asumió la administración de aduanas del país, destinando el 45% de los ingresos aduaneros al fisco dominicano y el 55% restante al pago de la deuda exterior. Gran Bretaña, acreedora de República Dominicana, elogió esta iniciativa que satisfizo a los banqueros del mundo.

Al mismo tiempo que intervino en el Caribe, en aplicación de su Corolario, Teodoro Roosevelt actuó enérgicamente en el Océano Pacífico y Asia oriental para fortalecer los intereses imperiales norteamericanos en esas regiones. Negoció con Japón sobre la división del Pacífico en zonas de influencia, sirvió de mediador entre Japón y Rusia, y proclamó la doctrina de la "Puerta Abierta" en China (doctrina que exige que los viejos imperialismos —inglés, francés, ruso— ya establecidos en China, dejen la puerta abierta a los imperialismos más jóvenes, tales como el norteamericano).

William Howard Taft y su secretario de Estado, Philander Knox, representaron el ala más conservadora del Partido Republicano, y mantuvieron íntimas y excelentes relaciones con el *establishment* financiero de Wall Street. Knox, antes de ingresar a la diplomacia, había sido abogado de grandes empresas financieras. Tanto él como el propio presidente Taft se sentían convencidos de que el interés nacional norteamericano coincidía plenamente con el de los consorcios capitalistas del país. En su política exterior mantuvieron la más estrecha y permanente

colaboración con los grupos inversionistas particulares. En la Casa Blanca, en el Departamento de Estado o en otros sitios más discretos, los máximos dirigentes del gobierno se reunían regularmente con los jefes de la gran banca, para proyectar y organizar acciones conjuntas encaminadas a ocupar y dominar la zona del Caribe y la parte septentrional de América del Sur, así como también a conquistar una participación económica y política cada vez mayor en los asuntos del Pacífico y de China. En lo doctrinario, acogieron cabalmente el Corolario Roosevelt y el objetivo de garantizar la seguridad del Canal de Panamá y las rutas marítimas que conducen hacia él.

Taft y Knox agregaron a la Doctrina de Monroe otro Corolario, que acentúa su carácter imperialista. Afirmaron que no sólo la ocupación política de alguna zona independiente en las Américas por parte de una potencia extracontinental constituye una violación de esa doctrina, sino que la vulnera hasta el establecimiento de la "influencia económica" de sectores privados extracontinentales. Sistemáticamente presionaron a los países del Caribe, hasta con la amenaza del desembarco de los *marines*, para que negaran concesiones y contratos al capital europeo y japonés, llegando incluso a forzarlos para que anularan convenios ya suscritos con inversionistas de esos países. En 1912, cuando un grupo económico japonés negoció con México para obtener concesiones en Baja California, Estados Unidos amenazó a las autoridades mexicanas y presionó a Japón hasta que el proyecto fue cancelado. Henry Cabot Lodge, senador republicano allegado a Taft, propuso y logró la aceptación por parte del Congreso de una resolución según la cual Estados Unidos no toleraría la transferencia de zonas "estratégicas" de las Américas a compañías privadas no americanas. Así, la Doctrina de Monroe se aplicaría en lo sucesivo no sólo a gobiernos sino también a empresas privadas extracontinentales. De 1912 en adelante, este nuevo corolario fue invocado cuatro veces para impedir el otorgamiento de concesiones mexicanas a grupos japoneses. Los dos componentes del engranaje imperialista —capitalistas y militares— tuvieron participación en la formulación de ese añadido a la Doctrina Monroe.

En 1909 Taft y Knox comprobaron que Honduras adeudaba sumas considerables a acreedores ingleses. Aplicando el Corolario Roosevelt, el gobierno norteamericano forzó al hondureño a aceptar que un grupo financiero privado de Estados Unidos tomara a su cargo la deuda exterior del país centroamericano. Cañoneras e infantes de marina se hicieron presentes para garantizar la operación.

En 1910 se efectuó una intervención parecida en la República de Haití. Bajo la protección de infantes de marina y unidades navales estadounidenses, un grupo bancario norteamericano compró el Banco Nacional haitiano y lo manejó de acuerdo con sus propios intereses como sucursal de Wall Street.

Otra intervención de Taft se llevó a cabo en Nicaragua, república de particular importancia no sólo económica (grandes inversiones en la producción y exportación de bananas), sino también estratégica: la geografía del país se presta a la eventual construcción de otro canal interoceánico y Estados Unidos ejerce, por ello, una vigilancia particular. Para 1909, el mandatario nicaragüense de orientación nacionalista, José Zelaya, había disgustado al gobierno y a los grupos privados norteamericanos por su política independiente. Estados Unidos dio su apoyo a un conato de golpe contra Zelaya. El enérgico gobernante debeló la intentona y mandó fusilar a dos mercenarios norteamericanos capturados en el transcurso de la acción

represiva. El gobierno de Washington protestó, expulsó al encargado de negocios nicaragüense y envió barcos de guerra al país centroamericano. Zelaya cayó y fue reemplazado por un gobierno provisional al cual se le obligó, bajo amenaza de cañoneo y desembarco de *marines*, a suscribir un acuerdo por el cual Nicaragua recibía un préstamo norteamericano y, a cambio de ello, entregaba sus aduanas a un administrador estadounidense, designado en 1911. Posteriormente, entre 1912 y 1931, los infantes de marina entraron en Nicaragua varias veces.

El presidente Woodrow Wilson, electo en 1912 y en posesión del mando a partir de 1913, era un hombre totalmente distinto de Taft. Dirigente del Partido Demócrata, liberal, idealista y adversario del imperialismo como doctrina y principio, prometía un trato nuevo, más democrático, a su propio pueblo y a las naciones extranjeras. Al tomar posesión de la presidencia, proclamó su vehemente repudio a la diplomacia del dólar y a las intervenciones imperialistas. Afirmó que su política exterior estaría basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el apoyo a la causa democrática en todos los países del mundo. Pero entre la teoría y la práctica existió una distancia considerable. En el área del Caribe, Wilson continuó la política intervencionista de Taft y hasta la intensificó. Para tranquilizar su conciencia, se convencía de que sus intervenciones no iban dirigidas contra "demócratas" sino contra "enemigos de la democracia", y que su propósito no era el de proteger y promover los intereses de grupos inversionistas sino el de ayudar a los pueblos pobres a liberarse de gobernantes indeseables: si los capitalistas norteamericanos aprovechaban esas nobles intervenciones y sacaban de ellas grandes beneficios no sería culpa del gobierno.

En 1913, antes de entregar el gobierno a Wilson, Taft había obligado a Nicaragua a entregar a Estados Unidos, por un lapso de 99 años, dos islas en el Golfo de Fonseca, a cambio de la cancelación de las deudas pendientes con bancos norteamericanos. Wilson aprobó estos términos, que quedaron incorporados en el Tratado Bryan-Chamorro, firmado en 1916 por el secretario de Estado norteamericano y el canciller nicaragüense. El presidente Wilson quiso que a este Tratado se le agregase una cláusula similar a la Enmienda Platt, que habría legalizado las intervenciones armadas estadounidenses, pero el propio senado de Washington se negó a ratificar tal disposición.

En 1915 graves desórdenes políticos estallaron en Haití. El presidente Vilbrun Guillaume Sam, enfrentado a un levantamiento de sus adversarios y del pueblo, masacró a 160 presos políticos. En seguida fue derrocado por las fuerzas rebeldes. En venganza por la masacre de los presos, la turba despedazó a Sam.

El linchamiento y los desórdenes callejeros sirvieron de pretexto para un desembarco inmediato de los infantes de marina, teóricamente para proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos norteamericanos en la isla. En vez de retirarse después del restablecimiento del orden, los *marines* permanecieron en el país durante 18 años. Haití fue obligada a suscribir un convenio por el cual se convertía en protectorado de Estados Unidos. Bajo severa ocupación militar, y con una Constitución redactada por norteamericanos, el país llevó una existencia colonial hasta 1933. En una oportunidad, cuando el pueblo se alzó contra la potencia ocupante, los infantes de marina reprimieron duramente la revuelta, dando muerte a unas 3.000 personas.

Del mismo modo, la parte oriental de la isla —República Dominicana—fue

ocupada por las tropas de Wilson en 1916. En el caso dominicano, la ocupación "sólo" duró ocho años (en lugar de dieciocho), pero fue más dura y opresiva que la que imperaba en Haití. Mientras que en la república negra existía un gobierno nacional, que regía al país bajo la supervisión del ocupante, en Santo Domingo los oficiales de marina yanqui asumieron el mando directamente, sin gobernantes nacionales interpuestos, y ejercieron una férrea y salvaje dictadura, recurriendo al uso de la tortura, la reclusión en campos de concentración, y hasta el asesinato de los patriotas que resistían a la opresión extranjera. Tanto en Haití como en Santo Domingo, la ocupación militar permitió a los intereses capitalistas norteamericanos extender y consolidar su control sobre los ingenios azucareros y otras fuentes de riqueza.

Resistencias sudamericanas al imperialismo (1900-1920)

Las opresiones nacionales y sociales tienden a despertar fuerzas rebeldes, dirigidas en contra de los factores opresores. Fue notable el estímulo objetivo e indirecto que la intervención del imperialismo norteamericano y británico dio al ascenso de corrientes sociales y políticas nuevas, orientadas hacia el logro de una mayor independencia de las naciones latinoamericanas, así como a la reestructuración de las relaciones sociales dentro de esas naciones en el sentido de una mayor justicia. La penetración imperialista provocó réplicas liberadoras importantes y en algunos casos irreversibles.

La interrelación imperialismo-liberación tiene su raíz en el papel transformador que el capital extranjero desempeña en los países subdesarrollados. La penetración del capital extranjero intensifica la dependencia del país subdesarrollado frente al centro capitalista dominante. Pero al mismo tiempo estimula actividades capitalistas dependientes, alienta migraciones del campo a la ciudad, y provoca la formación de nuevas clases sociales, destinadas a combatir el imperialismo y, eventualmente, el propio modo de producción capitalista. Aunque, por un lado, el capital imperialista crea una burguesía importadora vinculada a intereses foráneos y, por el otro, estimula la formación de capas medias modernas, integradas por profesionales, técnicos e intelectuales, así como también el desarrollo de la clase obrera. Esta última, integrada por los trabajadores de empresas dominadas por el capital o la tecnología extranjera, tiende a ejercer creciente influencia en la dinámica social de sus países, coincidiendo con los campesinos y otros trabajadores tradicionales, y también con las capas medias inconformes y rebeldes, en la lucha por la liberación nacional y la transformación de las estructuras. En algunos casos, esa lucha sólo logra éxitos parciales y arroja resultados modestos; en otros, sacude profundamente a las naciones latinoamericanas y produce avances de honda significación histórica. En la etapa que nos interesa, la Revolución Mexicana constituyó la réplica más contundente e importante de la América Latina a la penetración imperialista, pero también deben señalarse algunos procesos sudamericanos que precedieron a los sucesos mexicanos o que ocurrieron simultáneamente con ellos.

Para fines del siglo XIX iniciaron su ascenso en las repúblicas de Chile y de Argentina los Partidos Radicales de tendencia democrática y reformista, expresión política de las capas medias. Al mismo tiempo, se inició el auge de las fuerzas del

proletariado organizado de esos países: sindicatos, agrupaciones anarquistas y, finalmente, partidos socialistas.

Después de la Segunda Guerra del Pacífico, Chile se encontró más que nunca sometido al capital extranjero. El inglés John Thomas North, "rey de los nitratos", controlaba la economía del país en asociación con la oligarquía autóctona. Contra ese estado de cosas se elevó el presidente José Manuel Balmaceda, liberal, quien gobernó de1886 a1891. Frente al parlamento dominado por los grandes intereses, Balmaceda pretendió fortalecer el poder ejecutivo vinculado a la causa nacionalista y popular. Dictó una serie de decretos que afectaban la dominación extranjera sobre la economía chilena. Pero la alianza imperialista-oligarca se alzó en armas contra Balmaceda en 1891, en nombre de la "democracia" parlamentaria amenazada por el "autoritarismo". Derrocado y refugiado en la embajada argentina, Balmaceda se suicidó, quedando en la memoria del pueblo chileno como mártir del nacionalismo liberador. En años recientes, se han establecido comparaciones entre Balmaceda y Salvador Allende por la similitud de sus destinos. En ambos casos, derrocado y muerto el mandatario renovador, la oligarquía victoriosa se apresuró a anular las reformas realizadas.

Desde 1900 en adelante, los radicales se fortalecieron continuamente y su influencia se hizo sentir en el país. Además de luchar por el avance de la democracia, los radicales proponían medidas económicas nacionalistas. Los socialistas, por su parte, propugnaron la solidaridad internacional de los trabajadores chilenos con el proletariado del mundo en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo.

Tendencias parecidas se desarrollaron en la vecina Argentina. El radicalismo de clase media y el socialismo crecieron paralelamente. En 1905 Hipólito Irigoyen encabezó un movimiento revolucionario radical. En 1916 los votos del pueblo lo llevaron a la presidencia de la nación. Su gobierno se caracterizó por las reformas encaminadas a promover una mayor igualdad entre los ciudadanos, y por una política de nacionalismo económico frente a los grandes intereses capitalistas norteamericanos e ingleses.

En Uruguay comenzó en 1903 el interesante ensayo popular reformista de José Batlle y Ordóñez. Para fines del siglo XIX el Partido Colorado había comenzado a desarrollar una corriente novedosa, más avanzada y más social que el liberalismo clásico que caracterizaba a ese partido en sus primeras fases. Batlle, desde la presidencia, aprovechó los grandes ingresos fiscales debidos a la prosperidad del mercado mundial de carne, lana y cueros, para implantar el primer *Welfare State* del mundo: el primer Estado —antes y en mayor grado que la Alemania del Kaiser Guillermo II— donde todos los ciudadanos gozaban de una seguridad social integral desde la cuna hasta la tumba. Junto con esta labor reformista en el plano social interno, Batlle despertó la conciencia de sus compatriotas con respecto a la dependencia económica ante el mundo exterior.

Cabe mencionar igualmente, como síntoma de transformación progresista en América Latina, el auge del liberalismo en Brasil desde las últimas décadas del siglo XIX. La esclavitud sólo fue abolida en 1888, pero a partir de ese momento se aceleró la modernización. En 1889 los republicanos hicieron una revolución sin sangre y obligaron al emperador Pedro II a abdicar el trono.

Los primeros gobiernos de la república emprendieron diversas iniciativas renovadoras en diferentes órdenes de la vida política y social. En lo relativo a la

política exterior, el Barón de Rio Branco organizó a comienzos de este siglo el servicio exterior contemporáneo de Brasil. El Itamaraty constituye, desde entonces, el ministerio de Relaciones Exteriores más eficiente de América Latina. Rio Branco trazó, así mismo, ciertos lineamientos generales de la política exterior brasileña, que fueron cumplidos posteriormente. Brasil aspiraría a la hegemonía en América del Sur, pero no por métodos violentos sino por las armas de la diplomacia. En su lucha por el puesto de árbitro de Sudamérica, Brasil actuaría en alianza con la mayor potencia hegemónica externa: Gran Bretaña y, posteriormente, con Estados Unidos. En ese sentido su política se diferencia de la de Argentina que igualmente aspiraba a una posición influyente en América del Sur, pero tendía a buscar esa meta mediante una política contraria al imperialismo externo más importante.

La Revolución Mexicana y sus efectos internacionales

México fue sacudido por la Guerra de la Reforma, la intervención francesa y el gobierno de Benito Juárez, pero el liberalismo ascendente no fue capaz de cumplir enteramente con su programa. Juárez murió en 1872, y al cabo de un breve lapso de confusión le sucedió en el mando el general Porfirio Díaz, seguidor y lugarteniente del gran tribuno desaparecido. A diferencia de éste, Porfirio Díaz carecía de verticalidad doctrinaria y de sincera identificación con las masas populares. Desde que asumió la presidencia en 1876 se fue inclinando progresivamente hacia la derecha. Surgido del liberalismo y del movimiento popular de la Reforma, gradualmente se transformó en un autócrata apoyado por la oligarquía latifundista, el clero conservador y, sobre todo, por los intereses imperialistas norteamericanos. Abrió el país a los inversionistas extranjeros, otorgándoles concesiones mineras y agrícolas. Duro hacia su propio pueblo, se mostró flexible ante los intereses foráneos. Con mano dura garantizó a los capitalistas norteamericanos la "tranquilidad social": durante su dictadura no hubo huelgas ni reivindicaciones obreras efectivas. En el medio rural este antiguo reformista actuó como defensor del orden feudal y de los intereses latifundistas. Bajo el opresivo régimen de Porfirio Díaz los campesinos mexicanos vivían en una situación parecida a la de los siervos de la gleba en Europa medieval o en la Rusia zarista. Se les mantuvo en total sujeción a los amos de la tierra y, en muchos casos, su condición era de virtual esclavitud. El pueblo humilde y los intelectuales gemían bajo el porfiriato, mientras la prensa internacional, vinculada a los grandes intereses económicos, elogiaba al dictador como paladín del orden y de la "civilización".

Pese a todo ello, la penetración imperialista preparaba objetivamente su propia derrota. En torno a las concesiones mineras y petroleras, a los establecimientos comerciales extranjeros, y a los ferrocarriles construidos con capital y técnica yanquis, se formaba una clase obrera y surgían núcleos de profesionales e intelectuales de mentalidad moderna, desengañados y revolucionarios.

Para fines de 1910 Porfirio Díaz trató de hacerse reelegir una vez más. Los mexicanos se alzaron contra la reelección y pidieron la democratización del país. Ante la negativa de Díaz de entregar el poder, Francisco Madero encabezó un movimiento revolucionario armado, que contó con el apoyo de todo el pueblo. Al lado de intelectuales, capas medias y obreras, las masas campesinas despertaron de

su letargo. Madero estableció un gobierno revolucionario provisional y convocó a una asamblea constituyente. Mirado por el imperialismo como peligroso agitador, Madero fue demasiado vacilante con los trabajadores revolucionarios. En noviembre de 1911 el dirigente campesino Emiliano Zapata se alzó contra Madero en vista de que éste se negaba a poner en práctica la reforma agraria deseada por los explotados del campo. Por otro lado, los latifundistas y demás sectores privilegiados del país, apoyados por los inversionistas extranjeros y el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, conspiraron desde la derecha. En 1913 el general Victoriano Huerta, originalmente al servicio de Madero, se rebeló contra él, lo apresó y —aparentemente por insinuación del embajador Henry Lane Wilson— lo asesinó.

La implantación de la dictadura contrarrevolucionaria de Huerta fue saludada con júbilo por los capitalistas extranjeros que creían en el retorno a los buenos tiempos del porfiriato. Pero el pueblo mexicano no estaba dispuesto a renunciar a la democracia y a la liberación nacional. En el Norte, Pancho Villa se alzó contra Huerta. Igual cosa hizo Emiliano Zapata a la cabeza de sus campesinos sedientos de tierra y de justicia. El general Venustiano Carranza, demócrata y patriota vinculado al movimiento obrero y a las capas medias urbanas, asumió la jefatura principal de la lucha revolucionaria contra el régimen huertista.

En Estados Unidos, los capitalistas eran obviamente partidarios de Huerta y vehementes enemigos de la Revolución Mexicana. No así el presidente Woodrow Wilson que, en este caso, se apegó a los ideales democráticos que en otras oportunidades tendía a abandonar. Contra las presiones de los sectores económicos, Wilson mantuvo el punto de vista de que había que apoyar a Carranza y no a Huerta. Venustiano Carranza era revolucionario y demócrata, pero más moderado que Zapata y Villa, y dispuesto a permitir que el capital extranjero siguiera participando en la vida económica mexicana, con tal de someterse a la supervisión efectiva y soberana del poder público nacional. El presidente Wilson desautorizó la política seguida por Taft y su embajador Henry Lane Wilson, y se negó a reconocer al gobierno de Victoriano Huerta. El disgusto de los capitalistas norteamericanos se comprende cuando se recuerda que el monto total de sus inversiones en México era, para 1913, de 1.000 millones de dólares. Cincuenta mil norteamericanos vivían y trabajaban en tierra mexicana. Así mismo, los intereses británicos y alemanes en México eran considerables, y tanto el gobierno de Londres como el del Kaiser eran partidarios de Huerta y se sentían irritados por la actitud que Woodrow Wilson adoptó en este caso.

En 1914 Wilson dio otro paso favorable a la corriente revolucionaria moderada de Carranza y contraria a la corriente huertista, al permitir la venta de armas a aquél mientras mantenía el embargo contra el gobierno de Huerta. La derecha norteamericana e internacional se lanzó contra Wilson. Los ingleses y alemanes, así como también contrabandistas yanquis, intensificaron su apoyo a Huerta. Los intereses petroleros norteamericanos e ingleses estuvieron a la vanguardia del grupo de presión pro Huerta y favorable a una intervención "civilizada" que pusiera fin a la Revolución Mexicana. En 1914 los gritos de intervención se hicieron más fuertes al conocerse la noticia de que unos setenta norteamericanos habían perdido la vida por la violencia que había en el sur del Río Bravo.

Efectivamente, en 1914 una intervención armada norteamericana se produjo a raíz de un incidente en Tampico, donde la bandera de Estados Unidos fue agraviada

por fuerzas mexicanas dependientes del gobierno de Huerta. Wilson exigió disculpas y un saludo de 21 cañonazos a la bandera norteamericana. Huerta aceptó pedir disculpas, pero no el homenaje de los 21 cañonazos. En el mes de abril tropas de infantería de marina norteamericana desembarcaron en el puerto de Veracruz. Esta intervención provocó una tregua y una momentánea unidad de acción entre todos los bandos mexicanos, incluido el de Huerta. Este, así como Carranza, Zapata y Villa, fueron unánimes en condenar la intervención y en exigir la salida de los yanquis del territorio mexicano. Se rompieron las relaciones entre Estados Unidos y México.

En ese momento se produjo una gestión diplomática de las potencias "ABC" (Argentina, Brasil y Chile), que ofrecieron su mediación entre México y Estados Unidos. Por efecto de los buenos oficios de los ABC, se realizó una conferencia en Niagara Falls, en la cual participaron esos tres países además de México y Estados Unidos. Se llegó a un acuerdo de reconciliación y retiro de las tropas norteamericanas de México. Poco después, el general Huerta, asediado por las fuerzas revolucionarias, presentó su renuncia y salió al exterior. Venustiano Carranza asumió la presidencia del país.

Aunque había contado con el apoyo de Zapata y Pancho Villa en el combate contra la reacción huertista, Carranza pronto fue abandonado por esos revolucionarios radicales. Zapata insistía en una reforma agraria inmediata y profunda, que quebrara el latifundio y estableciera cooperativas campesinas en todo el país. Además, él y Villa miraban con desconfianza la relativa moderación del nacionalismo de Carranza y su disposición a mantener contactos con el gobierno de Wilson. En 1915, los dos líderes populares, el uno en el centro-sur y el otro en el norte de México, recomenzaron la guerra revolucionaria, esta vez contra Carranza. En cierto modo fue la lucha del campo contra la ciudad. La clase media urbana y también los sindicatos obreros apoyaban a Carranza, mientras que a Zapata le seguía la clase más pobre, oprimida y numerosa: el campesinado, indígena en su mayoría. Pancho Villa, de criterio político y conciencia social menos formados que Zapata, encabezó tropas campesinas en el Norte, en la zona limítrofe con Estados Unidos.

Ante la hostilidad que Estados Unidos mostraba hacia la Revolución Mexicana, durante 1916-1917 Pancho Villa invade el territorio de ese país y da muerte a 35 ciudadanos. Presionado por una opinión pública condicionada desde hace tiempo por la incesante propaganda antimexicana de los grupos capitalistas, Wilson presentó un ultimátum al gobierno de México: si éste no lograba dominar y controlar a Pancho Villa, los norteamericanos intervendrían por la fuerza para acabar con las andanzas de ese caudillo. Como Carranza tuvo que admitir su incapacidad para controlar a Villa, el gobierno norteamericano envió al general Pershing, con una columna de caballería, a penetrar en territorio mexicano y perseguir a los guerrilleros villistas. Esa intervención táctica, con un número reducido de tropas, era insignificante en comparación con lo que pedían los consorcios capitalistas: nada menos que la guerra en gran escala y la ocupación de todo México.

Pershing obligó a Villa a replegarse hacia el Sur, aunque no logró infligirle daños serios. En vista de que se agravaba la situación internacional y que Estados Unidos se disponía a entrar en la Primera Guerra Mundial, Wilson ordenó a Pershing que se retirara de México al cabo de pocos meses.

En ese mismo año (1917) se consolidó el poder del gobierno del general

Venustiano Carranza, a pesar de que los zapatistas continuaban la guerra. En el transcurso de su combate, Emiliano Zapata se radicalizó más. Al comienzo había proclamado una reforma agraria moderada que sólo expropiaría una tercera parte de los terrenos de cada latifundio y pagaría indemnizaciones a los terratenientes afectados; al final llegó a proclamar la lucha de clases violenta, la expropiación sin indemnización y la aplicación de fórmulas agrarias socialistas. Para combatir el zapatismo, Carranza y su lugarteniente y sucesor Alvaro Obregón utilizaron la represión pero también la reforma. La promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 —instrumento jurídico revolucionario que a partir de ese momento sirvió de modelo para todas las Constituciones progresistas latinoamericanas— indicó que el gobierno de Carranza acogía la teoría de una transformación antifeudal y socialdemócrata de las estructuras, a la vez que afirmaba el control del Estado sobre los recursos y rechazaba el imperialismo. La Constitución de 1917 no sólo reconoce los derechos tradicionales, liberales, del hombre y del ciudadano, sino que además enumera sus derechos sociales al trabajo, a la tierra, a una vida material digna, a la seguridad social. De aplicar realmente todos esos principios, el Estado mexicano se vería obligado a adoptar medidas que van más allá del capitalismo y abren la puerta a una democracia socialista. Así mismo, la total aplicación de las normas que la Constitución establece para el control nacional sobre los recursos del país y sobre su desarrollo económico, así como para la defensa contra el imperialismo económico extranjero, requeriría la nacionalización de los medios de producción más importantes y la incuestionable primacía del sector público sobre el privado. La magna carta de la Revolución Mexicana, elaborada bajo el gobierno de Carranza en 1917, representaba un llamado a que la revolución continuara, para que no se aceptara su estancamiento y no se permitiera el surgimiento de nuevos privilegios. Era un documento "rojo" que espantó a los norteamericanos, y cuyos planteamientos tanto Carranza como Obregón no estaban dispuestos a llevar a la práctica en su total dimensión revolucionaria y humanista. Zapata continuó su lucha hasta que sus enemigos recurrieron a la alevosía: en el año 1919, mediante una traición, el admirable jefe agrarista fue asesinado.

El impacto ideológico y emocional de la Revolución Mexicana sobre el resto de América Latina fue inmenso. El valiente pueblo de Hidalgo, Juárez y Zapata había demostrado que los pobres y los desamparados de la América morena son capaces de sacudir el yugo del imperialismo yanqui y de las oligarquías nacionales. Hasta el año 1959, cuando surgió la Revolución Cubana como un nuevo ensayo de liberación del hombre latinoamericano, la Revolución Mexicana y el estímulo externo de la Revolución Soviética constituyeron las dos fundamentales fuentes de inspiración para los obreros, los campesinos y los intelectuales revolucionarios de nuestro continente.

Latinoamérica y Estados Unidos de 1920 a 1932

Desde la Primera Guerra Mundial, la hegemonía económica de Estados Unidos sobre América Latina fue completa e incuestionable. De manera general, dicho país se había convertido en el banquero del mundo y acreedor de todas las naciones. En lo político, el coloso tuvo una reacción aislacionista, negándose a participar en la

Sociedad de las Naciones y a asumir compromisos multilaterales con los demás países de la tierra. En cambio, en lo económico, Estados Unidos intervino y participó en grado creciente en la vida de los pueblos de todos los continentes. El propio aislacionismo político tenía un carácter claramente imperialista: reflejaba el deseo de los grupos dominantes norteamericanos por conservar una entera libertad de acción y de intervención ante los demás países del mundo.

Las administraciones derechistas de los presidentes norteamericanos Harding (1921-1925), Coolidge (1925-1929) y Hoover (1929-1933) continuaron una política de intervención directa en la zona del Caribe, y de presiones o intervenciones indirectas en América del Sur.

Las relaciones entre Estados Unidos y México conservaron durante ese lapso un carácter de hostilidad y tensión. A partir de 1920, el presidente Alvaro Obregón continuó las iniciativas nacionales y de transformación social emprendidas por el gobierno de Venustiano Carranza. Con la desaparición de Zapata y de Villa, el poder revolucionario se centralizó en manos de Obregón, y disminuyó la violencia en el país. La reforma agraria tuvo progresos y el papel de los sindicatos en la toma de decisiones fue considerable. El gobierno aplicó medidas de nacionalismo económico que amedrentaron al capital extranjero pero fortalecieron el control del Estado sobre las actividades productoras y enrumbaron el país hacia un desarrollo autónomo, con base en la participación mixta del sector público y del sector privado. La actitud de los intereses capitalistas norteamericanos y de la prensa controlada por ellos fue de sistemática hostilidad contra México. Se denunciaba a los dirigentes mexicanos como "bolcheviques" y se pedía la intervención de Estados Unidos en el vecino país para contener una presunta marea roja que amenazaba a todo el hemisferio. Se exageraba el alcance de la violencia en México y se incitaba a los católicos del mundo en contra de un régimen laico que procuraba separar la Iglesia del Estado y reducir el poder económico y político del clero.

Plutarco Elías Calles, quien asumió la presidencia de México en 1924, dio un ligero viraje hacia la derecha. En primer término, acentuó el elemento autoritario y centralista dentro del poder revolucionario. En segundo lugar, desaceleró la reforma agraria y se mostró menos radical que su predecesor ante el capital extranjero. Expresó las tendencias de la clase media, convertida en burguesía nacional, deseosa de moderar el proceso revolucionario y colocarlo bajo su control. El único ámbito donde Calles extremó el radicalismo fue en el de la lucha anticlerical. Los católicos conservadores, por su parte, desencadenaron contra el gobierno de Calles la sangrienta revuelta de los "cristeros": campesinos fanáticos, alzados contra la revolución, bajo la jefatura de sacerdotes o seglares católicos de extrema derecha, al grito de "Viva Cristo Rey". Estados Unidos, pese a las ligeras concesiones que Calles hizo a sus intereses y a sus puntos de vista, no se dio por satisfecho, y las relaciones continuaron en un plano precario hasta que el gobierno de Franklin D. Roosevelt, después de 1933, las mejoró decididamente.

En América Central y Panamá continuaron las intervenciones norteamericanas durante ese mismo lapso. En Panamá, además de la ocupación permanente de la Zona del Canal, se habían realizado desembarcos de infantes de marina en 1908, 1912 y 1918, dejando el país entero bajo estricta vigilancia política y militar estadounidense.

En Nicaragua los *marines* habían desembarcado en 1912, y desde esa época

hasta 1924 mantuvieron una guarnición permanente en el país. En 1927 volvieron para hacer frente a un movimiento liberal dirigido por el general Sacasa y apoyado por Calles desde México. Ante ese nuevo atropello a la soberanía nicaragüense, se formó un movimiento guerrillero de liberación nacional, capitaneado por el heroico Augusto César Sandino. Ese gran revolucionario —que gozó de prestigio y apoyo internacionales— combatió a los ocupantes norteamericanos y la dictadura económica de la United Fruit Company hasta el año 1933, cuando el gobierno de Roosevelt retiró los *marines* de Nicaragua. En 1934 Sandino fue asesinado por la oligarquía gobernante, y tomó el poder el general Anastasio Somoza, comandante de la guardia nacional que los norteamericanos habían organizado y adiestrado para seguir defendiendo sus intereses cuando sus tropas abandonaran el país.

En República Dominicana, ocupada en 1916, la administración norteamericana continuó hasta 1924. En esa fecha el gobierno fue devuelto a los dominicanos, pero destacamentos militares estadounidenses siguieron en el país, organizando y adiestrando a las fuerzas armadas de cuyo seno surgió el terrible Rafael Leonidas Trujillo. Desde comienzos de la década 1930-1940, Trujillo ejerció una férrea y sangrienta dictadura, totalmente favorable a los intereses económicos y estratégicos norteamericanos; de manera que Estados Unidos continuó una ocupación indirecta del país, por intermedio de uno de sus propios nacionales. Así, las aduanas dominicanas permanecieron en manos de un administrador norteamericano hasta 1940.

En Cuba, Estados Unidos dio su apoyo a la feroz dictadura —favorable a los inversionistas extranjeros— de Gerardo Machado, quien tomó el poder en 1924 y fue derrocado en 1933. En Venezuela mantuvo excelentes relaciones con el dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernó de 1908 a 1935. Gómez centralizó el poder y acabó con los caudillos regionales en Venezuela. Duro hacia su propio pueblo y blando ante las potencias extranjeras, otorgó concesiones a los consorcios foráneos. Bajo su gobierno se inició la fase petrolera de la historia económica venezolana.

Con su control directo o semidirecto sobre Nicaragua, Panamá, Haití, República Dominicana y Cuba, y con un gendarme amigo en el emporio petrolero venezolano, Estados Unidos tenía cercado y aislado al México revolucionario, y no necesitaba temer por la estabilidad de su dominación en el área del Caribe.

En Sudamérica los años 1920-1932 produjeron múltiples luchas sociales y políticas dentro de los diversos países, además de algunos conflictos internacionales en los cuales la potencia norteamericana trató de servir como pacificadora, mediadora o árbitro. Ecuador y Perú experimentaron reiteradas crisis fronterizas: desde su independencia, esos países se han disputado la posesión de extensos territorios. Ecuador se basa en una cédula real del 1563 y Perú en otra emitida en 1802. Estados Unidos trató de llevar a las partes a negociar directamente o a aceptar un procedimiento arbitral. Durante el mismo lapso, Venezuela y Colombia procuraron solucionar pacíficamente su conflicto fronterizo, existente desde 1830. Argentina y Chile, que tenían un litigio sobre el Estrecho de Magallanes, llegaron a un acuerdo en 1920. Al mismo tiempo, Chile seguía en controversia con Perú por los territorios de Tacna y Arica. Como ya se señaló anteriormente, en 1926 el conflicto llegó al borde del estallido bélico, pero Estados Unidos logró imponer una solución salomónica para 1929, otorgándose Tacna a Perú y Arica a Chile. El conflicto entre Bolivia y Chile quedó sin solución, reclamando Bolivia su salida al mar.

Dos problemas territoriales latinoamericanos atrajeron la atención de la opinión mundial y fueron llevados ante la Sociedad de las Naciones. Uno de ellos fue el problema de Leticia, entre Colombia y Perú. El poblado de Leticia, reclamado por Colombia, estaba ocupado por los peruanos. En 1932 surgió una situación bélica entre los dos países y fue movilizado el ejército colombiano. Perú, cuyo presidente Sánchez Cerro fue asesinado en aquel momento, mantuvo una actitud moderada y, en 1934, por un protocolo firmado en Río de Janeiro, reconoció la soberanía colombiana sobre Leticia.

La otra cuestión que ocupó la atención de la Sociedad de las Naciones fue la del Chaco, planteada entre Bolivia y Paraguay. Desde 1879 estos dos países buscaban un arreglo sobre el territorio del Chaco. Se habían efectuado diversas negociaciones, sin resultados positivos. En la disputa territorial sobre el Chaco, Bolivia se basaba en los tradicionales límites de la Audiencia de Charcas, mientras que Paraguay fundamentaba su reclamación en las expediciones colonizadoras efectuadas desde Asunción. El presidente boliviano, Hernán Siles (1925-1930), resolvió impulsar con energía la solución del problema del Chaco de acuerdo con los puntos de vista bolivianos. En ese empeño, el gobernante boliviano contó con el apoyo de la Standard Oil Company, interesada en lograr concesiones en la zona del Chaco, mientras que Paraguay fue respaldado por la Royal Dutch Shell, compañía anglo-holandesa. La controversia territorial entre los dos países se agravó por la participación de dos consorcios petroleros transnacionales, que luchaban por la posesión de una zona rica en yacimientos y procuraban utilizar a dos Estados rivales como instrumentos para realizar sus ambiciones. En 1928 tropas bolivianas y paraguayas tuvieron un primer choque violento en el Fuerte Vanguardia. La Sociedad de las Naciones trató de restablecer la paz, y Estados Unidos por su lado se esforzó en el mismo sentido. Continuaron las escaramuzas, tratando Bolivia de extender su territorio hasta el Río Paraguay, vía fluvial que abre la salida al Océano Atlántico. Sin embargo, se logró un acuerdo de tregua firmado en Estados Unidos. La tregua se rompió en 1932, comenzando los combates en gran escala entre los dos países.

Por último, cabe señalar como factores importantes en las relaciones interamericanas las corrientes políticas e ideológicas que surgieron en algunos países latinoamericanos entre 1920 y 1932.

La Revolución Mexicana, como ya lo indicamos, ejerció una influencia considerable sobre el auge de movimientos de renovación democrática, nacionalista y social en todas las regiones de Latinoamérica. En Nicaragua, Sandino actuó inspirado en gran parte por el ejemplo del proceso mexicano. En República Dominicana, los patriotas que opusieron resistencia a la ocupación norteamericana derivaron igualmente parte de su ideario de la Revolución Mexicana. La misma influencia se manifestó en Cuba entre quienes lucharon por derrocar la dictadura de Machado. A su vez, la corriente izquierdista del Partido Liberal colombiano tomó como base el modelo mexicano para su propio programa. Lo mismo ocurrió en el seno de los sectores avanzados del liberalismo ecuatoriano. En Venezuela, la experiencia mexicana fue ponderada por los estudiantes que realizaron la gran protesta de 1928 contra la satrapía de Juan Vicente Gómez.

Un intento por traducir las lecciones de la Revolución Mexicana en una doctrina socialdemócrata antiimperialista fue realizado en 1924 por el joven dirigente de la izquierda peruana, Víctor Raúl Haya de la Torre, al trazar las bases para una

Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) dedicada a la liberación antiimperialista y social de "Indoamérica". Inspirado no sólo por el modelo mexicano, sino también por el soviético y por la lucha del Kuomintang en China, Haya de la Torre estableció como bases de su programa la lucha contra el imperialismo —y a favor de la unidad "indoamericana"—, la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá, y la solidaridad con todos los pueblos oprimidos.

Otra corriente que se formó en la década 1920-1930 para promover la lucha contra el imperialismo norteamericano y a favor de la transformación revolucionaria de la sociedad en América Latina fue la constituida por los grupos y partidos marxistas, inspirados en gran parte por el ejemplo de la Revolución Rusa. En Chile, el Partido Obrero Socialista se inclinó hacia la izquierda, y su ala más identificada con el modelo soviético se le desprendió para constituir el Partido Comunista. Un proceso similar ocurrió en Argentina y en Uruguay. Los primeros partidos comunistas aparecieron en esos países a partir de 1921. En los demás países latinoamericanos se crearon grupos comunistas que, igualmente, desde 1924 en adelante, se transformaron en partidos. En México actuaron en forma legal, ubicándose a la izquierda del ala más radical del Partido Nacional Revolucionario (hoy Partido Revolucionario Institucional-PRI). En la mayoría de los demás países su actuación fue clandestina en aquella etapa. A partir de 1927 la pugna Stalin-Trotsky, que para ese momento dividía a los comunistas de la Unión Soviética, se reflejó en los grupos y partidos marxistas de América Latina. Después de 1928 comenzaron a formarse partidos trotskistas, disidentes de los comunistas vinculados a la línea política de la URSS. Por otra parte, en Perú se realizó un notable intento por crear una versión del bolchevismo adaptada a la realidad latinoamericana: José Carlos Mariátegui (1928), en sus *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,* planteó la necesidad de valerse de los instrumentos del marxismo-leninismo para hacer la revolución en América Latina, utilizándolos sin dogmatismo, con espíritu crítico e independiente.

En algunos países los gobiernos renovadores expresaron por momentos el ascenso de las clases medias y de los sectores obreros, y el anhelo de esos grupos de debilitar la influencia imperialista y conquistar una mayor justicia social. En Argentina, Hipólito Irigoyen volvió al poder en 1928 con promesas de nacionalismo económico y cambio social. Esta vez, sin embargo, logró menos resultados que en la oportunidad de su primer gobierno de 1916 a 1922. La crisis económica mundial, con su secuela de desempleo y bancarrotas, golpeó la nación argentina y el reformismo de Irigoyen no tuvo soluciones efectivas que ofrecer. Se creó un ambiente golpista y, finalmente, en 1930 el gobierno legítimo fue derrocado por un movimiento militar de derecha, dirigido por el general José Félix Uriburu. Para 1932 Argentina se encontró gobernada por la corriente oligárquica, sumisa ante el capital extranjero. Entre tanto, Chile también vivía un proceso de ascenso-descenso de sus fuerzas democráticas e independentistas. Arturo Alessandri, con el respaldo de los radicales, hizo el intento de una gestión renovadora en 1920, y otra nuevamente en 1925. En 1927 Carlos Ibáñez despertó breves esperanzas de liberación y de justicia, para luego decepcionar. La crisis económica mundial agravó los problemas sociales del país. En 1932 una alianza cívico-militar de izquierda, encabezada por el general Marmaduke Grove, tomó el poder por la fuer-

Tabla 6

Tabla cronológica VI

Año	México	Centroamérica y el Caribe	Sudamérica	EEUU y hemisferio
1883				
1886			Balmaceda, presidente.	
1888			Abolición de la esclavitud en Brasil.	
1889		Quiebra de la Cía. Francesa. Corolario Hayes.	Brasil, república.	Primera Conferencia Interamericana (Washington).
1890				
1891			Caída de Balmaceda.	
1893				Cleveland, presidente.
1894		Martí desembarcó en Cuba. 2a. Compañía de Panamá.		
1895		Muerte de Martí. Represión.		
1896				
1897			Inglaterra acepta arbitraje de límites con Venezuela.	Mc Kinley, presidente.
1898		Guerra EEUU-España.		
1899			Laudo arbitral de límites Venezuela-Guayana Británica.	

Tabla 6 (cont.)

Tabla cronológica VI

Año	México	Centroamérica y el Caribe	Sudamérica	EEUU y hemisferio
1900				
1901		Tratado Hay-Pancefote.		T. Roosevelt, presidente. Segunda Conferencia Interamericana (México).
1902		Enmienda Platt.	Rio Branco al Itamarati.	
1903		Toma de Panamá, Hay-Herrán y Hay-Bunau-Varilla. Intervención en Venezuela.	Reformas de Batlle.	
1904		Corolario Roosevelt.		
1905		Intervención en Santo Domingo.	Movimiento revolucionario de Irigoyen.	
1906		Intervención en Cuba.		Tercera Conferencia Interamericana (Río).
1908		Intervención en Panamá.	Comienza la dictadura de Juan Vicente Gómez.	
1909		Intervención en Honduras.		W.H. Taft, presidente.
1910	Comienza Revolución.	Intervención en Haití.		Cuarta Conferencia Interamericana (Buenos Aires).
1911	Madero, presidente. Zapata contra Madero.			

— Tabla 6 (cont.)

Tabla cronológica VI

Año	México	Centroamérica y el Caribe	Sudamérica	EEUU y hemisferio
1912	Corolario Cabot Lodge.	Ocupación de Nicaragua. Intervención en Panamá.		
1913	Golpe de Huerta.			W. Wilson, presidente.
1914	Intervención norteamericana. Conferencia de Niágara. Carranza presidente.	Inauguración del Canal.		
1915		Ocupación de Haití.		
1916		Ocupación de Santo Domingo.	Irigoyen, presidente de Argentina.	
1917	2a. intervención norteamericana. Constitución Mexicana.			
1918		Intervención en Panamá.		
1919	Asesinato de Zapata.			
1920	Caída y muerte de Carranza. Obregón presidente.		Alessandri, presidente de Chile.	
1921			Primeros partidos comunistas incipientes.	Harding, presidente.
1922				

— Tabla 6 (cont.)

Tabla cronológica VI

Año	México	Centroamérica y el Caribe	Sudamérica	EEUU y hemisferio
1923				Quinta Conferencia Interamericana (Santiago de Chile).
1924	Calles, presidente.	Retiro de EEUU de Nicaragua y de Santo Domingo. Machado al poder en Cuba.	Fundación del APRA.	
1925				Coolidge, presidente.
1926				
1927	Rebelión de los cristeros.	Nueva intervención en Nicaragua. Rebelión de Sandino.	Ibáñez, presidente de Chile.	
1928			Segunda presidencia de Irigoyen. Rebelión contra J.V. Gómez. Choques armados en el Chaco. Ensayos de Mariátegui.	Sexta Conferencia Interamericana (La Habana).
1929			Solución del problema Tacna-Arica.	Hoover, presidente. Comienza la gran crisis económica mundial.
1930			Irigoyen derrocado.	
1931		Trujillo al poder en Santo Domingo.		
1932			Conflicto de Leticia. Conflicto en el Chaco. Revolución en Chile.	

za y proclamó una "República Socialista", pero ésta sólo se mantuvo durante unos pocos meses.

Resumen

Se puede afirmar de manera global que entre 1920 y 1932 Estados Unidos mantuvo su hegemonía sobre América Latina, continuando una política intervencionista. Aparte de México, donde la oligarquía semifeudal fue desplazada completamente por una clase media respaldada por obreros y campesinos, los países latinoamericanos conservaron sus estructuras sociales caracterizadas por la concentración de la riqueza y el poder económico y político en manos de élites inclinadas a aceptar la hegemonía norteamericana.

Los métodos de dominación norteamericanos tuvieron un carácter militar y brutal desde el comienzo del siglo hasta 1917. De esa fecha en adelante comenzaron a prevalecer las presiones un poco menos violentas y más indirectas.

A partir de 1897 Estados Unidos comenzó a desplazar la influencia inglesa del área del Caribe y del norte de Sudamérica. En 1901 se efectuó un tácito reparto de esferas de influencia: hegemonía estadounidense al norte del Amazonas y predominio inglés más al sur de la región amazónica.

Aparte de la Revolución Mexicana, surgieron otras diversas reacciones y rebeliones latinoamericanas en contra de la dependencia semicolonial existente. Por el momento, esos movimientos permanecieron en una etapa defensiva y a veces sólo incipiente.

La época de la "política del buen vecino" (1933-1945)

La crisis económica y la política de Franklin D. Roosevelt

Súbitamente, en 1929 surgió en Estados Unidos la gran crisis económica que pronto se extendería y afectaría a todo el mundo capitalista.

Desde la Primera Guerra Mundial en adelante la economía norteamericana había experimentado un ininterrumpido proceso de expansión. Bajo un régimen de irrestricta libertad de empresas, sin intervención alguna del poder público, se producía cada vez más y subían los valores negociados en la bolsa de Wall Street. La nación entera vivía con la esperanza y la ilusión de enriquecerse de modo continuo y sin límites. Eran los años del aislacionismo, de la autosuficiencia, del materialismo, y de aquella moralidad puritana e hipócrita que ilegalizaba las bebidas alcohólicas mientras toleraba la explotación y la rapacidad en los negocios. Esa Norteamérica de aparente prosperidad sin límites era, al mismo tiempo, el país que persiguió las ideas sociales renovadoras, que asesinó a Sacco y Vanzetti, y que impulsó al autoexilio a sus mejores escritores. Era un país capitalista próspero, regido enteramente por la gran burguesía que imponía sus ideas y valores y reprimía a sus críticos. Pese a la prosperidad, un tercio de la población vivía en la pobreza: su baja capacidad de consumo —determinada, por otra parte, por la grave situación mundial— sería la causa fundamental de la recesión.

Para 1929 se había producido más de lo que se podía vender y había crecido desproporcionadamente el volumen de inversiones especulativas. De repente, en octubre de 1929, cundió el pánico en Wall Street. Llenos de alarma los especuladores comenzaron a vender frenéticamente sus papeles, cuyos valores descendieron bruscamente. A los pocos días, por falta de crédito y por la imposibilidad de vender sus productos, las empresas comenzaron a cerrar sus puertas y a arrojar a sus trabajadores a la calle. Al cabo de pocos meses era ya general la crisis en Estados Unidos y el número de desocupados ascendía a varios millones.

Rápidamente la depresión se extendió del principal centro financiero a las demás regiones del mundo. Todos los países capitalistas, desarrollados y subdesarrollados, dominantes y dependientes, quedaron sumidos en la crisis. A la angustia de millones de trabajadores sin empleo se sumó la de los empresarios en quiebra o carentes de fuentes de financiamiento. Como consecuencia de ello, se acentuaron en todas las naciones las contradicciones sociales y las tensiones políticas. Burgueses, proletarios y capas medias se inclinaron a buscar fórmulas políticas extremas.

Latinoamérica sufrió duramente el impacto de la crisis económica mundial. Por la disminución de la producción en los centros industrializados, éstos redujeron bruscamente sus compras de materias primas y de productos básicos en general. Debido a ello se agravó la miseria de las masas latinoamericanas y se debilitó incluso el poder económico de las oligarquías. Así, en América Latina como en el

resto del mundo, se fortalecieron los extremismos políticos y se multiplicaron las iniciativas autoritarias o dictatoriales.

En las elecciones norteamericanas de 1932, dominadas por los problemas de la recesión, triunfó el Partido Demócrata con su candidato Franklin D. Roosevelt. Este extraordinario estadista propuso a la nación norteamericana fórmulas nuevas y audaces para superar la crisis. Fue partidario de pasar del *laisser-faire* al capitalismo parcialmente controlado e intervenido por el poder público. Por los métodos recomendados por John M. Keynes, tales como el *deficit spending* y grandes inyecciones de fondos públicos a la economía privada, se ampliaría el crédito, se estimularía la producción estancada y se crearían puestos de trabajo.

Roosevelt cumplió con sus promesas. Sacó a su país de la crisis económica. Salvó el sistema capitalista, obligándolo a aceptar la tutela parcial del Estado y a dar cabida a medidas de reforma social, útiles no sólo para aliviar la miseria y las tensiones entre clases y grupos, sino también para crear capacidad de consumo. Su programa del "New Deal" (Nuevo Trato) comprendió grandes obras públicas para dar trabajo a los desempleados y estimular la demanda y la producción; control provisional de precios; proyectos de desarrollo regional en las zonas estancadas del país; subsidios agrícolas; creación del sistema federal de crédito; estímulo decidido al sindicalismo y a la contratación colectiva; y medidas de redistribución del ingreso, a través del impuesto sobre la renta y la creación de un sistema de seguridad social, así como importantes gastos públicos en educación y salud. Los grupos de izquierda, inicialmente escépticos, pronto dieron su apoyo a Roosevelt, quien se convirtió por doce años en el caudillo democrático de su país, encabezando de hecho un frente popular que abarcaba a liberales, socialdemócratas y núcleos socialistas radicales.

La política exterior de Roosevelt fue la lógica extensión de su política interna. Así como el Estado federal regulaba internamente las actividades económicas y obligaba a la clase capitalista a acatar su autoridad, en el plano de las relaciones exteriores procuró colocar también las decisiones de tipo democrático por encima de los intereses de grupos imperialistas. En relación con América Latina, esa nueva política exterior se denominó la "política del buen vecino". Consistió en una actitud de mayor respeto a la soberanía de los países latinoamericanos y un intento de desvincular un tanto las iniciativas diplomáticas estadounidenses de los intereses de los inversionistas.

La nueva línea "blanda" hacia América Latina se explica por dos factores. Por una parte, el debilitamiento del sector capitalista dentro de Estados Unidos, por efecto de la recesión económica, aumentó la autonomía y el poder del Estado democrático, permitiéndole eventualmente adoptar decisiones que respondieran más a los intereses populares que a los de los grupos económicos privilegiados. Por la otra, Estados Unidos para 1933 tenía su poder económico y su influencia política bastante consolidados en América Latina, pudiendo permitirse una actitud más reposada y liberal que en las décadas anteriores.

Roosevelt, el Caribe y México

En 1933 la "política del buen vecino" se tradujo en el retiro de las fuerzas armadas norteamericanas de la República de Haití. Pese a ello, evidentemente, la

influencia económica y diplomática norteamericana desempeñó un papel importante en ese país.

República Dominicana había quedado libre de la ocupación norteamericana en 1924; no obstante, hasta 1930 continuaron las presiones directas sobre el país. Cuando Trujillo implantó su dictadura, los inversionistas yanquis se sintieron bien protegidos. Después de 1933, Roosevelt continuó la práctica —ya establecida por su predecesor Hoover— de mantener buenas relaciones con el tirano dominicano.

En 1993, un amplio movimiento democrático popular derrocó al dictador cubano Gerardo Machado. Sectores de las fuerzas armadas, dirigidos por el sargento Fulgencio Batista, se habían unido a las fuerzas políticas populares conducidas por Grau San Martín y otras importantes figuras de la democracia cubana. La caída de Machado causó alarma entre los inversionistas norteamericanos, convencidos de que los revolucionarios eran "comunistas". Los portavoces del capitalismo norteamericano pidieron a Roosevelt que aplicara la Enmienda Platt para intervenir en Cuba por la fuerza. Pero el nuevo presidente de Estados Unidos se abstuvo de tal acción, prefiriendo establecer relaciones con el gobierno democrático provisional de Cuba. Más aún: Estados Unidos acordó, en 1934, anular la Enmienda Platt y reconocer, a partir de ese momento, la irrestricta soberanía nacional de Cuba. Sin embargo, en el mismo año los gobernantes norteamericanos observaron con cierto beneplácito el golpe de Estado de Batista, que significó un viraje de las posiciones socialdemócratas de Grau San Martín hacia una política algo más conservadora. Si la no intervención y la renuncia a la Enmienda Platt causaron alegría y aprobación en Cuba, en cambio las visibles simpatías hacia el golpe de Batista provocaron una viva decepción entre los demócratas de la isla.

La "política del buen vecino" tuvo una aplicación relativamente convincente en el caso de las relaciones entre Estados Unidos y México. Pese a que a fines de 1930-1940 surgió una crisis en esas relaciones, Roosevelt resistió a las corrientes que trataban de impulsarlo hacia una línea belicista y acabó por arreglar pacíficamente una situación caracterizada por el choque diametral entre los intereses nacionales mexicanos y los de las poderosas empresas privadas estadounidenses.

En 1934 asumió la presidencia de México Lázaro Cárdenas, el más revolucionario de los mandatarios que ese país ha tenido. Cárdenas representó el ala izquierda del Partido Nacional Revolucionario y reflejó fundamentalmente los intereses de los obreros, los campesinos y los estratos humildes de la clase media. Ideológicamente avanzó más allá del mero nacionalismo y del reformismo social, acogiendo algunas ideas claramente socialistas. Bajo la dirección de Cárdenas, la reforma agraria recibió un decidido impulso: ningún presidente de México distribuyó más tierras entre los campesinos que este revolucionario sincero. Al mismo tiempo, Cárdenas adoptó nuevas medidas de nacionalismo económico y procuró poner límites a la tendencia de la nueva burguesía mexicana que deseaba llegar a acuerdos de colaboración con los intereses inversionistas extranjeros. Ante ese radicalismo de Lázaro Cárdenas, la derecha norteamericana reaccionó con una nueva ola de propaganda antimexicana.

En 1938 surgió una crisis en las relaciones entre el Estado mexicano y las empresas petroleras concesionarias en el país. Los trabajadores de la industria petrolera reivindicaron un aumento de salarios que fue negado por las compañías. El gobierno mexicano dictó un laudo arbitral en favor del aumento de salarios. Las

empresas desobedecieron la decisión del gobierno, colocándose en actitud de franco desafío y desacato. Ante esa situación, Lázaro Cárdenas adoptó la decisión histórica de nacionalizar la industria petrolera mexicana.

Aunque el gobierno de México ofreció indemnizar a las empresas expropiadas descontando las sumas que las compañías debían a sus trabajadores —en conformidad con sus declaraciones de ingresos para los fines del impuesto sobre la renta—, los consorcios petroleros afirmaron que se les estaba sometiendo a una confiscación de tipo bolchevique. El gobierno de Washington, presionado por las compañías, exigió indemnizaciones más elevadas. Sin embargo, al mismo tiempo resistió a las corrientes más reaccionarias que exigían una intervención armada contra el gobierno de Cárdenas.

En un esfuerzo heroico, México comenzó a manejar su industria petrolera nacionalizada, renunciando al mercado exterior y poniendo el producto de su subsuelo al servicio de su desarrollo económico nacional. No se dejó vencer ni amedrentar por el boicot de las compañías petroleras transnacionales. Roosevelt, pese a las protestas de las compañías, aceptó entablar negociaciones con el gobierno mexicano, y se llegó a un acuerdo que las compañías tuvieron que aceptar porque no les quedaba otro remedio.

Era el primer caso en el cual Estados Unidos aceptaba una nacionalización de empresas norteamericanas. El hecho demostró que la "política del buen vecino" era algo más que mera palabrería. Por otra parte, México triunfó por su extraordinaria y combativa unidad nacional en defensa de su petróleo, desalentando así las tendencias divisionistas e intervencionistas. También favoreció a los mexicanos la coyuntura mundial: con el acuerdo sobre la nacionalización del petróleo, estaban dadas las condiciones para un mejoramiento de las relaciones entre México y Estados Unidos. Bajo el sucesor de Cárdenas, Avila Camacho, la Revolución Mexicana entró en su fase de "institucionalización" y de aburguesamiento, creándose un ambiente favorable para las inversiones foráneas en México.

La guerra del Chaco y sus consecuencias. Sudamérica de 1932 a 1941

La guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay estalló en 1932. Se debió, como ya lo señalamos antes, a la existencia de viejas controversias territoriales, agravadas por la codicia de intereses petroleros. La Esso influía sobre Bolivia y la Shell sobre Paraguay, y el conflicto armado entre los dos países —conflicto extremadamente sangriento y costoso en vidas hermanas— era en parte producto de la rivalidad entre dos poderosos consorcios transnacionales.

Paraguay llevó la mejor parte en este conflicto al impedir que Bolivia se apoderara del territorio que consideraba suyo. Después de reiterados esfuerzos de mediación, realizados por la Sociedad de las Naciones y por Estados Unidos, los dos Estados beligerantes firmaron la paz en 1935, en Buenos Aires. Ambos ratificaron el tratado de paz en 1938.

Tanto en Paraguay como en Bolivia la guerra del Chaco fortaleció extraordinariamente la influencia de los militares. Los hombres que habían tenido mando militar durante la guerra se sintieron con autoridad para mandar también en tiempo de paz. En Paraguay las fuerzas armadas tomaron el poder y proclamaron en 1936

el Acta Plebiscitaria que dice que "la soberanía del pueblo reside en las fuerzas armadas". Los veteranos de la guerra del Chaco siguieron gobernando en Paraguay con una política de tipo derechista, defensora de las estructuras sociales existentes y de los intereses de los grupos económicos dominantes, nacionales y extranjeros.

En Bolivia, debido a la derrota sufrida, subieron al poder militares de actitud crítica ante el sistema social y político existente. En 1936 el coronel David Toro asumió el mando del país con un programa de gobierno nacionalista y de reformas sociales. Fue seguido en el poder por el teniente-coronel Germán Busch, hijo de un médico alemán casado con una boliviana. Como nacionalistas identificados con los intereses de las capas populares en contra de la oligarquía y los grupos financieros foráneos, Toro y Busch estaban decididos a realizar importantes transformaciones estructurales mediante métodos autoritarios. En resguardo de la soberanía nacional boliviana, y tomando en cuenta la participación de los consorcios petroleros en la guerra del Chaco, Toro decretó la nacionalización de las instalaciones de la Standard Oil de Nueva Jersey (Esso) en Bolivia. El acto nacionalista provocó una protesta de Estados Unidos, y gritos de ira y de alarma de las compañías petroleras. Después de haber golpeado de ese modo al imperialismo económico, Busch se preparó para atacar a la oligarquía latifundista y minera. Sus planes para el futuro incluían una reforma agraria y la nacionalización de las minas de estaño. Pero ese militar revolucionario murió antes de poder cumplir sus propósitos. Su muerte violenta —por un balazo en el cerebro— aparentemente se debió a un impulso suicida inducido por maniobras insidiosas y subversivas de la oligarquía.

Durante la década de los años treinta Brasil vivió una experiencia importante bajo el gobierno del presidente Getulio Vargas, caudillo reformista y centralizador. La crisis económica de 1930 golpeó duramente Brasil y sus tensiones políticas internas se agravaron. Por un lado, los comunistas dirigidos por Luis Carlos Prestes desarrollaban una fuerte agitación, y por el otro, actuaba un fuerte partido fascista: los integralistas, encabezados por Plinio Salgado. Vargas creó el movimiento laborista que surgió como tercera fuerza entre estos extremos, y tomó el poder por un golpe de Estado. Posteriormente quedó ratificado por elecciones. Admirador de Mussolini, aunque ubicado en una posición mucho más liberal, en 1936 cambió la Constitución brasileña y proclamó el "Estado Novo", autoritario y con tendencias corporatistas. Sin embargo, el Estado Novo jamás llegó a ser fascista: más bien la política social de Vargas promovió el ascenso de las clases trabajadoras mediante el estímulo al sindicalismo. Se adoptó una legislación social que trajo beneficios a las mayorías populares, olvidadas antes de que Vargas llegara al poder. La oligarquía rural y bancaria miraba al caudillo con desconfianza, debido a sus pronunciamientos radicales, aunque de hecho sus privilegios apenas fueron afectados. En su política exterior y económica Vargas pregonó el nacionalismo y mostró el empeño en desarrollar Brasil de manera autónoma, con creciente independencia frente al capital extranjero.

El mussolinismo de Vargas inquietó a Roosevelt, quien temía que el caudillo brasileño llevaría a su país a un acercamiento con las potencias del Eje. Sin embargo, después de haber obtenido ventajas económicas por parte de Estados Unidos, Getulio Vargas se mostró partidario de la política antinazi de Estados Unidos y, durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil fue el único país latinoamericano que participó activamente en los combates. Aparte de la persuasión que Estados Unidos

pudo ejercer sobre Brasil, Getulio Vargas era realmente más demócrata que fascista; así mismo, la tradición diplomática brasileña, establecida desde la época de Rio Branco, recomendaba el mantenimiento de relaciones armoniosas con la principal potencia hegemónica del hemisferio.

La evolución política argentina traería mayores problemas para Estados Unidos. Desde el golpe de Uriburu contra Irigoyen en 1930, Argentina quedó bajo el gobierno de las clases capitalistas y terratenientes. Se restableció la democracia representativa pero ésta adquirió un carácter formalista, sin contenido social para las masas del país. Tanto en la oligarquía como en el seno de las capas medias y populares se desarrollaron corrientes antidemocráticas y antiliberales. Incluso para algunos oligarcas la democracia formalista y plutocratizada no garantizaba suficientemente la defensa de sus privilegios, motivo por el cual esa ultraderecha se inclinaba hacia el fascismo y hacia el Eje. Por otra parte, existían sectores de la burguesía argentina que tenían vínculos comerciales y financieros con empresas alemanas, y por ese motivo eran partidarios de la causa de Hitler. Las caudalosas e influyentes colonias de inmigrantes italianos y alemanes creaban un ambiente favorable a las potencias del Eje. Por último, entre algunos intelectuales y en la oficialidad de las fuerzas armadas había una forma de nacionalismo antiimperialista y antioligárquico que simpatizaba con el nazismo y el fascismo. Estos pronazis "sociales" identificaban la democracia liberal con el imperialismo anglonorteamericano y con la oligarquía que manipulaba el sistema político entre bastidores y lo ponía al servicio de sus intereses. Razonando simplistamente con el argumento de que "el enemigo de mi enemigo debe ser mi amigo", y creyendo ingenuamente en la propaganda nazi que les presentaba el sistema hitleriano como un presunto "socialismo nacional", estos radicales autoritarios constituían un importante grupo de presión a favor de una política exterior de neutralidad entre la alianza anglonorteamericana y el Eje, con velada simpatía hacia este último. Bajo la presión directa o indirecta de esos diversos sectores proalemanes y antiingleses, la República Argentina se mostró reacia a acompañar a Roosevelt en su campaña contra el peligro de la infiltración nazi-fascista en América Latina.

Finalmente, la etapa 1933-1941 estuvo marcada por un feroz enfrentamiento entre Perú y Ecuador, similar al de la guerra del Chaco. Las hostilidades estallaron en 1941 y se saldaron con un triunfo peruano y la anexión por ese país de 200.000 kilómetros cuadrados de selva, cuyo subsuelo contiene petróleo. A consecuencia de ese conflicto Ecuador perdió sus derechos históricos sobre el Amazonas. Como en la guerra del Chaco, estuvieron involucrados intereses petroleros. Esta vez la Standard Oil, que tenía concesiones en Perú y apoyaba a ese país, triunfó sobre la Shell, que respaldaba a Ecuador. Estados Unidos interpuso su mediación, favorable a Perú. El asunto fue discutido en Río de Janeiro, en la III Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos, en 1942, y se suscribió el protocolo de Río, por el cual quedó formalizada la derrota de Ecuador.

Reuniones interamericanas. La diplomacia antinazi de Roosevelt hasta 1940

Después de la I Conferencia Interamericana de 1889-1890 se efectuaron otras reuniones de los Estados americanos, en las cuales Estados Unidos continuó sus

gestiones encaminadas a tratar de crear un sistema de seguridad regional bajo su hegemonía y una comunidad económica hemisférica dominada por el capital norteamericano.

La II Conferencia Internacional Americana se llevó a cabo en México en 1901. El arbitraje constituyó el tema principal. Estados Unidos insistió en la necesidad de mantener el orden en todos los países de América para que no hubiese intervenciones extracontinentales. Dejaron entrever que ellos mismos podrían intervenir preventivamente si el orden sufría serios trastornos en la región.

La III Conferencia, en Río de Janeiro, se realizó en 1906, y reorganizó la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas. En la IV Conferencia (Buenos Aires, 1910) se adoptó el nombre de Unión Panamericana. En esa reunión, la delegación brasileña cuestionó el valor y la vigencia de la Doctrina Monroe, provocando el desagrado de Estados Unidos. Este país admitía que se pusiera en duda su derecho a intervenir en los demás países de América "para proteger las vidas y propiedades de sus nacionales", ni que se negaran las virtudes de la Doctrina Monroe.

Después de la Primera Guerra Mundial, se reunió la V Conferencia Interamericana, que tuvo lugar en Santiago de Chile, en 1923. Los gobiernos latinoamericanos, bajo el impacto de la ideología de Wilson y los principios de la Sociedad de las Naciones, plantearon la renovación de las relaciones interamericanas. Estados Unidos, en conformidad con los ideales democráticos proclamados por su ex presidente en sus Catorce Puntos, debería renunciar a su posición privilegiada de hermano mayor entre las naciones americanas. Para esa época, la Comisión Directiva de la Unión Panamericana tenía un presidente con mandato indefinido, de nacionalidad y designación norteamericanas. Estados Unidos inicialmente se opuso a la sugerencia latinoamericana de que el presidente de la comisión fuese de alguno de los países pequeños y elegido libremente por un lapso limitado, pero eventualmente llegó a aceptar el punto de vista latinoamericano al respecto. Así mismo dijeron "no" a la propuesta uruguaya de que la Doctrina Monroe fuese multilateralizada, sustituyendo la seguridad colectiva por la hegemonía protectora de un solo país. Uruguay sugirió que se crease una Sociedad o Liga de los Estados Americanos, similar en escala regional a la Sociedad de Naciones en el plano mundial. Estados Unidos, que en 1920 había rechazado a Wilson y sus ideas, negándose a formar parte de la Sociedad de Naciones, adoptó una actitud de completo rechazo a las ideas progresistas de la delegación de Uruguay. La delegación de Washington dijo que la Doctrina de Monroe era intocable y que su país se reservaba el derecho de actuar unilateralmente para proteger los intereses de sus nacionales. Finalmente, fue adoptado el Tratado Gondra para prevenir conflictos entre Estados americanos.

La VI Conferencia Internacional Americana se reunió en La Habana en 1928. En esa oportunidad, los latinoamericanos presentaron una serie de propuestas jurídicas y políticas de carácter renovador. La intervención norteamericana en Nicaragua, las presiones de Estados Unidos contra México, y la continuación de la ocupación de Haití y de las aduanas dominicanas, estaban causando tanto desagrado en la opinión pública de los países de Latinoamérica que incluso gobiernos y juristas de orientación conservadora y proyanqui se vieron impulsados a hacerse eco del descontento existente. Se discutieron en La Habana los principios del derecho internacional americano y, al lado de temas como el del asilo diplomático, se planteó

con insistencia la cuestion de la no intervención. Para todos los latinoamericanos el principio de la no intervención debía constituir uno de los principales pilares del orden jurídico interamericano. Pero la delegación norteamericana se opuso a tal idea y se negó a suscribir cualquier texto que estableciera el principio de la no intervención. Según los hombres de Washington, todo Estado soberano tiene el derecho absoluto e inajenable de intervenir en países donde se ponga en peligro la vida o la propiedad de sus nacionales.

La Conferencia Internacional de Estados Americanos sobre Conciliación y Arbitraje (Washington, diciembre de 1928 a enero de 1929) respondió a un intento norteamericano de impulsar nuevamente la creación de mecanismos de arbitraje y solución pacífica, por los cuales Estados Unidos podría ejercer mejor su papel de *primus inter pares* en el ámbito hemisférico. Argentina, siempre abanderada de una cierta resistencia a las iniciativas hegemónicas del Norte, no asistió. La conferencia adoptó una convención general de conciliación interamericana y un tratado general interamericano de arbitraje.

Pero con la llegada de Franklin Roosevelt a la Casa Blanca, y la puesta en vigencia de la Política del buen vecino, cambió la actitud de Estados Unidos con respecto al principio de la no intervención. En la VII Conferencia Interamericana, reunida en Montevideo en 1933, el secretario de Estado Cordell Hull declaró solemnemente que los días del intervencionismo habían pasado y que Estados Unidos se unía a los demás países del hemisferio en la aceptación del principio de la no intervención. Las diferencias entre países americanos deberían resolverse por medios pacíficos y procedimientos multilaterales. Ante la petición haitiana de que cesara la ocupación yanqui, ante la exigencia cubana de que se anulara la Enmienda Platt, y ante las críticas mexicanas y argentinas contra el conjunto de la política estadounidense, formada de presiones y de prepotencia, Cordell Hull prometió una nueva política —la del buen vecino— y el fin de las relaciones imperialistas. Efectivamente, al poco tiempo esa promesa se cumplió, como ya lo señalamos, con respecto a Haití y Cuba. En 1936 se modificó ligeramente el Tratado Hay-Bunau-Varilla, eliminando las cláusulas intervencionistas similares a la Enmienda Platt.

Desde 1935 en adelante, Franklin Roosevelt comenzó a preocuparse por el peligro que el nazi-fascismo significaba para la paz del mundo. Más lúcido y menos inclinado a componendas con la ultraderecha que los mandatarios conservadores de Inglaterra y Francia, el presidente norteamericano creyó necesario forjar un sistema defensivo firme contra las pretensiones de Hitler y de Mussolini. En 1936, ante la remilitarización de Renania y la intervención germano-italiana en la guerra civil española, así como la creciente actividad de propagandistas nazis y fascistas en América Latina, Roosevelt propuso al gobierno argentino que convocara a una Conferencia Interamericana Extraordinaria para la paz. La conferencia fue convocada y se reunió en Buenos Aires, con la asistencia personal de Franklin Roosevelt. Este habló de la necesidad de que los países americanos adoptasen mecanismos de consulta para su defensa común contra agresiones provenientes de fuera del hemisferio. Ello significó multilateralizar la Doctrina Monroe. Dentro del espíritu de las sugerencias de Roosevelt, la conferencia adoptó un pacto de consulta para coordinar los mecanismos existentes en materia de mantenimiento de la paz: el Tratado Gondra para evitar y prevenir conflictos, de 1923; el Pacto Kellogg de renuncia a la guerra, de 1928; la Convención General de Conciliación, firmada en

Washington, en 1929; el Tratado General Interamericano de Arbitraje (Washington, 1929); y el Tratado de No Agresión y Conciliación (Pacto Saavedra Lamas), de Río, 1933. Además, en un protocolo, la conferencia reafirmó el principio de la no intervención. Argentina se opuso a compromisos más firmes de defensa conjunta.

En la VIII Conferencia Internacional de Estados Americanos (Lima, diciembre de 1938), el secretario de Estado Cordell Hull se esforzó por conseguir la adopción de mecanismos más eficaces de defensa contra la infiltración y posible agresión de las potencias del Eje. En toda Latinoamérica, las quinta-columnas nazis tenían una gran actividad y cosechaban éxitos, basando su propaganda en los sentimientos antiimperialistas dirigidos contra la influencia norteamericana y británica. Ocultando los aspectos racistas de su ideología, los nazis se presentaban ante los nacionalistas populares de Latinoamérica como "socialistas nacionales" empeñados en una lucha de liberación contra el imperialismo anglosajón. Al mismo tiempo, se mostraban ante las oligarquías reaccionarias como consecuentes anticomunistas y defensores de la propiedad y el orden establecido. Para desbaratar la conspiración nazi, Hull propuso un frente sólido, con definidos compromisos de defensa mutua y conjunta, contra las "naciones agresoras". La República Argentina se opuso a tal compromiso: la influencia económica alemana y las tendencias pronazis de algunos de los sectores de su población la impulsaban a tal actitud.

En los meses siguientes a la VIII Conferencia, el gobierno norteamericano, junto con el inglés, hizo lo posible por convencer a los Estados latinoamericanos para que adoptasen medidas de defensa política, económica y cultural, contra la labor de las quinta-columnas. Al mismo tiempo, intensificó sus esfuerzos por incrementar su propia influencia y ganar amistades a través de importantes préstamos y otros tipos de ayuda financiera. En el mes de marzo de 1939 firmó un acuerdo con el Brasil de Getulio Vargas, estableciendo las bases de una colaboración más estrecha, con ayuda financiera norteamericana y consultas políticas entre los dos gobiernos.

Después de estallar la Segunda Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos convocó a los países latinoamericanos a una reunión de consulta de cancilleres, que era un nuevo mecanismo ideado en la Conferencia Extraordinaria de Buenos Aires y la VIII Conferencia de Lima. La I Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Americanos se celebró en Panamá, del 23 de septiembre al 3 de octubre de 1939. El tema era el de la preservación y la defensa de la neutralidad del hemisferio. Se resolvió proclamar una zona hemisférica de neutralidad, dentro de cuyos límites (líneas noroeste-sudeste trazadas en el Atlántico y en el Pacífico a cierta distancia de los contornos generales de las costas del hemisferio) las potencias beligerantes se abstendrían de realizar actos de guerra. Al mismo tiempo, se emitió una declaración general de neutralidad de los países de América.

Los ingleses se mostraron dispuestos a respetar la zona neutral hemisférica, pero no así los alemanes, cuyos submarinos comenzaron a atacar y a hundir barcos aliados en la inmediata vecindad de las aguas territoriales de los países americanos.

En 1940, después de la caída de Holanda y Francia, se celebró la II Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos. Esta vez la principal preocupación norteamericana era el destino de las dependencias en América de los países europeos ocupados por los nazis. Si Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa quedaban en manos del régimen colaboracionista de Vichy, y si los alemanes resolvían ocupar

las colonias holandesas de Curazao, Aruba, Bonaire y Suriname, el Eje habría penetrado al corazón mismo del hemisferio occidental, a la zona clave cercana al Canal de Panamá y al petróleo de Venezuela. Por ello, la reunión de consulta de 1940, que se efectuó en La Habana, adoptó una convención sobre colonias europeas en América, estipulando que éstas serían puestas bajo la administración provisional de los Estados americanos, en caso de que sus amos tradicionales no pudiesen seguir administrándolas o tratasen de traspasar su gobierno a otras potencias no americanas. Así mismo, el Acta de La Habana ratificó la neutralidad de las Américas y la decisión común de defenderlas.

De esa manera, para 1940, la Política del buen vecino de Franklin Roosevelt había logrado unir a los países americanos en torno a la defensa del orden hemisférico establecido contra amenazas provenientes de las potencias del Eje. Estados Unidos consiguió esa unificación de voluntades a través de una combinación de presiones económicas y llamados a la conciencia democrática y antifascista de los pueblos del hemisferio.

Las Américas durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945)

La Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto estimulante sobre el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos, fundamentalmente a partir de la entrada de Estados Unidos al conflicto. Al mismo tiempo, despertó nuevas y más avanzadas inquietudes políticas e ideológicas.

Uno de los efectos económicos del conflicto mundial, a partir de 1939, fue el alza de los precios de materias primas directa o indirectamente empleadas en el esfuerzo bélico de las potencias en guerra. Los países latinoamericanos productores y exportadores de tales materias primas disfrutaron de un incremento considerable de sus ingresos nacionales, elevándose junto con ello su ritmo productivo y su nivel de vida.

Más importante aún fue el impacto positivo que tuvo sobre las economías latinoamericanas la brusca disminución de ciertas exportaciones norteamericanas y europeas. Diversos e importantes artículos de consumo y bienes de producción, que hasta entonces habían sido importados desde Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, pronto dejaron de ser suministrados por esas fuentes tradicionales de abastecimiento. Latinoamérica se vio forzada por las circunstancias a iniciar un rápido proceso de sustitución de importaciones en una amplia gama de renglones. En todas las naciones situadas al sur del Río Bravo se intensificó extraordinariamente la creación y la diversificación de industrias manufactureras.

Se trataba de un proceso de industrialización autónomo. La escasez de bienes importados estimuló la creatividad nacional de los países de América Latina. Surgieron burguesías nacionales industriales y se fortalecieron los núcleos empresariales progresistas ya existentes. Al mismo tiempo, creció y se desarrolló cualitativamente la clase obrera industrial, minera y de servicios en todo el continente latinoamericano. Así mismo, creció el número y la diversidad de los profesionales y técnicos, integrantes de una clase media no tradicional, de mentalidad renovadora.

Por su misma naturaleza, esos nuevos grupos sociales ascendentes eran

portadores de ideas democráticas y liberadoras. A los factores objetivos se sumó, además, el impacto ideológico internacional de la guerra antifascista. El ejemplo de la lucha de las potencias aliadas y la resistencia de los pueblos ocupados por fuerzas fascistas inspiró a los latinoamericanos en un sentimiento de rebeldía contra las dictaduras, el imperialismo y las oligarquías.

De ese modo, durante la Segunda Guerra Mundial América Latina vivió cambios importantes —en algunos casos cambios, incluso, estructurales— desde sistemas semifeudales hacia sociedades capitalistas con apreciables niveles de urbanización y cierto grado de industrialización.

En el plano político y militar, para las Américas la señal del combate sonó el día 7 de diciembre de 1941, cuando las fuerzas aeronavales japonesas atacaron por sorpresa la base norteamericana de Pearl Harbour. El gobierno de Washington declaró la guerra a Japón, siendo a su vez objeto de declaraciones de guerra por parte de Alemania e Italia. Para el 11 de diciembre Norteamérica estaba en conflicto con las tres potencias del Pacto Tripartito.

De inmediato, el gobierno de Washington llamó a los demás países del continente para una III Reunión de Consulta, que se realizó en Río de Janeiro entre el 15 y el 28 de enero de 1942. Se discutió la posición que las potencias americanas debían adoptar ante el acto de agresión extracontinental de que había sido víctima Estados Unidos. La reunión de consulta recomendó que los países latinoamericanos, en solidaridad con Estados Unidos, y en aras de su propia seguridad y defensa, rompieran sus relaciones diplomáticas y económicas con Alemania, Italia y Japón. Así mismo, se resolvió crear una Junta Interamericana de Defensa y una Comisión Asesora para la Defensa Política.

Posteriormente, Estados Unidos realizó esfuerzos por convencer a los países americanos que declarasen la guerra al bloque nazi-fascista-japonés. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Cuba, Panamá y República Dominicana —países sometidos de manera más directa a la hegemonía norteamericana— habían declarado la guerra de inmediato, en diciembre de 1941. En el transcurso de 1942, primero México y luego Brasil declararon la guerra al Eje y a Japón. Brasil fue el único país que participó en el conflicto con tropas; los demás se contentaron con medidas de guerra económica. Una brigada brasileña combatió en el frente italiano durante los años 1943-1944. Sus oficiales regresaron después de la guerra con elevado prestigio e influencia en el seno de las fuerzas armadas del país. Entre ellos figuraban los hombres que dirigirían el régimen militar brasileño desde 1964 en adelante.

Bolivia y Colombia declararon la guerra en 1943. Finalmente, un grupo de Estados que había permanecido como no beligerante efectuó declaraciones de guerra entre los meses de febrero y marzo de 1945, para poder formar parte de las Naciones Unidas. Estos países eran Ecuador, Paraguay, Perú, Chile, Venezuela, Uruguay y Argentina. Habían esperado hasta el final por motivos diversos. En el caso de Venezuela, donde el sentimiento proaliado y antifascista era universal, y donde se colaboró plenamente con los aliados en todos los ámbitos, se debió a un deseo de mantener la tradición de no beligerancia presente desde los orígenes de la República; Venezuela, de 1830 en adelante, jamás hizo la guerra a ningún país.

Argentina, en cambio, tuvo motivos muy distintos para demorar su entrada en el conflicto contra Alemania y Japón. Ya señalamos anteriormente la existencia de

una corriente pro Eje de considerable fuerza en Argentina. Las colonias alemana e italiana residentes en el país eran grandes y en su seno existían quintas columnas activas e influyentes. El volumen de comercio argentino con Alemania era considerable. La dominación económica que el capitalismo inglés —más aún que el norteamericano— ejercía sobre el país había causado resentimientos y reacciones antiimperialistas. Eran pronazis y profascistas no sólo los agentes de las empresas germanas e italianas, y algunos sectores oligárquicos partidarios de un régimen autoritario de extrema derecha para defender sus privilegios de clase, sino también muchos nacionalistas de clase media —víctimas de la confusión ideológica— que opinaban que el presunto "socialismo nacional" de Hitler podía ser un aliado contra el imperialismo anglonorteamericano. En 1943, elementos de las fuerzas armadas dieron un golpe de Estado y tomaron el poder. La "Revolución Militar" de 1943 contenía elementos contradictorios. Entre los miembros de los grupos militares que dirigieron la revolución existían auténticos nazi-fascistas, nacionalistas pero reaccionarios en lo social, al lado de elementos nacionalistas reformistas de orientación favorable a los trabajadores y a las capas medias humildes. Entre estos últimos, pronto comenzó a descollar el coronel Juan Domingo Perón, quien se encargó del Ministerio del Trabajo y desde allí puso en práctica un exitoso programa de transformaciones para los obreros y la masa "descamisada". Perón fue el virtual creador de la Confederación General de Trabajadores, y con el apoyo del proletariado se esforzó por torcer el rumbo de la revolución militar hacia el populismo y la neutralización de los sectores verdaderamente nazis, fascistas y antisemitas en su seno.

En todo caso, la actitud de los dirigentes del gobierno militar era favorable a Alemania y Japón y, aunque las circunstancias no les permitió adoptar una línea totalmente inclinada hacia esas potencias, opusieron resistencia a las presiones de Estados Unidos —los norteamericanos querían que Argentina rompiera sus relaciones económicas y diplomáticas con Berlín y Tokio—, continuaron su intercambio comercial con Alemania, y toleraron las actividades propagandísticas de la quinta columna nazi. Prohibieron películas y libros antifascistas y censuraron la prensa en el mismo sentido. El primer gobernante militar, el general Ramírez, retrocedió ligeramente ante Estados Unidos en enero de 1944 y rompió las relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. Los militares más antialiados lo destituyeron y llevaron a la silla presidencial al general Farrell. Las relaciones argentino-estadounidenses empeoraron rápidamente. En junio de 1944, Estados Unidos llamó a su embajador y dejó su misión en Buenos Aires en manos de un encargado de negocios. Los antifascistas estadounidenses más vehementes pidieron la adopción de medidas coercitivas —posiblemente hasta el uso de las armas— contra una Argentina que en aquel momento parecía cerca de ser un Estado vasallo de Hitler. Algunas medidas fueron adoptadas efectivamente. En agosto y septiembre de 1944 el gobierno norteamericano congeló las reservas argentinas de oro y prohibió a barcos mercantes estadounidenses transportar cargas argentinas. El régimen de Farrell, desafiante, pidió una reunión de consulta de cancilleres para enjuiciar las medidas de presión económica aplicadas contra él por Estados Unidos. La convocatoria no prosperó, debido a que las demás repúblicas latinoamericanas, partidarias de la posición de Estados Unidos, miraban con antipatía la actitud argentina y se negaron a acceder a la solicitud de reunir a los cancilleres.

En lugar de ello, se congregó en México, en el Palacio de Chapultepec, del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, una Conferencia Interamericana Extraordinaria sobre los problemas de la guerra y la paz. Argentina, por su querella con Estados Unidos y el bloque latinoamericano antifascista, no participó en la reunión. Los Estados asistentes debatieron los problemas previsibles del mundo de la posguerra, así como sus relaciones con el rebelde régimen argentino. Se adoptó el Acta de Chapultepec, referente a actos o amenazas de agresión contra cualquier república americana. El acta recomienda la adopción de un tratado de asistencia recíproca contra todo tipo de agresión extra o intracontinental, es decir, la multilateralización definitiva de la Doctrina Monroe. Así mismo, se resolvió que todos los países que aún no lo habían hecho, declarasen la guerra a las potencias enemigas y entrasen a formar parte de las Naciones Unidas. Con respecto a Argentina, hubo dos posiciones: una "dura", representada por Estados Unidos, y otra "blanda", defendida por la mayoría de las repúblicas latinoamericanas. Se resolvió dar una oportunidad a Argentina: si adhería a los principios del Acta de Chapultepec y abandonaba su neutralidad frente a Alemania y Japón, se le admitiría para formar parte de las Naciones Unidas y participar con pleno derecho en todas las actividades interamericanas futuras.

En vista de que los textos de las resoluciones de Chapultepec no herían el orgullo argentino, ese país aceptó. Así fue como el gobierno de Buenos Aires llegó por fin a declarar la guerra a la alianza germano-japonesa el 27 de abril de 1945, tres días antes del suicidio de Hitler y doce días antes de la capitulación incondicional de los nazis.

Bolivia también fue objeto de gran preocupación por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En los primeros años de ese conflicto, la oligarquía del estaño se enriqueció extraordinariamente, suministrando el estratégico mineral a los aliados. En nombre de la lucha "por la democracia" se reprimió a los obreros y se les explotó duramente. En 1942 centenares de trabajadores mineros en huelga fueron masacrados con ametralladoras. Este hecho provocó, en 1943, un golpe de Estado dirigido por el general Gualberto Villarroel con el apoyo del partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), falsamente denunciado como "nazi" por la oligarquía y los stalinistas. Con el apoyo de los civiles radicales del MNR, Villarroel reinició la política reformista de Busch. Su política exterior iba dirigida en contra de la dependencia del país ante los norteamericanos y los ingleses, cosa que trataron de aprovechar los nazis, que tenían simpatizantes entre los militares que siguieron a Villarroel.

Resumen

En general, la etapa de la Política del Buen Vecino se caracterizó por una considerable liberalización de la hegemonía norteamericana sobre la América Latina, y eventualmente por una cruzada conjunta de los países del hemisferio (con excepción de Argentina), bajo la jefatura de Estados Unidos, contra las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial.

La liberalización mencionada se explica en parte por el debilitamiento del *establishment* capitalista norteamericano y el surgimiento de fuerzas populares en

Tabla 7

Tabla cronológica VII

Años	EEUU, México y el Caribe	América del Sur	Relaciones Interamericanas
1933	Retiro norteamericano de Haití. Caída de Gerardo Machado.	Guerra del Chaco desde 1932.	VII Conferencia Interamericana en Montevideo.
1934	Anulación de la Enmienda Platt. Lázaro Cárdenas, presidente.		
1935		Bolivia y Paraguay firman la paz en Buenos Aires	
1936		"Acta plebiscitaria" de las fuerzas armadas paraguayas. Coronel David Toro al mando de Bolivia. "Estado Novo" en Brasil.	Conferencia Interamericana Extraordinaria, Buenos Aires.
1937	Masacre de haitianos por Trujillo.	Expropiación de la Standard Oil en Bolivia.	
1938	Nacionalización del petróleo mexicano.	Ratificado tratado de paz Bolivia-Paraguay.	VIII Conferencia Interamericana, Lima.
1939		Muerte de Germán Busch. Acuerdo Roosevelt-Vargas.	I Reunión de consulta de Cancilleres Americanos, Panamá.
1940	Arreglo petróleo EEUU-México. Avila Camacho presidente de México.		II Reunión de Consulta, La Habana. Acta de la Habana. Resolución sobre colonias.
1941		Conflicto Ecuador-Perú.	Ataque japonés a Pearl Harbor.
1942		Protocolo de Río (Ecuador-Perú). Masacre de mineros bolivianos.	III Reunión de Consulta, Río. Creación de Junta Interamericana de Defensa. Diversas declaraciones de guerra al Eje.
1943		"Revolución militar en Argentina". Ascenso de Villarroel en Bolivia.	Neutralidad argentina y divergencias con Estados Unidos.
1944			Declaraciones de guerra. Se agrava la crisis Argentina-Estados Unidos. Más declaraciones de guerra.
1945		Ascenso de Perón.	Conferencia Interamericana Extraordinaria sobre los problemas de la Guerra y la Paz (Chapultepec). Acta de Chapultepec. Argentina cambia de actitud.

Estados Unidos, por efecto de la gran depresión de 1929-1933. En parte se debe a la madurez y sofisticación del equipo gobernante de Franklin Roosevelt, consciente de que la hegemonía de su país se mantenía mejor por métodos indirectos y reformistas que por la fuerza bruta. También influyó grandemente la necesidad en que se veía Estados Unidos de hacer concesiones para ganar amigos contra la amenaza nazi-fascista.

La Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto estimulante en el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos y contribuyó a echar las bases para futuros cambios estructurales o intentos para realizar tales cambios.

Guerra fría y defensa del *statu quo* (1946-1957)

El mundo de la posguerra

Durante la guerra contra el nazi-fascismo, la democracia capitalista y el socialismo de tipo marxista-leninista pudieron constituir una gran alianza, olvidando temporalmente sus diferencias frente al enemigo común. En la creencia de que, luego de la derrota de Hitler y Japón, su alianza podría perdurar, los Tres Grandes crearon la Organización de las Naciones Unidas con su directorio de cinco potencias dirigentes. Pero la unidad y la cohesión de dicho directorio ya estaba resquebrajada en el momento en que formalmente se estableció. Apenas vencidos Alemania y Japón, volvió a estallar el inevitable antagonismo entre los sistemas capitalista y socialista, combinado con la tradicional rivalidad internacional entre rusos y anglosajones.

La guerra había dejado grandes "vacíos de poder". Por el momento, el gran peso político, económico y militar de Alemania había desaparecido del mapa. Inglaterra, victoriosa pero extenuada, había perdido su rango de primera potencia y no era capaz de mantener su dominación sobre su vasto imperio. Francia había descendido aún más dramáticamente. Estados Unidos, en cambio, había subido al primer puesto entre los imperios del mundo: sin haber sufrido destrucciones en su propio territorio, e inmensamente fortalecido en los planos económico, político y militar, luego de breves vacilaciones, fue asumiendo el papel —anteriormente desempeñado por los británicos— de guardianes y dominadores de los mares. La URSS por su parte, no obstante de haber perdido a 20 millones de habitantes y la casi totalidad de su industria al oeste de los Urales, poseía los recursos humanos, materiales, morales e intelectuales necesarios para ocupar el puesto de segunda potencia del mundo con la expansión y el fortalecimiento de su control sobre gran parte de la masa continental de Eurasia.

Se inició por rápidas etapas el proceso de deterioro de la Gran Alianza y de marcha hacia la guerra fría: confrontación entre el capitalismo y el socialismo y, al mismo tiempo, pugna entre dos grandes potencias que, por la forma, aunque no por el contenido social de su conflicto, continuaron las estrategias trazadas en el pasado por el Imperio Británico y la Rusia Zarista, respectivamente.

Los conflictos entre las dos potencias comenzaron en el segundo semestre de 1945 y se agravaron en 1946. La guerra civil griega, el problema de los Estrechos, la cuestión de Irán, la progresiva sovietización de Europa oriental y los desacuerdos sobre Alemania determinaron el rumbo general de los acontecimientos. Ya en 1946 Churchill hablaba de "guerra fría" y de "cortina de hierro". En 1947 se proclamó la Doctrina Truman y se lanzó el Plan Marshall.

En 1948 comenzó de lleno la etapa de la guerra fría. Occidente procedió a crear la OTAN, y Stalin sovietizó la Europa centro-oriental a través de los partidos del

Cominform. Las dos Alemanias se separaron de manera definitiva con sus respectivos gobiernos: uno basado en el capitalismo, y otro en el socialismo centralista. En China, Mao Tse-Tung inició la gran ofensiva que en 1949 culminaría con un triunfo completo. Ese mismo año ocurrió el bloqueo de Berlín, y de 1950 a 1952 la guerra fría alcanzó su etapa más tensa y peligrosa con el conflicto de Corea.

En 1953, la muerte de Stalin, la tregua en Corea y el equilibrio nuclear determinaron el inicio de una nueva fase, la de estabilización o "institucionalización" de la guerra fría, con un comienzo de distensión y el surgimiento de fuerzas no alineadas. Pero hasta 1957 se mantuvo firme la división bipolar del mundo.

En ese ambiente mundial, obviamente la potencia norteamericana procuró incluir a América Latina en su sistema estratégico para la lucha contra el "comunismo internacional" impulsado por los gobernantes de Moscú. En la etapa 1946-1947 todavía fueron leves y vacilantes las presiones ejercidas por Washington para enmarcar a Latinoamérica firmemente en el bloque occidental. A partir de 1948 dichas presiones se tornaron decididas y fuertes. Estados Unidos comenzó a apoyar las tendencias dictatoriales de derecha para acabar violentamente con movimientos latinoamericanos de liberación nacional y social surgidos a partir de 1943.

Movimientos nacionalistas y democráticos en Latinoamérica

Ya se señaló en el capítulo anterior que la Segunda Guerra Mundial ejerció un efecto estimulante sobre el nacionalismo de los pueblos latinoamericanos. En primer lugar, la elevada demanda de materias primas por parte de Estados Unidos trajo prosperidad y alentó la formación de capital nacional en los Estados situados al sur del Río Bravo. En segundo término, la escasez de artículos de consumo manufacturados en Estados Unidos impulsó y obligó a las burguesías latinoamericanas a crear industrias manufactureras. Con la formación de núcleos industriales se originaron sectores empresariales nacionales, por el momento independientes del capital extranjero. También surgieron nuevos sectores profesionales y técnicos que, junto con los mencionados empresarios, integraron clases burguesas nacionales. Por el otro lado, creció el número de los obreros latinoamericanos y éstos, estimulados por las condiciones económicas favorables y por la ideología democrática y antifascista predominante, constituyeron sindicatos y lucharon por sus derechos.

Por otra parte, los intelectuales latinoamericanos durante los años 1936-1945 —desde el estallido de la guerra civil española hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial— vivieron bajo la influencia del pensamiento progresista mundial. Las luchas antifascistas de Europa los alentaron a emprender el combate contra las fuerzas reaccionarias y opresivas del hemisferio occidental. Ese fenómeno de creciente despertar de conciencias democráticas y patrióticas se unió al factor objetivo del fortalecimiento de empresarios nacionales, nuevas capas medias y clase obrera.

La "Revolución Militar" argentina de 1943, pese a su carácter ideológico semifascista, reflejó en parte los intentos de ascenso de las clases medias renovadoras. En el mismo año, el golpe boliviano de Gualberto Villarroel contra la "rosca" minera y latifundista, que masacró a los obreros en 1942, constituyó otro acto

orientado hacia el cambio social y la liberación de Bolivia del control de consorcios extranjeros.

En 1944 ocurrió un levantamiento democrático y nacionalista en Guatemala. El Partido Revolucionario Guatemalteco, agrupación de capas medias a la cabeza de campesinos y obreros, tomó el poder con la ayuda de sectores militares democráticos y, bajo la jefatura de Juan José Arévalo, adoptó medidas reformistas, y elaboró planes para liberar al país de la dominación de la United Fruit Company, así como para fortalecer la posición del pueblo frente a la oligarquía.

En 1945, en Venezuela se llevó a cabo el movimiento revolucionario cívico-militar del 18 de octubre de 1945, que también formó parte de la ola general de cambios nacionalistas y populares en América Latina. Ese movimiento puso fin a 46 años de hegemonía de mandatarios procedentes de la región andina de Venezuela, hegemonía que tuvo el efecto de unificar y centralizar al país pero benefició primordialmente a las transnacionales petroleras y a una oligarquía latifundista e importadora. Aunque el presidente Isaías Medina Angarita, último heredero político del régimen "andino", fue liberal y benévolo, el golpe revolucionario de octubre de 1945 significó un cambio progresista. El movimiento cívico-militar movilizó al pueblo, lo llevó a participar en la política, desplazó a la oligarquía terrateniente del poder fundamental y elevó a dominante a una burguesía empresarial que surgió de las capas medias promotoras o simpatizantes del alzamiento de octubre.

En 1946 fue elegido Juan Domingo Perón para la presidencia de la nación argentina. En forma autoritaria e ideológicamente confusa, el caudillo argentino encabezó el mismo proceso de ascenso popular y nacionalista que se dio en Guatemala y en Venezuela. Paradójicamente, el hecho de que Argentina estuviera estructural y culturalmente más avanzada que los dos países mencionados no se reflejó en la evolución de sus ideas políticas predominantes. Si los movimientos populares guatemalteco y venezolano actuaron en nombre de claros principios socialdemócratas, en cambio el populismo peronista sufría de las taras del personalismo, del abuso del poder, y de una indigesta mezcolanza de ideas de origen fascista con otras de tipo socialdemócrata. Para aquella época, casi ningún demócrata o progresista latinoamericano entendió que el peronismo era, pese a todas sus fallas, un movimiento hacia la liberación de la nación y del pueblo argentino, y se tendió a atacar y condenar a Perón como "fascista" y "reaccionario".

Lo mismo era cierto en el caso del caudillo boliviano Gualberto Villarroel. Lo respaldaba totalmente el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz Estenssoro. Igualmente, los trotskistas tuvieron frente a Villarroel una actitud comprensiva. En cambio las izquierdas y los demócratas avanzados de otros países latinoamericanos —así como los comunistas bolivianos de tendencia stalinista— atacaban a Villarroel y lo consideraban "nazi". En 1946, cuando la oligarquía derrocó al mandatario nacionalista y lo colgó en la Plaza Murillo, pocos demócratas del exterior entendieron la significación reaccionaria del hecho.

Guerra fría y auge dictatorial (1948-1957)

Desde 1948, el gobierno norteamericano se inclinó en una dirección represiva hacia América Latina y los países periféricos del "mundo libre" en general. Ante la

confrontación cada día más neta con la Unión Soviética, y el peligro de que la guerra fría se convirtiera en caliente, los estrategas de Washington dejaron de pensar en términos de difusión de sus ideas por la vía reformista, y comenzaron a alentar el establecimiento de regímenes de fuerza procapitalistas y antiizquierdistas en los países subdesarrollados. El presidente Harry Truman, hasta el fin de su segundo mandato en 1953, siguió simpatizando con las fuerzas democráticas exteriores pero no impidió que sus servicios de inteligencia militar conspiraran contra gobiernos constitucionales y apoyaran golpes de derecha. El ascenso en 1953 del presidente Dwight D. Eisenhower y de su canciller John Foster Dulles inclinó la balanza totalmente hacia el prodictatorialismo.

En su política conservadora y represiva hacia América Latina, Estados Unidos trató de valerse de dos instrumentos y mecanismos adoptados por la comunidad interamericana en los años 1947 y 1948: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El TIAR había sido suscrito en Río de Janeiro durante la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Continentales, celebrada entre el 15 de agosto y el 2 de septiembre de 1947. En esa reunión se había discutido la aplicación de los principios de Chapultepec, que preveían la creación de un mecanismo multilateral de defensa contra agresiones extra e intracontinentales que sustituyese la Doctrina Monroe. Los Estados latinoamericanos esperaban que ese Tratado sirviese de garantía contra eventuales ataques de sus vecinos y hasta contra intentos intervencionistas de la potencia del Norte. Esta, por su parte, lo miraba como parte de su aparato estratégico anticomunista: lo que sería la OTAN para unir a Norteamérica y Europa occidental contra el campo soviético, el TIAR lo sería —según Estados Unidos— para el hemisferio occidental.

Durante la discusión del proyecto del Tratado, Estados Unidos había propuesto que el TIAR tuviese efectos no sólo en caso de un ataque directo contra un país americano, sino hasta cuando fuere agredida una "base" de tal país fuera del ámbito hemisférico. Esa idea fue rechazada por los latinoamericanos, y se resolvió que sólo en caso de agresión directa contra el territorio de un país entrarían a funcionar de inmediato los mecanismos de acción conjunta; cuando el ataque se dirigiera contra una base extracontinental, sólo se procedería a reunir el órgano de consulta. Tres países que en aquel momento poseían gobiernos democráticos reformistas —Guatemala, Uruguay y Venezuela— habían propuesto que el TIAR previese la acción solidaria contra violaciones a los derechos humanos en el seno de los Estados americanos. Pese a las buenas intenciones, tal cláusula era susceptible de convertirse en instrumento intervencionista, y por ello México y otros países democráticos se opusieron a ella, como lo hicieron también, por motivos menos honorables, las dictaduras.

En 1948 se reunió en Bogotá la IX Conferencia Internacional Americana. Los países latinoamericanos democráticos y reformistas deseaban que se adoptara una Carta que echara las bases jurídicas para crear una comunidad americana sin hegemonías. Opinaban que al institucionalizarse el sistema interamericano como organización regional de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas se hacía posible el manejo de dicho sistema por sus miembros latinoamericanos, obligándose al socio mayor a que acatase la voluntad de la mayoría y dejase de jugar un papel prepotente e intervencionista. El gobierno norteamericano, a su vez, temía inicial-

mente que la carta de la OEA pudiera resultar un impedimento al libre ejercicio de su poder nacional. Sin embargo, durante el proceso de redacción del proyecto de la Carta y en la propia conferencia de Bogotá, la posición de Washington sufrió un cambio. Los gobernantes norteamericanos se dieron cuenta de que la realidad política garantizaba la continuación de su hegemonía sobre las Américas, y que la Carta les era útil, recubriendo la fundamental desigualdad de los países americanos de un manto de igualdad formal. Estados Unidos confiaba en su capacidad para ejercer influencia determinante en el seno de la organización, no sólo a través de los medios tradicionales de presión en las relaciones bilaterales, sino también por medio del Consejo y la Unión Panamericana, con sede en Washington.

El TIAR y la OEA se basaban en cuatro principios jurídicos esenciales: 1) la no intervención; 2) la igualdad jurídica de los Estados; 3) el arreglo pacífico de las diferencias; y 4) la defensa colectiva contra agresiones. Como lo señala Jerome Slater (1967), los primeros dos principios implican la defensa de la soberanía de los Estados; los otros dos enfatizan la cooperación entre ellos. En ciertos momentos, esas dos ideas básicas se vuelven contradictorias en la práctica. En todo caso, las dos últimas pueden ser manejadas por la potencia hegemónica.

En esa época fue firmado el Pacto de Bogotá, instrumento jurídico que establece mecanismos de arreglo pacífico de diferendos. Ese pacto incorpora el contenido del Tratado Gondra de 1923, los pactos de conciliación y de arbitraje de 1929, el Tratado Saavedra-Lamas de 1933, el Tratado de Buenos Oficios y Mediación de 1936, y otros. Así mismo, se resolvió crear la Comisión Interamericana de Paz, proyectada desde 1940.

La OEA funcionó como mecanismo de seguridad colectiva en unos pocos casos de conflictos entre países americanos. Entre 1957 y 1960 se ocupó de la disputa territorial fronteriza existente entre Honduras y Nicaragua. En 1957 estalló la lucha armada entre los dos Estados, y la OEA actuó para restablecer la paz. Eventualmente, el problema fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia que, en 1960, dictó un fallo favorable a Honduras. En 1948 el TIAR fue invocado ante un conflicto armado entre la dictadura nicaragüense y el régimen democrático de Costa Rica. La pugna entre los dos países se encendió de nuevo en 1955, y la OEA tomó medidas para restablecer la paz. En 1950 Haití invocó el TIAR cuando el régimen dominicano del dictador Trujillo dio apoyo a exiliados haitianos para tratar de derrocar al gobierno reformista de Dumarsais Estimé.

Desde 1948 en adelante el auge de la guerra fría llevó al gobierno norteamericano a colocar la seguridad militar y policial por encima de cualquier otra consideración en lo referente a los países subdesarrollados sometidos a su hegemonía. La política de "luz verde" a las corrientes autoritarias conservadoras, junto con la práctica de calificar de "comunistas" a todos los movimientos populares tendientes hacia la transformación del sistema social, hicieron posible el derrocamiento de los gobiernos democráticos de Venezuela y de Perú en 1948, y de Cuba en 1952, así como la adopción de medidas represivas antiizquierdistas hasta por aquellos regímenes que formalmente mantenían su carácter constitucional. En la mayoría de los países de América se procedió a enviar a la clandestinidad a los partidos comunistas y otras agrupaciones radicales, bajo la influencia del macartismo que desbordaba los límites de Estados Unidos y llegó a dominar el hemisferio entero.

El auge dictatorial derechista fue resistido por los gobiernos democráticos que

quedaban en el poder, y en algunos casos surgieron conflictos violentos entre unos y otros.

Cuando José Figueres, apoyado moralmente por los socialdemócratas de Venezuela y de Puerto Rico, tomó el poder en Costa Rica en 1948, de inmediato surgieron conflictos entre él y el dictador Somoza de Nicaragua. Las compañías bananeras norteamericanas y la oligarquía latifundista de Centroamérica temían a Figueres por sus tendencias reformistas y favorables a los intereses de los trabajadores y las capas medias democráticas. El Departamento de Estado apreciaba al nuevo mandatario costarricense por su intenso anticomunismo, pero no así las compañías norteamericanas. Alentado por los grandes intereses económicos de Centroamérica y Estados Unidos, Somoza dio asilo y ayuda a costarricenses de derecha, enemigos de Figueres, que invadieron Costa Rica desde territorio nicaragüense en 1948. Costa Rica se dirigió a la OEA e invocó el Tratado de Río. La organización regional actuó prontamente, restableciendo la paz.

Sin embargo, el conflicto entre la democracia costarricense y la dictadura de Nicaragua estalló una vez más en 1955, invocándose nuevamente el TIAR y restableciéndose la paz. Al igual que en 1948, Estados Unidos tuvo una actitud imparcial, o quizás ligeramente inclinada a favor de Costa Rica. Si bien la United Fruit y demás compañías norteamericanas preferían al dictador feudal —quien les otorgaba enormes privilegios— y se oponían al reformista de San José, la Casa Blanca y el Departamento de Estado jugaban la carta del apoyo a un demócrata anticomunista que, en el fondo, garantizaba la estabilidad del sistema capitalista mejor que un reaccionario extremo.

El déspota dominicano Rafael Leonidas Trujillo había tenido conflictos con la Venezuela democrática de 1945-1948 y con sus vecinos haitianos. En 1946, Haití experimentó un ascenso de sus capas medias reformistas y democráticas, con amplio apoyo obrero y campesino, cuando llegó al poder el presidente Dumarsais Estimé. El tirano dominicano amparó en su país a exiliados haitianos de derecha y los ayudó en sus conspiraciones contra Estimé, socialdemócrata que —para los términos de la realidad de Haití— representaba una tendencia análoga a la de Betancourt en Venezuela y Figueres en Costa Rica. En 1949, Haití llevó ante la OEA su disputa con Santo Domingo, pidiendo que la organización regional usara sus buenos oficios para restablecer la armonía. La OEA actuó de conformidad con ese deseo y los dos países firmaron una declaración de amistad. Poco después, Trujillo respaldó una intentona contra Estimé, y Haití invocó el TIAR. Mientras se deliberaba sobre el caso, Estimé fue derrocado por el general Paul Magloire, de tendencia conservadora, y las relaciones haitiano-dominicanas se estabilizaron a partir de ese momento.

En agosto de 1948 Trujillo se dirigió a la OEA para denunciar una expedición de fuerzas revolucionarias democráticas dominicanas desde Cuba. En 1949 emitió una segunda denuncia en el mismo sentido. Cuba replicó invitando a la Comisión Interamericana de Paz a que realizara una investigación, pero la Comisión decidió que no había necesidad de ello.

En 1949 Estados Unidos se mostró preocupado por la actividad de la "Legión del Caribe" (un cuerpo armado que contaba con el apoyo de las fuerzas reformistas del área). Hasta hoy la historia de la legión se encuentra sumida en cierto misterio. Se presume que fue organizada y apoyada por Betancourt, Figueres, Muñoz Marín

y Prío Socarrás, además de sectores liberales norteamericanos. Su objetivo principal era derrocar a los dictadores reaccionarios del Caribe y, al mismo tiempo, impedir un fortalecimiento de los comunistas en la región. En 1949-1950 Estados Unidos llevó ante la OEA el problema global de la paz en el Caribe, y la organización regional, a través del Comité Interamericano de Paz, se expresó en el sentido de que era encomiable luchar por la democracia, pero que no había que hacer uso de las armas para ello.

Si hasta 1953 Estados Unidos todavía toleraba rebeliones reformistas como la de Figueres, la situación mundial de guerra fría tendía a llevarlo cada vez más hacia una actitud "inmediatista" de respaldo a las acciones antiizquierdistas violentas y autoritarias. A partir del ascenso de Eisenhower y Dulles, la aprobación de las dictaduras se hizo evidente. Ante el caso del asilo de Haya de La Torre en la embajada colombiana en Lima —la dictadura de Odría le negaba salvoconducto y Colombia recurrió primero a la OEA y luego a la Corte Internacional de Justicia—, Estados Unidos asumió una actitud pasiva para no incomodar al dictador peruano, aunque el jefe máximo del APRA era conocido por su moderación y su anticomunismo.

Una excepción: la revolución boliviana

Pese al ambiente represivo general de los años 1948-1957, un acontecimiento de impacto revolucionario momentáneo se produjo durante esa época. Fue el caso de Bolivia, donde una corriente nacionalista radical movilizó a las masas para nacionalizar las minas y hacer la reforma agraria. Después de esos logros, el movimiento perdió su ímpetu inicial y fue dominado paulatinamente por el reformismo.

Después del derrocamiento de Gualberto Villarroel en 1946, la "rosca" de los barones del estaño y los latifundistas había vuelto a tomar el poder político en el país del altiplano. En las minas los obreros laboraban bajo condiciones inhumanas con salarios de hambre. En el agro, los campesinos continuaban sometidos al sistema del "pongueaje", es decir, eran siervos de la gleba, maltratados y vejados como en los primeros siglos de la colonia española.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo trabajaba clandestinamente para organizar cuadros entre los obreros, los campesinos y la clase media. Su programa era el de establecer un gobierno con esas tres clases populares, para nacionalizar las minas, hacer la reforma agraria, independizar el país del capital imperialista y redistribuir el ingreso. En el plano sindical, el Partido Obrero Revolucionario, trotskista, colaboraba tácticamente con el MNR.

En 1952 se celebraron elecciones en las cuales el MNR salió victorioso. Los detentadores del poder se negaron a reconocer los resultados comiciales. El MNR llamó al pueblo a las armas y se produjo una de las pocas revoluciones que hayan logrado imponerse en contra de todo el aparato del Estado, incluído el ejército tradicional. Los mineros formaron milicias y salieron al combate contra las tropas gubernamentales. Los campesinos se alzaron poderosamente en el medio rural. Súbitamente, después de siglos de esclavitud y servidumbre, el indio boliviano,

descendiente de los bravos guerreros aymarás de la época prehispánica, alzó la frente y se decidió a conquistar su dignidad humana o morir. Con dinamita, machetes y viejos fusiles, las milicias campesinas se unieron a las obreras y arremetieron contra el ejército de la "rosca". Tan masivo y heroico fue el levantamiento que el viejo orden político se derrumbó. Un gobierno revolucionario presidido por Paz Estenssoro tomó el poder y disolvió el ejército tradicional para sustituirlo por milicias obreras y campesinas.

Poco después se decretó la nacionalización de las minas de estaño. De un solo plumazo, los tres barones del estaño, Patiño, Aramayo y Hochschild, quedaron expropiados. Luego se procedió a decretar la reforma agraria. Ya los campesinos, por su propia cuenta, habían comenzado a repartirse las tierras de los latifundistas en diversas regiones del país. El decreto expropió a todos los grandes terratenientes que ejercían una dominación de tipo netamente feudal; en cambio, quedaron exentos de expropiación aquellos que invertían para modernizar sus explotaciones y que establecían relaciones capitalistas.

El capitalismo internacional reaccionó con alarma ante la revolución boliviana. Ocurrió una tremenda fuga de capitales y se amenazó al país, bajo intrigas en su contra. Ante esa situación, el gobierno revolucionario comenzó a transigir en algunos aspectos. Se acordó pagar indemnizaciones a los barones del estaño y a los latifundistas afectados, y los pagos correspondientes se efectuaron con toda puntualidad. De un sistema de milicias obreras y campesinas se pasó a la creación de un nuevo ejército. El poder, que al comienzo había estado en manos de las clases trabajadoras, fue transferido paulatinamente a burócratas del partido gobernante. El régimen de Paz aseguró a Estados Unidos que respetaría las inversiones extranjeras y aceptó préstamos y créditos condicionados. Por etapas, se alejó de los trotskistas que lo habían acompañado en la gesta revolucionaria. El ala izquierda del MNR, encabezada por Juan Lechín, se fue distanciando del ala derecha; luego pasaría a la oposición como agrupación aparte, con el nombre de Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista (PRIN).

De esa manera, la revolución boliviana sacudió el orden económico y político establecido en América, pero terminó por ser mediatizada parcialmente por las fuerzas del *statu quo*.

Guatemala y la Décima Conferencia Interamericana

Si en Bolivia, lejos de Estados Unidos, fue posible un cambio nacionalista y democrático relativamente radical, distinta era la situación en Centroamérica, ubicada en la proximidad del centro político dominante del hemisferio y del canal interoceánico de Panamá. En esa zona, los intereses económicos norteamericanos y el propio aparato político y de seguridad de Washington velaron por la conservación del sistema existente y promovieron una acción violenta contra quienes propiciaban cambios sociales y una política nacionalista independiente.

El gobierno reformista de Juan José Arévalo, llegado al poder en 1944, tuvo como sucesor otra administración del mismo Partido Revolucionario Guatemalteco, esta vez bajo la dirección de Jacobo Arbenz, considerado como más izquierdista que Arévalo. Llegado a la presidencia en 1950, Arbenz tuvo la intención de poner

en práctica un proyecto de reforma agraria que liberaría al campesino guatemalteco de una opresión feudal inmutable desde la época colonial. Al mismo tiempo, la reforma agraria afectaría las grandes empresas bananeras, entre las cuales la United Fruit Company era la principal. Las bananeras deberían entregar sus tierras no cultivadas; al mismo tiempo, otras medidas de reforma y de nacionalismo económico tenderían a fortalecer el papel del Estado en la vida económica y a disminuir el poderío de los consorcios fruteros que habían manejado los países centroamericanos como haciendas y factorías de su propiedad.

Las compañías, y sobre todo la United Fruit, pusieron el grito en el cielo. El gobierno norteamericano del presidente Dwight Eisenhower y del secretario de Estado John Foster Dulles —vinculado este último a Wall Street y de mentalidad extremadamente conservadora— acogió el punto de vista de las compañías, y consideró que las reformas planeadas por el gobierno guatemalteco eran intolerables y lesivas a los intereses y la seguridad de Estados Unidos. El hecho que se añadía a los factores económico-sociales y que ofrecía a Washington la oportunidad de denunciar al régimen de Arbenz como "procomunista", era de índole político-administrativa. El presidente guatemalteco, a diferencia de su predecesor Juan José Arévalo, no tenía prevenciones ante los marxistas de su país y no veía razón alguna para prohibir que algunos de ellos participaran en las labores del gobierno en funciones asesoras. Al buscar asesores y técnicos capaces, Arbenz resolvió no rechazar a quienes eran de mentalidad socialista y podían tener vínculos indirectos o directos con el pequeño Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista). El gobierno de Estados Unidos le señaló que estos hombres estaban en su lista negra y pidió que fuesen destituidos, pero el presidente de Guatemala rechazó esa intromisión.

Desde la Conferencia de Bogotá en 1948, Estados Unidos había tratado de conseguir que el "sistema interamericano" condenara cualquier injerencia del "comunismo internacional" en los países del hemisferio. En la propia reunión de Bogotá, el grupo de los países democráticos latinoamericanos, que inicialmente no quiso ningún pronunciamiento anticomunista, se dejó convencer por la experiencia del "bogotazo" (levantamiento popular en la capital colombiana, en el cual los comunistas pueden haber desempeñado un papel relevante). Se dijo en esa oportunidad, en el acta final de la conferencia, que "por su naturaleza antidemocrática y su tendencia intervencionista, la actividad política del comunismo internacional o de cualquier otra doctrina totalitaria es incompatible con el concepto americano de la libertad".

En diciembre de 1950, después de que había estallado la guerra de Corea, el gobierno norteamericano invitó a los Estados de Latinoamérica a celebrar una reunión de consulta de cancilleres con el fin de examinar las medidas que cada país debía adoptar para contribuir a la defensa hemisférica y para prevenir las "actividades subversivas del comunismo internacional". En Guatemala el régimen de Arbenz tuvo, pues, la mala suerte de iniciar su programa de profundización de la revolución democrática y nacional precisamente cuando la tendencia general del mundo occidental era ultraconservadora como consecuencia del ataque norcoreano contra Corea del Sur y la intervención de Estados Unidos bajo la bandera de la ONU en la península coreana.

La IV Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos se llevó a efecto en

Washington en los meses de marzo y abril de 1951, y se adoptó una resolución para que cada país tomara medidas de prevención anticomunista. Ello significó, de hecho, dar luz verde a todas las dictaduras y gobiernos derechistas para que adoptaran el macartismo y desencadenaran una intensa y cruel represión contra sus "comunistas" que, las más de las veces, no eran tales, sino demócratas de izquierda partidarios de las reformas sociales y de una mayor independencia económica nacional.

En Guatemala, Estados Unidos mantuvo una línea de ciega identificación con los intereses de la United Fruit Company cuando el gobierno de Arbenz trató de modificar el convenio existente con la empresa, a fin de reducir un poco los exorbitantes privilegios que el dictador Jorge Ubico le había otorgado. La actitud de los representantes norteamericanos en Guatemala fue tipificada primero por el embajador Patterson, quien en 1950 había dicho a Arévalo, según *The New York Times:* "Haré lo posible para que usted no reciba de mi gobierno ni un par de botas, ni un centavo, hasta tanto deje de perseguir a compañías norteamericanas"; y luego por el embajador Peurifoy, quien participó, revólver en mano, en el derrocamiento de Arbenz.

A principios de 1954 la ley guatemalteca de reforma agraria fue aprobada por el Congreso. Bajo la presión de los campesinos ya se había comenzado a repartir tierras en algunas regiones del país. Pero, en general, se trataba de una reforma agraria moderada, sumamente legalista y prudente, que preveía un procedimiento de expropiación lento y complicado, y garantizaba el pago de aceptables indemnizaciones a los propietarios afectados. Sin embargo, esa ley, además de la presunta participación de comunistas en el gobierno de Arbenz, impulsó a Estados Unidos a dar su pleno apoyo a los esfuerzos de los contrarrevolucionarios guatemaltecos para derrocar al gobierno constitucional. Los servicios secretos norteamericanos y el Pentágono comenzaron activamente a entrenar las tropas del coronel Carlos Castillo Armas, guatemalteco de extrema derecha, exiliado en Honduras junto con otros contrarrevolucionarios.

Para tener una base jurídica en la cual apoyar su intervención en Guatemala, Estados Unidos insistió en que la X Conferencia Interamericana (Caracas, a comienzos de 1954) adoptara una resolución anticomunista que, aunque no mencionara directamente al país centroamericano, no dejara duda alguna en cuanto a la intención. John Foster Dulles llegó a Caracas y se negó a hablar de cualquier tema que no fuese el comunismo: los urgentes planeamientos económicos de los países latinoamericanos serían atendidos por sus adjuntos.

De manera general, la X Conferencia se realizaba bajo condiciones negativas. Caracas era en esos momentos la capital de una de las dictaduras más opresivas del continente, la de Marcos Pérez Jiménez, y los países democráticos de Latinoamérica habían criticado la elección de la capital venezolana como sede. Costa Rica se negó a asistir a la reunión, por rechazo a Pérez Jiménez y solidaridad con los demócratas perseguidos.

El canciller de Guatemala, Guillermo Toriello, tomó la palabra para explicar la política de su país y pedir el rechazo de la resolución anticomunista que iba dirigida contra la soberanía guatemalteca. El discurso elocuente y digno de Toriello mereció grandes aplausos pero, a la hora de votar, la aplastante mayoría de los latinoamericanos siguió a Estados Unidos. Sólo México y Argentina se abstuvieron, en

nombre del principio de la no intervención. El voto de Guatemala fue el único contrario a la resolución. Esta decía que "la dominación o el control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por el movimiento comunista internacional (...) constituiría una amenaza contra la soberanía y la independencia política de los Estados americanos, pondría en peligro la paz de América, y exigiría la acción apropiada de conformidad con los tratados existentes".

Los delegados latinoamericanos, al explicar sus votos, dijeron que ellos interpretaban la resolución como de aplicación general, sin referencia a ningún caso específico. Pero sólo los ingenuos podrían ignorar que la resolución se refería a Guatemala. Con este nuevo instrumento jurídico en la mano, los norteamericanos de inmediato redoblaron sus esfuerzos para preparar la intervención armada contra el gobierno de Jacobo Arbenz.

En mayo de 1954 Estados Unidos denunció la presunta llegada a Guatemala de un importante lote de armas checoslovacas. Según los hombres de Washington, el propósito del envío sería el de armar milicias obreras y campesinas que, bajo el mando de elementos marxistas, establecerían una dictadura revolucionaria en el país. Estados Unidos aceleró los preparativos para la expedición de Castillo Armas y, al mismo tiempo, trató de promover una reunión de cancilleres para estudiar el caso de las armas. Guatemala, por su parte, se dirigió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Comité Interamericano de Paz para denunciar las amenazas de intervención desde Nicaragua y Honduras. Posteriormente, resolvió retirar su solicitud al Comité de Paz de la OEA porque mientras éste actuaba, las Naciones Unidas no se ocuparían del asunto por presión de Estados Unidos. La Comisión de Paz decidió seguir llevando el asunto, y el Consejo de Seguridad decidió, por cinco votos contra cuatro, que había que agotar los recursos regionales antes de considerar la denuncia guatemalteca en la organización mundial. De este modo, Guatemala quedó a merced del "sistema interamericano" dominado por Estados Unidos.

Las fuerzas contrarrevolucionarias de Castillo Armas invadieron Guatemala el 17 de junio de 1954. Aviones de una compañía filial de la Pan American Airways las transportaron a través de los territorios de los países vecinos hasta la frontera guatemalteca. Aparatos DC-3 piloteados por aviadores norteamericanos bombardearon Ciudad de Guatemala y Puerto Barrios. Barcos de guerra norteamericanos navegaban entre Jamaica y Centroamérica, listos para descargar miles de infantes de marina en Guatemala si fuese necesario. Pero, pese a toda esta ayuda norteamericana directa y a haber sido adiestrados y armados por el ejército de Estados Unidos, los elementos de extrema derecha que integraban el movimiento de Castillo Armas mostraron una gran incapacidad a la hora del combate, y no lograron su objetivo de avanzar hacia la capital.

Jacobo Arbenz fue derrocado por un golpe militar que el embajador de Estados Unidos, John Peurifoy, organizó en la capital misma. Los militares que sacaron a Arbenz del poder estaban divididos en dos bandos. Uno de ellos, dirigido por el coronel Carlos Enrique Díaz, era de tendencia centrista. Esta corriente favorecía el mantenimiento de algunas de las reformas realizadas por el régimen de Arbenz, así como la continuación de la investigación pedida por el gobierno caído, sobre las amenazas y la agresión externa contra Guatemala. El otro bando militar, encabezado por el coronel Elfego Monzón, era de derecha y apoyaba a Castillo Armas. Al

instalarse Díaz en el gobierno, el embajador norteamericano John Peurifoy, personalmente, revólver en mano y acompañado de los infantes de marina de la misión de Estados Unidos, lo arrestó y lo desalojó del poder, que entregó al coronel Monzón. Este se apresuró a llamar a Castillo Armas para cederle el mando.

Así terminó la operación Guatemala. De conformidad con el espíritu de la época 1948-1957, represivo y de "guerra fría", el centro dominante liquidó al vasallo rebelde que lo había desafiado en el plano de los intereses económicos y políticos.

Las caídas de Vargas y de Perón

Durante el mismo lapso cayeron dos caudillos políticos sudamericanos que en sus respectivos países habían fomentado y dirigido movimientos de masas de orientación nacionalista, opuestos en algunos aspectos al sistema establecido en el hemisferio occidental. Aunque en ambos casos no se conocen aún todos los datos necesarios para determinar en qué medida Estados Unidos influyó en el derrocamiento de esos líderes, o participó en su "desestabilización", no cabe duda de que por lo menos ciertos intereses económicos norteamericanos, junto con sectores oligárquicos de Brasil y Argentina, saludaron con satisfacción la caída de Getulio Vargas y de Juan Domingo Perón.

Getulio Vargas había dejado la presidencia brasileña en 1945, pero quedó en el Senado del país y comenzó en seguida a preparar su retorno a la primera magistratura. Desde 1947 llevó a cabo una fuerte campaña de propaganda a favor de la redistribución del ingreso y la justicia social, así como de una industrialización nacional autónoma. La organización política que más directamente lo apoyaba era el Partido Trabalhista (Laborista) constituido por quienes habían sido sus seguidores más leales en el ámbito sindical, además de antiguos funcionarios de su gobierno. También el Partido Social Demócrata, constituido por elementos de la burguesía empresarial con apoyo de capas medias se basó en la tradición varguista. En la Provincia de São Paulo, el Partido Social Progresista de Adhemar de Barros ofreció igualmente su respaldo a Getulio Vargas. En 1950 Vargas fue designado candidato presidencial por el PTB y el PSP, mientras que el PSD presentó un candidato propio. El viejo caudillo triunfó con el 49% de los votos e inició su presidencia en 1951.

Vargas tomó iniciativas nacionalistas a las cuales se opuso el sector capitalista con vinculaciones foráneas. Las compañías petroleras transnacionales quedaron descontentas por la creación en 1951 de la empresa petrolera estatal Petrobras. Tanto intereses privados nacionales como extranjeros se opusieron al proyecto de nacionalizar la electricidad a través de una empresa estatal, Electrobras. En 1953, la clase capitalista brasileña, así como las empresas foráneas establecidas en el país, protestaron contra los decretos por los cuales Vargas aumentaba los salarios y trataba de controlar los precios. Tanto Vargas como su ministro del Trabajo, João Goulart, hablaban ante las masas laborales del país en un lenguaje radical, considerado peligroso por los sectores conservadores.

El descontento de las clases pudientes y del capital extranjero ante el nacionalismo y el populismo de Getulio Vargas se vio intensificado por una política fiscal tendiente a aumentar los gastos sociales y administrativos mientras no crecían en la

misma medida los gastos para el fomento de la producción. Los sectores populares también se sentían defraudados por la incontenible inflación.

El 1° de mayo de 1954, el presidente Vargas atacó con vehemencia a la alta burguesía brasileña y al capitalismo transnacional, a la vez que anunció el aumento de los salarios mínimos en un 100%. Las clases ricas y los grandes empresarios reaccionaron con gritos de ira y de alarma. El periodista Carlos Lacerda, ex comunista pasado al bando opuesto, intensificó la ponzoña de sus ataques contra el Presidente.

El día 5 de agosto elementos de la guardia presidencial atentaron contra Lacerda. Este escapó con heridas leves, pero un mayor de la fuerza aérea que lo acompañaba resultó muerto. Una ola de indignación se levantó en el país, estimulada por todos los elementos antivarguistas, tanto reaccionarios como liberales. A este propósito, no debe olvidarse que Vargas, caudillo y demagogo, no sólo era combatido por oligarcas que le temían por sus medidas populistas, sino también por demócratas de buena fe y de orientación social progresista.

Desde el discurso del 1° de mayo, elementos militares derechistas conspiraban contra el presidente Vargas. El atentado contra Lacerda sirvió para estimular y acelerar los preparativos golpistas. El 24 de agosto Getulio Vargas, acosado por sus enemigos, se suicidó. Dejó un testamento político en el cual declaró que su fatídica decisión se debía a la insoportable conspiración de fuerzas oscuras, apoyadas por las clases ricas del país y del exterior, contra un hombre que había dedicado su vida a luchar por el pueblo humilde. "Os di mi vida (...) Me sacrifico por vosotros (...) Doy el paso hacia la eternidad y os dejo mi vida, para entrar a la historia".

No cabe duda que las fuerzas más conservadoras de Brasil y de todo el hemisferio occidental respiraron con alivio al conocer la noticia de la muerte de Vargas. Lacerda y los elementos más derechistas del país trataron de impedir que las corrientes políticas herederas del getulismo llegarán al poder en las elecciones de 1955. Cuando Juscelino Kubitschek, candidato del Partido Social Demócrata con apoyo del Partido Trabalhista triunfó con el 36% de los votos, los sectores militares de extrema derecha, junto con Lacerda y con el apoyo de la gran oligarquía financiera, lanzaron un movimiento golpista contra el reconocimiento de su triunfo. Pero el mariscal Teixeira Lott, demócrata y constitucionalista, se opuso con la mayoría de las fuerzas armadas a la conspiración derechista, y garantizó la toma de posesión de Kubitschek, a comienzos de 1956. Asistido por el vicepresidente João Goulart, trabalhista, el presidente Kubitschek inició una acción gubernamental que reflejaba los intereses de los nuevos sectores empresariales, manufactureros, inicialmente independientes de las compañías transnacionales, aunque luego llegaron a asociarse con ellas. Kubitschek comenzó con una reputación de nacionalista y de adversario de Estados Unidos, pero desde el poder comenzó a buscar la colaboración y la amistad del país del Norte.

La caída de Juan Domingo Perón en Argentina, en 1955, fue el producto de una conspiración conjunta de fuerzas conservadoras y oligárquicas con elementos democráticos antidictatoriales. Como Getulio Vargas en Brasil, Perón fue un caudillo demagogo y contradictorio, pero cuya acción, en su conjunto, se dirigía hacia el mejoramiento de la suerte de las mayorías populares y en contra de los grupos privilegiados. Al mismo tiempo, su gestión fue nacionalista y contraria a la hegemonía económica y política de las potencias anglosajonas, aunque en ese plano

tuvo inconsecuencias y debilidades. Desde comienzos de la década de los años cincuenta, la política peronista de grandes gastos para la reforma social tendió a debilitar la producción. Una compañía estatal compraba los productos agropecuarios a precios bajos y los suministraba a precios también reducidos a los habitantes de las ciudades. El ingreso de los estancieros —hasta entonces la clase más privilegiada del país— disminuyó y comenzó la descapitalización del campo. Bajo el doble efecto de la baja de la producción agropecuaria y de los enormes gastos sociales y administrativos del gobierno, la inflación hizo su aparición. En 1952 el costo de la vida aumentó en un 73% y los salarios sólo en un 35%. En 1953 la tendencia inflacionaria se acentuó aún más. Ello ocasionó un relativo debilitamiento del régimen y vacilaciones en su política.

Durante los años 1946-1954, la doctrina peronista enfatizaba los objetivos antiimperialistas del movimiento. Tanto Estados Unidos como la URSS eran denunciados como portadores de sistemas opresivos y antihumanos, y como potencias imperialistas. Latinoamérica debía luchar por su independencia contra ambos imperios. En este contexto, el justicialismo representaba la "tercera fuerza" entre el capitalismo y el socialismo marxista. El justicialismo, calificado también de "socialismo nacional", representaría el sistema de justicia y armonía sociales, apropiado no sólo para el pueblo argentino sino para los de toda Latinoamérica. Para demostrar en la práctica ese afán antiimperialista, Perón dio su apoyo a la Revolución Boliviana de 1952, creó la organización sindical latinoamericana ATLAS en ese mismo año, y en 1954 adoptó una actitud consecuente, de defensa de Guatemala contra el intervencionismo norteamericano, en la Conferencia Interamericana de Caracas. Al mismo tiempo, el nacionalismo económico y el dirigismo del Estado peronista limitaron considerablemente la libertad de acción y el volumen de ganancias de los grupos inversionistas norteamericanos e ingleses y de las compañías transnacionales. Los recursos naturales y las industrias básicas argentinas, así como los grandes servicios y todo lo que afectaba el abastecimiento esencial del pueblo, estaban en manos del Estado, cosa que provocaba la ira de grupos capitalistas nacionales y extranjeros.

Sin embargo, durante 1954 las dificultades económicas se agravaron y las presiones del capitalismo internacional se hicieron más intensas. Para aliviar la situación del país, Perón decidió dar marcha atrás en sus medidas nacionalistas. Sigilosamente se preparó un proyecto de ley que otorgaría concesiones petroleras a la Standard de Nueva Jersey. Ese gesto marcaría la iniciación de toda una nueva política de mayor flexibilidad ante los intereses extranjeros.

Para compensar ante los ojos de sus seguidores nacionalistas y socializantes estas iniciativas claudicantes, Perón intensificó su radicalismo ideológico y se enredó en un conflicto con la Iglesia. La jerarquía eclesiástica había criticado algunas situaciones de opresión oficial. En octubre de 1954 Perón advirtió a los obispos contra toda interferencia en los asuntos políticos y sindicales del país. Al mismo tiempo, promulgó una ley renovadora sobre la familia, dando igualdad de derechos a los hijos naturales y a los legítimos. La jerarquía protestó, y en noviembre y diciembre varios sacerdotes fueron detenidos por agitación contra el gobierno. Un importante colegio religioso fue intervenido por las autoridades. Los obispos emitieron una enérgica protesta. A principios de 1955 el gobierno peronista legalizó el divorcio y la prostitución. En abril fue eliminada la instrucción religiosa en las

escuelas públicas. Se elaboró un proyecto de ley para terminar con los subsidios a las escuelas confesionales. En mayo comenzaron los preparativos para elegir una asamblea constituyente que redactaría una nueva carta fundamental, que incluiría entre sus principios la separación entre la Iglesia y el Estado.

Mientras el país estaba en convulsión, desgarrado entre peronistas y clericales, con choques violentos en las calles, Perón presentó calladamente al Congreso su proyecto de ley para otorgar concesiones a la Standard ¡por un lapso de nada menos que cuarenta años!

El día de Corpus Christi se desató gran violencia entre católicos practicantes y bandas peronistas. Varios templos fueron atacados. La jerarquía protestó con vehemencia y Perón replicó expulsando del país a dos obispos. El 16 de junio el Papa Pío XII dictó sentencia de excomunión contra Juan Domingo Perón. El mismo día, varias unidades de las fuerzas armadas argentinas se alzaron contra el caudillo nacional, fracasando en su empeño.

Durante los meses de julio y agosto, Perón intentó una reconciliación con sus enemigos, ofreciendo indemnizaciones a la Iglesia y mayor libertad tanto a la oposición política como al capital privado. Pero estos gestos no le valieron de nada, pues fueron interpretados como meras muestras de debilidad por un conjunto de fuerzas —oligárquicas unas, y democráticas otras— decididas a acabar con el régimen justicialista. El 28 de julio Arturo Frondizi lanzó un violento ataque por radio contra Perón y fue arrestado al día siguiente. El 31 de agosto Perón se dio cuenta de que nada le valía retroceder ante sus enemigos. Abandonando las vacilaciones, decidió dar la batalla de frente, a través de un viraje a la izquierda. Llamó al combate a sus descamisados, contra la oligarquía y todos los enemigos internos y externos. El 7 de septiembre, la CGT pidió la creación de milicias obreras. Las fuerzas armadas reaccionaron contra tal eventualidad. El 16 de septiembre se produjo un levantamiento militar decisivo, bajo la jefatura del general Lonardi. Después de duras batallas, el gobierno cayó, y Perón buscó refugio a bordo de una cañonera paraguaya, como lo había hecho 103 años antes, en un barco inglés, su predecesor Juan Manuel Rosas.

Se estableció en Argentina un gobierno provisional presidido por el general Aramburu. Fue el fin de un régimen personalista y demagógico, pero orientado en sus líneas generales hacia el nacionalismo económico y a un mayor grado de justicia social.

Resumen

Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial comenzó a desintegrarse la Gran Alianza entre las potencias anglosajonas y la URSS. Surgió la llamada guerra fría, basada en una estructura bipolar extrema del sistema internacional.

Hasta1947, en Latinoamérica se mantuvo la tendencia que había comenzado a surgir durante la Segunda Guerra Mundial, de ascenso de las fuerzas populares y de lucha por una mayor autonomía nacional. Pero a partir de 1948 las presiones norteamericanas "anticomunistas" efectuaron el gran viraje latinoamericano hacia un conformismo conservador, basado principalmente en gobiernos de fuerza. Sólo en Costa Rica se avanzó hacia una mayor democratización y, en Bolivia, caso

Tabla 8

Tabla cronológica VIII

Año	Area del Caribe	América del Sur	Relaciones interamericanas
1946	Junta revolucionaria en Venezuela (desde octubre 1945).	Derrocamiento y asesinato de Villarroel.	
1947			Firma del TIAR.
1948	El "bogotazo". Figueres al poder en Costa Rica. Choque armado Costa Rica-Nicaragua. Derrocamiento de Rómulo Gallegos en Venezuela.		IX Conferencia Interamericana; creación de la OEA.
1949	Disputa Haití-Santo Domingo. Legión del Caribe.		
1950	Golpe de Magloire en Haití. Arbenz, presidente de Guatemala.	Getulio Vargas electo presidente de Brasil.	
1951		Creación de Petrobrás.	
1952		Revolución boliviana.	
1953		Problema del asilo de Haya de la Torre en Perú.	
1954	Intervención y contrarrevolución en Guatemala	Suicidio de Getulio Vargas. Conflicto de Perón con la Iglesia.	X Conferencia Interamericana en Caracas.
1955	Choque Costa Rica-Nicaragua.	Derrocamiento de Perón.	

excepcional, tuvo lugar una auténtica revolución en 1952. Sin embargo, esa revolución no pudo resistir a dificultades y presiones, y se transformó gradualmente en un proceso reformista con participación norteamericana.

A partir de 1953, con el ascenso en Estados Unidos de una corriente política más derechista que la anterior, se intensificó el apoyo norteamericano al dictadurismo reaccionario en América Latina. El régimen audazmente reformista y popular de Guatemala fue aplastado por Estados Unidos y la oligarquía centroamericana en nombre de la "defensa contra el comunismo". Los caudillos nacionalistas de Brasil y de Argentina, que en diversas oportunidades habían manifestado su independencia frente a los dictados de los dirigentes del "mundo libre", cayeron en 1954 y 1955. Para 1957 el hemisferio se encontraba mayoritariamente dominado por las fuerzas del conformismo "occidentalista" y de la represión antipopular. Sin embargo, ese mismo año aparecieron los primeros síntomas de cambios liberadores.

La polarización Cuba-OEA (1958-1967)

Factores de rebelión en América Latina

Mientras la guerra fría alentaba la formación de superestructuras políticas opresivas y conformistas en América Latina, existía un fermento rebelde en la infraestructura socioeconómica. No sólo las masas populares, sumidas en su secular pobreza, sino también los núcleos empresariales independientes y nacionales se sentían descontentos por las relaciones existentes con el centro imperial norteamericano y sus poderosos grupos económicos. A ello se agregaba el sentimiento rebelde de las capas medias intelectuales, marginadas de la toma de decisiones y colocadas en irritante condición de inferioridad frente a fuerzas oligárquicas y hegemónicas, tanto norteamericanas como criollas.

Las relaciones económicas entre el Norte y el Sur se caracterizaban, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, por el creciente deterioro de los términos de intercambio. Las "tijeras" entre los precios de los productos básicos baratos y los artículos manufacturados caros se abrieron cada vez más. Todos los años, los países productores de materias primas tuvieron que pagar más caras sus importaciones (de los grandes centros industrializados), mientras recibían relativamente menos por sus propios renglones de exportación. Ese fenómeno, que implica una constante explotación y expoliación del Tercer Mundo por parte de los centros capitalistas dominantes, afectó a los países latinoamericanos en todos sus estratos. Tanto los empresarios nacionales como los trabajadores y las masas consumidoras, además de los gobiernos, sufrieron las consecuencias de esa relación injusta.

El organismo que tuvo el principal mérito en informar a los gobiernos y pueblos de Latinoamérica acerca del deterioro de los términos de intercambio y la problemática de la relación entre "centros y periferias", fue la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina (CEPAL) y su director general, el doctor Raúl Prebisch. Ese notable economista contribuyó a dinamizar el pensamiento de las élites latinoamericanas. Paralelamente a su colega sueco Gunnar Myrdal, director general de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, Prebisch introdujo en el pensamiento económico oficial y semioficial la noción de que el Tercer Mundo no puede liberarse de su subdesarrollo y su dependencia por los métodos liberales pregonados por economistas conservadores, sino únicamente por el dirigismo, es decir, por la intervención del poder político en la vida económica, a fin de proteger la industrialización, fomentar la sustitución de importaciones y la creación de exportaciones nuevas, y planificar el desarrollo nacional en sus grandes líneas.

Esas ideas sobre política económica conllevan la conclusión que Myrdal, por su parte, expresa con toda claridad, de que los países subdesarrollados necesitan un cambio de equipos dirigentes: las clases dominantes tradicionales, vinculadas al

orden establecido y asociadas a los intereses transnacionales, no son capaces de ejercer el poder político en el sentido liberador indicado. Aparte del deterioro de los términos de intercambio y la creciente dictadura ejercida sobre las economías latinoamericanas por las colosales compañías transnacionales —más poderosas cada una de ellas que cualquier Estado del continente—, la política estadounidense de apoyo a dictadores reaccionarios y opresivos causó resentimiento e indignación entre los pueblos y las capas medias, así como en los sectores liberales de las clases superiores, en toda América Latina. La actitud inquisidora de los macartistas del Norte y la ruda soberbia de un John Foster Dulles ofendía los espíritus sensibles de América Latina. La costumbre norteamericana de desconocer los valores culturales de la América morena y ver en nuestros países meros peones en la cruzada global contra el "comunismo internacional" indignaba incluso a los elementos conservadores de las naciones situadas al sur del Río Bravo.

Para las masas trabajadoras —obreros, campesinos, elementos semiproletarios— era evidente que su situación desmejoraba año a año bajo el impacto de las presiones y opresiones ejercidas por gobiernos autoritarios y oligárquicos apoyados por los yanquis. Los dictadores y demás gobernantes derechistas suprimían la libertad sindical. Impedían las acciones de reivindicación social de cualquier tipo (todo desafío a los intereses dominantes era calificado de "comunista"), y permitían el constante y acelerado aumento del costo de la vida, mientras mantenían los salarios y sueldos en un nivel bajo. Una América Latina en la cual el 5% de la población percibía el 33% del ingreso, mientras el 50% más pobre disponía sólo del 16% del ingreso; un continente donde la tasa de desempleo crónico era de más del 15% de la población "activa", tenía que culpar de su miseria y su atraso no sólo a sus propios elementos capitalistas y semifeudales, sino también al inversionista y al político norteamericanos, mantenedores del orden existente con todas sus injusticias.

La propia acción de las compañías transnacionales estimulaba el crecimiento (o fortalecimiento) de algunos sectores inclinados hacia la rebelión social o nacionalista. La creciente penetración del capital transnacional a nuevas ramas de la economía latinoamericana —desde la extracción de productos básicos y algunos servicios, la dominación económica foránea tendió a extenderse al comercio, la banca y, finalmente, la propia industria manufacturera de nuestros países— estimuló la ampliación y diversificación de los sectores asalariados en el seno de la población del continente. Estos sectores asalariados se inclinaron hacia la sindicalización y las reivindicaciones sociales y políticas. La industrialización dependiente hizo necesaria la formación de un creciente número de profesionales y técnicos criollos y éstos se convirtieron en muchos casos en un factor rebelde.

Finalmente, el perfeccionamiento y la ampliación de los medios de comunicación social —la extensión de la radio y la televisión a todos los rincones de Latinoamérica— sirvió para despertar a muchos sectores de un letargo secular. La información sobre el avance de la democracia y la autodeterminación de los pueblos en otras regiones del globo, aun en la versión deformada que presentaban las agencias del sistema imperante, no podía dejar de estimular ideas y actitudes críticas e inconformes en América Latina.

Los latinoamericanos sintieron que la guerra fría perdía algo de su intensidad y que en el mundo surgían nuevas fuerzas. El campo comunista se volvía más flexible y atractivo desde que murió el "culto a la personalidad" con Stalin y

decreció el dogmatismo en la dirección de la URSS. Por su parte, Estados Unidos perdió su preeminencia absoluta a partir del momento en que los Soviets pusieron en órbita el Sputnik I. Por lo demás, desde 1957, la economía capitalista entró en una fase recesiva mientras crecía triunfalmente la producción y el consumo en el mundo socialista. Entre los dos bloques surgió, a partir de la Conferencia de Bandung, de 1955, la tercera fuerza constituida por los países no alineados.

Todo ello alentó a los latinoamericanos de diferentes categorías y clases sociales a cuestionar su situación presente y a exigir un futuro distinto y mejor.

Caída de dictadores y viaje de Nixon

La caída de los dictadores derechistas, auspiciados por Estados Unidos en nombre de la lucha contra el comunismo, se inició en 1956 en Perú, donde el general Manuel Odría se retiró voluntariamente al comprobar la creciente protesta e inconformidad de todos los sectores de la población. Perú volvió a un régimen representativo, conservador, pero con cierta amplitud para la acción opositora.

En 1957 cayó el dictador Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. Este había tomado el poder en 1953, derrocando al régimen conservador fascistoide de Laureano Gómez, para poner fin a la intolerable violencia entre conservadores y liberales. Como guardián y árbitro del sistema por encima de banderías partidistas, Rojas Pinilla había logrado imponer cierta pacificación. En el año 1957 las burguesías conservadora y liberal, una vez superadas sus diferencias internas, derrocaron al dictador y establecieron un sistema de alternabilidad política. El retorno de Colombia a las libertades políticas y civiles significó que en ese país pudieran surgir nuevas fuerzas laborales y estudiantiles opuestas al sistema existente.

En enero de 1958 ocurrió en Venezuela el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. Ese tirano, inicialmente apoyado por la burguesía venezolana, cuyos privilegios defendía, cayó en desgracia a los ojos de esa clase cuando —al terminar la extraordinaria bonanza petrolera de los años 1956/1957— se mostró reacio a pagar las deudas públicas pendientes. Durante años su gestión opresiva había provocado la resistencia de obreros e intelectuales democráticos; las cárceles estaban llenas de presos políticos. A comienzos de 1958, la burguesía financiera e industrial del país pactaba con las fuerzas de la oposición clandestina: la clase empresarial se sintió con ánimos para tomar directamente en sus manos el gobierno del país, liberándose de un dirigente y gendarme que le resultaba incómodo y demasiado costoso. El dictador cayó en la madrugada del 23 de enero, y el país se sintió unido en gran júbilo y esperanza.

Al mismo tiempo, en Cuba se perfilaba ya la desintegración del régimen tiránico de Fulgencio Batista. Fidel Castro y sus compañeros peleaban en la Sierra Maestra, mientras en las ciudades actuaba el Directorio Revolucionario y otros grupos democráticos rebeldes. Apenas derrocado Pérez Jiménez, se establecieron vínculos de solidaridad activa entre los demócratas de Venezuela y los luchadores cubanos.

La caída de los dictadores provocó una gran efervescencia popular y estudiantil en toda América del Sur. Aprovechando las libertades políticas reconquistadas,

trabajadores, jóvenes e intelectuales voceaban las protestas del pueblo contra las injusticias sociales y el despotismo de oligarcas y de imperialistas.

Ese fue el momento que escogió el gobierno de Estados Unidos para enviar a su vicepresidente, Richard Nixon, en gira de buena voluntad por los países de América Latina.

El presidente Dwight Eisenhower estaba informado de la existencia de sentimientos antiyanquis en Latinoamérica, y de común acuerdo con el secretario de Estado, Christian Herter, había decidido enviar a Nixon en misión especial. Pero los dirigentes de la diplomacia norteamericana ignoraban la amplitud y la intensidad del furor antiimperialista en la América Latina, y de ningún modo esperaban lo que realmente ocurrió.

En los países dictatoriales, el vicepresidente Nixon y su esposa fueron acogidos y tratados de manera correcta pues el pueblo no podía manifestar sus sentimientos. Pero en aquellas naciones donde existían gobiernos democráticos, y sobre todo allá donde los dictadores habían caído hacía poco, la situación fue distinta. Muchedumbres enardecidas marcharon contra el estadista norteamericano y le gritaron a la cara su rabia antiimperialista y antioligárquica.

Las escenas más violentas se desarrollaron en Caracas, donde todo el año 1958 se caracterizó por una situación de auge de masas. De no haber sido por la prédica moderadora de los propios grupos políticos de izquierda, partidarios de la "unidad nacional", los obreros y marginados de la capital venezolana habrían intentado impulsar el proceso político del país más allá de la democracia formal y hacia la ruptura del orden social existente.

En la avenida Sucre (que comunica la entrada a Caracas desde el aeropuerto con el centro de la ciudad, y que bordea barrios populares y pobres) el vicepresidente Nixon y su esposa fueron rodeados por una muchedumbre furiosa y amenazante. Los manifestantes golpearon el automóvil en el que los Nixon viajaban y escupieron sobre sus vidrios. A duras penas los responsables del orden lograron sacar a los visitantes de su inquietante situación.

El gobierno de Estados Unidos protestó por la falta de precauciones del régimen provisional del contralmirante Wolfgang Larrazábal y envió barcos de guerra cargados de infantes de marina hasta los límites de las aguas territoriales venezolanas.

Posteriormente, la experiencia de Nixon en Caracas sirvió para un análisis autocrítico de la política latinoamericana por parte del Departamento de Estado. Christian Herter y sus adjuntos llegaron a la conclusión, acogida por Eisenhower, de que la política de apoyo a los dictadores había sido un error. La defensa del "mundo libre" debía hacerse con base en ciertas reformas democráticas más que con actos represivos.

Se trataba de una autocrítica de buena fe, pero que desconoció los factores básicos e históricos que habían provocado las reacciones antinorteamericanas en América Latina.

Sobre todo, a los dirigentes estadounidenses no se les ocurrió buscar la fuente del mal en la estructura del orden económico internacional, caracterizado por la concentración del poder en manos de consorcios monopólicos y por la explotación de los países subdesarrollados por los centros industriales y financieros dominantes.

Ascenso de Fidel Castro y bloque democrático latinoamericano (1958-1960)

Durante 1958, la situación de la dictadura de Fulgencio Batista empeoró en forma constante. La violencia y la crueldad con la cual el régimen persiguió a sus adversarios causó un creciente sentimiento de repudio en todas las clases de la sociedad. Hasta los grupos privilegiados, que Batista inicialmente había protegido contra las reivindicaciones obreras, llegaron a la conclusión de que más valía romper sus vínculos con un gobernante tan opresivo y corrupto, y buscar la manera de hacerse representar por corrientes democráticas. Estados Unidos, al absorber la enseñanza del viaje de Nixon, resolvió reducir su apoyo a Batista y recomendar al dictador que se retirara del poder y entregara el mando a elementos liberales.

Los diversos grupos en lucha contra Batista —el Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro, el Directorio Revolucionario, el Segundo Frente del Escambray, y otros— llegaron a un acuerdo, a mediados de 1958, para constituir un solo frente. Los comunistas del Partido Socialista Popular, que habían tenido una línea blanda frente a la dictadura y habían denunciado a Castro como "aventurero", también establecieron vínculos con el comandante de la Sierra Maestra. Desde Venezuela y Costa Rica llegó ayuda militar para las fuerzas de Castro.

Hasta fines de 1958, la totalidad de los hombres en armas contra Batista no pasaba de 1.000. Pero el ejército del dictador estaba dividido y desmoralizado. Varios de sus altos oficiales conspiraban contra el régimen. La dictadura se desintegró y para el 31 de diciembre ya Batista no tenía asidero sólido. Huyó del país el hombre que durante años lo había aterrorizado, y a comienzos de enero de 1959 Fidel Castro entró en La Habana en medio de la aclamación popular.

El programa inicial de Fidel Castro y del movimiento 26 de Julio, junto con los demás grupos políticos coaligados contra Batista, era un programa democrático reformista. Después de su llegada al poder, Castro pregonaba una doctrina "humanista" que no era marxista sino que enunciaba principios democráticos y de justicia social, y parecía orientarse hacia una sociedad con economía mixta: algunas nacionalizaciones básicas pero propiedad privada sobre la mayoría de los medios de producción. Frente a Estados Unidos, la actitud de Castro no era hostil sino simplemente crítica. Denunciaba el apoyo que el país del Norte había dado a Batista y a otros dictadores latinoamericanos, así como el papel explotador e intervencionista de sus empresas monopolistas. Pero pareció pensar que el sistema sociopolítico norteamericano tenía la capacidad de cambiar de orientación aun conservando su estructura capitalista. En todo caso, hizo llamados a Estados Unidos para que colaborase con las nuevas tendencias democráticas y populares de América Latina, y viajó a ese país para informar a gobernantes y sectores políticos sobre la nueva realidad latinoamericana. Explicó que la nueva Cuba, si bien insistiría en una escrupulosa independencia y obligaría a los inversionistas extranjeros a ajustar su actuación a las exigencias del desarrollo soberano de la isla, de ningún modo adoptaría una línea hostil hacia el gobierno y el pueblo de la gran potencia norteña.

Castro defendía en esa época la tesis de que Latinoamérica debía adoptar una posición neutral entre los dos bloques que pugnaban a escala mundial. En defensa de la neutralidad o no alineamiento polemizó con el presidente José Figueres, de Costa Rica, quien visitó La Habana en marzo de 1959 y emitió sus acostumbradas

advertencias contra un antiimperialismo "exagerado". Al mismo tiempo, el gobierno revolucionario cubano inició una política de estrecha amistad con Venezuela, país democratico reformista que le había ayudado en su lucha, así como con las corrientes políticas reformistas de todo el continente. Así se fue estructurando en los años 1959-1960 un auténtico bloque democrático latinoamericano, antidictatorial y decidido a tratar de presionar a Estados Unidos para que las relaciones económicas y políticas hegemónicas se transformasen en relaciones de igualdad.

El principal enemigo del proceso de democratización de América Latina era para esa época el dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. Su enemistad hacia los reformistas del área del Caribe era vieja. Ya en el período 1946-1948, cuando en Venezuela gobernaba el partido Acción Democrática, en Cuba los Auténticos con Prío Socarrás en el mando, en Costa Rica acababa de subir al poder José Figueres, y en Puerto Rico gobernaba Muñoz Marín, había existido una verdadera guerra entre demócratas y dictadores del Caribe. Los reformistas organizaron en aquel tiempo la clandestina "Legión del Caribe", dedicada a combatir a Trujillo, al nicaragüense Somoza y a otros tiranos de la región. Los dictadores reaccionaron con intentos de asesinato a los dirigentes reformistas, y prestaron ayuda a elementos derechistas que conspiraban contra las democracias. Rómulo Betancourt, el principal líder de la socialdemocracia venezolana de la época, era el hombre más violentamente detestado por Trujillo. En varias oportunidades, el déspota dominicano trató de asesinar a Betancourt mientras éste se encontraba exiliado durante los años de la dictadura perezjimenista (1948-1958).

En 1959 el gobierno venezolano rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Trujillo. Este dio asilo al fugitivo Pérez Jiménez y conspiró activamente contra la democracia venezolana. Su furia fue grande cuando su peor enemigo, Rómulo Betancourt, pasó a ser presidente constitucional de Venezuela.

En agosto de 1959, por iniciativa de Venezuela, Cuba y otros países democráticos y antidictatoriales, se reunió en Santiago de Chile la V Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos. En esa reunión se discutieron los problemas de la democracia y de los derechos humanos en Latinoamérica, así como las violaciones de esos principios en el área del Caribe. Los cancilleres de Cuba y de Venezuela, Raúl Roa e Ignacio Luis Arcaya, estuvieron de acuerdo en promover una cruzada democrática y antidictatorial de dimensión continental. Arcaya dijo que así como Bolívar había llevado la lucha por la libertad más allá de las fronteras de la Gran Colombia, los demócratas del siglo XX debían impulsar la causa de la liberación antidictatorial más allá de sus propios límites territoriales, utilizando para tal efecto los mecanismos jurídicos interamericanos.

La reunión de Santiago emitió una declaración sobre democracia y derechos humanos, y resolvió dar mayor poder a la Comisión Interamericana de Paz para que investigara conspiraciones urdidas por los Estados dictatoriales contra sus vecinos democráticos.

La tensión entre el régimen democrático de Caracas y el dictatorial de Santo Domingo ("Ciudad Trujillo") se hizo cada vez más intensa, con mutuas acusaciones de injerencia y agresión. No cabe duda de que Trujillo ayudaba activamente a los venezolanos de extrema derecha que conspiraban contra Betancourt, mientras el gobierno venezolano ayudaba a refugiados demócratas dominicanos que proyectaban liberar su patria del sanguinario déspota que la oprimía y la vejaba. En 1959

estos demócratas dominicanos realizaron desde Cuba un audaz desembarco en su país.

El 24 de junio de 1960 se atentó contra la vida de Rómulo Betancourt. Una poderosa bomba incendió el automóvil presidencial y mató al jefe de la Casa Militar que viajaba en el asiento delantero. El propio Betancourt quedó seriamente herido, con las manos quemadas y los oídos afectados por el estallido. Los responsables del hecho fueron detenidos y se comprobó la complicidad de la dictadura trujillista. Venezuela invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y pidió la convocatoria del órgano de consulta previsto por ese instrumento.

La ruptura entre Cuba y el "Sistema interamericano"

Desde la segunda mitad de 1959, las relaciones entre Cuba y las fuerzas defensoras del "Sistema interamericano" establecido comenzaron a deteriorarse seriamente. Las implacables pero generalmente justas ejecuciones de verdugos y esbirros "batisteros" por el gobierno de Castro provocaron la indignación de muchos derechistas —que jamás habían protestado cuando Batista, Trujillo o Pérez Jiménez asesinaban y torturaban— dentro y fuera del país. La decisión de Castro de aplazar indefinidamente la celebración de elecciones y de continuar su mando revolucionario provisional significó la ruptura entre, por un lado, el 26 de Julio y los comunistas, y por el otro, los viejos partidos democráticos Auténtico y Ortodoxo, así como otras agrupaciones liberales afines. Renunció el presidente provisional Urrutia y asumió la primera magistratura Osvaldo Dorticós, de orientación marxista. Castro se vio reforzado en la jefatura del gobierno, con el respaldo del pueblo expresado en gigantescas concentraciones en plazas públicas. En la misma etapa comenzó a ponerse en práctica la reforma agraria, basada en una ley promulgada en la Sierra Maestra en mayo de 1959. Contrariamente a la opinión de los moderados del 26 de Julio, y de los propios comunistas del PSP, que no querían que la revolución pasase más allá de la etapa democrática y nacional, Castro insistió en que la reforma agraria debía apuntar desde el comienzo hacia el cooperativismo o estatismo agrarios. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una extensa confiscación y estatización de empresas urbanas y rurales pertenecientes a partidarios y cómplices de la dictadura batistera. En vista de la estrecha asociación del capital cubano con el norteamericano, y la frecuente utilización de cubanos como testaferros de intereses yanquis, las confiscaciones de propiedades batisteras afectaron directamente a muchos inversionistas extranjeros.

Los comunistas del viejo Partido Socialista Popular comenzaron a participar cada vez más directamente en el gobierno del país. Esto causó protestas y disidencias por parte de diversos colaboradores de Castro: por un lado, hombres de tendencia moderada, como Díaz Lanz —quien huyó a Estados Unidos y tomó las armas contra la revolución cubana— y, por otro lado, elementos de orientación revolucionaria pero contrarios al autoritarismo leninista. Entre estos últimos figuraban David Salvador y Huber Matos.

En sus discursos, el jefe de la revolución cubana atacó en forma cada vez más directa y severa a Estados Unidos. Su actitud hacia ese país se había vuelto más adversa a partir del viaje que efectuó a Washington y Nueva York en abril de 1959.

En ese viaje, realizado por invitación de la prensa liberal norteamericana, conversó con el secretario de Estado Christian Herter, con el secretario adjunto Rubottom, y con el vicepresidente Nixon. Se negó a solicitar asistencia financiera norteamericana para no correr el riesgo de comprometer a su país en una nueva relación de dependencia ante el Norte, y se limitó a exponer ante gobernantes y pueblo de Estados Unidos sus ideas antiimperialistas y de cambio social.

La reforma agraria, a medida que se amplió, afectó cada vez más a propietarios norteamericanos. El gobierno revolucionario les ofreció el pago de indemnizaciones en bonos, a 20 años, con el 4, 5% de interés. Los inversionistas norteamericanos declararon que esas condiciones eran inaceptables y constituían un despojo. El gobierno norteamericano, haciéndose eco de esas quejas, insistió en que Cuba mejorara las condiciones de indemnización, cosa que el gobierno de Fidel Castro se negó a hacer. De esta manera, principalmente por las disputas acerca de las expropiaciones agrarias, las relaciones cubano-estadounidenses fueron empeorando. Se avanzó otro poco hacia la ruptura entre Cuba y Estados Unidos en octubre de 1959, cuando exiliados cubanos atacaron la isla desde el aire. Castro denunció que los aviones hostiles habían venido de Estados Unidos, y una ola de indignación antinorteamericana recorrió la isla.

Para poner en práctica sus principios de no alineamiento entre los bloques y de independencia ante Norteamérica, Castro abrió el intercambio económico con la Unión Soviética y, al mismo tiempo, se acercó a ese país con fines de amistad y colaboración políticas. En febrero de 1960, el ministro de economía de la URSS, Anestas Mikoyan, visitó La Habana y, el día 13 de ese mismo mes firmó con los cubanos un acuerdo comercial importante. En las semanas siguientes, el gobierno cubano suscribió acuerdos similares con la República Democrática Alemana y con Polonia. El día 3 de junio, el primer ministro Nikita Kruschev ofreció protección a la República de Cuba contra eventuales agresiones norteamericanas. Castro replicó favorablemente y en julio comenzaron a llegar los primeros envíos de armas soviéticas.

Hasta ese momento, la Unión Soviética nunca había considerado seriamente la posibilidad de que su influencia penetrara en el hemisferio occidental de manera directa e importante. Sus iniciativas políticas hacia Latinoamérica habían obedecido al deber de solidarizarse con los movimientos comunistas y antiimperialistas de la región, y al deseo de intensificar los problemas que la potencia norteamericana pudiera encontrar en su vecindad inmediata. El movimiento comunista internacional apareció primero en América Latina en 1918, cuando se fundó el embrión del Partido Comunista Argentino. Los partidos comunistas que se formaron después en Latinoamérica fueron el mexicano en 1919 y el uruguayo en 1920. Durante los años veinte, los dirigentes comunistas asiáticos M.N. Roy (India) y Sen Katayama (Japón) visitaron Latinoamérica para organizar fuerzas bolcheviques e incorporarlas a la Internacional Comunista. En el VI Congreso de la Comintern, en 1928, por primera vez se le dio cierta importancia a la América Latina como parte del conjunto de los países coloniales y semicoloniales, cuya lucha por la liberación nacional debía constituir uno de los grandes frentes del combate antiimperialista mundial. Para esa época ya existían partidos comunistas en casi todos los países latinoamericanos: en la mayoría de los casos, agrupaciones clandestinas y numéricamente débiles.

La política soviética y comunista hacia Latinoamérica había seguido las variantes estratégicas y tácticas que siguió en escala mundial. De 1918 a 1920 en Moscú se creía que la revolución mundial era inminente y se pregonaba una lucha intransigente y sectaria por parte de los partidos comunistas. Desde 1921 hasta 1923, comenzó a desarrollarse la idea de pactar con movimientos nacionalistas burgueses en los países semicoloniales, por lo menos en algunos casos. Esa táctica de alianzas antiimperialistas amplias se acentuó entre 1924 y 1928, y formó parte de los planteamientos presentados por Stalin contra Trotsky en el debate interno. En 1928-1929, después del triunfo de Stalin y con el comienzo de la construcción del "socialismo en un solo país", la línea se radicalizó internacionalmente. Se rompieron las alianzas con movimientos burgueses y pequeño-burgueses en las colonias y semicolonias, quedando los partidos comunistas aislados en posiciones sectarias. En 1934-1935 hubo otro viraje: debido a la necesidad de buscar amplias alianzas democráticas antifascistas en Europa, en el Tercer Mundo —incluida América Latina— se volvió hacia la política de alianzas, ampliándola hacia la derecha, hasta englobar a fuerzas liberales burguesas que eran antifascistas pero de ningún modo antiimperialistas. Otra breve variante existió durante el período del pacto Stalin-Hitler, entre 1939 y 1941, cuando se volvió al sectarismo. A partir de la invasión nazi a la Unión Soviética se reinició, empero, la línea de las amplias alianzas antifascistas. Desde 1946-1947, con el comienzo de la guerra fría, los partidos comunistas latinoamericanos volvieron a una línea dura y rompieron sus vínculos con fuerzas progresistas de signo distinto. De este modo contribuyeron a su propio aislamiento y facilitaron a los norteamericanos y a los derechistas de Latinoamérica su política de represión anticomunista. En 1954, después de la muerte de Stalin, Moscú reconoció el error y pregonó el retorno a una táctica de alianzas con fuerzas nacionalistas pequeño-burguesas, e incluso burguesas, en el Tercer Mundo, incluida la América Latina.

En conformidad con esa táctica, el Partido Socialista Popular (comunista) de Cuba había objetado la lucha intransigente de Fidel Castro. Sólo después del triunfo de éste, se le unió completamente. Castro, aún evolucionando hacia el marxismo-leninismo, jamás se subordinó a los viejos comunistas —cuyas vacilaciones e inconsecuencias, frutos del incondicionalismo ante Moscú conocía demasiado— sino que los englobó en un partido nuevo, dominado por hombres salidos de la guerrilla antibatistera e inicialmente independientes de la línea soviética.

En el caso de Cuba, la URSS se encontró por primera vez, con cierto asombro, ante una fuerza revolucionaria autóctona de América Latina que, por su propia iniciativa, fue evolucionando hacia el marxismo-leninismo y el campo socialista, sin estar dirigida por hombres de previa confianza del Kremlin. Ello significó también que, por su origen autóctono, la revolución socialista cubana, al igual que la yugoslava y la china, mostraría un alto grado de independencia frente a los criterios de Moscú, obligando al primer centro del comunismo mundial a modificar su línea en vista de iniciativas revolucionarias locales e inconsultas.

El acercamiento Cuba-URSS se produjo paralelamente al enfriamiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Castro se quejaba de los altos precios del petróleo que le suministraban las compañías transnacionales, y negoció con la Unión Soviética la adquisición de crudo ruso a precios sensiblemente inferiores a los occidentales. Al llegar el petróleo soviético, el gobierno cubano exigió que las

refinerías de la Esso, la Texaco y la Shell lo procesaran, con base en una disposición vigente según la cual las empresas estaban obligadas a refinar petróleo perteneciente al Estado. Cuando las empresas transnacionales se negaron a acceder a la exigencia de Castro, éste mandó ocupar y expropiar las refinerías. Estados Unidos protestó y, como represalia, redujo la cuota de importación del azúcar cubana.

Así mismo, el gobierno de Washington adoptó la decisión secreta, en abril de 1960, de tratar de promover el derrocamiento del gobierno castrista. La CIA, como órgano coordinador y ejecutor de esta decisión, comenzó, con la colaboración del Pentágono, a adiestrar militarmente a refugiados contrarrevolucionarios cubanos para invadir la isla. Según revelaciones hechas en Estados Unidos en 1975, también parece que desde ese momento la CIA consideró la posibilidad de liquidar físicamente a Castro.

Igualmente, durante ese mismo año se deterioraron las relaciones entre el gobierno revolucionario cubano y los dirigentes del reformismo democrático en América Latina. Rómulo Betancourt jamás había simpatizado con Castro y ya se expresaba en términos críticos sobre él, en 1959, cuando todavía las relaciones entre Venezuela y Cuba parecían muy buenas. José Figueres, por su parte, sentía antipatía hacia Castro desde que los dos hombres polemizaron públicamente en marzo de 1959 ante la radio y la televisión cubanas sobre la política a seguir ante Estados Unidos. Reformistas pro-norteamericanos del Caribe, como Muñoz Marín, temieron que el auge de la revolución cubana dejara al descubierto su propia falta de audacia y consecuencia nacionalista. Otros, como Betancourt, se alarmaron ante la perspectiva de que el radicalismo cubano provocara una onda represiva derechista, que podría arrasar con las democracias latinoamericanas.

En el caso de Venezuela existía, además, otra razón muy concreta para el enfriamiento de sus relaciones con Cuba. En los primeros meses de 1960 el partido gobernante, Acción Democrática, se dividió. Su ala izquierda, socialista y marxista, se separó de la organización matriz, acusando al gobierno de Betancourt y a la "vieja guardia" dirigencial de traicionar los principios revolucionarios y progresistas expresados en los fundamentos doctrinarios del partido. Entre los disidentes, que posteriormente adoptaron el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y los "viejos" líderes de AD existían discrepancias ideológicas —marxismo *versus* reformismo— y tácticas: los rebeldes creyeron que estaban dadas las circunstancias para realizar cambios sociales importantes, en tanto que el ala moderada opinaba que había que proceder con suma cautela, aplazando las reformas sociales, para "neutralizar" gradualmente las fuerzas reaccionarias del país y los militares conservadores.

Castro —impulsado por su simpatía instintiva hacia los jóvenes rebeldes del MIR, y por su antipatía personal hacia Betancourt (antipatía mutua, como lo hemos visto)— expresó su acuerdo con los disidentes y se hizo eco de sus puntos de vista. Radio La Habana comenzó, primero con moderación y luego con creciente vehemencia, a acusar a Betancourt y la vieja guardia de AD de haber renegado de los principios del partido, y de estar haciendo el juego a los reaccionarios venezolanos y al imperialismo.

Por estos motivos, el gobierno venezolano, como también el de Costa Rica, estaban dispuestos, para fines de 1960 a unirse a Estados Unidos en la promoción de una resolución anticomunista, implícitamente dirigida contra Cuba, en la OEA.

El deseo venezolano de sancionar a Trujillo por su atentado contra la vida de Betancourt fue aprovechado por Estados Unidos para promover su propio empeño por obtener una resolución contra la infiltración del comunismo en Cuba. Se llegó a un acuerdo tácito: a cambio de la aceptación por Estados Unidos de la imposición de sanciones a Trujillo, Venezuela y los demás países democráticos latinoamericanos colaborarían en una iniciativa condenatoria del acercamiento cubano-soviético.

Se celebrarían dos reuniones de consulta seguidas, con las mismas delegaciones y en la misma sede: San José de Costa Rica. La VI Reunión de Consulta se ocuparía de la acusación venezolana contra el régimen dominicano. Inmediatamente después de terminar con ese punto, se abriría la VII Reunión, para considerar la solicitud hecha por Perú (pero inspirada por Washington) de estudiar "las exigencias de la solidaridad hemisférica a la luz de sucesos recientes". Estos "sucesos recientes" eran la confiscación de las refinerías, la reducción de la cuota azucarera, las expropiaciones de todas las empresas norteamericanas en Cuba, y la declaración de Kruschev sobre la disposición soviética a defender y proteger militarmente a la isla.

En agosto de 1960, apenas finalizada la VI Reunión de Consulta y acordadas las sanciones contra Trujillo, se abrió la VII. Estados Unidos expresó su "grave preocupación" por la "intervención del comunismo internacional" en el hemisferio occidental y el aliento dado por Cuba a esa intervención, y pidió que los cancilleres reunidos expresaran su "vigorosa condena" a la intervención y a la actitud cubana.

El canciller Raúl Roa defendió el derecho soberano de Cuba a estrechar sus relaciones con cualquier país o sistema social. Afirmó que la URSS fue el único país dispuesto y capaz de dar asistencia práctica a Cuba contra las presiones norteamericanas lesivas a su soberanía. Al mismo tiempo, en La Habana, Fidel Castro atacó a la OEA y proclamó en tono desafiante la amistad de Cuba con la Unión Soviética y la República Popular de China.

Para asegurar la adopción de una resolución anticomunista, Estados Unidos puso en marcha todo tipo de presiones y medidas de persuasión. Venezuela recibió apoyo norteamericano contra Trujillo. Washington prometió ayuda económica al conjunto de los países latinoamericanos, para su desarrollo, por un monto global de 500 millones de dólares. Ante los gobiernos poco inclinados a cooperar en contra de Cuba, Estados Unidos emitió la velada amenaza de alentar las tendencias golpistas de militares fanáticamente opuestos al comunismo y a la "blandura" frente a él. Pero aun con todos estos medios de presión, los cancilleres latinoamericanos moderaron los términos de la resolución, negándose a acoger las fórmulas estadounidenses en todo su rigor.

Cabe señalar que el sentimiento de simpatía hacia Fidel Castro por parte de los pueblos de los países democráticos latinoamericanos era tan fuerte que Betancourt y Figueres, no obstante su personal antipatía hacia el líder cubano, realizaron esfuerzos de conciliación entre La Habana y Washington, antes de la reunión de San José. Betancourt propuso la creación de un fondo internacional latinoamericano que se usaría para indemnizar los intereses norteamericanos afectados por las medidas cubanas de expropiación. Castro, sospechando que se le quería atar las manos, rechazó tajantemente esa idea.

La resolución que finalmente fue adoptada en San José condenó la intervención, o amenaza de intervención, de potencias extracontinentales, y declaró que la

aceptación de tal intervención por parte de un país americano ponía en peligro la solidaridad y la seguridad del hemisferio. También decía la resolución que el sistema interamericano es, o debe ser, incompatible con cualquier tipo de totalitarismo. Aun esa versión relativamente suave constituyó una clara condena a la política seguida por Cuba, y el gobierno de La Habana consideró como inamistosa la actitud de los países latinoamericanos que aprobaron la resolución. Venezuela vaciló: el canciller Ignacio Luis Arcaya, amigo de Cuba e inconforme con la idea de pagar el precio del anticastrismo por la previa condena a la dictadura dominicana, se negó a votar la resolución de la VII Reunión y renunció a la jefatura de la delegación venezolana. Betancourt nombró en su lugar al embajador del país ante la OEA, Marcos Falcón Briceño, quien votó a favor de la resolución.

El gobierno de Fidel Castro consideró que ya estaba cerrado el camino de la solidaridad con las fuerzas reformistas de Latinoamérica y que había que apoyarse cada vez más en la amistad y ayuda soviéticas. El acercamiento a la URSS se hizo más estrecho en los planos económico, político y militar, mientras en la política interna de Cuba se adoptaban medidas de corte socializante cada vez más radicales.

En abril de 1961 el nuevo gobierno norteamericano, presidido por John F. Kennedy, ejecutó el desastroso plan de desembarco en Playa Girón (Bahía de Cochinos), urdido desde meses atrás por la CIA en colaboración con cubanos anticastristas. Kennedy "heredó" ese plan de su predecesor Eisenhower y resolvió ponerlo en práctica, confiando en la seriedad de las informaciones y la solidez del juicio de Allan Dulles y su agencia de espionaje. Como es sabido, la invasión a Playa Girón constituyó un gigantesco fracaso para Estados Unidos y la causa contrarrevolucionaria cubana. La CIA había escogido para la expedición precisamente a los elementos cubanos más antidemocráticos y más desacreditados en su propio país, impidiendo la participación de aquellos que hubieran tenido alguna posibilidad de ofrecer al pueblo cubano una alternativa liberal y reformista. Por otra parte, la "información" de que disponía el servicio secreto norteamericano acerca del estado de ánimo de la población cubana era inexacta, pues venía de la apreciación subjetiva de los grupos de oposición sin raíces en la isla. El desembarco, realizado con obvio apoyo logístico norteamericano, sólo sirvió para fortalecer el sentimiento patriótico y antiyanqui del pueblo cubano y para unificarlo en torno al gobierno revolucionario. Además, tuvo el efecto de dar a Fidel Castro el impulso para que Cuba ingresara definitivamente al campo dirigido por la Unión Soviética.

Fue después del incidente de Playa Girón cuando Castro se declaró marxista-leninista. El gobierno revolucionario procedió a socializar rápidamente toda la economía del país y estrechó sus vínculos con la URSS y los demás países gobernados por partidos comunistas. Con Estados Unidos ya se habían roto las relaciones a comienzos de 1961, y rápidamente se fueron enfriando y rompiendo los contactos de Cuba con otros gobiernos de América. Radio La Habana se hizo vocera de la causa de los revolucionarios extremos del continente, y las autoridades de Cuba comenzaron a prestar ayuda práctica en varios países a grupos insurreccionales de izquierda. Cuba dio aliento al MIR venezolano y al Partido Comunista de ese país, cuya política frente al régimen de Betancourt se radicalizó rápidamente, aproximándose cada vez más a la lucha armada. Por ello, Venezuela, cuyo gobierno por lo demás se orientaba hacia la alianza con Estados Unidos y con sectores conservadores, rompió relaciones diplomáticas con Cuba a fines de 1961.

En 1962 se reunieron una vez más, en Punta del Este, los cancilleres americanos. A petición de Colombia, examinaron la cuestión de la alianza de Cuba con el "comunismo internacional", y decidieron que era incompatible con la participación en el "sistema interamericano" por el hecho de tener un gobierno marxista-leninista. En consecuencia, se resolvió excluir a Cuba de dicho sistema.

Para convencer a los países de gobierno liberal a que apoyaran la medida, Estados Unidos afirmó que su propia posición no era la de condenar el sistema socialista cubano sino la utilización de Cuba por potencias extracontinentales hostiles al sistema interamericano. También se usaron otros medios de persuasión: la dictadura haitiana de François Duvalier abandonó el campo de los países opuestos a la expulsión de Cuba, al recibir un préstamo de Estados Unidos de 13 millones de dólares.

La votación final versó sobre dos puntos. Se declaró la "incompatibilidad" del régimen cubano con el "sistema interamericano" (contrariamente a la pretensión liberal de que no era el socialismo el que se condenaba sino la injerencia extracontinental). Además, se resolvió suspender y prohibir el envío de armas a Cuba y crear un comité consultivo especial para velar por el cumplimiento de esas resoluciones. La votación sobre el primer punto fue de 14 a favor, 1 en contra (Cuba) y 6 abstenciones. En relación con la suspensión del envío de armas el resultado fue de 16-1-4.

Fue a fines del mismo año 1962 cuando se planteó la crisis de los cohetes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, convirtiéndose Cuba por un momento en el foco de la atención mundial y en el detonante que casi hizo estallar una tercera guerra mundial.

Durante 1961-1962 las relaciones cubano-soviéticas se habían hecho cada vez más íntimas, y el primer ministro soviético, Nikita S. Kruschev, concibió la peligrosa idea de instalar bases de proyectiles balísticos en la isla. En esa época, Estados Unidos gozaba de una superioridad de 5 a 1 sobre la URSS en materia balística, y el gobierno soviético se sentía preocupado por el cinturón de estaciones lanzacohetes norteamericanos que rodeaba su territorio en Europa y Asia. Su intención parece haber sido la de usar los cohetes en Cuba como medio de presión y elemento de negociación con Estados Unidos, para que éste retirase sus propias armas balísticas de Turquía u otras zonas cercanas a la URSS. Así mismo, con los cohetes, Kruschev deseaba demostrar la firme voluntad soviética de defender a Cuba contra cualquier nueva invasión como la ocurrida en Playa Girón.

Pero el jefe del gobierno soviético y sus colegas y asesores subestimaron la reacción norteamericana. Tan pronto como las instalaciones —todavía sin cohetes— fueron descubiertas desde la estratosfera por aviones de observación U-2 de Estados Unidos, en el mes de octubre, el presidente John F. Kennedy presentó una enérgica protesta a la Unión Soviética e insistió en que las instalaciones lanzacohetes fuesen desmanteladas en el acto. El jefe de Estado norteamericano no dejó ninguna duda en cuanto a su determinación de eliminar la amenaza balística que amenazaba a su país si los soviéticos no acataban la exigencia de Washington. A la afirmación soviética de que se trataba de bases de proyectiles puramente defensivos, los norteamericanos replicaron, con fotografías aéreas en mano, que no era verdad, que se trataba de instalaciones ofensivas a partir de las cuales se podría atacar y destruir las ciudades de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

sesionó en vano, mientras Kennedy y Kruschev hablaban por el "teléfono rojo".

La crisis fue manejada exclusivamente por Washington y Moscú, no teniendo Fidel Castro ninguna voz en ella. El gobernante cubano se sintió incómodo e indignado por el hecho de ser, con su país, un mero peón en el juego estratégico de las superpotencias. Pidió a Kruschev que no cediera ante las amenazas estadounidenses, pero el primer ministro ruso le contestó que no existía otra alternativa que la de retirar los cohetes, a cambio de la promesa norteamericana de no emprender nuevos intentos de invasión a Cuba. En una nota secreta, fechada el 26 de octubre, Kruschev declaró su disposición a retirar los cohetes y la crisis terminó después de haber causado una muy seria alarma en los ánimos de toda la humanidad.

Aunque parecía que la URSS hubiese retrocedido unilateralmente, quedando Kennedy como el ganador visible, la verdad era ligeramente distinta. A cambio del retiro de los cohetes rusos, el gobierno norteamericano aseguró al de Moscú que en el futuro no habría más ataques armados contra Cuba, por parte de Estados Unidos u otros países, ni tampoco de exiliados contrarrevolucionarios cubanos apoyados por la potencia norteamericana. Ello era importante para Cuba, pues antes de la crisis de los cohetes había existido intenciones de organizar una acción militar contra la isla. El gobierno de Costa Rica había propuesto una "alianza tipo OTAN" entre Estados Unidos, Colombia, Venezuela y los países centroamericanos y antillanos contra el régimen socialista de Castro. Estados Unidos había acogido el plan, que fue discutido en una reunión informal de cancilleres en Washington, a comienzos de octubre de 1962. Pero en noviembre del mismo año, una vez superada la crisis de los cohetes, Kennedy explicó a los costarricences que había que abandonar cualquier plan de acción de esa índole.

El compromiso norteamericano de no agredir militarmente a Cuba no significó que a ese país no pudieran imponérsele represalias de otro tipo, sino únicamente que excluyeran la acción armada. Fue así como en1964 el órgano de consulta convocado con base en el TIAR impuso al régimen cubano severas sanciones diplomáticas y económicas.

El motivo de tal decisión lo constituyó el hallazgo, en 1963, que las autoridades venezolanas hicieron en las costas del estado Falcón, de un importante lote de armas de fabricación soviética y checoslovaca, presumiblemente destinadas a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). El gobierno del presidente Betancourt denunció el caso ante la OEA, invocando el TIAR, y la organización regional envió a Venezuela una comisión investigadora, cuyo dictamen fue que las armas provenían de Cuba y estaban efectivamente destinadas a las fuerzas insurreccionales venezolanas. Actuando como órgano de consulta, en conformidad con el Tratado de Río, los cancilleres americanos se reunieron en julio de 1964. Por 14 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, la reunión decidió aplicar a Cuba el artículo 8 del TIAR, rompiendo las relaciones diplomáticas, consulares y económicas con la isla. Los cuatro países que votaron en contra de esta resolución fueron México, Uruguay, Chile y Bolivia; Argentina se abstuvo.

Posteriormente, México, basándose en el principio de no intervención, se negó a romper relaciones con Cuba. El gesto fue consecuente, pese a que tuvo que acceder a una activa colaboración con los servicios de seguridad norteamericanos para supervisar a quienes viajaban entre México y Cuba.

Aunque es cierto que el régimen revolucionario cubano prestaba apoyo prácti-

co y moral a los movimientos insurreccionales de Venezuela y Guatemala, los propios norteamericanos admitieron que fundamentalmente la guerrilla latinoamericana era de origen autóctono, producto de las injusticias sociales existentes. En el caso de Venezuela, donde existía un régimen reformista, la ayuda cubana a las FALN era algo mayor que en el caso de otros países: Castro confiaba demasiado en la interpretación que el PCV y el MIR tenían de las perspectivas revolucionarias del país.

A partir de la imposición de las sanciones en 1964 hasta los sucesos de los años 1968-1969 existía una fuerte polarización entre Washington y La Habana. Sin embargo, no faltaba un bando intermedio, reacio a dejarse alinear en forma tajante. México mantuvo, pese a la actitud de los demás países latinoamericanos entre su vecindad y la de Estados Unidos, una posición de relaciones tanto con un bando como con el otro. Del mismo modo, los países del Cono Sur, geográficamente alejados del foco de conflicto, adoptaron líneas de conducta moderadas.

Los enfrentamientos en la escala hemisférica

Como remedio contra el contagio revolucionario, el presidente norteamericano John F. Kennedy decidió, en 1961, iniciar un vasto programa de ayuda financiera al desarrollo de los países latinoamericanos. En conformidad con la ideología de la "Nueva Frontera", promovida por intelectuales de centro-izquierda influidos por los anhelos de las clases populares norteamericanas, la lucha contra el "castro-comunismo" debía realizarse más por medios reformistas que por medidas represivas.

La "Alianza para el Progreso", programa de asistencia a Latinoamérica, fue anunciada por Kennedy en marzo de 1961, antes de la aventura de Playa Girón. Posteriormente, durante varios meses, no se habló más del asunto y los Estados latinoamericanos tuvieron la clara impresión de que la puesta en práctica del proyecto dependía de la actitud anticastrista que asumieran. Por fin, en agosto de 1961, en una reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), los norteamericanos explicaron su plan: durante diez años aportarían 1.000 millones de dólares anuales para el desarrollo económico y social de Latinoamérica. Otros 1.000 millones de dólares anuales debían venir de fuentes privadas norteamericanas, así como de Europa y Japón. Esa suma, que equivalía a un total de 20.000 millones de dólares en diez años, sería otorgada a cambio del compromiso latinoamericano de movilizar de sus propios recursos unos 80.000 millones de dólares en 10 años para proyectos de desarrollo y de progreso social.

Los iniciadores de la idea de una ayuda masiva norteamericana para la ejecución de un plan de desarrollo conjunto habían sido latinoamericanos, y la actitud inicial de Estados Unidos fue negativa al respecto. En 1958 el presidente Juscelino Kubitschek de Brasil propuso la "Operación Panamérica" (proyecto precursor de la Alianza para el Progreso). Los propios dirigentes de la revolución cubana recomendaron en 1959, durante la fase presocialista del proceso político de la isla, que Estados Unidos destinara la suma de 30.000 millones de dólares al desarrollo latinoamericano. En aquel momento, el gobierno norteamericano se opuso a tal sugerencia y persuadió a algunos países latinoamericanos de que se

opusieran a ella. Pero, con el paso de Cuba a la órbita socialista y la existencia de múltiples focos de rebelión armada en toda Latinoamérica, la situación cambió: conscientes de que el continente latinoamericano se les podría convertir en un nuevo sudeste asiático, los dirigentes de Washington ofrecieron la ayuda económica masiva que dos años antes se habían negado a dar.

La Alianza para el Progreso resultó, en la práctica, muy decepcionante. Los fondos norteamericanos fueron suministrados con cuentagotas y los países de Latinoamérica tuvieron múltiples ocasiones para quejarse de la forma rigurosa y pedante en que las autoridades estadounidenses condicionaban los aportes financieros y vigilaban su utilización. Desde el comienzo, era obvio que el programa de la Alianza estaba concebido para mantener la dependencia económica de América Latina: los fondos no debían ser utilizados para proyectos de cambio estructural que resultaran en una mayor autonomía de desarrollo económico de las naciones al sur del Río Grande, ni tampoco serían suministrados a quienes nacionalizaran empresas de propiedad privada. Las únicas reformas que la Alianza propiciaba eran las de tipo paternalista, vinculadas al desarrollo económico en el marco del sistema de dependencia existente.

Además de Cuba, otros países latinoamericanos ocasionaron dolores de cabeza al gobierno de Estados Unidos durante 1961 a 1968.

En Brasil se efectuaron elecciones en 1960, siendo designado presidente de la República Janio Quadros, a quien acompañó como vicepresidente el líder trabalhista João Goulart. Quadros, de origen político aparentemente conservador, demostró que su posición había cambiado notablemente hacia un nacionalismo antiimperialista. Después de asumir la presidencia en 1961, mantuvo buenas relaciones con Cuba, condecorando a los máximos dirigentes revolucionarios de La Habana. Manifestó su decisión de luchar por la independencia económica de Brasil frente a los consorcios norteamericanos, proclamó la identificación de la política brasileña con la de los países del Tercer Mundo, y envió una delegación de observadores al I Congreso de Países No Alineados, efectuado en Belgrado a mediados de 1961. Incrementó el comercio con los países socialistas y envió al vicepresidente Goulart de visita a China continental. Sin ser originalmente de la tolda "getulista", asumió los principios izquierdizantes de los seguidores de Vargas en materia internacional. Su política interna se caracterizó por la austeridad administrativa y la preparación de reformas.

La derecha brasileña se unió a las compañías transnacionales y al Departamento de Estado en una fuerte campaña contra Quadros. Estados Unidos detestaba y temía el "neutralismo" del gobernante brasileño, que fácilmente podría contagiar al resto de Latinoamérica y llevarla a rebelarse contra la disciplina del bloque occidental. Por ello respaldaron los esfuerzos de la oposición contra Quadros, provocando una crisis política de grandes proporciones.

Quadros tuvo la debilidad —o la falta de habilidad— de renunciar ante la ola de críticas hostiles y de intentos de saboteo de su obra de gobierno. Según parece, confiaba en que las masas brasileñas, encuadradas sobre todo por el Partido Trabalhista de Goulart, saldrían a las calles para exigir su retorno al poder con facultades extraordinarias. Pero no ocurrió nada parecido: Quadros salió del país, dejándolo en grave crisis. El vicepresidente Goulart era rechazado por los sectores de derecha, aun más que Quadros mismo, por considerársele como izquierdista y

aventurero político. Goulart regresó apresuradamente de China, donde se encontraba en el momento de la renuncia de Quadros. La derecha trató de impedir que asumiera la primera magistratura, pero los sindicatos y otras organizaciones influidas por el laborismo se movilizaron en su favor. El general Texeira Lott, quien ya había asegurado el ascenso de Kubitschek años antes, intervino en favor del derecho de Goulart a ser presidente. Pero, por presión de la derecha, el nuevo jefe de Estado tuvo que renunciar a los poderes esenciales y someterse a una especie de tutela del Congreso Nacional, dominado entonces por elementos moderados. Sin embargo, con el apoyo de los sindicatos y de algunos militares progresistas, Goulart logró, para 1963, enderezar su situación: un referendo le devolvió los poderes presidenciales normales. Hubo en 1963-1964 un ambiente de polarización entre la derecha y la izquierda brasileñas, respaldando esta última a Goulart y a su cuñado Leonel Brizola, mientras las compañías transnacionales y la gran burguesía de Brasil hablaban de "castro-comunismo" y conspiraban contra el gobierno constitucional. Los responsables de los servicios de seguridad norteamericanos, alentados por Lacerda y otros voceros de la derecha brasileña, afirmaban que el inmenso país sudamericano estaba a punto de convertirse en aliado de Cuba y del bloque soviético. Por ello, alentó a los militares derechistas del país a dar un golpe contra el gobierno de Goulart.

En realidad, no existe ninguna indicación de una acción coordinada entre la Revolución Cubana y la corriente izquierdista que apoyaba a Goulart. La "cooperación" se limitaba a algunas proclamaciones de solidaridad. El frente progresista favorable a Goulart era heterogéneo y presentaba fisuras internas: por ejemplo, los comunistas de la corriente mayoritaria encabezada por Luis Carlos Prestes criticaban al castrismo y a sus simpatizantes brasileños, tales como Brizola y el dirigente agrarista Juliao. Así mismo, la falta de resistencia al golpe militar derechista de 1964 demostró que no existía ninguna base para la implantación de un poder realmente revolucionario en Brasil.

Otro país sudamericano en el cual Estados Unidos temió un viraje hacia una posición procastrista durante la década 1958-1968 fue la actual Guyana, denominada Guayana Británica en aquella época anterior a su independencia plena. El movimiento independentista del país se encontraba dominado por la personalidad del doctor Cheddy Jagan, un odontólogo marxista. En 1953 los británicos habían recurrido a medidas de excepción para frenar el explosivo movimiento de liberación, dirigido por Jagan, quien en aquel momento era primer ministro de la colonia. Posteriormente, la potencia imperial británica y las influencias norteamericanas trabajaron de común acuerdo para ahondar las divergencias existentes en el seno del pueblo guayanés y de su movimiento independentista. El movimiento se dividió con base en diferencias raciales: la mitad de descendencia hindú siguió apoyando al Partido Popular Progresista de Cheddy Jagan, mientras que la población de origen africano acompañó al señor Forbes Burnham en la construcción de otro partido político, escindido del PPP: El Congreso Nacional del Pueblo.

Después de la revolución cubana, Estados Unidos decidió que Jagan debía ser desalojado del gobierno de Georgetown a cualquier costo, para evitar que Guayana Británica —que inevitablemente llegaría a su plena independencia en pocos años— se convirtiera en una base para operaciones revolucionarias (en alianza con Cuba) contra Venezuela, Brasil y las Guayanas holandesa y francesa. En 1964, agentes

sindicales norteamericanos dirigidos por el grupo Lovestone-Serafino Romualdi, vinculado a la CIA, intervinieron para comprar la adhesión de dirigentes sindicales guyaneses y lanzar grandes huelgas en contra de Jagan, quien se encontraba en el gobierno. En las elecciones de 1965 hubo una intensa acción de los servicios secretos de Estados Unidos en apoyo a Burnham. Cuando Guyana obtuvo su independencia en 1966, Burnham y el PNC se encontraban firmemente en el poder apoyados por Gran Bretaña y Estados Unidos.

La reclamación territorial venezolana, presentada a partir de 1961 por el gobierno del presidente Betancourt, molestó inicialmente a los norteamericanos. Venezuela, que en 1899 había perdido su provincia histórica de Guayana Esequiba, declaró que el laudo de París, que había otorgado el territorio esequibo a Gran Bretaña, era nulo e írrito. Para tal afirmación, Venezuela se basaba en las revelaciones del abogado Mallet-Prévost sobre graves irregularidades que se habían producido en París en 1899, negociándose políticamente el apoyo del juez ruso a las tesis británicas. Estados Unidos temió que la reclamación venezolana pudiera debilitar a Burnham y favorecer objetivamente el auge del extremismo en Guyana. Sin embargo, la moderación de Venezuela y su apoyo a procedimientos diplomáticos y pacíficos tranquilizó a Washington. El 17 de febrero de 1966, Venezuela y Gran Bretaña, con la aprobación del premier Burnham, suscribieron el Acuerdo de Ginebra, por el cual el Reino Unido y Guyana reconocieron la existencia de una controversia territorial que debía solucionarse por medios pacíficos, estableciéndose a tal fin una comisión mixta venezolano-guyanesa, que en el lapso de cinco años debería buscar una solución equitativa. Los trabajos de la Comisión, lamentablemente, fueron infructuosos: la parte guyanesa alargó las conversaciones para que rebasara el lapso de cinco años y el asunto pudiera ser llevado al secretario general de las Naciones Unidas, quien recomendaría otra forma de solución pacífica. Después de expirado el lapso fijado para las labores de la comisión mixta, Venezuela y Guyana suscribieron, en 1971, el Protocolo de Puerto España, por los términos del cual se "congeló" el problema por doce años.

En Venezuela la época de la polarización del conflicto Cuba-Sistema interamericano se caracterizó por la existencia de un movimiento insurreccional de izquierda en guerra contra los gobiernos de los presidentes Betancourt (1959-1964) y Leoni (1964-1969). El Frente de Liberación Nacional (FALN) y su aparato militar, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FLN), realizaron acciones importantes, sobre todo durante los años 1962-1963, y preocuparon seriamente a Estados Unidos, que incluyó el conflicto venezolano en su lista de "guerras" de la segunda mitad del siglo XX. Después de 1963 la guerrilla venezolana perdió fuerza. Para 1969 los izquierdistas promotores de la guerrilla estaban convencidos de que había que abandonar la lucha armada y buscar la vía pacífica de la lucha de clases. El gobierno del presidente Rafael Caldera les abrió el camino de la "pacificación", es decir, de la amnistía y del reintegro a la vida legal. Quedó demostrado que en Venezuela, a pesar de la dependencia económica y tecnológica, y de la injusticia flagrante en la distribución de la riqueza, no estaban dadas las condiciones para la lucha violenta: el rico país petrolero tenía los medios para suavizar los conflictos sociales, creando esperanzas de reforma pacífica. Los norteamericanos, en Venezuela, utilizaron el método de lucha inteligente que consiste en apoyar el reformismo liberal, en lugar de patrocinar tendencias conservadoras extremas.

Durante 1960-1970 Guatemala fue otro campo de batalla importante entre el sistema establecido y los grupos guerrilleros de izquierda. Dos agrupaciones guerrilleras marxistas competían por la dirección de la lucha. El movimiento principal disfrutaba, al igual que las FALN venezolanas, del apoyo activo de Cuba. A diferencia de lo que ocurría en Venezuela, en Guatemala no existió ningún movimiento reformista realmente vigoroso que los norteamericanos pudieran apoyar: por ello, dieron su respaldo primero a una sucesión de regímenes dictatoriales de derecha, que eran la expresión política de la oligarquía latifundista y de las empresas fruteras transnacionales que dominan a ese hermoso y trágico país centroamericano. A fines de la década, dieron su respaldo al gobierno democrático de Méndez Montenegro, que era reformista por ideología y al que los militares y la oligarquía presionaban para que se abstuviera de emprender toda transformación social y para que continuara la política represiva de los gobiernos anteriores.

República Dominicana fue objeto, durante el período de la polarización del conflicto La Habana-Washington, de una intervención armada norteamericana que causó profunda indignación, incluso entre los demócratas moderados de América Latina y del mundo. El tirano Trujillo, después del atentado contra la vida de Betancourt en 1960, fue abandonado por la potencia norteamericana que hasta entonces había sido su amiga y aliada. Ya el gobierno de Eisenhower —en ésta su etapa final, cuando Dulles había muerto y Christian Herter dirigía el Departamento de Estado— tenía clara la idea de que valía más apoyar a anticomunistas liberales que a dictadores reaccionarios y despóticos, temidos y odiados por sus pueblos. En el seno del *establishment* financiero e industrial, la corriente modernista y liberal encabezada por Nelson Rockefeller coincidía con los senadores y diputados del país del Norte en recomendar al presidente Eisenhower que, en el conflicto Betancourt-Trujillo, decididamente convenía "dejar caer" a éste y apoyar a aquél: en el área del Caribe no había cabida para ambos. En conformidad con estas recomendaciones, y a cambio del compromiso betancouriano de adoptar una posición anticastrista, el gobierno de Washington dejó que Trujillo fuese condenado por la V Reunión de Consulta de Cancilleres, en San José de Costa Rica, hacia fines de 1960.

Abandonado por el gobierno norteamericano, Trujillo también fue muy pronto rechazado por la burguesía dominicana y por los militares que hasta el momento le habían sido incondicionalmente leales. A mediados de 1961, el tirano fue muerto por un grupo de oficiales encabezados por el general Imbert Barrera. Aunque la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) no parece haber participado directamente en el atentado, sí estaba enterada de su preparación y no hizo nada por desalentarlo. Hasta es posible que haya ayudado indirectamente a su realización. Decididos a dirigir el proceso de destrujillización de República Dominicana y a no permitir que ese proceso se les fuera de las manos y resultase en el ascenso de fuerzas izquierdistas, los norteamericanos rodearon de asesores al gobierno provisional que se estableció después de la muerte del déspota, y le otorgaron cuantiosa ayuda financiera.

Pese a toda la influencia directa e indirecta ejercida por los asesores norteamericanos para que las elecciones dominicanas de 1962 resultaran en el "triunfo" de partidos de centro-derecha, el pueblo votó arrolladoramente por el Partido Revolucionario Dominicano (socialdemócrata) y su jefe y candidato, Juan Bosch. A diferencia de algunas otras figuras de la socialdemocracia latinoamericana, Bosch

no había claudicado con respecto a los principios del antiimperialismo y no estaba dispuesto tampoco a seguir una política discriminatoria contra elementos marxistas de su país. Por ello, su gobierno fue muy breve, iniciándose y terminando en el mismo año de 1963. Los militares de derecha íntimamente vinculados a los norteamericanos derrocaron al presidente Bosch, tomando el poder una junta pronorteamericana y socialmente conservadora, presidida por Donald Reid Cabral.

El pueblo dominicano, burlado en su voluntad liberacionista y revolucionaria, se sintió profundamente descontento. La clase más privilegiada y la clase media alta tendieron a favorecer al gobierno golpista, pero no así los sectores obreros y campesinos ni las capas medias pobres. Los estudiantes e intelectuales sentían una repulsa particular hacia el régimen dictatorial que tenía el carácter de instrumento de una gran potencia extranjera intervencionista. El descontento también afectó a sectores en el seno de las fuerzas armadas dominicanas, y en 1965 un movimiento militar constitucionalista —favorable al retorno de Juan Bosch y a la reinstalación del gobierno legítimo— derrocó a Reid Cabral y tomó el poder. El coronel Francisco Caamaño Deñó fue el jefe del movimiento. De inmediato, el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson reaccionó en forma violenta, más acorde con el espíritu de Teodoro Roosevelt que con el de la época actual. Mandó a los infantes de marina a desembarcar en Santo Domingo, y sólo después de ejercer ese acto de agresión se dirigió a la OEA para denunciar una presunta amenaza comunista contra República Dominicana a través del coronel Caamaño y sus compañeros. Pidió que los Estados americanos adoptaran medidas colectivas contra esa amenaza y que despacharan tropas para transformar la intervención yanqui en una acción multilateral, formalmente ajustada a las disposiciones de la carta de la organización regional.

Una minoría de países —entre ellos Venezuela— tuvo una actitud digna y se negó a participar en tal farsa. El presidente venezolano Raúl Leoni había sido el primero en denunciar y condenar el desembarco militar de los *marines*; otros países latinoamericanos habían hecho lo mismo. Sin embargo, a la hora de cohonestar la agresión, dándole carácter multilateral, la mayor parte de las naciones "hermanas" de Santo Domingo cedieron ante las presiones norteamericanas, aprobaron una medida colectiva, y aportaron incluso destacamentos simbólicos de soldados o policías para unirse a los estadounidenses en una presunta acción "interamericana".

El pueblo dominicano no aceptó dócilmente la invasión. Estalló una guerra civil entre la mayoría de las masas populares y los demócratas y patriotas consecuentes, de un lado —el de Bosch, de Caamaño, y del constitucionalismo—, y del otro, las clases altas y los admiradores del *American way of life*. Las fuerzas norteamericanas y los destacamentos de cipayos latinoamericanos se interpusieron entre los bandos en lucha para, de hecho, apoyar a los derechistas dirigidos por los generales Imbert y Elías Wessin.

Después de reprimir la revolución constitucionalista, las tropas norteamericanas se retiraron pero dejaron en el país un dispositivo de asesores estadounidenses para que coordinara la acción política, militar y policial en favor de la realización de unas nuevas elecciones favorables al triunfo de fuerzas de derecha. Esas elecciones, efectuadas en 1966, dieron el triunfo a Joaquín Balaguer, hombre de antecedentes trujillistas, quien ya había sido presidente suplente después del asesinato del dictador. Desde aquella fecha Balaguer ha gobernado la República Dominicana en forma pretendidamente democrática. Sin embargo, los partidos de

oposición izquierdistas han sido víctimas de graves discriminaciones y de una represión a ratos brutal, caracterizada por la muerte violenta de sus dirigentes y militantes. A muchos dominicanos exiliados en la época de Trujillo se les impidió el retorno a su país, bajo la acusación de ser "comunistas".

También en el vecino Haití la influencia norteamericana se mantuvo en forma represiva y dura a través del dictador François Duvalier. Ese siniestro tirano llegó al poder en 1958, después de un intervalo de gobierno militar que en 1957 había desplazado al legítimo presidente electo, Daniel Fignolé. Duvalier triunfó en un proceso electoral que lo favoreció a causa de la popularidad que él se había ganado entre las masas campesinas por su labor de médico rural en años anteriores. Una vez en el poder, reprimió cruelmente a la oposición y aterrorizó el país a través de una temible milicia y policía secreta, los *tontons macoutes*. Frente a los intereses azucareros, financieros, políticos y militares norteamericanos, Duvalier se mostró blando y cooperativo. De común acuerdo con Estados Unidos, persiguió a las izquierdas y erradicó toda presencia comunista en su país.

Como réplica al paso de Cuba a la órbita comunista, Estados Unidos logró mantener firmemente bajo su control la isla de La Española, situada a poca distancia de la Antilla revolucionaria y normalmente sensible ante lo que ocurriera en ella. De manera general, por su actitud ratificaron la doctrina de su "interés vital" en el área del Caribe, considerado como esencial para su seguridad y defensa.

En Ecuador, Estados Unidos reaccionó con preocupación, en 1961, ante la elección a la presidencia por cuarta vez del caudillo político José María Velasco Ibarra. En el seno del movimiento velasquista, que tenía una posición neutral, existía un ala izquierda con sentimientos de simpatía hacia Cuba. El político Araujo, que inicialmente fue ministro del Interior en el gobierno velasquista, pertenecía a esa tendencia. Los servicios secretos norteamericanos, en colaboración con las fuerzas conservadoras ecuatorianas, lograron desacreditar y expulsar del gobierno al ministro Araujo. Posteriormente, esas mismas fuerzas continuaron socavando la base del propio Velasco, quien se vio obligado por un movimiento militar a dimitir en favor de su vicepresidente, Carlos Julio Arosemena. Este se mostraba más inclinado a la izquierda que su predecesor, abrigaba la intención de orientar Ecuador hacia una vía de mayor independencia frente a Estados Unidos, y actuaba en favor de un acercamiento hacia los países no alineados. Para desgracia suya y de su causa, Arosemena era dipsómano y ello le desprestigió ante las fuerzas armadas, ya influidas en su contra por el servicio secreto norteamericano. En 1962 Arosemena fue derrocado y Ecuador, después de haber atravesado su breve etapa de nacionalismo cuestionador del *status* interamericano, volvió a integrarse cabalmente al sistema hemisférico establecido.

Por último, hay que mencionar la participación de Estados Unidos en la determinación del destino político de Chile, con el empeño de impedir que ese gran país austral pasara a ser gobernado por una coalición de las izquierdas. Ya en las elecciones de 1958 se había presentado ante los electores chilenos una alianza socialista-comunista, denominada Frente Revolucionario de Acción Popular (FRAP). En las elecciones de 1964, el FRAP se presentó nuevamente con su candidato ya estrenado en 1958: Salvador Allende. Esta vez, Estados Unidos temió que Allende pudiera triunfar: el gobierno conservador del presidente Alessandri, electo en 1958, había decepcionado a las masas populares y el deseo de un cambio

social profundo prevalecía en el país. Los estratos políticos de Washington optaron por dar su más decidido respaldo al reformismo demócrata-cristiano como antídoto a la alternativa socialista.

El gobierno de Lyndon B. Johnson continuó en el caso de Chile la línea táctica establecida por su predecesor Kennedy: la de combatir las corrientes revolucionarias más por el reformismo que por la represión reaccionaria, salvo en aquellos países donde no existiese ninguna corriente reformista efectiva. El Partido Demócrata Cristiano de Chile, dirigido por Eduardo Frei, tuvo en las elecciones de 1964 una posición reformista aparentemente audaz y prometió una "revolución en libertad". Se sabe actualmente que la campaña de Frei y los demócrata-cristianos se benefició con una importante ayuda financiera norteamericana, así como con el asesoramiento de Estados Unidos. Se realizó un intenso y eficaz esfuerzo para convencer a la burguesía chilena y a las empresas transnacionales del cobre de que no podían derrocar a la izquierda con fórmulas conservadoras. Había que jugar la carta del reformismo. Discretamente, Frei dio garantías a los poderosos de la economía: aumentaría los impuestos directos, así como los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, pero no hasta el punto de afectar "seriamente" la posición de los capitalistas. Las empresas del cobre no serían estatizadas sino "chilenizadas" con base en las fórmulas de empresa mixta que garantizarían la continuación de los consorcios extranjeros y hasta liberarían esos consorcios de algunos de sus riesgos y responsabilidades. El resultado de todo ello fue, para satisfacción de Estados Unidos, la elección de Frei por una gran mayoría. Las masas creyeron en la "revolución en libertad". Reformistas honestos y auténticos progresistas cristianos del ala izquierda del PDC se encontraron unidos con la derecha en una lucha común por cerrarle el camino a Allende y al FRAP .

El régimen de Fidel Castro replicó a todas esas acciones mantenedoras del sistema establecido, y al boicot y el cerco impuestos a Cuba, mediante la estrategia de estímulo y, a veces, de ayuda directa a los movimientos revolucionarios de Latinoamérica. En algunos casos —como el de Venezuela en 1963—, movimientos guerrilleros latinoamericanos recibieron armas de Cuba. En otros, luchadores revolucionarios de diversos países fueron adiestrados militar y políticamente en la isla. El aprendizaje guerrillero en Cuba constituyó la exacta réplica de los cursos de formación antiguerrillera que los norteamericanos impartían a militares de América Latina en la Zona del Canal, Guatemala y otros sitios.

Aparte de ello, para responder a las reuniones de cancilleres y a las medidas multilaterales contra Cuba, Castro concibió la idea de celebrar en territorio cubano un encuentro de las fuerzas revolucionarias de los tres continentes del Tercer Mundo: Asia, Africa, y América Latina. Desde sus comienzos, la Revolución Cubana había mostrado un sentido de solidaridad revolucionaria internacional que se extendía más allá de los límites de Latinoamérica. El partido gobernante cubano estableció vínculos con las organizaciones revolucionarias de los negros norteamericanos y con las fuerzas antiimperialistas de Africa y Asia. El paso del "Che" Guevara por el Congo (Zaire) y la ayuda prestada por voluntarios cubanos a las tropas rebeldes de Pierre Mulele en ese país constituyeron pruebas prácticas de dicha solidaridad. La convocatoria de la llamada Conferencia Tricontinental, o Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina, fue la continuación lógica de esa política.

A comienzos de 1966 se congregaron en La Habana los representantes de las organizaciones revolucionarias más radicales de los tres continentes. Asistieron igualmente los representantes de algunos partidos en el poder en sus respectivos países: el Partido Comunista de la Unión Soviética, en representación de las regiones asiáticas de la URSS, y la Unión Socialista Arabe (partido oficial de Egipto). En cambio, no fueron invitados los partidos comunistas, socialistas o revolucionarios que hubiesen manifestado su desacuerdo con la línea insurreccional y extrema que caracterizaba al PC cubano en esa época. La Conferencia Tricontinental adoptó resoluciones favorables a la lucha violenta armada contra el imperialismo en el mundo entero. Se decidió coordinar esa lucha mundial mediante la creación de una Organización de Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina (OSPAAAL) y su sección latinoamericana, la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS).

El PCUS asistió a esa reunión a pesar de que ya Moscú tenía serias dudas en cuanto a la conveniencia de la línea extremista que La Habana seguía en aquellos tiempos. La fórmula —debida principalmente al "Che" Guevara— de aplicar en casi toda América Latina una línea guerrillera (a ratos "foquista") y tratar de "transformar Los Andes en Sierra Maestra", tuvo el efecto de unificar a todas las fuerzas conservadoras y reformistas de Latinoamérica en un solo frente anticubano. Al unificar a todos los no marxistas en contra suya, la Revolución Cubana tendía objetivamente a fortalecer las fuerzas de la reacción y hacerle un poco el juego al imperialismo. Si se esperaba que surgieran en Latinoamérica movimientos nacionalistas y de cambio social nuevos y diversos habría que aflojar la presión insurreccional proveniente de un centro revolucionario único. Esto lo veían los estrategas de Moscú y, junto con ellos, los elementos más maduros y dialécticos de los partidos comunistas de América Latina. La URSS pensaba, además, en su responsabilidad por el mantenimiento de la paz y por evitar un conflicto termonuclear. La crisis de los cohetes cubanos había tendido a demostrar que los norteamericanos se resignaban ante una Cuba socialista, pero que difícilmente soportarían la implantación del marxismo-leninismo en un segundo país americano, sin recurrir a los medios de lucha más desesperados y peligrosos. Por último, la URSS estaba deseosa de reanudar sus relaciones diplomáticas y comerciales con los regímenes burgueses de Latinoamérica, y abrigaba la esperanza de que tales relaciones podrían servir para estimular las corrientes nacionalistas antinorteamericanas en el seno de las propias clases empresariales y capas medias de este continente.

Ya para 1967 las divergencias entre el pensamiento estratégico y táctico de Moscú y el de La Habana se habían hecho más netas. Por su parte, el Partido Comunista de Venezuela, consciente de que la lucha armada había fracasado en ese país, se enfrentó al Partido Comunista de Cuba y sostuvo con él una violenta polémica.

A fines de 1967 se conoció la noticia de la muerte del "Che" Guevara en las montañas de Bolivia. Con ese heroico guerrillero murió una etapa de la lucha revolucionaria latinoamericana. Finalizó el intento de generalizar la lucha armada al estilo de la Sierra Maestra.

Coincidiendo con el reconocimiento, por parte de los dirigentes de La Habana, de que la polarización extrema no servía a los intereses de la revolución, se comenzaron a manifestar en América Latina los síntomas de la formación de nuevas

fuerzas nacionalistas y de cambio social. Las relaciones internacionales del continente estaban a punto de entrar en una nueva etapa: la que estamos viviendo actualmente, caracterizada por un panorama más complejo que el de la década de la bipolaridad.

Resumen

A partir de 1958 adquirieron plena vigencia diversos cambios que paulatinamente se venían preparando desde 1956.

En escala mundial se daba importantes pasos hacia la distensión entre los bloques dirigidos por Washington y por Moscú, respectivamente. La estructura fuertemente bipolar del sistema internacional estaba siendo sustituida por un esquema todavía bipolar pero más flexible, con el claro ascenso de nuevos centros de poder autónomos, producto de contradicciones y secesiones en el seno de los dos bloques establecidos. La "guerra fría" se había "institucionalizado" o estabilizado, permitiendo disidencias y esferas de autonomía.

En América Latina aumentaron cada vez más los descontentos y las quejas frente al trato económicamente explotador y políticamente represivo de Estados Unidos. Desde 1956 comenzaron a caer dictadores derechistas. En Venezuela surgió, a raíz del derrocamiento de Pérez Jiménez, un interesante modelo de desarrollo democrático reformista en el marco del capitalismo, mientras en Cuba el proceso liberador se radicalizó hasta chocar frontalmente con la potencia norteamericana y verse impulsado a buscar la protección del campo soviético, adoptando un sistema marxista-leninista.

Norteamérica, durante los años de Kennedy, trató de combatir la influencia de la Revolución Cubana mediante iniciativas reformistas y una alianza con regímenes democráticos tales como el venezolano. El campo de la liberación latinoamericana se escindió entre fuerzas revolucionarias de orientación socialista y tendencias reformistas moderadas. Estas últimas coincidieron con Kennedy, y Latinoamérica se polarizó entre Washington y La Habana.

Sin embargo, entre esos dos polos, algunos países latinoamericanos lograron mantener una posición intermedia. Aparte de las democracias de la zona situada al sur de Amazonia, en la propia área neurálgica y convulsionada de Latinoamérica septentrional, México se destacó como un país que procuró mostrarse autónomo y casi neutral frente al conflicto existente.

Aunque Kennedy utilizó el arma del reformismo, no vaciló en recurrir a la represión violenta —apoyó a movimientos golpistas— en algunas circunstancias. Esa tendencia se acentuó bajo la presidencia norteamericana de su sucesor Lyndon B. Johnson, y quedó de manifiesto de la manera más brutal en el desembarco de los *marines* en Santo Domingo en 1965.

La estrategia cubana encaminada a provocar una sola y colosal revolución latinoamericana, a través de tácticas de lucha armada y de apoyo a corrientes socialistas dogmáticas, se saldó en un claro fracaso que fue reconocido por el propio Fidel Castro a fines de 1967. Con ello, quedó abierto el camino para una nueva etapa, de diversificación de las tendencias liberadoras latinoamericanas y de despolarización en escala hemisférica.

Tabla 9

Tabla cronológica IX

Año	Cuba-sistema interamericano	Otros países de Latinoamérica	Relaciones interamericanas
1959	Caída de Batista. Fase premarxista del régimen de Castro. Visita de Castro a EEUU. Nacionalizaciones. Amistad con Venezuela.	Gobierno de Betancourt en Venezuela. Desembarco antitrujillista en Santo Domingo. Dictadura de Duvalier.	V Reunión de Consulta, Santiago.
1960	Visita de Mikoyan a Cuba. Kruschev ofrece ayuda a Cuba. Nacionalización de las refinerías. CIA conspira contra Castro. Deterioro Cuba-Venezuela. Ruptura EEUU-Cuba.	Atentado contra Betancourt.	VI y VII Reuniones de Consulta en San José.
1961	Invasión a Playa Girón.	Alianza para el Progreso. Muerte de Trujillo. Quadros presidente de Brasil; le sucede Goulart. Velasco Ibarra, presidente del Ecuador.	Alianza para el Progreso.
1962	Cuba es expulsada del "Sistema Interamericano". Crisis de los cohetes.	Acción guerrillera en Venezuela, Guatemala y otros países. Arosemena, presidente del Ecuador; es derrocado.	VIII Reunión de Consulta de Punta del Este.
1963	Crisis por armas cubanas en Venezuela.	Acción guerrillera en Venezuela, Guatemala y otros países. Juan Bosch presidente de Santo Domingo; es derrocado.	
1964	Sanciones a Cuba.	Golpe militar en Brasil. Huelgas contra Jagan en Guayana Británica. Elecciones en Chile. Frei presidente.	IX Reunión de Consulta.
1965		Intervención norteamericana y guerra civil en Santo Domingo.	X Reunión de Consulta.
1966	I Conferencia Tricontinental.	Independencia de Guyana; acuerdo con Venezuela.	
1967	Disputa entre Cuba y el PCV. Muerte del "Che" Guevara		XI y XII Reuniones de Consulta.

De los años sesenta a los ochenta (1968-1980)

1968-1973: crisis del poder estadounidense y ascenso latinoamericano

A partir de 1968 la situación política mundial tendió a evolucionar hacia la distensión y hacia una creciente multipolaridad. Debido a un conjunto de circunstancias económicas, sociales y políticas, Estados Unidos fue perdiendo su posición de primera potencia incuestionada y, al mismo tiempo, también la Unión Soviética se encontró ante dificultades crecientes en su propio seno y en su esfera de influencia.

El mundo capitalista comenzó a entrar en una etapa de crisis económica a partir de 1968. Llegaba a su término la larga etapa expansiva que se había iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que tuvo por base la tercera revolución tecnológica (electrónica, cibernética, automatización, energía nuclear, conquista del espacio), el crecimiento vertiginoso de la industria automotriz, el relativo bajo costo de las materias primas, el estímulo armamentista y, sobre todo, la abundancia de mano de obra derivada del ingreso acelerado de la mujer al mercado del trabajo así como masivas migraciones desde el Tercer Mundo hacia los centros industriales.

Durante la década de los sesenta todos esos factores propicios a la expansión y a la prosperidad comenzaron a fallar. La tercera revolución tecnológica agotó sus posibilidades y se dejaron de crear nuevas ramas industriales. El precio de las materias primas comenzó a elevarse por efecto de una relativa escasez de las mismas. En lugar de una superabundancia de mano de obra se llegó al pleno empleo y, en consecuencia, a un incremento de las reivindicaciones obreras; esto, a su vez, produjo un descenso en la tasa de ganancias y, con ello, en la acumulación de capital. Para contrarrestar estas tendencias recesivas, los países industrializados dominantes estimularon la inflación y, por primera vez en la historia de la economía capitalista, apareció a partir de 1968 el fenómeno de la *stagflation*: estancamiento o recesión combinados con inflación.

La situación de crisis fundamental se hizo más evidente a raíz de la crisis coyuntural de 1973-1975. El despilfarro de energía, la acumulación de grandes reservas "estratégicas" de materias primas, y el efecto de ciertas medidas de los países exportadores de petróleo, causaron una situación de escasez energética y de fuerte elevación del precio de los combustibles. Ello se agregó a los factores ya existentes de tendencia recesionista e inflacionaria a la vez.

Dentro de este cuadro general de crisis del sistema capitalista, Estados Unidos sufrió problemas específicos que le hicieron perder la hegemonía indiscutible que durante largo tiempo había tenido. El despilfarro general de recursos económicos, el gasto público excesivo (sobre todo el militar), una balanza de pagos cada vez más deficitaria, todo ello, frente al creciente poderío económico de Europa occidental y Japón, obligó al presidente Nixon a decidir en 1971 el abandono de la paridad fija

entre el dólar y el oro. Se inició así la devaluación del dólar, que dejó de ser el signo monetario "imperial" para convertirse simplemente en una moneda entre muchas, flotante y vulnerable. Con ello llegó a su fin la jefatura económica de Estados Unidos sobre los demás países del sistema capitalista.

Al mismo tiempo, Norteamérica tuvo que admitir, en el plano político, que su poder tenía límites y que por primera vez en su historia había perdido una guerra. La heroica lucha del pueblo de Vietnam por su liberación nacional y social encontró apoyo parcial en el seno del pueblo de Estados Unidos: cada vez más la opinión pública norteamericana protestó contra una guerra que consideraba injusta e injustificada. A partir de1969, el presidente Nixon, a través de su brillante asesor Henry Kissinger, inició la búsqueda de un arreglo que permitiese a Estados Unidos una retirada "honorable" de Asia del Sureste. En primer término, se enunció la Doctrina Nixon sobre las responsabilidades compartidas: en lugar de ser gendarme del mundo, el imperio norteamericano delegaría el mantenimiento del orden a sus aliados de confianza en las diversas regiones del mundo. Al quedar claro —en el caso de Indochina— que el régimen antipopular y corrupto de Saigón era incapaz de desempeñar ese papel de guardián regional, Nixon y Kissinger se resignaron a negociar con los dirigentes de la revolución vietnamita. Para 1973 el acuerdo estaba listo. Los norteamericanos se retiraron de Vietnam y los patriotas revolucionarios izaron su pabellón rojo sobre Saigón.

Cabe señalar, sin embargo, que la gran retirada estratégica norteamericana no fue unilateral con respecto al equilibrio de fuerzas en el mundo. También la otra "superpotencia", la Unión Soviética, sufrió durante el mismo lapso grandes reveses que la obligaron a moderar el alcance de sus objetivos nacionales.

La URSS y los demás países socialistas fueron afectados por la crisis económica del mundo capitalista, debido a los vínculos de intercambio existentes, así como también por razones intrínsecas al propio sistema socialista-burocrático. El progreso dinámico que caracterizó la economía soviética a principios de 1960 se detuvo en 1970. Debido a deficiencias estructurales —excesivo centralismo del aparato económico; atraso en los campos de la cibernética y la "informática", con los consiguientes errores en la planificación; notable deficiencia de la agricultura por motivos naturales y sociales; bajo nivel de rendimiento del trabajo por razones ideológicas y psicológicas—, su ritmo de producción bajó, aparecieron alarmantes síntomas de escasez en algunos renglones, y quedó claro que Kruschev había sido excesivamente optimista cuando predijo que para la década 1970-1980 la URSS se adelantaría a Estados Unidos en todos los órdenes.

Aparte de sus fallas económicas, en 1968 la URSS fue objeto de una hostilidad cada vez mayor por parte de China y tuvo que desplegar grandes contingentes militares a lo largo de su extensa frontera con ese gran país asiático. Al mismo tiempo, tuvo problemas con los comunistas checoslovacos que, bajo la jefatura de Dubcek, Smrkowsky, Cisar, Swoboda y Husak, se enrumbaron por la vía del "socialismo con rostro humano" y por una mayor autonomía frente a la URSS y el Pacto de Varsovia. El ejemplo checoslovaco afectó a los países vecinos, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, e incluso a la misma URSS: en Ucrania estallaron brotes de regionalismo combinados con el llamamiento a la democratización del socialismo. La Yugoslavia del mariscal Tito miró con buenos ojos —y alentó— ese proceso de creciente descentralización del campo socialista. Así

mismo, el gobierno de Ceaucescu en Rumania —autoritario hacia dentro pero autonomista frente a la URSS— dio su apoyo moral a las fuerzas centrífugas. En Moscú, las mentes conservadoras o simplistas veían en el proceso centrífugo nada menos que la desintegración del campo socialista y su posible infiltración por los agentes del imperialismo. De allí que propusieran —e impusieron— la tesis de la intervención armada en Checoslovaquia. La repugnante acción se realizó en agosto de 1968, y tuvo efectos prolongados, con tensiones y desconfianzas en el campo comunista. Año tras año surgieron en la URSS y en los demás países miembros del Pacto de Varsovia nuevos síntomas de descontento y del deseo de que su socialismo se democratizara y otorgara plena autonomía a cada una de las naciones y nacionalidades que participaban en él. Más allá de la superestructura política, el movimiento hacia la democracia socialista y la diversidad nacional provenían de los factores fundamentales (de las "fuerzas profundas" del sistema), cuyas contradicciones propias, independientes de la voluntad de tal o cual individuo, imponían la lucha por cambios que humanizaran el socialismo y, al humanizarlo, lo hicieran más eficaz para resolver los problemas del mundo contemporáneo.

Agobiados por sus dificultades económicas, sociales y políticas, así como por el temor de una alianza chino-norteamericana en su contra, los dirigentes de Moscú siguieron frente a Estados Unidos una línea de distensión, de coexistencia pacífica y de creciente intercambio y cooperación. Si Estados Unidos dejó de ser maestro omnímodo del mundo occidental con sus dependencias neocoloniales, la URSS a su vez dejó de ser la cabeza indiscutida de los países gobernados por partidos comunistas. Más aún: con la posición antisoviética de los chinos, el movimiento comunista quedó dividido por un antagonismo profundo.

Tanto Brezhnev como Henry Kissinger entendieron que había que actuar con realismo, con sentido práctico más que con esquemas doctrinarios preconcebidos. Aparte del realismo, su comportamiento conllevó la autolimitación del poder y de las ambiciones de su potencia respectiva. Ir más allá de ciertos objetivos limitados significaría agotar sus fuerzas, debilitarse y, además, poner en peligro la paz mundial y la perspectiva de una distensión mutuamente beneficiosa: el mercado soviético resultaba de enorme interés para los capitalistas norteamericanos; a su vez, la cooperación tecnológica y comercial norteamericana sería importante para permitir a los soviéticos la superación de su etapa de dificultades.

La relativa disminución del poder de las dos potencias máximas permitió, desde 1968, el fortalecimiento de otros centros de decisión. Japón incrementó su importancia de gran potencia y comenzó a superar la inhibición política que le había sido propia desde 1945. Europa occidental se tornó más independiente y más dinámica, no sólo en lo económico —Mercado Común— sino también en la adopción de posiciones políticas a veces discrepantes de la posición de Estados Unidos. Ya se mencionó la política independiente, y casi agresiva frente a la URSS, de la República Popular China que, por obra y gracia de los norteamericanos, salió de su aislamiento diplomático e ingresó a las Naciones Unidas.

Por último, el paso del bipolarismo rígido a un bipolarismo matizado y acompañado de elementos de balanza de poder, hizo posible un mayor ascenso del Tercer Mundo —o por lo menos de partes de él— como otra potencia autónoma en el juego político internacional. El Grupo de los 77 (países subdesarrollados en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) cobró

nuevas fuerzas. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), integrada por Venezuela y por un conjunto de países árabes, persas, africanos e indonesios, aumentó su poder y se transformó gradualmente en vanguardia de las naciones subdesarrolladas o neocoloniales en su lucha por la justicia económica internacional. El movimiento de los países no alineados, que de 1965 a 1969 parecía estar en crisis, experimentó un nuevo auge.

Es obvio que el nuevo ambiente mundial tenía que repercutir sobre América Latina. En este continente, como en los demás, nuevas fuerzas inconformes se hicieron sentir. El nacionalismo rebelde, dirigido contra la hegemonía de Estados Unidos, se combinó en diversos casos con los intentos de llevar a las clases pobres hacia una mayor participación en la riqueza y en la toma de las decisiones, y de reducir el poder y los privilegios de las clases dominantes tradicionales.

Contribuyó grandemente al ascenso de esas fuerzas nuevas el hecho de que Cuba, a partir de 1968, definió una nueva política, de táctica moderada frente a los regímenes conservadores del continente. Como ya señalamos antes, el apoyo cubano a movimientos guerrilleros no dio resultados revolucionarios positivos. Ese apoyo aisló a Cuba y unificó a toda América —incluso a fuerzas progresistas que vacilaban entre el reformismo y la revolución— contra el régimen castrista. La línea guerrillera en muchos casos provocó una represión cada vez más dura, desacreditó al movimiento revolucionario ante los ojos del pueblo y, sobre todo, cerró vías de acción socialista o comunista legal, aislando y debilitando a los movimientos de izquierda. Al mismo tiempo, dificultó los intentos de la Unión Soviética, protectora de Cuba, de acercarse a las burguesías nacionales latinoamericanas por la vía del comercio y la cultura.

Fidel Castro y sus compañeros, con la caída del Che Guevara en Bolivia a fines de 1967, probablemente se convencieron del error de tratar de convertir los Andes en Sierra Maestra. Aquella muerte heroica pero solitaria y quijotesca marcó el fin de la epopeya guerrillera latinoamericana de la década de los sesenta. Los soviéticos ya llevaban algún tiempo tratando de convencer a Castro de que era deseable una línea más flexible: esta vez el dirigente cubano acogió esa idea.

En 1968 el gobierno cubano emitió sus primeros pronunciamientos sobre la diversidad de vías que podían conducir a la revolución en América Latina. Cuba debía concentrar sus esfuerzos principalmente en la construcción de una economía socialista en su propio suelo; su ejemplo tendría mayor efecto revolucionario, a mediano o largo plazo, que una embestida insurreccional. Cada país latinoamericano tenía sus propias características, y la acción progresista o revolucionaria de los pueblos variaría de caso en caso.

En los últimos meses de 1968 América Latina fue sorprendida por los acontecimientos que ocurrieron en Perú. El presidente Fernando Belaúnde Terry, acusado de negociaciones con sectores petroleros norteamericanos contrarias al interés nacional, fue derrocado por un golpe militar. Los oficiales del nuevo gobierno castrense, presidido por el general Juan Velasco Alvarado, proclamaron su voluntad de realizar una profunda revolución social en beneficio de las mayorías populares desheredadas, de acuerdo con el legado histórico de Túpac Amaru. En seguida, pasaron de las palabras a los actos, decretaron la nacionalización de la Gulf, la empresa responsable de las dudosas negociaciones que se habían realizado. Luego, de un plumazo rompieron la columna vertebral del latifundismo, expropian-

do las haciendas de la costa. Más adelante, la reforma agraria se extendió a la sierra. Los campesinos, en lugar de recibir parcelas individuales —fuente, en tantos países, de estancamiento, de minifundismo y de latifundismo renovado— fueron organizados en asociaciones para labrar la tierra en común.

Luego le tocó el turno a la industria y al conjunto de la estructura económica del país. La participación obrera en la gestión de las empresas y, en muchos casos, en una forma de autogestión, surgió por la creación de las comunidades industriales. El Estado inició una planificación nacionalista del desarrollo. Se comenzó a controlar el capital extranjero, alejándolo de los grandes recursos y de las industrias básicas, obligándolo a asociarse con capital público o privado peruano, así como a someterse a la supervisión del Estado.

El régimen peruano extendió su soberanía marítima en las costas hasta la distancia de 200 millas y se enfrentó a las flotas pesqueras foráneas —sobre todo norteamericanas— que hasta aquel momento habían venido arrasando con los recursos pesqueros del país.

En su política internacional, el régimen revolucionario peruano actuó en conformidad con los criterios del Tercer Mundo o de los países no alineados. Se solidarizó con Panamá en la lucha por la recuperación del Canal y apoyó toda iniciativa latinoamericana encaminada a dar a este continente una mayor independencia de Estados Unidos. En toda su actuación, interna y externa, el estamento militar peruano demostró decididamente la falsedad del análisis tradicional que lo consideraba como "oligárquico". Demostró, por el contrario, los vínculos sociales, personales e ideológicos que tenían con las capas medias asalariadas e intelectuales, proclives al nacionalismo rebelde y a la protesta social, en alianza con las clases trabajadoras del campo y la ciudad. Sin embargo, el proceso tuvo una falla fundamental: las decisiones siguieron tomándose en forma vertical, desde arriba, sin participación popular efectiva y dinámica, no obstante los intentos de fomentar la participación a través del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS).

Poco después de la toma del poder por los militares peruanos, se produjo un golpe militar en Panamá, dirigido por el general Omar Torrijos. Vinculado, como sus colegas peruanos, a las capas medias y comprensivo ante los anhelos del pueblo, Torrijos puso fin al poder político de ciertas familias oligárquicas que hasta entonces habían regido los destinos de Panamá. Sin embargo, no afectó sus intereses económicos ni los de las empresas transnacionales. Tampoco tomó medidas importantes para redistribuir el ingreso, de tal modo que no se le puede comparar, en cuanto al impacto transformador, con los militares de Perú.

Aun así, en lo referente a la política exterior, Torrijos produjo un cambio importante. Se unió a Perú y, posteriormente, a Bolivia y Chile, en una actividad de denuncia, en el seno de los organismos internacionales americanos, del excesivo poder imperial de Estados Unidos, y en favor del desarrollo independiente de los países de Latinoamérica. Intensificó grandemente la presión nacionalista para obtener la revisión del tratado sobre el Canal y recuperar para su país la zona que una oligarquía antinacional entregara en 1903. Obligó a Estados Unidos a negociar en serio y a contemplar la posibilidad de modificaciones sustanciales del *status* de la vía interoceánica.

En el año siguiente, 1969, se inició un proceso de cambio hacia el nacionalismo antiimperialista en Bolivia. El presidente René Barrientos, derechista y amigo de

Estados Unidos, había perecido en un accidente, sucediéndole en el mando un civil moderado, Siles Salinas. Éste fue derrocado en 1969 por el general Ovando, a quien hasta ese momento se había considerado como uno de los más represivos entre los altos oficiales de Bolivia. Ovando había comandado las fuerzas antiguerrilleras del país y se le consideró directamente responsable del fusilamiento del Che Guevara. Fue grande la sorpresa de los observadores cuando, desde el poder, el general Ovando proclamó principios nacionalistas de izquierda, parecidos a los que se aplicaban en el vecino Perú. Estatizó empresas extranjeras y dictó diversas medidas de nacionalismo económico. Llamó a colaborar en su gobierno a hombres de ideología revolucionaria y alineó a Bolivia, dentro del concierto latinoamericano, con los países de actitud rebelde frente a Estados Unidos. Entre Bolivia y Perú se efectuó un acercamiento basado en la similitud de los dos regímenes en cuanto a su orientación política general.

Al cabo de un año, en 1970, Ovando se vio obligado, por la presión de los sectores conservadores y de oficiales de derecha, a dejar el poder. Se estableció una junta militar antiprogresista. Pero casi en seguida el general J.J. Torres, nacionalista de izquierda, combatió a los golpistas y tomó el poder. Bajo el gobierno de Torres se acentuó más el viraje hacia la izquierda que Ovando había iniciado con vacilaciones. Se multiplicaron las nacionalizaciones y las medidas de intervención para regular el capital extranjero; se radicalizó la política exterior, basada en la solidaridad con todas las fuerzas inconformes del continente, y se permitió el funcionamiento de una asamblea popular semioficial, compuesta de representantes de todos los partidos de izquierda, de orientación socialista, comunista, trotskista, maoísta o nacional-revolucionaria. El régimen de izquierda nacionalista de Torres duró hasta la segunda mitad de 1971, cuando fue derrocado por la derecha dirigida por el general Hugo Banzer.

El más profundo proceso de cambio hacia la liberación nacional y un comienzo de socialización fue el que se realizó en la República de Chile, a raíz del triunfo electoral en 1970 de Salvador Allende, candidato del movimiento de Unidad Popular, integrado por los partidos Socialista, Comunista, Radical, MAPU (desprendimiento izquierdista de la democracia cristiana), y otros grupos menores. Desde 1969 se venía gestando un acuerdo de unidad popular entre todas las organizaciones políticas de izquierda en Chile: unidad hecha posible por el nuevo clima mundial de despolarización y de auge de nuevas fuerzas inconformes. El ascenso de Allende a la presidencia de Chile tuvo un gran impacto en la opinión pública de América y el mundo. La estatización de la industria del cobre y de otras grandes empresas, la creciente primacía del sector público en la vida económica, el indudable ascenso del proletariado a la toma de decisiones, las medidas parciales pero eficaces de redistribución del ingreso, la política exterior de solidaridad antiimperialista, y la clara orientación general hacia un futuro socialista, hicieron de Chile un foco revolucionario de gran significación para todo el continente, estímulo y ejemplo para trabajadores, intelectuales rebeldes y patriotas inconformes en toda América Latina. Pese a la constante oposición —vehemente y a ratos subversiva— de la derecha, el gobierno de Allende tuvo éxito y mantuvo su popularidad. Crecientes dificultades económicas, debidas a falta de crédito exterior y sabotaje capitalista, no disuadieron a las clases trabajadoras chilenas de su fe en el proceso de transformación que dirigía la Unidad Popular.

La corriente nacionalista de izquierda se extendió también a la República Argentina. Los militares que habían gobernado el gran país del sur durante la mayor parte de dos lustros, tratando de contener la constante presión reivindicativa de las clases populares que seguían creyendo en el peronismo, decidieron devolver el poder a los civiles y permitir el retorno de Juan Domingo Perón. En los primeros meses de 1973 se celebraron elecciones libres y triunfó por fuerte mayoría Héctor Cámpora, candidato del justicialismo. En el seno de ese movimiento se había fortalecido particularmente su ala izquierda, integrada por elementos jóvenes que tomaban en serio el término de "socialismo nacional" y utilizaban el método del materialismo histórico para analizar la sociedad argentina y esbozar soluciones a sus problemas. El gobierno de Cámpora adoptó una actitud amistosa hacia el de Allende; durante algunos meses el Cono Sur pareció dominado por la izquierda y por actitudes nacionalistas opuestas al poder hegemónico de Estados Unidos.

También en Uruguay se manifestó durante los años 1968-1973 un auge de las fuerzas populares. La organización revolucionaria clandestina de Los Tupamaros actuó en forma violenta, encarnando la protesta más extrema contra un sistema de capitalismo dependiente, con instituciones reformistas que ya no satisfacían, en vista de la situación de estancamiento y deterioro económicos existente desde hacía años. Por otra parte, en el plano legal se constituyó en 1972 un Frente Amplio de organizaciones políticas partidarias de la liberación económica nacional y del cambio social igualitario. Estas organizaciones incluían a socialcristianos progresistas, liberales de izquierda, socialistas y comunistas. El general retirado Líber Seregni fue candidato presidencial del Frente Amplio y obtuvo una votación muy considerable en las elecciones generales de 1971.

En Venezuela las elecciones de 1968 dieron el triunfo al Partido Socialcristiano COPEI y su candidato presidencial, Rafael Caldera. La victoria copeyana se debió a una división en el seno del partido Acción Democrática (AD), gobernante en el período anterior. AD, inicialmente nacional-revolucionaria y con inclinación hacia el socialismo democrático, desde 1960 en adelante y por diversas circunstancias históricas, había sufrido un proceso de relativa derechización (inicialmente táctica, pero luego también estratégica y esencial). Sobre todo el hecho de haber llegado al poder cuando estaba intacto el aparato económico y militar en el cual se había apoyado antes la dictadura de Pérez Jiménez, obligó a Rómulo Betancourt y a su sucesor Raúl Leoni a hacer importantes concesiones a la derecha y a limitarse a la tarea de la democratización política sin afectar los privilegios sociales y económicos. La secesión de los marxistas del MIR en 1960 y la de los nacional-revolucionarios radicales del llamado Grupo ARS en 1962, así como la ofensiva guerrillera de extrema izquierda contra los gobiernos de Betancourt y de Leoni, habían intensificado la tendencia de AD hacia posiciones más moderadas y alianzas con la derecha democrática. El sector de AD más vinculado a las clases populares y más leal a los viejos principios revolucionarios del partido luchó contra las claudicaciones y exigió el planteamiento de avances hacia la democracia económica y social. Bajo la jefatura de Luis Beltrán Prieto Figueroa y de Jesús Paz Galarraga, el sector popular entró en conflicto frontal con la tendencia más conservadora, y fue expulsado de AD en 1967, pasando a la oposición bajo el nombre de Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).

COPEI, por su parte, había nacido como un partido conservador íntimamente

vinculado a la burguesía tradicionalista. Sus fundadores se iniciaron en la lucha política en 1936 como partidarios de Franco y del Estado corporativo. Pero desde 1946 evolucionaron hacia posiciones democráticas, bajo la influencia del pensamiento democratacristiano europeo de la época de la segunda posguerra. Más adelante, la dictadura perezjimenista absorbió sus elementos más recalcitrantes, y el avance hacia actitudes progresistas se acentuó durante los años 1956-1958. Para 1968, cuando llegó al poder por efecto de la división AD-MEP, el partido COPEI poseía en su seno, además de influencias tradicionalistas, otras de carácter popular y orientadas del centro hacia la izquierda.

Atento ante los reclamos de los sectores populares y los sectores burgueses nacionalistas, y consciente de los "vientos nuevos" que soplaban por el mundo, el presidente Caldera y su canciller Arístides Calvani resultaron relativamente audaces en materia de política exterior. Proclamaron la tesis de la "justicia social internacional" (solidaridad del Tercer Mundo para buscar un nuevo orden internacional de menos desigualdad entre el Norte y el Sur), y la del "pluralismo ideológico" (coexistencia pacífica con Cuba). Denunciaron el tratado comercial con Estados Unidos, trataron de reorientar el comercio exterior parcialmente hacia Europa y Latinoamérica, diversificaron las fuentes de adquisición de armas, promovieron la integración hispanoamericana para hacer contrapeso al poder subimperial de Brasil, realizaron una activa política en el Caribe y movilizaron a los países de esa zona en defensa de sus recursos marítimos por la tesis del "mar patrimonial" de 200 millas. Descongelaron en la práctica las relaciones con Cuba, mejoraron y normalizaron la convivencia con la vecina Guyana de gobierno izquierdizante; se opusieron a Estados Unidos en múltiples aspectos. Establecieron relaciones con la URSS y otros países socialistas. Internamente, el gobierno de Caldera puso fin a las operaciones antiguerrilleras y, mediante una política de "pacificación" basada en la amnistía y el indulto, acabó con la violencia política en el país. De ese modo, en forma moderada pero decidida, Caldera logró que Venezuela participara en el movimiento latinoamericano que cuestionaba por lo menos parcialmente la hegemonía estadounidense. Tendencias nacionalistas existentes en el seno de la burguesía se expresaron a través de él.

En el plano de las relaciones interamericanas multilaterales, el auge nacional-reivindicativo del continente latinoamericano se manifestó en varias ocasiones con creciente fuerza hasta comienzos de 1973.

Antes de 1968 la mayoría de los organismos internacionales promovidos por países latinoamericanos había tenido poca efectividad para lograr una mejor redistribución del poder y la riqueza entre el norte y el sur. Se había tendido a servir en última instancia a los intereses imperiales para obtener una mayor y mejor penetración en las regiones dependientes. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creado en 1959 luego de una inicial oposición norteamericana, pronto se convirtió en dócil instrumento de la potencia de mayor capacidad financiera. El Mercado Común Centroamericano, creado en 1960, desde sus comienzos benefició a las compañías transnacionales, que obtuvieron un campo más amplio, mejor integrado, y libre de barreras internas; para sus inversiones y su dominación. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), fundada en el mismo año de 1960 y concebida teóricamente como un instrumento de liberación para las naciones situadas al sur del Río Bravo, mostró su debilidad y sus contradicciones

paralizantes y favoreció —en lugar de restringir— la participación capitalista norteamericana en sectores importantes de la vida económica de América Latina.

Desde 1968 en adelante el cuadro cambió. La coordinación de los planteamientos económicos latinoamericanos adquirió creciente importancia a través de la CECLA (Comisión Económica de Coordinación Latinoamericana). Después de conversaciones previas, los cancilleres latinoamericanos se reunieron en mayo de 1969 en Viña del Mar, Chile. Emitieron una declaración conocida como "Consenso de Viña del Mar", en la cual plantearon una enérgica revisión de las relaciones económicas Norte-Sur. Culpaban a Estados Unidos de establecer y mantener sus mecanismos de explotación y ventajismo, y de impedir un verdadero desarrollo autónomo de los países de Latinoamérica. Pidieron la adopción de medidas tendientes a elevar y estabilizar los precios de los productos básicos, así como a controlar los de los artículos manufacturados; a permitir un efectivo dominio de los latinoamericanos sobre sus recursos; a asegurar la divulgación tecnológica en beneficio de los países subdesarrollados del hemisferio; a regular las inversiones extranjeras y los fletes; a lograr preferencias no recíprocas por parte de la potencia norteamericana hacia sus vecinos meridionales, y a garantizar el acceso de productos no tradicionales del Sur a los mercados del Norte. Por primera vez, toda Latinoamérica —los gobiernos conservadores o timoratos alentados y arrastrados por los más radicales y audaces— adoptó una postura unánime, fuertemente reivindicativa e impugnadora ante Estados Unidos en cuestiones económicas fundamentales.

En el mismo año de 1969 fue suscrito el Acuerdo de Cartagena entre los países andinos (Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y Venezuela a partir de 1972), creándose un mecanismo de integración subregional que, a diferencia de otros existentes, conllevaba la intención de regular y controlar los capitales extranjeros en la zona, y promover un desarrollo independiente bajo la supervisión del poder público de los Estados miembros.

Por su parte, el Acuerdo de la Cuenca del Plata, firmado en el mismo año por Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay, también contenía cláusulas favorables a la lucha por un desarrollo independiente frente al gran país norteamericano.

En 1970 se efectuaron diversas negociaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos; en ellas los países signatarios del Consenso de Viña del Mar pretendieron que los norteamericanos aceptaran algunos de sus planteamientos más importantes. Las conversaciones se efectuaron en diversas etapas durante los años 1971, 1972 y 1973, mostrando los representantes del norte una indignante tendencia a eludir la discusión de los puntos importantes. Al confiar su representación a "técnicos" y no a políticos, Estados Unidos obstaculizó y paralizó el diálogo económico con América Latina y dio una inconfundible imagen de egoísmo y de mala voluntad. Ni en lo tocante a las preferencias, ni con respecto a los términos de intercambio y el problema de la tecnología, los negociadores norteamericanos se mostraron dispuestos a la menor concesión sustancial; por ello, en América Latina creció el sentimiento de indignación y de frustración incluso entre sectores burgueses moderados. Esto quedó de manifiesto en las asambleas anuales que la OEA comenzó a celebrar a partir de 1971. Por otra parte, desde 1970 funcionó la Comisión Económica de Coordinación y Negociación (CECON), organismo informal para el diálogo Norte-Sur en el seno del hemisferio occidental.

La III Asamblea General de la OEA, celebrada en 1973, fue particularmente agitada. Poco antes, Estados Unidos había sido colocado en el banquillo de los acusados en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada en Panamá. Ante los ojos del mundo, los gobiernos latinoamericanos radicales o semi-radicales —Chile, Perú y, sobre todo, Panamá— habían exigido la descolonización de la Zona del Canal y el cese de presiones y agresiones económicas norteamericanas contra los países que adoptaran medidas nacionalistas. Cuando apenas se recuperaba de esa humillante experiencia la potencia norteamericana fue objeto de renovadas críticas y ataques en la mencionada asamblea de la OEA. Ello coincidía con una nueva victoria de la Unidad Popular chilena en elecciones municipales y parlamentarias, y con el ascenso de Cámpora y las masas justicialistas en Argentina.

El imperio norteamericano parecía tambalearse. Pero reaccionó a partir de ese momento y los factores hemisféricos conservadores pasaron a la contraofensiva.

1973-1976: retroceso represivo parcial

El año 1973 marcó una agravación de la crisis económica a nivel mundial. La guerra del Medio Oriente, en octubre, provocó por parte de los países árabes una reacción hostil hacia un Occidente que les parecía demasiado complaciente hacia su enemigo, el Estado de Israel. Los países árabes miembros de la OPEP decidieron aplicar al Occidente un embargo parcial de sus suministros petroleros, como medio de presión contra la política de apoyo a Israel. El embargo redujo el abastecimiento mundial de petróleo a principios de 1974, y contribuyó a acentuar una escasez energética ya existente desde antes del conflicto de octubre. Desde hacía varios años el consumo energético de los centros industrializados había crecido más rápidamente que el suministro de petróleo. Ahora, el embargo árabe intensificaba y dramatizaba una situación ya existente, provocando alarma y pánico, reacciones éstas que fueron estimuladas por las empresas transnacionales petroleras que vieron posibilidades de incrementar enormemente sus ganancias. Aunque Occidente culpó a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por la crisis energética, las empresas petroleras tuvieron quizás más responsabilidad, pues almacenaron grandes cantidades de combustible para aumentar la escasez y orquestaron las manifestaciones de alarma. De golpe, entre principios y mediados de 1974, los precios del petróleo se triplicaron, con lo cual se agregó un nuevo factor negativo a la coyuntura económica de los centros industriales dominantes y, al mismo tiempo, se operó una significativa transferencia de poder económico desde los centros industrializados hacia la periferia tercermundista productora de materia prima energética.

Además de la llamada crisis energética, Estados Unidos quedó afectado desde 1973 por el escándalo de Watergate, considerado por algunos observadores como la más grave crisis del sistema político norteamericano desde la Guerra de Secesión. La sacrosanta institución presidencial se vio cuestionada y golpeada. Junto con las crecientes dificultades económicas, este acontecimiento político sacudió a las capas medias mayoritarias de la población norteamericana. Aunque la primera reacción ante Watergate —de 1973 a 1976— fue de autocrítica colectiva y de reacciones

"liberales" (no tenemos derecho a criticar a otros mientras no pongamos en orden nuestra propia casa), posteriormente esos mismos factores causaron en la población estadounidense las reacciones "duras" y derechistas que se habrían de poner plenamente de manifiesto durante el proceso electoral de 1980.

Con respecto a sus relaciones con Latinoamérica, Estados Unidos había operado un cambio hacia la dureza y la represión, aun antes de presentarse la crisis energética y de estallar el escándalo de Watergate. A partir de mediados del año1973, los estrategas norteamericanos mostraron no aceptar más cuestionamientos y críticas de fondo por parte de las naciones latinoamericanas. Desde ese momento se manifestó el fortalecimiento de las influencias conservadoras y militaristas, apoyadas por el Pentágono y por el gobierno brasileño, en América del Sur.

En Uruguay, desde 1972 los militares derechistas —muy vinculados a sus colegas brasileños y amistosos hacia Norteamérica— rodeaban al presidente Bordaberry, un conservador surgido de la clase de los grandes estancieros y capitalistas. Bajo el pretexto de reprimir la violencia tupamara, paulatinamente llevaron al presidente a suspender las garantías constitucionales y gobernar por decreto con medidas de emergencia. Una represión cada vez más fuerte afectó a las fuerzas de oposición legales, que habían apoyado a Líber Seregni en las elecciones de 1971. En el mes de junio de 1973 se dio el paso definitivo hacia un régimen autoritario. El presidente Bordaberry, en unión de los militares, dio un "autogolpe", asumiendo poderes dictatoriales y disolviendo el parlamento, el movimiento sindical y los partidos políticos de izquierda. Las universidades fueron intervenidas y "depuradas" de elementos "marxistas". Un terror policial y militar de inesperada brutalidad se abatió sobre el país.

En Argentina el presidente Cámpora renunció en beneficio de Juan Domingo Perón, quien fue electo primer mandatario de la nación en comicios especiales y asumió el poder de inmediato. Desde el momento de su retorno, el viejo caudillo manifestó su clara tendencia a favor del ala derecha y del grupo centrista del justicialismo, y en contra de los elementos izquierdistas de ese movimiento. Si bajo Cámpora la izquierda estuvo en pleno ascenso y a punto de dominar el país, Perón en cambio detuvo ese proceso y enrumbó a la nación hacia una política interna moderada y hacia la reconciliación con los grandes intereses económicos transnacionales. Bajo el gobierno de su viuda, María Estela (Isabel) de Perón, esa tendencia se acentuaría aún más, los peronistas de izquierda pasarían a la oposición más violenta, y el país se hundiría en una violencia y un caos económico de los cuales saldría vencedora la derecha a través de un nuevo ascenso militar.

Pero el golpe más grave que sufrieron en Latinoamérica las fuerzas democráticas y revolucionarias lo constituyó el derrocamiento y la muerte del presidente Salvador Allende en 1973, y la implantación en Chile de un régimen ultrarreaccionario, cruelmente represivo y esencialmente fascista. Desde el mes de mayo de 1973 las fuerzas conservadoras internas y externas intensificaron su acción contra el gobierno de la Unidad Popular. En escala mundial, las empresas transnacionales del cobre afectadas por la estatización realizaron una campaña de boicot, a través de medidas judiciales, para impedir el desembarco y la venta del producto chileno. Los bancos negaban a Allende los créditos que Chile necesitaba. Internamente, la extrema derecha nacional apoyada y asesorada por el servicio secreto

norteamericano de la CIA organizó grandes movimientos de protesta de amas de casa de la clase media, y huelgas de comerciantes y transportistas medianos y pequeños. La Unidad Popular, que en principio debía representar una alianza del proletariado con las capas medias contra el gran capital nacional y foráneo, no pudo impedir que algunos de sus elementos más radicales confundieran las etapas históricas y se unieran a la ultraizquierda en iniciativas de tipo "socialista" dirigidas no sólo contra la grande sino también contra la pequeña propiedad privada. De este modo, los errores de algunos integrantes de la Unidad Popular coadyuvaron a tornar las capas medias en contra del proceso de transformación del país, y a hacerlas receptivas a la propaganda de la derecha. Los militares se dejaron llevar por la corriente antisocialista manipulada por la reacción interna y externa. En el mes de julio hubo un primer intento golpista que fracasó. El zarpazo definitivo —producto de una enorme campaña conspirativa muy bien orquestada en escala hemisférica y hasta mundial— se produjo en el mes de septiembre. Salvador Allende murió a manos de los contrarrevolucionarios, y pasó a formar parte del patrimonio espiritual permanente de quienes luchan por la libertad y dignidad del hombre. Con la supresión del proceso democrático y del cambio social en Chile, Latinoamérica perdió el más importante baluarte de su lucha de liberación.

Bajo la presidencia de Nixon y Ford, con su asesor y canciller Henry Kissinger, Estados Unidos siguió una política de alianza con el régimen militar de Brasil. Desde el golpe de 1964, los dictadores castrenses brasileños habían seguido una política de expansión, en nombre de la defensa de "principios occidentales". En la infraestructura económica de esa política encontramos las ambiciones comerciales y financieras de la gran burguesía brasileña, deseosa de captar mercados externos. Desde 1964 el modelo brasileño de desarrollo fue estrictamente capitalista y conforme con el principio "Primero preparar la torta, y después repartirla". Un gran esfuerzo por acelerar el crecimiento productivo, bajo dirección y control de grandes empresas privadas, subsidiadas por el Estado, estuvo acompañado de una política de austeridad y de sacrificios extremos para las grandes mayorías trabajadoras. Debido a la baja capacidad de consumo popular, la industrialización estuvo orientada en gran medida hacia la exportación. Además de estos intereses económicos capitalistas, las ambiciones de poder de la propia casta militar gobernante fueron un factor determinante en dicha política de expansión. La doctrina geopolítica del general Golbery de Couto e Silva jugó un gran papel. Según Couto e Silva, Brasil posee una vasta área de intereses geoestratégicos: Sudamérica, el Océano Atlántico, Portugal y Africa Occidental. En Sudamérica, particularmente, Brasil como "potencia satisfecha" debía velar por el mantenimiento y la estabilidad de las estructuras, oponiéndose sistemáticamente a cambios de estructura social o a modificaciones en la balanza de poder internacional. Del mismo modo, su misión era la de defender, junto con sus "naturales" aliados occidentales, el *statu quo* en el ámbito atlántico y africano. A estas consideraciones geopolíticas se añadió en cierto momento la doctrina semiclandestina de las "fronteras ideológicas": la noción de que, en una época de división del mundo entre "occidente cristiano" y "comunismo ateo", y de manipulación de la infiltración y la subversión como maneras de agredir, las fronteras entre los pueblos ya no son territoriales sino ideológicas, justificándose la contrainfiltración para golpear al enemigo infiltrado en un país vecino.

El fanático "occidentalismo" de los militares brasileños agradó al Pentágono

tanto como su modelo de desarrollo capitalista (con puertas abiertas a la inversión foránea), y complació a las empresas transnacionales dirigidas por grupos norteamericanos. De allí que Nixon dijera en una oportunidad que Brasil podía ser considerado como el modelo para el resto de Latinoamérica. Encuestas realizadas entre hombres de negocios mostraron que éstos preferían Brasil a otros países de la región; en consecuencia, el monto de las inversiones estadounidenses en la economía brasileña fue desproporcionadamente elevado.

Frente a la poderosa constelación de dictaduras del Cono Sur y de la alianza norteamericano-brasileña, existió un grupo de países democráticos con aspiración a una creciente autonomía nacional frente a Estados Unidos. Dichos países estaban localizados en la parte septentrional de América Latina. México y Venezuela, así como Panamá y Costa Rica, Colombia, Ecuador y las Antillas angloparlantes, figuraron en este grupo de resistencia al retroceso represivo continental.

En México el presidente Luis Echeverría Alvarez (1971-1977) reflejó en gran medida las corrientes populares y progresistas representadas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al lado de otras vertientes más conservadoras. Aunque a Echeverría se le criticó por su administración financiera deficitaria y presuntamente despilfarradora, no cabe duda de que mostró gran sensibilidad social y que hizo resurgir el espíritu socialreformista de la Revolución Mexicana. Reinició la reforma agraria, fortaleció organizaciones campesinas y obreras, y nacionalizó algunas importantes empresas. Su política exterior estuvo orientada fundamentalmente hacia el estrechamiento de vínculos entre México y las fuerzas rebeldes y reivindicadoras del Tercer Mundo. Con ese fin viajó extensamente por los países de Asia y Africa. En América misma se hizo vocero de los planteamientos críticos con respecto a la política de Estados Unidos, y estrechó sus relaciones amistosas con Fidel Castro y el gobierno cubano. Para compensar esas audacias, mantuvo una línea de puertas abiertas a las inversiones norteamericanas en México, en los ámbitos no reservados al Estado, aunque trató de alentar la sustitución de capitales extranjeros por inversiones de origen autóctono.

En Venezuela, el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979) mostró características similares en algunos aspectos a las del gobierno mexicano de Echeverría. Aunque el partido Acción Democrática, con Carlos Andrés Pérez como candidato presidencial, había realizado una campaña "derechista" contra el gobierno de Caldera, acusándolo de practicar un "nacionalismo exagerado" y de ser demasiado duro hacia Estados Unidos y demasiado blando ante Cuba, una vez en el poder el nuevo presidente dio un viraje hacia la izquierda. Carlos Andrés Pérez dictó una serie de decretos que, sin cambiar las estructuras, tendían a mejorar la suerte de las clases de menores ingresos. Puso en ejecución una ambiciosa política de desarrollo tecnológico, industrial y agropecuario basada en los enormes ingresos fiscales, derivados de la triplicación de los precios petroleros en 1974. Mediante grandes gastos deficitarios, que causaron un considerable endeudamiento nacional, creó una situación de pleno empleo. Envió al exterior a miles de jóvenes para realizar estudios de especialización. Nacionalizó las industrias del hierro y del petróleo. Esas nacionalizaciones fueron efectuadas con cautela, negociándolas con las empresas afectadas que, financieramente, quedaron satisfechas, ya que se les pagó generosas indemnizaciones, además de dejar en sus manos, por contrato, gran parte del transporte y mercadeo tanto del petróleo como del hierro venezolanos, así

como la prestación de servicios tecnológicos. Pero, pese a todo ello, el concepto de "nacionalización" siempre causa cierto rechazo en los centros capitalistas industrializados, y no cabe duda de que, por esa razón —por la "carga ideológica" de las nacionalizaciones venezolanas—, deben ser consideradas, pese a todo, como medidas de cambio estructural y victorias del Tercer Mundo en su enfrentamiento global a los centros dominantes.

Entre los años 1974 y 1977 los gobiernos de Venezuela y de México, cada uno por su lado y por momentos unidos, tomaron iniciativas para identificar a América Latina en mayor grado con el Tercer Mundo. Carlos Andrés Pérez prosiguió e intensificó la política de su predecesor, de "presencia" venezolana en el Caribe, sobre todo en el Caribe oriental, a través de programas de cooperación. México, por su lado, actuaba en el mismo sentido en Centroamérica y la parte occidental del Caribe. Si Venezuela, como miembro de la OPEP, compartió durante ese lapso todos los esfuerzos de los países exportadores de petróleo por ejercer mayor control sobre el abastecimiento energético mundial y sobre los precios del producto, también estuvo a la vanguardia de dichos países en lo que respecta a ayuda financiera y energética a las naciones de menor desarrollo y de mayor pobreza. En el área andina, el gobierno venezolano prosiguió sus esfuerzos por convertir el Acuerdo de Cartagena en un centro de desarrollo subregional autónomo, con peso no sólo económico sino también político en la balanza de poder latinoamericana e internacional.

Interesantes iniciativas enmarcadas dentro del principio de la llamada Cooperación Sur-Sur fueron algunas adoptadas por México y Venezuela conjuntamente: en particular, un proyecto tripartito México-Venezuela-Jamaica (con posible participación también de Guyana), para desarrollar la industria del aluminio en esos países.

En el plano político, la similar ideología nacionaldemócrata y socialdemócrata de los partidos gobernantes —PRI y AD— sirvió de vínculo de unión. A los presidentes Echeverría y Pérez se les unió —como tercer abanderado del tercermundismo y de la lucha por la democracia social— el primer ministro de Jamaica, Michael Manley, jefe del Partido Nacional Popular (socialista democrático) de esa isla. Por más que el radicalismo tercermundista de Echeverría y Pérez fuese a ratos más verbal que real, los dos gobernantes llegaron a ser mirados internacionalmente como valiosos dirigentes de la causa de los países emergentes, enfrentados a las grandes potencias industrializadas. Más aún, se reconoció y se estimó a Manley, cuya labor transformadora en la vida interna de Jamaica fue efectiva y audaz.

También los países más moderados del Caribe de habla inglesa se ganaron durante este lapso el respeto del mundo por sus instituciones y prácticas democráticas, y por su apoyo a la mayor parte de las causas del Tercer Mundo. Eric Williams, de Trinidad y Tobago, si bien condujo a su país por una vía de desarrollo capitalista, y no socialista-democrático como el gobernante jamaiquino, debe ser reconoçido históricamente como un importante dirigente de la democracia en el ámbito latinoamericano y del Caribe. Aunque Williams había mantenido buenas relaciones con el gobierno venezolano de Caldera, y en 1970 había promovido exitosamente un entendimiento entre Venezuela y Guyana para congelar por doce años su controversia territorial a través del Protocolo de Puerto España, la convivencia

trinitario-venezolana sufrió un ligero deterioro durante la época de Carlos Andrés Pérez. Eric Williams tuvo la sensación de que Venezuela ejercía una indebida "injerencia" en el Caribe de habla inglesa, y que trataba de arrebatar a Trinidad su natural esfera de influencia y de amistad, sobre todo a partir del proyecto elaborado por Venezuela, México y Jamaica para desarrollar la industria del aluminio en el área.

Durante el mismo lapso, Colombia vivió su vida democrática en lo político, pero caracterizada por fuertes tensiones y pugnas sociales, bajo los gobiernos de Misael Pastrana Borrero y de Alfonso López Michelsen. El primero de estos mandatarios tuvo buenas relaciones con su colega venezolano Rafael Caldera (como las había tenido en el período anterior el presidente Carlos Lleras Restrepo con el venezolano Raúl Leoni). López Michelsen, por su parte, se entendió igualmente bien en el plano personal con Carlos Andrés Pérez. Pero existieron y existen entre Colombia y Venezuela algunos problemas no resueltos que provocaron ocasionales divergencias diplomáticas. Uno de ellos es el de la migración incontrolada de ciudadanos colombianos hacia Venezuela en busca de trabajo o de sustento, y el otro es el de las divergencias por la delimitación de las áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela.

Mientras tanto, Ecuador evolucionaba gradualmente hacia un retorno a la democracia formal, luego de estar bajo un régimen militar moderado y no carente de sentido social.

Perú, que vivió su experiencia revolucionaria, de grandes reformas nacionalistas y sociales, bajo la presidencia del general Juan Velasco Alvarado, sufrió un viraje hacia posiciones moderadas a partir de agosto de 1975, cuando el mencionado general fue sustituido por su colega Francisco Morales Bermúdez.

Bolivia, bajo el mando de Banzer Suárez, estuvo en cierto modo en posición intermedia entre el ámbito autoritario y el democratizante o liberalizante: el carácter del régimen fue represivo, pero los vínculos económicos con el Pacto Andino, la influencia venezolana a través de programas de cooperación, y la permanente querella con Chile por el problema de la salida al mar, mantuvieron al general Banzer, en momentos decisivos y en lo que a política exterior se refiere, más cerca del campo liberal que del derechista autoritario.

El ámbito de las democracias, semidemocracias y "dictablandas" de Latinoamérica septentrional y del Caribe, no obstante las contradicciones y divergencias internas señaladas, mantuvo pues, entre 1973 y 1976, una indudable coherencia fundamental, haciendo contrapeso a la tendencia de la parte meridional y oriental de Sudamérica hacia el retroceso represivo.

1977-1979: retorno al reformismo interamericano

La elección de Jimmy Carter para la presidencia de Estados Unidos en 1976 tuvo un efecto considerable sobre la evolución política de América Latina. Quedó de manifiesto una vez más la enorme influencia que Estados Unidos ejerce sobre las tendencias políticas de los países situados al sur del Río Grande, a veces en sentido intervencionista y represivo, y otras veces en dirección reformista y liberal.

La elección de Carter fue producto del espíritu de autocrítica colectiva que

animó a los norteamericanos, luego de la derrota militar y moral en Vietnam, y de la vergüenza nacional por el caso Watergate. Pese a que las experiencias de incipiente recesión económica, de derrota militar y de escándalo en altas esferas, suelen provocar reacciones derechistas maquinadas principalmente por las capas medias, en este caso los aspectos morales de Vietnam y de Watergate causaron una inicial reacción autocrítica, de humildad y de introversión. Por el momento, la mayoría del pueblo de Estados Unidos buscaba la manera de reconstruir la respetabilidad de su país mediante reformas, absteniéndose entre tanto de intervenir en los asuntos de otros pueblos o de prodigarles consejos. Vinculada a estas reacciones, se tuvo la sensación de que Norteamérica podría recuperar el respeto del mundo exterior mediante un programa de lucha no violenta por la causa del respeto a los derechos humanos.

Lamentablemente, esa inclinación autocrítica y liberal sólo duró poco tiempo. A partir de 1978 surgiría una reacción "dura" y hasta cierto punto chovinista contra las debilidades de la política de Carter y, sobre todo, contra las crecientes dificultades económicas derivadas de la situación general de "estanflación" que caracterizó al sistema capitalista mundial desde el comienzo de los años setenta. El norteamericano medio equivocadamente achacaba los problemas económicos a la política "débil" de su presidente. Al mismo tiempo, el sistema norteamericano comenzaba a buscar una salida a sus crecientes dificultades económicas por el viejo método del armamentismo, tendencia esta que contradecía flagrantemente la anunciada primacía de la defensa de los derechos humanos.

Por un lado, Carter mantenía vínculos con organizaciones populares que le habían otorgado su apoyo; por el otro, se dejaba guiar por el complejo industrial y militar, representado en parte por la Comisión Trilateral, cuyo inspirador fue David Rockefeller, con Zbigniew Brzezinski como secretario. La política exterior de Carter sería pues una de las más contradictorias de la historia presidencial norteamericana. El primer mandatario de Estados Unidos escucharía simultáneamente y con la misma atención a asesores liberales y conservadores, a "palomas" y a "halcones". Si los liberales le recomendaban amonestar y sancionar a los dictadores derechistas latinoamericanos por su violación de los derechos humanos, en cambio los conservadores y "duros" lo impulsaban a invocar ese mismo principio como arma ideológica contra la Unión Soviética, hasta el punto de deteriorar la *détente* internacional y abrir las compuertas a una nueva y poderosa carrera armamentista.

Tal vez en los primeros dos años del gobierno de Carter tendieron a predominar las iniciativas liberales y en la segunda mitad las vinculadas a una línea dura antisoviética y en parte antitercermundista. Pero en gran medida ambas corrientes coexistieron contradictoriamente desde el comienzo hasta el fin de su mandato.

En lo que respecta a su política hacia América Latina y el Caribe, indudablemente los impulsos liberales predominaron sobre los represivos. Desde su ascenso en 1977 hasta su salida del poder en enero de 1981, Jimmy Carter no dejó de manifestar su oposición a dictadores derechistas latinoamericanos, violadores de los derechos del hombre. Que en esa conducta haya mostrado vacilaciones y contradicciones, reflejo del juego de los grandes intereses norteamericanos, no desdice el hecho de que el saldo fundamental de su política hacia Latinoamérica haya sido más liberal y reformista que reaccionaria y represiva.

De modo general, el gobierno de Carter expresó su rechazo moral a las

dictaduras del Cono Sur y ejerció presiones económicas, y de suspensión de la ayuda militar, con el fin de presionar a esos regímenes para que, por lo menos, suavizaran sus políticas represivas. Esa política produjo protestas sobre todo por parte de la dictadura argentina, surgida en 1976 a raíz del derrocamiento del caótico gobierno de María Estela (Isabel) de Perón, bajo cuyo régimen se habían agudizado los conflictos violentos entre izquierdas y derechas en el país. Como siempre, los grupos dirigentes argentinos se mostraron poseídos de cierto nacionalismo antiyanqui, no obstante su coincidencia con las empresas transnacionales en lo concerniente a la represión del pueblo, y reaccionaron contra las presiones humanistas de Carter, intensificando sus vínculos comerciales con la Unión Soviética. Al mismo tiempo, los consorcios norteamericanos, junto con David Rockefeller y su imperio bancario a la cabeza, realizaron una constante campaña en pro de la reanudación de la "tradicional amistad" con el gobierno argentino, como también con el uruguayo, el paraguayo, el chileno, y el de Somoza en Nicaragua. Sin embargo, hasta el final del mandato de Carter, la Casa Blanca y el Departamento de Estado mantuvieron una línea de desaprobación por lo menos parcial hacia los regímenes inhumanos.

Un problema que mereció toda la atención del gobierno de Carter, y que movilizó a los patriotas y demócratas latinoamericanos en defensa de una causa común, fue el del Canal de Panamá. Desde1956 el pueblo panameño luchaba de lleno por la recuperación del Canal y de la zona cuyo uso fue cedido "a perpetuidad" por los gobernantes antinacionales de 1903. Hubo choques violentos en el mencionado año, así como en 1959. En 1962, el presidente panameño Chiari suscribió un acuerdo con John F. Kennedy, creando una comisión mixta. Pero en 1964 ocurrió un incidente sangriento cuando estudiantes panameños trataron de izar la bandera nacional en la zona. Tropas norteamericanas abrieron fuego, dieron muerte a veinte estudiantes e hirieron a otros centenares. Panamá rompió relaciones diplomáticas con la potencia del norte, interpretando así la imperiosa voluntad de su pueblo. Posteriormente se entablaron nuevas negociaciones: desde Johnson en adelante, los gobernantes estadounidenses comprendieron que, de negarse totalmente a dar satisfacción a los reclamos patrióticos panameños, el país del istmo podría convertirse en un nuevo Vietnam... cuya lucha sería respaldada de lleno por las mayorías de todo el continente latinoamericano. En 1974 se llegó al Acuerdo Tack-Kissinger que estableció un marco de referencia para la anulación del Tratado Hay-Bunau-Varilla de 1903 y la negociación de otro nuevo que por etapas devolviese a Panamá la soberanía sobre el Canal.

Con Torrijos en el poder en Panamá y Carter en Washington, las negociaciones entre los dos países progresaron paso a paso. Torrijos, como Carlos Andrés Pérez y Echeverría, fue un presidente nacionalista-reformista (aquél que sabe que a cambio de ciertos pasos significativos hacia adelante es necesario hacer concesiones compensatorias en otras áreas). Para el año 1977 se llegó a la firma de un nuevo Tratado que prevé la gradual devolución del Canal a Panamá hasta el año 2000 pero, aún después de ese año, Estados Unidos conservará cierto derecho para actuar en defensa de la seguridad del Canal y del libre tránsito por el mismo.

Los nacionalistas panameños más exigentes acusaron a Torrijos de haberse conformado con poco, sobre todo en vista de que parecen estar previstas compensaciones económicas para los intereses transnacionales norteamericanos no convenientes para el desarrollo autónomo de la república del istmo. Pero, de manera

general, tanto los observadores de tendencia socialdemócrata como los partidarios de fórmulas marxistas de tipo cubano o soviético opinaron —como lo hicieron también en el caso de las nacionalizaciones de Carlos Andrés Pérez en Venezuela— que en la etapa esencialmente no revolucionaria de los años setenta se justificaba la táctica de avanzar por pasos graduales que, no obstante su aparente carácter meramente reformista, servían para echar las bases de futuros cambios más profundos.

Sin embargo, a pesar de lo moderado del acuerdo, sectores nacionalistas estadounidenses se opusieron tenazmente a la ratificación del instrumento, y Carter tuvo que hacer severas recomendaciones y presionar políticamente para obtener la aprobación legislativa necesaria.

A partir de 1918 la situación política y social de América Central se tornó revolucionaria. Alentados en parte por la política de defensa de los derechos humanos proclamada por Carter, grupos democráticos fortalecieron su resistencia contra las dictaduras de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Los servicios secretos norteamericanos buscaron discretamente la manera de sustituir a los dictadores —particularmente a Anastasio Somoza, hijo— con regímenes liberalizantes, de transición hacia democracias moderadas. En esa decisión de abandonar la política de apoyo a Somoza, particularmente tuvo alguna influencia la diplomacia venezolana y, sobre todo, la de Carlos Andrés Pérez.

El asesinato del editor liberal nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro en enero de 1978 desencadenó un proceso de liberación democrática en el país. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, apoyado por fuerzas democráticas externas —nuevamente la ayuda material y concreta del gobierno venezolano fue de particular importancia— avanzó paso a paso en la lucha armada contra el tirano, y Somoza cayó el 17 de julio de 1979. Se estableció en Nicaragua un régimen de tipo tercermundista, democrático y revolucionario, con un programa de desarrollo nacional independiente, de no alineamiento en las relaciones internacionales, y de redistribución del ingreso nacional. No se planteó el socialismo sino una economía mixta con primacía del sector público y del interés social. La victoria del movimiento sandinista y el establecimiento del gobierno revolucionario democrático fueron saludados con regocijo por las fuerzas internacionales de tendencia democrática y progresista. En cambio, reaccionaron con hostilidad —inicialmente un tanto disimulada— los sectores capitalistas del mundo. El gobierno de Carter, en parte alentado e influido por regímenes democráticos de Latinoamérica y, particularmente, por el venezolano, decidió correr el riesgo calculado e inteligente de dar su apoyo económico al nuevo gobierno nicaragüense, para tratar de evitar que se orientase hacia el modelo cubano y hacia una eventual alianza con el bloque soviético.

En marzo de 1979 ya se había producido otro suceso revolucionario en Grenada (isla inglesa que había conseguido su independencia en 1974). Una agrupación de tendencia socialista-democrática, el Movimiento Nueva Joya, encabezó un levantamiento popular que derrocó la dictadura corrupta de Eric Gairy. El nuevo régimen, presidido por Maurice Bishop, pidió ayuda inicialmente a Venezuela pero, ante la lentitud con que reaccionó el gobierno de Caracas, se dirigió también a Cuba, de donde comenzó a recibir cooperación rápida y eficaz. Posteriormente, la conducta de Bishop y de su gobierno se radicalizó imprudentemente, llegando incluso a dar su apoyo moral a la intervención soviética en Afganistán (Cuba discretamente trató

de disuadirla de tal gesto). Sin embargo, el Movimiento Nueva Joya marcó su diferenciación ideológica frente al comunismo, mediante el ingreso a la Internacional Socialista (socialdemócrata).

La tendencia reformista general, alentada por el gobierno norteamericano de James Carter, sin duda contribuyó igualmente a impulsar el complejo militar-empresarial brasileño para que suavizara sus métodos de gobierno y llevara ese gigantesco país hacia un proceso de liberalización política. Bajo la dirección del nuevo presidente militar, general Joao Baptista Figueiredo, se puso fin a las peores formas de represión y se dio un margen de creciente amplitud a la oposición democrática (inclusive la socialdemócrata y la cristiana de izquierda) para que voceara pública y legalmente sus críticas y sus discrepancias. En lo exterior, Brasil dejó de hablar en términos geopolíticos y de "fronteras ideológicas", para iniciar una línea de amistad hacia los países democráticos y democratizantes del Grupo Andino. Pero el general Couto e Silva, quien siguió actuando como una eminencia gris, admitió discretamente que esa política exterior de "apertura" sólo representaba un cambio táctico y no de fondo. La burguesía brasileña y sus fuerzas armadas conservadoras habían llegado a la conclusión, compartida por los grupos dirigentes norteamericanos que respaldaban a Carter, de que en la lucha global contra el radicalismo tercermundista y socializante se lograban mejores resultados por una táctica de sonrisas que por el uso de la fuerza. Seguramente Brasil no abandonó su intención fundamental de ejercer su hegemonía en el continente e impedir la consolidación de nuevos bloques de poder subregionales que pudiesen competir con él. Pero hábilmente persiguió ese propósito mediante un acercamiento, por ejemplo, hacia el Grupo Andino, procurando diluir y modificar su carácter de bloque claramente definido frente al exterior.

En términos generales, el período de 1977 a 1979 fue, pues, de perspectivas democráticas y reformistas para América Latina, aunque no de un ascenso nacionalista y popular tan dinámico y autóctono como el proceso del período 1968-1973. Esta vez, la voluntad reformista del gobierno norteamericano jugó un importante papel, en tanto que el movimiento de la etapa 1968-1973 había estado dirigido en contra de la posición imperial de Estados Unidos.

1980: tensión mundial y viraje a la derecha. Perspectivas

Durante 1978 y 1979 se había ido agravando paulatinamente el malestar económico del mundo capitalista. Los sectores dominantes de los centros industrializados se sintieron molestos y amenazados en grado creciente por las presiones de la OPEP sobre el suministro y los precios del petróleo, así como por otras iniciativas del Tercer Mundo, indicativas de que se estaba efectuando un gran cambio en el poder de decisión económico internacional. Por otra parte, cundió el temor en Occidente de que la URSS y su bloque estarían aprovechándose del ascenso del Tercer Mundo para tender un "cerco" en torno a los países capitalistas industrializados. China, cuyo gobierno se había ido acercando paulatinamente a las posiciones occidentales y hacía gala de un antisovietismo cada vez más furibundo, alentaba esos temores.

Al mismo tiempo, como siempre ocurre en épocas de crisis del sistema

capitalista, hubo fuertes presiones industriales en favor del armamentismo. Una carrera de armamentos abriría perspectivas esperanzadoras para superar la recesión existente. A los fríos cálculos de las empresas transnacionales productoras de armas y equipo militar se agregaron las preocupaciones, muchas veces sinceras, de políticos y estrategas que veían a la URSS y a su bloque superar a la alianza occidental cuantitativamente en armas convencionales y en algunos tipos de cohetería nuclear. Dichos políticos y estrategas se olvidaban —oportunamente para los proveedores de armamentos— del hecho de que en términos globales el bloque soviético continuaba siendo más débil y más vulnerable que el occidental. Además del mundo capitalista, tenía en su contra a China. El armamento ruso, aunque cuantitativamente impresionante, era tecnológicamente inferior en muchos casos al de la OTAN. Las inmensas distancias de la URSS son también un factor de debilidad. En el plano marítimo, el campo soviético estaba en enorme desventaja, con sus fuerzas dispersas en mares inhóspitos, sin puertos o bases suficientes. Política y económicamente, la URSS y sus aliados enfrentaban serios problemas internos. Durante la década de los setenta, Occidente había estado a la ofensiva, desalojando la influencia rusa de importantes zonas del Tercer Mundo, sobre todo en Africa y el Medio Oriente.

No obstante la superioridad objetiva de Occidente sobre la URSS en poder global y efectivo, el presidente Carter y su gobierno instaban a la OTAN a adoptar nuevos tipos de armamento. Al mismo tiempo, tendían a intensificar cada vez más su campaña de "derechos humanos" contra el gobierno de Moscú. El Senado norteamericano adoptó desde el comienzo una actitud escéptica y negativa ante el tratado SALT-2. A diferencia de sus predecesores Nixon y Ford, Carter rehuía el diálogo franco y amplio con los dirigentes soviéticos y, siguiendo los consejos de Zbigniew Brzezinski, trataba de modificar la balanza de poder mundial mediante la utilización de la "carta china".

La tensión internacional se incrementó durante 1979 a consecuencia de diversos hechos: la decisión de la OTAN de renovar su arsenal nuclear táctico en Europa; los temores de Occidente ante la influencia de Fidel Castro en el seno del movimiento de los países no alineados (la VI Reunión Cumbre se efectuó en La Habana en septiembre de 1979 y el líder cubano asumió la presidencia del movimiento); las revoluciones de Irán, de Nicaragua y de Grenada. En estos últimos acontecimientos, la URSS y el movimiento comunista internacional prácticamente no habían tenido participación alguna. Tanto el proceso de derrocamiento del Sha como los movimientos que derrocaron a Somoza y Gairy fueron de origen autóctono y producto de décadas de resistencia popular. Es cierto igualmente que la línea reformista de Carter y su campaña por los derechos humanos había influido positivamente, por lo menos, en el derrocamiento del Sha y en el de Somoza. El gobierno norteamericano esperaba en ambos casos promover alguna fórmula reformista y "tercerista" entre la dictadura y la revolución radical. Al comprobarse que esto no era posible, y que la revolución popular resultó incontenible tanto en Irán como en Nicaragua, la derecha norteamericana adquirió nuevos argumentos contra Carter, y los sectores relativamente liberales del mundo de los negocios estadounidense se volvieron más conservadores e intransigentes.

Hacia fines de 1979 se produjo un acontecimiento que incrementó la tensión internacional y acentuó la reacción nacionalista y de "línea dura" en Estados

Unidos. Los revolucionarios musulmanes del ayatola Jomeini secuestraron a 52 funcionarios norteamericanos de la representación estadounidense en Teherán, en protesta por el asilo que Carter otorgó al derrocado Sha. Norteamérica envió barcos de guerra al área del Golfo Pérsico y comenzó a establecer, junto con sus amigos egipcios, israelíes, y de otras partes del Medio Oriente, un dispositivo estratégico para presionar —y, si fuere necesario, para cercar— el Irán de la rebelde e impredecible revolución populista islámica. La Unión Soviética, que durante varios años había sufrido derrotas en Asia centrooccidental y en Africa, temió que los preparativos norteamericanos contra Irán pudiesen conducir a una ocupación occidental del Golfo Pérsico y, para equilibrar la situación y ensanchar su propia base de operaciones estratégicas, envió tropas para intervenir en Afganistán, en apoyo al régimen nacional revolucionario pro-soviético de Barbrak Karmal, amenazado por una rebelión tradicionalista que contaba con eventuales o efectivos apoyos de los servicios secretos de Occidente.

Desde el punto de vista de los gobernantes del Kremlin, se trataba de una acción defensiva. Estados Unidos, afectado por una recesión económica (que en oportunidades históricas anteriores siempre había significado que el capitalismo recurriría a la carrera armamentista y a las guerras), había intensificado su lucha ideológica contra la URSS, se había negado a ratificar el SALT-2, había desplazado a la Unión Soviética de varias de sus zonas de influencia en Asia occidental y Africa, había incrementado su armamento nuclear, y ahora estaba amenazando a Irán, país limítrofe de las repúblicas soviéticas asiáticas. Como si todo esto fuese poco, China lanzaba ataques verbales cada vez más violentos contra su vecino ruso. Al mismo tiempo, la economía soviética sufría serias dificultades, con síntomas de estancamiento en la producción, y crecientes déficit y pérdidas. A consecuencia de ello, aumentaba el descontento de los sectores populares, tecnocráticos, intelectuales y gerenciales. Ante tantos problemas, intervenir en Afganistán era una reacción subjetivamente defensiva.

Los norteamericanos no lo entendieron así, sino que sospecharon que la acción rusa en Afganistán formaba parte de una vasta ofensiva estratégica, de un plan expansionista en gran escala. Sus reacciones fueron fuertes: adopción de sanciones económicas contra la URSS; presiones sobre los aliados de la OTAN para que actuasen en el mismo sentido; boicot a los juegos olímpicos de Moscú. Así, el año 1980 transcurrió en un ambiente angustiante de retorno a la guerra fría. La elección de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos completó el cuadro, agregándole otro elemento de temor y preocupación.

Para América Latina y el Caribe, los efectos de la renovada tensión mundial fueron, inevitablemente, colocar las fuerzas democráticas y populares en una situación más difícil, y alentar el espíritu militarista y represivo en el hemisferio. El régimen democrático revolucionario de Nicaragua quedó en posición defensiva frente a las amenazas de la contrarrevolución apoyada por el factor imperial norteño. Cuba, que entre 1969 y1979 había logrado normalizar parcialmente su situación en el continente, estableciendo relaciones correctas con los países democráticos del Caribe y de Hispanoamérica septentrional, vio un deterioro de dichas relaciones en 1980. Estados Unidos la acusaba de "intervenir" en Centroamérica, en apoyo a las guerrillas democráticas de El Salvador y Guatemala, y de intentar una operación de "expansión del bloque soviético-cubano". No existen pruebas de que

tal intención existiera. Por el contrario: el gobierno cubano había abrigado la esperanza de que sus relaciones de amistad con países como Panamá, México y Venezuela, así como de los apoyos de que disfruta en el seno del movimiento no alineado (sobre todo por parte de países africanos y árabes), le servirían para lograr una eventual coexistencia normal con Estados Unidos y una mayor autonomía con respecto a la URSS y su bloque.

Así como se fortalecieron en el Caribe y en Centroamérica las tradicionales corrientes "anticomunistas", en el ámbito sudamericano las dictaduras y las oligarquías obtuvieron ciertos triunfos frente a las corrientes democráticas, populares y nacional-reivindicadoras. En particular, el Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena, inicialmente concebido como esquema subregional de desarrollo independiente y "tercermundista", sufrió nuevos golpes, además de otros ya recibidos en años anteriores. Desde1975 la Decisión 24 del Pacto Andino —decisión de regular las inversiones extranjeras en el área, con criterio nacionalista e independentista— se había venido aplicando en forma diluida y parcial. Cada vez más, los diversos gobiernos miembros del Acuerdo de Cartagena fueron aprovechándose de diversos pretextos y cláusulas de escape para no aplicar la Decisión 24 con todo el rigor requerido. Paulatinamente, los monopolios transnacionales fueron reconquistando el terreno perdido en el ámbito andino. Pero aun así, no abandonaron su empeño de debilitar aún más el Pacto Andino y, si fuere posible, de lograr su disolución completa. En ese propósito contaron con el apoyo de Brasil, aunque éste, para fortalecer su propia influencia a expensas de la del Grupo Andino, escogió a partir de 1977 la táctica de la seducción más que la del ataque. El Pacto Amazónico, concebido en 1977 como acuerdo de alcances limitados pero con una intención geopolítica en última instancia hegemonista, constituyó uno de estos medios de seducción en detrimento del concepto de integración andina. Los enemigos del Pacto Andino contaron también, por otra parte, con el respaldo de los países del Cono Sur, de régimen dictatorial derechista, agrupados en el Acuerdo de la Cuenca del Río de la Plata. En 1980 el golpe de Estado dictatorial del general García Meza en Bolivia y el ascenso a la presidencia de Perú de Fernando Belaúnde Terry, de orientación conservadora, tuvieron a su vez efectos negativos sobre el Pacto Andino.

Con el triunfo del Partido Socialcristiano COPEI y de su candidato Luis Herrera Campins en Venezuela, en diciembre de 1978, se inició en América Latina un proceso de afirmación más dinámica de la organización y las doctrinas de la democracia cristiana. A diferencia del presidente Caldera, quien de 1969 a 1974 había gobernado en forma renovadora sobre todo en su política exterior, adoptando posiciones independientes ante Estados Unidos y dando prioridad a la unidad del Tercer Mundo para la lucha por un nuevo orden económico internacional —línea que luego fue seguida y profundizada por el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez—, el nuevo mandatario venezolano propició algunos pasos hacia atrás en sus relaciones con el norte y con las fuerzas tercermundistas.

En 1980 el gobierno venezolano coincidió, y de hecho colaboró estrechamente con el de Estados Unidos en apoyar a la junta de gobierno de El Salvador, dedicada a la lucha contra las fuerzas democráticas revolucionarias del país. Así mismo, enfrió sus relaciones con Cuba hasta el punto de una congelación, cercana al rompimiento total. Compartió con los dirigentes norteamericanos el temor ante una

presunta "marea roja" u "ofensiva soviético-cubana" que estaría amenazando a Latinoamérica y al Caribe. Al escoger entre la primacía de la solidaridad tercermundista y la de la "institucionalización de la democracia" (entendida como lucha a la vez contra las dictaduras de extrema derecha y de extrema izquierda), optó por esta última, introduciendo en las relaciones intralatinoamericanas algunos elementos de división ideológica.

Al actuar en esa forma relativamente conservadora, sobre todo en Centroamérica, la democracia cristiana venezolana tomó en cuenta dos elementos. En primer término, la coyuntura mundial no era propicia para audacias tercermundistas. La renovación de la guerra fría y el ascenso de Reagan hacían indispensable una conducta cautelosa y, sin duda, de haber estado en el poder en Venezuela los socialdemócratas, también habrían procedido con moderación y prudencia. Había llegado la hora de defender las conquistas nacionales y populares adquiridas, antes de avanzar hacia horizontes nuevos de liberación. Pero también había otro factor, que fue el de una intensa rivalidad entre la Internacional Demócrata Cristiana (IDC) y la Internacional Socialista (IS).

Esta última, durante largos años había representado casi exclusivamente a los movimientos socialdemócratas y laboristas de Europa, reflejando los intereses y las aspiraciones de los trabajadores manuales e intelectuales, así como los de las capas medias progresistas de los países industrializados del viejo mundo. Pese a su carácter popular, la socialdemocracia europea acogía y compartía algunas ideas conservadoras con respecto al Tercer Mundo y sus luchas de liberación, y no entendía realmente la significación de los grandes procesos históricos de Asia, Africa y América Latina. Sin embargo, a partir de1969 esa actitud comenzó a cambiar. El ascenso y fortalecimiento del movimiento de los países no alineados y de otras organizaciones del Tercer Mundo, tales como el Grupo de los 77 y la OPEP, obligaron a los países industrializados, incluso a sus socialdemócratas, a prestar mayor atención a la periferia mundial. Por otra parte, en esos momentos se iniciaba la crisis del poder imperial norteamericano y el proceso de autolimitación de Estados Unidos, adquiriendo los europeos —tanto los de centroderecha como los de centroizquierda— conciencia de su obligación de colmar los eventuales vacíos dejados por la influencia norteamericana en el Tercer Mundo, antes de que esos vacíos fuesen llenados por la presencia soviética o china. Como sector más avanzado y consciente de las capas laborales europeas, la socialdemocracia redescubrió la vieja verdad (descubierta ya un siglo antes por los clásicos del socialismo científico, pero posteriormente olvidada por muchos de sus sucesores) de que "un pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre". La liberación de los países coloniales y semicoloniales —o sometidos a una dependencia neocolonial ante empresas transnacionales— debía ser una tarea fundamental de las fuerzas populares del mundo capitalista industrializado, no sólo por razones humanitarias y de justicia sino también porque la dominación y la explotación de las periferias por los centros nutre el poder de los grupos privilegiados y reaccionarios en los centros mismos y frena el avance de la democracia social en su seno. Los monopolios transnacionales explotan tanto a los trabajadores manuales e intelectuales del primer mundo como a las naciones subdesarrolladas del tercero; por ello debe buscarse la formación de un frente unido de éstas con aquéllos para su liberación común, que es la de toda la humanidad.

Movida, por una parte, por el interés regional de Europa occidental y los intereses nacionales de sus países integrantes —interés en ganar influencia en Latinoamérica a la vez que en Africa y en Asia, con miras a la obtención de mercados, y al acceso a materias primas, sobre todo energéticas— y, por otra parte, por los mencionados impulsos de solidaridad internacional antimonopolista, la socialdemocracia europea abrió las puertas de la IS a los partidos populares, socialdemócratas o socialistas latinoamericanos, así como a algunos de Africa. Estos partidos comenzaron a ejercer alguna influencia en el seno de la IS, y la empujaron hacia posiciones más radicales y orientadas hacia la búsqueda de cambios estructurales importantes. El ascenso del dirigente socialdemócrata alemán Willy Brandt a la presidencia de la IS contribuyó, a su vez, a acelerar el acercamiento de la organización al Tercer Mundo y a sus luchas de liberación: ese hombre excepcional —auténtico hijo del proletariado, resistente y guerrillero contra las fuerzas de ocupación nazis en Noruega, posteriormente defensor de la democracia contra la amenaza stalinista en Berlín, crítico tenaz del "milagro económico" en beneficio de los consorcios transnacionales, canciller federal que devolvió a Alemania una política exterior independiente de reconciliación y convivencia con los países del Este, y siempre luchador consecuente por la causa de la marcha hacia el socialismo democrático— comenzó a servir desde 1976 para lograr la apertura de la Internacional Socialista hacia el tercer mundo. Así, Brandt sirvió de lazo de unión y mediación entre las fuerzas laborales de los países industrializados y las corrientes populares y nacionalistas de la periferia afroasiática y latinoamericana. Al mismo tiempo, a las motivaciones un tanto neocolonialistas de ciertos socialdemócratas europeos cercanos al sistema establecido les agregó un auténtico ingrediente de solidaridad con los pueblos oprimidos. Si la socialdemocracia europea coincidía con los sectores capitalistas y conservadores de su continente en buscar una mayor "presencia" en Latinoamérica, divergía radicalmente de los conservadores con respecto al contenido que anhelaba darle a dicha presencia del viejo mundo: no explotadora sino liberadora y de cooperación en un plano de igualdad.

Fue esa creciente actividad de la IS en América Latina un elemento que molestó sobremanera a la democracia cristiana internacional y la impulsó a adoptar una línea de acción intensiva para ampliar su propia área de influencia. En vista de que la Internacional Socialista apoyaba resueltamente a movimientos de liberación de carácter radical como los de Centroamérica, la democracia cristiana se volcó hacia el lado contrario. En 1980, en una reunión efectuada en Estados Unidos, los principales dirigentes demócrata-cristianos de América Latina acordaron una virtual alianza táctica con el *establishment* norteamericano. La DC participaría en la lucha contra movimientos izquierdistas en el continente, tendría opción, con apoyo estadounidense, a ejercer el poder de orientación centroderechista en forma democrática, como alternativa liberal y humanitaria a la desacreditada fórmula de las dictaduras militares derechistas.

Obviamente no todos los demócratas cristianos o socialcristianos de América Latina compartieron ni comparten esa táctica. En la base y la dirigencia media de todos los partidos demócrata-cristianos existen hombres y mujeres de tendencia progresista, inspirados por las enseñanzas liberadoras e igualitarias del Evangelio y de la Teología de la Liberación. Esas tendencias reciben aliento de sacerdotes y

religiosos, notándose sobre todo la actividad renovadora y liberacionista de muchos miembros de la Compañía de Jesús. En las jornadas liberadoras de América Central, socialcristianos progresistas y otros cristianos lucharon juntos con socialistas y socialdemócratas en perfecta solidaridad y armonía.

En términos generales, si bien es cierto que América Latina se enfrentó en 1980 a un posible viraje derechista, impulsado y apoyado por el gobierno del presidente norteamericano Ronald Reagan, de ningún modo existe el peligro de retorno a una situación de dependencia y conformismo profundos, tal como la que prevaleció en la época de los años cincuenta cuando la guerra fría estaba en su apogeo. En aquella época, el nacionalismo liberador latinoamericano era débil y esporádico. En cambio hoy América Latina posee un conjunto de factores de autonomía estable e irreversible.

Estados Unidos ha perdido su aura de imperio incuestionable y se ha convertido en una potencia, grande y formidable, sin duda, pero que en muchas ocasiones ha cedido ante las presiones internacionales. En toda Latinoamérica no sólo los trabajadores y los intelectuales revolucionarios sino también los sectores empresariales poseen una conciencia cada vez mayor de sus intereses nacionales, diferenciados de los de la potencia del norte. La comunidad de estructuras y de intereses entre Latinoamérica y las otras regiones del Tercer Mundo ha sido comprendida por las capas medias y populares, y sólo es puesta en duda por las oligarquías y las fuerzas conservadoras estrechamente vinculadas al capital transnacional. Los gobiernos latinoamericanos —incluso los de carácter militar y conservador— tienden hoy a seguir su vía propia (a pesar de la oposición de Estados Unidos), por ejemplo en materia de intercambio comercial con países socialistas o de desarrollo nuclear autónomo. La rivalidad capitalista entre Norteamérica, Europa occidental y Japón, significa mayor libertad de acción para los países latinoamericanos, capaces de aprovecharse de esa rivalidad para obtener mejores condiciones económicas y una gama más amplia de alternativas políticas. La presencia de la Unión Soviética en América Latina, a través de Cuba, significa otro elemento objetivamente liberador: el temor del surgimiento de "nuevas Cubas" constituyó el mayor estímulo para que Estados Unidos desarrollara hacia sus vecinos del sur nuevas políticas de tipo reformista, y que se mostrara tolerante ante corrientes nacionalistas y democráticas que, antes de la Revolución Cubana, habrían provocado el envío de los infantes de marina.

Si bien América Latina es todavía dependiente ante Estados Unidos en muchas áreas de la economía, la tecnología, la política y la psicología (la "colonización cultural" de las mentes latinoamericanas por los patrones de conducta norteamericanos, difundidos masivamente a través de los grandes medios de comunicación social, es uno de los problemas más serios del continente); y si también es cierto que las insaciables empresas transnacionales penetran y dominan en parte los procesos de desarrollo de América Latina, sin embargo, no cabe duda de que hoy el continente posee un nivel de conciencia y de capacidad de acción autónoma mucho mayor que hace veinticinco años. Capacidad de acción autónoma hecha posible en buena medida por las divisiones del mundo exterior: contradicciones intracapitalistas, contradicción Este-Oeste, y creciente firmeza del Tercer Mundo en su exigencia de realizar negociaciones globales que conduzcan hacia un nuevo orden internacional.

Parece factible, y hasta probable entonces, que la década de los años ochenta

Tabla 10

Tabla cronológica X

Año	Sucesos mundiales	Sucesos americanos
1968	Primeros síntomas de crisis económica. Rebeliones estudiantiles. Rechazo popular norteamericano a la guerra de Vietnam "Primavera" e intervención soviética en Checoslovaquia	Nueva "línea" cubana. Revolución militar en Perú. Revolución militar en Panamá. Elección de Rafael Caldera en Venezuela.
1969	Realismo político de Kissinger; autolimitación de Estados Unidos. Fortalecimiento de la actividad del Movimiento de Países No Alineados	Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino). Creación de la zona de libre comercio del Caribe (Carifta). Acuerdo de la Cuenca del Río de la Plata. Consenso de Viña del Mar y fortalecimiento de la CECLA. Revolución militar en Bolivia. Fermentación social en Uruguay. Acercamiento y cooperación EEUU-Brasil.
1970	III Conferencia de Países No Alineados en Lusaka	Reforma de la Carta de la OEA. Creación de CECON, organismo informal para el diálogo económico Norte-Sur a nivel hemisférico. Profundización de los procesos revolucionarios en Perú y Bolivia. Elección de Salvador Allende a la presidencia de Chile.
1971	Eliminación de la paridad Dólar-Oro y devaluación del dólar	I Asamblea de la OEA y fuertes discusiones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Debates en el seno de CECON. Primer año de gobierno socialista en Chile. Contrarrevolución en Bolivia. Luis Echeverría, presidente de México.
1972	Progresos hacia la paz en Vietnam. Avances de la distensión EEUU-URSS. Reelección de Nixon.	II Asamblea de la OEA. Reclamación panameña del Canal. Debates en CECON. Creación del Frente Amplio en Uruguay. Democratización en Argentina.
1973	Paz en Vietnam. Comienzo de la crisis energética. IV Conferencia de Países No Alineados en Argel. Guerra árabe-israelí.	Reunión del Consejo de Seguridad en Panamá. III Asamblea de la OEA. Cámpora Presidente de Argentina; luego Perón. Dictadura en Uruguay. Derrocamiento de Allende en Chile. Carlos Andrés Pérez electo presidente de Venezuela.
1974	Se profundiza la crisis energética y con ello, la "estanflación" mundial.	Políticas tercermundistas de México, Perú, Panamá y Venezuela; presencia venezolana en el Caribe y Sudamérica.

Tabla 10 (cont.)

Tabla cronológica X

Año	Sucesos mundiales	Sucesos americanos
1974	Se desarrolla la crisis norteamericana de Watergate.	Continúa la "relación especial" EEUU-Brasil. Cuarta Asamblea de la OEA. Acuerdo Tack-Kissinger sobre un marco de referencia para las negociaciones sobre el Canal de Panamá. Levantamiento de sanciones multilaterales contra Cuba y normalización de relaciones entre Cuba y varios países latinoamericanos.
1975	Renuncia de Nixon y ascenso de Ford. Prosigue distensión EEUU-URSS, y acercamiento EEUU-China.	Cooperación México-Venezuela-Jamaica. Desplazamiento de Velasco Alvarado por Morales Bermúdez; viraje en el Perú.
1976	V Conferencia de Países No Alineados en Colombo. Elección de Jimmy Carter a la presidencia de Estados Unidos.	Golpe militar y dictadura en Argentina.
1977	Comienzo de la presidencia de Carter. La "carta china" contra la URSS; campaña de "derechos humanos" contra la URSS.	Política norteamericana de derechos humanos y promoción de la democracia en América Latina. Acercamiento del gobierno de Carter a Venezuela y alejamiento de Brasil, Argentina y Chile. Auge de resistencia democrática contra Somoza. Acuerdos con Panamá sobre el Canal.
1978	Se intensifica la crisis económica mundial. Segundo "*shock* energético". Armamentismo occidental. Intervención de Vietnam en Camboya.	Estalla la lucha armada revolucionaria contra Somoza, México inicia fuerte exportación petrolera.
1979	Caída del Sha. Revolución islámica en Irán. Captura de rehenes norteamericanos. VI Conferencia de Países No Alineados en Cuba. Intervención soviética en Afganistán.	Revolución en Grenada. Caída de Somoza y triunfo de la revolución nicaragüense. Presidencia de Luis Herrera Campins en Venezuela y fortalecimiento de la Democracia Cristiana latinoamericana. VI Reunión Cumbre de Países No Alineados en La Habana. Proceso de liberalización en el Brasil.
1980	Ambiente de nueva guerra fría. Guerra Irak-Irán. Elección de Ronald Reagan.	Guerra civil en El Salvador; Estados Unidos y Democracia Cristiana contra fuerzas democráticas, socialdemócratas y marxistas.

ceda el paso a una serie de acuerdos entre Estados Unidos y América Latina basados en un equilibrio de fuerzas o de presiones. Los factores de rebeldía nacional y social en América Latina podrían ser lo suficientemente fuertes para neutralizar en parte los impulsos represivos del gobierno conservador de Ronald Reagan. Si bien sería irracional esperar cambios profundos a corto o mediano plazo, de ningún modo debe excluirse la posibilidad de que los pueblos latinoamericanos logren nuevos avances parciales en el camino hacia una mayor libertad y una mayor justicia.

El fin del siglo: Latinoamérica en un mundo en transformación

Este capítulo fue redactado quince años después de haber escrito los textos precedentes. Entre 1980 y 1995, en el mundo y en América Latina ocurrieron cambios asombrosos e imprevisibles. Algunas de las interpretaciones y conclusiones que presentamos para 1980, aunque no hayan sido totalmente erróneas, deben ser revisadas y matizadas a la luz de sucesos posteriores.

Con el afán de asumir los aspectos resaltantes de la historia de los tres lustros comprendidos entre 1980 y 1995, y de indicar algunos de los retos y las opciones que enfrenta nuestra región al acercarse al fin del milenio, se examinarán, sucesivamente el cambio global y el cambio latinoamericano, para arribar así al prudente esbozo de unos posibles "escenarios" futuros.

El cambio global a partir de 1980

La década de los años setenta había sido —como se señaló en un capítulo anterior— un período de creciente desequilibrio económico, de crisis del poder de Estados Unidos y de transitorio fortalecimiento de los países en desarrollo. Luego de un cuarto de siglo de expansión económica mundial casi ininterrumpida, se comenzó a agotar el modelo tecnoeconómico basado sobre todo en la expansión de la industria pesada y la incorporación de los recursos materiales y humanos del Tercer Mundo al proceso productivo global. Transformaciones científico-tecnológicas (creciente importancia de la automatización y la informática), junto con una mayor escasez de recursos naturales y laborales y el aumento de los costos de producción, provocaron desajustes y tendencias recesivas ante las cuales los países desarrollados adoptaron políticas inflacionarias. La "estanflación" (*stagflation*) afectó al mundo entero. Estados Unidos se vio obligado a renunciar al papel hegemónico que había desempeñado en el ámbito monetario, y a devaluar el dólar frente al oro a partir de 1971. Al mismo tiempo, la primera superpotencia sufrió reveses políticos y militares y aceptó la autolimitación de su poder en el escenario mundial. El Sur (conjunto de países en desarrollo) fortaleció su posición frente al Norte industrializado sobre todo a raíz de los *shocks* energéticos entre 1974 y 1979: por un lado escasez y por otro encarecimiento del petróleo, lo que hizo aumentar grandemente el poder negociador de los países exportadores de productos básicos y dio fuerza al planteamiento de la necesidad de un diálogo Norte-Sur institucionalizado que reformara las relaciones globales entre el tercio rico y los dos tercios pobres de la humanidad. El relativo auge del poder del Sur se acentuó aún más por el hecho de que el Norte, para reciclar los petrodólares y aliviar la presión inflacionaria en su seno, efectuó enormes transferencias de recursos financieros hacia los países en desarrollo, bajo la forma de préstamos o créditos otorgados con

reducidas tasas de interés y otras condiciones ventajosas. Pero esas tendencias favorables a una redistribución del poder mundial en beneficio del Sur llegaron a un brusco fin en 1980, año a partir del cual el Norte reconquistaría con creces su posición hegemónica frente a las regiones no desarrolladas.

En el plano económico mundial, la "estanflación" de los años anteriores se convirtió en recesión inconfundible, con crecientes índices de desocupación laboral y de quiebra de empresas vulnerables. El gasto deficitario, recomendado por Keynes medio siglo antes, ya no representaba una solución, en vista de la gravedad de los déficit fiscales existentes. Para combatir la recesión y efectuar las transformaciones tecnológicas indispensables, los centros financieros e industriales adoptaron políticas basadas en la reducción del gasto público y del papel económico y social del Estado, el fortalecimiento del poder del sector privado dirigido por grandes empresas transnacionales (ETN), el debilitamiento de las clases trabajadoras sindicalizadas, la repatriación de los fondos transferidos al mundo no desarrollado en los años precedentes y el sometimiento general del Sur a los dictados económicos y políticos del Norte. Al mismo tiempo, endurecieron su estrategia en contra del bloque soviético cuyo mensaje tendencialmente socialista obstaculizaba las políticas occidentales, a la vez que convenía justificar, como parte de la lucha contra la recesión, un nuevo aumento de los gastos militares.

Tanto el bloque soviético como el Tercer Mundo a fines de los setenta y comienzos de los ochenta, ofrecían aparentes justificaciones a las potencias de Occidente para su endurecimiento estratégico. Para finales de 1979 el gobierno de Leonid Breznev efectuó una intervención armada en Afganistán que, técnicamente, violaba las delimitaciones trazadas de común acuerdo entre los bloques. Aunque Afganistán tenía un régimen aliado al de Moscú, en teoría formaba parte del mundo no alineado. Pese a que el gobierno de Kabul estaba bajo ataque de fuerzas tradicionales musulmanas apoyadas por Pakistán y la CIA, la réplica militar soviética —por su carácter masivo y "oficial"— fue interpretada en Occidente como intento "expansionista".

Así mismo, el Tercer Mundo ganó una mala imagen ante los pueblos occidentales, en primer término por la acción de la OPEP para elevar los precios del petróleo durante los años 1974-1979, acentuando la presión inflacionaria mundial, y en segundo lugar por algunas iniciativas extremistas de la "revolución islámica" que estalló en Irán en 1979.

Para aplicar la nueva línea dura contra el Este y el Sur, el Occidente industrializado necesitaba líderes políticos duramente conservadores y los encontró en las personas de Margaret Thatcher, designada primer ministro de Gran Bretaña en 1979, y Ronald Reagan, electo presidente de Estados Unidos a fines de 1980. La señora Thatcher, surgida del ala derecha del Partido Conservador, era abanderada de una contrarrevolución económica neoliberal que liquidara el dirigismo implantado por los laboristas junto con el benéfico pero costoso *Welfare State* al cual se le responsabilizaba de la inflación y de la baja productividad. Al mismo tiempo, la nueva gobernante británica prometía rescatar el prestigio de su país en el plano internacional y reafirmar un liderazgo subimperial, disminuido pero todavía posible.

Ronald Reagan, por su parte, durante su primer mandato de 1981 a 1985, realizó una política que mostraba los rasgos siguientes:

a) Internamente, el debilitamiento de los mecanismos de control público federal, de previsión social y de protección a las minorías étnicas y culturales, construidos a lo largo de los pasados cincuenta años a través del "Nuevo Trato" de Roosevelt, el "Trato Justo" de Truman, la "Nueva Frontera" de Kennedy y la "Gran Sociedad" de Johnson. Ahora, por el contrario, en nombre de un "recio individualismo" se ayudó a los estratos dirigentes del sector privado a maximizar sus ganancias. Decreció la solidaridad social, se desestimó la noción de igualdad y disminuyó la tolerancia hacia los estilos de vida no convencionales.

b) Frente al bloque comunista, el retorno a la retórica de la guerra fría y una política armamentista que parecía buscar, no tan solo el debilitamiento de un equilibrio amenazado, sino la superioridad militar del bloque occidental. El presidente Reagan reideologizó la posición anticomunista refiriéndose a la Unión Soviética como el "Imperio del Mal".

c) En el ámbito económico internacional, no obstante una retórica teóricamente neoliberal y antiproteccionista, se aplicó una política encaminada a dar ventaja y prepotencia comercial a Estados Unidos. Para subsanar o aliviar los déficit de la balanza externa y del presupuesto federal, Estados Unidos elevó radicalmente las tasas de interés y aplicó medidas proteccionistas arancelarias y sanciones o represalias comerciales a sus competidores de Europa, de Asia oriental y de las regiones en desarrollo. Las altas tasas de interés y la reducción de preferencias comerciales alentaban la fuga de capitales del Sur hacia el Norte a la vez que cerraban el acceso de aquél a los mercados de éste.

d) Con respecto a los métodos de la acción política internacional, la administración Reagan se apartó del multilateralismo y mostró indiferencia ante instrumentos y mecanismos jurídicos. Se redujo la participación de Estados Unidos en las Naciones Unidas y los organismos internacionales especializados. El gobierno de Washington efectuó intervenciones armadas y apoyó activa y abiertamente movimientos subversivos dirigidos contra gobiernos "hostiles" o "no amistosos", a la vez que negó la competencia de la Corte Internacional de Justicia para calificar la licitud de tales medidas militares unilaterales.

Ideológicamente, la "libertad" pregonada por Estados Unidos en esta etapa como mensaje al resto del mundo se refirió fundamentalmente a la libertad económica más que a la democracia política. De manera general, las ETN y los "tanques de reflexión" y medios de comunicación social que controlaban se unían al poder político del Norte para difundir y machacar insistentemente un "discurso dominante" que los norteamericanos califican de "neoconservador" (los europeos prefieren el término de "neoliberal"). Acaso la calificación de "neoconservador" sea la más exacta y apropiada, en vista de que el término "liberal" tiene dos aceptaciones: en su expresión económica denota el concepto "burgués" o conservador de *laisser faire*, en tanto que en la dimensión política define una progresista preocupación por el libre desenvolvimiento de la personalidad humana. "Conservador" es el vocablo preciso para definir a quien defiende la economía clásica o neoclásica y el predominio de los sectores capitalistas o empresariales sobre los grupos asalariados y medios. (Un caso aparte lo constituyen los conservadores tradicionalistas, que más bien tienden a ser antiempresariales y, dentro de una visión jerárquica, pregonan la generosidad hacia los "humildes").

El "discurso dominante" manejaba los conceptos de la "globalización" y la

"apertura" económicas. Las tecnologías modernas y la interdependencia mundial de las unidades de producción efectivamente requieren una visión global de la economía y la apertura de las naciones a la entrada y salida de bienes, servicios, hombres e ideas. El discurso neoconservador quiere que dicha globalización se efectúe bajo el exclusivo control de las ETN y de las aparentes "fuerzas del mercado" que, en realidad, son las fuerzas del oligopolio que controla el mercado. Frente a ello, los defensores de una democracia social argumentan que, si bien es necesario y deseable la mundialización de las relaciones socioeconómicas, ésta no debe ser producto del juego de intereses económicos centrados en el afán de lucro, sino resultado de simétricas negociaciones público-privadas entre factores transnacionales, regiones, naciones y sectores sociales. Así mismo, la réplica democrática social a los llamados a la apertura consiste en señalar que, si se exige la apertura simultánea, brusca y total de actores grandes y chicos, los segundos estarán en desventaja grave frente a los primeros y correrán el riesgo de ser absorbidos por ellos con pérdida de cualquier identidad propia.

A partir de 1985 surgió una coyuntura internacional distinta a la del lustro anterior. El sistema comunista centrado en la URSS entró en profunda crisis y terminó por estallar y desintegrarse. Fundamentalmente, ello se debió a que en su fase final había adquirido una rigidez que le impedía cualquier adaptación a las transformaciones científicas, tecnológicas y comunicacionales del mundo.

Contrariamente a los pronósticos de Marx y de Engels, el primer ensayo socialista revolucionario no se había dado en un país industrialmente avanzado, sino en una región periférica con un capitalismo incipiente acompañado de resabios feudales. El socialismo —entendido en su definición teórica como democracia perfeccionada, en la cual no sólo las decisiones políticas sino también las económicas y sociales serían tomadas por la mayoría trabajadora manual e intelectual— no podía prosperar en un país sin tradición democrática, mayoritariamente campesino y analfabeto, aislado en un mundo que en su mayor parte conservó el sistema capitalista, políticamente dividido entre la vertiente democrática y la fascista. Probablemente fue inevitable que el poder de los soviets (consejos populares) fuese sustituido sucesivamente por el poder del partido, luego por el de la dirección central del partido, y finalmente por la tiranía de un solo hombre. En vez de democrático, el "socialismo" de la URSS se tornó autoritario y burocrático en extremo, asumiendo muchas de las características despóticas del zarismo de otros tiempos. Según Kautsky y Haya de la Torre, no se trataba de un auténtico socialismo sino de un "capitalismo de Estado". Trotsky calificó la URSS stalinista de "Estado obrero degenerado". El trotskista disidente Max Shachtman definió el sistema soviético como "colectivismo burocrático". Finalmente el politólogo venezolano José Agustín Silva Michelena lo caracterizó como "socialista tendencial": sin ser realmente socialista en su manifestación concreta interna, predicaba el socialismo y alentaba en el mundo exterior las tendencias hacia el ideal socialista. En aras de la sencillez idiomática, aun cuando reconozcamos que el sistema soviético no era realmente socialista, lo llamaremos "socialismo autoritario", diferenciándolo del socialismo democrático o auténtico.

En lo interno, la URSS realizó un proceso de desarrollo material y humano extraordinario durante sus primeras cuatro décadas, pero desde 1960 en adelante su centralismo burocrático constituyó un obstáculo para avances mayores. El sistema

fue eficaz en la etapa de la industrialización básica, de la educación y culturización de masas, y del establecimiento de una ruda pero efectiva justicia social. También lo fue para derrotar al invasor nazi y para reconstruir el país después de la guerra. Posteriormente, sin embargo, se agotaron las fuerzas creadoras de este sistema o el burocratismo las asfixió. Su ideología se convirtió en repetición de frases huecas; la corrupción y el cinismo irrumpieron en su sociedad. Ante los nuevos retos científico-técnicos que requieren un gran caudal de la flexibilidad, de originalidad y de iniciativa creadora individual, el pesado y anquilosado sistema soviético quedó sin capacidad de respuesta. El hecho de que Reagan incrementara la presión armamentista sobre la economía soviética contribuyó a que ésta llegara al límite de sus posibilidades.

En 1985, el socialismo autoritario estalló: había que buscar una salida, bien hacia un nuevo tipo de socialismo democrático y flexible, o hacia la restauración del capitalismo. Mijail Gorbachov, electo a la jefatura del partido y el Estado soviético en ese año, quizás quiso hacer lo primero pero terminó encauzando su país hacia la segunda alternativa. Asombrosamente, jamás intentó definir sus propósitos en términos históricos generales. Al aflojar simultáneamente todas las riendas del poder político y económico y dejarse influir por los aplausos de Occidente, Gorbachov dirigió —entre 1986 y 1991— un galopante proceso de capitulación y autoliquidación del imperio soviético y de la URSS misma. Bajo una dirección política más sagaz tal vez hubiera sido posible una transformación controlada y sobre todo negociada para que, sin dejar de abrir las puertas a la libertad, se conservaran elementos válidos de solidaridad social, y sobre todo se mantuviera el control sobre una esfera geopolítica cuyo súbito colapso creó un vacío y desquició el equilibrio mundial.

La transformación y posterior disolución de la URSS y su bloque causó alegría pero también desconcierto en el Occidente industrializado. Se había "ganado la guerra fría", la economía de mercado había triunfado decisivamente sobre el estatismo, pero había que reorganizar el mundo y reemplazar el bipolarismo con algún nuevo modelo viable.

Estados Unidos, bajo la dirección de George Bush, sucesor de Reagan a partir de 1989, dio pasos para dirigir la construcción de un "nuevo orden mundial" en el cual se mantuviesen alianzas y consensos que normalmente sólo se dan cuando existe un enemigo común. Había que hallar razones que justificaran la continuación de un gasto armamentista indispensable como antídoto a la recesión y que hicieran necesario y aceptable un liderazgo mundial norteamericano.

Estados Unidos actuó, en compañía de los otros dos miembros de la "tríada" predominante —Europa occidental y Japón— para intensificar la pérdida de la "globalización" y la "apertura", la preeminencia del sector privado y la democracia pluralista en escala universal. La potencia norteamericana jugó un rol activo (a través de la ONU que volvió a servirle de foro idóneo) en el "manejo" de los grandes procesos de transformación a partir de 1990: la disolución de la URSS, la desintegración de Yugoslavia, la decisión de extender el "paraguas" de la OTAN hacia el Este para amparar a los países liberados de la anterior hegemonía soviética; el abandono por Rusia de su posición estratégica militante en el Oriente Medio y su aceptación de la hegemonía norteamericana en esa región.

Al mismo tiempo, Estados Unidos encabezó la liquidación o neutralización de

los focos de nacionalismo tercermundista radical. Con el consentimiento de los nuevos gobernantes rusos, ex protectores del nacionalismo revolucionario de países en desarrollo, el presidente Bush y su aparato estratético prepararon y ejecutaron la exitosa "Guerra del Golfo" de 1991, que golpeó y humilló a un nacionalista temerario y resultó en la instalación de la presencia "protectora" de Estados Unidos en todo el Oriente Medio y sobre todo en el Golfo Arábigo-Pérsico. El control estadounidense, y occidental en general, sobre los inmensos recursos petroleros de la región quedó consolidado y asegurado.

También en Africa y en Latinoamérica, la administración norteamericana del presidente George Bush impuso su voluntad predominante, obligando a los gobiernos a pasar de políticas económicas estatistas a nuevas prácticas de apertura y de "inserción en la economía global". A tal fin combinó la presión amenazante con la persuasión benévola, mostrándose a todas luces más tolerante y más flexible en los métodos que la administración del presidente Reagan. Algunos desarrollos indudablemente positivos, tales como el proceso de paz árabe-israelí y la transición de Sudáfrica del *apartheid* a la democracia, fueron posibles gracias al fin de la guerra fría y a la actitud en estos casos esclarecida de los nuevos maestros del mundo.

El presidente William Clinton, demócrata electo en 1992 y que asumió el mando en 1993, continuó en sus grandes líneas la política de Bush, tendió en mayor grado a respetar las susceptibilidades extranjeras y a preocuparse por la democracia y los derechos humanos en el resto del mundo. Procuró que sus acciones de fuerza (caso de Haití) tuviesen contenido democrático y fuesen convalidadas por la ONU. Así mismo, su práctica fue la de asumir papeles hegemónicos sólo después de que otros hubiesen fracasado en el empeño (caso de Bosnia).

Sin embargo, en el fondo socioeconómico, la estrategia exterior norteamericana no dejó de ser la de una persistente imposición de sus propios intereses a otros países. Bajo el disfraz de la "globalización", la política comercial estadounidense presionaba a los demás países a la "apertura" en tanto que mantenía mecanismos neoproteccionistas contra determinados productos extranjeros.

Y no sólo Estados Unidos actuaba en este sentido. No obstante la conclusión, en diciembre de 1993, de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT —que desembocó en la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC)—, los principales centros desarrollados: Unión Europea y Japón, al igual que Norteamérica, usaban todos los pretextos posibles para mantener subvenciones y protecciones a sus sectores socioeconómicos más vulnerables o vitales, y el poder de los grandes Estados seguía uniéndose al de las ETN para impulsar estrategias de penetración comercial y financiera en competencia con otras potencias.

El "nuevo orden mundial", según la visión de algunos teóricos tales como la politóloga norteamericana Susan Strange, podría plasmarse en la formación de un solo "imperio mundial" esencialmente regido por Estados Unidos como única superpotencia. Susan Strange señala que la potencia norteamericana, al igual que Roma antigua y el Imperio británico del siglo XIX, sabe utilizar técnicas de dominación indirecta ("predominio" más bien que dominación evidente), flexible y multiforme, a través de mecanismos no solo político-militares sino también económicos, científico-tecnológicos, académicos, culturales y psicológicos. Su imperio tendrá carácter fundamentalmente "no territorial" o transregional y se apoyará en la lealtad de élites provenientes de todos los pueblos de la tierra.

Frente a esa visión unipolar del mundo futuro, otros teóricos tales como C. Fred Bergsten y Lester Thurow señalan la división del poder económico —y de allí también político— entre por lo menos tres grandes centros que controlan cada uno aproximadamente un tercio del intercambio económico global: Norteamérica, Europa occidental y Asia del Este (Japón). Mientras Bergsten opina que los tres polos podrían conciliar sus intereses y constituir una tríada armónica, Thurow formula predicciones más sombrías de acentuada rivalidad y conflicto.

De hecho, si bien es cierto que, para mediados de la década de los noventa, a veces Estados Unidos, la Unión Europea y Japón actúan de común acuerdo cuando se trata de mantener la paz internacional o reprimir desórdenes intolerables en las áreas periféricas, también es evidente la persistencia y la intensidad de las rivalidades que los dividen. En el plano político-militar, el polo norteamericano es aún predominante, pero en el conjunto multiforme de los intereses regionales y sectoriales se tienden a profundizar las divergencias y las luchas. El sistema internacional actual no es unipolar puro, sino que oscila entre la unipolaridad diluida y una realidad multipolar. Apreciación que se fortalece si se toma en cuenta que, además de la "tríada" ya mencionada, otros centros de poder están afirmando su voluntad de jugar un papel soberano y enérgico en el escenario mundial. Tal es el caso de China, gigante territorial y demográfico que paso a paso avanza en la vía de un desarrollo basado en una combinación de la economía de mercado con un dirigismo político de signo socialista. Y es el caso de Rusia que, luego del gran repliegue efectuado en los años de la restauración capitalista, de nuevo muestra una indeclinable voluntad de ser tomada en cuenta como gran potencia eurasiática.

En todo caso, Estados Unidos —sujeto a tentaciones aislacionistas—, se ve obligado a compartir la dirección del mundo, de rumbo todavía incierto, con por lo menos otros cuatro importantes centros de poder económico, político y cultural. Y tiene que compartirla además con una creciente multitud de factores transnacionales, supranacionales y subnacionales no siempre controlables por la autoridad estatal.

Las ETN y otras organizaciones transnacionales, si bien tienen su origen en el territorio de un solo país y durante un tiempo mantienen su sede en el mismo, en algunos casos pueden liberarse en alto grado del control estatal y pueden convertirse en actores soberanos en la palestra mundial. Ello se hace evidente en ámbitos como los de la informática y las comunicaciones, los servicios financieros, las causas culturales, ideológicas y morales, y las actividades delictivas.

Múltiples factores incontrolables se agregan a los mencionados y contribuyen a su vez a debilitar el Estado nacional, ya sea "desde arriba" o "desde abajo". A la vez que su poder es desafiado por los factores trans o supranacionales, resurgen anacrónicos movimientos de separatismo étnico o provincial: es como si fuerzas de la Edad Media, largamente adormecidas pero no superadas, se despertasen e hiciesen su irrupción en una época que algunos quisieran "posmoderna" cuando en realidad no es más que otra fase de la interminable interacción entre la renovación y la continuidad.

Del seno de la sociedad surgen por lo demás, en todos los países, factores materiales y espirituales que cuestionan tanto al Estado como la política. En parte por la arrolladora propaganda antiestatal y antipolítica de los neoconservadores pero también por la real degeneración de las organizaciones políticas desgastadas

en el poder e incapaces de responder a las necesidades humanas profundas, existe en el mundo de fines del siglo XX un hondo desencanto con respecto a la política y el gobierno como medios para resolver los grandes problemas colectivos.

En general, la gran recesión estructural que se anunció desde 1970 y se manifestó de lleno a partir de 1980 tiene manifestaciones tremendas en todos los planos de la existencia humana y social. La concatenación de efectos disolventes y restrictivos en lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo religioso-ideológico y lo moral, que la población de nuestro planeta está experimentando a medida que se aproxima al año 2000, parece tener algunas similitudes con las crisis que marcaron la caída del Imperio Romano y la decadencia del orden feudal europeo (el terrible siglo XVI).

Existe una amplia tendencia hacia la fragmentación de la sociedad y hacia el individualismo egoísta. Las solidaridades y lealtades tradicionales hacia sectores sociales, naciones, ideologías y sistemas de valores se encuentran en crisis por efecto de la desconcertante rapidez y multiplicidad de los cambiantes impactos económicos, sociales y culturales. Por un lado el individuo, arrancado al ambiente acostumbrado, se siente escéptico ante todas las ideas y estructuras existentes; por otro lado, sus angustias lo hacen proclive a la superstición.

Un fenómeno grave, que apareció sobre todo en los centros desarrollados y prósperos, fue el de la creciente xenofobia y del racismo. Una alta tasa de desempleo siempre tiende a causar suspicacias y rechazo hacia el extranjero, percibido como rival ante los puestos de trabajo. La generosidad internacionalista es propia de etapas de pleno empleo, y el egoísmo xenófobo crece cuando existe alta desocupación. Esta vez, la simultánea crisis de los partidos políticos democráticos y sus doctrinas, incluido el desprestigio del internacionalismo socialista y sindical, abonaron el terreno para las actitudes de extrema derecha. Estas incluyeron intentos de "revisar" la historia en sentido favorable al fascismo y el nazismo.

A medida que empeore la pobreza en el Tercer Mundo y se incremente la presión migratoria del Sur hacia el Norte, el neofascismo y la xenofobia recibirán mayor aliento. En las puertas del tercer milenio, el mundo próspero siente la tentación de edificar un muro de contención, un nuevo "limes" imperial, contra los "bárbaros" del mundo pobre.

El cambio latinoamericano desde 1980

Como se desprende del resumen de los cambios mundiales ocurridos a partir de 1980, la situación de Latinoamérica se tornó difícil en lo económico y en lo político a partir de esa fecha.

1980-1990: deuda externa, empobrecimiento y democratización

La reacción de los centros financieros ante la crisis económica mundial fue, como ya se señaló, la de contrarrestar el efecto recesivo en su propio seno, al costo de un nivel de desempleo inusitadamente elevado y de reducciones del gasto social. Como extensión o corolario de esa estrategia interna, los centros predominantes impusieron también a los países en desarrollo similares (pero agravadas) exigencias

de austeridad y sacrificio. Para contrarrestar la descapitalización en el Norte, se le exigió al Sur, incluida Latinoamérica, que reintegrase rápidamente, con la añadidura de elevados intereses, los grandes fondos que en la década de los setenta se le había prestado bajo condiciones generosas.

En el cuadro 4 resumimos los cálculos de montos de la deuda externa en el hemisferio occidental, sumando obligaciones públicas y privadas para fines de la década de los ochenta, según el autor francés Maurice Lemoine. De esas deudas externas, la colosal de Estados Unidos no se toma en cuenta, ya que se trata de un país desarrollado y poderoso, considerado capaz de cubrir sus obligaciones. De los países americanos en vías de desarrollo, Brasil, México, Argentina y Venezuela son los más endeudados, siendo Venezuela el que tiene la deuda *per capita* más pesada. Para 1990, la deuda externa de América Latina se aproximaba a los 450.000 millones de dólares, diez veces mayor que la contraída para 1975.

En la década de los ochenta, Latinoamérica debió consagrar entre el 30% y el 35% del valor de sus exportaciones al servicio de la deuda externa. Para 1988, cada latinoamericano debía 1.000 dólares a los acreedores foráneos.

Cuadro 4

Deuda externa de los países del hemisferio occidental

(En miles de millones de dólares, para finales de 1980)

Estados Unidos	425,0
Argentina	55,0
Belice	0,1
Bolivia	5,0
Brasil	115,0
Colombia	15,4
Costa Rica	4,0
Cuba	9,0
Chile	24 ,0
Ecuador	7,0
El Salvador	1,5
Guatemala	3,3
Guayana	0,8
Honduras	2,0
México	110 ,0
Nicaragua	6,0
Panamá	3,0
Paraguay	1,6
Perú	18,0
Surinaine	0,3
Uruguay	5,5
Venezuela	42,0

Fuente: Maurice Lemoine, 1988.

De modo general, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había guiado u orientado a los bancos privados del Norte en su estrategia de préstamo a Latinoamérica antes de 1980. Los fondos recibidos por los países latinoamericanos fueron empleados en forma desacertada y parcialmente despilfarrados. Importantes sumas fueron robadas. Demasiado se dedicó a gastos corrientes y no a infraestructuras y proyectos rentables.

La culpa es compartida por los acreedores y asesores en el mundo industrializado y por los gobernantes y empresarios de la periferia deudora. Como señaló John K. Galbraith en 1986: "Al alentar proyectos insensatos, los gobiernos insensatos han logrado recabar créditos de manos de banqueros igualmente insensatos. Ese festival de absurdos no honra en absoluto al sistema capitalista y constituye una ofensa al régimen democrático".

En 1983 se cerró definitivamente "la trampa de la deuda". Aparte de que ya los bancos habían aumentado las tasas de interés y presionaban a favor de un pago acelerado de las obligaciones, el FMI se negó a seguir aumentando los derechos especiales de giro (DEG) para los países en desarrollo. Al mismo tiempo inició la práctica de condicionar intransigentemente cualquier nuevo crédito o reestructuración de deuda: para ser tratado con alguna consideración, el país deudor debía obligarse a renunciar a prácticas dirigistas y abrazar la doctrina neoconservadora en muchos puntos importantes: reducción del gasto público, apertura comercial, reforma fiscal, trato deferente a las inversiones extranjeras y a la "propiedad intelectual" foránea. Esencialmente, debían abandonarse las políticas económicas nacionalistas o de "crecimiento hacia adentro" que América Latina venía aplicando desde hace medio siglo.

Las democracias latinoamericanas se movieron a partir de 1984 para tratar de enderezar la situación y defender la región de la ofensiva de los acreedores. En enero de ese año, unos treinta países de América Latina y el Caribe emitieron la Declaración de Quito, en la cual vocearon la necesidad de coordinar esfuerzos y políticas frente al estrangulamiento que todos estaban sufriendo. En mayo del mismo año, los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia y México emitieron un llamado para una reunión de todos los Estados latinoamericanos y del Caribe con ese mismo propósito. En junio, los mandatarios de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela dirigieron un llamado al Grupo de los Siete (las potencias más fuertes y prósperas del mundo capitalista) para que cambiasen de actitud hacia el Sur. Los Siete, reunidos en Londres, respondieron en tono positivo y conciliatorio: la aparente determinación de los latinoamericanos a formar un "club de deudores" que luego podría extenderse a otras regiones en desarrollo los había impresionado. Reconocieron, en principio, que debía buscarse una reducción de las tasas de interés, la fijación de plazos más largos para los pagos y la reanudación del flujo de recursos financieros hacia la periferia.

Del 21 al 22 de junio de 1984 se reunieron en Cartagena de Indias los cancilleres y ministros de finanzas de once países latinoamericanos y adoptaron una serie de postulados conjuntos que recibieron el nombre de "Consenso de Cartagena". Ese consenso formula pronunciamientos políticos, propone medidas para aliviar la carga de la deuda y recomienda mecanismos institucionales para aplicar dichas medidas. Los pronunciamientos políticos tienden a afirmar la corresponsabilidad de deudores y acreedores, la necesidad de un diálogo político sobre el problema de la

deuda, la disposición a compartir los necesarios sacrificios entre países deudores y acreedores y la vinculación del problema de la deuda con los del financiamiento externo y del comercio exterior. Las medidas concretas propuestas abarcan la reducción de las tasas de interés, un financiamiento compensatorio de sus alzas, un aplazamiento del pago de intereses, la fijación de plazos según la capacidad de recuperación económica de los países deudores, una modificación de las normas bancarias de los países acreedores, la complementación de la renegociación económica con el diálogo político, reformas en el funcionamiento del FMI y el Banco Mundial, y un mejoramiento de las condiciones del comercio internacional por medidas contra el proteccionismo de los centros industriales y contra el deterioro de los términos de intercambio. En lo institucional, el Consenso contempla la creación de un mecanismo de seguimiento y consulta regional.

En un primer momento, los países acreedores sintieron alivio y agrado por el carácter pragmático y no retórico-ideológico de esas propuestas. Varios países latinoamericanos tales como Argentina, Brasil, México y Venezuela intentaron renegociaciones de sus deudas en la segunda mitad de 1984 y lograron algunas ligeras concesiones por parte de la banca acreedora.

Sin embargo, en 1985 volvió a empeorar la situación de los países deudores por un nuevo endurecimiento de los centros financieros, y se profundizó el estancamiento económico de América Latina. Ante ello, el presidente peruano Alan García decidió no aceptar más las condiciones del FMI y no pagar para servicio y amortización de su deuda externa más del 10% de los ingresos por exportaciones. Fidel Castro, por su parte, convocó a una gran conferencia de políticos, técnicos e intelectuales latinoamericanos, en La Habana, sobre el problema de la deuda. En esa conferencia a la que asistieron personas de ideologías muy diversas, se llegó a la conclusión por consenso de que "la deuda es impagable".

El secretario del Tesoro estadounidense, James Baker, en 1985 anunció un plan que establecía ciertos criterios universales para el tratamiento del problema de la deuda tercermundista, con la intención de que el peso de ésta no llegase hasta el punto de impedir "un crecimiento sostenido". Según el Plan Baker, el Norte aportaría a los países más endeudados del Sur una suma de 40.000 millones de dólares para ayudarles a cumplir sus obligaciones y crecer económicamente al mismo tiempo. Debía buscarse un equilibrio entre el crecimiento, las balanzas de pago y la lucha contra la inflación. Así mismo, se reconocía el carácter político a la vez que financiero del problema de la deuda externa. Los presidentes del Consenso de Cartagena, reunidos en Montevideo a fines de ese año, reconocieron las buenas intenciones y los aspectos positivos del Plan Baker. Sin embargo, los años 1986 y 1987 fueron desastrosos para los países deudores. Los alivios previstos en el Plan Baker no se pusieron en práctica, y los países deudores por su parte dejaron de actuar solidariamente. Un llamado a la acción concentrada y al diálogo global, lanzado en 1987 por el Grupo de los Ocho (México, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil) reunido en Acapulco, tuvo poco efecto.

En 1989, el Nicholas Brady, secretario del Tesoro de la administración del presidente George Bush, propuso un plan que representó un paso de avance con respecto al Plan Baker. Recogiendo algunas de las propuestas que los presidentes de los países deudores habían formulado en Caracas en febrero de 1989, Brady aceptó que:

— el problema de la deuda externa es de índole política y debe ser discutido conjuntamente por los gobiernos de los países acreedores y deudores;
— el volumen de la deuda debe reducirse mediante su transformación parcial en bonos subsidiarios y garantizados por los Estados acreedores;
— las tasas de intereses y los lapsos de pago deben ser revisados y estabilizados.

Aunque el Plan Brady significaba una liberalización de la actitud de los acreedores, al mismo tiempo conllevaba dos graves inconvenientes para los países deudores: en primer término, transformar parte de la deuda en bonos dispersos en las manos del gran público, hace que ésta no pueda ser renegociada; en segundo lugar, crear subsidios y garantías estatales a dichos bonos, involucra a la masa de los contribuyentes del Norte y añade un nuevo elemento, de carácter popular y multitudinario, a las presiones que se ejercen sobre las naciones deudoras.

Entre los factores que influyeron en Bush y Brady para buscar un alivio a la deuda latinoamericana está el estallido social que ocurrió en Venezuela el 27 de febrero de 1989.

No obstante los ligeros alivios aportados por el Plan Brady, América Latina siguió siendo exportadora neta de capitales hacia el Norte. En términos globales, la región efectuó entre 1982 y 1990 una transferencia neta de recursos hacia los países industrializados por un valor aproximado de 233.000 millones de dólares (163.000 millones en pago de la deuda externa, más de 70.000 millones por concepto de fuga de capitales privados). Como nunca antes, el mundo rico extraía del mundo pobre los recursos para remediar su propia crisis y financiar su propio crecimiento.

Entre 1983 y 1990 el crecimiento económico de América Latina bajó a un promedio de 1,5% al año. En vista de que la población crecía al ritmo anual de 2,1%, el bajo crecimiento económico significaba un descenso del ingreso real *per capita* en -0,6% al año. La "década perdida" no era, pues, de mero estancamiento, sino de retroceso hacia niveles apenas superiores a los de 1970.

El descenso económico tuvo graves consecuencias sociales en la mayoría de los países latinoamericanos. Por efecto del desempleo, las quiebras y las menguas de ingresos estables, amplios sectores de la población se vieron impulsados a cambiar de ocupación o de residencia. Creció la presión migratoria desde las zonas más deprimidas de la región hacia los centros relativamente más prósperos. Junto con la expansión de los "sectores informales" de las economías latinoamericanas, también crecieron las actividades ilegales o delictivas. Entre éstas descolló el narcotráfico, que conoció un auge impresionante desde 1980 en adelante y que para la década de los noventa llegaría a constituir uno de los grandes temas conflictivos en las relaciones exteriores de Latinoamérica.

Otro problema conflictivo y preocupante sería el de la lucha por impedir la destrucción y contaminación del medio ambiente en nuestra región. También este asunto se vincula con la situación socioeconómica: en países como Brasil, y otros de la subregión amazónica, contingentes humanos excluidos de la economía formal se arrojaban sobre las zonas vírgenes, talando bosques y contaminando aguas, en búsqueda de minerales preciosos o de tierras explotables. Como se explicará más adelante, tanto el narcotráfico como la ecología se convertirían después de 1990 en temas de debate y negociación entre el Norte y el Sur.

No obstante el crecimiento socioeconómico, en la década de los ochenta se inició en Latinoamérica un positivo proceso de desmilitarización y democratiza-

ción política. A partir de 1983, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, sucesivamente, salieron del autoritarismo castrense y retornaron al sistema de la democracia representativa. Hasta la sufrida República de Haití se liberó del peor despotismo e inició un accidentado proceso de evolución hacia la libertad.

Estados Unidos en ocasiones pretendió haber sido, desde el principio, causante y propiciador de esa evolución democrática latinoamericana, pero tal versión no se ajusta a la verdad. Hasta 1983, el gobierno del presidente Reagan se limitaba a ejercer presiones a favor de la libertad económica o de empresa, y no actuaba para promover la democracia política. Los teóricos conservadores norteamericanos —Grupo de Santa Fe y Jane Kirkpatrick— establecieron una distinción entre el llamado "autoritarismo" (dictadura de derecha favorable a la empresa privada) y el "totalitarismo" (dictadura de izquierda con economía estatizada). Para la profesora Kirkpatrick, el "autoritarismo" era tolerable y hasta necesario en ciertos casos, en tanto que el "totalitarismo" debía ser atacado y destruido implacablemente. Cuando se inició el proceso de democratización política en Latinoamérica a partir de 1983, el presidente Reagan y sus asesores quedaron sorprendidos. Comenzaron a revisar sus tesis y se convencieron de que, efectivamente, para los intereses del Norte era conveniente la existencia de gobiernos pluralistas en el Sur. De entonces en adelante, el discurso oficial estadounidense enfatizaba la lucha por la democracia representativa en el hemisferio. Pero los primeros impulsos de democratización en la región tuvieron causas eminentemente endógenas.

Esas causas endógenas del retiro de los militares del gobierno a sus cuarteles pueden resumirse de la manera siguiente:

1. Desprestigio moral y político de los regímenes y estamentos militares. Algunos gobernantes militares incurrieron en delitos de narcotráfico o de grave corrupción administrativa. Por otra parte, provocaron horror y repudio por la crueldad de sus represiones. No supieron gobernar sin caer en los mismos vicios de incapacidad que habían criticado a los políticos civiles. En casos de acción armada mostraron irresolución y debilidad en contraste con su inicial temeridad y jactancia.

2. Maduración cívica de la sociedad latinoamericana y sus élites civiles a partir de las décadas expansivas y dinámicas de los sesenta y setenta. La gradual elevación del nivel educativo de las masas y el crecimiento y fortalecimiento de las capas medias profesionales e intelectuales, junto con una mayor comunicación informativa y cultural con el resto del mundo, contribuyeron a la formación de amplios frentes civiles, unidos por encima de divergencias ideológicas para relevar a los gobernantes militares a través de una mezcla de presiones y negociaciones.

3. Renuncia de los militares a seguir ejerciendo el poder en un período de vacas flacas. En tiempos de recesión, desocupación e inflación, todo gobernante cae forzosamente en la impopularidad. Era el momento apropiado para retirarse a los cuarteles y dejar que los civiles asumieran la ingrata tarea de gerenciar la crisis. Por la misma razón, no se puede descartar el temor de que, en una futura coyuntura de bonanza renovada, la tentación cesarista pueda volver a levantar la cabeza.

El cambio en la actitud estadounidense, del tradicional beneplácito otorgado a regímenes autoritarios conservadores a una nueva línea de resuelto apoyo a la democracia política, parece obedecer a los siguientes motivos fundamentales:

a) La comprobación de que, para la década de los ochenta, casi todos los políticos civiles de Latinoamérica habían evolucionado del dogmatismo ideológico

a un mayor pragmatismo, una amplia disposición al diálogo tolerante, y una aceptación generalizada de la idea de que cualquier proyecto político factible tenía que basarse en la aceptación de la economía de mercado. Esa evolución formaba parte de un proceso socio-psicológico universal, y se nutría del ascenso y crecimiento de las capas medias modernas, baluartes de la moderación y el sentido común. Por lo demás, el carácter realmente pluralista de los nuevos gobiernos democráticos de Latinoamérica y del Sur en general abre amplios espacios para el ejercicio de influencias y presiones foráneas de tipo sutil y directo, convirtiéndose los gobiernos del Norte o ETN en auténticos actores "internos", a través de representantes o agentes locales, en la forma de decisiones de los "blandos" países del Sur.

b) La comprensión, igualmente importante, del hecho de que los regímenes cesaristas, por su efectivo control del poder nacional, poseen la capacidad de asumir posiciones autónomas y antihegemonistas, si así lo desean. Nunca serán instrumentos totalmente dóciles en manos de una potencia imperial o transnacional externa.

Ya en 1968, los militares peruanos, pese a todos sus vínculos "interamericanos", establecieron un régimen nacional-revolucionario y autonomista que causó graves preocupaciones a los estrategas occidentales de la guerra fría. Al mismo tiempo, en Panamá la fuerza armada dirigida por el general Omar Torrijos estableció un régimen de avance popular en lo interno y antihegemonista en lo internacional.

Los gobernantes militares brasileños, por más que apoyaron al bloque occidental y combatieron la influencia soviética en el contexto de la guerra fría, mantuvieron una estrecha alianza con una burguesía nacional reacia a someterse a las ETN y deseosa de edificar un capitalismo autónomo, utilizando para ello una política de dirigismo estatal de tipo "bismarckiano".

Finalmente, Washington sufrió la preocupación e irritación ocasionada en 1982 por la junta militar argentina que, para contrarrestar su creciente desprestigio interno, tomó la iniciativa de ocupar por la fuerza las Islas Malvinas, pese al hecho de que la reclamación argentina del archipiélago se estaba ventilando pacíficamente en el seno de la ONU desde 1965. En el conflicto de 1982 se produjo una amplia manifestación de solidaridad latinoamericana con Argentina en contra de la expedición naval británica: solidaridad que unió a demócratas y dictatorialistas en la afirmación unánime de un nacionalismo regional latinoamericano que sorprendió profundamente a los europeos, convencidos de que los demócratas latinoamericanos agradecerían a la señora Thatcher su acción bélica "antidictatorial". Para Estados Unidos el episodio fue incómodo en extremo: al demostrar que obviamente su alianza transatlántica con Gran Bretaña tenía prioridad sobre sus viejos compromisos "monroistas", disminuía un tanto más su credibilidad ante los latinoamericanos. Sin duda tal experiencia debió alentar una revisión crítica de la actitud de Estados Unidos ante unas dictaduras militares capaces de tan bruscas e inconsultas iniciativas perturbadoras del orden hemisférico y mundial.

El retorno a la democracia en los países sudamericanos hizo posible importantes avances en la senda de la concertación y cooperación regional. Ya se detalló la forma como los presidentes democráticos actuaron de común acuerdo para defender los intereses de los países deudores frente a los acreedores, entre 1983 y 1989. Durante el mismo período se desarrolló una importante acción conjunta de gobiernos democráticos latinoamericanos con el fin de resolver conflictos intrarregionales e impedir que Estados Unidos interviniese en ellos de manera violenta.

El Caribe y Centroamérica se transformaron en zonas conflictivas durante la década de los ochenta. Tanto en el Caribe de habla inglesa como en el istmo centroamericano, movimientos radicales de liberación nacional y social empuñaron las armas contra regímenes autoritarios y oligárquicos, y los conflictos resultantes desbordaron el límite regional para insertarse en la guerra fría. Sin embargo, a través de excepcionales y exitosos esfuerzos de mediación y conciliación, los países latinoamericanos democráticos lograron que, en lo referente a Centroamérica, finalmente se alcanzasen, pese a todo, soluciones de tipo regional.

En 1979, en la pequeña antilla angloparlante de Grenada —población de 120.000 habitantes; economía basada en la exportación de la nuez moscada—, un movimiento popular y democratizador insurgió contra la dictadura de un ex luchador independentista corrompido en el poder. Bajo la dirección de Maurice Bishop y del partido New Jewel Movement se formó un régimen revolucionario inspirado en parte por la tradición del socialismo británico (*corriente fabiana*) y en parte por el tercermundismo radical y el mensaje de la revolución cubana.

Estados Unidos de inmediato rechazó al gobierno revolucionario por su radicalismo verbal y sus conexiones ideológicas con Cuba, y lo consideró "hostil" y "peligroso". Según los servicios secretos norteamericanos, Grenada podría convertirse en una potencial base aeronaval del bloque comunista.

En vista de que Venezuela, geográficamente cercana y con una política ya consagrada de cooperación con el Caribe anglófono vaciló en ayudar técnica y económicamente al régimen de la isla, éste se tornó cada vez más hacia Cuba, cuyos dirigentes no tuvieron tales vacilaciones. De ese modo se acentuó cada vez más la inserción de Grenada en la guerra fría entre bloques estratégicos.

La socialdemocracia europea hizo esfuerzos por contrarrestar esa tendencia y por abrir para Grenada un "tercer camino" entre Estados Unidos y el campo cubano-soviético. Maurice Bishop estuvo dispuesto a escuchar los consejos socialdemócratas de moderación y de diferenciación con respecto al bloque comunista. El propio régimen cubano lo alentaba en esa tendencia: en la Habana se sabía muy bien que en el Caribe y Latinoamérica no podía tener cabida una "segunda Cuba".

Pero en octubre de 1983 el primer lugarteniente de Bishop, el ambicioso y dogmático Bernard Coard, dirigió un insensato y provocador golpe de Estado contra su jefe y ex amigo, y lo asesinó. Ese acto criminal —repudiado con honor e indignación tanto por Cuba como por las fuerzas democráticas moderadas de Latinoamérica y el mundo— despejó el camino para la intervención armada de Estados Unidos, país que ocupó la isla a fines de ese año poniendo fin a su proceso revolucionario.

Si en el caso de Grenada la comunidad democrática latinoamericana se mostró impotente, en cambio sí logró un insigne éxito durante los años ochenta en la tarea de insertarse como tercera fuerza pacificadora y mediadora en los conflictos que estallaron en Centroamérica entre fuerzas revolucionarias de izquierda y las de derecha apoyadas por Estados Unidos.

Desde la intervención contra Arbenz en 1954, el istmo centroamericano (con la notable excepción de Costa Rica democrática) permaneció bajo el control inmutable de oligarquías terratenientes aliadas con empresas transnacionales fruteras. Dicho control se ejercía con mano dura a través de estamentos militares dóciles ante los factores conservadores del hemisferio. Entre los dictadores tradicionalistas

de la subregión, el más duradero y notable fue Anastasio Somoza Debayle, hijo del fundador de esa formidable dinastía regidora de los destinos de Nicaragua.

En 1978, el asesinato del editor nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro hizo estallar una fuerte rebelión armada: por primera vez la burguesía nacional hizo causa común con los radicales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). A fines de 1979, otra situación revolucionaria se produjo en El Salvador: luego del derrocamiento de la dictadura del general Carlos Humberto Romero, surgió una división entre el gobierno de centro-derecha (Democracia Cristiana y Fuerzas Armadas) presidido por José Napoleón Duarte, y una alianza de izquierda integrada por fuerzas socialdemócratas, marxistas y cristianas progresistas, eventualmente coaligadas en el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). En Guatemala, durante la misma época, estallaron fuertes luchas civiles entre el ejército oficial y organizaciones guerrilleras de izquierda que posteriormente se unieron en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Un hecho interesante y significativo es el de que en esta amplia guerra civil centroamericana no se trataba de un choque de los bandos ideológicos de la guerra fría —marxistas *versus* defensores del capitalismo—, sino que los factores determinantes eran de naturaleza endógena. La revolución del pueblo campesino, obrero y de clase media contra las tiranías político-militares y oligárquicas era auténtica y hondamente sentida (en Guatemala, al ingrediente de lucha social se le agregaba el de protesta étnica de los indígenas). En los bandos revolucionarios reinaba la diversidad ideológica: al lado de marxistas-leninistas vinculados a Cuba y al bloque soviético, combatían socialistas democráticos afiliados a la IS (socialdemócrata) y cristianos progresistas originalmente procedentes de la DC pero ganados por las ideas de la Teología de la Liberación.

Cuba misma —mirada por los sectores marxistas como meca revolucionaria infalible— rechazaba ese papel e instaba a sus fieles a que colaborasen lealmente con socialdemócratas y cristianos, se abstuviesen de dogmatismos intolerantes, y orientasen su estrategia no hacia la construcción de "nuevas Cubas" imposibles sino hacia sociedades democráticas pluralistas, basadas en economías mixtas (sector privado/sector público).

Washington no creía en soluciones "terceristas" y miraba a las fuerzas revolucionarias centroamericanas como partes del bloque adverso. Cuando en Nicaragua se constituyó el frente armado de los contrarrevolucionarios ("contras") para luchar contra el régimen sandinista implantado luego de la caída de Somoza, el gobierno del presidente Reagan les suministró asistencia militar activa y la continuó clandestinamente hasta después de que el propio Congreso norteamericano la prohibiera. Llevó su apoyo a la lucha antisandinista hasta el punto de colocar minas frente a los puertos nicaragüenses. Como intento de justificación, alegaba que los sandinistas a su vez estaban ayudando al FDR-FLMN contra el gobierno de Duarte y a la URNG contra el régimen guatemalteco.

Alentados moralmente por ciertos factores políticos europeos, sobre todo socialdemócratas, cuatro países latinoamericanos democráticos y autonomistas —Colombia, México, Panamá y Venezuela— acordaron unificar sus esfuerzos para promover la paz en Centroamérica y evitar una intervención armada de Estados Unidos. Sus cancilleres tomaron la decisión pertinente en una reunión celebrada en

la isla panameña de Contadora en enero de 1983, razón por la cual a estos cuatro países se les dio el nombre de "Grupo de Contadora".

Entre 1983 y 1985, los presidentes y cancilleres de Contadora trabajaron incansablemente con el fin de promover una paz democrática en América Central. Junto con los gobiernos del propio istmo, elaboraron un plan de paz en septiembre de 1984. Con diversas revisiones y modificaciones, el contenido de ese plan sirvió de base para la pacificación paulatina de Nicaragua.

Mecanismos similares fueron elaborados para su aplicación en El Salvador y en Guatemala.

A partir de agosto de 1985, el Grupo de Contadora contó con el activo respaldo diplomático de cuatro países sudamericanos recién liberados del autoritarismo militar —Argentina, Brasil, Perú y Uruguay— que se reunieron en Lima para constituir el llamado Grupo de Apoyo. Por etapas, los cuatro de Contadora y los cuatro del Grupo de Apoyo lograron la pacificación centroamericana y luego, conocidos ya como el "Grupo de los Ocho" ampliaron sus consultas y concertaciones para abarcar también otros temas de interés regional, hemisférico y mundial. Luego de abrirse a la participación de otros países democráticos adicionales, en la década de los noventa fueron conocidos como el "Grupo de Río", principal órgano de consulta y concertación política de América Latina.

Lamentablemente para la evolución autonómica de América Latina, las democracias de la región no pudieron evitar una intervención militar estadounidense en la República de Panamá en1989. En 1981 perdió la vida en un accidente de aviación el gobernante Omar Torrijos, insigne patriota y tribuno, y le sucedió en el mando el general Manuel Noriega, de carácter controvertido. A la vez que parecía ser continuador del nacionalismo y del sentido de equidad social de su precedesor, tenía disposición a moverse en el oscuro mundo de la conspiración y el espionaje, y al parecer fue infiel a compromisos contraídos con los servicios secretos de Estados Unidos para volcarse hacia Cuba y otros factores adversos a la potencia norteamericana. Al mismo tiempo, tuvo contactos con los carteles narcotraficantes, y la fiscalía general estadounidense lo acusó de participación activa y de enriquecimiento personal en el negocio de la droga.

Luego de dos años de intensas presiones para que Noriega renunciara (dirigentes democráticos de América Latina y de Europa trataron de convencerlo para que así lo hiciera antes de que fuese demasiado tarde), Estados Unidos invadió Panamá en diciembre de 1989, a raíz de incidentes entre guardias panameños y militares norteamericanos.

La ocupación militar de Panamá con las tropas del Norte requirió varios días de intenso combate contra los "batallones de la dignidad" panameños y ocasionó la muerte de más de mil civiles. El general Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica, cuyo titular lo convenció de entregarse a las fuerzas norteamericanas. Fue juzgado en el estado de Florida y condenado a cuarenta años de prisión.

El problema del narcotráfico sirvió de pretexto en este caso para una reorganización profunda de Panamá en el sentido que convenía a los ocupantes: eliminación de las instituciones del nacionalismo torrijista, incluida la Fuerza de Defensa que, según los Tratados Torrijos-Carter, debía asumir en el futuro la defensa del Canal.

De 1990 en adelante: liberalización económica; integración, nuevos problemas Norte-Sur; retos sociales y de identidad

Ante el funesto panorama socioeconómico de la "década perdida", la reacción inicial de los países latinioamericanos había sido la de tratar de contrarrestar el desequilibrio de su balanza externa por una política comercial neomercantilista, de estímulos a la exporatción y restricción a las importaciones. Pronto se percataron de que tal medicina no curaba la enfermedad. El gasto público destinado a compensar el desequilibrio externo causó déficit equivalentes al 10% del PIB. La inflación creció enormemente, adquiriendo características de hiperinflación en algunos países.

Para fines de la década, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos había llegado a la conclusión de que la descapitalización y la recesión sólo podían superarse con la apertura económica y una desestatización que atrajese inversiones extranjeras como única fuente de financiamiento capaz de acabar tanto con el drenaje de recursos hacia el exterior como con la inflación interna. Había que hacer caso a la prédica de las instituciones financieras internacionales y a sus voceros académicos. Se veía como inevitable un viraje del modelo "cepalista" de sustitución de importaciones y crecimiento hacia adentro, al nuevo modelo de apertura, privatización e "inserción en la economía global". Hasta gobernantes de trayectoria nacionalista y socialista democrática reconocieron que había que dar "marcha atrás" hacia una más plena aceptación de la economía de mercado y una actitud menos recelosa ante las empresas transnacionales. Junto con las necesidades financieras apremiantes y las presiones del Norte, el colapso de la bipolaridad y la merma del poder negociador del Tercer Mundo imponían el viraje.

Las nuevas políticas de ajuste y apertura dieron resultados positivos de crecimiento macroecónomico general, pero afectaron negativamente la autonomía nacional. La apertura comercial y la nueva necesidad de hacer frente a la competencia extranjera alentó a algunos sectores productivos latinoamericanos a aceptar el reto de la modernización. Industrias artificiales e inviables quedaron eliminadas. Pero por otro lado se vio perjudicado el desarrollo industrial y tecnológico autónomo. Empresas latinoamericanas pequeñas y medianas perdieron demasiado bruscamente el mínimo de protección que necesitaban —y que en otras partes del mundo sí reciben— y fueron llevadas a la quiebra. Al mismo tiempo una arrolladora prédica ideológica neoliberal sacudió las bases de la identidad nacional cultural de algunos países de la región. Una apertura menos brusca y más selectiva —tal como la practicaron algunos países del sudeste asiático— hubiera podido evitar estos males, pero en Latinoamérica penetró en forma brutal la versión más extrema del neoconservadurismo, pregonado sobre todo por jóvenes tecnócratas formados en universidades norteamericanas. Por otra parte, las nuevas políticas de ajuste y apertura tuvieron un elevado costo social. La eliminación de aranceles proteccionistas y de subsidios, la liberación de los precios de consumo y la reducción del gasto público social golpearon y empobrecieron en forma múltiple y severa a los pequeños y medianos empresarios, la clase trabajadora y media asalariada y los sectores populares en su conjunto. El desempleo y la quiebra de empresas pequeñas y medianas se vieron incrementados; la reducción de los programas sociales afectó los niveles de salud, educación y vivienda; aumentó la concentración de la riqueza

en pocas manos y bajó el nivel de los salarios reales. En todos los países latinoamericanos, con excepción de Brasil, el gasto *per capita* en salud y educación se redujo dramáticamente entre 1980 y 1988: la reducción regional media fue de 25% en los gastos de salud y 13% en los gastos de educación.

Desde 1980 en adelante, en Latinoamérica ha tendido a concentrarse cada vez más el control y disfrute de la riqueza. Según la CEPAL, en 1980 el 10% más rico de la población poseía un volumen de ingresos 21 veces superior al ingreso del 40% más pobre. Para 1990, el 10% más privilegiado absorbía un ingreso 27 veces mayor al que recibía el 40% menos favorecido.

En cuanto a las cifras de pobreza (condición que no permite gastos más allá de la alimentación y otras necesidades básicas) y la indigencia o pobreza extrema (situación de hambre y existencia subhumana), la evolución parece haber sido la que muestra el cuadro 5.

El PNUD calcula que para el año 2000 Latinoamérica tendrá una población de 515 millones de habitantes, de los cuales 126 millones (cerca de un cuarto) se encontrarán en situación de pobreza extrema.

Simultáneamente con la apertura o liberalización de las economías latinoamericanas, la integración económica regional y subregional recibió nuevos impulsos.

Las iniciativas de integración latinoamericana datan, como se sabe, de los años sesenta de este siglo. En 1960 fue creada en Montevideo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que posteriormente, en 1980, asumiría el nombre de Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Se creó con el propósito de impulsar la liberación comercial entre todos los países de la región y servir de "paraguas" a los diversos programas de integración subregionales. El primero de dichos programas subregionales fue el Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado en 1960. En 1965 fue fundado por los países angloparlantes del Caribe, recién independizados, un segundo esquema subregional: la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA), posteriormente ampliada y fortalecida bajo el nombre de Comunidad del Caribe (CARICOM) a partir de 1973. En 1969, el Acuerdo de Cartagena dio origen al llamado Pacto Andino integrado por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y (a partir de 1973) Venezuela. Por impulso de la ALALC y de los esquemas subregionales, para 1980 el 14% del comercio exterior global de Latinoamérica se realizaba dentro de la región.

Cuadro 5

Cifras de pobreza, 1970-1990

Año	Pobreza (%)	Indigencia (%)
1970	40	19
1980	35	15
1990	44	21

Fuente: CEPAL, citada por Alain Touraine, 1988, p. 30, y Bernhard Thibaut *Lateinamerika am Ende des 10. Jahrhunderts*, pp. 128 y 129.

Durante ese mismo lapso de 20 años (1960-1980), el desarrollo económico general de Latinoamérica fue estimable, y se efectuó dentro del marco —hoy tan despreciado— del modelo de sustitución de importaciones. Las economías latinoamericanas tuvieron durante ese período un crecimiento dos veces mayor que el de los países desarrollados. A pesar de que se critica el mencionado modelo por su énfasis en el "crecimiento hacia dentro", su aplicación conllevó una extraordinaria expansión de las exportaciones latinoamericanas. Dentro de ellas, la proporción correspondiente a los bienes manufacturados aumentó del 3,6% en 1960 al 17% en 1979.

Después del retroceso de la "década perdida", a comienzos de los años noventa se reanudó el crecimiento y se dio nuevo impulso a la integración regional y subregional, esta vez bajo los nuevos signos de la liberación comercial y la apertura a las inversiones extranjeras. El Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena tuvo avances institucionales importantes, adoptando un arancel externo común a comienzos de la década, y transformándose en Comunidad Andina a raíz de la Cumbre de Trujillo (Perú) en 1996. Sin embargo, el hecho de que la mitad de su volumen de intercambio interno se realizaba entre sólo dos de sus países miembros —Colombia y Venezuela—, y que durante varios años existieron fricciones políticas entre otros Estados participantes, hizo que ante los ojos del mundo el esquema de integración andino tuviese menor relevancia que el nuevo y vigoroso Mercado Común del Sur (MERCOSUR), creado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a través del Tratado de Asunción en 1991. Políticamente, la firma del instrumento significó un paso hacia la superación de la histórica rivalidad entre los "gigantes" Brasil y Argentina. El gran "peso específico" del espacio del MERCOSUR —población de 193 millones, superficie territorial de 12 millones de kilómetros cuadrados, producto interno bruto de 553 millones de dólares—, así como la voluntad de diversificar y equilibrar sus relaciones económicas exteriores entre Norteamérica, Europa, Asia, Africa y América Latina misma, hicieron que apareciese como el polo más importante de desarrollo soberano y dinámico en América Latina.

En el área del Caribe, los países de la CARICOM tomaron la iniciativa, en 1993-1994, de impulsar, junto con los países ribereños del Grupo de los Tres (Colombia, México, Venezuela) y con los Estados de América Central, la creación de una Asociación de Estados del Caribe (AEC). Esa agrupación, cuyo propósito es la consulta y la concertación para promover una mayor integración y cooperación en el macro-Caribe, incluye los países y grupos de países ya mencionados, además de Cuba, República Dominicana, Haití y numerosos territorios no soberanos (dependencias holandesas, francesas y británicas). Debido a la presencia de Cuba, el gobierno norteamericano se opuso a la participación de sus propias dependencias, Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses. Entre los propósitos de los fundadores de la AEC está el anhelo de vincular más a Hispanoamérica con los países caribeños de habla inglesa, holandesa y francesa y, por otra parte, el afán de alentar a México para que mantenga sus compromisos con el Caribe, no obstante sus fortalecidos lazos de integración con América del Norte.

En su nueva etapa de integración (esta vez con la participación del capital transnacional y no, como en épocas pasadas, suspicaz ante el mismo), Latinoamérica, a mediados de la década de los noventa, llegó a efectuar el 23% de su intercambio comercial dentro de la región misma. Un 36% del intercambio exterior

global se realizaba con Norteamérica y el remanente se dividía entre Europa, Asia, Africa y Oceanía. Por razones geopolíticas y geoeconómicas evidentes, el norte de América Latina tiene vínculos económicos más importantes con Estados Unidos que el sur, equidistante de los grandes centros industrializados.

Preocupado por los avances comerciales logrados en la región latinoamericana por Europa occidental y Japón, el gobierno de Estados Unidos ha dado pasos para reafirmar su vocación de líder y principal socio económico de los países de las Américas. Para ello, promueve el concepto de una integración Norte-Sur (entre centros industrializados y países en desarrollo), por encima del esquema de la integración Sur-Sur (entre naciones en desarrollo). Su discurso internacional evita la mención de cualquier diferencia estructural y de intereses entre las regiones desarrolladas y no desarrolladas.

El presidente George Bush, en 1990, presentó la llamada Iniciativa para las Américas (IPA). Esta constituye una ampliación de otros proyectos anteriores de creación de una vasta zona de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. La Iniciativa es la continuación histórica del proyecto que presentó James Blaine 100 años antes, ante la Primera Conferencia Panamericana. Pero esta vez fue recibido con espíritu más positivo por los países latinoamericanos que, agobiados por la deuda externa y la recesión, esperaban que el libre comercio hemisférico pueda aliviar o subsanar sus dificultades. Además, a diferencia del proyecto de Blaine, el de Bush prevé una integración "abierta".

Por otra parte, Estados Unidos, en colaboración con el presidente de México Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), promovió la elaboración y adopción del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN, NAFTA o TLC). Por ese acuerdo, el sistema de libre comercio ya vigente entre los dos países industrializados de Norteamérica —Estados Unidos y Canadá— sería ampliado hacia el Sur para abarcar un país en desarrollo, México. El presidente Salinas de Gortari, de formación académica norteamericana e influido por las ideas económicas neoliberales, estaba convencido de que los nuevos tiempos requieren una revisión radical de los viejos esquemas nacionalistas. La división del mundo entre países desarrollados y en desarrollo le parecía artificial y dudosa y, por lo demás, opinaba que México ya había traspasado el umbral del desarrollo y en el futuro debía distanciarse de todo "tercermundismo". Salinas emprendió el desmantelamiento del sistema mexicano de proteccionismo y dirigismo estatal, lanzó un programa de privatizaciones, y abrió las fronteras económicas a la inversión extranjera. En el plano político alentó el desarrollo del pluralismo y la flexibilización del anquilosado Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se abrió un espacio político prometedor para la oposición conservadora plasmada en el Partido de Acción Nacional (PAN).

El presidente Bill Clinton impulsó el TLC junto con Salinas de Gortari, y el instrumento fue aprobado por el Congreso estadounidense (contra una fuerte oposición nacionalista-aislacionista aliada con los representantes del sindicalismo), a fines de 1993, casi al mismo tiempo en que a nivel mundial culminaron las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Diciembre de 1993 apareció, pues, como un momento estelar para los principios del liberalismo económico.

Luego de lograr la adopción del TLC, el presidente Clinton dio otro paso hacia la meta de la unificación del hemisferio bajo liderazgo norteamericano, a través de

una invitación a todos los jefes de Estado o de gobierno de las Américas (excepto el de Cuba) para que asistiesen a una conferencia cumbre que se celebraría en Miami en el mes de diciembre. A partir de marzo, el Grupo de Río —ahora ampliado a doce miembros fijos, además de dos representantes de Centroamérica y de la CARICOM, respectivamente— comenzó a pedir que la agenda y el proyecto de decisiones de la cumbre hemisférica fuesen elaborados de común acuerdo entre Estados Unidos y las demás naciones interesadas: de ningún modo podía aceptarse una agenda impuesta unilateralmente por el Norte. Brasil, en su papel de secretario general del Grupo de Río durante 1994, jugó un papel fundamental para lograr una posición de firmeza y unidad de criterios latinoamericanos: el diálogo de las Américas debía ser simétrico y girar en torno a propuestas tanto del Sur como del Norte.

La Cumbre de Miami se desenvolvió sin pena ni gloria con una serie de resoluciones generosas de apertura e integración económica, y de lucha contra la pobreza, el atraso, el narcotráfico y la corrupción. Sin embargo, el escepticismo fue grande: poco antes de la cumbre hemisférica, el pueblo estadounidense eligió una nueva mayoría parlamentaria republicana que resultó la más derechista, nacionalista y aislacionista —con ribetes de xenofobia sobre todo ante la inmigración latinoamericana— que el país haya tenido desde la década de los años veinte. En Estados Unidos, al igual que en Europa, los factores de recesión estructural y de inseguridad socioeconómica, junto con el desprestigio de las ideologías de progreso y solidaridad, sobre todo en las capas medias y populares, condujeron hacia un retorno del pasado y el rechazo al "extraño" rival y portador de "gérmenes" de perturbación.

Durante el año de preparación de la cumbre hemisférica, comenzó a perfilarse en América Latina un debate geoestratégico fundamental. Las corrientes políticas más conservadoras tendieron a acoger la propuesta norteamericana de que el TLC sirviese de modelo y de puerta de entrada para el proyecto de la zona de libre comercio de Alaska hasta Patagonia. Los países latinoamericanos y caribeños acogerían las normas y exigencias del TLC y formarían cola para adherir al mismo uno tras otro. Chile, por su alto grado de privatización y de apertura económica, sin duda encabezaría la hilera de los aspirantes.

En contra de ese esquema, los sectores latinoamericanos más preocupados por la defensa de su identidad y soberanía nacional-regional plantearon la idea de una convergencia negociada de los diversos procesos de integración subregionales y regionales para construir el gran proyecto hemisférico de conjunto. Los gobiernos de Brasil y Venezuela defendían ese concepto a mediados de la década de los noventa. Planteaban la conveniencia de que en Sudamérica se avanzase hacia una fusión del MERCOSUR y el Pacto Andino en una sola Asociación de Libre Comercio de América del Sur (ALCAS) que, acompañada de la CARICOM y el MCCA, negociara en pie de igualdad con el TLC de América del Norte. En lugar de asimetría de países pequeños y no desarrollados en conversación bilateral con una gran potencia, existiría una simetría entre dos grandes socios soberanos.

El ambiente triunfal para la causa neoconservadora y la tesis de la globalización por obra y gracia de las fuerzas del mercado llegó a un brusco fin desde comienzos de 1995. En México, país que durante el primer año del TLC había recibido importantes beneficios y gran afluencia de inversiones extranjeras, de pronto surgió una crisis de confianza, se produjo una vasta fuga de capitales especuladores y el

peso mexicano se desplomó en los mercados monetarios internacionales. Ese fenómeno bruscamente recesivo, denominado por la prensa "efecto tequila", se trasladó luego de México a los demás países de América Latina y mostró efectos particularmente preocupantes en Argentina. De pronto quedó demostrado el hecho de que la diferencia estructural entre países desarrollados y en desarrollo sí es real e importante; que una nación no debe basar su desarrollo en inversiones foráneas especulativas y asustadizas sino que debe adoptar políticas encaminadas a generar capitales propios y a trazar estrategias de desarrollo nacionales.

Otro acontecimiento mexicano demostró a partir de 1994 que una política de apertura indiscriminada puede intensificar los contrastes sociales y regionales dentro de un país en desarrollo hasta el punto de provocar estallidos de violencia. La rebelión armada campesino-indígena dirigida por el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas pareció indicar que los resentimientos sociales y étnicos tienden a agravarse cuando el crecimiento económico nacional se concentra sólo en algunos sectores y algunas zonas. La parte septentrional de México recibió los efectos positivos principales de la apertura económica hacia Norteamérica, en tanto que en la porción meridional del país tendió a profundizarse el estancamiento y a hacerse más evidente la pobreza. Añadido al estallido social venezolano de 1989, los fuertes disturbios en Argentina durante ese mismo año, las ocupaciones de tierras por campesinos en Brasil, y otros fenómenos de protesta y rebelión social, el levantamiento de Chiapas fortaleció la evidencia de que el modelo de crecimiento macroeconómico neoconservador no responde a las necesidades de un verdadero desarrollo integral, que debe abarcar el campo social y cultural simultáneamente con el de las inversiones y la producción material.

El enfrentamiento entre la tesis neoconservadora y bilateralista sustentada sobre todo por Estados Unidos, y la tesis latinoamericana autonomista de la convergencia constituye uno de los temas conflictivos entre el Norte y el Sur del hemisferio occidental. Otro es el del choque entre la profunda fe angloamericana en las virtudes de la libre empresa, y la convicción muy arraigada en América Latina de que el Estado tiene un importante papel que jugar en el plano social. Tres otros temas importantes son el de la lucha contra el narcotráfico, la protección del medio ambiente, y la migración de latinoamericanos hacia Estados Unidos.

América Latina en el mundo futuro

Como se señaló en las secciones precedentes, América Latina perdió buena parte de su poder negociador por efecto de la despolarización mundial. El Occidente industrializado, presidido por Estados Unidos, triunfó en la guerra fría y, por la fuerza de sus gobiernos y sus empresas transnacionales, impuso a los países en desarrollo un "nuevo orden mundial" de globalización y apertura económicas, regido por la ideología neoliberal. Sin embargo, ese "nuevo orden" no fue más que un proyecto. Contrariamente a las fantasías de un Fukuyama, la historia no llegó a su "fin", sino que se hizo evidente la persistencia del principio de la continuidad junto con el de la transformación.

En escala global, si bien es cierto que Estados Unidos quedó en el papel de

primera potencia, sus propias vacilaciones impidieron que estableciese un orden imperial único. El poder económico de la Unión Europea y de Japón (cada uno con una esfera de influencia comercial igual a la de Estados Unidos), hizo que la primera potencia tuviese que compartir su control del mundo con esos centros subimperiales. En la medida en que los intereses económicos puedan tender a predominar sobre los políticos (y las ETN sobre los Estados), la división del mundo entre por lo menos tres bloques comerciales y financieros se hace más marcada. A los tres poderes señalados se agregan, como mínimo, otros dos: Rusia, empeñada en recuperarse de la caída que sufrió por efecto de la *perestroika* y China, firme en su desarrollo gradual e incontenible que combina lo nuevo con lo viejo. Queda por verse si en el siglo XXI surgirán otros polos de poder en lo que actualmente es el mundo "periférico": un nuevo poder islámico, tal vez uno del sur de Asia, uno africano y... ¿una presencia latinoamericana compactada y soberana?

Parecería probable que Latinoamérica tenga mejores posibilidades de desarrollo autónomo y de identidad nacional-regional, si el mundo futuro no fuese uni sino multipolar: si, en lugar de un imperio universal con capital única, se formase un nuevo orden de equilibrio del poder entre centros diversos con base parcialmente territorial y en parte no territorial (combinación de Estados nacional-regionales y de fuerzas transgeográficas). En un sistema que, sobre bases tecnocientíficas y culturales nuevas, repitiese el fenómeno de las cambiantes alianzas y pugnas de los siglos XVIII y XIX, las entidades regionales y culturales nuevas tendrían mayor oportunidad de surgir que en un sistema vertical y de discurso dominante único. En términos concretos, el afán tradicional de los patriotas latinoamericanos de no depender de un socio dominante único sino diversificar geográficamente las relaciones de interdependencia, debe mantenerse para que la región tenga un espacio de maniobra.

Sin embargo, la diversificación geográfica de los flujos económicos y culturales no garantiza la unidad de América Latina en un desarrollo autónomo. Sería imaginable una futura Latinoamérica pasiva y desunida que se dejara dividir entre neocolonizaciones diversas. ¿El macro-Caribe y Sudamérica septentrional se dejarían dominar por Angloamérica, en tanto que el Cono Sur se sometería a los hechizos de la Unión Europea y tal vez una parte de la subregión andina gravitaría hacia el mundo transpacífico?

Para poder realizar su integración y un desarrollo autónomo, Latinoamérica debe saber, primero, jugar las cartas de que actualmente dispone en la negociación Norte-Sur y, luego, crear una cultura nacional-regional inquebrantable.

A pesar de la asimetría entre una Angloamérica desarrollada y rica y una Latinoamérica no desarrollada y pobre, durante la década de los noventa existieron tres ámbitos dentro de los cuales la parte latinoamericana poseía poder negociador. Esos tres ámbitos eran (son) el del narcotráfico, el de la ecología y el de los movimientos migratorios.

Desde 1980 en adelante, el tráfico ilegal de cocaína y de los derivados del opio tales como la heroína adquirió dimensiones gigantescas en escala mundial. Sudamérica, especializada en la producción de la cocaína (la heroína provenía principalmente de Asia), respondía a la demanda creciente del principal consumidor de drogas, Estados Unidos y de los demás grandes centros de consumo. A la vez que en el Norte las mafias organizaron la distribución interna, en América Latina los

"carteles" de narcoexportadores aseguraron un creciente flujo de cocaína, desde los sembraderos andinos, con sucesivas etapas de elaboración, a través del Caribe, el Pacífico y el Atlántico hacia América del Norte. Colombia, con sus "carteles" de Medellín y de Cali, jugó un papel particularmente visible en ese enorme negocio ilícito. Para el fin de la década de los ochenta, la cantidad de cocaína exportada anualmente hacia Norteamérica se calculaba en 45 toneladas. Otras 10 toneladas eran enviadas a Europa, a la cual llegaba además una gran corriente de derivados del opio procedente de Asia. Desde 1990 en adelante, el colapso de la URSS y la crisis de las sociedades antes regidas por el socialismo autoritario convirtieron Europa del Este y la zona del Cáucaso en otro gran centro de delincuencia y de narcotráfico.

En toda Latinoamérica y sobre todo en la subregión andina, el narcotráfico creció como una de las soluciones informales al vasto problema de la marginalización, y los tentáculos del negocio de la droga penetraron en la vida política hasta los más altos niveles. Los dineros "lavados" procedentes de la venta de drogas ejercieron efectos indudablemente estimulantes sobre el desarrollo económico legal de algunos países.

Estados Unidos presionó fuertemente para que Latinoamérica aceptara un sistema conjunto y coordinado de represión y prevención del tráfico de drogas, con los servicios norteamericanos de investigación y seguridad en posición dominante y omnipresentes. La pretensión estadounidense de ejercer vigilancia policial y hasta militar antidrogas en el interior de los países de América Latina provocó múltiples resistencias y protestas por parte de éstos. Los países andinos de Sudamérica realizaron por su propia iniciativa esfuerzos a veces heroicos (con saldo de valiosas personalidades asesinadas por los narcotraficantes, sobre todo en Colombia), pero Estados Unidos criticaba continuamente la presunta insuficiencia de tales iniciativas. Por un sistema de "certificaciones" anuales, el gobierno estadounidense evalúa la conducta de los latinoamericanos en materia de lucha contra el narcotráfico y aplica sanciones a quienes incumplen las directrices emanadas del Norte o se niegan a otorgar a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos un papel protagónico dentro de su territorio.

Es evidente por reiterados pronunciamientos de los gobernantes norteamericanos desde 1991 en adelante, que Estados Unidos tiende a asignar al narcotráfico el rol de "enemigo número uno" que antes era desempeñado por la URSS y el bloque comunista. En nombre de la lucha internacional contra el negocio criminal, Estados Unidos quisiera liderar una alianza hemisférica y tener derecho de injerencia en los aparatos de seguridad y defensa de los países situados al sur del Río Grande.

América Latina se siente ofendida por la tendencia del Norte a culpar exclusivamente a los productores y exportadores de drogas por la tragedia universal que éstas representan, y soslayar el rol decisivo que juegan el consumo o la demanda. Sin la existencia en Estados Unidos de un desorden social y moral que alienta el consumo de narcóticos —dicen los portavoces latinoamericanos—, no habría tan fuertes estímulos a la producción y exportación de los mismos.

En nuestra opinión, Latinoamérica puede concertarse para defender ante Estados Unidos una política con respecto al narcotráfico que contemplaría:
— la firme y sincera decisión de colaborar para combatir y erradicar ese flagelo
— la insistencia igualmente firme en que tan responsables son quienes toleran el consumo, como quienes permiten la producción y venta de los narcóticos; y

— una presión diplomática decidida para que el problema de las drogas, en todos sus aspectos y dimensiones, sea tratado multilateralmente a escala mundial, en vez de ser objeto de presiones unilaterales por gobiernos fuertes sobre gobiernos débiles.

Otra materia de debate Norte-Sur para fines del siglo XX en el hemisferio occidental es la protección al medio ambiente. Después de haber destruido sus propios bosques y praderas, y de haber contaminado el medio ambiente mundial, los europeos y norteamericanos descubrieron la gran verdad de los "límites del crecimiento" dictados por la imperiosa necesidad de salvar nuestro planeta de un desastre ecológico total. Nobles y sinceras agrupaciones para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente vieron la luz desde la década de los setenta y realizaron una lucha mundial tenaz y efectiva para salvar la fauna y flora terrestre y marítima aún existente y descontaminar el aire y las aguas ensuciadas por las más diversas emanaciones químicas. En grado creciente, los gobiernos apoyan esa lucha.

La selva amazónica es objeto de preocupaciones particulares por parte de los gobiernos y entidades ecologistas del Norte. Ella constituye el principal "pulmón planetario": océano de vegetación, "paraíso verde" que sólo la maldad humana siembra a veces de "infiernos verdes"; zona generadora de oxígeno para todos los seres vivientes de la Tierra. Hábitat, además, de la más maravillosa diversidad de animales y plantas, y hogar de etnias indígenas cuyas culturas, sencillas y hermosas, constituyen fuentes de enseñanzas para las civilizaciones desorientadas.

Ante una inconfundible presión del Norte —inmediatamente aprovechada por empresas transnacionales nada altruistas— para que la Amazonia fuese puesta bajo control internacional, reaccionó Brasil, centro de defensa de la soberanía sudamericana en esta etapa final del siglo XX. Acusado por el Norte de talar brutalmente la selva amazónica y de contaminar sus ríos, Brasil comenzó a aplicar remedios a abusos realmente existentes y alertó a los demás países amazónicos sobre la necesidad de la soberanía nacional. América Latina no puede permitir que se le obligue a renunciar al desarrollo y a la soberanía para complacer al mundo industrializado y poderoso, autor original de todas las destrucciones del medio ambiente universal.

Resultado del enfrentamiento fue la celebración de la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. En ese evento realmente significativo se llegó a una transacción entre las dos posiciones, con la adopción y consagración del concepto de desarrollo sustentable. Latinoamérica acogió plenamente la preocupación de Europa, Norteamérica y el resto del mundo ante los peligros que se ciernen sobre las selvas tropicales, y aceptó la responsabilidad de actuar soberanamente para proteger y conservar esas zonas naturales con sus recursos humanos, animales y vegetales. El mundo industrializado, por su parte, reconoció el derecho que tienen los países latinoamericanos para hacer uso racional y responsable de sus recursos naturales renovables y no renovables para impulsar su indispensable desarrollo económico y social. Todo desarrollo socioeconómico, de allí en adelante, en cualquier parte del mundo, debería ser "sustentable" o "sostenible" en términos de la conservación del equilibrio ecológico. Sin embargo, Estados Unidos y Gran Bretaña no suscribieron el acta final de esta Conferencia.

El tercer gran tema que afecta e interesa por igual al Norte y al Sur es el de las

migraciones latinoamericanas. Por la creciente disparidad entre la prosperidad del Norte y la pobreza del Sur, aumenta la presión migratoria de nuestra región sobre Norteamérica (y en menor grado, sobre Europa y Australia). Desde mediados de la década de los noventa, el número de hispanoamericanos domiciliados en Estados Unidos es mayor que el número de afronorteamericanos, siendo los "latinos" la minoría étnica más numerosa. En entidades federales como Florida, California, Texas y Nueva México, existe fuerte presión hispanoparlante a favor del reconocimiento de una realidad "multicultural" y del castellano como segunda lengua oficial. Las comunidades hispanoamericanas en toda la extensión del territorio estadounidense desarrollan una vibrante influencia cultural, con sus ritmos musicales, sus platos típicos y sus contribuciones artísticas e intelectuales. Ante esa poderosa corriente inmigratoria, los sectores derechistas y ultranacionalistas de Estados Unidos reaccionan en forma xenófoba: leyes contra la inmigración y barreras de contención en la frontera con México (el TLC no contempla la libre migración hacia el Norte).

Por el otro lado, Latinoamérica —si en el futuro logra perfeccionar su unidad— podría ser capaz de utilizar la comunidad hispano-estadounidense como vasto *lobby* a favor de sus intereses, en forma similar a la actuación de las comunidades norteamericanas de origen irlandés o judío en pro de las aspiraciones de Irlanda o de Israel. Hasta mediados de los noventa, no existía tal vinculación entre la comunidad hispánica en Estados Unidos y la política de sus países de origen (salvo el caso negativo de la lucha anticastrista de los cubanos exiliados). Pero seguramente cabe la posibilidad de establecerla.

Una Latinoamérica con vocación de unidad y soberanía podría utilizar las palancas de negociación que le ofrecen los tres grandes temas del narcotráfico, de la ecología y de las migraciones, para defender sus aspiraciones históricas y lograr creciente respeto y consideración por parte de un Norte con el cual debe buscar, en última instancia, una convivencia amistosa basada en la equidad y la simetría.

Para ello es necesario, además, que Latinoamérica logre superar la actual etapa de las políticas de desarrollo macroeconómico neoliberal, sin adecuados mecanismos de defensa de las identidades nacionales y de lucha contra la pobreza. El modelo de crecimiento neoconservador engendra crecientes disparidades de ingreso y contrastes sociales y por allí debilita la coherencia y soberanía de la región.

Parece indispensable que se busquen las vías para transformar la economía de mercado neoliberal en una economía de mercado social y de desarrollo sustentable. Una nueva estrategia de desarrollo integral podría asemejarse en algunos aspectos a la que aplican algunos "tigres" o "dragones" de Asia en su exitoso ascenso de la categoría de "países en desarrollo" a la de "nuevos países industriales", pero debería dedicar mayor atención que éstos al tema de la equidad social.

Tal política no sería la de un *laisser faire* sin límites sino que, a la vez que otorga la mayor libertad y garantías a los inversores privados con reglas de juego claras y confiables, encarga al Estado (en constante consulta con los líderes empresariales y sindicales) de las tareas de prever, planificar y fomentar estrategias industriales y agro-comerciales orientadas hacia la exportación y la satisfacción de la demanda interna. Así mismo, el Estado invertirá grandes recursos y esfuerzos en la elevación de la calidad de la vida y de los "recursos humanos", sobre todo en materia de salud, vivienda, educación y capacitación. La meta es la de construir una

economía de mercado con carácter social y respetuosa de la identidad nacional latinoamericana.

En términos generales, América Latina tiene posibilidades de constituir en el próximo siglo un ente autónomo dentro del sistema internacional, pero igualmente es posible que caiga en condiciones de dependencia o de subsidiaridad. Probablemente, un modelo internacional que no sea "imperial" o unipolar, sino que se caracterice por la multipolaridad o una unipolaridad muy atenuada y diluida, le permitiría mayor libertad de movimiento y espacio para la actuación soberana.

Los factores positivos de cohesión y de autonomía que la región latinoamericana ha desarrollado desde 1945 en adelante incluyen un estimable desarrollo industrial y tecnológico, primero bajo el sistema de la sustitución de importaciones y luego el de la apertura económica; una notable capacidad integradora a partir de 1960; una creciente homogeneidad democrática y costumbre de concertación y cooperación entre gobiernos; y una comunicación cultural e informativa cada vez más directa entre los pueblos.

Sin embargo, esas perspectivas positivas se ven contrarrestadas, en parte, por factores negativos y desagregadores, como son: la asimetría fundamental e inhibidora entre Latinoamérica y las regiones industrializadas del Norte; la creciente disparidad, dentro de Latinoamérica misma, entre países y sectores sociales más ricos y más pobres, con un desfase entre "canales rápidos" y "canales lentos" de desarrollo, y por la capacidad de "colonización mental" que los polos de gran poder geopolítico tienen con respecto a ciertas élites latinoamericanas.

Al sopesar los factores positivos y negativos, creemos que existen condiciones para que América Latina, en el futuro, pueda disfrutar de una identidad no sólo cultural (como lo piensan algunos analistas) sino también en términos de unidad y soberanía política y económica. Pero que esas condiciones sean aprovechadas, depende de la libre decisión de las élites políticas y culturales de los años venideros. Depende también del sagaz aprovechamiento de los factores de negociación señalados más arriba. Y depende de que en la toma de decisiones se incorpore en grado creciente a las masas populares que, en última instancia, sienten más intensamente la identidad nacional regional.

Bibliografía

Adams, E.D. *Great Britain and the American Civil War* (2 tomos), Londres, 1925.
Agee, Philip *Inside the Company,* Harmondsworth, 1975.
Aguilar, Alonso *El Panamericanismo de la Doctrina Monroe a la Doctrina Johnson,* México, 1969.
ALADI/CEPAL/SELA Boletines y Documentos, Quito, 1994.
Alba, Víctor *Esquema histórico del movimiento obrero en América Latina,* México, 1953.
Alba, Víctor *Historia del movimiento obrero en América Latina,* México, 1964.
Alba, Víctor *Alliance without allies,* Nueva York, 1965.
Alba, Víctor *Nationalists without nations: The oligarchy vs. the people,* Nueva York, 1968.
Alexander, Robert J. *The Bolivian national revolution,* New Brunswick, 1958.
Alexander, Robert J. *The Venezuelan democratic revolution,* New Brunswick, 1964.
Alfaro, Ricardo et al. *Panamá y los Estados Unidos ante el problema del Canal,* Panamá, 1966.
Ameringer, Charles *The Democratic Left in Exile; the anti-dictatorial struggle in the Caribbean, 1945-1959,* Coral Gables , 1974.
Arciniegas, Germán *El continente de los siete colores,* Buenos Aires, 1965.
Arévalo, Juan José *Discursos en la presidencia (1945-1948),* Guatemala, 1948.
Arias, H. *El Canal de Panamá; un estudio en Derecho Internacional y Diplomacia,* Panamá, 1957.
Atkins, G. *Pope Latin American in the International Political System,* Nueva York, 1977.
Backlanoff, Eric (ed.) *New perspectives of Brazil,* Nashville, 1966.
Bailey, Thomas *A Diplomatic History of the American People,* Nueva York, 1959.
Bailey, Norman *Latin America in World Politics,* Nueva York, 1967.
Balassa, Bela/Bueno, Gerardo et al. *Toward Renewed Economic Growtg in Latin America,* Washington D.C., 1986.
Ball, M. Margaret *The OAS in transition,* Durham, 1969.
Banco Interamericano de Desarrollo-BID *Progreso económico y social en América Latina* (Informes anuales), 1979-1988.
Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento Mundial-Banco Mundial *Stagflation Savings and the State: Perspectives on the Global Economy,* ed. by Deejok Lal and Martin Woolf, Nueva York-Oxford-Londres, 1986.
Barcia Trelles, C. La Doctrina de Monroe y la cooperación internacional, Madrid, 1931.
Barnes, Harry Elmer *An Economic History of the Western World,* Nueva York, 1945.
Barraclough, Geoffrey *An Introduction to Contemporary History,* Londres, 1965.
Barthélémy, Françoise *Un continent en quête d'unité: l'au délà du rêve,* París, 1991.
Baudin, Louis *L'Etat socialiste des Incas,* París, 1944.
Bemis, Samuel Flagg *La diplomacia de los Estados Unidos en la América Latina,* México, 1943.
Bemis, Samuel Flagg*A Diplomatic History of the United States,* Nueva York, 1955.
Berg, Eugene *Chronologie internationale (1945-1977),* París, 1978.
Bergesen, H./Olm, H.H./McKinley, R.D. (comp.) *The Recalcitrant Rich: A Comparative Analysis of the Northern Responses to the Demands for a New International Economic Order,* Londres, 1982.

Bergsten, C. Fred *The World Economy after the Cold War,* Bridgetown, Barbados, 1990.
Bernard, Jean-Pierre et al. *Tableau des partis politiques en Amérique du Sud,* París, 1969.
Betancourt, Rómulo *Venezuela, política y petróleo,* México, 1956.
Blasier, Cole *The Hovering Giant: U. S. Responses to Revolutionary Change in Latin America.* Pittsburgh, 1976.
Blasier, Cole The Giant's Rival: *the URSS and Latin America,* Pittsburgh, 1983.
Boersner, Demetrio *The Bolsheviks and the National and Colonial Question (1917-1928),* Geneve, 1957.
Boersner, Demetrio *Socialismo y nacionalismo,* Caracas, 1965.
Boersner, Demetrio *Venezuela y el Caribe; presencia cambiante,* Caracas, 1978.
Bolívar, Simón *Obras completas* (3 tomos), Caracas, s.f.
Bosch García, C. *Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos (1819-1848),* México, 1961.
Bosch, Juan *De Cristóbal Colón a Fidel Castro; el Caribe, frontera imperial,* Madrid, 1970.
Box, Pelham N. *Los orígenes de la Guerra de la Triple Alianza,* Buenos Aires, 1958.
Boyko, P. *América Latina; expansión del imperialismo y crisis de la vía capitalista de desarrollo,* Moscú, 1977.
Bradford, Colin I. (comp.) *Europe and Latin America in the World Economy,* Yale University, 1985.
Bulnes, Gonzalo *La Guerra del Pacífico* (3 tomos), Valparaíso, 1912-1919.
Burns E., Bradford *The unwritten alliance: Rio Branco and Brazilian-American relations,* Nueva York, 1966.
Burns, Sir Alan *History of the British West Indies,* Londres, 1954.
Burr, Robert E. *By reason or force: Chile and the balance of power in South America (1830-1905),* Berkeley, 1965.
Burr, Robert E. *Our Troubled Hemisphere; perspectives on United States-Latin American relations,* Nueva York/Londres, 1966.
Caldwell, R.G. *The López expeditions to Cuba (1848-1851),* Princeton, 1915.
Calmon, Pedro *História do Brasil,* Río de Janeiro, 1959.
Calvert, Peter/Calvert, Susan *Latin America in the Twentieth Century,* Londres, 1990.
CAME-Consejo de Ayuda Mutua Económica *Cooperation of the CMEA Members Countries and of the Council for Mutual Economic Assistance with the Latin American Countries.* Moscú, 1985.
Cardozo, Efraín *El Imperio del Brasil y el Río de la Plata; antecedentes y estallido de la Guerra del Paraguay,* Buenos Aires, 1961.
Carner, William *The Chaco dispute; a study in prestige diplomacy,* Washington D.C., 1966.
Carothers, T. *In the Name of Democracy; US foreign policy toward Latin America in the Reagan years,* Berkeley, 1992.
Carr, Edward Hallett *What is History?,* Londres, 1961.
Castro, Fidel *Humanismo revolucionario; cuatro piezas de oratoria,* La Habana, 1959.
Castro, Fidel *Pan sin terror.* Discurso pronunciado en el Parque Central de Nueva York, La Habana, 1959.
Castro, Fidel *Cuba, el socialismo triunfante en América Latina* (Informe central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba), Caracas, 1976.
Castro, Fidel *Obras escogidas* (3 tomos), Madrid, 1978.
CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe *Estudio económico de América Latina* (Anuarios), 1980-1990.
CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe *Changing Productions Patterns with Social Equity, Santiago* de Chile, 1990.
CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe,* Santiago de Chile, 1990.
CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe *Sustainable Develop-*

ment; changing productions patterns, social equity and the environment, Santiago de Chile, 1991.
CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe/PNUD-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo *Magnitud de la pobreza en América Latina en los años ochenta,* Santiago de Chile, 1991.
Cline Howard F. *The United States and Mexico,* Harvard, 1967.
Clissold, Stephen (cd.) *Soviet relations with Latin America: A documentary review (1918-1968),* Londres, 1970.
Cockcroft, James D. *Intellectual precursors of the Mexican revolution (1900-1913),* Austin, 1968.
Coe, Michael D. *The Maya,* Harmondsworth, 1971.
Collier, Simon *From Cortés to Castro; an introduction to the history of Latin America (1492-1973),* Londres, 1974.
Conil Paz, Alberto/Ferrari, Gustavo *Argentina's foreign Policy (1930-1962),* Notre Dame, 1966.
Connel-Smith, Gordon *The Inter-American system,* Londres, 1966.
Couto e Silva, Golbery do *Geopolítica do Brasil,* Río de Janeiro, 1967.
Crassweller, Robert D. (ed.) *The Caribbean community; changing societies and U.S. policy,* Nueva York, 1972.
Crow, John A. *The Epic of Latin America* (4th. ed.), Berkeley, Los Angeles, 1992.
Cue Cánovas, Agustín *Historia social y económica de México (1521-1854),* México, 1963.
Cuevas Cancino, F. *Bolívar; el ideal panamericano del Libertador,* México, 1951.
Chaunu, Pierre *Histoire de l'Amérique latine,* París, 1964.
Davis, Harold E. et al. *Latin American diplomatic History: An introduction,* Baton Rouge, 1977.
Davis, William C. *The last conquistadores; the Spanish intervention in Peru and Chile* (1863-1866), Georgia, 1950.
De Kadt, Emanuel (ed.) *Patterns of Foreign influence in the Caribbean,* Londres, 1972.
Delgado de Carvalho *História diplomática do Brasil,* São Paulo, 1959.
Dietrich, Wolfram *Simón Bolívar y las guerras de la independencia latinoamericana,* Santiago de Chile, 1940.
Documentation Française Notes et études documentaires: problèmes de l'Amérique latine (publicación trimestral), 1980-1990.
Domínguez, Jorge J. *US Policies and Interests in the Caribbean and Central America,* Washington D.C., 1982.
Dozer, Donald M. Latin America, *an interpretive History,* Nueva York, 1962.
Draper, Theodore *Castroism, theory and practice,* Nueva York, 1965.
Dreier, John C. *The Organization of American States and the hemisphere crisis,* Nueva York/Evanston, 1962.
Ealy, Lawrence O. *The Republic of Panama in world affairs (1903-1950),* Westport, 1970.
EEUU-Departamento de Estado *The Challenge to Democracy in Central America.,* Washington D.C., 1986.
Erisman, H. Michael *The Caribbean Challenge; US Policy in a Volatile Region.* Boulder, Colorado, 1984.
Espinoza y Saravia, Luis *Después de la guerra; las relaciones boliviano-chilenas,* La Paz, 1929.
Fagen, R.R. (comp.) *The State and Capitalism in US-Latin American Relations,* Stanford, 1979.
Fagen, R.R./Pellicer, Olga (coord.) *The Future of central America: Policy Choices for the US and Mexico,* Stanford, 1983.
Feinberg, Richard E. The Intemperate Zone; *the Third World challenge of US foreign policy,* Nueva York, 1983.

Feltrinelli, Giangiacomo (ed.) *Lateinamerika-ein zweites Vietnam?*, Reinbek, 1968.
Ferns, Henry S. *Britain and Argentina in the nineteenth century*, Nueva York, 1960.
Foner, Philip B. *A history of Cuba and its relations with the United States*, 2 tomos, Nueva York, 1962.
Foner, Philip B. *La guerra hispano-cubano-americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano (1895-1902)*, (2 tomos), Madrid, 1975.
Frank, André Gunder *Capitalism and underdevelopment in Latin America*, Harmondsworth, 1971.
Frank, André Gunder/Puiggrós, Rodolfo/Laclau, Ernesto *América Latina: ¿feudalismo o capitalismo?*, Medellín, 1973.
Fuentes, Carlos *El espejo enterrado*, México, 1992.
Furtado, Celso *Economic growth of Brazil; a survey from colonial to modern times*, Berkeley, 1963.
Galarza, Jaime *El festín del petróleo*, Quito, 1972.
Galeano, Eduardo *Guatemala, país ocupado*, México, 1967.
Galeano, Eduardo *Las venas abiertas de Amérira Latina*, México/Buenos Aires, 1971.
García Salazar, Arturo *Historia internacional y diplomática del Perú* , (2 tomos), Lima, 1927-1928.
Garrigo, R. *Historia documentada de la conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar*, La Habana, 1929.
Gauhar, Altof (comp.) *South-South Strategy*. Londres, 1983.
Gerassi, John The great *fear: the reconquest of Latin America by Latin Americains*, Nueva York, 1963.
Gil, Federico G. *Latin American-United States relations*, Nueva York, 1971.
Glade, William P. *The Latin American economies; a study of their institutional evolution*, Nueva York, 1969.
Goldenberg, Boris *Gewerkschaften in Lateinamerika*, Hannover, 1964.
Goldenberg, Boris *The Cuban Revolution and Latin America*, Nueva York, 1965.
Goldenberg, Boris *Kommunismus in Lateinamerika*, Stuttgart, 1971.
Goldwert, Marvin *Democracy, militarism and nationalism in Argentina (1930-1966); an interpretation*, Austin, 1972.
Gómez, Juan Gualberto et al. *Antiimperialismo y república*, La Habana, 1970.
Gott, Richard *Rural guerrillas in Latin America*, Harmondsworth, 1973.
Grabendorff, Wolf (ed.) *Lateinamerika-Kontinent in Krise*, Hamburgo, 1973.
Grabendorff, Wolf *Lateinamerika-wohin?*, Munich, 1974.
Grabendorff, Wolf *Brasilien: Entwicklungsmodell und Aussenpolitik*, Munich, 1977.
Greez Pérez, Carlos *Los intentos de unión hispanoamericana y la guerra de España en el Pacífico*, Santiago de Chile, 1928.
Guerra, Ramiro *La expansión territorial de los Estados Unidos*, La Habana, 1975.
Guerrant, Edward *Roosevelt's Good Neighbor Policy*, Albuquerque, 1950.
Guier, Enrique *William Walker*, San José, Costa Rica, 1971.
Halperin Donghi, Tulio *Historia contemporánea de América Latina*, Madrid, 1969.
Haya de la Torre, Víctor Raúl *El antiimperialismo y el APRA* (5a. ed.), Caracas, 1976.
Healy, David F. *The United States in Cuba (1898-1902)*, Madison, Wisconsin, 1963.
Henríquez Ureña, Pedro *La emancipación y primer período de vida de la isla de Santo Domingo* (tomo VII de la *Historia de América* publicada por Ricardo Levene), Buenos Aires, 1940.
Herring, Hubert *A history of Latin America*, Nueva York, 1968.
Hilton, Stanley E. *Brazil and the great Powers (1930-1939); the politics of trade rivalry*, Austin, 1975.
Hill, Howard C. *Roosevelt and the Caribbean*, Nueva York, 1965.

Hirsch-Weber, Wolfgang *Lateinamerika: Abhangigkeit und Selbstbestimmung*, Opladen, 1972.
Horowitz, Irving L. et al. (ed.)*Latin American radicalism*, Londres, 1969.
Huberman, Leo (ed.) *Où va l'Amérique latine?*, París, 1964.
Huberman, Leo/Sweezy, Paul M. *Socialism in Cuba*, Nueva York, 1969.
Jackson, Bruce *Castro, the Kremlin and communism in Latin America*, Baltimore, 1969.
Jaguaribe, Helio et al. *La dependencia político-económica de América Latina*, México, 1970.
Johnson, John J. *Political change in Latin America; the emergence of the middle sectors*, Stanford, 1950.
Julien, Claude *L'empire américain*, París, 1968.
Junker, Detlef *Der unteilbare Weltmarkt, das ökonomische Interesse in der Aussen-politik der USA 1933-1941*, Stuttgart, 1975.
Junker, Detlef/Nohlen, Dieter/Sangmeister, Harmut (Hrg.) *Lateinamerika an Ende des 20. Jahrhunderts*, Munich, 1994.
Karnes, Thomas *The failure of union: Central America (1824-1960)*, Chapel Hill, 1961.
Katz, Friedrich *Vorkolumbische Kulturen; die grossen Reiche des alten Amerika*, Essen, 1975.
Kaufmann, William W. *La política británica y la independencia de la América Latina (1804-1828)*, Caracas, 1963.
Kirkpatrick, Jeane "US Security and Latin America", *Commentary*, vol. 71, n° 1, enero, 1981.
Krakau, K. (Hrg.) *Lateinamerika und Nordamerika; Gesellschaft, Politik und Wirtschaft im historischen Vergleich*, Frankfurt, 1992.
La Feber, Walter *The Panama Canal: The Crise in Historical Perspective*, Nueva York, 1978.
La Feber, Walter *Inevitable Revolutions; the United States in Central America*, Nueva York, 1983.
Lamberg, Robert Felix *Die Guerrilla in Lateinamerika; Theorie und Praxis eines revolutionaren Modells*, Munich, 1972.
Larson, Daniel (ed.) *The "Cuban crisis" of 1962; selected documents and chronology*, Boston, 1963.
Lecuna, Vicente *La entrevista de Guayaquil* (2 tomos), Caracas, 1952.
Lemoine, Maurice *Les cent portes de l'Amérique latine*, París, 1988.
Levine, Barry B. (comp.) *The Cuban Presence in the Caribbean*, Boulder, Colorado, 1983.
Lewin, Boleslao *Los movimientos de emancipación en Hispanoamérica y la independencia de Estados Unidos*, Buenos Aires, 1952.
Liataer, Bernard *L'Amérique latine et l'Europe, demain: le role des multinationnales européennes dans les années 80.* París, 1979.
Lieuwen, Edwin *Arms and politics in Latin America*, Nueva York, 1960.
Lieuwen, Edwin *United States policy in Latin America: a short history*, Nueva York, 1965.
Lindenberg, Klaus *Fuerzas armadas y política en América Latina; bibliografía selecta*, Santiago de Chile, 1972.
Lindenberg, Klaus et al. *Reform in Uniform? Militarherrschaft und Entwicklung in der Dritten Welt*, Bonn, 1976.
Link, Arthur S. *La política de los Estados Unidos en América Latina (1913-1916)*, México, 1960.
Liss, Sheldon B. *The Canal, aspects of US-Panamanian relations*, Notre Dame, 1967.
Lowenthal, Abraham F. (ed.) *Armies and politics in Latin America*, Nueva York, 1980.
Lowenthal, Abraham F. *Partners in Conflict; the United States in Latin America*, Baltimore, 1987.

Lowenthal, Abraham F./Hakim, P La democracia en América Ltina: el peligro de aplausos prematuros, en *Boletín Electoral Latinoamericano*, nº 6, 1991.
Malavé Mata, Héctor *Formación histórica del antidesarrollo de Venezuela*, Caracas, 1975.
Manger, William *Pan America in crisis; the future of OAS*, Washington D.C., 1961.
Manigat, Leslie *L'Amérique latine au vingtième siècle (1889-1929)*, París, 1972.
Manley, Michael *The politics of change; a Jamaican testament*, Londres, 1974.
Manley, Michael *Jamaica's Struggle in the Periphery*, Londres, 1981.
Mariátegui, José Carlos *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Lima, 1928.
Martz, John D. *Colossus Challenged: the Struggle for Caribbean Influence*, Boulder, Colorado, 1982.
Masur, Gerhard "The Conference of Guayaquil", *Hispanic American Historical Review*, vol. 31, p. 180-229, 1951.
Masur, Gerhard *Nationalism in Latin America; diversity and unity*, Nueva York, 1966.
Masur, Gerhard *Simón Bolívar*, Albuquerque, 1969.
Matthews, Herbert (ed.)*The United States and Latin America*, Englewood Cliffs, 1963.
May, Herbert K. *Problems and prospects of the Alliance for Progress; a critical examination*, Nueva York, 1968.
May, Robert E.*The southern dream of a Caribbean empire (1854-1861)*, Baton Rouge, 1973.
Mecham, John L. *The United States and inter-American security (1889-1960)*, Austin, 1961,
Melville, Thomas/Melville, Marjorie *Guatemala another Vietnam*, Harmondsworth, 1971.
Merck, Frederick *La Doctrina de Monroe y el expansionismo norteamericano*, Buenos Aires, 1968.
Meyer, Karl E./Szulc, Tad *The Cuban invasion; the chronicle of a disaster*, Nueva York, 1962.
Middlebrook, Kevin J. (comp.) *The United States and Latin America in the 1980's: Contending Perspectives in a Decade of Crisis*, Pittsburgh , 1986.
Millington, Robert American diplomacy and the War of the Pacific, Nueva York, 1948.
Mills, C. Wright *Castro's Cuba; the revolution in Cuba*, Londres, 1960.
Mills, C. Wright *Listen, Yankee*, Nueva York, 1960.
Morales Padrón, Francisco *Historia general de América* (tomos V y VI), en *Manual de Historia Universal* , Madrid, 1962.
Mower, A. Glenn *The European Community and Latin America: A Case Study in Global Role Expansion*, Westport, 1982.
Munro, Dana G.*Intervention and dollar diplomacy in the Caribbean*, Princeton, 1964.
Muñiz Ortega, Carlos *La URSS y América Latina: 50 años de relaciones diplomáticas y económicas*, Lima, 1968.
Muñoz, Heraldo (ed.) *Environment and Diplomacy in the Americas*, Boulder,1992.
Navarrete, Jorge Eduardo *La deuda externa: una perspectiva latinoamericana*, México, 1987.
Newton, A.P.*The European nations in the West Indies, (1493-1688)*, Londres, 1933.
OCDE-Organización de Cooperación y Desarrollo Económico *Interdépendance et styles de développement*, París, 1985.
Oswald, J. Gregory/Strover, Anthony J. *The Soviet Union and Latin America*, Londres, 1970.
Packenham, Robert A. *Liberal America and the Third World; political development ideas in foreign aid and social science*, Princeton, 1973.
Parry, J.H. *Europe and a wider world (1415-1715)*, Londres 1949.
Parry, J.H./Sherlock, Sir Philip *A short history of the West Indies*, Londres, 1956.

Pastor, Robert A. "Our real interests in Central America", *Atlantic Monthly*, vol. 250, nº 1, julio, 1982.
Perkins, Dexter *The Monroe Doctrine (1826-1867)*, Baltimore, 1933.
Perkins, Dexter *La política exterior norteamericana*, Barcelona, 1956.
Peterson, Harold F. *Argentina and the United States (1810-1960)*, Nueva York, 1964.
Pike, Frederick B. *The United States and the Andean republics: Peru, Bolivia and Ecuador*, Cambridge, Mass., 1977.
Pinochet, Augusto *Geopolítica de Chile*, México, 1978.
Pizer, Samuel *United States investments in the Latin American economy*, Nueva York, 1958
Plá, Alberto J. (ed.) *América Latina y los Estados Unidos, de Monroe* (1823) *a Johnson* (1965), Buenos Aires, 1971.
Plank, John *Cuba and the U.S.: Long-range perspectives*, Washington D.C., 1967.
Poppino, Rollie *International communism in Latin America; a history of the movement* (1917-1963), Londres 1964.
Portell Vila, Herminio *Historia de Cuba en sus relaciones con Estados Unidos y con España*, La Habana, 1938-1941.
Puhle, Hans Jürgen Entwicklungspolitik und Nationalismus in Lateinamerika, en Riekenberg, M. (Hrg.) *Lateinamerika*, Frankfurt, 1990.
Puig, Juan Carlos *Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana*, Caracas, 1980.
Puigróss, Rodolfo *América Latina en transición* (2 tomos), Buenos Aires, 1970.
Rabe, S, G. *Marchins Ahead (Slowly), the historiography of Inter-American foreign policy*, Nueva York, 1989.
Rama, Carlos M. *Historia de América Latina*, Barcelona, 1978.
Renouvin, Pierre *Histoire des relations internationales* (8 tomos), París, 1958.
Rippy, James F. *The United States and Mexico*, Nueva York, 1931.
Rippy, James F. *Globe and hemisphere: Latin America's place in the post-war foreign relations of the United States*, Chicago, 1958.
Rivet, Paul *Les origines de l'homme américain*, París, 1943.
Robertson, R. M. History *of the American Economy*, Nueva York, 1973.
Robertson, William S. *France and Latin American independence*, Baltimore, 1939.
Rodrigues, José Honorio *Interesse nacional e politica exterior*, Rio de Janeiro, 1966.
Roett, Riordan Brazil Ascendent: international relations and geopolitics in the late 20th. century, en *Journal of International Affairs*, nº 29, 1975.
Rogers, William D. *The twilight struggle; the Alliance for Progress and the politics of development in Latin America*, Nueva York, 1967.
Rojas, Armando *Los creadores de la diplomacia venezolana*, Caracas, 1965.
Rossani, A.B. *Guerra del Paraguay; cronología*, Rio de Janeiro, 1940.
Rouquié, Alain *L'Etat militaire en Amérique latine*, París, 1982.
Rouquié, Alain *L'Amérique latine: introduction à l'Extrême-Occident*, París, 1987.
Rout, Leslie B. *Politics of the Chaco peace conference (1935-1939)* Austin, 1970.
Ruiz Moreno, Isidoro *Historia de las relaciones exteriores argentinas (1810-1955)*, Buenos Aires, 1961.
Saborio, Sylvia (comp.) *Reto a la apertura: libre comercio en las Américas* , México, 1994. (*The Premise and the Promise; free trade in the Americas*, New Brunswick, 1992).
Salinas Valdivieso, L.A. *Historia diplomática de Bolivia*, Sucre, 1938.
Santos-Neves, C. A. O Sul e a Nova Ordem Internacional, en *Contexto Internacional*, nº 14, 1992.
Santovenia, Emeterio *Bolívar y las Antillas hispanas*, La Habana, 1946.
Scenna, Miguel Angel *Argentina-Brasil; cuatro siglos de rivalidad*, Buenos Aires, 1975.
Schlesinger, Arthur Jr. (ed.) *The Dynamics of World Power; a documentary history of United States foreign policy, 1945-1973* (5 tomos), Nueva York, 1973.

Schoultz, L. *National Security and United States Policy toward Latin America*, Princeton, 1987.
Silva Michelena, José A. *Política y bloques de poder; crisis en el sistema mundial*, Caracas, 1978.
Silva Otero, Arístides Bolívar y sus relaciones con las Provincias del Río de la Plata, en *Economía y Ciencias Sociales*, año I, nº 2, Caracas, 1958.
Silva Otero, Arístides El Congreso de Panamá, en *Economía y Ciencias Sociales*, año III, nº 4, Caracas, 1961.
Silva Otero, Arístides *La diplomacia hispanoamericana de la Gran Colombia*, Caracas, 1967.
Slater, Jerome *The OAS and United States foreign policy*, Columbus, 1967.
Smith, R.F.*The US and Cuba; business and diplomacy (1917-1960)*, Nueva York, 1961.
Stoetzer, O.C. *Panamerika, Idee und Wirklichkeit; die OAS*, Hamburgo, 1964.
Strange, Susan Toward a Theory of Transnational Empire, en Czempiel, Ernst-Otto/ Rosenau, James W. (eds.) *Global Changes and Theoretical Challenges; approaches to world politics for the 1990s*, Lexington, Mass., 1989.
Suárez, Andrés *Cuba: Castroism and communism*, Cambridge, Mass., 1967.
Szulc, Tad *The winds of revolution; Latin America today and tomorrow*, Londres, 1964.
Szulc, Tad *Fidel: a critiacl portrait*, Nueva York, 1987.
Tannenbaum, Frank *Mexico; the struggle for peace and bread*, Nueva York, 1964.
The Economist "The Resumption of History", 26-12-1992.
The South Commission The Challenge of the South; report of the South Commission, Nueva York, 1990.
Theberge, James Daniel (ed.) *Soviet seapower in the Caribbean; political and strategic implications*, Nueva York, 1972.
Thomas, Hugh *Cuba, or the pursuit of freedom*, Londres, 1971.
Thurow, Lester *Head to Head; the coming economic battle among Japan, Europe and America*, Nueva York, 1992.
Tokatlian, Juan/Schubert, Klaus (comp.) *Relaciones internacionales en la cuenca del Caribe*. Bogotá, 1982.
Toriello, Guillermo Tras la cortina *de banano*, México, 1976.
Touraine, Alain *La parole et le sang: politique et société en Amérique latine*, París, 1988.
Tussie, Diana (comp.) *Latin America in the World Economy: new Perspectives*, Aldershot, 1983.
Vaillant, George *The Aztecs of Mexico*, Harmondsworth, 1950.
Véliz, Claudio *The centralist tradition of Latin America*, Princeton, 1980.
Walker, Thomas W. (comp.) *Nicaragua in Revolution*, Praeger, Nueva York, 1981.
Weinberg, Albert E. *Manifest destiny; a study of nationalist expansionism in American history*, Baltimore, 1935.
Whitaker, Arthur P. *The United States and the independence of Latin America (1800-1830)*, Baltimore, 1941.
Whitaker, Arthur P./Jordan, David C. *Nationalism in contemporary Latin America*, Nueva York, 1966.
Williams, Eric Eustace *History of the people of Trinidad and Tobago*, Puerto España, 1962.
Williams, Eric Eustace *Inward hunger; the education of a prime minister*, Londres, 1963.
Willliams, M. W. *Anglo-American Isthmian diplomacy (1815-1915)*, Washington D.C., 1916.
Wodd, Bryce *The making of the Good Neighbor Policy*, Nueva York, 1961.
Wodd, Bryce *The United States and Latin American wars, 1932-1942*, Nueva York, 1966.

ESTE EJEMPLAR SE TERMINO DE IMPRIMIR
EN LOS TALLERES DE EDITORIAL TEXTO
AV. EL CORTIJO, QTA. MARISA, Nº 4
LOS ROSALES - CARACAS - VENEZUELA